

¿Por qué generar y difundir conocimientos analíticos y prospectivos en cuanto a las interrelaciones entre el Estado, la sociedad y la economía en la crisis, como parte de la conformación de estrategias para la reconstitución de tal relación y para la transformación del Estado?

Porque la difícil consolidación de sistemas políticos democráticos constitucionales y los desafíos de la crisis económica obligan a reabrir la problemática del desarrollo, incluyendo, por una parte, la construcción de consenso y de legitimidad, y por otra, la eficacia social de las decisiones estatales.

Autores

J. J. Brunner, C. Catalán, A. Barrios, N. García Canciani, P. Safa, G. Cohn, R. Miró Quesada, T. Palau, L. Galeano, M. Chase Sardi, R. Fogel, L. H. Antezana J., A. Arias

Coordinadores

F. Calderón y M. R. dos Santos

Este volumen forma parte de una serie que recoge los resultados del Proyecto PNUD - UNESCO - CLACSO, RLA-86/001, identificada con el título

¿Hacia un nuevo orden estatal en América Latina? e integrada por los siguientes volúmenes:

1º y 2º *Democratización/modernización y actores socio-políticos,*

3º y 4º *Los actores socio-económicos del ajuste estructural,*

5º y 6º *Centralización/descentralización del Estado y*

actores territoriales,

7º y 8º *Innovación cultural y actores socio-culturales.*

El volumen 9º estará dedicado a una síntesis prospectiva y comparativa regional sobre la reestructuración de las relaciones del Estado, la sociedad y la economía, a cargo de la coordinación del proyecto.

33

7. Innovación cultural y actores socio-culturales

¿Hacia un nuevo orden estatal en América Latina?

7. Innovación cultural y actores socio-culturales

clacso

Biblioteca de Ciencias Sociales

Volumen 7

**¿Hacia un nuevo orden estatal
en América Latina?**

**Innovación cultural y actores
socio-culturales**

J.J. Brunner, C. Catalán, A. Barrios, N. García Canclini,
P. Safa, G. Cohn, R. Miró Quesada, T. Palau, L. Galeano,
M. Chase Sardi, R. Fogel, L. H. Antezana J., A. Arias,
F. Calderón y M. R. dos Santos (coordinadores).

Programa de Publicaciones

Biblioteca de Ciencias Sociales
Directora: Cristina Micieli

Secretaria: Patricia Fellu

I.S.B.N. 950-9231-34-9

Diseño de Tapa: Beatriz Burecovics y Viviana Barletta
Composición y armado: Cronopio Azul
Florencio Varela 683, Gerli, Buenos Aires
Impresión: Taller Gráfico Luna
Primera edición: septiembre de 1989
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
Copyright de todas las ediciones en español por
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO)

**¿Hacia un nuevo orden estatal
en América Latina?**

**Innovación cultural y actores
socio-culturales**

clacso
Consejo
Latinoamericano
de Ciencias
Sociales

Este volumen ha sido financiado con fondos del Proyecto RLA-86/001, PNUD-UNESCO-CLACSO y del Swedish Agency for Research Co-operation with Developing Countries (SAREC), Estocolmo, Suecia.

Las opiniones contenidas en los artículos de este volumen son responsabilidad exclusiva de los autores y no coinciden necesariamente con aquellas de las instituciones patrocinantes del Proyecto ni con las de la coordinación del mismo.

Presentación

Vientos de fin de siglo soplan en el continente. Pareciera que los procesos de transnacionalización e internacionalización de la política, la economía y la cultura constituyen los fenómenos estructuradores, que juntamente con los programas e impactos de la revolución tecnológica en las diferentes realidades nacionales y regionales, modifican el universo de la acción colectiva.

Nadie sabe a ciencia cierta qué posición y qué roles cumplirá América Latina en este nuevo marasmo internacional, aunque se sabe por ejemplo que la región tendrá que necesariamente integrarse y competir en esta nueva olimpiada; se sabe también, según varios tecnocráticos presagios, que oscuras nubes se ciernen sobre la participación latinoamericana en el mercado mundial y que las políticas de ajuste tienden a producir una integración parcial y excluyente de la región en el mundo.

Sin embargo poco sabemos acerca de las postulaciones, ejercicios y resultados concretos o virtuales de las políticas que ejecutan o demandan los distintos actores socioeconómicos, socioculturales y sociopolíticos para volver a enfrentar la integración de las sociedades latinoamericanas a los nuevos procesos de internacionalización de la política y la economía, como tampoco sabemos cuánto aquellos recogen las posibilidades y potencialidades reales de desarrollo y cambio; aún más, no sabemos qué actores se plantean estos desafíos y si sus orientaciones son fecundas para enfrentarlos.

La cuestión es difícil, pues no sólo hay nuevos códigos de los actores sociales y políticos, sino también porque las transformaciones pasan por el

Estado y éste, como es conocido, fue un actor histórico que organizaba y repartía los naipes en las sociedades latinoamericanas. Hoy, empero, esa función aparentemente se agota y el Estado empieza a transformarse, en relación a sí mismo, en relación al emergente interés político en la democracia, en relación a los actores sociales. ¿Estamos pues ante la emergencia de un *nuevo orden estatal en América Latina*?

Las publicaciones producidas por el programa PNUD-UNESCO-CLACSO (nueve en total) tratan de responder cuáles son las diferentes políticas que impulsan los Estados latinoamericanos, qué respuestas dan a éstas diferentes actores económicos, sociales, políticos y culturales en los distintos países de la región y qué prospectiva emerge de esta interacción.

Los primeros dos volúmenes están dedicados a la democratización y modernización del Estado. Los volúmenes tercero y cuarto a la innovación de políticas económicas, principalmente las políticas relativas al ajuste. Los volúmenes quinto y sexto versarán sobre las políticas de descentralización/centralización, en tanto los volúmenes séptimo y octavo incluirán los trabajos sobre innovación en políticas culturales y transformaciones en el campo cultural. Finalmente publicaremos un volumen de tendencias históricas a nivel latinoamericano. Como podrá apreciar el lector, las políticas son centrales y múltiples los actores que interactúan con ellas.

Los primeros volúmenes de cada dimensión analítica —recién mencionados— reproducen una síntesis del proyecto que dio lugar a la investigación, la cual se desarrolla hace dos años y tiene una duración de tres.

Los estudios nacionales fueron encargados a equipos diversos de investigación pertenecientes a centros miembros de CLACSO en cada país, que volcaron su experiencia e investigación de años. El trabajo fue realizado gracias al PNUD y a la UNESCO, organismos con los cuales intercambiamos constantemente impresiones, críticas y comentarios no sólo en el plano de la gestión sino también en el de la labor intelectual.

CLACSO, con este aporte, espera contribuir al conocimiento y a la búsqueda de opciones frente a la crisis que sufre actualmente la región.

La elaboración y coordinación del proyecto estuvo a cargo de Mario R. dos Santos y mía.

Fernando Calderón
Secretario Ejecutivo de CLACSO

Agradecimientos

Este proyecto contó y cuenta con múltiples apoyos institucionales y personales. La enumeración que sigue pretende dar cuenta de este hecho sin ser exhaustiva. Agradecemos pues al PNUD y a la UNESCO su reiterada confianza en el Consejo, como así también a los centros miembros que generosamente enfrentaron la tarea. A nivel personal, dejamos constancia de nuestro reconocimiento a los investigadores convocados y autores de los estudios incluidos, como también a aquellos que desde las instituciones citadas como desde la Secretaría Ejecutiva compartieron la iniciativa y/o trabajaron para ella. Entre los primeros están Hugo Navajas Mogro, César Miquel, Augusto Ramírez Ocampo, Ema Torres, Henry Harman, Eduardo Gutiérrez, Ignacio Pérez Salgado y Brígida Watson (del PNUD), Julio Labastida, Gonzalo Abad, Oswaldo Lingua, Ernesto Ottone, Luis Barriga, Oscar Vargas (de la UNESCO), y Cristina Micieli, Patricia Feliu, Andrea Saslavsky y Alicia Szmukler (de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO).

Las críticas y comentarios al proyecto hechas por Alain Touraine, Manuel Castells, Fernando Fajnzylber, Enzo Faletto, Adolfo Gurrieri, Oscar Oszlak, Juan Enrique Vega, René Mayorga, José Joaquín Brunner, Angel Flisflisch, Carlos Franco, Jorge Balán, Elizabeth Jelin, Jorge Schvarzer, Jorge Katz, Alejandro Roffman, Narda Henríquez, Manuel Barrera y Néstor García Canclini fueron especialmente valiosas y alentadoras.

Ciencias sociales, crisis y requerimientos de nuevos paradigmas en la relación Estado/sociedad/economía

El texto que sigue reproduce parcialmente el documento de proyecto regional RLA 86/001 PNUD-UNESCO-CLACSO e incluye explicitaciones hechas en el documento de referencia del proyecto mencionado. Ambos materiales enmarcaron la producción de los estudios que forman estos volúmenes sobre democratización/modernización del Estado y aquellos que los continuarán sobre innovación en políticas económico-sociales, innovación en políticas culturales y transformaciones en el campo cultural y descentralización/centralización del Estado.

La intencionalidad que animó la iniciativa del proyecto aparece aquí y ello permitirá entender mejor los estudios de caso, evaluando los logros y también las dificultades de un trabajo colectivo regional arduo que convoca esfuerzos intelectuales de larga duración.

Objetivo del desarrollo del proyecto (necesidades regionales a las que responde)

Como ha sido recogido en los documentos preparatorios del Programa Regional para América Latina y el Caribe (PREALC), por ejecutarse en el período 1987-1991 y asimismo en el Programa del Sector Ciencias Sociales de la UNESCO y en su Gran Programa 1 sobre prospectiva, se advierte cada vez más intensamente la necesidad de producir transformaciones en el Estado pues recaen sobre él las posibilidades de articular y fomentar los esfuerzos de la sociedad en su conjunto sometida a los impactos de la crisis. Tal consciencia está presente en buena parte de los gobiernos de la región, que reciben demandas de democratización en un contexto donde una gobernabilidad económica progresiva se vuelve extremadamente difícil. Esta dificultad se vincula con las tendencias de la reestructuración económica a nivel mundial, las cuales marginan a la periferia y vuelven previsible una nueva trama económico-financiera-tecnológica que afecte negativamente la coherencia y cohesión de los Estados nacionales latinoamericanos, al inhibir posibilidades de desarrollo.

En efecto, recientes estudios prospectivos (CEPII, OCDE, CEPAL, etc.) muestran una tendencia a una mayor internacionalización de la economía respecto del capital, de los mercados de ciertas materias primas y de los procesos de gestión y de innovación tecnológica, procesos que provocarían el fortalecimiento de los Estados Unidos, el Japón y algunos países del sudeste asiático. La nueva división internacional del trabajo resultante marginaría aún más a la periferia, con lo cual América Latina perdería posiciones de desarrollo relativo.

Por otra parte, la eficacia, la capacidad de previsión y la racionalidad de los Estados latinoamericanos —tanto interna como en su acción sobre el conjunto social— ya no ha bastado durante las últimas décadas para garantizar adecuadas políticas públicas. El rápido y cualitativamente complejo crecimiento burocrático del Estado, a través de sus múltiples instituciones, aparatos y presupuestos no guarda hoy relación con las necesidades de efectividad estatal ante la crisis y menos aún con las perspectivas de la región para los próximos años.

Inclusive el fortalecimiento del Estado propio de los procesos de transición a la democracia (por su concomitante legitimación) y de exigencias derivadas de la crisis (mayor intervención obligada), no le proporcionan inmediata y necesariamente a aquél mayor capacidad de gestión del desarrollo. Las transformaciones actuales en América Latina tienen más que ver con cambios en los regímenes políticos que con cambios en la funcionalidad del Estado y en su estructura organizativa. Se corre pues el riesgo de una continuidad de la máxima instancia del poder social en tanto síntesis de relaciones sociales y también en tanto aparato burocrático.

La difícil consolidación de sistemas políticos democráticos constitucionales y los desafíos de la crisis económica obligan, por consiguiente, a abrir la problemática del desarrollo, incluyendo, por una parte, la construcción de consenso y de legitimidad, y por otra, la eficacia social de las decisiones estatales.¹ Ambas dimensiones parecen requerir como nunca capacidad de invención institucional y de innovación en las políticas económicas y socioculturales. Sin esa capacidad, la racionalidad estatal llegará a abrazar regulatoriamente una porción cada vez menor de la realidad, lo cual, aunque tendencia general, se vuelve más dramático en la periferia. Inmensas porciones de la realidad social quedarán abandonadas a su suerte material, más allá de que sobre ellas sea posible seguir ejerciendo coerción estatal y logrando umbrales de orden público.

Como contraparte, la sociedad —pese a las múltiples demandas que plantean sus distintos agrupamientos (partidos, corporaciones, movimientos sociales clásicos y nuevos, grupos económicos, etcétera)— no logra impulsar la gestación de sistemas de representación y de gestión, acordes a su propia heterogeneidad y capaces de aportar viabilidad a las parcialidades unidas en una totalidad coherente y democrática.

Como apuntaba Fernando H. Cardoso negando la validez de pensar el Estado por una parte y la sociedad por otra, "cuando tenemos que enfrentarnos con la temática de la crisis del Estado y de su reconstitución, la temática no es la del Estado, es la de la sociedad; es la reconstitución de las sociedades, de la cual el Estado es una parte permanente y central".

En esta situación —esquemática en pro de una presentación concisa del proyecto— los conflictos exponen la incapacidad de las formas políticas para procesarlos. Una grave desigualdad en cuanto a los impactos de la crisis se suma a aquella derivada del manejo tradicional del poder y de las tendencias históricas en el plano económico-social. Hay un surgimiento de nuevos movimientos sociales (étnicos, de campesinos pobres, de mujeres,

de jóvenes, de otras minorías, de derechos humanos), y los llamados clásicos exhiben importantes cambios internos. La creciente pérdida de centralidad del modelo industrial de desarrollo, que anteriormente permeaba el orden social pese a todas sus limitaciones, impide esa fluidez entre el Estado, los partidos, el movimiento social y el funcionamiento del aparato productivo, anudando rigideces en distintas dimensiones. Las demandas improcesables o prácticamente improcesables no son sólo las demandas éticas respecto del orden social, sino aquellas de satisfacción de necesidades básicas para vastas mayorías (trabajo, alimentación, vivienda, salud, educación). Algunas se han extremado hasta volverse "no políticas" y otras presentan la radicalización propia de su carácter absolutamente básico.

Aparentemente habrían llegado a su término los modelos conocidos de integración entre lo social y lo político, abarcando la crisis del Estado tanto a las formas autoritarias como a las del Estado de bienestar. Las inconsistencias no aparecen solo en la inconmensurabilidad entre demandas y respuestas efectivas, sino en cuanto a la capacidad estatal de constitución de actores sociales o de incidencia articuladora sobre ellos. Su poder unificador choca con una rebelde heterogeneidad tanto en sí mismo como en la realidad que debería abarcar. En ocasiones llega a aparecer como un actor fragmentado más.

Ahora bien, puede avanzarse que en el transcurso de esta crisis inédita, que esteriliza recetas políticas y económicas anteriores, se modificará profundamente la relación entre el Estado, la sociedad y la economía en los países latinoamericanos. Ello es lo que ocurre en las crisis estructurales, como fue dable ver en la crisis del 30 que dio origen al Estado de bienestar o protector. Tal modificación irá ahora seguramente más allá de la oscilación entre una centralización autoritaria y un acatamiento a un mercado político de intereses sectoriales o corporativos.

Explorar los escenarios futuros posibles de esa modificación de la relación entre Estado, sociedad y economía es en la actualidad una labor pendiente e imprescindible en la medida en que el conocimiento de las tendencias actuantes es parcial y en general se reduce a extrapolaciones de la situación en el plano exclusivamente económico-social, sin una consideración totalizadora de los condicionantes y potenciales de cambio presentes intra-estatalmente y en el seno de la sociedad.

En este sentido, creemos que se debe trabajar en función de "identificar opciones dinámicas que puedan compensar las tendencias negativas", como se lee en uno de los párrafos del documento "A UNDP overview: prospects for technical co-operation in Latin America and the Caribbean in the eighties".

Tal identificación de opciones dinámicas, o sea de nuevos modelos de desarrollo económico y de participación socio-cultural a nivel nacional y subregional, requiere elaborar conocimientos sobre los aportes a los mismos de los actores en juego, incluidos los Estados. Como adelantáramos, se trata de procesar los condicionantes y los potenciales de cambio presentes intra-estatalmente y en el seno de la sociedad. Sólo así podrán cons-

truirse los escenarios futuros posibles, ya que el espacio de elaboración de políticas públicas y de la misma institucionalización es el de la sociedad y sus conflictos.

Recapitulando:

- 1— En la región, los Estados nacionales enfrentan la necesidad de producir transformaciones en su seno, a fin de ganar capacidad para responder adecuadamente a un proceso de ajuste económico sumamente crítico que amenaza la gobernabilidad sistémica, de lo cual existe una conciencia incipiente por parte de los gobiernos y por parte de diversos actores sociales que reclaman modificaciones en las políticas de los aparatos estatales;
- 2— La capacidad de gestión del desarrollo por parte de los Estados latinoamericanos² no se incrementa necesariamente aún con procesos de fortalecimiento derivados de una mayor legitimación (por las aperturas democráticas) o de la centralización de decisiones claves de política por imperio de la crisis;
- 3— Aparentemente no resulta posible seguir pensando en el diseño de políticas públicas capaces de dar respuestas a las perspectivas económicas regresivas, o al menos que las mitiguen, sin hacerse cargo en tal diseño de los cambios que se están produciendo en la relación Estado, sociedad y economía;
- 4— Tales cambios no han sido analíticamente ponderados en pro de disponer de escenarios futuros posibles a nivel nacional, subregional y regional, donde aparezcan combinados resultantes probables del accionar de distintos actores sociales;
- 5— La difícil consolidación de sistemas políticos democráticos constitucionales y los desafíos de la crisis económica parecen requerir como nunca capacidad de invención institucional y de innovación en las políticas económicas y socio-culturales, sin que sea posible escindir más la problemática de la construcción de consenso y de legitimidad de aquella de la eficacia social de las decisiones estatales;
- 6— La identificación de "opciones dinámicas que puedan compensar las tendencias negativas", o sea de nuevos modelos de desarrollo económico y de participación socio-cultural, no puede realizarse a través de ejercicios de extrapolación de tendencias exclusivamente económicas, sino integrando tendencias de comportamiento de actores claves, incluidos los Estados.

Ante la necesidad de disponer de los escenarios futuros posibles que hemos mencionado, considerándolos elementos valiosos para la toma de decisiones (gubernamentales y no gubernamentales), y en función de los razonamientos expuestos y recapitulados, proponemos el cumplimiento del siguiente objetivo regional de desarrollo: *generar y difundir conocimientos analíticos y prospectivos en cuanto a las interrelaciones entre el Estado, la sociedad y la economía en la crisis, como parte de la conformación de estrategias para la reconstitución de tal relación y para la transformación del Estado.*

Contribución del proyecto al objetivo regional de desarrollo

El proyecto proporcionará descripciones de las tendencias actuantes y de su proyección en el mediano plazo, en los niveles nacional, subregional y regional, a fin de que en los sistemas de toma de decisiones con incidencia societal exista una mayor comprensión de las consecuencias de determinadas opciones de acción, a partir de la visualización de los juegos de los distintos procesos y actores estudiados. Respecto de esto, será una preocupación constante evaluar la comprensión que los actores considerados ya tienen de las consecuencias de determinadas opciones de acción. Interesa sobremanera verificar los costos sociales que los distintos actores estiman derivarán de sus propias opciones de política y su disponibilidad o no a pagarlos. La dificultad para concebir políticas de crecimiento socialmente progresivas hace particularmente importante este punto.

Con ello se buscará cubrir el déficit en el conocimiento práctico y teórico³ sobre las interrelaciones y yuxtaposiciones entre el Estado, sociedad y economía, motivo que interfiere en la determinación de las causas profundas por las cuales el Estado no es capaz de responder a importantes tareas de desarrollo. O sea que el proyecto se hace cargo de la necesidad expresada por distintos gobiernos y actores sociales de una integración entre política y economía, compatibilizadas en una gestión de desarrollo no atribuible ya a un sólo dominio (el de la economía suprimiendo la política, en las propuestas neo-liberales, o el de la política como sola instauración o recuperación de la institucionalidad democrática o Estado de derecho).

La contribución del proyecto será pues revelar y difundir los escenarios posibles de la reconstitución de la relación Estado-sociedad, reconstitución que en claves progresivas o regresivas será seguramente impuesta, por una parte, por las nuevas relaciones internacionales en gestación y, por otra, por la necesidad de responder de alguna manera a condiciones nacionales cada vez más específicas en esta nueva dualidad entre homogeneización mundial creciente a nivel tecnológico-productivo y diversificación de las sociedades.

Acotación del objeto de estudio y alcance de las Investigaciones

El objeto de estudio del proyecto en cada una de sus fases de agregación (nacional, subregional y regional) está constituido por las políticas estatales o de otros actores sociales y/o por las demandas de políticas que estos últimos realicen. O sea que los escenarios futuros posibles surgirán en todos los casos a partir de las combinatorias entre políticas y demandas de políticas.

En este sentido consideraremos *políticas* tanto aquellas declaradas como tales por el actor de que se trate, como las indicadas por series de acciones concurrentes. (Por ejemplo, una política expresa de reforma administrativa del Estado y las series concurrentes de acciones estatales que transforman la estructura del aparato estatal en el mismo sentido o no

que aquél declarado en la legislación y/o medidas de reforma administrativa).

En el campo de las políticas se destacarán, para tratarlas, aquéllas que impliquen innovación (que impliquen pues ejercicio de poder independiente y no prefijado por una regulación jurídica normativa ya establecida), sea en el sentido progresivo o regresivo, iniciador de transformaciones más o menos inmediatas o de modificaciones "en germen", pero importantes por su cualidad original o contrapuesta a la tendencia dominante y con efectos potenciales a largo plazo. La capacidad de impacto sistémico, de afectar al conjunto de dimensiones o de actores en juego es entonces lo decisivo. Recuérdese que para la confección de escenarios posibles se deben identificar tendencias dominantes y secundarias, tomando como referencia el alejamiento o acercamiento a la "salida óptima de la crisis".

La elaboración de todos los items será en lo posible multidisciplinaria (por ejemplo, no se describirá una reforma administrativa —dentro de la dimensión analítica democratización-modernización del Estado— en términos sólo organizacionales, sino también del uso de los recursos disponibles, incidencia en el presupuesto, nivel de salarios, jerarquización y de la redistribución de poder político que implique).

En cuanto al horizonte temporal de las investigaciones y dado el carácter comparativo y prospectivo del ejercicio se tomará como límite hacia el pasado el año 1980, entendiéndose que el eje es el presente y en él las retenciones y protensiones actuantes. Estos términos (tomados de Husserl) indican que se privilegiarán los lazos hacia el pasado inmediato identificables en el presente y las anticipaciones de futuro también contenidas en el presente bajo la forma de tendencias.

Respecto de los niveles de agregación debe señalarse que trabajaremos a partir del nivel nacional y que éste será el nivel de las investigaciones base encargadas a los centros.

En ese nivel, el nacional, se realizará la primera ponderación de tendencias *en* y *entre* dimensiones analíticas para llegar a los escenarios de cada país, sin perjuicio de poder trabajar también en síntesis subregionales por dimensión analítica.

Es importante incorporar que el proyecto de ninguna manera intenta formular uno o varios paradigmas ideales y abstractos sobre cómo deben ser las relaciones entre Estado/Sociedad y Economía, sino en primer lugar describir las tendencias empíricas construyendo diagnósticos válidos. A fin de facilitar esto se acepta sí una imagen óptima de salida de la crisis para confrontar con ella las tendencias empíricas principales y subordinadas. En todo caso, los diagnósticos elaborados permitirán luego acciones propositivas de los distintos actores, en función de un reconocimiento previo de tendencias. Se confía en que ello contribuya también a superar la crisis de paradigmas propositivos en diversas disciplinas sociales (sobre todo economía y ciencia política).

Como se señalara anteriormente, las políticas y/o demandas de políticas serán investigadas atendiendo al campo de acción que se genera en

torno de ellas. Tales campos de acción son en realidad *la unidad de análisis* constante del proyecto, constituyendo los escenarios los resultados posibles de los campos de acción.

Podríamos decir, desde otra perspectiva, que las políticas en tanto acciones transformadoras de la realidad son a la vez resultantes de la acción de los actores y campos de acción de los mismos.

Siempre es importante distinguir si el campo de acción en torno de una política es altamente conflictivo o no, en función de la oposición-cooperación cerrada o abierta que tengan los distintos actores sociales y su peso relativo, o sea, resulta relevante la estructura de participación en torno de una política y el tipo de acción que genera (respecto de la acción misma puede ser útil la desagregación toureniana en intensidad, orientación, sentido y dirección de la acción).

Dimensiones analíticas: explicitación y desagregación

Las dimensiones analíticas seleccionadas en el proyecto son pertinentes para rastrear la reconstitución de la relación Estado/sociedad/economía en la crisis, lo cual se percibe claramente en la siguiente explicitación y desagregación de las mismas.

Dicha reconstitución es advertible en la casuística nacional, pero mucho más en sus tendencias dominantes, o sea aquellas expresivas de un principio de estructuración adaptativo respecto de las modificaciones que experimenta el sistema internacional. Es importante pues registrar cuál es el grado de coherencia de los actores sociales y políticos que optan por esta respuesta, al tiempo que se identifican sus implicaciones en diversos aspectos de la realidad.

Por otra parte, resulta relevante observar las tendencias contrapuestas que existan, así sean de menor fuerza y amplitud, o se hallen "en germen", pues de ellas depende una virtual reconstitución progresiva.

Respecto de la explicitación que sigue de las dimensiones analíticas vale indicar que en el taller teórico-metodológico se prefirió explicitar y desagregar de manera amplia cada dimensión analítica, dando por sentado que la elaboración de los temarios de investigación nacionales implicaría una selección de los aspectos enumerados en función de las distintas realidades nacionales.

Estas dimensiones analíticas, en función de lo expuesto, serán investigadas desde el Estado y desde los distintos actores y agentes sociales, a fin de obtener escenarios parciales de transformación de la relación Estado-sociedad desde el Estado y desde la sociedad (sus presiones y demandas). Los sujetos sociales a los cuales se les expondrá los resultados de las investigaciones serán aquellos más representativos de la sociedad y del Estado respecto de los items escogidos; esto es, representantes de movimientos sociales, de partidos políticos, funcionarios responsables de políticas estatales y dirigentes sectoriales.

La matriz de dimensiones analíticas para las cuatro subregiones abar-

cadás (Área Andina, Caribe, Centroamérica y México y Cono Sur) es pues la siguiente:

Actores y agentes				
Transformación de la relación Estado/sociedad	Estado	Partidos	Fuerzas sectoriales corporativas	Movimientos sociales
Democratización/modernización del Estado				
Descentralización/centralización del Estado				
Innovación en políticas económico-sociales				
Innovación en políticas culturales y transformaciones del campo cultural				
	Escenario parcial de transformación del Estado desde el Estado	Escenarios parciales de transformación del Estado desde la sociedad		

La proyección de los escenarios posibles a mediano plazo será la última fase del proceso de síntesis comparativa de los estudios realizados.

a) Democratización-modernización del Estado

En esta dimensión analítica más que en las otras es dable reconocer la imagen óptima de salida de la crisis, o sea, una premisa normativa: integra-

ción política y social y gobernabilidad progresiva son pues uno de los polos contrafactuales para la descripción de lo que está ocurriendo. No obstante, ello no cancela la exigencia prioritaria de un juicio de realidad sobre la transformación que se investigue. Se trata de identificar las tendencias conflictivas y contradictorias *efectivamente* en juego y de individualizar los resultados provisorios de ese juego —incluyendo sus probabilidades de permanencia y estabilidad—, por indeseables que aparezcan a la luz de imagen óptima de salida de la crisis.

El contenido de esta dimensión analítica se descompondrá en dos grandes temas:

1— Transformaciones ocurridas en los mecanismos de intermediación política, sistema político, sociedad política, o como se quiera denominar este ámbito.

2— Transformaciones ocurridas durante el quinquenio en las instituciones estatales y sus modalidades de desempeño.

Se partirá del supuesto de que en los países efectivamente han ocurrido estas transformaciones, buscando identificarlas en el contexto de las condiciones siguientes:

1. Transformaciones en la economía internacional.
2. Procesos de democratización, entendidos en un doble aspecto:
 - a) procesos de transición a regímenes de democracia representativa,
 - b) una tendencia a la democratización social y cultural ya secular, manifestada en creciente presencia de masas, movilización de grupos excluidos y cambios en la producción de sentido con connotaciones más igualitarias y libertarias.
3. Procesos de surgimiento de demandas y de movimientos sociales, caracterizados por fragmentación y ausencia de proyectos totalizantes.
4. Surgimiento de una contraofensiva neo-conservadora con contenidos autoritarios y de liberalismo económico.

Obviamente consideramos que la problemática de democratización-modernización del Estado es mucho más compleja que aquella circunscrita, por una parte, a la reforma constitucional y, por otra, a la racionalización administrativa. Además puede no haber paralelismos entre los cambios constitucionales y los cambios en el aparato tecno-burocrático del Estado, aunque no pueda escindirse la capacidad de previsibilidad y de eficacia (concreta y simbólica) de las modificaciones en el sistema de intermediación política.

Hace a esa eficacia la ocupación efectiva de los diversos aparatos de poder estatal según las leyes, subordinando realmente todos los órganos a las autoridades constitucionales.

Recordemos que la crisis del Estado es también —y en algunos países fundamentalmente— "crisis de la democracia en el Estado", según la expresión de Juan Carlos Portantiero.

Por su parte las administraciones públicas son condicionantes y medios de la acción estatal y no pueden concebirse cambios en la gestión sin cambios en las mismas.

Aceptando que la modernización del Estado en tanto mayor eficacia y

eficiencia es rastreable en la complejización, especialización y simplificación de la acción estatal, sugerimos atender a las innovaciones salientes en los aparatos de gestión: a) productiva, b) fiscal, c) de servicios, d) de seguridad, e) de regulación económico-social, reparando en la incorporación de nuevos grupos tecno-burocráticos para la formulación de estrategias y políticas configuradas en las instancias de decisión democrática; la mudanza de jefes administrativos según lealtades partidarias; la creación o no de estructuras paralelas a las administrativas, incorrectas desde el punto de vista de la racionalización de gastos y del otorgamiento de irresponsabilidad al sistema administrativo, etc.

También es importante si los cambios de la administración pública derivan de una política de transformación de la misma o de la adaptación a cambios en el régimen político y en la cultura de Estado.

Los ejes seleccionados para tratar esta dimensión analítica son los siguientes:

Democratización del Estado

Respecto de transformaciones en el sistema político, se cree conveniente distinguir las siguientes subdimensiones.

- 1— Transformaciones en partidos y en sistemas de partidos.
- 2— Transformaciones en sistemas de representación (por ejemplo, sistemas electorales, relación entre parlamentos y ejecutivos, etc.).
- 3— Innovación en relaciones entre sistema política y organizaciones e intereses corporativos (por ejemplo, mecanismos de concertación).
- 4— Innovación en la representación de demandas y movimientos sociales.

Modernización del Estado

- 1— Alcances y límites de la intervención estatal.

En el dominio de cuestiones debatidas, se trata de privatización vs. estatización, intervencionismo vs. subsidiariedad. Pero el interés recae primordialmente no en estas cuestiones como objetos en el campo ideológico, sino como transformaciones efectivas (tendencias) en esta subdimensión.

A título ilustrativo, ejemplifiquemos lo que podría llegar a ser en algunos países la tendencia dominante en cuanto al eje "amplitud, límites y contenidos de la acción estatal", a partir de la visión del Banco Mundial sobre el Estado y su perfil en la región. Por una parte, en cuanto al contenido de la política, se plantea la necesidad de que el Estado acerque la estructura de precios relativos a la estructura óptima; en cuanto a su papel como productor, se plantea la reducción del mismo por ser esencialmente ineficiente en ese plano; en cuanto a la capacidad de gestión, se propone un ejecutivo fuerte que unifique la acción estatal sobre la base de decisiones tecnoburocráticas, destacándose la rela-

ción con empresas públicas en términos de autonomía, control y rentabilidad de las mismas y el manejo de la política fiscal, como así también la optimización de los vínculos neocorporativos bilaterales; en cuanto a la amplitud del Estado, se plantea una redefinición en términos de gasto social, etc.

- 2— Modernización de tecnologías de gestión estatal y coordinación de aparatos del Estado.
- 3— Asignación de recursos intraestatales, en relación con sectores estatales, clientelas, distribución diferencial de recursos de poder y articulación funcional.
En la terminología de Oscar Osziak, ¿hay cambios en las líneas de "isócracia"?
- 4— Descentralización y redistribución de poder (cf. la dimensión analítica).
- 5— Participación, control social de la gestión pública, expansión de oportunidades de acceso a mecanismos y recursos de control.
Esta subdimensión incluye ámbitos como:
 - a) aseguramiento de libertad y seguridad personales frente a la acción estatal (por ejemplo, reforma de poder judicial),
 - b) visibilidad y transparencia de procesos de decisión pública,
 - c) contención de procesos de corrupción, prebendalismo, patrimonialismo, etc.
- 6— Desempeño estratégico estatal en cuanto a su capacidad de gestión fiscal, productiva, de servicios, de seguridad, de regulación económico-social y de las relaciones internacionales.

b) Innovación políticas económico-sociales

Esta dimensión se refiere a las formas de reconstitución económico-social emergentes de la crisis, o sea, tanto a las políticas de inserción en la economía mundial como a aquellas políticas económico-sociales de organización interna.

La articulación interna no es posible haciendo abstracción del frente económico externo, pero en el límite sólo son posibles integraciones al mercado mundial espasmódicas y lesivas a partir de sociedades nacionales desarticuladas.

Esa desarticulación interna en ocasiones se expresa a nivel ideológico como sobrevaloración del papel de los mercados internacionales en el desarrollo y como subvaloración de la capacidad de los distintos mercados internos.

Existen materiales para la elaboración de un diagnóstico somero de la situación de los diversos países latinoamericanos en cuanto a los efectos macroeconómicos de la crisis y las formas de integración al mercado mundial.

La tarea del proyecto consistirá en el análisis de las políticas y demandas de políticas específicas por parte de los diversos actores relevantes.

En ese sentido el Estado aparece como un actor cualitativamente dife-

rente pues es el que puede integrar como en un modelo de política económica global los aspectos ligados al mercado mundial y de articulación interna. Asimismo es el que puede intentar una articulación de variables y políticas macro y micro (aunque sabemos que las acciones en los ámbitos micro pueden ser o no relativizados o mediadas por el Estado). Sin embargo, estas tareas necesarias se deben cumplir en contextos muy desfavorables, no sólo porque la soberanía del Estado en el plano económico tiene límites que le vuelven muy difícil actuar eficazmente "del lado de la oferta", sino porque los mecanismos de regulación macro-económicos convencionales, de naturaleza keynesiana, parecen ser ya ineficaces en las nuevas condiciones de interdependencia y desarrollo de la economía mundial.

La desagregación sugerida de esa dimensión analítica es la siguiente:

- 1— Políticas de modificación del perfil productivo.
- 2— Políticas que incidan fuertemente en la relación mercado interno-mercado externo.
- 3— Políticas que incidan fuertemente en la relación mercado-Estado.
- 4— Políticas de distribución-bienestar a partir de políticas de ocupación-ingreso.

En ellas se sintetizarían las respuestas al desafío de la crisis, siendo relevantes complementariamente: 1) aquellas políticas y demandas de políticas sectoriales con efectos sistémicos, 2) los que sean eje de modelos opcionales de desarrollo (especialmente de articulación interna) y 3) las que aparecen recurrentemente como tema en la agenda vigente de los actores sociales.

A fin de proporcionar una orientación sobre los items desagregados los comentaremos brevemente:

- 1— Nos referimos a los énfasis en distintos sectores económicos por parte de la acción estatal, tomando en cuenta su viabilidad productiva condicionada por el sistema internacional (en el corto y en el largo plazo, habida cuenta de las tendencias en el desarrollo tecnológico mundial). Es decir, nos preguntamos qué responden el Estado y los actores sociales en cuanto a qué producir, cómo producir, dónde producir y con qué recursos hacerlo.

El problema de la reconversión productiva puede ser visto como modificación del escenario de la acción colectiva en el proceso de integración, incluyendo:

- prioridad y articulación en los sectores económicos básicos (agricultura, industria, comercio, servicios),
- formas de la organización productiva y la división del trabajo, tomando en cuenta la trama social de las distintas opciones (por ejemplo, una pregunta organizativa clave en las formas de organización productiva se refiere a la opción entre unidades productivas con alto grado de integración vertical vs. la presencia de mercados de subcontratación). Estas opciones tienen efectos y sentidos diferentes en cuanto a la transformación de las estructuras sociales, a la concentración económica y a la democratización.

Por lo tanto en este item son de especial relevancia las políticas de

inversión (tratamiento del capital extranjero e interno) y la política monetaria.

- 2— Se trata de ver en este item cómo visualizan el Estado y los distintos actores el mercado interno y los tipos de eslabonamientos económicos de los sectores productivos en su relación con el mercado interno. Asimismo cómo se visualiza y se trata el problema de la deuda y del accionar del capital financiero en cuanto a las orientaciones de la relación mercado interno-mercado externo. Se entiende que en este item se juegan privilegiadamente conflictos típicos de acumulación vs. distribución, siendo por ello de suma importancia las opciones estratégicas que adopten los distintos actores.
- 3— ¿Cuál es el papel del Estado en el establecimiento de un sistema de reglas de juego y mecanismos regulatorios frente a diversos tipos de "fracasos" del mercado? Este sistema de reglas no puede ser universal ni copiado, sino que tiene que estar adecuado a cada tipo de sociedad y de sector del mercado a ser regulado, siendo de interés los mecanismos innovadores puestos en práctica.
- 4— Perspectiva de los actores sociales ante los procesos asociados al perfil económico emergente. Vinculación de esta temática con las demandas internas sobre políticas del Estado y reacción de los actores sobre los respectivos costos sociales.

Se entiende que las políticas de ocupación-ingreso actúan de bisagra entre las políticas específicamente económicas y las políticas sociales. Respecto de las últimas, debería prestarse especial atención a las innovaciones en políticas para la extrema pobreza, de satisfacción de necesidades básicas y de tratamiento de la economía informal, ilegal y campesina.

c) Centralización - descentralización del Estado

El fenómeno de la crisis en la región, muchas veces asociado con cambios en los regímenes políticos, ha implicado políticas y fenómenos importantes de centralización-descentralización del Estado.

El centralismo de Estado que en general posibilitó la integración nacional en los países de la región se ve puesto en cuestión por procesos de regionalización política y económica, de fragmentación, de incapacidad de control, de transferir recursos por parte del Estado central, etc.

Distintos tipos de presiones actúan desde la sociedad y desde el Estado para modificar los esquemas de centralización-descentralización; entre este tipo de presiones se encuentran las provenientes de una recreación de identidades locales y culturales, la ampliación del sistema representativo, las reivindicaciones de gobiernos locales, el rechazo de los mecanismos verticales de intermediación local, etc.

El transfondo es una reestructuración regional importante junto a procesos de diferenciación regional y local también significativos, en ocasiones reveladores de nuevas pautas funcionales de organización espacial y en

otras de graves muestras de fragmentación. Por esto último se ha podido hablar de las propuestas de descentralización como propuestas de organización de la fragmentación.

Concretamente, en esta dimensión analítica se tratará de rastrear las políticas de centralización-descentralización del Estado, entendiendo que los términos de centralización-descentralización refieren a niveles de toma de decisión, actores involucrados y alcance de las decisiones tomadas, poniendo énfasis en las tensiones entre centralismo y pluralismo territorial en la toma de decisiones, lo cual tiene que ver en muchos casos con proyectos de transformación del Estado nacional.

La dimensión analítica se desagrega de la siguiente forma:

- 1— Centralización-descentralización económico-financiera (de recursos fiscales) y de utilización de recursos naturales.
- 2— Centralización-descentralización burocrática.
- 3— Centralización-descentralización de decisiones políticas.
- 4— Políticas regionales.

Respecto del primero de estos puntos cabe la siguiente especificación de fenómenos para atender:

- a) modificaciones en las políticas de disponibilidad de recursos para las distintas instancias territoriales del aparato del Estado;
- b) políticas de transferencia de recursos fiscales entre las distintas entidades del gobierno central; distribución diferenciada de recursos entre los distintos aparatos gubernamentales tomando en cuenta las demandas de participación regional y local en la distribución de esos recursos;
- c) efecto de políticas regionales sobre la posibilidad de captación fiscal de los niveles inferiores de gobierno (provincial y local);
- d) incidencia de los objetivos de planificación nacional sobre la descentralización económico-financiera, y
- e) finalmente, identificación de tipos de actividades o funciones estatales afectados por los procesos de centralización-descentralización económico-financiera.

Respecto del segundo punto vale lo siguiente:

- a) evolución de la burocracia en cuanto a los recursos totales dedicados a este sector como en cuanto al número y al tipo de actividades ejercidas por el Estado y al número de personal empleado;
- b) comparación de la localización territorial de dichas actividades y evaluación de su impacto sobre cada una de las subdimensiones mencionadas en a;
- c) en el caso de desplazamiento territorial de recursos, funciones y actividades habría que caracterizar el tipo de función estatal desplazada (por ejemplo, regulación, extracción, servicio, etc.);
- d) asimismo, caracterizar al tipo de actividad descentralizada correspondiente a cada una de las funciones estatales sujetas a un desplazamiento (por ejemplo, actividad de toma de decisión estratégica o de dirección global, apoyo logístico o investigación; servicios a un público determinado, etc.).

Esto puede ayudar a medir el impacto de la centralización-descentrali-

zación sobre el sistema de toma de decisión interno en los sistemas estudiados;

e) sería preciso intentar definir la existencia o no de conexiones entre las instancias desplazadas y las instancias locales o regionales de poder. Podría eventualmente permitir ver si esas modificaciones afectan las coaliciones que se dan entre elites locales y delegaciones o entidades descentralizadas e influyen sobre el marco general de relaciones centro-periferia.

En relación al tercer punto convendría reparar en:

- a) modificaciones jurídico-institucionales que conducen por ejemplo a la constitución de instituciones autónomas en las regiones (como las Corporaciones de Desarrollo y los Comités Cívicos en el caso de Bolivia);
- b) los tipos o sectores de funciones estatales afectados por dichas modificaciones según su impacto sobre las relaciones entre el Estado y las regiones;
- c) la extensión del análisis de la centralización-descentralización de las decisiones políticas a la transformación del funcionamiento del sistema político y de las relaciones de poder entre Estado, partidos, sindicatos, corporaciones de desarrollo y comités cívicos (en algunos casos);
- d) como derivación de lo anterior, se sugiere también el estudio de las conexiones de los temas anteriores con los procesos de formación de nuevos sujetos políticos que asuman un rol significativo en los procesos de descentralización de las decisiones políticas.

Respecto del cuarto punto, se sugiere considerar las políticas públicas (del Estado central) y demandas de políticas de ordenamiento y promoción territorial desde y hacia las regiones, sean macroeconómicas con claros efectos regionales y/o de planificación regional. Simultáneamente deberán tratarse las reacciones locales privadas y públicas, como los proyectos regionales de desarrollo a partir de la sociedad civil.

En este sentido es importante relevar las desiguales participaciones regionales en el modelo de ajuste y las reacciones a ello (por ejemplo de sectores económicos vinculados al sector externo o exclusivamente de producción de bienes-salario o de monoprodutores regionales).

Las políticas y demandas de políticas sobre ciclos de precios de productos regionales y de inversión son también de interés en este ítem, como también aquellas para afectar el mercado de trabajo o para proporcionar ayuda directa en situaciones de emergencia económica, militar o por catástrofes naturales.

Los conflictos intersectoriales a nivel privado entre regiones que pueden desatar las políticas públicas, en el caso de que adquieran relevancia, también deben ser considerados.

d) Innovación política cultural

La carencia relativa de políticas culturales integrales en América Latina no debe impedir que se repare en las transformaciones e iniciativas en la dimensión cultural, que permea lo que ocurre en las demás dimensiones, además de sus expresiones más específicas.

En el sentido más amplio esta dimensión refiere a la capacidad de acción de una sociedad sobre ella misma, a su creatividad, que se manifiesta tanto en un nuevo diseño institucional como en un recurso para la producción o en la restricción o promoción de valores y proyectos societales, a nivel político y de la vida cotidiana.

En el estudio de esta dimensión se considerarán como procesos subyacentes o referentes los mismos identificados para las otras dimensiones:

- a) crisis, formas de inserción en el sistema económico mundial y sus efectos sobre la articulación/desarticulación interna;
- b) democratización (tanto como proceso "largo" en nuestras sociedades y como proceso de transición y consolidación de la democracia representativa);
- c) privatización y efectos en general de la "ofensiva neo-liberal", y
- d) multiplicación de demandas desde una sociedad civil fragmentada, heterogénea, etc.

Además, ciertos procesos o tendencias específicos de la propia dimensión, entre los cuales mencionaremos:

- la masificación de la producción, de los productos y del consumo cultural;
- la profesionalización de los agentes culturales;
- la creciente diferenciación y autonomía de las instituciones culturales;
- la internacionalización de los circuitos de producción, transmisión y consumo cultural.

Sin embargo, estos procesos no se dan con igual fuerza ni tienen la misma significación en cada una de nuestras sociedades, por lo cual deben considerarse, siempre, en el *contexto histórico de desarrollo* de cada sociedad y sobre todo debe considerarse la existencia de políticas o de demandas de políticas acerca de estos fenómenos.

Incluso debe tenerse presente, para los estudios de esta dimensión del proyecto, que la noción de cultura que queremos emplear es abierta y comprende por lo menos:

- procesos de creación y productos culturales;
- ámbitos de cultura especializada y ámbitos sociales de interacción en que se negocian sentidos y se establece una comunicación simbólica;
- fenómenos de producción, de comunicación o circulación y de consumo o reconocimiento o recepción (activa, resignificante) de la cultura;
- cultura nacional y sub-culturas (por llamarlas así) funcionales, de grupos o etnias, generacionales, etc;
- cultura expresiva (de identificación y proyección simbólica) y cultura instrumental (de medios-artefactos hasta conocimientos) aplicados a la acción.

En cada caso nacional se elegirá poner énfasis en las nociones y/o aproximaciones a la cultura que aparezcan más relevantes y fructíferas para el estudio de esta dimensión en el respectivo país.

Para abordar el análisis de esta dimensión se proponen dos grandes subdimensiones.

- Análisis de transformaciones del campo cultural.

- Análisis de transformaciones de la cultura cotidiana.

Análisis de transformaciones del campo cultural: Hace referencia al conjunto de aparatos, instituciones, agentes y políticas que tienen que ver con la producción especializada de cultura y su transmisión. El campo cultural es un campo, por tanto, de conflictos, en torno de la producción y transmisión de cultura, donde se expresan intereses, experiencias, anhelos, proyectos y demandas de los diversos grupos, sectores, clases, generaciones, etnias, regiones, etc., que conforman la sociedad y que allí encuentran —a través de la mediación del campo— su expresión como productos, ideológicas, concepciones del mundo, programas pedagógicos, expresiones de arte, etc.

Interesa estudiar en esta área temática los procesos de transformación más importantes del presente y las tendencias conflictivas que pueden ir definiendo escenarios del futuro:

a) *cambios y desplazamientos en las instituciones hegemónicas del campo y efectos de ellos* (por ejemplo, papel relativo de la Iglesia, sistema de educación, televisión, medios de prensa, radio, etc.). (Efectos sobre integración a circuitos internacionalizados, sobre tipos de contenidos transmitidos, sobre las relaciones ideológicas en la sociedad, sobre las formas de dominación, etc.);

b) *tendencias de cambio en el control público, privado o comunitario de los medios y las instituciones de producción y transmisión cultural.* (Papel del Estado y de la empresa privada; fenómenos de privatización y de intervención pública; políticas de subsidio, de patrocinio oficial, de mercado o de control comunitario en diversos sub-campos: artístico, intelectual, educativo, de industria cultural, etc.);

c) *organización interna de las instituciones o empresas culturales* (propiedad de los medios de producción y comunicación; control sobre tecnologías; relaciones burocráticas y conflictos dentro de diversas empresas culturales; impacto de fenómenos de democratización sobre organizaciones culturales, etc.);

d) *internacionalización de los circuitos de producción y de transmisión de la cultura* (el fenómeno de las nuevas tecnologías de comunicación, acceso a ellas, soberanía nacional en el terreno cultural, formas de integración a estos circuitos internacionalizados, formas de resistencia y conflicto en torno de estos procesos);

e) *procesos de cambio en los sistemas de ciencia y tecnología (R & D) y en sus relaciones con el aparato productivo y el aparato estatal.* (Cambios en la educación superior, formación de postgrado, políticas de investigación, formas de financiamiento de las ciencias, ciencia y empresa, ciencia y Estado, supuestos culturales de la conformación de núcleos endógenos de dinamización tecnológica; innovación y prácticas tradicionales; modelos de conocimiento científico y de conocimiento tradicional, etc.).

Análisis de transformaciones de la cultura cotidiana: Hace referencia a las dimensiones interactivas de las prácticas cotidianas; a la creación, man-

tención y transformación de la cultura como experiencia cotidiana individual y colectiva. Incluye las dimensiones de la cultura como negociación de sentidos continuamente presente en las prácticas sociales.

Interesa estudiar en esta área temática los procesos de transformación más importantes del presente y las tendencias conflictivas que pueden ir construyendo escenarios del futuro:

a) *desarrollos de la cultura de masas* (como productos de la industria cultural), conformación de sujetos e identidades y pautas de integración simbólica a un imaginario social que funde su producción industrial con su consumo heterogéneo (a veces resistente, de resignificación, etc.). Problemas de cultura de masas y conformismo (en sentido gramsciano): cultura de masas activa vs. cultura de masas pasiva; cultura de masas y cultura política; participación y cultura de masas, etc.;

b) *procesos y conflictos de pluralidad cultural*: etnias, clases, regiones. Cultura dominante y culturas subalternas. Movimientos sociales con base cultural y/o con expresión cultural (juveniles, de mujeres, de campesinos, indigenistas, etc.). Tendencias de articulación o de exclusión de estas diversidades culturales en el *campo cultural* (acaso acceden o no a las mediaciones e instituciones culturales que logren darle proyección, como puede ocurrir con la incorporación de idiomas nativos a la educación formal, o con el acceso a los medios de comunicación de culturas no-oficiales, etc.);

c) *transformaciones de la cultura cotidiana a la luz de la crisis y los demás procesos subyacentes enunciados al comienzo*. Aquí se incluyen dos líneas imbricadas entre sí:

- interacciones cotidianas y reproducción de la vida cotidiana (a nivel del individuo, la familia, la comunidad y localidad) y sus desplazamientos y transformaciones por efecto de la crisis y los demás procesos subyacentes (rol de la mujer, estrategias educacionales y de carrera de los individuos, nuevas formas de solidaridad y competencia, etc.);
- estrategias culturales (micro) de resistencia, enfrentamiento, retraimiento, etc., frente a la crisis (estrategias de innovación a partir de agentes culturales tradicionales o locales, estrategias de supervivencia, formas comunitarias de resistencia en la base, aprendizajes colectivos de pequeños grupos en el plano productivo, etc.);

Debe quedar claro que en la selección y orientación de las investigaciones que los grupos o centros emprendan nacionalmente, la pauta entregada deberá adaptarse a las *específicas condiciones históricas del desarrollo* en cada país. Incluso en unas sociedades podrá elegirse enfatizar las transformaciones del campo cultural o en otras las transformaciones en la cultura cotidiana, según cual aparezca como más relevante para explicar las transformaciones culturales en curso y para definir los conflictos y tendencias que conformarán escenarios posibles en el futuro.

Asimismo en el análisis de cada una de estas dos dimensiones y de cualquiera de sus subdimensiones, deberá atenderse a las políticas o procesos centrales del caso, a sus efectos, evoluciones y conflictos a que da lugar.

Por último, en cada oportunidad, deberá considerarse el papel de los

actores y agentes relevantes que serán distintos según el enfoque que se adopte y según si el énfasis se ponga en el campo o en la cultura cotidiana.

Por parte de la coordinación del proyecto existe el reconocimiento de que esta dimensión es una de las más complejas para su tratamiento, lo cual se agrava por un caudal menor de estudios sobre ella.

Aparentemente un eje para penetrar en el problema de las políticas y demandas de políticas culturales, obviamente menos estructurado que el de las políticas y demandas en las otras dimensiones, es el de ver cómo los distintos actores, incluidos los Estados, se expiden respecto de los contenidos culturales de la reestructuración que experimenta la región en la crisis (por ejemplo la tendencia a la unilinealidad de la revolución tecnológica o la tendencia a la concentración y centralización informativa o la reducción/ampliación del campo de competencia-combinación intercultural).

Sabemos que la lógica de la resistencia a esas transformaciones muchas veces tiene sólo un carácter expresivo, sin que se lleguen a configurar verdadera "políticas" de respuesta. Por consiguiente, esto debe identificarse en la lenta transformación de relaciones sociales y en "refugios expresivos" presentes en el sistema de acción-reacción cultural.

No se nos escapa asimismo la orfandad epistemológica y metodológica para captar las necesidades sociales a nivel cultural, haciendo justicia a la heterogeneidad existente donde tienden a predominar proyectos culturales de algunos actores en detrimento de otros.

Por ello muy posiblemente haya que arbitrar un balance cuidadoso entre la investigación a nivel macro y a nivel micro en esta dimensión, a fin de poder vislumbrar los procesos más importantes de preservación e innovación, de reproducción, de degradación o mutación culturales.

En los casos de aquellos países donde la cuestión étnica sea central como así también la problemática de campesinos y migrantes —como ocurre en los países andinos y mesoamericanos y en vastas zonas de algunos más modernos—, deberá ampliarse convenientemente el punto *b* de "Análisis de transformaciones de la cultura cotidiana", o sea que en el desglose analítico resulta necesario reconocer lo anterior e inclusive puede necesitarse introducir tipologías regionales (para un mismo país) que diferencien los modos de articulación entre tradiciones e innovación.

Respecto del punto *d* de "Análisis de transformaciones del campo cultural" habría explícitamente que agregar las nuevas formas de dependencia e inserción en el mercado transnacional de los productos culturales tradicionales y/o locales: artesanías, música folklórica, etc. Transformaciones en los diseños, estructuras simbólicas, circulación-comunicación y patrones de consumo.

Somos conscientes del problema de confrontar las políticas estatales con las necesidades y acciones de diversos actores sociales. Sabemos que éste no es un problema debidamente elaborado, y quizás no haya un sólo modelo de articulación generalizable. Sin embargo, sería importante prevenir tratamientos paralelos, al modo en que ya se hace en gran parte de la literatura, por ejemplo al desarrollar separadamente estudios sociológicos de la cultura (en procesos macrosociales, aparatos e instituciones) y estu-

dios antropológicos (concentrados en lo micro, lo comunitario, la vida cotidiana).

Al mismo tiempo, un modelo de correlación entre políticas y necesidades, o acciones hegemónicas y efectos, es imprescindible para evaluar las políticas y producir pronósticos sobre su desenvolvimiento futuro.

Quizás los cambios en el balance entre las organizaciones culturales del sector público y el sector privado, estimando si esos cambios y las orientaciones de la acción de los mismos responden o no a necesidades que aparecen en las transformaciones culturales de la vida cotidiana, sea una modalidad para rastrear la articulación entre uno y otro aspecto, evitando el mencionado aspecto paralelo.

Las políticas estatales y las acciones de movimientos sociales muchas veces tienen gran relevancia cultural aunque no se trate de políticas culturales y/o demandas estrictamente culturales. Piénsese, por ejemplo, en la resolución de la cuestión misquita en el caso de Nicaragua. Este tipo de políticas y su incidencia cultural no debería quedar sin analizar junto a aquellas directamente culturales, como podrían ser las políticas de bilingüismo y/o biculturalismo o las políticas de preservación del patrimonio cultural.

Actores considerados. Selección

La selección de actores por tratar en cada campo de conflicto se realiza en función de la capacidad de incidencia en él. En ese sentido vale para la selección la afirmación de Croizier "lo que es incertidumbre desde el punto de vista de los problemas es poder desde el punto de vista de los actores". O sea que hay que pensar la selección de actores específicos —entre los que aparecen en la matriz del proyecto— a partir de los campos de acción, que constituyen la unidad de análisis.

Respecto de los actores caben las siguientes consideraciones generales:

- 1) Débese reparar en la forma de expresión orgánica de cada uno de ellos junto al grado de autonomía y de agregación de intereses.
- 2) Asimismo débese reparar en la consistencia interna del tipo de acción (sin dejar pasar desfases entre discurso y actuación concreta).
- 3) También es importante destacar la presencia de otras fuerzas que no tienen expresividad orgánica, pero sí fuerte incidencia en el campo de acción donde se determinan y juegan las políticas y demandas de políticas.
- 4) Dado que el Estado cual actor es aún más diferenciado y complejo que otros actores sociales, es importante indicar el/los agentes estatales que cumplen un papel central en cada dimensión analítica.

En este marco resulta de interés tomar en cuenta los componentes de la acción social, a saber, orientaciones de la acción, tipo de conflicto, estructura de participación, así como los sistemas de identidades y la producción simbólica y de sociedad por parte de los distintos actores.

Fernando Calderón y Marlo dos Santos

Notas

1 La imagen óptima de salida de la crisis parece sintetizable —según expresiones de los principales actores— en los conceptos de estabilidad democrática (con avance hacia una democracia "gobernante" y no "gobernada") y de gestión económica progresiva (desarrollo integral no sólo en función del aprovechamiento de posibilidades dadas, sino de la creación de opciones nuevas sobre la base de recursos y necesidades). Debe señalarse que esta imagen óptima de salida aparece inclusive en Centroamérica, matizando —en el horizonte por evitar de la guerra— una opción de desarrollo socialista.

2 Esta capacidad del Estado no puede lograrse sólo intraestatalmente; exige la recuperación en él de la potencialidad de la sociedad en su conjunto sin escindir lo político de lo productivo, lo tecnológico, lo económico. El núcleo de la transformación consistiría en aprovechar el conjunto de las fuerzas dispersas en la globalidad social (en cuanto al Estado mismo es parte constitutiva y meta de las sociedades latinoamericanas), con miras a la formación de un espacio endógeno de intercambio político, productivo, tecnológico, financiero, reconocido como imprescindible para el desarrollo.

3 A partir de un seguimiento estrecho de los debates que han marcado durante las últimas décadas la evolución de las ciencias sociales en la región pueden advertirse retrospectivamente déficits cognoscitivos en los mismos y asimismo cambios en las formas de respuestas de las distintas disciplinas sociales a las demandas de desarrollo. Repasando esquemáticamente esos debates, identificándolos con los conceptos de modernización, dependencia, autoritarismo y democracia, en lo que concierne a la comprensión del Estado tendríamos:

a) en la teoría de la modernización el esfuerzo estuvo puesto en la industrialización y en la articulación de los distintos sectores productivos, concibiéndose una racionalidad evolutiva bajo la forma de un recorrido a través de un continuum tradicional-moderno que culminaba en un Estado-nacional, el cual organizaba un consenso sobre valores (democrático-participativos) y al mismo tiempo articulaba funcionalmente las distintas dimensiones de la sociedad (sectores, instituciones, grupos). Empero, no se penetraba en las relaciones de poder a escala mundial ni tampoco en la lógica de las relaciones internas de poder ni en aquella de las relaciones sociales e históricas que la alimentaban. Contrastando con ello, la multiplicidad y complejidad de los llamados "Estados populistas", tanto por sus conflictos internos como por sus oposiciones y demandas a escala internacional, muestran la limitación de estos análisis sobre los procesos de desarrollo;

b) en el caso de las teorías de la dependencia, la revelación de una tipología de las formas de dominación —su valioso aporte— no bastó para señalar caminos de desarrollo viables e integrales, zanjando la brecha hacia una transformación estructural necesaria pero esquiva tanto por vía revolucionaria como por la de un gradualismo progresivo. El Estado es visualizado en la mayoría de los casos como un mero instrumento político de dominio o como pacto de dominación entre las clases dominantes locales y el capitalismo mundial, ubicándolo —por su carácter instrumental— como externo a la sociedad, en tanto los *sui generis* entre Estado y sociedad, particularmente por la creciente determinación del Estado como productor, como principal gestor de los bienes de consumo colectivo y muy especialmente como reflejo activo y participante de las relaciones sociales;

c) un hito importante en los estudios sobre el Estado en la década del 70, en buena parte de la región, fueron los dedicados al autoritarismo burocrático y a sus relaciones con las fases de acumulación capitalistas en la periferia, dando cuenta de las formas de dominio basadas fundamentalmente en la coacción. Paralelamente, en otros países, se fueron desarrollando comprensiones de los sistemas de intermediación política y de las formas de poder clientelares y coactivas (México y países andinos, por ejemplo).

Respecto del primer tipo de trabajos, conviene destacar que operaba en ellos un sesgo

economicista en la visión de las dinámicas políticas. Precisamente por ésta y otras razones una temática importante posterior y de alguna manera reactiva fue la del redimensionamiento o redefinición de la política y de lo político, y, consecuentemente de las nuevas democracias. Ello dio paso a una reflexión aún inacabada sobre los procesos de transición a la democracia y sobre la democracia como sistema o régimen político y valor para la convivencia social.

Chile: transformaciones culturales y conflictos de la modernidad (1973-1988)*

José Joaquín Brunner**
Carlos Catalán**
Alicia Barrios**

Reconocimientos

Los autores expresan su reconocimiento a la Swedisch Agency for Research Cooperation, con cuyo apoyo FLACSO-Chile ha venido realizando una investigación sobre las "Transformaciones Culturales en Chile", cuyos avances se hallan incorporados en este trabajo.

Asimismo, José Joaquín Brunner se benefició, durante la redacción inicial de este documento, de una beca concedida por el International Development Research Centre del Canadá, que incluyó una estadía en la ciudad de Ottawa, de febrero a agosto de 1988.

Carlos Catalán ha contado, para su participación en este trabajo, con el apoyo del Ministerio de Cultura de España, el que patrocina un proyecto de "Catastro de Recursos Culturales en Chile", en el cual participan conjuntamente FLACSO-Chile y CENECA.

Presentación

No existe probablemente otra empresa intelectual más frustrante, y a la vez apasionante, que ésta que suele denominarse como *sociología de la cultura*.

Apasionante porque nos pone en contacto con la sociedad en su momento más creativo: la comunicación de sentidos que permite a sus

* Investigación realizada en los marcos del Proyecto PNUD-UNESCO-CLACSO, RLA 86/001, Ciencias sociales, crisis y requerimientos de nuevos paradigmas en la relación Estado/Sociedad/Economía.

** Profesores-investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Programa Santiago, Chile.

miembros construirse una realidad e interpretarla en el mismo instante en que actúan sobre ella y la transforman. Todo parece ocurrir en la cultura: desde el lenguaje que utilizamos para conversar y movernos en las situaciones cotidianas hasta los esquemas que usamos para clasificar a las cosas y para entender nuestra propia ubicación en el mundo. Conocemos y hablamos a través de la cultura de nuestro tiempo y de nuestro grupo social. Construimos el universo que nos acoge o nos turba parándonos sobre los hombros de aquellos que nos precedieron en la misma tarea. Transmitimos una cultura a nuestros hijos, incluso como una resistencia frente a la cual ellos puedan rebelarse y levantar sus propios estilos de acción y comprensión.

Al mismo tiempo que nos encontramos con la cultura de todos los hombres y mujeres de una sociedad, reconocemos en medio de ella la producción especializada de conocimientos, obras, interpretaciones y sentidos que configuran los mundos de las ciencias, del arte, de las religiones y las ideologías, de las representaciones colectivas y los procesos organizados de su transmisión. Se abre así un nuevo horizonte de la cultura que nos pone frente a fenómenos de creciente complejidad: un específico campo de producción que, con variados medios y agentes profesionales, crea y transmite organizadamente una proporción significativa de la cultura. Aquella que aprendemos en la escuela, que nos viene por medio de la televisión y la prensa, que recogemos en los textos científicos, que encontramos en los museos, que podemos adquirir en el mercado o que esperamos que el Estado se encargue de distribuir en beneficio de todos.

Empresa frustrante, a la vez, ésta de la *sociología de la cultura*, en la medida en que arroja al aprendiz de este oficio apasionante en medio de un universo que es siempre demasiado vasto y complejo, que parece escaparse como el agua entre las manos cada vez que uno supone haberlo asido o tiene por un segundo la esperanza de haber llegado a un núcleo sólido donde fundar la interpretación. Cada texto es parte de otro texto y se resiste a ser "cerrado", como esas novelas que parecieran empezar justo cuando se termina de leer la última página. Cada voz de la cultura se enhebra con otras voces en una conversación infinita que no cesa de hablar. Cada conciencia individual a través de la cual la cultura se reproduce continuamente y se comunica parece desplazarse con el propio movimiento de la cultura, sin "fijarse" nunca en un mismo lugar. Pero, además, la *sociología de la cultura* —si ha de merecer el nombre de tal— buscará entender la cultura y su evolución en los contextos que hacen posible la acción provista de sentido. Los significados, en efecto, o mejor todavía, los procesos de significación, se encuentran íntegramente "saturados" por los contextos en que ocurre la acción. Una obra de arte contemporáneo no es separable del lugar de su presentación, ni del actor reconocido como "productor legítimo" que la ejecuta, asimismo como el lenguaje no engendra los sentidos "dentro de sí" —en un universo de competencias y reglas— sino por referencia a los actores que lo emplean en contextos de práctica social cuya maestría es parte del propio uso competente del lenguaje. ¿Cómo, entonces, se conectan la cultura —y sus variadas producciones— con el poder, con la economía y

con la estratificación en la sociedad? ¿En qué medida y con qué efectos interactúan la cultura y la política? Las clases sociales ¿son portadoras de culturas específicas, típicas? ¿El industrialismo moderno "crea" su propia cultura o para su avance supone tradiciones culturales determinadas?

La pasión y la frustración de los *sociólogos de la cultura* terminan, entonces, por desarrollar en ellos un no siempre bien oculto "complejo de Sísifo"; dedicación de una tarea siempre vuelta a comenzar. Esta vez nosotros, "aprendices de Sísifo", hemos llegado hasta aquí; aquí hemos de volver a empezar.

Deliberadamente nuestro análisis se extiende hasta 1988, pero sin incluir el plebiscito, sus resultados y las dinámicas que a partir de ellos se desprenden, tanto en la política como en la cultura. De he hecho, el plebiscito pone a la vez fin e inaugura una coyuntura cultural; la que se terminó con el plebiscito, es la que aquí nos interesa estudiar.

I. Introducción: modernidad y transformaciones culturales

Esquema de análisis

Este trabajo versa sobre las transformaciones de la cultura en Chile en los años 80.

Entendemos por *cultura*, en el contexto de nuestro análisis, los procesos de producción y transmisión de sentidos que construyen el mundo simbólico de los individuos y la sociedad. Esos procesos comprenden la producción organizada de bienes simbólicos ("textos" en general conocimientos, informaciones, imágenes, modas, ídolos, currícula, "bienes de salvación", interpretaciones, concepciones de mundo, etc.) y la continua producción de sentidos a nivel de las relaciones cotidianas mediante las *interacciones situadas* en que los individuos se ven envueltos con otros y consigo mismos.

Reservaremos para el primer tipo de producciones la denominación de procesos de campo, puesto que tienen su origen y se regulan conforme a las reglas de estructuración y funcionamiento del *campo cultural*; y, para el segundo tipo, la denominación de procesos propios de la *cultura cotidiana*, pues es en esa esfera donde ellos se expresan y cumplen sus efectos comunicativos.¹

A lo largo de este trabajo abordaremos los siguientes tópicos:

— La incorporación de la modernidad en la cultura chilena y sus expresiones más características, por constituir éste, a nuestro juicio, el proceso decisivo y determinante de la evolución cultural contemporánea en nuestra sociedad. El desarrollo de este tópico servirá, además, como una presentación "en acto" de las categorías conceptuales que usaremos a lo largo del desarrollo de este documento.

— La cultura chilena bajo el régimen militar-autoritario, cuyo análisis constituye una primera aproximación al "estado cultural de la nación". Analizaremos principalmente los efectos culturales específicos de la confor-

mación de ese régimen político y de sus políticas de transformación de la sociedad. Este capítulo, a diferencia del anterior, se centrará en torno de los procesos recientes de evolución de la cultura nacional, caracterizando al efecto los factores de contexto más relevantes. En esta parte se incluye, asimismo, el análisis de los efectos de la crisis económica de los comienzos del 80 y los efectos sobre la operación de la cultura.

—La caracterización actual de la cultura en Chile, mostrando sus dinámicas centrales y describiendo las características principales de la *producción de campo*, de los fenómenos de *consumo cultural* y de operación de la cultura cotidiana. En este capítulo pondremos énfasis en los aspectos cuantitativos de los fenómenos culturales bajo análisis y en la interpretación de sus dinámicas dentro del cuadro determinado por la incorporación de la modernidad y el contexto proporcionado por la existencia del régimen militar autoritario.

—Por último, en el capítulo cuarto, presentaremos algunas de las tendencias y de las encrucijadas que a nuestro juicio marcarán decisivamente la evolución futura de la cultura en Chile, tomando pie en el fenómeno básico de incorporación de la modernidad y en su *sobredeterminación* por los efectos producidos por el desarrollo de la sociedad chilena durante la década de 1980.

La incorporación de la modernidad

La cultura chilena se encuentra en pleno proceso de incorporar la *modernidad* como su vector básico de organización y desarrollo. Más adelante analizaremos el corolario de esta hipótesis; cual es, que en Chile las dinámicas y los conflictos relevantes del campo cultural y de la cultura cotidiana son aquellos específicos de la *modernidad periférica*², en el contexto de una sociedad que atraviesa, desde el año 1973, por un proceso significativo de transformaciones impuestas por un régimen militar autoritario.

El proceso de *incorporación de la modernidad* es típicamente un proceso de *larga duración* que en Chile se inicia en los años 20 de este siglo y se amplía y profundiza con posterioridad a 1964, bajo el impulso de las políticas reformistas y de cambio social impulsadas por el gobierno demócrata cristiano³, las que eliminan las condiciones de preservación y de reproducción de las instituciones culturales y de los modos de interacción identificados con la cultura tradicional.⁴

Entendemos por proceso de *incorporación de la modernidad* un "movimiento de época" que abarca los siguientes fenómenos culturales estrechamente interrelacionados entre sí:

1. El desplazamiento de la cultura centrada en las comunicaciones de corto alcance por la cultura organizada como proceso de producción y comunicación para públicos masivos de consumidores de bienes culturales.

2. Simultáneamente, la transformación que experimenta la cultura por el traslado de su centro desde la esfera privada hacia la esfera pública, pro-

ceso que a su vez facilita la emergencia de nuevas formas de participación social en la cultura.

3. La noción tradicional de una "cultura nacional" como expresiva de un "ser colectivo", de una idiosincracia nacida del territorio y de la sangre, de una identidad enraizada en la historia sigue con la modernidad la suerte de todo lo que es sólido; se esfuma en el aire...

4. La cultura cotidiana de masas —que es el fenómeno más prominente de la cultura cotidiana propia de la modernidad— es un producto directo de la nueva articulación de la cultura en la sociedad, y del predominio de los procesos culturales de campo.

5. La internacionalización de la cultura —procesos de campo y propios de la esfera cotidiana, simultáneamente— constituye un rasgo específico de la modernidad, expresado en la periferia por fenómenos de dependencia y de recepción.

6. Finalmente, las propias "condiciones de contexto" de evolución de la cultura pasan a desempeñar, con el proceso de incorporación de la modernidad, un nuevo rol.

En el transcurso de este capítulo proporcionaremos una somera descripción de cada uno de esos varios procesos, los cuales, en la práctica, se desarrollan todos ellos imbricados entre sí.

1. La emergencia de un sistema de producción cultural diferenciado para públicos masivos

La cultura tradicional se estructura en torno de comunicaciones orales (y más tarde escritas) que cubren espacios comunicativos relativamente personalizados y de proximidad social, sean simétricos (en el interior de relaciones sociales de clase y estamento) o asimétricos (en relaciones sociales de dominación). La producción cultural es un atributo de la posesión de capital social. Los circuitos más importantes de comunicación cultural son "redes de distinción", al margen de los cuales la cultura cotidiana se estructura, básicamente, como una variedad de "culturas populares" o subalternas. Entre aquellos circuitos y estas expresiones culturales subalternas no existe una interacción creativa. La producción cultural se halla débilmente estructurada y profesionalizada; en proporción significativa ella es el monopolio de "intelectuales tradicionales": sacerdotes, abogados, filósofos y pensadores, ensayistas. La cultura, en general, ocupa una posición subordinada dentro de la sociedad. Su valor estratégico se realiza en la esfera del prestigio, antes que en las relaciones económicas y de poder. (Va de suyo que hablamos de énfasis en un continuo; de posiciones relativas; de conexiones dominantes y dominadas).

Con la modernidad se produce nitidamente un paso desde esas formas de comunicación a la comunicación predominantemente institucionalizada que hace uso de medios tecnológicos crecientemente complejos, los que permiten producir bienes simbólicos para públicos masivos. La producción cultural se concentra en un *campo institucional* que adquiere progresiva-

mente "hegemonía sectorial"; esto es, autonomía, una división interna del trabajo cada vez más compleja y profesionalizada, y una capacidad creciente de determinar su propia oferta con relativa independencia, incluso, de los "consumidores" de cultura. Estos últimos, simultáneamente, se masifican y diferencian, operando como un mercado (o varios) de particular naturaleza.

El *campo cultural* deviene sector estratégico de la sociedad, dividido en varios subsectores institucionales, cada uno a cargo de procesos clave de creación y transmisión de bienes culturales. Entre éstos, los más importantes son: el *subsector educacional*, habitualmente analizado como un sistema compuesto por varios niveles (pre-escolar, básico, medio y superior), pero que comprende a la vez procesos de educación extra-sistema (en empresas, de educación no-formal, educación de adultos, etc.); el *subsector de ciencia y tecnología*, compuesto por una multiplicidad de organismos de investigación y desarrollo ubicados en el ámbito de la educación superior, de las empresas (públicas y privadas) y de los denominados "servicios generales" (aparato no-productivo del Estado); el *subsector de la industria cultural* que comprende los medios que operan para el "mercado de mensajeros" en diversos rubros (prensa, televisión, radio, libros, industria discográfica, de videos, etc.); el *subsector de las artes*, que establece relaciones variadas con los demás subsectores funcionando parcialmente a través del subsector de la industria cultural y del subsector educacional, y el *subsector de los aparatos culturales religiosos* (iglesias de varias denominaciones) que actúan autónomamente y, a la vez, a través de instancias y medios de los demás subsectores. Por consiguiente, se desarrolla una competencia intracampo no sólo entre corrientes ideológicas y concepciones culturales sino, además, entre los diversos subsectores que pugnan por el control de sus propios procesos simbólicos y por la hegemonía de éstos dentro de la esfera crecientemente compleja de la circulación y el consumo culturales.

Esta acelerada multiplicación y compleja organización de medios de producción simbólica que son típicas de la modernidad ubican al *campo cultural* en una posición también cambiada en relación a los demás campos constitutivos de la sociedad. En efecto, por primera vez el propio campo cultural comanda una vasta cantidad de recursos públicos y privados, como lo testimonia el gasto que los países realizan en educación o en mantener y desarrollar la investigación científica y tecnológica, o como lo muestran los flujos financieros con que opera la industria cultural, especialmente a través de la publicidad. En suma, la cultura adquiere, en su dimensión organizada de producción y transmisión de bienes simbólicos, un renovado valor económico, integrándose a los procesos económicos básicos de la sociedad.

De hecho, el conocimiento pasa a jugar un rol decisivo en todas las esferas de la sociedad. Aquellos que producen, transmiten, manipulan y administran conocimientos se convierten en un sector cada vez más numeroso dentro de la sociedad y de mayor peso relativo en la conformación del Estado, en la conducción de la economía y en la definición del desarrollo. En las sociedades más avanzadas, este rasgo típico de la modernidad da lugar a la caracterización de ese complejo específico como una "industria del conocimiento" y, más adelante, a la propia identificación de la sociedad

como una sociedad post-industrial, de información o tecnológica, a cargo de una "nueva clase" definida en términos de una "comunidad de conocimientos" o "clase cultural".

Asimismo, la cultura se erige frente al campo político como un campo dotado de recursos autónomos de incidencia, sea mediante la modelación de la opinión pública a través de los medios de comunicación de masas, o de la gestación y difusión de ideologías que inciden en la elaboración de la "agenda pública", o de la "escenificación" de la política y de sus órganos centrales que tan decisivamente influye en la conformación de liderazgos, en la socialización política de la población y en la legitimidad de los medios y las metas de la política.

Algo similar ocurre con el peso autónomo que el campo cultural adquiere frente a la estructuración de la sociedad, la estratificación de sus grupos y movimientos básicos y la movilidad y el destino de los individuos. Sobre todo, el subsector educacional contribuye poderosamente a marcar las trayectorias individuales, en términos de ocupación y posición social, pero además colabora en la organización de estratos sociales completos, como ocurre con sectores de las clases medias, y con los grupos profesionales y semiprofesionales en particular.

Además, el campo cultural contribuye crecientemente, a través de la operación de otros de sus subsectores, a conformar la identidad (las "culturas") de los varios grupos que constituyen la sociedad, especialmente a través de la distinción entre pautas de consumo cultural, cada vez más, son parte de esa identidad.

2. La cultura desplaza su centro desde la esfera privada hacia la esfera pública

La cultura tradicional, en todas sus expresiones principales, era una cultura de circuitos sociales cerrados y de base privada, independientemente de que aprovechara de recursos públicos o del apoyo que pudiera recibir de organismos estatales. Era una forma de vida, un atributo de los individuos. El ideal de la cultura era el ideal del hombre culto, el *gentleman*, fenómeno específico de la sociedad civil organizada en clases y estratos de clase. La cultura era concebida como una manera-de-ser en el mundo; no como una especialización. Con la modernidad, la cultura abandona metafóricamente la sala de óperas y sale a las calles, entremezclándose con la ciudad, con la economía, con el Gobierno, con los movimientos políticos y sociales, y reorganiza su infraestructura en torno de centenares de instituciones de diverso tipo que reclaman atención pública y recursos del Estado, independientemente de su estatuto legal. La cultura se "funcionaliza": crecientemente será tratada como una dimensión especializada de la sociedad, será estudiada por especialistas y producida y enjuiciada por un personal profesionalizado respecto de esas funciones. Su penetración por el mercado, esto es, su distribución ampliada y estandarizada en un espacio de intercambios relativamente anónimos, le resta "rareza" o "carisma", permi-

tiendo que sea apropiada por todos o por cualquiera, provisto que cuente con los medios y las competencias de acceso.

La cultura, de una manera desconocida hasta ahora, deviene *servicio público*; es reconceptualizada como un "derecho" al que todos deben tener (idealmente) iguales oportunidades de acceso, con independencia de la posición que cada individuo ocupa en la sociedad. A poco andar, además, esta reclamación se hace extensiva a grupos sociales completos, los cuales pugnarán por acceder a los "bienes de la cultura" sobre bases de igualdad o, incluso, bajo formas de "discriminación positiva" que compensen desventajas económicas o de posición social facilitando un acceso aventajado a porciones de la cultura.

El movimiento correlativo al anterior, a nivel de la sociedad, es el de transformar la cultura, crecientemente, en un *objeto de políticas*⁶, esto es, un *servicio* del que debe hacerse cargo el Estado y organismos privados, distribuyéndose a través de circuitos públicos, de mercado o de base comunitaria⁷, con la intervención reguladora de organismos representativos de los intereses locales, corporativos, empresariales, sindicales y estatales.

En particular, el Estado asume su rol promotor de la cultura empleando para ello los más diversos medios de acción: la legislación, resoluciones administrativas, intervenciones de corte político, censura ideológica, movilización de recursos, otorgación de subsidios, liberación de impuestos, facilitación de la importación de tecnologías de producción y recepción de bienes culturales, reservas de mercado, constitución de corporaciones públicas de promoción cultural, etc.

Al abandonar la esfera privada e integrar progresivamente a la esfera pública, la cultura moderna se transforma en un campo de infinitas acciones deliberadas de ordenamiento, encauzamiento y distribución del servicio cultural; se refuerzan sus rasgos institucionales y organizativos y se crea, en torno del campo cultural, una compleja red de agencias y actividades que intervienen en distintos momentos y etapas de la producción, transmisión y recepción de los bienes culturales, dando lugar a nuevas formas de división del trabajo de producción y control simbólicos y a nuevas formas de profesionalización de esas actividades.

3. Las culturas nacionales se esfuman

La noción tradicional de una "cultura nacional" como expresiva de un "ser colectivo", de una idiosincracia nacida del territorio y de la sangre, de una identidad enraizada en la historia sigue con la modernidad la suerte de todo lo que es sólido; se esfuma en el aire...⁸

En adelante, la "cultura de la nación" es cada vez más una heterogénea y variada interconexión de sentidos, productos y procesos condicionada por la operación del campo cultural; es una *expresión de campo* antes que una estilización de las múltiples interacciones históricamente gestadas en la sociedad, sobre todo de aquellas portadoras de la distinción de la "clase culta". Es posible, por eso mismo, que las "culturas nacionales" tiendan a

parecerse cada vez más, en parte como producto de este desplazamiento desde la historia del pueblo a la historia del campo y, en parte, como producto de la difusión/incorporación de la modernidad que es característica de las relaciones del centro y la periferia, fenómeno al cual nos referiremos un poco más adelante.

"Cultura nacional" deviene así progresivamente una metáfora para designar la suma inestable y flojamente acoplada de *producciones de campo* y de apropiaciones por públicos altamente diversificados que actúan a través de mercados frecuentemente determinados "desde el lado de la oferta"; apropiaciones que a su vez se encuentran estructuradas —a nivel microsocioal— por las específicas modalidades de participación de los individuos y las agrupaciones colectivas en la cultura cotidiana. Tendencialmente, la cultura nacional pasa a ser crecientemente un movimiento que se origina en el campo y se difunde desde allí; y deja de ser una expresión de movimientos que tienen su origen en la base de la sociedad y desde allí decantan y se estilizan en una identidad colectiva.

La cultura nacional es por este concepto, de manera cada vez más clara, el resultado débilmente integrativo de procesos diferenciados de producción simbólica organizada, en los cuales los individuos, las asociaciones civiles de diverso tipo, los grupos y las clases sociales participan de manera también diferenciada, expresando preferencias idiosincráticas y modalidades de consumo y/o interpretación y uso que conforman patrones estamentales (o asociativos) de comportamiento.

Las *transformaciones* en la cultura nacional son asimismo, progresivamente, el producto de *transformaciones de campo*, sea en la estructuración de éste, o mediante la introducción de nuevos medios tecnológicos o recursos organizacionales, o por la sucesión de los grupos predominantes en cada subsector del campo que con su presencia y actuación marcan las orientaciones sustanciales de éste (escuelas artísticas, predominio de paradigmas en el subcampo científico, etc.), o a través de los cambios que experimenta la operación del campo en relación a los demás sectores de la sociedad (economía y política especialmente), etc. El predominio en la economía general de la evolución de la cultura de esas transformaciones endógenamente generadas (en el campo), o procesadas a través de éste, expresan la "hegemonía sectorial" del campo cultural, su organización y orientación generalizada como un servicio público y la fuerte incidencia del "lado de la oferta" en la operación de los mercados culturales, sin que esto signifique que las transformaciones de la cultura nacional se agoten en esta sola dimensión "interna". Hay, adicionalmente, cambios inducidos "desde fuera" y "desde abajo" pero ahora, con la creciente incorporación de la modernidad, ellos son menos el resultado de la productividad y autotransformación de las "culturas populares" o de la incidencia de las "culturas subalternas", que la expresión de cambios operados en los patrones de consumo y de interpretación de los individuos y sus agrupaciones.

De hecho, las culturas populares o subalternas asumen un nuevo rol en la modernidad.⁹ Su "productividad" queda crecientemente reducida a la esfera del consumo, donde intervienen por la vía de generar *modelos de*

apropiación, proporcionando dispositivos de interpretación basados en experiencias específicas de vida y en tradiciones de cultura familiarmente transmitidas. Por otro lado, su propia consistencia se ve crecientemente debilitada por el avance irresistible de la escolarización "universal" y por su gradual incorporación a una nueva matriz cultural: la cultura cotidiana de masas que se desarrolla bajo el imperio del "mercado de mensajes" y de la industria cultural. Las culturas populares retienen aquí y allá —en sociedades con fuerte tradición indígena, diferencias étnicas y lingüísticas, presencia masiva de sectores excluidos, etc.— una función adicional, consistente en su capacidad de ofrecer un *repertorio de resistencias* frente a los procesos de incorporación de la modernidad, capacidad que por un momento todavía puede generar la ilusión o el mito de la sobrevivencia de las culturas autóctonas o de su productividad de "nuevas formas de modernidad". Se trata, sin embargo, solamente de un efecto de espejismo, alimentado por la pasión de intelectuales anti-modernistas: de hecho, esas culturas —resistentes a la modernidad— no tienen ya capacidad de producir y reproducir una nueva matriz de cultura de masas y su propia proyección sólo puede pensarse bajo una de dos formas. O como el contenido de una política nacional-popular, de recuperación de los valores del pueblo, que para sostenerse necesita volcarse sobre los movimientos sociales y su supuesta potencialidad reformadora de la cultura. O bien, como una completa resignificación de la cultura moderna por la extensión de la religiosidad popular tradicional. En este último caso se tratará de "evangelizar" de nuevo la cultura y de bautizar la modernidad. De hecho, las únicas defensas intelectuales coherentes de las "culturas populares" que se encuentran hoy en el mercado académico latinoamericano tienen su origen o bien en las teorías revolucionarias que predicán un regreso al origen cultural "incontaminado" del pueblo (cuya versión más extrema se encuentra en Sendero Luminoso) o en aquellas que pregonan la revitalización del núcleo religioso (cristiano-sincrético y popular) de la cultura latinoamericana como medio para superar el carácter "artificial" de la modernidad.

4. El desarrollo de la cultura cotidiana de masas

La cultura cotidiana de masas —que es el fenómeno más prominente de la cultura cotidiana propia de la modernidad— es un producto directo de la nueva estructuración de la cultura en la sociedad, y del predominio de los procesos culturales de campo.

La cultura cotidiana de masas es la expresión más inclusiva que ha alcanzado hasta el presente el desarrollo de un "mercado de mensajes", contracara de la conformación, dentro del campo, de un subsector denominado de la *industria cultural*.

Radicalmente, la industria cultural y el "mercado de mensajes" definen un nuevo principio de organización de la vida cotidiana y de la cultura cotidiana, que sustituye las formas tradicionales de organización de la cotidianidad en torno de la religión, primero, y luego alrededor del trabajo y/o de

la política. La "cultura de masas" es la forma más avanzada de interconexión entre el campo cultural y la cultura cotidiana, y por eso es en torno de ella que se presentan las mayores contradicciones de la modernidad: alienación del individuo, tendencias a la homogeneización de los patrones de consumo cultural, diferenciación de la cultura según las orientaciones de la oferta, rápida obsolescencia de los bienes culturales, sucesión de modas, producción organizada de ídolos y de señales de identificación, predominio de las "ideologías livianas" en la comunicación masiva, transformación de actividades tradicionalmente solemnes en espectáculos de consumo masivo, trivialización de lo serio, banalización de lo sagrado, despersonalización de las formas comunicacionales, pérdida de valores tradicionalmente tenidos y sentidos como centrales para la civilización occidental, etc.

De hecho, se trata de "contradicciones en proceso" y no, necesariamente, de expresiones definitivas de la cultura moderna. Se trata de pugnas específicas —esto es, contradicciones— que se encuentran en pleno desarrollo, cuya resolución no es posible prever en este momento; y no de tendencias inscriptas en la estructura de la modernidad que llevaría inexorablemente a resultados predeterminados: completa secularización de la sociedad, conformación de una "cultura afirmativa" (Marcuse) y del hombre y la mujer unidimensionales; predominio de los medios sobre los mensajes; globalización del mundo (la *global village* de Mc Luhan); internacionalización total; irreversible alienación de las masas; pérdida de toda capacidad de reflexión crítica o predominio irresistible de las formas irracionales del conformismo, etc.

La historia no contiene promesas de redención o condenación. Sus tendencias "profundas" son interacciones complejas que —en el universo de la cultura— producen resultados a veces previsibles pero también otros imprevistos, condicionando continuamente nuevas posibilidades de cambio o la expresión renovada de fenómenos aparentemente "tradicionales" bajo formas nuevas. Así, las ideologías no mueren sino que cambian de expresión y organización y se combinan de maneras inesperadas; la religión no se desvanece en el medio supuestamente inhóspito de la razón sino que reaparece bajo otras modalidades y ocupa nuevas dimensiones de la vida individual y colectiva; la uniformación se ve cruzada por los fenómenos de diferenciación; la internacionalización no contrarresta los regionalismos, etc.

Sobre todo, la cultura de masas entendida como nueva forma de organización de la cultura cotidiana (forma que incorpora la modernidad) no marcha irremisiblemente hacia la uniformación, regimentación y homogeneización de las preferencias individuales; por el contrario, generaliza las ofertas dentro del "mercado de mensajes" dando lugar con ello a una multiplicación de las modalidades de apropiación individual de los bienes simbólicos; homogeneiza, por tanto, en un plano provocando diferenciación en otros, sobre todo en el plano de la recepción y el "reconocimiento" individual de los mensajes transmitidos. Más que a una regimentación de los sentidos da lugar a una implosión de sentidos, amenazando a veces, por saturación, la capacidad selectiva y de aprendizaje de los individuos. La aparición de comportamientos estandarizados de consumo, al igual que la introducción de

regímenes estandarizados de educación, forman parte, ciertamente, de la estructura de la modernidad. Son modalidades de la operación cultural en "gran escala", producto de la masificación que se observa tanto en el plano de la producción como en el del consumo de los bienes culturales. Sin embargo, en medio de ellos, es posible observar la aparición de formas siempre renovadas de diferenciación y diversificación, tanto desde el lado de la producción como del lado de la apropiación. Al final, incorregiblemente, toda experiencia de apropiación de un bien simbólico —por masiva que sea su puesta en circulación dentro del mercado— constituye un acto profundamente personal. Más bien, es el encuadramiento ideológico de la producción y de la recepción el riesgo mayor, puesto que puede transformar, aun a esa experiencia individual de apropiación, en una experiencia colectiva, temerosa de expresar su diferencia y de hacerse cargo de las consecuencias cognitivas y afectivas de ella.

El predominio de la oferta y el peso institucional del campo cultural crearon en un comienzo el espejismo de una completa determinación de la cultura por el lado de la oferta y del polo de la producción simbólica. Los agentes del campo, y sus poderosos medios técnicos de operación, pasaron a ser conceptualizados —por un momento— como verdaderos *deus ex machina*, presencia incontrarrestable y manipulativa de públicos e individuos completamente sometidos y maleables. Con posterioridad, sin embargo, se ha ido abriendo paso una percepción más equilibrada que mira simultáneamente al polo de producción y sus factores de fuerza tecnológica, económica y política y al polo de recepción, dotado de su propia autonomía y competencias interpretativas, en el continuo proceso de construcción interactiva de la realidad social y personal. Incluso en el ámbito del estudio de los fenómenos culturales esta constante pugna entre visiones integradas de la producción y visiones diferenciadas de la recepción o apropiación, la que recorre como una línea divisoria entre los autores y las escuelas, marcando todavía hasta ahora un predominio, en retirada, de los primeros.

5. Los fenómenos de creciente internacionalización

La internacionalización de la cultura —de los procesos de campo y de aquellos propios de la esfera cotidiana— constituye un rasgo específico de la modernidad, expresado en la periferia por fenómenos de dependencia y de *recepción* de modelos, prácticas y bienes culturales.

Desde sus orígenes, como ha mostrado Braudel, el capitalismo ha operado en torno de un "centro" que es a la vez el punto más intenso en la creación y difusión de productos simbólicos. La expansión e internacionalización de los mercados —la "gran transformación" del mundo económico capitalista— han jugado para la cultura un rol similar a aquel desempeñado para los flujos del capital financiero y el comercio a larga distancia de mercancías, operando específicos fenómenos de difusión desde el centro y de recepción y apropiación receptiva en la periferia; fenómenos decisivos tanto para la estructuración y operación del campo cultural, como para las modalida-

des de funcionamiento de los "mercados de mensajes", las formas del consumo simbólico y la transformación de la cultura cotidiana en moderna cultura cotidiana de masas.

Los fenómenos de internacionalización de la cultura así analizados tienen lugar en todos los subsectores del campo, desde la organización de los aparatos educacionales y la definición de los programas educativos hasta la transferencia de tecnologías y de paradigmas científicos; desde la operación de los subsectores más dinámicos de la industria cultural hasta la emergencia de vanguardias artísticas en torno de determinadas concepciones del arte y de su práctica; desde la organización —típicamente internacional— de las iglesias hasta sus nuevas formas de acoplamiento con la industria cultural y el "mercado de mensajes" ("tv-evangelism", por ejemplo).

La incorporación de la modernidad en la cultura periférica puede entenderse, por lo mismo, en una de sus dimensiones centrales, como la evolución de esos específicos procesos de difusión/recepción, a condición de que ellos sean analizados empíricamente, atendiendo a los procesos de *recepción* como procesos de apropiación social e institucional y no, meramente, como la expansión unilineal de ideas, modelos y productos simbólicos desde un centro hacia una periferia constante e invariablemente subordinada.

La historia de esos procesos de recepción —en cualquier plano de la cultura periférica— es por lo mismo una parte constitutiva de los procesos de incorporación de la modernidad. Pero la recepción misma no es un acto que pueda comprenderse siguiendo exclusivamente la trayectoria de la difusión sino que debe estudiarse como proceso específico de apropiación dentro del campo cultural y de la cultura cotidiana receptores. En otras palabras, la difusión no se corresponde biunívocamente con la recepción; se trata de procesos complejamente interrelacionados pero que guardan autonomía el uno del otro y que necesitan por lo mismo entenderse en sus respectivos contextos de ocurrencia.

6. Los nuevos factores condicionantes de la cultura

Finalmente, las propias "condiciones de contexto" —condiciones exteriores al campo pero co-constitutivas de éste y profundamente imbricadas en la esfera de la cultura cotidiana— del proceso de evolución de la cultura entran a desempeñar, a partir del proceso de incorporación de la modernidad, un nuevo rol.

De entrada, la "hegemonía sectorial" del campo cultural le asegura a éste una relativa independencia de esas condiciones de contexto, sin que ello signifique que éstas dejan de desempeñar un rol decisivo. Como nunca antes, la cultura es a la vez resistente a las "turbaciones" y cambios que se producen en otros campos de la sociedad, a la vez que se encuentra involucrada de manera sutil pero decisiva en el movimiento de esos cambios y perturbaciones.

La metáfora de la cultura como mera expresión epifenoménica o superestructural de los procesos de base de la sociedad (económicos o políticos) es típicamente una concepción pre-moderna de la cultura, una visión del siglo XIX. La visión de la cultura como una entidad enteramente separada de su contexto e inmune a las transformaciones de éste constituye, en cambio, una ilusión de la modernidad y una expresión de la pretensión crecientemente expansiva de la "nueva clase" de los intelectuales que desearían ser percibidos como a cargo de una esfera íntegramente autónoma y hegemónica en el desarrollo de la sociedad (postindustrial).

La incorporación de la modernidad en la cultura plantea, por el contrario, sobre nuevos términos las relaciones entre campo/mercados culturales/cultura cotidiana y entre esos macro-elementos constitutivos del universo cultural y los demás campos y agencias que constituyen la sociedad: la economía, la política y el entramado de los procesos de difusión/recepción que son inherentes a la periferia, según sus formas (nacionales) específicas de dependencia, subordinación y asociación.

Aceptado que sea el principio de "hegemonía sectorial" del campo cultural se sigue de allí que cualquier fenómeno intracampo debe ser analizado como un fenómeno de "doble cara"; una que mira hacia el interior de la instancia sectorial del campo de que se trate (y de sus conexiones con otras instancias del campo) y otra que mira hacia el exterior del campo, identificando los "contextos inmediatos" de interacción y sus modos de operación.¹⁰

En el caso de la cultura cotidiana, en cambio, una perspectiva de análisis consistente con la anterior debe introducir como primera prioridad el estudio de los componentes específicamente simbólicos de esa cultura para analizar, desde allí, sus conexiones con los fenómenos de campo (que constituyen su contexto más inmediato) y con los fenómenos "externos" más directamente determinantes de la cultura cotidiana, que variarán de una situación histórica a otra pero que, en general, tendrán que ver con las condiciones económicas y sociales de operación de los mercados (por tanto con las determinaciones de clase, edad, educación, regionales y de género que condicionan el acceso a los mercados, y con los grados y formas de intervención de la política en las interacciones situadas de los individuos, así como con la estructura que éstas adoptan en el interjuego entre los ámbitos públicos y privados de la sociedad.

Por efecto de la modernidad, entonces, la propia noción de cultura —y el entramado de relaciones que ella establece con la sociedad— se transforman y obligan a producir nuevos esquemas para su análisis e interpretación.

En el siguiente capítulo nos proponemos justamente recapitular y analizar cómo la instauración de un régimen militar-autoritario, que ha impulsado una política de transformación de la sociedad chilena inspirada en un proyecto de "modernización de mercado" de base capitalista, ha afectado la cultura en Chile; esto es, las condiciones de estructuración y operación del campo cultural, de los mercados para los bienes simbólicos y de la cultura cotidiana, así como las interrelaciones entre esos ámbitos de la cultura y de ellos con los procesos relevantes de recepción periférica de algunos ingredientes de la modernidad.

II. La cultura bajo el régimen autoritario

Si hay un rasgo que pudiera decirse característico del proceso de incorporación de la modernidad en el caso chileno, sin duda es la intensa pugna política en torno de la dirección y orientación de ese proceso, especialmente a partir de 1964.

De hecho, élites político-técnicas representativas de tres bloques sociales, cada una con expresión de gobierno, han ejercido sucesivamente el control de ese proceso, de maneras diferenciadas y con una incidencia también distinta en cada caso.

En 1964, con el acceso de la Democracia Cristiana al Gobierno, un bloque social estructurado en torno de la alianza de grupos medios y sectores populares, impulsa un intenso programa de reformas económicas y sociales, y busca democratizar sustancialmente la organización nacional de la cultura. Los "efectos de campo" de esa política fueron el reforzamiento del papel del sistema educacional en la sociedad, la modernización de las universidades tradicionales, un mayor desarrollo de la industria cultural y en particular de la televisión con un sentido de servicio público, un rol más activo de la Iglesia Católica en el plan secular (reforzado por las propias transformaciones internas de ésta a partir del Concilio Vaticano II) y una rápida expansión de los mercados de demanda cultural. La cultura cotidiana se transforma igualmente bajo la presión de esos fenómenos y de la modernización de la economía y la política, especialmente en el sector rural, en virtud de la reforma agraria y la masiva sindicalización campesina, y en el sector poblacional-urbano con la aparición de un nuevo sentido de comunidad y solidaridad apoyado por la acción del Estado.

En 1970, frente a una división del electorado en tres grandes sectores político-electorales antagónicos, se impone estrechamente la opción de izquierda representada por la Unidad Popular, que expresa al bloque popular articulado alrededor de los dos principales partidos "revolucionarios", el Partido Socialista y el Partido Comunista. La breve experiencia del Gobierno de izquierda (1970-73) no llega a producir "efectos de campo" de alguna intensidad, pero inaugura una nueva fase de conflictos en torno del control y de la orientación de las principales instituciones culturales del país. En cambio, se intensifica la expansión "distributiva" de los bienes culturales y la cultura cotidiana experimenta, en grados hasta entonces desconocidos, una fuerte "politización", llevando a nuevos grupos sociales, etarios y a sectores de mujeres —por el lado de la oposición o del apoyo al "proceso revolucionario" a ejercer comportamientos políticos.

A lo largo de casi una década (1964-73), entonces, el campo cultural refuerza su "hegemonía sectorial" en la misma medida en que renueva sus medios técnicos de acción, en que sus instituciones se fortalecen y en que el mercado de consumidores se amplía y diversifica. La noción de la cultura como servicio público, objeto de políticas y de la intervención deliberada del Estado, se consolida y refuerza la orientación "distributivista" de las políticas culturales, la que es subrayada especialmente en el terreno de la educación escolar, de la enseñanza universitaria y de algunas ramas de la industria

cultural, como es el caso de la industria del libro. La propia imagen tradicional de una "cultura de la nación" —como una "voluntad de ser" o una "unidad colectiva"— desaparece bajo la presión combinada de la polarización ideológico-política, que se acentúa bajo el Gobierno de la Unidad Popular, y de la ampliación y diversificación del mercado de consumo simbólico. La cultura cotidiana de base asimétrica y socialmente fragmentada termina por ser desplazada por la emergencia de la cultura cotidiana de masas, producto de la expansión de la industria cultural y de la ampliación del sistema político. Por un momento, además, se piensa que es posible que dicha cultura cotidiana masificada sea el vehículo para la producción de "conformismos activos", expresados a través de las organizaciones sociales de base, los sindicatos y los partidos. La internacionalización del campo cultural, que experimenta una aceleración durante el Gobierno de la Democracia Cristiana, es luego recibida más ambiguamente durante el período de la Unidad Popular, subrayándose en este caso la crítica de los lazos de la dependencia cultural y la necesidad (más retórica que prácticamente lograda) de una mayor autonomía de la cultura nacional.

Con el establecimiento del régimen militar autoritario en 1973, nacido de la intervención de las Fuerzas Armadas que lleva al derrocamiento del Gobierno de la Unidad Popular, se inaugura una tercera fase en la sucesión de los bloques sociales y de sus élites técnico-políticas que intentan encauzar el proceso de incorporación de la modernidad. Se trata, sin embargo, de una fase por completo diferente de las anteriores, al menos en lo que respecta a las *condiciones de contexto* en que la cultura se desarrolla. El Gobierno Militar no nace, en efecto, como una sucesión normal de los anteriores, en la misma línea de continuidad político-constitucional. Nace de un golpe de fuerza e introduce un cambio revolucionario en el régimen político, llamado en adelante a servir de instrumento para provocar la modernización capitalista de la sociedad chilena. Un bloque social complejamente articulado —que representa en su núcleo a la "alianza defensiva" de las Fuerzas Armadas con los grupos, organizaciones y sectores que habían llegado a sentirse amenazados por las políticas y la ideología movilizadas por la Unidad Popular—; y que se sitúa geopolíticamente como una barrera de contención frente a la "amenaza comunista internacional" —ganándose el activo apoyo, antes y después del golpe militar, de importantes sectores del *establishment del poder* de los Estados Unidos— despliega un programa de cambios de largo aliento que apunta, en definitiva, al objetivo de una "refundación (capitalista) de la nación". La literatura sobre este tópico, en particular sobre la *ideología del régimen militar autoritario*, con su variable combinación de elementos provenientes de la doctrina de seguridad nacional, de la ideología neo-liberal de mercado y de la retórica tradicional católica, es suficientemente abundante y conocida¹¹, por lo que nos eximimos aquí de profundizar en el tema. Nos concentraremos, en cambio, en el análisis de los efectos específicos que la instauración, consolidación y prolongación del régimen militar autoritario han producido en la cultura nacional. Para hacerlo, conviene distinguir dos fases en la propia evolución del régimen militar autoritario, en cuanto tiene relación con sus efectos sobre el desarrollo de la

cultura. Una primera fase de implantación del régimen, que se prolonga hasta 1980, y una segunda fase posterior, de consolidación e institucionalización del régimen en torno de un proyecto específico de modernización de la sociedad.

A. La fase de implantación del régimen: el disciplinamiento de la cultura

Durante esta fase, los principales fenómenos en el ámbito de la cultura son los siguientes:

1. El control sobre el campo por medios político-administrativos.
2. La administración del espacio cultural.
3. El encuadramiento ideológico defensivo.
4. Pérdida del carácter de servicio público de la cultura.
5. Desarrollo de las expresiones culturales contestatarias.
6. Cambios en la cultura cotidiana.

Cada uno de esos fenómenos, como veremos enseguida, contribuye a determinar la evolución cultural durante este período y, en su efecto combinado, ellos forman la base del proceso que lleva a la emergencia de una *cultura autoritaria* en Chile. Al emplear este término lo hacemos con expresiones reservas conceptuales: en efecto, no pretendemos caracterizar un "ser de la cultura" ni nada que se le parezca. No pensamos, siquiera, que la cultura moderna tenga un "ser", una "esencia" fija que pudiera captarse independientemente de los productos y de los procesos que la constituyen, en contextos condicionantes que son, invariablemente, cambiantes. Usamos la noción de "cultura autoritaria", por tanto, para referirnos a una *coyuntura* del desarrollo de la cultura en Chile, coyuntura identificada con unos pocos procesos y fenómenos de base.

1. El control sobre el campo por medios político-administrativos

Desde el propio momento de hacerse cargo del Gobierno, las Fuerzas Armadas y los grupos civiles de conducción que las acompañaban desplegaron una intensa *estrategia de control* sobre el campo cultural, empleando una diversidad de medios para alcanzar ese fin.

Los establecimientos del sistema escolar y las universidades fueron intervenidas, designándose autoridades directamente delegadas del Gobierno con atribuciones discrecionales para remover personal, suprimir y crear nuevas unidades y modificar los programas de estudio. Simultáneamente, las organizaciones representativas del magisterio, de los académicos y de los estudiantes fueron suprimidas y prohibidas, hasta resurgir a la superficie hacia 1980.

La acción "depuradora" e intervencionista ejercida dentro del sistema de educación superior afectaría igualmente a una parte significativa del sistema de investigación científica en el país, precisamente a aquel que tiene

su base en las universidades. Grupos de investigación ya consolidados en diversas áreas disciplinarias fueron dispersados, una parte importante de la comunidad de las ciencias sociales debió abandonar las universidades, los centros y programas interdisciplinarios de estudios sobre la realidad nacional tendieron a desaparecer o fueron debilitados y, en general, la producción científica nacional decayó por unos años. Las publicaciones científicas "mainstream" —aquellas registradas internacionalmente— disminuyeron, y la producción de la "ciencia local" se resintió, especialmente en algunas áreas del conocimiento.

Los medios de comunicación principales —prensa escrita, radio y televisión— fueron puestos bajo un régimen especial de controles, prohibiéndose la actuación de aquellos que eran propiedad de personas o sociedades identificadas con el Gobierno de la Unidad Popular, a la vez que se cerraba a éstos el acceso a los medios que seguían operando bajo tutela gubernamental. Estos últimos ejercerían, por más de una década, un cuasi-monopolio sobre la producción en este sector, aceptando a cambio de ese privilegio un estricto código de "auto-censura" para complacer a la autoridad.

El resto de los subsectores de la industria cultural experimentarían un control semejante, ejercido por diversos medios. Así, determinados productos de la industria discográfica debieron en adelante circular por canales privados y semiclandestinos; las películas circulan sometidas a un restringido dispositivo de censura previa, cuyo funcionamiento no es ajeno a consideraciones específicamente políticas; la publicación de revistas y libros queda sujeta a un sistema de autorizaciones administrativas previas, y la importación de impresos pasa a ser regulada de manera semejante.

El subcampo del arte, en sus varios rubros más o menos profesionalizados, queda sujeto a un estatuto de controles, prohibiciones y exclusiones que se expresa indistintamente en la selección y representación de las obras teatrales, en la exposición de obras plásticas, en la aparición pública de los grupos musicales y músicos considerados "contestatarios", y en la impresión y circulación de la literatura.

Sólo las iglesias —consideradas aquí en cuanto aparatos culturales, entre ellas, particularmente, la Iglesia Católica— logran mantener un ámbito relativamente amplio de acción autónoma, lo que transformará a ese ámbito, progresivamente, en el espacio preferido de la reagrupación y expresión de las actividades culturales suprimidas, perseguidas, censuradas, excluidas o prohibidas. Bajo el lema de dar "voz a los sin voz", la Iglesia Católica pondrá a disposición o permitirá el uso de sus propios dispositivos culturales por los sectores "contestatarios", abriendo con ello una brecha en medio del monolítico control impuesto por el Gobierno al campo cultural.

Desde el punto de vista de los agentes profesionalizados del campo cultural, la historia es más dramática de lo que haría pensar la descripción puramente institucional y administrativo-política de los efectos de esa amplia estrategia de control del campo cultural puesta en práctica por el nuevo Gobierno. En efecto, un número apreciable de artistas, periodistas, maestros, académicos e intelectuales fueron muertos, encarcelados, perseguidos y torturados. Otros fueron expulsados del país o debieron abando-

narlo. Decenas de escritores, científicos y artistas chilenos se establecieron en el exilio, creando un fenómeno hasta entonces desconocido en el país de "diáspora cultural". Denuncias de variada índole, muchas de ellas recogidas en documentos de organismos internacionales —entre ellos la UNESCO—, guardan el testimonio de esa época.

2. La administración del espacio cultural

Por un momento, especialmente entre los años 1973 y 1978, pareció que la cultura chilena quedaría reducida a un fenómeno relativamente banal de "cultura administrada" por el poder. Incluso la prensa oficialista se hizo cargo de esta situación interrogándose sobre los orígenes y los posibles efectos de ese aparente "apagón cultural" de la nación.

En la práctica, ocurría que el Gobierno estaba más interesado en "congelar" la actividad cultural, suprimiendo sus efectos potencialmente movilizadores de la crítica y conflictivos dentro del campo cultural, que de proporcionar una efectiva orientación y dirección al proceso de incorporación de la modernidad que continuaba operando como el principal vector de organización y desarrollo de la cultura nacional. Efectivamente, el nuevo bloque social en el poder no había llegado aún a articular suficientemente su propio proyecto ideológico, lo que le impedía intervenir "creativamente" en el campo cultural. Su acción era por lo mismo, principalmente, reactiva, defensiva y de mera administración de los recursos, medios e instituciones que habían quedado bajo su control. Los tímidos intentos de reforma cultural diseñados en esa primera época del régimen militar —por ejemplo, un plan de regionalización de la enseñanza superior, el paso desde la educación universitaria gratuita a la educación pagada, la apertura de canales de televisión comerciales en favor del sector empresarial, etc.— fracasan a poco de ser enunciados, bloqueados por las querellas fraccionales en el interior del propio aparato estatal.¹²

En estas circunstancias predominaría durante esta época inicial el mero efecto de control administrativo-político ejercido sobre los actores y las actividades del campo cultural. El principal efecto de esta situación se traduciría en una suerte de encuadramiento ideológico defensivo dentro de la cultura nacional.

3. El encuadramiento ideológico defensivo

La monopolización de los principales medios y recursos organizacionales de la cultura en favor de agentes cuya única característica en común era su lealtad al régimen militar autoritario, o por lo menos su disposición a someterse a éste mediante operaciones más o menos sutiles de auto-censura, produciría ese efecto de encuadramiento ideológico defensivo que, en la práctica, significaba poner la "hegemonía sectorial" del campo al servicio de la estrategia política global de contención del Gobierno Militar. La auto-

nomía del campo, estructuralmente presente por la propia modernización que había experimentado en las últimas décadas, pero especialmente a partir de 1964, desaparece en favor de una *subordinación funcional*, destinada a mantener la "protección" del Gobierno y a aprovecharla en favor de los nuevos incumbentes de las posiciones institucionales del campo. En efecto, lo que aparece como supresión del pluralismo a nivel de las expresiones ideológicas corresponde a un movimiento estructural de supresión de la competencia en el interior del campo cultural, entre instituciones y dentro de ellas. La monopolización de medios y recursos organizacionales de la cultura en beneficio de un grupo tecnocrático-intelectual determinado, como ocurrió con el advenimiento del Gobierno Militar, reduce la competencia a meras *querellas intra-bloque*, amortiguándolas incluso entonces por la necesidad en que se hallan los grupos o fracciones querellantes de asegurar la continua protección del poder para mantener esas condiciones (políticas y de apoyo económico) de monopolización.

Dentro de esas circunstancias de *subordinación funcional*, el campo cultural como un todo pierde peso relativamente frente a los demás sectores de la sociedad; en este caso específico, frente al campo de la política y, particularmente, frente al aparato administrativo del Gobierno. Sus producciones adoptan el estilo de "producciones administrativas de sentido": información de prensa rígidamente recortada conforme a los intereses situacionales del poder; reducción del debate público; banalización de la comunicación televisiva; supresión "administrativa" de escuelas o corrientes de pensamiento; reforzamiento de las líneas de autoridad formal dentro de las instituciones culturales (escuelas, universidades); desvalorización de la innovación artística; marginación o exclusión de las "ofertas contestatarias", y así por delante.

En la nebulosa creada por esta situación, es posible que intelectuales de segunda categoría brillen con su luz opaca y que los temas más disímiles, tratados con enfoques triviales, pasen a ocupar por un instante el centro de la escena cultural. La prensa escrita ve deteriorarse irremediablemente sus estándares éticos e intelectuales; la vida académica oficial se refugia en su propia intrascendencia; unas pocas voces —a veces una sola— comandan la formación del juicio crítico en el mercado de libros o de obras artísticas.

4. Pérdida del carácter de servicio público de la cultura

Los anteriores cambios significaron asimismo que la noción y la práctica de la cultura como servicio público fueran erosionándose durante este período inicial del Gobierno Militar. Lo que más adelante se transformaría en el rasgo central del proyecto cultural impulsado desde el Gobierno —esto es, la reorientación del campo en función casi exclusiva del mercado— se inicia tempranamente como un ataque al papel promotor, intervencionista y distributivo del Estado en el plano de la cultura. Claro está, la orientación general del Gobierno Militar era la de un explícito anti-estatalismo¹³, lo cual

se traducía, en el plano de la provisión de bienes culturales, en la noción de que al Estado le correspondía desempeñar en este ámbito, como en otros, un rol meramente *subsidiario*. El acceso a la cultura, a su vez, empezaba a ser redefinido como un asunto puramente individual, que debía estar sujeto a las preferencias individuales y a la capacidad de hacerlas valer en los respectivos mercados.

Sobre todo, el Estado se retrae de aquellos sectores, donde más fácilmente podía abandonar los compromisos previamente contraídos; en la promoción de las artes, la producción masiva de libros, la continuada extensión de la enseñanza superior, el apoyo (incipientemente prestado) a la industria cinematográfica nacional, etc. Junto a las presiones ideológicas para proceder en tal sentido, el Gobierno encuentra una poderosa justificación adicional, cual fue la aplicación de una política de control de la inflación que descansaba, principalmente, en la reducción del gasto público, especialmente en los sectores sociales y de promoción.

En breve, la cultura experimenta respecto del Estado un doble desplazamiento durante esta época: por un lado, se erosiona y reduce la noción de la cultura como servicio público y, por el otro, el campo cultural es sometido a un rígido control político-administrativo. Como efecto combinado de ambos movimientos, la cultura pierde significación en cuanto espacio organizado institucionalmente de procesos de producción y comunicación simbólica, a la vez que se reduce la significativa participación en los procesos culturales que había sido una característica resaltante del período inmediatamente anterior al establecimiento del Gobierno Militar. Hay un generalizado retraimiento hacia la esfera privada de la vida; una pérdida, por tanto, del carácter intensamente comunicativo y plural del espacio público que ahora pasa a ser dominado casi exclusivamente por la circulación de sentidos administrativamente producidos.¹⁴ La polarización ideológica en que había culminado la experiencia de la Unidad Popular, politizando casi todos los ámbitos de la sociedad, no desaparece en cambio, sino que es desplazada y, por así decir, barrida fuera de la superficie más visible de la cotidianidad para permanecer latentemente debajo de ésta. Pasa a formar parte, sordamente, de un mundo de sombras donde se prolonga bajo la forma de un rechazo global a la "cultura oficial" frente a la cual se erige una "cultura contestataria" o "disidente"; una "resistencia cultural".

5. Desarrollo de las expresiones culturales contestatarias

Desde el mismo instante en que se produce el golpe militar, y lentamente en los meses y años siguientes, irá estructurándose en la sociedad chilena una red de personas, grupos, organismos, instituciones y actividades que se identifica a sí misma como expresión de una "cultura contestataria" o "disidente".

Empleamos el término *red* deliberadamente, para señalar el carácter informal, escasamente institucionalizado, bajamente coordinado y sujeto a dinámicas de crecimiento desiguales de ese universo que en su agregado

forma el soporte de esta cultura contestataria, la que comparte a la vez expresiones reducidas de campo y, más significativamente, expresiones propias de la cultura cotidiana.

De entrada, cabe atender a las pervivencias "desviantes" dentro del campo cultural sujeto al control político-administrativo del Gobierno Militar. Ningún control, por poderosos que sean los medios que lo hacen posible, suprime íntegramente las expresiones que busca someter y las reacciones que su propio despliegue provoca. Siempre presenta fisuras, deja al margen espacios, genera contradicciones y provoca reacciones que pueden ser utilizadas para el desarrollo de acciones disidentes o meramente independientes. Así, por ejemplo, resulta difícil —casi imposible, de verdad— controlar completamente, en el caso del sistema escolar, su nivel operativo de base, esto es, la sala de clases y la acción pedagógica del maestro. En las propias universidades, cinco años después de sometérselas a una rigurosa intervención y a un estricto régimen de vigilancia, continuaban produciéndose "depuraciones" político-administrativas, señal de que el control establecido no había logrado vencer todas las resistencias. En cambio, otros medios se prestan mejor a un control monolítico, como ocurre en el caso de la televisión y de la prensa, las cuales quedarán por eso mismo íntegramente subsumidas en los marcos del disciplinamiento impuesto por el Gobierno y reforzado suplementariamente por la autocensura.

En cualquier caso, "desde dentro" de la propia institucionalidad controlada del campo cultural, aquí y allá, débilmente al comienzo, luego con mayor intensidad, irán abriéndose pequeñas brechas de expresión disidente o se producirán conflictos en torno de las políticas de control administrativo-político impuestas por el Gobierno Militar. La publicación de un libro altamente crítico del modelo económico impulsado por el Gobierno y de sus efectos, basado en una investigación realizada dentro de una de las universidades, o la presentación, en algún recinto oficial, de una obra de teatro de contenido cuestionador o disidente, o la realización de una exposición de pintura al alero de alguna institución oficial pero que escapaba a los márgenes del control oficial irían formando, muy lentamente, la imagen de que el campo cultural era permeable a las influencias de los disidentes; que aquél presentaba minúsculos espacios de "resistencia" y hacía posible, ocasionalmente, expresiones desviantes.

Con todo, la más significativa de las contradicciones que presentaba el campo cultural en esta primera etapa del Gobierno Militar era el grado de autonomía que mantenían los aparatos culturales de la Iglesia Católica —distribuidos a lo largo del país— y la posición crecientemente crítica que su Jerarquía y el clero iban adoptando frente a las políticas del Gobierno Militar, en particular, frente a las reiteradas violaciones a los derechos humanos y a las políticas económicas de corte neo-liberal.¹⁵ Esta situación, como se señaló anteriormente, permitió crear, desde temprano, un polo relativamente institucionalizado de expresión disidente, especialmente en torno de la defensa de los derechos humanos, la protección de los grupos más desfavorecidos por las políticas del Gobierno Militar, la promoción de iniciativas de solidaridad en los sectores pobres y la generación de "espa-

cios alternativos" para la expresión de actividades culturales contestatarias. Así, los primeros libros de claro contenido disidente son publicados con el *imprimatur* de la Iglesia; las únicas radioemisoras no sujetas íntegramente al control del Gobierno pertenecen a ella; una parte significativa de las iniciativas intelectuales y de la reorganización de la vida académica disidentes se realiza al amparo de la Iglesia, y es en sus locales donde tienen lugar muchas de las actividades del arte contestatario, de los grupos culturales juveniles, de los talleres independientes de lectura y discusión, de las agrupaciones de mujeres y feministas, de la música de protesta, etc.

La gran ventaja de la Iglesia Católica en este orden de actividades es que ella constituye, por sí sola, uno de los más poderosos medios de integración y relacionamiento de los procesos culturales de campo y de aquellos propios de la cultura cotidiana. En términos gramscianos, podría decirse que la Iglesia es un "intelectual colectivo" que liga orgánicamente las culturas especializadas de los grupos dirigentes con las culturas subalternas propias de los grupos dominados dentro de la sociedad civil. Ella moviliza sus propios medios de producción y accede fácilmente a públicos organizados fuera de los circuitos del mercado, bajo la forma de asociaciones comunitarias.

Hacia dónde se incline, por tanto, la balanza ideológica de la Iglesia frente a un drástico cambio de régimen político, constituye siempre uno de los hechos decisivos para entender el desarrollo cultural en la nueva fase, como lo ejemplifica bien el caso del autoritarismo chileno, o del brasileño, por contraste, por ejemplo, con las situaciones que se produjeron en España o Argentina.

La red de expresiones culturales disidentes no se agotaría, sin embargo, en el marco de las fisuras del campo cultural controlado por el Gobierno Militar y en el marco de oportunidades ofrecidas por la Iglesia Católica. En el seno mismo de la sociedad civil surgirían centenares de expresiones culturales contestatarias, de duración breve o más prolongada; de tamaño menor o mayor; de grados bajos o altos de institucionalización; con vinculaciones más o menos orgánicas respecto de la Iglesia o de los partidos políticos proscritos; con énfasis diversos en cuanto al predominio de contenidos netamente culturales o más instrumentalmente políticos; apoyadas en recursos puramente solidarios o incorporadas a flujos financieros provenientes de la cooperación internacional, etc.

Sería difícil encontrar algún tipo de actividad cultural en que la acción disidente no estuviera representada, bajo alguna forma, durante esos años iniciales del Gobierno Militar; con mayor razón en los años posteriores a 1980, con exclusión de la televisión. Así, por ejemplo, surgen escuelas disidentes pero, sobre todo, una gran variedad de actividades educativas no-formales; en el campo académico —sobre todo en torno del eje de las ciencias sociales— se erige una vasta red de instituciones y grupos que llegan a concebirse tempranamente como una universidad alternativa; por todos lados surgen micro-medios disidentes, revistas clandestinas, semi-clandestinas o de circulación relativamente tolerada; se desarrolla una verdadera "industria editorial" de expresiones contestatarias, abarcando desde el

mimeógrafo para imprimir volantes culturales hasta imprentas dispuestas a imprimir libros que no pasan por la censura gubernamental; en poblaciones y centros estudiantiles florecen las actividades del arte aficionado; surge y se desarrolla una corriente de poesía juvenil contestataria que llevaría a la creación de la Unión de Escritores Jóvenes; se multiplican las compañías de teatro independiente y ya en el año 1976 hay 30 de ellas funcionando; surgen nuevos grupos de música popular, talleres de plástica, grupos de acción cultural universitarios y peñas.

Atravesando esa multiforme red, que carece de un centro único y cuyas partes se hallan en constante movimiento, se generan formas asociativas y de coordinación, como la propia Unión de Escritores Jóvenes, la Agrupación Cultural Universitaria, la Agrupación de Talleres Culturales, la Agrupación de Músicos Jóvenes, etc. Ninguna de estas formas asociativas durará demasiado tiempo; cada una responde a coyunturas específicas de desarrollo de un área o dentro de un sector, y luego desaparece dando cuenta con ello de la naturaleza escasamente institucionalizada e institucionalizable de esta red de actividades, cruzada ella misma por una multiplicidad de líneas de demarcación alrededor de opciones de contenido, estrategias políticas, análisis del momento cultural, pugnas específicamente estéticas, contraposición de corrientes intelectuales, lucha por la ocupación y el control de espacios de expresión, competencia por la obtención de recursos, etc.¹⁶

6. Cambios en la cultura cotidiana

Durante estos años, como efecto combinado de los procesos descritos más arriba, la cultura cotidiana de la sociedad chilena experimenta significativas transformaciones. La manifestación más llamativa de esas transformaciones, que aquí interesa, corresponde a ese proceso de "fuga hacia lo privado" que enunciamos al pasar.

La cultura al perder su conexión con la *polis* democrática pierde también en parte su vitalidad discursiva, su pluralidad, su apertura y algunas de sus capacidades innovativas. Al separarse tajantemente en dos esferas, una pública regida por la producción administrativa de sentidos, y una privada, regida por la polarización latente entre expresiones conformistas y expresiones sistemáticas de contestación, se reducen sus capacidades productivas de mundos simbólicos compartidos, generándose en cambio una fragmentación de las percepciones, de las comunicaciones, de las identidades y de los sentidos de pertenencia social. Con razón la noción de una *fragmentación* de los mundos-de-vida alcanza por esos años una amplia aceptación en los análisis de la situación cultural chilena, apuntando simultáneamente a varios fenómenos convergentes: separación de las prácticas de producción simbólica, eliminación del efecto público de la comunicación privada, relativa impermeabilidad de la esfera privada a la producción administrativa de sentidos, erosión de la integración social normativa, sentimientos difusos de anomia, pérdida de vigencia de la crítica cultural especializada que regula el juicio social sobre las obras, etc.

La cultura cotidiana bajo el autoritarismo, en su fase inicial, se ve así forzosamente reorganizada en torno de principios de *disciplinamiento* cuya operación se apoya, en última instancia, en la movilización de los recursos represivos del Estado, empleados de manera discrecional por el Gobierno Militar; cuya legitimación se realiza en términos de la ideología de la seguridad nacional pero cuya efectividad descansa, sobre todo, en la generalizada redistribución del poder dentro de la sociedad que, por todos lados, reintroduce asimetrías y sujeta las relaciones sociales cotidianas a un "efecto de condicionamiento operante" que lleva a producir "comportamientos de conformidad" político-social.

La cultura pierde su capacidad de competir con la acción de esos mecanismos del condicionamiento operante del disciplinamiento que, como muestra Foucault, están presentes desde la propia constitución de la sociedad moderna, oponiéndole resistencias comunicativas potencialmente dirigidas a realizar el sentido de una "comunidad ideal de hablantes". Pues la cultura, por avanzado que pudiera encontrarse el desarrollo de sus contenidos conformistas —la tolerancia represiva de que hablaba Marcuse— sin embargo retiene siempre esa capacidad potencial de "realizar" la promesa contenida en toda comunicación de lenguaje verbal; esto es, la promesa de un diálogo emancipado de las restricciones del poder, la riqueza y las propias intransparencias (defensas profundas) de los hablantes. (Queremos decir: el lenguaje es potencialmente portador de la utopía, en la misma medida en que contiene la promesa del cielo, de la igualdad, de la transparencia, de la verdad, de la imaginación sin límites, del deseo realizado íntegramente, de la interpretación nunca cerrada, etc.).

Pues bien, bajo ciertas condiciones, como las que el autoritarismo militar genera en Chile en el período bajo análisis, esa potencialidad de la cultura —siempre limitada por las formas históricas de institucionalización del poder, de la repartición de la riqueza y de los roles, y por las propias formas institucionales del campo cultural y de la cultura cotidiana— prácticamente desaparece por completo, y debe ceder todo el espacio a la acción de las *disciplinas* que actúan, por el contrario, fácticamente, sin recurrir a la comunicación, infundadamente, de manera directa sobre los cuerpos, demarcando rigidamente las situaciones, generando asimetrías, reforzando los patrones de conformación, castigando y vigilando; "naturalizando", en fin, el orden social, hasta hacerlo aparecer omnipresentemente en las murallas blancas de la ciudad, en las maneras de comportarse en público, en la mirada del policía, en la exclusión de los contestatarios, en la anulación del debate público, en las distancias sociales, en el "buen sentido" del sentido común, en el silencio nocturno y vacío de las calles sujetas al régimen del toque de queda, en el gesto amenazador que libera las potencialidades oscuras del poder sembrando la incertidumbre definitiva sobre sus formas de operación y los límites de su acción.

Es, por tanto, esa transformación largamente invisible de los mecanismos básicos de *producción de orden* que trae consigo el autoritarismo —mecanismos de producción de rutinas encarnados en la cultura cotidiana de una sociedad— la que altera de manera más o menos radical a ésta. Al

desplazar su eje desde la formación de sentidos a través de la comunicación interactivamente generada entre los individuos, comunicación continua que se integra en y a través de las producciones simbólicas de un campo pluralmente constituido en el interior de un régimen político (democrático) que dota eventualmente de eficacia pública a esos procesos comunicativos, y sustituirlo por el eje del disciplinamiento que opera en el nivel del condicionamiento operante de los comportamientos, el autoritarismo logra redefinir la cultura cotidiana, cambiando el sentido de todo el repertorio de rutinas que la componen. De allí surgen las nuevas percepciones de inseguridad, de temor, de retraimiento y rebeldía, de utilidad, de identidad, de fuerza o importancia, de autoridad y subordinación, del valor que debe ser atribuido a los argumentos, de cómo arribar a verdades o para qué, o sobre el funcionamiento de la sociedad, de los poderes públicos, de las figuras políticas, etc. Libros como *Miedo en Chile* de la periodista Patricia Politzer, o producciones literarias gestadas durante esa época, como la poesía de Raúl Zurita; las obras de teatro de Marco Antonio de la Parra, el sentido acosado de la existencia y de la perversidad ambigua del orden en Ramón Griffero; la plástica propia de la fragmentación, del cuerpo torturado y del encierro de varios de los artistas de la "nueva escena", son todas expresiones más vivas y mejores que las que puede proporcionar nuestro análisis de esos fenómenos de redefinición de la cultura cotidiana chilena bajo el autoritarismo. Es por lo mismo en el análisis de ellas que en el futuro deberá encontrarse el sentido más profundo de esa redefinición y de su impacto en la conciencia colectiva.¹⁷

B. La institucionalización del régimen: el nuevo escenario de la cultura post-1980

La gran diferencia que puede observarse en el desarrollo del régimen militar autoritario antes y después de 1980 consiste en la consolidación —dentro del bloque en el poder— de una conducción política e ideológica definida, que se expresa en un verdadero proyecto de "refundación nacional", dejando atrás el contenido básicamente defensivo y reactivo de la primera fase. En efecto, hacia 1980 se han producido dos clarificaciones básicas dentro del régimen: la corriente político-tecnocrática neo-liberal ha subordinado a todas las demás fracciones ideológicas internas (nacionalistas, corporativistas, tradicionalistas, gremialistas, católico-integristas, militaristas), subsumiéndolas en parte, en parte reduciéndolas a posiciones más o menos marginales de la dirección del Estado; y, simultáneamente, se ha clarificado la estructura del liderazgo dentro del régimen, imponiéndose la conducción personalizada de Pinochet sobre la base del respaldo institucional del Ejército y la concertación civil en torno de un modelo neo-liberal de desarrollo.

Sobre la base de esa doble clarificación, el régimen está en condiciones de poner en movimiento una *estrategia refundacional* consistente a) en la *institucionalización constitucional* del régimen militar autoritario hasta

1989 y, de ahí en adelante, su "proyección" bajo la forma de una "democracia protegida", o sea, restringida y militarmente tutelada, y b) en la formulación y aplicación de un amplio *plan de modernizaciones* que abarca simultáneamente la economía, el sector agrario, la administración del Estado, la organización nacional de la salud, el sistema previsional, las políticas de vivienda, el régimen sindical, la administración local, el sistema escolar, la enseñanza superior y la organización de la cultura.¹⁸

Dentro de este contexto nos cabe analizar la evolución de la cultura en esa nueva fase de despliegue del régimen militar autoritario. Nuestra intención no es abordar en detalle los cambios ocurridos a nivel de la institucionalidad cultural y de los procesos de campo, cuyo análisis ha sido hecho abundantemente durante estos años¹⁹, ni realizar una descripción exhaustiva de los cambios ocurridos en la cultura cotidiana. Más bien, nos interesa aquí proponer una explicación de los fenómenos más globales de transformaciones que han estado operando en esos dos planos, sus dinámicas decisivas y las conexiones que existen entre éstas y aquéllos. Sobre todo, nos interesa revisar esos fenómenos y sus dinámicas componentes a la luz de su significado para la evolución más larga del proceso de incorporación de la modernidad que, como hemos postulado, continúa operando —a lo largo de todo el período autoritario— como el vector fundamental de evolución de la cultura en la sociedad chilena.

1. De la subordinación funcional a la funcionalización para el mercado

Que la cultura moderna en general, y en particular dentro del modelo capitalista de desarrollo, está estrechamente vinculada a fenómenos de mercado es una afirmación que a esta altura no debiera provocar escándalo.²⁰ Por un lado, los consumidores de bienes culturales expresan sus demandas de acuerdo a lógicas de mercado cada vez que éstos son tratados como valores de cambio, trátense de pinturas, del acceso a representaciones de teatro o de la adquisición del bien educativo. Por otro, la industria cultural funciona, toda ella, casi íntegramente para el mercado. Incluso allí donde los productos simbólicos son aparentemente intransables, sea porque son directamente provistos en calidad de servicio por el sector público, o porque por su naturaleza (como en el caso de los bienes de salvación) se presentan como íntegramente desconectados de la esfera económica, sin embargo la demanda de ellos opera a la manera de un mercado de consumidores y, por lo general, existen unidades de producción que compiten para proporcionarlos. Finalmente, sectores del campo cultural, que hasta hace un tiempo aparecían como puramente "gratuitos" —por ejemplo, en las concepciones y prácticas del "arte por el arte" o en el caso de la producción de conocimientos científicos desligada íntegramente de consideraciones de "utilidad" o "pertinencia" práctica— se observa un rápido desplazamiento que incluye, por lo menos, los siguientes fenómenos imbricados entre sí: profesionalización de los productores; operaciones en gran escala con el empleo de recursos que deben ser procurados en el mercado o bien obteni-

dos del sector público o de la cooperación internacional; marketing de los productos; énfasis en la orientación hacia el consumidor; venta u otro tipo de intercambio final como modo de apropiación de la obra o del proceso de trabajo que lleva a su producción; valorización del producto en circuitos económicamente determinados; reclamación de pertinencia práctica para casi todos los procesos de producción simbólica, etc.

La incorporación de la modernidad es, en parte, un movimiento de la cultura en sus diversos sectores hacia el mercado. Nacimiento de circuitos de comercialización de las obras; diversificación de la producción para satisfacer demandas diferenciadas o segmentadas; imbricamiento de la cultura y la industria; investigación realizada por contrato; venta de proyectos, directamente o a cambio de subsidios; uso generalizado de la publicidad para financiar empresas culturales; obtención de recursos públicos en competencia con otros grupos de productores; mediciones de audiencia y uso de instrumentos de exploración del mercado cultural, etc., son todos fenómenos expresivos de esa aproximación de la cultura al mercado.

Situados en perspectiva, sin embargo, esos movimientos de aproximación de la cultura al mercado —que entre otros fenómenos dan lugar a la conformación de la moderna cultura cotidiana de masas bajo el impulso expansivo del “mercado de mensajes” operado por la industria cultural— ocurren diversamente en distintas sociedades y momentos históricos. Respecto de ellos, el Estado, el sistema político, los circuitos comunitarios, los movimientos sociales, diversas instituciones y actores, la propia industria cultural del sector público, juegan papeles complejos de “intervención” y “reorientación” que continuamente los interrumpen, los frenan, los reacomodan, etc., transformando la relación entre la cultura y el mercado en un constante espacio de tensiones, pugnas y arreglos, destinados a preservar algunas de las dinámicas de innovación de la cultura —que no pueden cultivarse dentro del mercado—, a asegurar el cumplimiento de criterios de equidad en la distribución de los bienes culturales y en la apropiación de los medios de producción simbólica, a garantizar “objetivos nacionales” definidos políticamente y la realización de los múltiples otros fines e intereses culturales no directamente coordinables por el mercado.

En cambio, con el advenimiento de la nueva fase de institucionalización del régimen militar, ese espacio de relación tensa y conflictiva entre la cultura y el mercado tenderá a ser sistemáticamente suprimido, en favor de una relación puramente funcional de la cultura con el mercado.

Luego, si hay un rasgo característico en este ámbito del desarrollo de la cultura que se sigue de la nueva orientación impuesta por la hegemonía neo-liberal en el interior del régimen militar autoritario a partir de 1980, él proviene más de las *condiciones de contexto* que aquélla define que de alguna redefinición sustancial ocurrida en el proceso de desarrollo de la cultura. Este asunto crucial, nos parece, no ha sido claramente caracterizado hasta ahora en los análisis de la evolución cultural bajo el régimen autoritario chileno. Seguramente en parte por la proximidad sobre los hechos con que esos análisis fueron realizados pero, más esencialmente, por ausencia de análisis del proceso más profundo y decisivo que venía experimentando

la cultura chilena, cual es, el de la más plena incorporación de la modernidad.²¹ En efecto, era este último, y no las políticas del Gobierno Militar, el que había iniciado y propulsaba el irresistible desplazamiento de la cultura hacia el mercado. Lo que ocurre es que ese movimiento se vería intensificado y sus efectos redoblados dentro del contexto de condiciones generadas por la existencia del régimen militar y de sus políticas “modernizadoras de mercado” a partir de 1980 en adelante. En efecto, el intento por “desregular” al máximo ese movimiento de acercamiento, junto con su favorecimiento sistemático y el apoyo dado a él por el Gobierno Militar con diversos medios y variados expedientes, realizado dentro de un marco de “subordinación funcional” del campo al régimen político, resultaría en una fuerte “refuncionalización” de la cultura, la que pasa ahora a desempeñar un rol sometido a la doble influencia del control administrativo-político del Estado y de su operación abierta a las exigencias y lógicas de funcionamiento del mercado.

Nuestra hipótesis en este punto es que, en virtud de ese doble proceso de refuncionalización, la cultura pierde *densidad comunicativa*.

En otras partes hemos dicho que en estas condiciones la cultura ve reducirse generalizadamente sus “umbrales comunicativos”. Trabaja, en general, con un nivel más bajo de interacciones comunicativas.²²

Más que de una hipótesis se trata, en realidad, de una orientación de análisis que necesitaría explorarse más largamente. En breve síntesis, lo que queremos decir es lo siguiente. Que en las condiciones de contexto propias del régimen militar autoritario, una vez alcanzada su más plena expresión como proyecto “refundacional” —por tanto, bajo la doble exigencia de funcionalización de la cultura a los controles administrativos del Estado (autoritario) y al control regulador del mercado— la cultura ve simultáneamente reducirse el número de productores autónomos, la competencia ideológica intracampo, su conexión vital con la política, el valor atribuido a la producción de “ideologías pesadas” (en parte porque el régimen carece de la necesidad de legitimarse comunicativamente; le basta hacerlo al nivel de las *disciplinas operantes* y de la *producción administrativa de sentidos*) y la diversidad de los circuitos de producción/distribución de la cultura. En sustitución, se observa —como efecto directo de ambos fenómenos de contexto antes mencionados— un generalizado proceso de concentración y centralización ideológica de los medios de producción más significativos del campo, un incremento de la producción administrativa de sentidos, una introversión de la cultura que se aleja de la política (que es uno de los grandes contrabalances frente al mercado), y un aumento en la frecuencia y la amplitud de circulación de las “ideologías livianas”, es decir, de aquellas que no son constitutivas de “concepciones de mundo” y que operan, principalmente, en la esfera de la vida privada.

De modo, entonces, que la pérdida de “densidad comunicativa” de la cultura tendría que ver con esos fenómenos combinadamente. Por un lado, la cultura ya no se hace cargo centralmente de la política —se erosiona rápidamente como “cultura política”— y, por el otro, ella pierde sus relaciones de tensión y antagonismo con el mercado, quedando reducida a una máquina que opera con “bajos umbrales comunicativos”. Su aspecto de

complejo institucional orientado públicamente, a la manera de un servicio que responde a un derecho de las personas y a un derecho colectivo, cede frente a la presión por transformar al campo en un complejo de empresas orientadas por demandas expresadas en los mercados. El carácter crítico, antagónico, plural de la cultura se debilita y, en cambio, se fortalece su naturaleza "afirmativa", su capacidad de proporcionar satisfacciones de mercado.

La cultura íntegramente volcada hacia el mercado, en un contexto de "subordinación funcional" al régimen, abandona pues algunas de sus funciones integrativas, que están asociadas precisamente con su "densidad comunicativa" y, por tanto, con su capacidad de procesar tensiones, conflictos, debates y antagonismos, acomodándolos dentro de una misma estructura, habitualmente a través de la generación (y aceptación para el desarrollo) de nuevos circuitos de producción/transmisión de la cultura —sea de naturaleza pública o comunitaria— que vienen a ofrecer ese necesario contrabalanceo frente a las tendencias expansivas y bajamente intercomunicativas de los sectores culturales que operan íntegramente dentro del mercado. Pues el mercado, como muestra el análisis de Weber, es un sistema de comunicación anónimo, de relaciones esporádicas y centradas en los bienes —materiales y simbólicos— que a través de él se procesan. Las interacciones a que da lugar no se constituyen en torno del lenguaje sino del intercambio de valores; de la producción y de la apropiación de los mismos. De allí que exista, en principio, una tensión inherente entre mercado y cultura la cual, al ser superada en favor del polo del mercado, reduce consecuentemente la densidad comunicativa de las interacciones culturales, reorganizándolas como actos de consumo. La cultura, a su vez, necesita para circular masivamente al mercado; necesita materializarse bajo la forma de bienes simbólicos o mensajes que puedan ser producidos industrialmente y consumidos por públicos numerosos. Lo que ocurre bajo la situación de contexto que estamos describiendo es que la cultura pasa a integrarse casi exclusivamente en esos circuitos de mercado, quedando sometida en el resto al control político-administrativo del Estado. En la nueva *coyuntura* se vuelve difícil, por lo mismo, hablar del desarrollo de una "cultura autoritaria" —tal como ella fue caracterizada más arriba— y se pasa a una nueva fase de "cultura de consumo", donde los sentidos socialmente comunicados e individualmente apropiados vienen, por un lado, de la producción para el mercado y, por otro, de la producción administrativamente regulada por los aparatos del Estado.

2. Desarrollo privilegiado de la industria cultural

En las condiciones descriptas, la industria cultural —algunas de sus ramas especialmente— pueden desarrollarse con gran intensidad, sobre todo si encuentran el apoyo de políticas favorables del Estado. Es lo que ocurrió en Chile con la televisión, sobre todo desde el momento en que a las ventajosas cuasimonopólicas otorgadas a unos pocos canales, se asoció una política liberal de importación de receptores y de concesión de créditos para su

adquisición, que permitió en poco tiempo incrementar fuertemente la audiencia de este medio de comunicación. En pocos años, la casi totalidad de los hogares chilenos —en las ciudades y en el campo, hasta los más apartados rincones del territorio nacional y en casi todos los suburbios pobres de las concentraciones urbanas— accedió a la televisión que se transformó, rápidamente, en el principal medio de esta nueva "cultura de consumo" o de baja "densidad comunicativa".

De hecho, el carácter *cool* atribuido al medio televisivo puede asociarse, desde el punto de vista de nuestro análisis, a ese modo de operación bajamente comunicativo que es propio de la producción y el consumo de "ideologías livianas", con su carácter esencialmente fugaz, de condensación simbólica, de escasa elaboración cognitiva y de resistencia a generar verdaderos procesos de aprendizaje. La operación con mensajes-imágenes reduce la capacidad que antes llamamos utópica del lenguaje, dotando a éste, en cambio, de un contenido presencial, de participación proyectiva, de pseudo acercamiento a la realidad que, en verdad, se encuentra intensamente distanciada por la selección, codificación y presentación de esos mensajes-imágenes. La televisión puede pensarse, todavía hoy, como el paradigma de esa comunicación que opera íntegramente volcada sobre el plano del consumo o de la recepción; donde el receptor está sometido al imperio de imágenes recibidas sin poder establecer con ellas una "conversación". Las formas complejas de reflexividad que van asociadas a toda "conversación" —donde los individuos despliegan sus competencias de interpretación a la par que sus competencias de elaboración de mensajes en una situación que exige el constante autoesclarecimiento y el "monitorear" la reflexión del otro— se pierden en el caso de la comunicación televisiva, que introduce un principio aislado de recepción/decodificación de mensajes visuales, sin acompañamiento de una situación de reflexividad interactivamente producida.

En las condiciones de contexto ya descriptas, la cultura "refuncionalizada" por el autoritarismo y el mercado encuentra su más poderoso vehículo de expansión en la televisión, que le proporciona a aquélla un público masivo a la vez que altamente fragmentado; "privatizado" dentro del hogar pero "participante" de una realidad que sigue siendo distante; consumiendo "ideologías livianas" que en vez de entorpecer los procesos de disciplinamiento, los refuerzan al otorgarles una compensación en el plano simbólico y un sustituto privado para las carencias comunicativas en el plano público. Más en general, el fuerte énfasis otorgado a la exigencia de que las actividades económicas y sociales principales de la sociedad se orienten hacia el mercado y sean coordinadas por éste —como el dado por el Gobierno a todas sus políticas con posterioridad a 1980— necesariamente resulta en un estímulo para la industria cultural que es el único sector del campo que, desde su origen, se ha desarrollado en contacto con el mercado o, por lo menos, considerándolo seriamente como un espacio de consumo y de obtención de recursos. Como veremos en el capítulo siguiente, este dinamismo introducido en la esfera de la industria cultural significó cambios importantes no solamente en la posición de ésta dentro del campo cultural sino que, ade-

más, provocó importantes rearrreglos entre sus subsectores, permitiendo el fuerte desarrollo de algunos y cambiando la naturaleza operativa de otros. En este sector, por tanto, más que en los otros, las políticas "modernizadas de mercado" impulsadas por el Gobierno Militar produjeron efectos insospechados, redefiniendo íntegramente al sector, en su interior, y llevándolo a una nueva posición dentro de la cultura nacional.

Junto a los efectos enunciados previamente, que resultan en esa pérdida de "densidad comunicativa", se producen a la vez significativas transformaciones en la industria cultural generadas por la necesidad de servir a un mercado más amplio. La renovación tecnológica de los medios se acelera (como se observa en la televisión, la prensa y la producción de videos, por ejemplo); la recepción se amplía y diversifica; la producción se ve llevada a una mayor diferenciación para responder al interés y a las demandas de una variedad de grupos, como ocurre con los niños, los jóvenes, las mujeres, etc.; la fabricación de símbolos identificatorios con la industria cultural se vuelve una función central de la legitimación de éstos y de su función en la sociedad, como ocurre con la subindustria de los ídolos, la producción complementaria de revistas dirigidas a exaltar las figuras de la televisión, la transformación de los propios medios en fuente de noticia, etc.; la conexión con la economía se vuelve más estrecha, tanto a través del medio de la publicidad como a través de la creciente importancia comercial que por sí mismos adquieren los medios líderes de la industria cultural.

En suma, si la incorporación de la modernidad significa en general una presión para acercar la cultura al mercado, en condiciones de contexto históricamente específicas, como las que trae consigo el régimen autoritario y sus políticas de "modernización de mercado", esa presión opera no sólo más íntensamente sino que, además, produce efectos particulares, dando una significación desproporcionada al funcionamiento del "mercado de mensajes" y al consumo de ideologías livianas.

3. Diferenciación del sistema de educación y su operación para el mercado

Junto al sector de la industria cultural, el otro sector institucional del campo que tiene un alcance masivo pero una función distinta es el sistema educacional, en la medida en que se hace cargo de la socialización de la población en una de las ideologías (pesadas) centrales de la modernidad, cual es la ideología que transforma al conocimiento educacionalmente transmitido en un valor decisivo para la definición de la posición de los individuos en relación a la riqueza, el poder y el status. De hecho, si la cultura ocupa en la modernidad una función tan decisiva, y si logra un grado tan alto de "hegemonía sectorial", ello se debe en parte importante al rol desempeñado por la educación escolarizada y académica en la valorización del conocimiento y en la organización, examinación, certificación y distribución del mismo.

Bajo la dinámica "refuncionalizadora" de la cultura que determina el contexto militar-autoritario orientado hacia la "modernización de mercado", el sis-

tema educacional experimenta asimismo transformaciones significativas.

Su acercamiento al mercado, buscado explícitamente por las políticas educacionales del Gobierno a partir de 1980²³, especialmente en el nivel secundario, terciario y de la educación técnico-vocacional y de adultos, ha significado un fuerte impulso al proceso de *diferenciación* del sistema, ha forzado la descentralización administrativa del mismo y ha generado condiciones que, a través de una más pronunciada segmentación de los circuitos escolares y académicos, pudiera estar transformando globalmente la función de la educación dentro de la sociedad chilena.

En la práctica, cada vez que el Estado retrae sus recursos del sector educacional y que define la enseñanza, sobre todo por encima del nivel básico obligatorio, como una inversión que los individuos hacen en su propia capitalización, por tanto algo que debieran "comprar" en el mercado, éste último tenderá efectivamente a operar mediante la oferta de una variada gama de cursos y certificados frente a la cual se estructura la demanda de los potenciales educandos. Pero, sobre todo, el mercado actúa en este sector multiplicando las instituciones oferentes —los establecimientos escolares y académicos— y los certificados educacionales, dando lugar a una fuerte diferenciación del sistema escolar y terciario.

La lógica implícita de la diferenciación escolar y académica en sociedades periféricas, con altos grados de desigualdad económica y social, es presionar hacia la conformación de más y más variados *circuitos educativos*, cada uno de los cuales tenderá a seleccionar a su alumnado de acuerdo con patrones restrictivos de acceso, a someterlos a una socialización típicamente estamental, a proporcionarles una educación de calidad diversa y a asegurarles oportunidades de ingreso a los escalones superiores dentro del mismo circuito o de aquél situado inmediatamente encima o debajo suyo; escalón en que el proceso selectivo se reproduce hasta llegar así a la obtención de certificados educacionales terminales cuyo valor en términos de posición social y ocupacional y de pertenencia cultural es directamente proporcional a la "distinción" que el circuito escolástico respectivo posee y confiere.

La diferenciación institucional del sistema, en la medida entonces en que engarza con una diferenciación institucional de los circuitos escolásticos, resulta tendencialmente en procesos de *segmentación social* de la educación²⁴, procesos que se ven facilitados por la operación de los mercados educacionales y, en general, por los movimientos de desregulación y privatización de la educación. En efecto, el mercado —sustraer a la educación de las regulaciones político-administrativas que buscan conformar un sistema de iguales oportunidades, de integración nacional en un mismo cuerpo de valores básicos, etc.— facilita la selección de alumnos de acuerdo con su dotación de capital cultural y social familiarmente transmitido y refuerza el carácter simbólico de la "distinción" introducida por los certificados educacionales correspondientes a los varios circuitos escolares. De manera más o menos sistemática en los extremos altos y bajos de este sistema de segmentación, y de forma más ambigua o borrosa en sus segmentos intermedios, la educación así organizada ofrece una gama desigual de conociemien-

tos, competencias y valores que van asociados a los certificados según sean expedidos por establecimientos situados en los respectivos niveles.

En otras palabras, la diferenciación horizontal de carácter interinstitucional se ve reforzada, bajo condiciones de contexto que empujan a la educación a operar en el mercado, a adoptar formas de *diferenciación vertical* en función de la jerarquía de los circuitos escolásticos, en cuya estructuración intervienen predominantemente factores tales como: el reclutamiento socialmente selectivo de los alumnos, la calidad de la enseñanza ofrecida, el status de los maestros en los varios niveles de la jerarquía, las conexiones con los niveles educativos superiores que el respectivo circuito posibilita, el valor atribuido a los certificados que expide y el tratamiento por el mercado laboral de ellos, en términos del prestigio de las instituciones que integran el correspondiente circuito.

Bajo el régimen militar autoritario, en suma, se incrementa la presión que favorece un desarrollo segmentado de la educación, y no solamente su diferenciación institucional. El anterior efecto se ha visto reforzado, además, por el impulso dado a la descentralización administrativa del sistema educacional, que resta al Estado su capacidad (relativa) de operar íntegramente sobre el sistema y acerca su gestión, en cambio, a los contextos de base de la desigualdad, o sea, a las comunidades territoriales y a su organización política local. Independientemente del hecho de que la descentralización bajo un régimen autoritario no constituya un movimiento de auténtica "democratización administrativa", debido a que las autoridades locales se encuentran fuertemente subordinadas al esquema político central del Gobierno Militar, se produce sin embargo un efecto de reforzamiento de la constitución de circuitos escolásticos segmentados, puesto que cada unidad de base territorial queda a cargo de promover la enseñanza dentro de su propio ámbito, aumentándose con ello la segmentación por el lado de la selección de los alumnos, de la diferenciación de los maestros, de la dotación de los recursos que corresponde a cada unidad de administración escolar y de la libertad que se otorga a éstas para "flexibilizar" el programa escolar de acuerdo al potencial de aprendizaje (que se halla socialmente determinado, de los educandos.

En breve, la educación —como empresa global constitutiva de la modernidad—²⁵ cambia de sentido al verse incorporada dentro de las condiciones de contexto definidas por el régimen autoritario militar y sus políticas de "modernización de mercado". De haber sido concebida como una empresa de integración social, de socialización de la futura fuerza de trabajo en las disciplinas propias del trabajo moderno, y de legitimación meritocrática de las diferencias sociales, pasa a desempeñar ahora un papel distinto, consistente en la capitalización individual, la socialización en órdenes de conocimiento jerárquicamente diferenciados y la legitimación estamental de segmentos culturales diferenciados.

Subyacen a este cambio no solamente las modificaciones de contexto antes señaladas sino, además, modificaciones en la propia estructuración evolutiva de la modernidad, en particular, el nuevo papel desempeñado por los conocimientos en la producción y administración de la sociedad. La idea

de la temprana modernidad, de que el conocimiento científico podría ser efectivamente socializado y transformado en un motor emancipatorio de la cultura cotidiana²⁶, dará paso en el siglo XX a la noción del control profesional sobre porciones cada vez más especializadas y esotéricas del conocimiento que son administrados por una "nueva clase" (intelectual-tecnoburocrática) "al servicio" de la sociedad. La educación, globalmente entendida, queda así aun más recortada de la vida cotidiana y se transforma en un canal altamente complejo y especializado de incorporación (segmentada) a esa producción y administración de los conocimientos. Ella sigue a cargo —en sus niveles superiores— de producir y transmitir los "bienes culturales de producción" —el bien educacional en su elaboración más alta—, por tanto de la producción y reproducción de lo que hemos llamado "ideología pesada", pero reserva esa función para unos pocos circuitos escolásticos completos (cuyo período de entrenamiento alcanza ya a alrededor de 25 o más años, desde el nivel preescolar al nivel del post-doctorado), mientras que el resto de los circuitos se desplaza lenta e imperceptiblemente hacia la producción y reproducción de "bienes culturales de consumo", propios de la esfera de las "ideologías livianas"; o sea, aquellas apenas constitutivas de concepciones de mundo y de competencias requeridas para la administración de conocimientos complejos o sofisticados.

En la misma medida en que este fenómeno siga progresando —y puede esperarse que lo hará bajo las presiones de la propia evolución de la modernidad—, la educación de masas tenderá a orientarse cada vez más en función de la formación del "consumidor cultural" que actúa en el "mercado de mensajes" y se alejará de sus funciones anteriores de integración y de socialización de la fuerza de trabajo. Paralelamente, es posible prever que cada vez más esa educación se acerque a la industria cultural y que ambas encuentren formas de colaboración en la producción de este "bien cultural de consumo", en tanto que la educación ligada a la producción de "bienes culturales de producción" quede relegada a los circuitos escolásticos superiores, cuyo acceso y servicio es monopolizado por la "nueva clase".

4. Cambios en la cultura cotidiana: la nueva esfera privada

La cultura cotidiana de la primera fase del autoritarismo estuvo caracterizada, principalmente, por la generalizada "fuga hacia lo privado", la consiguiente fragmentación de los mundos-de-vida, su reorganización en torno de un principio de disciplinamiento que opera condicionando fácticamente los comportamientos y genera, a nivel individual, percepciones de anomia, de retraimiento, de inseguridad y de pérdida de identidad.

En esta nueva fase, en cambio, con la transformación de las condiciones de contexto que hemos descrito, y los reacomodos y reorientaciones que ocurren en las producciones simbólicas del campo, la cultura cotidiana tiende asimismo a realinearse, pasando a reestructurarse alrededor de lo que podemos llamar un "horizonte de consumos".

La economía chilena ingresa, efectivamente, en una fase caracterizada

por el dinamismo de las importaciones, el flujo de recursos financieros externos y el rápido aumento del crédito de consumo en el interior, llevando a una explosión en la adquisición de ciertos bienes, en particular: —a nivel masivo— artefactos del hogar, vestimenta, radioreceptores, televisores y otros similares. Digamos así: la *infraestructura de recepción* del "mercado de mensajes" se ensancha de golpe, incorporando a hogares de familias de bajos ingresos, a nuevos segmentos juveniles, a sectores de mujeres y a una parte significativa de la población rural y de los poblados más apartados del territorio nacional a nuevas formas de consumo cultural.

Gran parte de los habitantes del país se ven así "formalmente subsumidos" dentro del "mercado de mensajes", mientras en otras esferas de la vida económica, social y política permanecen en calidad de marginales o incluso de excluidos. Por un instante, entonces, la "determinación cultural" alcanza una presencia masiva e incontrarrestable, operando con autonomía y "por encima" de determinaciones más "pesadas": inclusión en los procesos de producción, en el mercado laboral, en el ejercicio de derechos políticos, en la representación social a través de movimientos y organizaciones de base comunitaria, etc.

Desde un ángulo de análisis, este desplazamiento de la cultura cotidiana hacia el polo del consumo —reforzado ideológicamente por el proyecto de "modernización de mercado"— significó un debilitamiento de los patrones disciplinarios del comportamiento, basados siempre, en última instancia, en una represión del deseo. Puso en la superficie de la sociedad, en cambio, un cierto "principio del placer"; una liberación de las capacidades de proyección y movilidad motivaciones hasta entonces subyugadas, acarreado consigo una nueva disposición frente al régimen político y a su proyecto modernizador.

Para la visión crítica de una izquierda formada en valores puritanos, productivista, que se educó con una concepción prefreudiana del individuo, al igual que para la visión cristiano-progresista, imbuida de un ethos comunitario y de rechazo a las satisfacciones procuradas al margen de circuitos de solidaridad (como las de mercado, por ejemplo), esta etapa significó, por el contrario, un "período negro" de infiltración de "valores consumistas" y de pérdida del sentido de comunidad. Un sutil rechazo de la modernidad —con su siempre explosivo desacomplamiento entre valores finalistas y comportamientos inmediatos— pareció pues insinuarse en esas críticas, naturalmente racionalizadas en términos de crítica a las desigualdades, de pérdida de valores de solidaridad, de exacerbación del individualismo, de defensa frente a la alienación y de repudio a la manipulación de las necesidades humanas básicas, cuyo trastocamiento se acusaba.

En el fondo, se reaccionaba así frente a un emergente cambio en la cultura cotidiana de masas la cual, dotada ahora de una infraestructura de recepción casi universal, se comportaba "conforme a" las exigencias aparentes del régimen; esto es, optaba por expresarse en la sola esfera del consumo, material y simbólico. Un nuevo tipo de "conformismo" se extendía así por la sociedad, dando lugar a un fenómeno específico de hegemonía del régimen militar-autoritario, el cual aprovecharía la situación por un lado

para darse una institucionalidad transitoria y proyectarse hacia el futuro y, por el otro, para poner en marcha un amplio y revolucionario programa de "modernizaciones de mercado".

El principal vehículo movilizador de ese "horizonte de consumo" frente al cual la cultura cotidiana del país se iba redefiniendo era el "mercado de mensajes" reorganizado definitivamente en torno del predominio de la televisión y, más en general, de la simbolización cotidiana de una "modernidad de consumo" que se filtraba a través de la publicidad, los cambios en los patrones de comportamiento del vecino, las nuevas formas de vestirse y celebrar, las vitrinas comerciales, la aparición de los grandes "superemporios" como nuevas plazas públicas, etc., la esfera privada se tornaba así, paradójicamente en medio de un régimen militar autoritario, en un agitado mundo de posibilidades. En cada hogar, la televisión abría una ventana hacia la modernidad, mientras que en las calles de la ciudad la expansión inusitada del parque automovilístico creaba una nueva sensación de abundancia y velocidad, reduplicada en los "parques" comerciales, en la saturación de los supermercados con sus bienes importados y en la percepción creciente de que era posible, para cada quien, entrar en la cola de los que esperaban ser bendecidos por el consumo.²⁷

La ausencia forzada de la política en la esfera pública, el rígido control administrativo-político que el Gobierno continuaba ejerciendo sobre el campo cultural, y la desarticulación disciplinaria de cualquier expresión organizada de demandas a nivel social, daban así a la cultura cotidiana su connotación puramente "privatista", abierta sólo hacia ese "horizonte de consumo" que contenía la promesa de todas las satisfacciones.

5. La pervivencia de la cultura contestataria y la utopía de lo alternativo

En medio de esa situación constitutiva de un nuevo tipo de hegemonía —una hegemonía pasiva, donde el conformismo que se pretende no se expresa nunca por una movilización de tipo "clásica", populista o fascista, sino por un "conformarse a", las posibilidades fácticamente estructuradas por la operación del mercado reforzadas por el disciplinamiento y el control político administrativo del espacio público—²⁸ las formas contestatarias y en general de una cultura del rechazo encontraron también en sus propios límites y se vieron en necesidad de buscar redefiniciones y nuevas modalidades de actuación.

En la práctica, el desplazamiento que se produjo puede describirse —en el nivel ideológico— como el tránsito desde las modalidades de una disidencia a las modalidades de constitución de mundos alternativos de vida; en tanto que en los hechos, el proceso que se iniciaba era uno de lucha por las redefiniciones del campo cultural y por la influencia en la cultura cotidiana de masas.

Incluso, la propia noción de *disidencia* perdió por esos años su valor de autoidentificación, tanto política como cultural. Política, puesto que el régimen había alcanzado un cierto grado de institucionalización y estabilidad

que requerían formas de oposición también más estables e institucionales que aquellas que podían ofrecer los "disidentes", con sus manifestaciones simbólicas, sus apariciones intermitentes en la calle, sus formas relativamente sueltas de organización, sus dirigencias clandestinas o semiclandestinas, sus escasos recursos y su operación en "circuitos cerrados" donde todos compartían los mismos valores, el mismo lenguaje y las mismas percepciones de la situación. Cultural, puesto que ya no se trataba meramente de oponerse, de "disentir", frente a las prácticas represivas, prohibitorias o excluyentes del régimen, sino de hacer frente a una expansiva cultura cotidiana de masas que empezaba a expresarse frente a ese "horizonte de consumo" y a una operación más autónoma del campo, aunque refuncionalizada en torno de la operación del mercado.

Los circuitos de la cultura disidente, escasamente institucionalizados, en continuo movimiento, que se formaban y transformaban o desaparecían con el paso de los días y los avatares de las querellas estéticas, ideológicas o políticas, con su escasa capacidad de coordinarse entre sí, con su rechazo a aproximarse hacia las expresiones culturales de campo para evitar cualquier "contaminación" o los riesgos siempre presentes de la represión, se ven obligados en adelante a buscar un nuevo espacio, tanto de autoconceitualización como de acción.

En el primer plano, el de la reflexión sobre sí mismos, estos circuitos se irán redefiniendo progresivamente en términos de una *cultura alternativa*. Ya no sólo disidente, de rechazo o de resistencia, sino productivos de una "oferta antagónica" y alternativa, creadores por tanto de una realidad cultural capaz de oponerse creativamente a las producciones culturales provenientes del campo y a la emergente cultura cotidiana de masas estructurada en torno del "mercado de mensajes".

En el segundo plano, el de la acción, el movimiento de la cultura alternativa vive un auge inicial, tributario todavía de las dinámicas de la cultura disidente o contestataria (hasta 1980) y luego entra en una fase declinante y debe abrirse hacia la nueva realidad creada por el régimen y su proyecto de modernización. En efecto, todavía en 1979, el mundo contestatario bulle en actividades: ese año "sólo el conjunto folklórico de la Zona Oriente (de Santiago) había realizado 50 presentaciones en dicha zona; en Santa Gema se organizaron alrededor de 40 actos artísticos; la Vicaría Pastoral Obrera organizó 30 actividades culturales. Asimismo, el número de artistas aficionados crecía en forma constante: en 1979 existían aproximadamente 500 grupos de músicos aficionados en poblaciones santiaguinas, en tanto que los teatros ascendían a unos ochenta (...) También el público que sigue a este movimiento (crece) de manera impresionante. Como indicadores cabe mencionar el ciclo de recitales del Nuevo Canto que, durante dos años consecutivos, organizaron (eventos) semanales con una asistencia promedio de mil personas (...) Los múltiples actos solidarios contaban con una asistencia que variaba entre 50 y 300 personas. Los teatros independientes también mostraban cifras de públicos importantes: 'Lindo país esquina con vista al mar' de ICTUS contó con 40 mil espectadores, al igual que 'Tres Marías y una Rosa' (TIT); 'Viva

Somoza', del teatro IMAGEN (atrajo) a unos 20 mil (espectadores)".²⁹

Frente a esas cifras —"impresionantes" según analistas de la época—, la televisión, como veremos más adelante, se expandía velozmente y alcanzaba a varios centenares de miles de hogares diariamente y, durante algunas horas, su audiencia incluía a varios millones de personas, de todos los grupos sociales, de ambos sexos, de todas las edades, a lo ancho y largo del territorio nacional. Frente a las decenas de "micromedios" —sindicales, poblacionales, juveniles, estudiantiles— que habitualmente subsistían por un corto período de tiempo, en el mercado de diarios y revistas circulaban semanalmente varios centenares de miles de impresos. Frente a las decenas de grupos de músicos aficionados, un sector creciente de la población joven del país, incluyendo a jóvenes de ambos sexos en las poblaciones periféricas de las grandes ciudades, se paseaba por las calles portando su radiotransistor y seguía a los músicos más apreciados dentro del "rating" semanal o mensual.

En fin, la cultura contestataria experimentaba sus propios límites y se veía obligada a cuestionarse; a cuestionar su tendencia a la conformación de sectas y clubes, su escasa competitividad, su debilidad estructural, su contenido muchas veces intensamente ideológico, su progresiva transformación en ritos de autoidentificación colectiva.

Los fenómenos que acompañan a esta incipiente crisis de la cultura contestataria que quiere transformarse en cultura alternativa han quedado registrados por las crónicas mejores de la época: "disminución del público asistente a los actos culturales; desaparición de organizaciones culturales; pérdida de la homogeneidad dentro de los mismos creadores (disidentes); búsqueda de nuevos lenguajes para dar cuenta de una realidad que se percibe transformada. La mayor parte de las peñas desaparece, sólo subsiste una, así como una gran cantidad de talleres, organizaciones culturales y grupos creativos, especialmente semi-profesionales. Pero las más afectadas son aquellas organizaciones de carácter nacional y los actos masivos centralizados. Mueren la Unión Nacional de Asociaciones Culturales (UNAC), la Unión de Escritores Jóvenes (UEJ), la Agrupación de Músicos Jóvenes; la Asociación Cultural Universitaria (ACU) debe replantear su quehacer. Se terminan los recitales en el Caupolicán o en el Cariola, así como los actos por la Cultura y la Paz".³⁰

Luego, puede decirse que las formas contestatarias que había adoptado el movimiento cultural disidente o de rechazo al régimen militar autoritario se desintegran alrededor del año 1980, bajo el peso de las nuevas condiciones de contexto, de los cambios que experimenta la cultura cotidiana de masas y de las propias limitaciones de ese movimiento. La noción de la *cultura alternativa* nace pues de esa experiencia en declinación y de las nuevas condiciones imperantes en la cultura nacional, y se presenta como una corriente que buscará, en la medida en que lo permitan las circunstancias y la desproporción de los medios, *competir* con las expresiones culturales nacidas al amparo del régimen. Bajo este impulso nacen las primeras revistas legales, semilegales o toleradas de signo opositor, se da impulso a programas educacionales alternativos para estudiantes universitarios a par-

tir de instituciones independientes del régimen, se sale a buscar "espacios" abiertos para las obras artísticas o se ingresa con ellas a los "espacios oficiales", etc.

Pronto, sin embargo, este movimiento alternativista tiene que hacerse cargo de la necesidad de incorporarse, en la medida en que le sea posible, a las expresiones del propio campo cultural, por estrechas que fueran las condiciones de acceso imperante en éste. En efecto, no había posibilidad efectiva de "competir", ni siquiera de tener alguna presencia masiva o influencia en la disputa ideológica, si no se contaba con la posibilidad de actuar a través de los "grandes medios" propios del campo establecido. Nace entonces, ambiguamente al comienzo, luego cada vez más decididamente, la noción de que era necesario primero, de que era posible luego y finalmente de que era conveniente, participar en la disputa por posiciones y espacios dentro del campo cultural. Se iniciaba lo que Ani Rivera designa como la *difícil integración*: "un sector de expresiones artísticas alternativas accede a los medios de comunicación, especialmente aquellas posibles de interesar a un público juvenil que retoma crecientemente un perfil propio (...) Algunas expresiones artísticas populares (...) empiezan a tener cabida en el espacio público (...) En el caso del teatro hay una integración más de las personas que de la expresión teatral alternativa a medios masivos (...) Esta apertura alcanza también a los circuitos más tradicionales del arte culto (...) que admiten la incorporación de artistas antes censurados a exposiciones o a conciertos oficiales, lo cual favorecerá principalmente a la plástica y a intérpretes de música docta".³¹

Con la integración gradual, lenta, contradictoria, siempre marginal y mantenida a raya en los medios más influyentes como la televisión, el propio proyecto de una cultura alternativa, entendido como utopía de un mundo de-vida que se levanta frente a otro "oficial", pierde progresivamente sus aristas y, si desea conservar su núcleo de pureza, debe radicarse en los extramuros de la cultura, en los espacios más apartados y con menor probabilidad de incidir en el desarrollo cultural del país. Pues en la medida en que lo alternativo se expresa desde dentro del campo, o busca incidir masivamente en la cultura cotidiana, debe hacerse cargo (aunque sea para sortearlas) de las restricciones que impone el régimen y organizarse de acuerdo con una nueva lógica: más institucional, más profesional, con orientación de mercado, involucrándose en la búsqueda de recursos de capital muchas veces difíciles de obtener, etc.

Lo alternativo no se presenta entonces ya como una expresión del "gran rechazo" fundado en una autocomprensión de superioridad moral y en una visión de valores finalistas de la historia —como tal debe radicarse en los márgenes de la cultura o en "bolsones" y ghettos de pureza ideológica—³² sino como una "oferta alternativa" basada en una o varias concepciones ideológicas en competencia incipiente dentro del campo cultural. Con este desplazamiento, el movimiento alternativo recupera sin embargo su centralidad en la sociedad y, en la medida en que con posterioridad a 1980 se refuerzan las condiciones de la apertura política —en parte concedida, en parte obtenida por la presión "desde abajo"—, él expande

asimismo su influencia y se articula dentro de circuitos más amplios de irradiación ideológico-cultural.

6. Repolitización de la sociedad y la cultura

La crisis económica que se desata en Chile hacia el año 1981 —llevando a una brusca paralización del crecimiento, a una reducción de los flujos financieros externos, a una drástica caída en las importaciones y a un nuevo ciclo de políticas de contención y reducción del gasto público, originando una caída en los niveles de vida especialmente de los actores más pobres— pone en tensión —pero no paraliza— al experimento de la "modernización de mercado", ni logra cambiar dramáticamente el rumbo de la institucionalización política del régimen.

En el plano de la cultura, la crisis se presenta —según nuestra interpretación— como un fenómeno relativamente pasajero, que no llega a alterar drásticamente las coordenadas de funcionamiento del campo, que no pone en entredicho las políticas del régimen referidas a algunos sectores de la cultura, como el educacional por ejemplo, pero que, en cambio, afecta de manera más o menos vigorosa a la cultura cotidiana de masas, combinando sus efectos propios con los efectos interrelacionados de la "apertura" política impulsada "desde abajo" o "concedida desde arriba". En suma, adoptamos una visión relativamente escéptica frente a la actual boga que pone en el centro de toda explicación de los fenómenos sociales, políticos y culturales en América Latina, la noción de una crisis de base económica y sus supuestos efectos omnipresentes en todos los sectores y momentos de la sociedad. Hay, en esta visión, una especie de ingenuo "revival" de los análisis monocausales y unilateralmente economicistas de la década pasada, con su énfasis en la determinación estructural de la acción social y su visión catastrofista de las relaciones centro/periferia. Es evidente que la crisis y su expresión en el plano de la deuda externa acumulada por los países incide en los más variados ámbitos de la sociedad, pero nunca —como a veces parece suponerse— de manera directa, sin mediación y produciendo en todos lados los mismos efectos. Sobre todo el analista cultural tiene que cuidarse de ese tipo de simplificaciones.

Que el campo cultural moderno se halle relativamente sujeto a los ciclos de la economía es algo que no debiera llamar la atención, desde el momento en que aquél opera parcialmente alimentado por recursos públicos y debe seguir la suerte de éstos y que, en el resto, funciona orientado hacia diversos mercados, que se encuentran a su vez condicionados —directa o indirectamente— por los movimientos de la economía. Dicho esto debe agregarse de inmediato que la organización del campo es relativamente resistente a esos movimientos, en la misma medida en que ha alcanzado un grado relativamente alto de "hegemonía sectorial" y que se halla imbricado no sólo por el lado de la obtención de recursos con la economía. Para decirlo con un par de ejemplos: los recursos públicos para la televisión pueden reducirse en un período dado de tiempo como producto

de una mayor restricción del gasto público, pero no caerán debajo de un umbral que impida su funcionamiento, puesto que la televisión es hoy día necesaria para la operación global de la economía a través del mercado publicitario y cumple, además, funciones no económicas —en el "mercado de mensajes"— que en cualquier caso deben ser financiadas; ni el sistema escolar, en varios de sus niveles, puede ser llevado a una asfixia de recursos, puesto que constituye un servicio masivo y retiene a un número importante de jóvenes fuera de la competencia por puestos de trabajo; ni pueden eliminarse por completo los subsidios a la enseñanza superior, aunque ellos se reduzcan a veces de manera intolerable para el buen funcionamiento del sistema, a riesgo de generar un conflicto político-social de proporciones con los sectores medios de la sociedad y de afectar, en el futuro, la dotación de recursos humanos especializados requeridos para el desarrollo y para las funciones de dirección de la sociedad y la continuidad del Estado, etc.

Incluso puede decirse que las políticas que venía impulsando el Gobierno Militar —destinadas a desregular ciertas actividades del campo cultural y de reorientarlas en función de su financiamiento por el mercado—, se vieron favorecidas por la crisis, reforzando el argumento de que el Estado debía desempeñar respecto de ellas un papel puramente "subsidiario". Así se entiende que en vez de paralizarse la política de reorganización de la enseñanza superior en torno de principios de mercado, ella se haya mantenido y, en la práctica, haya ofrecido un paliativo a la relativa retracción del Estado de su compromiso por ampliar este nivel del sistema de enseñanza. En efecto, en adelante el Estado no crearía con sus propios recursos nuevas instituciones de enseñanza superior ni ampliaría con sus medios la oferta de los existentes, sino que obligaría a éstos a buscar financiamientos de nuevas fuentes (públicas "no tradicionales" y privadas) y obligaría a que parte de la demanda se reorientara hacia nuevas instituciones privadas de enseñanza superior, por completo "autofinanciadas" a través de recursos provenientes de los particulares interesados en la empresa y sus servicios.³³

Paradójicamente, entonces, la crisis coadyuvaba a la privatización de algunos ámbitos del campo cultural, al mismo tiempo que introducía la necesidad de revisar y racionalizar los criterios de asignación de recursos públicos para las actividades culturales. En parte, esto último se ha venido intentando mediante la introducción de mecanismos más competitivos de distribución de esos recursos, como en el caso de los concursos de investigación a través de la creación del Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (FONDECYT); en parte reintroduciendo, bajo el supuesto de medidas de racionalización, la intervención político-administrativa del Gobierno con el fin de mejorar el control sobre determinadas instituciones y/o forzarlas a realizar cambios decididos o buscados por el Gobierno, como ha ocurrido con el "plan de racionalización" que se ha exigido a las universidades tradicionales.

En el plano de la cultura cotidiana, en cambio, la crisis económica —combinando sus efectos con la relativa mayor apertura del régimen— permite la inauguración de una fase de "protestas" políticas y de movili-

ción social de actores hasta entonces pasivos, poniendo fin con ello a la fase de mera atomización política de la sociedad civil y a la subsecuente fase de "conformismo pasivo" inducido por el acoplamiento de los mecanismos de disciplinamiento con los mecanismos del mercado operando frente a un "horizonte de consumo". En verdad, el sentido más profundo de estas protestas políticas y movilizaciones sociales —analizadas suficientemente desde el punto de vista de la evolución del régimen y de los efectos en el plano de la lucha por la democracia—³⁴ fue el de reintroducir el principio de la política como un principio vigente dentro de la cultura cotidiana de masas, aunque en un plano subordinado y todavía relativamente inorgánico.

Efectivamente, la política se infiltra otra vez dentro de la sociedad —ya no sólo como una polarización latente ni sólo como expresión disidente o como movimiento cultural alternativo—, una vez que aparecen actores sociales en vías de constitución, los que se articulan en torno de líneas de clivaje netamente ideológicas o de confrontación Gobierno/Oposición, movilizan recursos políticos y, en general, son tratados por el Gobierno con medios políticos y no exclusivamente represivos.

La experiencia de la política en la cultura cotidiana es sin embargo ambigua, en la medida en que ella todavía no se separa en esta fase completamente de la violencia, no opera dentro de canales definidos (es una política que lucha por reconstituir el campo de la política) y que su eficacia productiva es relativamente baja debido a las condiciones de estructuración del propio régimen. Además, se trata de una experiencia que es realizada diferenciadamente por los distintos sectores y grupos sociales, sin alcanzar a convertirse en un eje común de integración y socialización de la población. Hay una política juvenil en las poblaciones, una política de grupos profesionales, una política de mujeres, una política en Santiago y otras en las diversas provincias, una política distinta en los diversos barrios metropolitanos, una política experimentada de una forma por los seguidores del Gobierno y vivida de manera distinta por los sectores de oposición. No hablamos aquí, meramente, de concepciones diversas de la política según distintas corrientes ideológicas. Hablamos de experiencias disímiles de la política como hecho de cultura cotidiana; fase protopolítica de la política moderna, en realidad, dado que esta última procura, justamente, constituir una experiencia común en la sociedad a través de la cual los diversos sectores, agrupaciones, movimientos y personas reconocen (gruesamente) aquello que es objeto posible de acción política y aquello que no lo es, reduciendo con ello el límite de incertidumbre respecto de qué "asuntos" deben quedar, temporalmente, fuera del debate y de la acción transformadora provocada por el balance coyuntural de las opiniones públicamente expresadas o de la fuerza y recursos asociados a un bloque u otro.

Ese carácter estabilizador de la política —que algunos designan como su naturaleza conservadora y encubridora de los conflictos socio-económicos de base; su "formalismo de clase"— va asociado, en la modernidad, a una específica cultura política, la cual se activa sólo periódicamente.

dicamente y entonces, habitualmente, dentro de los límites claramente establecidos, en tanto que el resto del tiempo es activada sólo parcialmente, en torno de "asuntos" que no tienen la capacidad de generar "movilizaciones completas" o de dar lugar a la difusión de sentimientos y comportamientos anti-sistema más allá de los umbrales tolerables para el régimen político existente. Pues bien, como podría esperarse, esa cultura política específica está ausente en esta fase en Chile, y no podría imaginarse que ella se desarrolle hasta que se incorpore como un rasgo funcional de la cultura cotidiana de masas. O sea, hasta que la cultura política se haga parte, esencialmente, imbricadamente —con todas las desventajas que ello conlleva para visiones más iluminadas y críticas del ejercicio político—, del "mercado de mensajes". En cambio, en esta fase intensamente conflictiva de la política nacional, acoplados a los efectos de la crisis económica post 80, la política se expresa todavía, sustancialmente, como movilización social y como protesta, casi completamente fuera de los circuitos del "mercado de mensajes" y fuera también de una (arena) política ya constituida. Es una política que se simboliza, por lo mismo, por medios "desviantes" dentro de la esfera cultural: desde el ciego ruido de las cacerolas que testimonian la ausencia de un debate público argumentativo, hasta la violencia de los aparatos legales e ilegales del Estado, que expresan esa misma realidad protopolítica. Desde la barricada de fuego en las calles hasta el aprovechamiento de los actos religiosos para expresar el descontento político o las consignas preferidas.

En suma, la cultura cotidiana se repolitiza de acuerdo con las maneras irregulares, no institucionalizadas, en que los actores logran expresarse políticamente, dando origen a una *cultura de la política*, no a una cultura política, cargada de ambigüedades, de percepciones amenazantes, inciertas, de temores difusos o específicos, que se expresa en un "lenguaje caliente"; altamente personalizado, carismático, recuperador de símbolos más que propositivo de "asuntos" —problemas y soluciones—, denunciativo, dramático, fuertemente moralizante, absolutista, que fácilmente entra en espirales catastrofistas anunciando el fin de una época, la caída del régimen, el caos si venciera la oposición, la destrucción del país provocada por unos o implicada en el proyecto de los "otros", etc.³⁵

III. Estado actual de la cultura en Chile

En este capítulo, que es el más extenso de nuestra presentación, abordamos la caracterización de la cultura en el Chile de estos días, mostrando sus dinámicas centrales y describiendo las características principales de la producción de campo, de los fenómenos de consumo cultural y de operación de la cultura cotidiana. En este caso, a diferencia del capítulo anterior, pondremos énfasis en los *aspectos cuantitativos* de los fenómenos culturales bajo análisis, con el propósito de profundizar su interpretación dentro del cuadro determinado por la incorporación de la modernidad y del contexto proporcionado por la existencia del régimen militar autoritario. Resulta claro

para nosotros que una aproximación de esta naturaleza, que pone énfasis en las dimensiones cuantitativas de los fenómenos culturales, es limitada y no ofrece por sí sola una explicación suficiente de los fenómenos estudiados. Por otro lado, el análisis descriptivo de la producción del campo y del consumo cultural es imprescindible en un estudio de la cultura moderna, cuya enorme diferenciación y complejidad de contenidos ha vuelto prácticamente imposible un análisis de la "totalidad cultural". En cualquier caso, como nuestro objetivo no es dar un listado de las magnitudes de la producción y el consumo, sino entender la *evolución* del campo cultural y de la cultura cotidiana, las cuantificaciones serán introducidas dentro de un esquema conceptual que continuará concentrándose a) sobre las principales dinámicas de la cultura —eso es, aquellas que vienen condicionadas por el proceso básico de incorporación de la modernidad, sobredeterminadas por su operación dentro de un contexto específico; el del régimen militar autoritario—, y b) sobre las políticas de "modernización de mercado" que el Gobierno Militar viene aplicando con relativa coherencia desde 1980 en adelante. Abordaremos esta materia tratando, somera y sucesivamente, los diversos sectores del campo: la educación, formal y no formal en sus varios niveles y subsectores, incluyendo al sistema de ciencia y tecnología; la industria cultural, con referencia en particular a la televisión, la radio, la prensa diaria, las revistas, la industria fonográfica y del cine; el sector del arte, incluyendo la literatura, el teatro, la música y la plástica; y la Iglesia Católica. A continuación incluimos un análisis de los conflictos en el campo, para luego tratar las transformaciones de la cultura cotidiana y las dinámicas del consumo cultural.

1. La centralidad del sistema educacional

La sociedad chilena es en el contexto latinoamericano una sociedad de escolarización relativamente avanzada pero desigual. Dentro de ella, la educación desempeña un papel central en la distribución del poder y del status y en la creación de "estilos de vida" asociados a pautas de consumo cultural. Al mismo tiempo, los niveles de instrucciones de la población han venido expandiéndose sostenidamente, hasta alcanzar su actual estado de desarrollo, que se muestra en el siguiente cuadro.

Según permite observar el cuadro 1, a nivel de los grupos de edad más jóvenes, la falta de escolarización ha casi desaparecido, tanto entre los hombres como las mujeres, al mismo tiempo que sus niveles de instrucción son consistentemente más altos, en promedio, que aquéllos alcanzados por sus padres. Las mujeres participan en proporción semejante a los hombres en los beneficios de la educación y muestran ocasionalmente, en los grupos más jóvenes y los niveles superiores, una participación levemente superior a éstos.

El incremento en los niveles de escolarización de la *población económicamente activa* se observa en el siguiente cuadro.

La población analfabeta de 15 años y más aumenta levemente entre

Cuadro 1
Niveles de Instrucción por sexo: Chile 1982

Grupo Edad	Población Total	Sin escolarización*	1er. Grado al 2do. Grado*	Acceden. Secundario	Post*
Masc.					
15-19	1.302.888	1,6	47,8	48,3	2,3
20-24	1.169.037	1,8	39,7	46,3	12,2
25-29	931.896	2,5	42,4	42,7	12,4
30-39	1.450.116	4,7	55,7	29,6	10,0
40-49	1.043.074	8,8	62,8	23,2	5,2
50- +	1.779.612	17,1	61,1	18,6	3,2
Fem.					
15-19	665.552	1,5	46,3	49,8	2,5
20-24	595.598	1,8	38,9	47,2	12,1
25-29	479.199	2,6	42,3	43,2	11,9
30-39	744.533	5,1	56,1	30,1	8,7
40-49	538.126	9,4	63,3	23,4	3,9
50- +	962.881	18,0	61,2	18,8	2,0

Fuente: UNESCO, Anuario Estadístico, 1987.

Cuadro 2
Distribución de la PEA por años de instrucción;
Chile 1960-1980

Años de Instrucción	1960	1970	1980*
Población total	100	100	100
0-3	35,4	23,7	14,4
3-6	35,2	31,6	27,6
7-9	12,3	13,0	19,6
10+	12,3	17,5	35,4
s/i	4,8	14,2	2,9

* Instituto Nacional de Estadísticas, Encuesta Nacional de Empleo, octubre-diciembre de 1980.

Fuente: CEPAL, LC/R. 504, junio de 1986.

1970 y 1982, pasando de 595 mil a 681 mil; pero disminuye porcentualmente dentro de la población total mayor de 15 años, pasando de 11,0% a 8,9%; entre la población masculina alcanza en 1982 a 8,5% y, entre la femenina, a 9,2%. Alrededor de 1980, la proporción de analfabetos en la población mayor de 15 años alcanzaba a 6,1% en Argentina, a 25,6% en Brasil (16,8 en el sector urbano), a 14,8% en Colombia, a 18,1% en Perú y a 15,3% en Venezuela. En México, en 1985 se sitúa en 9,9% y en Cuba, en la población de 10 y más años de edad, llegaba a 3,8% el año 1981.³⁶

En perspectiva, puede anotarse que mientras en 1960 sólo un 8% de la población de Santiago había cursado el último año de la educación general básica —que entonces se prolongaba por seis años—, en cambio ese porcentaje aumenta hasta situarse actualmente en 31%, con un ciclo obligatorio de 8 años. Los estudiantes de la enseñanza secundaria, a nivel nacional, se han multiplicado por dos entre 1970 y 1985 y, en el nivel terciario, un 40% de los egresados corresponden, en la actualidad, a instituciones de tercer grado distintas de las 8 universidades tradicionales.

La tasa bruta de escolarización, para los diversos grados de la enseñanza, muestra que en Chile (1984) la educación básica se ha universalizado, que en el segundo grado participan 66 de cada 100 jóvenes del respectivo grupo de edad y que al nivel terciario o postsecundario lo hacen 15 de cada 100 jóvenes. De acuerdo con estas cifras, Chile se ubica entre los países de mayor escolarización primaria y secundaria en la región latinoamericana, y en el rango inferior de los países intermedios en cuanto a la escolarización postsecundaria. El desarrollo de la educación pre-escolar, por el contrario, es todavía incipiente, abarcando en 1985 a 202 mil niños, de los cuales 49% corresponden al sexo femenino.

La matrícula de primer grado ha disminuido en números absolutos durante el período del régimen militar, pasando de 2.299 en 1975 a 2.062 en 1985, pero manteniéndose en ambos años la tasa de escolarización bruta por encima de 100%. Durante un período similar (1975-1983), el porcentaje de repetidores de la educación de 1^{er} grado ha disminuido casi a la mitad, pasando de 12 a 7% en la población escolar total de la enseñanza básica, y de 11 a 6% en el caso de la población femenina. La matrícula de segundo grado o media, se ha incrementado durante la década de 1975 a 1985 de 449 mil a 668 mil; el mayor aumento lo ha experimentado la enseñanza media general, cuya matrícula pasa durante el mismo período de 286 mil a 539 mil. En cambio, la educación media de carácter vocacional o técnica disminuye durante el período, pasando la matrícula de 163 mil a 129 mil. En el sector de la enseñanza media general, el porcentaje de repetidores disminuye de 12% en 1975 a 8% en 1983.

El número de estudiantes de tercer grado o nivel terciario (postsecundario) por cada 100 mil habitantes aumenta desde 1.448 en 1975 a 1.636 en 1985, año en el cual la misma cifra para algunos otros países de la región era la siguiente: Argentina, 2.786; Brasil, 1.140 (1983); Colombia, 1402; Cuba, 2.343; Ecuador, 3.078; México, 1.529; Perú, 2.271; Uruguay, 3.040; Venezuela, 2.559. En números absolutos, la matrícula de tercer grado aumenta en Chile de 149.647 en 1975 a 196.937 en 1985. La matrícula pro-

piamente universitaria, que en el año 1975 correspondía a toda la matrícula del nivel, disminuye durante el período indicado de 150 mil a 132.254, con una mayor incidencia en la caída de la matrícula femenina, la que pasa de representar un 45% del total de la matrícula en 1975 a un 40% en 1985. Por el contrario, aumenta la matrícula del resto de las instituciones de enseñanza superior no universitaria creadas al amparo de la nueva legislación dictada el año 1980, hasta alcanzar a 56.411 en 1985, con una participación de la matrícula femenina correspondiente al 50% del total.

En la enseñanza básica trabajan alrededor de 65.000 maestros, en la enseñanza media 17.000 y en la enseñanza terciaria 15.000.

En suma, el sistema formal de educación comprende cerca de 100 mil maestros y a 3 millones de alumnos, distribuidos en más de 10 mil establecimientos educacionales a lo largo y ancho del territorio nacional. El Estado destina anualmente alrededor de un 4,4% del PNB a la educación, que se reparte en los siguientes porcentajes entre los respectivos niveles (1985): 51% educación básica, 19,5% educación media, 20,3% educación superior y, otros, 3,3%.

Interrelacionado con el sector de la educación superior existe dentro del campo cultural, además, un subsistema de importancia estratégica en la evolución e incorporación de la modernidad; el sistema de ciencia y tecnología o de investigación y desarrollo tecnológico. Sus dimensiones en Chile no son bien conocidas, en parte porque este subsector se encuentra internamente diferenciado por lo menos en cuatro ámbitos, respecto de dos de los cuales existe escasa información. En efecto, el sistema de ciencia y tecnología desarrolla sus actividades a través de las *instituciones universitarias* (en el caso chileno, básicamente a través de 4 o 5 de las universidades más antiguas); a través de organismos internacionalmente clasificados como de *servicios generales*, correspondientes a centros estatales no universitarios de investigación y desarrollo; a través de unidades localizadas en el *sector productivo* (público y privado) y, además, a través de un subsector de *centros privados* que, en el caso de algunas disciplinas de las ciencias sociales, realizan la mayor actividad de investigación en esas áreas.

Una estimación aproximada del personal científico que trabaja en los dos sectores netamente académicos —el universitario y el de los centros privados de ciencias sociales— hace ascender la cifra total de investigadores activos a 2.600 (año 1981), correspondiendo el 28% a investigadores del área de biología; 14% al área de las tecnologías y ciencias agropecuarias; 13% al área de la química; 13% al área de las ciencias sociales; 11% al área de la salud y 11% al área de las ingenierías. La cifra total de científicos e ingenieros dedicados a labores de investigación y desarrollo se estima para Chile en alrededor de 4.500. El gasto público dedicado a esas actividades asciende anualmente al equivalente a 0,5% del PNB, destinándose (1980) 36,6% al sector de educación superior, 4,9% al sector de servicios generales y 58,5% al sector productivo, repartidos entre 2,5% en *actividades integradas* y 56% en *actividades no integradas*.

En términos comparativos, entonces, el sistema de ciencia y tecnología

chileno se ubica, por su magnitud, detrás de los de Brasil, México y Argentina, siendo en tamaño relativamente semejante a los de Cuba y Venezuela. Su productividad, medida de acuerdo con las publicaciones de la llamada "ciencia mainstream", en cambio, coloca a la producción chilena en la primera línea dentro de América Latina, aunque en gran medida ello obedece a la producción de la biología y las ciencias de la salud.³⁷ El financiamiento de las actividades de investigación y desarrollo proviene, en su casi totalidad, de *fuentes públicas*, con la excepción del área de las ciencias sociales donde, en el caso de los centros académicos independientes, proviene en su casi totalidad de la cooperación externa.

Durante el período del régimen militar autoritario, la centralidad previamente alcanzada por la educación —fenómeno típicamente expresivo del proceso de incorporación de la modernidad— no ha variado; incluso podría decirse que, de manera contradictoria, ha tendido a aumentar. En efecto, los cambios experimentados durante este período por el sistema de educación son múltiples, aunque de desigual importancia.³⁸ Aquellos más significativos, desde el punto de vista que aquí interesa, corresponden al movimiento general impuesto por el Gobierno Militar al campo cultural, en torno de los dos ejes del control/disciplinamiento y de la reorientación de los procesos de campo en dirección al mercado.

Sobre todo durante la primera fase —aunque con inercias que perduran hasta ahora— el sistema educacional en su conjunto y en cada uno de sus niveles fue sometido a una política de control y de "congelamiento" que, en lo básico, estuvo dirigida a aumentar la "insulación" del sistema respecto de sus interacciones con la sociedad, en particular con la política, y a incrementar las capacidades de control interno por parte de las autoridades del sistema escolar. Se trataba, en pocas palabras, de "neutralizar" (despolitizar) y tecnificar el proceso de enseñanza/aprendizaje, retrayéndolo al interior de los establecimientos y aumentando la eficacia y el valor simbólico de todos los dispositivos de control disciplinario sobre y dentro del proceso escolar.

Al efecto, las instituciones escolares fueron colocadas, inicialmente, bajo un doble mando: del Ministerio de Educación, del cual dependían tradicionalmente, y de las propias Fuerzas Armadas, a través de su dirección de Institutos Militares y, en el caso de las universidades, de los rectores-delegados designados por el Gobierno y revestidos de atribuciones especiales en su calidad de "interventores". Las aulas comienzan entonces a ser "depuradas" de profesores y alumnos que hubiesen estado identificados con los partidos de la Unidad Popular; al mismo tiempo que se clausuraban todas las instancias de participación que habían venido desarrollándose dentro del sistema educacional, tanto dentro de los establecimientos como en su relación con órganos representativos de la comunidad. Simultáneamente se proscriben las asociaciones de maestros y de alumnos y se refuerza la autoridad de los rectores y directores de los establecimientos, dotándoselos de atribuciones extraordinarias. La metáfora movilizadora de todas estas medidas —que alcanzan incluso a la prohibición de hacer chistes respecto de las autoridades de Gobierno en los establecimientos escola-

res— era la de que los estudiantes van a la escuela a estudiar y punto. Se pone por lo mismo gran énfasis en la disciplina escolar, en el valor de los exámenes y de las clasificaciones, en el orden dentro de la sala de clases, en el comportamiento y la presentación de los alumnos, en la dedicación de los maestros a los contenidos curriculares y, en general, en todos los ritos de integración moral a la escuela. Los planes y programas no experimentan en cambio, durante esta primera época, grandes modificaciones, aparte de suprimirse las referencias al marxismo o de la indicación a los maestros de que la revolución industrial debía ser tratada, primordialmente, como un proceso económico técnico, dejando de lado sus supuestos e implicaciones políticas y sociales.

En el caso de las universidades, la "depuración" adquiere una dimensión mayor, alcanzando no sólo a innumerables académicos y estudiantes sino, además, a unidades estructurales del sistema de la educación superior. Así, se suprimen varios departamentos, centros y programas, especialmente en el sector de las ciencias sociales, en el área de los estudios de la realidad nacional y en el campo de la extensión universitaria. La inspiración ideológica de estas medidas es la misma siempre: devolver a las universidades su sentido "propiamente académico", retirarlas del bullicio de la sociedad y de su contaminación por la política, y recortarles todo aquello que no tiene que ver con su dedicación al cultivo del espíritu y a la formación profesional.

En esos años iniciales del régimen militar, asimismo, llega a ser decisiva la restricción que se impone al gasto público en general y, en particular, al gasto destinado a educación. De hecho, será en nombre de la "falta de recursos" que se impondrán algunas de las medidas "depuradoras", bajo el nombre aparentemente más tranquilizador de "racionalizaciones presupuestarias y administrativas". Como efecto de este menor gasto educacional del Estado, y de la caída de los ingresos de las familias, especialmente de los sectores pobres, se produce asimismo una caída en la matrícula básica y un aumento de la *deserción escolar*. Los maestros y académicos ven deteriorarse sus ingresos, sin que puedan recurrir a sus medios corporativos de defensa; al mismo tiempo que la reducción en las inversiones educacionales afecta en algunos puntos la calidad del proceso de enseñanza, fenómeno que se hace sentir más fuertemente en las universidades, donde esta dimensión de restricción económica combinada con la del disciplinamiento político de las instituciones de educación superior estimula la salida de académicos y científicos afectando a veces la existencia o la productividad de los pequeños núcleos que se habían ido formando lentamente en diversas áreas de la investigación más especializada. En general, durante este mismo período se produce un incremento relativo de las *desigualdades educacionales*: el promedio de escolarización de la población mayor de 12 años disminuye, entre 1976 y 1981, de 8,1 a 7,5 años. Este último año, un 6,8% de esa población contaba sólo con el 0,2% del total de años de escolaridad que se dan en ella, en tanto que otro 6,1% concentraba el 15% de esa escolaridad. Asimismo, en los años posteriores a 1974 aumentó la deserción escolar a nivel básico fiscal. Así, mientras en el período 1970-72

la deserción promedio, durante los tres primeros grados del nivel, alcanzaba a 17,3%, en el periodo 1974-76 se elevó al 23,2%, lo cual representa un aumento del 34%.

Sin embargo, no es sino hasta 1980 que el Gobierno Militar arriba finalmente a una propuesta global de reforma del sistema educacional, inscrita dentro del esquema básico de la "modernización de mercado" de la sociedad chilena. En lo fundamental, dicha reforma —cuya gestación y aplicación se sitúa en el bienio 1980-1981, pero cuyos efectos y reformulaciones aún se hallan en curso— puede resumirse en los siguientes puntos:

a) reducción del papel del Estado a garantizar la universalidad del acceso a la enseñanza primaria y a mantener —sin aumentarlos— sus niveles de compromiso en el caso de la educación media y superior, traspasando la responsabilidad por su expansión y desarrollo al sector privado. En la práctica, esto significaba abandonar el viejo y consagrado principio del "Estado docente", que había llegado a ser parte de la ideología estatal nacional;

b) redefinición de los objetivos de la enseñanza primaria en términos de la formación de buenos ciudadanos y buenos trabajadores, flexibilizándose al efecto los planes y programas de enseñanza de manera de asegurar un núcleo mínimo común para toda la población escolar y abriendo la posibilidad para que las escuelas amplíen ese núcleo de acuerdo con las necesidades y posibilidades de sus "clientelas";

c) replanteamiento de la educación media de modo que ella se constituya en un nivel terminal, dotando a sus egresados de las capacidades necesarias para incorporarse al mercado laboral, y redefiniendo su carácter de canal educativo de acceso a la universidad;

d) invitación al sector privado productivo para que se haga cargo, progresivamente, de la enseñanza vocacional o técnica;

e) apertura del sistema de enseñanza universitaria de modo que puedan surgir nuevas instituciones tanto universitarias como no universitarias de educación superior, bajo el impulso de iniciativas privadas, estableciéndose en la nueva legislación la existencia de tres tipos jerárquicos de instituciones de tercer grado: universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica;

f) intento por promover la investigación tecnológica, por incentivar los contactos entre la universidad y el sector productivo y, más recientemente, por inducir una mayor orientación de mercado a la investigación, facilitándose asimismo tributariamente los aportes de las empresas a las universidades;

g) descentralización administrativa del sistema escolar en sus niveles básico y medio, traspasándose a las municipalidades la gestión de los establecimientos ubicados dentro de la respectiva comuna, los recursos para su financiamiento y la capacidad para contratar a los maestros, los que dejan de tener el estatuto de funcionarios públicos sometidos a un régimen común;

h) en general, introducción de mecanismos competitivos o cuasi-competitivos para la distribución de una parte de los recursos que el Estado destina al sistema educacional y al de ciencia y tecnología, "atándose" por

ejemplo los subsidios otorgados a la enseñanza básica privada gratuita, a la asistencia escolar de los alumnos y la repartición de subsidios indirectos del Estado a la educación superior, al número de los mejores estudiantes egresados de la educación media que se inscriben en el primer año de las respectivas carreras universitarias ponderadas para estos efectos según una escala diferencial de costos imputados a su enseñanza; o introduciendo, a través de la creación del Fondo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, un concurso anual de proyectos de investigación para repartir recursos estatales destinados al fomento de las ciencias.

De todos estos cambios planeados o introducidos, han resultado unas pocas dinámicas significativas de transformación del sistema de educación, que son las que aquí interesa analizar.

Primero, la *relocalización administrativa* de los establecimientos de enseñanza primaria y secundaria, anteriormente bajo la tuición centralizada del Ministerio de Educación, los que han sido masivamente transferidos a las municipalidades, generándose en torno de este cambio una serie de consecuencias que todavía no terminan por analizarse exhaustivamente ni de producir, seguramente, todos sus efectos. Un total de 6.340 establecimientos educacionales son actualmente administrados por las municipalidades a lo largo del país, habitualmente a través de una corporación que recibe una subvención estatal por cada alumno que asiste diariamente a clases. Es evidente que, bajo las condiciones propias de funcionamiento político-administrativo del Estado militar autoritario, la llamada descentralización no ha significado, ni se buscaba eso, una mayor democratización en el manejo de los establecimientos, ni su acercamiento por esa vía a las comunidades locales. Sin embargo, en los hechos, la municipalización ha significado una nueva forma de administración escolar, que en algunas comunas ha resultado beneficiosa, al introducirse una mayor eficacia en las resoluciones administrativas, una preocupación más directa de la autoridad local por el proceso educacional y sus condiciones materiales de funcionamiento, e incluso en algunas partes una mayor cercanía entre la comunidad y la escuela. Al mismo tiempo, la municipalización escolar está resultando en una redefinición de la identidad tradicional del maestro, el cual hasta ahora se había definido como un servidor público (salvo en el sector privado pagado de la educación), encontrándose ahora sometido a un régimen de contrato y trabajo mucho más variado, que dificulta a su organización sindical unitaria y la aspiración a un tratamiento salarial relativamente homogéneo garantizado a escala nacional por el Ministerio de Educación. Por último, está en vías de crearse una nueva generación de administradores de políticas y establecimientos educacionales a nivel local, cuyo desempeño incidirá poderosamente en el futuro del desarrollo de la educación nacional.

El rasgo más controvertido, en cualquier caso, de la "municipalización educativa" ha sido el de su efecto, a mediano y largo plazo, sobre el desarrollo de la educación en Chile, desde un doble punto de vista: a) acaso éste mantendrá, en las nuevas condiciones, su tendencia socialmente igualitarista o se segmentará más intensamente, ofreciendo oportunidades de acceso, de permanencia y de egreso diferenciales que pudieran asociarse

sistemáticamente con la estratificación social de las comunas y con sus ingresos; b) acaso la municipalización contribuirá, y de qué forma, a mejorar la calidad de la enseñanza básica o de masas, manteniendo su triple función como fuerza de integración a la comunidad nacional, como instancia de socialización común y como primer peldaño para la adquisición de competencias cognitivas y hábitos de aprendizaje y comportamiento de calidad creciente. Hay indicaciones que sugieren que, durante estos años, efectivamente la educación se ha apartado del patrón "igualitarista" de desarrollo, mostrando en cambio tendencias de segmentación social (ver cap. II, B, 3).

Segundo, un *panorama institucional completamente nuevo*, y hasta hace algunos años impensable, de la *educación superior*, la cual ha pasado de estar compuesta por 8 universidades de carácter eminentemente público, con independencia de su naturaleza jurídica, a una situación donde existen más de 20 universidades, más de 20 institutos profesionales, cerca de 200 centros de formación técnica y casi medio centenar de centros académicos independientes.

Esta explosiva *diferenciación institucional*, ocurrida en un breve período, tiene por actor principal al sector privado, aunque en el caso de las universidades, la mayoría de las nuevas han resultado de la reorganización de las Universidades de Chile y Técnica del Estado (hoy Universidad de Santiago), las cuales fueron forzadas a desprenderse de sus sedes regionales, que —mediante fusiones y reacomodos— dieron lugar a más de una decena de nuevas universidades regionales financiadas por el Estado. Además existen tres universidades privadas que operan exclusivamente en el mercado (o sea, no reciben, a diferencia de todas las anteriormente mencionadas, ningún subsidio estatal, directo o indirecto), y otras cinco se encuentran en formación.

La nueva legislación ha reservado a las universidades el otorgamiento de los grados académicos superiores y el derecho exclusivo a impartir la enseñanza de las carreras que habilitan para el ejercicio de doce de los títulos profesionales de mayor prestigio social, como el de médico, ingeniero, agrónomo, químico-farmacéutico, economista, psicólogo, etc. Por debajo de las universidades existen los institutos profesionales que pueden impartir todas las carreras, con excepción de las doce reservadas a las universidades; y por debajo de éstos, los Centros de Formación Técnica, que se hacen cargo de la enseñanza de carreras técnicas de corta y mediana duración.

Paralelamente a todo este sector —el formalmente reconocido por la legislación—, existen los centros académicos independientes de ciencias sociales, los cuales en un número de aproximadamente cincuenta, realizan actividades de investigación, de enseñanza, difusión y promoción del desarrollo.³⁹ Estos últimos nacieron en su mayoría como parte del movimiento cultural contestatario, aunque en los años recientes su evolución ha sido más compleja, transformándose algunos de ellos en centros académicos nacional e internacionalmente reconocidos, y otros en centros intelectuales de articulación política, otros en organismos de acción y capacitación social. En breve, también en este subsector se observan intensas presiones de

diferenciación —tanto horizontal como vertical— que en lo básico responden a movimientos de adaptación de los Centros al mercado de financiamientos vía proyectos/subsidios.

En suma, puede decirse que en el nivel de la educación superior ha surgido un mercado más dinámico que interactúa complejamente con el Estado, el que establece regulaciones legislativas para su operación, financia mediante subsidios directos e indirectos a un subsector del mismo, contribuye mediante el crédito fiscal universitario al pago de aranceles de matrícula que ahora son usualmente cobrados por las universidades y las demás instituciones de enseñanza superior, y mantiene el control —por vía de la intervención administrativa— de las universidades.

Dentro de las instituciones universitarias, a pesar del control mantenido por el Gobierno Militar, se han reconstituido sin embargo los principales actores corporativos, bajo la forma de Asociaciones de Académicos, y el movimiento estudiantil en torno de sus organismos representativos: los centros de alumnos y las federaciones de estudiantes. Sobre este último aspecto —el de los actores y sus demandas en el campo cultural— volveremos más adelante, en una sección especial.

Además, el sistema de financiamiento de las instituciones de este subsector se ha modificado por completo, y continúa experimentándose con nuevas formas que, en general, buscan incentivar la competencia entre las instituciones y, por esta vía, supuestamente, mejorar la calidad de la docencia y la pertinencia o utilidad de la investigación. Independientemente de que el Estado ha reducido, globalmente, sus aportes a la educación superior —afectando básicamente las remuneraciones de los académicos y la renovación de equipos y bibliotecas—, en la actualidad los recursos de *financiamiento directo* destinados a las instituciones universitarias tienden a disminuir, mientras que el resto de los recursos son entregados por vías indirectas que contemplan alguna forma de competencia para su obtención.

Por fin, se ha producido en el ámbito educacional —como muestra nuestro análisis— una generalizada dinámica habitualmente llamada de "privatización", consistente no sólo en el traspaso de responsabilidades desde la administración del Estado a la iniciativa de los privados y su regulación por el mercado sino, más ampliamente, de creciente participación de la *sociedad civil* en las tareas educacionales, dirección hacia la cual apunta idealmente la descentralización que, como vimos, ha quedado restringida a una "municipalización" no participativa debido a las condiciones del régimen; al igual que las modificaciones introducidas en la educación superior, el surgimiento y desarrollo del sector independiente de centros académicos, la multifacética participación de organismos no gubernamentales en tareas educacionales, especialmente al nivel de adultos en los sectores populares, y de las empresas a través de los cursos organizados al efecto y que cuentan con incentivos tributarios especiales, cursos que, durante el período 1975-1986, sumaron 100 mil aprobados por el servicio Nacional de Capacitación y Empleo; esto es, más de 8 mil cursos por año.

De una manera u otra, con perspectivas ideológicas diversas y a veces incluso antagónicas, empleando medios y estilos pedagógicos de los más

variados, la sociedad —a través de grupos, organizaciones, centros, las iglesias, las empresas, etc.— ha ido asumiendo un papel creciente en la compleja y voluminosa empresa de la educación que, estructurada en torno del sistema educacional formal y de sus distintos niveles, reconoce sin embargo una variedad creciente de iniciativas adicionales que se desarrollan en medio de los sectores populares, entre los obreros y empleados, entre los altos ejecutivos de las empresas, en Santiago y en provincias; con contenidos disímiles, aunque dentro de un esquema relativamente previsible. En efecto, abundan, por un lado, y se desarrollan continuamente nuevos cursos ligados al desempeño en el sector de los servicios, especialmente en materias comerciales, de administración y computación; por otro, desde las varias vertientes de la llamada "educación popular", que reconoce filias habitualmente dentro del campo no oficial de la cultura alternativa, se promueven cursos y experiencias pedagógicas con objetivos liberacionistas, de organización de base, de defensa de los derechos de los sectores subalternos y de promoción de las tareas del desarrollo.

Por eso mismo afirmábamos al comienzo de esta sección que más que perder centralidad durante estos años la educación se ha visto redefinida en su sector formal, y ha aumentado su papel como instancia de consumo, de formación de sociabilidad, de expresión de solidaridad, de entrenamiento político o parapolítico y de adquisición de competencias comunicativas e instrumentales a nivel de la sociedad civil. Si cabe decirlo así, la sociedad entera —como viene ocurriendo ininterrumpidamente a lo largo del transcurso del proceso de incorporación de modernidad a la cultura— se ha "educacionalizado" progresivamente, presionando por la diferenciación de las ofertas educativas, por una más variada institucionalización de los procesos pedagógicos, hacia la prolongación de los años de escolarización, la adopción de pautas de consumo en este campo propias de la idea de una "educación permanente" y hacia una multiplicación de los valores simbólicos atribuidos a estas experiencias, y no sólo a su certificación por el sector escolarizado o académico formal.

2. La industria cultural: el subsector más dinámico del campo y sus evoluciones recientes

La educación no es el primer bien cultural que en nuestra sociedad alcanza una distribución masiva. De hecho, la distribución masiva de bienes de salvación —"beneficios religiosos" como también los llama a veces Weber— ocurre mucho más temprano, pero su difusión no constituye en Chile un hecho constitutivo de la modernidad; permanece todavía circunscripta —hasta la segunda mitad del presente siglo— al modelo cultural tradicional.

La llamada "industria cultural" es por eso, seguramente, el modo de producción moderno de bienes simbólicos cuyos productos alcanzan primero una difusión masiva en la sociedad, a través de la relativamente temprana difusión de la radiofonía, que permite incorporar al mercado de consumo

a sectores con bajos niveles de instrucción, incluyendo a un fragmento de la población iletrada. En cambio, el desarrollo de su sector líder, la televisión, es mucho más reciente, y su masificación ocurre con posterioridad a la masificación educacional, que se inicia en Chile en la década del 60.

Algunos han querido ver, en la sucesión de los aparatos típicos de organización de los respectivos procesos culturales correspondientes a esos tres modos de producción —esto es, la iglesia, la escueia y la industria cultural— una suerte de línea sucesoria en las formas hegemónicas dentro del campo cultural.⁴⁰ Sin embargo, el fenómeno que analizamos es de mayor alcance que meramente un cambio en las modalidades institucionales hegemónicas del campo. En efecto, se trata de transformaciones que experimenta la propia estructuración del campo y la cultura cotidiana, bajo el peso variable, y en combinaciones también cambiantes, de los diversos modos de producción, ninguno de los cuales "sucede" al anterior —eliminandolo o subordinándolo— sino estableciéndose entre ellos nuevos patrones de interrelación. Así, el modo de producción organizado en torno de la distribución de bienes de salvación no desaparece con la modernidad, según algunos preveían, apelando a un proceso supuestamente irresistible de "secularización"; en cambio, se incorpora a ella, transformándose. Pierde peso relativo en ciertas dimensiones, pero en otras es posible que lo aumente. Cambia su posición dentro del campo así como cambia de significado dentro de la cultura cotidiana. Además, cada uno de esos reordenamientos y cambios sólo puede entenderse en sus contextos históricos respectivos, sin que existan procesos globales e invariantes de un contexto a otro. El hecho de que puedan distinguirse y describirse ciertas tendencias generales, propias de los procesos de incorporación de la modernidad, —como el aumento del prestigio y de la utilidad o pertinencia práctica del modelo de conocimientos científicos, un "desencantamiento" inicial del mundo simbólico religioso que luego da paso a nuevas formas de religiosidad, una progresiva escolarización de las sociedades, un desarrollo con tendencias "universales" de las industrias culturales, etc.— no debe confundirse con una "explicación" suficiente de esos fenómenos ni menos con una supuesta necesidad en invariabilidad de ellos.

En el caso que analizamos, el surgimiento de la industria cultural representa seguramente el fenómeno más explosivo de la actual coyuntura de incorporación de la modernidad, en parte porque los demás procesos de masificación cultural estaban ya bien establecidos, en parte porque el surgimiento y desarrollo del subsector de la industria cultural ha impulsado una completa redefinición de la cultura cotidiana y la ha reorientado, dando lugar al desarrollo de una específica *cultura cotidiana de masas* en torno de la operación del "mercado de mensajes". En la práctica, nos encontramos aquí con el surgimiento de un nuevo "mercado cultural masivo" que, en el caso de la televisión, se despliega en un corto período de tiempo, se extiende nacionalmente, penetra en el interior del hogar, e incorpora masivamente a todos los grupos y segmentos de la sociedad, incluyendo de manera muy significativa a las mujeres, los niños y adolescentes, los ancianos, a los sec-

tores populares, a los públicos provinciales y de pueblos de menor tamaño; imbricándose además, estrechamente, con la publicidad, con ciertas franjas de la educación, con las funciones informativas de la prensa, con la industria del disco, con la escenificación y la propaganda políticas, etc.

El fenómeno de la *industria cultural* representa pues un nuevo subsector del campo que se hace cargo de la producción, comercialización, reproducción y almacenaje de bienes y servicios culturales (mensajes o "ideologías livianas") a escala industrial, teniendo presente consideraciones de rentabilidad económica y de difusión masiva que, en el caso de Chile, opera cada vez más fuertemente desde el sector privado y/o sujeto a reglas de financiamiento que son típicamente mercantiles.

Desde esta perspectiva, el desarrollo de la industria cultural puede ser entendido, a la vez, como un complejo proceso de transformaciones que ocurren en el polo del campo cultural y como un fenómeno específico de ampliación y transformación del mercado de bienes simbólicos. Bosquejemos rápidamente esas evoluciones interactivamente reforzadas.⁴¹

En Chile, a la manera de lo que ocurre en las demás sociedades latinoamericanas, el campo cultural se conformó inicialmente en función del mercado tradicional de élites, que opera en torno de la valorización del capital social y cultural heredado. A medida que se consolidaban las instituciones propias de ese campo, y que éste adquiría mayor autonomía, aquellas adoptan un definido estilo de "producción para las élites": prensa "seria", escuelas minoritarias y altamente selectivas, universidades elitarias, arte regido por el gusto de las minorías, etc. Toda ocasión de participación y consumo culturales es, al mismo tiempo, una ocasión de *distinción social*. Paralelamente se desarrollan las primeras manifestaciones de "cultura masiva" (no "de masas" en el sentido específico en que empleamos este término a lo largo del documento), bajo la forma de variadas expresiones de "cultura popular", cuyos productores rara vez adquieren sin embargo legitimidad *dentro* del campo cultural ni rigen su producción por las normas prevalecientes en éste. El mercado tradicional de élites concentra todavía en esta fase gran parte de la *infraestructura receptiva* de la comunicación culturalmente valorizada. Es entre los sectores de altos ingresos y "herederos" del capital cultural que se concentran las oportunidades de acceso a la enseñanza secundaria y superior, y que se encuentran los poseedores de radioreceptores y tocadiscos, los compradores de obras de arte, los lectores de libros, etc. El mercado de consumo popular de la cultura funciona, en cambio, alrededor de circuitos más bien marginales, habitualmente precarios y de duración ocasional, empleando medios de producción tecnológicamente simples y produciendo bienes cuya valoración se encuentra íntegramente subordinada al juicio de alta cultura. Solamente las expresiones que caben dentro de ésta última reciben apoyo público y cuentan con el "meceñazgo" privado. En esta fase, el fenómeno más significativo de "cultura masiva" es el de la religión, extendida en medio de vastos sectores sociales y segmentada entre expresiones típicas de élite y formas de religiosidad popular.

Todo esto empieza a cambiar con el surgimiento de la industria cultural, cuyas primeras e incipientes manifestaciones aparecen en Chile alrededor de 1920, con la radio, y con el cambio desde una prensa dividida en dos circuitos —uno dirigido hacia el mercado de élite y otro hacia el mercado popular— a una prensa "integrada" de masas, que unifica su mercado y lo redefine, segmentándolo, como un mercado masivo. Pero, en realidad, es sólo con posterioridad a 1960 que puede empezar a hablarse en Chile propiamente de una industria cultural, con un complejo de instituciones diferenciadas operando frente a un mercado de masas segmentado en función de una diversidad de públicos.

Se combinan, para dar por resultado dicho proceso de consolidación sectorial, varios factores que se refuerzan entre sí. Primero, la emergencia de un *mercado de demandas culturales*, cuya conformación viene facilitada por la universalización de la enseñanza a nivel básico; por la distribución más amplia y, simultáneamente, por los cambios ocurridos en la naturaleza de los medios (cognitivos y técnicos) requeridos para acceder a la producción de bienes simbólicos; por la constitución de espacios de comunicación que —como en el caso de las ciudades— viabilizan la producción y el consumo de masas; y por la expansión de los estratos ocupacionales que se configuran distintivamente como estamentos a partir de sus estilos de consumo cultural.

La emergencia de ese mercado de demandas está ayudado, asimismo, por el desarrollo experimentado por su *infraestructura de recepción*, a través de la masiva difusión de los correspondientes "medios de recepción", cognitivos (como la lectura) o técnicos (aparatos).

La industria cultural requirió para su consolidación, además, del interjuego de varios procesos específicos de campo, tales como la dotación de los necesarios capitales, el dictado de leyes y reglamentos, la provisión de subsidios provenientes del Estado, la profesionalización del personal que opera en las instituciones, la adquisición y transferencia de tecnologías, la organización y el desarrollo de las empresas de producción, la aparición de los servicios de apoyo requeridos (departamentos de investigación, servicios de marketing, laboratorios, servicios de importación especializada, etc.)

El desarrollo de la industria cultural, a su vez, presenta diversas dinámicas internas, produciéndose avances y cambios entre sus varias ramas, como mostraremos en las siguientes secciones.

A. El subsector líder de la industria cultural: la televisión

Establecida experimentalmente en Chile en el año 1956, la televisión inicia sus transmisiones al año siguiente, siendo entregada su gestión, inicialmente, a algunas universidades y agregándose, posteriormente, un Canal Nacional de propiedad del Estado. Es un rasgo peculiar del desarrollo de este subsector que su gestión haya sido encomendada a las instituciones universitarias y luego complementada con un canal público. Sólo recientemente, en el año 1987, se ha admitido la participación del sector pri-

vado en la gestión de este medio, pero exclusivamente en la franja de la televisión por cable. Con todo, tanto la televisión universitaria como la estatal han debido organizar sus actividades, sobre todo a partir de 1980, en torno del financiamiento proveniente del *mercado publicitario*, o que ha dado a la televisión chilena un carácter similar al de la televisión comercial y privada de cualquier otro país de la región.

La expansión de la televisión ha sido explosiva durante el período del régimen militar autoritario. El Canal Nacional de Televisión abarca a la casi totalidad del territorio nacional a partir del año 1975. De alrededor de 50 estaciones a mediados de la década pasada pasa a disponer de más de 100 estaciones diez años después. El Canal de Televisión de la Universidad Católica de Chile inicia su expansión territorial, a partir de sus transmisiones en Santiago, en el año 1970, llegando a abarcar en la actualidad a una población potencial que corresponde a más del 70% de la población total del país.

El parque de receptores de televisión ha aumentado, asimismo, de manera explosiva, especialmente a partir de 1975, como se muestra en el cuadro siguiente.

Chile ocupa actualmente, de acuerdo con las cifras precedentes, el quinto lugar en la región en términos de disponibilidad de televisores por cada mil habitantes, detrás de Argentina (213), Cuba (197), Brasil (184) y Uruguay (166). La disponibilidad de televisores en los países de la OECD, en cambio, va de 253 por cada mil habitantes en el caso de Italia a 798 en el caso de los Estados Unidos de América. De acuerdo con cifras oficiales nacionales, cerca de dos millones de hogares estarían en posesión de un televisor. La penetración de la televisión (blanco y negro) es asimismo masiva en los medios más pobres, como muestran diversos estudios realizados recientemente en poblaciones marginales y campamentos del Gran Santiago.

Los cuatro canales de televisión que en 1983 cubrían la Región Metropolitana transmitían un total de 410 horas semanales de tiempo. En conjunto, se estima que la televisión chilena transmite anualmente cerca de 23 mil horas, ubicando a Chile entre los 10 primeros países del mundo en términos de horas/año de transmisión. Las horas semanales de transmisión han venido incrementándose fuertemente, sobre todo como efecto de la presión por obtener financiamiento del mercado publicitario, pasando de 224 en 1970, a 350 en 1975, a 370 en 1980 y a 410 en 1983. Los programas extranjeros componen alrededor del 60% de la programación total (1982). Se calcula que un escolar de la Región Metropolitana estaría expuesto anualmente a alrededor de 1.400 horas de televisión, mientras que asiste a la escuela, aproximadamente, entre 800 y 1.200 horas de clase anuales. Según otros cálculos, un joven chileno de quince años habría destinado, en promedio, 10 mil horas de su vida a la televisión. La mayor parte de la programación consiste en los llamados programas recreacionales, pero el porcentaje dedicado a programas informativos no es muy distinto del que existe en otros países de la región, siendo inferior al de Cuba y Uruguay, por ejemplo, pero superior al de México, y parecido al de Brasil.

Cuadro 3.
Receptores de televisión: número y por mil habitantes,
Chile 1970-1985

Año	Número (000)	x 1.000 habts.
1970	500	53
1975	700	68
1980	1.225	110
1985	1.750	145

Fuente: UNESCO, Anuario Estadístico, 1987.

La inversión publicitaria en televisión, que desde 1982 representa más de la mitad del total de la inversión publicitaria en el país, alcanzó a 500 millones de dólares en el año 1981 para descender, al año siguiente, a 290 millones como efecto de la crisis económica. Según datos de la UNESCO, la radio y la televisión en Chile se financian en más del 90% de sus ingresos con la inversión publicitaria, cifra que desciende al 83% en el caso de la televisión y radiofonía públicas. En esos dos subsectores combinadamente —radio y televisión— trabaja un total de alrededor de 3.300 personas. Se trata, por tanto, en el caso de la televisión, de un medio intensivo en capital y que emplea a un número escaso de personal en relación a su cobertura de público; a diferencia de la educación, por un lado, y de la radio, por otra.

En breve, el subsector de la televisión ha alcanzado una presencia masiva en la sociedad chilena: por el número de hogares y personas a las que llega (su mercado), por la cantidad de horas que transmite diariamente y por la variedad de sus ofertas. Además, se ha convertido en el subsector más importante para el mercado publicitario, ligándose estrechamente, por este concepto, al funcionamiento de la economía y, en general, al movimiento del consumo. Se trata, como decíamos, de un sector intensivo en capital, con pocos operarios, centrado particularmente en torno de la producción recreacional. De allí, como hemos dicho anteriormente, que se pueda designar a este medio como el principal productor de "ideologías livianas" dentro de la sociedad. Su masiva presencia logra, en efecto, determinar formas de vida, dando lugar a una nueva cultura cotidiana de masas, pero no configura concepciones de mundo, desplazando con ello el centro de la economía simbólica desde su polo más "pesado" hacia un universo bipolar, donde compiten lado a lado medios productores de "ideologías pesadas" e "ideologías livianas", disputándose la hegemonía de ese universo y la conformación de mundos y concepciones de vida. Retóricamente, es esta lucha en torno del "alma humana" que alimenta el debate entre "apocalípticos" e "integrados" como los llamó Umberto Eco; entre humanistas e industrialistas de la cultura; entre elitistas y populistas culturales, etc.

Político-culturalmente, la televisión ha sido el medio líder dentro del régimen militar autoritario, tal como en el régimen democrático (especialmente a partir de los 30) dicho papel lo desempeñó la educación y, secundariamente, la prensa. La televisión, con su dedicación casi exclusiva a la transmisión de ideologías livianas, y cortada más encima de la escena política, se presta efectivamente para impulsar la "despolitización" de la sociedad, así como su gestión relativamente centralizada y con pocos operarios hace extremadamente fácil —por oposición al sistema educacional, por ejemplo— su control burocrático-administrativo. Además, dentro del movimiento generalizado por subsumir a la sociedad bajo la forma del mercado, la televisión presta una contribución poderosa, no sólo configurando su propio mercado al que se incorporan las familias e individuos de los más diversos sectores de la sociedad sino que, simultáneamente, "escenificando" y "valorizando" todos los mercados, al poner en circulación, a lo largo y ancho de toda la superficie de la sociedad, la centralidad, variedad, deseabilidad e importancia del consumo. Desde este ángulo, la televisión se ade-

cua perfectamente al tipo de proyecto de modernización (de mercado) impulsado por el Gobierno Militar, reforzando la fuga hacia lo privado y dándole al individuo una "salida" hacia la realidad por el lado de los sueños del consumo, de la proyección de sí mismo y de la construcción de identidades mediadas por el mundo imaginario de la comunicación televisiva. En el plano de la información e imaginaria política, la televisión se adecua también funcionalmente a las necesidades del régimen existente, dotando a la política de un doble carácter: amenazante si proviene de los opositores y reasegurador cuando favorece al Gobierno. De hecho, gran parte de la propaganda política del régimen ha jugado, continuamente a lo largo de quince años, en torno de esa simple dicotomía.

En fin, un régimen escasamente ideológico en el plano de la movilización social, pero intensamente ideológico en el plano de la movilización individual obtenible a través de la iniciativa privada y el consumo en el mercado, encuentra en la televisión —con su carácter liviano— un apoyo insustituible. El tipo de "conformismo pasivo" buscado por este régimen se corresponde, asimismo, con esa comunicación que puede ser fácilmente controlada en su producción pero que a la vez penetra insensiblemente en todos los hogares, inundando la esfera privada de imágenes que "fabrican" un mundo: un mundo de contemporaneidad, de ilusión de acceso a lo real, de coparticipación en los mismos mitos integradores, de internacionalismo del hogar, de modelos de vida, de sucesión del tiempo pautada por la obsolescencia de todo lo que es sólido o se suponía duradero, de religión o comentario moral investido de una nueva autoridad, de entretención infinita y cercanía a los ídolos, a los grandes eventos del mundo del espectáculo, etc.

B. La industria radiofónica

La radio constituye el segmento más antiguo de la nueva cultura cotidiana de masas. Ella se configuró inicialmente, a partir de este medio, que hacía caer la barrera del alfabetismo como condición de participación en la cultura. En Chile, la radio empieza a tener difusión masiva desde la década del 40, vinculándose estrechamente al movimiento de la publicidad. Durante esos años se otorgan 40 nuevas concesiones para el establecimiento de radioemisoras y, en la década siguiente, 57.

Hacia 1950 existían en el país 100 receptores por cada mil habitantes, registrándose en el año 1958 alrededor de 80 radioemisoras a lo largo del territorio nacional, 20 de las cuales se ubicaban en la capital. Tres provincias no contaban, sin embargo, con emisoras propias para esa fecha. Desde sus comienzos, además, la radiofonía quedó entregada al *sector privado*, debiendo cada radioemisora obtener la concesión de frecuencia por parte del Gobierno.

Entre 1958 y 1973, el sistema radial chileno amplía fuertemente sus públicos, especialmente a través de la difusión de los receptores transistorizados. El mercado radial se segmenta más pronunciadamente. Durante este período se crean 78 nuevas radioemisoras, 29 de ellas en Santiago. Todas

las provincias cuentan ahora con una o más emisoras. De hecho, 31 de las nuevas radioemisoras creadas durante este período se ubican en localidades que antes no contaban con ninguna. La estructura de propiedad del sistema, asimismo, se modifica durante esos años, dando lugar a un más intenso proceso de concentración. Alrededor de un tercio de todas las radioemisoras quedan en manos de seis sociedades propietarias.

Con posterioridad a 1973 se observa la siguiente evolución en el número de radioemisoras, según su distribución por frecuencia de onda:

Es decir, durante esta última década asistimos en Chile a la "revolución de la frecuencia modulada". En efecto, las radioemisoras FM se multiplican casi por 7 veces durante el período, mientras que las de onda larga apenas aumentan en 8%. El último año considerado, 48 de las radioemisoras se hallan localizadas en Santiago, 23 de onda larga y 25 de FM. A esta altura, no existe ninguna zona del país donde no llegue el mensaje radial; todas las regiones poseen sus propias radioemisoras. La mayoría de las emisoras son privadas, encontrándose en manos de personas o sociedades consideradas como empresas de tamaño menor e independientes. Existen sin embargo varias "cadenas nacionales" de radios, que se encuentran en poder de los principales grupos propietarios de esta rama de la industria cultural. La mayor de ellas es de propiedad estatal. El conjunto de las emisoras de propiedad de esos grupos concentra el 76% de la audiencia FM de Santiago.

Simultáneamente, durante este mismo período se incrementa fuertemente la cantidad de radioreceptores disponibles. Sólo durante el trienio 1979-81, que coincide con la máxima expansión de las importaciones que hace posible la política de "liberalización" y reducción de aranceles del Gobierno Militar, se importaron cerca de 3 millones de radioreceptores. Entre 1975 y 1985, de hecho, el número de receptores aumenta más que al doble en el país. El siguiente cuadro muestra la evolución en la posesión de radioreceptores.

Durante el período del gobierno Militar, la casi totalidad de las radioemisoras del país —con la neta excepción de tres cadenas que cubren varias ciudades del país y transmiten sus informativos en conexión con otras estaciones provinciales; una vinculada a la Iglesia Católica y las otras dos al principal partido de oposición, la Democracia Cristiana— tienden a encuadrarse dentro del marco ideológico y de autocensura impuesto por el régimen autoritario, reforzando el carácter "oficialista" de sus programas de noticias y expandiendo su carácter de medio recreacional, de entretenimiento y difusión musical. Las radioemisoras que al momento del golpe militar se identificaban con el anterior Gobierno fueron todas ellas clausuradas y su propiedad transferida hacia el campo oficialista y, en adelante, no se otorgarían nuevas concesiones a sociedades o personas identificadas con la oposición al régimen militar autoritario.

El financiamiento de las radioemisoras se realiza, principalmente, a través de la publicidad, aunque este medio absorbe sólo alrededor de un 10% del gasto anual total en publicidad, equivalente a 1,6 millones de UF en el año 1984. (Ese mismo año, la televisión absorbe cinco veces más, y la prensa cerca de tres veces más que la radio).

Cuadro 4
Radioemisoras FM y de onda larga;
Chile, 1974-1985

Año	Total	Onda Larga	FM
1974	165	143	22
1980	259	149	110
1982	284	152	132
1985	302	153	149

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.

Cuadro 5
Número de receptores y cantidad por cada mil habitantes;
Chile 1970-1985

Año	Número (000)	x 1.000 habts.
1970	1.400	148
1975	1.700	164
1980	3.250	292
1985	4.000	332

Fuente: UNESCO, Anuario Estadístico, 1987.

C. La prensa escrita: estructura y función del diarismo nacional

La prensa periódica de diarios inicia su masificación alrededor de los años 50 del presente siglo, momento en que se editan en el país 44 diarios, 11 en la capital y el resto en ciudades de provincia. De los diarios capitalinos, cinco de ellos alcanzaban distribución nacional o, en cualquier caso, más allá de la zona metropolitana. Entre 1958 y 1973 comienzan a editarse en Chile 37 nuevos diarios. Consideradas las desapariciones de diarios y la creación de los nuevos, el balance señala que en 1973, al momento del golpe militar, se editaban en Chile un total de 52 diarios; 11 en Santiago, manteniendo los mismos cinco anteriores una distribución nacional o semi-nacional.

A lo largo de todo este período, la prensa diaria juega un papel importante en la formación de la conciencia política de la clase dirigente y de los sectores de mayor educación; su propia naturaleza y su cercanía con el campo político le permiten, así, transformarse en un vehículo de lo que hemos llamado "ideologías pesadas". Entre todos los diarios, se destaca nítidamente el papel desempeñado por el diario *El Mercurio*, llamado el decano de la prensa nacional. Su función hegemónica le viene no sólo de su legitimidad tradicional como el mayor diario "serio" del país, sino de su función como "educador" de la clase dirigente y como el medio más influyente en la discusión y fijación de la agenda de asuntos públicos. Además, la estructura de la prensa diaria nacional se caracteriza, en esa etapa previa al golpe militar, por su pluralidad de expresiones ideológicas —al punto que puede decirse que cada una de las corrientes y a veces incluso de los partidos más significativos del momento posee su propio medio de prensa— y por la pluralidad de sus estilos periodísticos, en el continuo que va desde la prensa "seria" a la prensa "popular".

Inmediatamente de producido el golpe militar, se clausuran cuatro diarios capitalinos identificados con los sectores que habían apoyado al Gobierno derrocado, y más adelante desaparecen otros dos, uno identificado con la oposición y otro con el nuevo régimen. En suma, a lo largo de casi una década, bajo el Gobierno Militar, existen en Santiago solamente cinco diarios; tres pertenecientes a la Empresa el Mercurio (dos matutinos y uno vespertino, el único en ese mercado), más uno de propiedad de una empresa periodística y de circulación alta y el otro del Gobierno y de baja circulación. Los cinco poseen distribución más allá de la zona metropolitana, y tres de ellos pueden llamarse diarios de cobertura nacional. A comienzos de la presente década se agrega un sexto diario a los anteriores, perteneciente a la empresa competidora de *El Mercurio*, de carácter "popular" bajo la forma del periodismo "amarillo". La creación de nuevos diarios ha estado sujeta, durante todo este período, a una estricta regulación político-administrativa, requiriéndose, para poder establecer un diario, de una previa autorización del Gobierno, otorgada a través del Ministerio del Interior.

De acuerdo con la última cifra disponible, en este caso para el año 1984, los *diarios* a lo largo del país han aumentado a 38. Actualmente existen en la capital los mismos seis periódicos indicados previamente, a los

Cuadro 6
Número de diarios publicados por periodicidad;
Chile 1979-1982

Año	Total	Diario	Semanal	2 x semana	3 x semana
1979	65	37	21	6	1
Reg. Met.	6	4	2	—	—
1982	60	37	15	7	1
Reg. Met.	7	5	2	—	—

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.

que se suman dos nuevos que empezaron a circular en el año 1987 y que pertenecen ambos a empresas formadas por personas provenientes de los sectores de oposición. Uno intenta competir en el mercado de los públicos educados y políticamente sofisticados y el otro en el mercado de consumo popular de diarios.

Simultáneamente entonces con observarse un relativo estancamiento en este subsector de la industria cultural, que se refleja en la caída del número total de diarios y, como veremos enseguida, también en el lento incremento de la circulación de los diarios de información nacional, se ha producido una mayor concentración de la propiedad de los medios. Una sola empresa, El Mercurio SAP, controla, como dijimos, tres diarios capitalinos, y 16 diarios regionales, equivalente a la mitad de aquellos afiliados a la Asociación Nacional de la Prensa; entre ellos algunos de los más importantes de los que se publican en las principales ciudades fuera de la capital. Las ediciones del conjunto de los diarios de esta empresa incluyen la publicación de 24 suplementos periódicos, cubriendo una amplia diversidad de temas: entretenimiento y espectáculos, diseño del hogar, temas de la mujer, deportes, agricultura, la economía, etc. *El Mercurio* publica además la única edición internacional de la prensa chilena. Asimismo, esta empresa se ha extendido recientemente al mercado de la televisión por cable. De modo que a su tradicional función de hegemonía en este subsector del campo cultural, el grupo El Mercurio agrega ahora un grado de control propietario sobre medios que no poseía antes del advenimiento del régimen militar-autoritario.

La circulación combinada de los *diarios*, y por cada un mil habitantes, se muestra en el siguiente cuadro.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, en el año 1982 la tirada anual total de todos los periódicos del país alcanza a 345 millones, cifra que casi doblaría la de 1973.

En suma, el diarismo nacional —mirado en la perspectiva que aquí interesa— pasa a constituir ahora un sector de menor dinamismo dentro del conjunto de la industria cultural, pero mantiene una significativa presencia ideológico-política, asumiendo bajo el Gobierno Militar el rol de un instrumento de legitimación del régimen y, a través de la prensa de propiedad de la empresa El Mercurio, de promoción y explicación del programa de "modernización de mercado". En la misma medida que los periódicos buscan conservar su función elaboradora y transmisora de "ideologías pesadas", son las revistas —en particular aquellas organizadas para segmentos específicos del mercado— las que asumen la función de responder a las nuevas demandas de un mercado que crecientemente se abre hacia el "mercado liviano de mensajes".

D. Prensa escrita: el mercado de las revistas

En 1958 existía en Chile una sola industria importante de revistas para el mercado masivo, la empresa editora Zig Zag. Además de publicar libros,

Cuadro 7
 Diarios de Información Nacional:
 número, tirada e índice por cada 1 mil habitante;
 Chile, 1975-1984

Año	Número	Circulación (000) haba.	Índice x mil
1975	47	921	89
1979	37	945	86
1984	38	1.120	96

Fuente: UNESCO, Anuario Estadístico, 1987.
 100 = 1972.

esta empresa editaba a la fecha indicada doce revistas distintas; dos de ellas de carácter magazinesco, cuatro orientadas al mercado femenino, una de espectáculos, una dedicada al deporte, tres revistas infantiles y una de humor. En los 60 surge una segunda empresa importante en el sector, Lord Cochrane, que también edita una diversidad de revistas para segmentos especializados del mercado. Con el tiempo, esta última se transformará en la más importante empresa productora de revistas del país, con fuerte gravitación, además, en la región latinoamericana. En cambio, la empresa Zig Zag pasará a manos del Estado durante el Gobierno de la Unidad Popular, transformándose en la Empresa Editora Quimantú, que promueve un programa de "democratización" del acceso a la cultura escrita, a través de la edición masiva y de bajo precio de libros y revistas.

En 1973, después del golpe militar, desaparecen todas las revistas informativas ligadas a partidos o corrientes ideológicas identificadas con el anterior Gobierno, con excepción de la revista mensual publicada por los jesuitas. Asimismo, se clausuran las operaciones de Quimantú y, un tiempo después, la empresa es desmantelada y sus equipos son vendidos.

A partir de los 80, surgen nuevamente —una tras otra— algunas revistas de información provenientes del sector de la cultura contestataria o alternativa, sorteando la necesidad de obtener autorización por parte del Gobierno o tras largas batallas legales en torno de su conexión. En la actualidad existen seis revistas semanales de tipo informativo, orientadas todas ellas al público "sofisticado políticamente". De ellas, dos se inscriben en el campo oficialista y las cuatro restantes pertenecen a sectores de la oposición, la más antigua de las cuales empezó a circular como un informativo mensual de análisis de noticias internacionales en el año 1976.

La evolución del número de revistas de todo tipo que circulan en el país contiene el siguiente cuadro, que muestra una fuerte disminución entre 1974 y 1979 y, a partir de ese momento, una cierta recuperación, más intensa en la Región Metropolitana que en el resto del país.

De acuerdo con su periodicidad, las revistas que circulan en el país se distribuyen de la siguiente manera.

La tirada anual de las revistas muestra una clara tendencia negativa entre 1973 y 1978, iniciándose posteriormente una recuperación, sin que en el último año se haya alcanzado todavía la producción de 1973.

Es sabido que la recuperación se intensifica con posterioridad a 1983, en gran medida debido a la estrategia de mercado inaugurada por la revista *Ercilla* ese mismo año, en el mes de febrero, al acompañar la venta del semanario con la donación de un "libro promocional". Nos referiremos a este fenómeno en la sección siguiente, aunque su incidencia en el mercado de revistas fue igualmente decisiva, aumentando las ventas de manera espectacular.

El mercado de revistas, sobre todo en estos últimos años, se ha mostrado bastante dinámico, a pesar de ser relativamente limitado en cuanto al número de consumidores, como tendremos oportunidad de ver cuando discutamos este otro aspecto —esto es, el del consumo cultural— dentro del cuadro de las transformaciones experimentadas por la cultura en Chile.

Cuadro 8
Número de revistas: Chile 1974-1983

Año	Total	Reg. Metro.
1974	180	59
1979	89	38
1983	118	50

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.

Cuadro 9
Revistas que circulan según periodicidad: Chile 1979 y 1982

Año	Total Anual	Semanal	Quincenal	Mensual	Semestral	Otras
1979	89	8	20	16	28	17
Reg. Metr.	38	4	17	11	1	5
1982	141	12	30	21	43	35
Reg. Metr.	80	6	25	16	8	25

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.

Cuadro 10
Revistas: tirada anual e índice;
Chile 1973-1983

Año	Tirada (millones)	Índice
1973	45	96
1977	11	23
1980	24	51
1983	30	64

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.
100 = 1972.

Dicho dinamismo ha sido inducido, fundamentalmente, por las estrategias de marketing empleadas por las empresas que concurren a ese mercado, consistentes por un lado en "atar" la venta de revistas a la obtención de libros dentro de una serie, que no podrían ser adquiridos a igual precio en el mercado tradicional del libro y, por el otro, en aprovechar las posibilidades de segmentación del mercado, en torno de núcleos de intereses bien definidos: revistas para la mujer, alrededor del mundo del espectáculo, de divulgación educativa, juveniles, magazinescas, etc. De acuerdo con una reciente publicación de La Editorial Lord Cochrane (*Perfil de Medios Gráficos*), dirigida a presentar las publicaciones que poseen "atractivo publicitario", se contabilizan 17 revistas generales familiares, 11 revistas femeninas, tres masculinas, cinco infantiles (incluyendo bajo una sola categoría la serie de revistas *Walt Disney*), cinco juveniles, nueve deportivas, cinco de espectáculos y televisión, tres de arquitectura y decoración, cuatro de divulgación científica, cuatro médico-científicas, siete de economía y marketing, siete especializadas de construcción e ingeniería, once agrícolas y forestales, dos de exportaciones, dos de minería y pesca, y otras diez especializadas de diversa naturaleza.

E. La industria editorial

Esta industria nace como tal, en Chile, en la década de 1930. Durante sus primeros años de desarrollo, se compone de una treintena de pequeñas y medianas editoriales, más dos de tamaño mayor, Zig Zag y Ercilla, que posteriormente se funden entre sí, y otras dos pertenecientes al Estado. Todas, con excepción de una, operan desde Santiago. Las limitadas dimensiones del mercado, sin embargo, dan a esta rama de la industria editorial una existencia relativamente lánguida, salvo durante algunos años de la década del 40, en que la incorporación de nuevos segmentos de clase media al mercado del libro y el dinamismo de unos pocos productores otorgan a éste un movimiento mayor.

El número de títulos (libros y folletos) publicados en 1959 alcanza a 1.227, situándose 10 años más tarde en 1.100. En cambio, durante ese período aumenta la importación de libros, especialmente desde Argentina, España y México. Ya para esta época, las dos grandes editoriales privadas del sector dependen básicamente, desde el punto de vista económico, de la venta de revistas, constituyendo los ingresos por concepto de venta de libros menos de 15% en ambos casos.

Durante el Gobierno de la Unidad Popular, a través de la Editorial Quimantú, el Estado realiza un serio esfuerzo por masificar la venta de libros y por incentivar la lectura en círculos más amplios de lectores. Con todo, el número de títulos anuales de libros editados en Chile continúa descendiendo, situándose en 642 en el año 1969 y en 598 títulos en el año 1973, según las estadísticas del *Anuario de la Prensa Chilena*, y en 1.100 y 652, respectivamente, según las cifras de la UNESCO. Con todo, la masificación de la lectura impulsada por Quimantú resultó significativa. Por ejem-

plo, mediante su colección de "minilibros", la editorial del Estado publicó 55 títulos entre agosto de 1972 y agosto de 1973, totalizando una tirada de 3,6 millones de libros. De modo que esta sola colección duplicó el número total de libros producidos en el año 1969 combinadamente por las cuatro mayores editoriales del país: Zig Zag, Universitaria, Nascimento y Jurídica. Sumando toda la producción de libros de Quimantú, se observa que esta sola editorial publica mensualmente más libros que los publicados en un año por la empresa líder del sector privado (Zig Zag); y que ella publica anualmente más de lo que producen combinadamente todas las restantes editoriales del país durante un período de cuatro años.

Con posterioridad a 1973, la evolución del número de títulos publicados anualmente muestra un decrecimiento continuo, como se observa en el siguiente cuadro.

Las importaciones de libros caen, igualmente, durante este período, pasando de 12,4 millones de dólares en 1971 a menos de la mitad en 1975, a 4,3 millones en 1979 para recuperarse el año 1983, alcanzando ese año a 12 millones de dólares.

De acuerdo con las cifras de la UNESCO, sin embargo, la evolución de los títulos publicados ha experimentado una variación distinta, pasando de 652 títulos en el año 1973 a 1.326 en el año 1983 hasta alcanzar a 1.638 títulos en el año 1985. Alrededor de esa fecha, los títulos editados anualmente en algunos otros países de la región eran los que siguen: Argentina, 4.216 títulos en 1983; Brasil, 21.184 títulos en 1984; Colombia, 15.041 títulos en 1984; Costa Rica, 1.759 títulos en 1984; Cuba, 2.168 títulos en 1985; México, 5.482 títulos en 1985; Uruguay, 1.206 títulos en 1984.

Sin embargo, como se indicó, el fenómeno más significativo en este subsector de la industria cultural durante los últimos años ha sido la introducción de la estrategia del "libro promocional", que se acompaña "gratuitamente" a la venta de las revistas semanales o quincenales y cuya propaganda se hace masivamente por medio de la televisión. Según la crónica de un analista e ideólogo adscrito a las posiciones "neo-liberales" del régimen, "la sorprendente historia de este fenómeno, que ha llevado a los hogares chilenos 33 millones de libros en cuatro años, tuvo su punto de partida el 13 de febrero de 1983, cuando la revista *Ercilla*, entonces perteneciente al grupo Manuel Cruzat, intervenido en esa fecha, enfrentaba una difícil situación económica. Ercilla entregaba, junto a la revista, fascículos cuyas películas para ser reproducidas se adquirirían en el extranjero. La escasez de dólares, sin embargo, llevó a sus ejecutivos a pensar en la alternativa de reproducir libros de autores chilenos. Evaluados los costos, Ercilla anunció que junto con adquirir la revista, los lectores obtenían gratis *Martín Rivas*, novela de Alberto Blest Gana, libro que con el tiempo, al ser también entregado después por la revista *Vea*, se transformó en el mayor éxito de ventas de este singular mercado, siendo adquirido por 414.017 personas".⁴²

Según datos del mismo autor, entre marzo de 1983 y agosto de 1987, las revistas *Ercilla* y *Vea* han vendido 32,3 millones de libros, incluyendo series de historia de Chile, diccionarios, conjuntos de literatura clásica mundial, literatura chilena y materiales de apoyo para el aprendizaje del inglés.

Cuadro 11
Número de títulos editados por año;
Chile 1971-1979

Año	Número de títulos
1974	592
1975	513
1976	400
1977	309
1978	330
1979	244

Fuente: Subercaseux, Bernardo, *La industria editorial y el libro en Chile*, CENECA, Santiago de Chile, 1984.

Según datos adicionales, puede señalarse que en septiembre de 1984 se entregaban *semanalmente* 300 mil libros por este concepto "promocional", mientras que a través de librerías se venden anualmente en Chile alrededor de 1 millón de libros, de producción nacional e importados.

Un fenómeno similar de masificación del libro ha sido impulsado por algunas casas editoriales extranjeras establecidas en Chile o actuando combinadamente con editoriales o distribuidoras nacionales, promoviendo la venta de sus libros y colecciones a través de la venta al público en los mismos kioscos que venden diarios y revistas. Así, por ejemplo, la editorial colombiana La Oveja Negra, actuando juntamente con Andina, empresa nacional del rubro, espera vender a través de este medio los 100 títulos de su colección de *best-sellers*, con un número total de 2 millones de ejemplares.

En suma, el mercado del libro ha adquirido una nueva fisonomía, masificándose la venta de colecciones de libros, frecuentemente ligados a las necesidades de lectura definidas por la enseñanza media, y mediante la entrega promocional de series, tanto de literatura como diversas enciclopedias. Los libros han abandonado, como ya había ocurrido en otras grandes ciudades de la región, su valor simbólico asociado a las librerías y ha salido a las calles, confundiendo parcialmente con las revistas y los diarios. De hecho, hay en Chile siete mil puntos de venta de diarios y revistas en las calles, y sólo 500 librerías, 290 de las cuales se encuentran en la Región Metropolitana. De esas 500 librerías, sólo 210 son clientes permanentes de libros a lo largo del año, y las afiliadas a la Cámara Chilena del Libro no pasan de veinte. La lectura de libros no aumenta en la misma proporción que su venta, sin embargo, puesto que gran parte de las nuevas adquisiciones tiene por función incorporar el libro al hogar, y no está determinada por necesidades de lectura inmediata.

F. La industria fonográfica

En 1972, la industria nacional del disco produjo un total de 6,3 millones de unidades. En 1980, esa cifra había caído por debajo del millón. Según estimaciones de la Cámara Chilena del Disco, en 1983 se vendieron en Chile alrededor de 150 mil discos, sumados los simples y LP, todos importados.

La desaparición casi completa de la industria nacional del disco tiene varias causas, entre las cuales cabe destacar la masiva difusión de los receptores de televisión y de radio, así como el costo de los equipos necesarios para escuchar discos, unido a la popularización de los tocacintas y las grabadoras. Las cifras de importación de esos dos tipos de artefactos, que en 1978 alcanzaron a 180 mil dólares, aumentaron a cerca de 9,5 millones de dólares en 1981. La grabación y reproducción de cintas cassettes alcanza aproximadamente a 1,2 millones de unidades en 1984. La importación de cintas vírgenes pasa de un promedio de 200 mil dólares anuales en el período 1970-1973, a situarse en casi seis millones el año 1981.

Actualmente se calcula que existen en Chile 10 radiocassettes por cada tocadisco (tres millones y 300 mil, respectivamente). Al punto, entonces, que puede decirse que la industria fonográfica se ha visto crecientemente desplazada por la producción de cintas de cassette y por la difusión de la radiocassette en medio de la población. La cassette encuentra adicionalmente un nuevo punto de entrada al mercado, asociándose la estrategia promocional de venta de las revistas. En efecto, la revista *Ercilla* logró colocar 200 mil unidades de la Quinta Sinfonía de Beethoven, al acompañar la venta de la revista con la donación de esa cassette. Asimismo, la revista *Vea* promocionó hace un tiempo sus ventas acompañando la revista con la colección de cassettes conteniendo el curso de inglés de la BBC de Londres, cuya primera lección fue adquirida por 150 mil compradores y, el curso Integro, por 70 mil de ellos.

G. Industria cinematográfica

El escaso desarrollo de la industria cinematográfica nacional tuvo lugar, desde el año 1940 en adelante, al amparo del apoyo estatal, otorgado a través de la empresa Chile Films. Entre 1967 y 1973 se produjeron 15 largometrajes que fueron exhibidos en los circuitos comerciales. Con posterioridad al año 73, la industria nacional entra en una fase de decadencia y posterior reconversión, recuperando dinamismo ahora en torno del mercado de la publicidad y de la producción de videos. El apoyo estatal desaparece. Entre 1974 y 1984 se contabilizan sólo cuatro largometrajes nacionales exhibidos comercialmente; además se producen 13 largo y medimetrajes que son exhibidos en el circuito del cine-arte.

En 1984 existían sin embargo 57 agencias productoras de cine y video en Santiago, todas dedicadas principalmente a la producción publicitaria y de videos. La producción de estos últimos alcanza, entre 1980 y 1984, a alrededor de 200.

El cine chileno de estos últimos años se realiza, en cambio, fuera del país, a través de cineastas exiliados o que trabajan en el extranjero. Durante el periodo 1974 a 1983, esta franja produce un total de 90 largos y medimetrajes (56 y 34, respectivamente), además de 86 cortometrajes.

El consumo de cine, por su lado, ha venido decayendo continuamente desde 1967 en adelante. Ese año se alcanza un total de 75 millones de espectadores, los que disminuyen hasta caer a 30 millones en el año 1974. La evolución posterior, de más marcado descenso aun, se muestra en el siguiente cuadro.

En fin, atrapado entre la lógica expansiva de la televisión y su consumo directo y sin costo aparente en el hogar y la amplia disponibilidad de otros medios de entretenimiento —radio, tocacintas, videos, etc.— el cine deviene crecientemente consumo especializado de determinados grupos y sólo logra transformarse en un fenómeno masivo esporádicamente, en torno de películas altamente promocionadas y, en general, asociadas a la venta paralela de "modas": de bailes, de juguetes, de vestimentas, de gadgets electrónicos, etc.

Cuadro 12
Número de cines, capacidad, funciones y espectadores:
Chile 1974-1984

Año	Número cines	Capacidad	Número funciones	Espectads.	Promedio esps./func.
1974	324	193.333	177.174	29.950.879	169,05
1979	213	143.685	129.066	15.111.778	117,09
1984	184	109.382	136.281	13.522.012	99,00

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.

3. Las evoluciones del subcampo artístico: entre la industria cultural y el arte no oficial

La evolución del subcampo de las artes —literatura, teatro, música, plástica y video— durante estos años puede caracterizarse gruesamente por la separación de sus expresiones entre el "campo oficial" —en general orientado hacia el mercado y que se apoya crecientemente en su interdependencia con la industria cultural— y el "campo no-oficial", que funciona en torno de circuitos comunitarios y frente a públicos relativamente homogéneos y, de alguna forma, "partisanos". En ambos sectores, en cambio, aunque de manera peculiar en cada caso como veremos enseguida, se presentan fenómenos de consumo de élites y de consumo masivo, expresiones de "alta" y de "baja" cultura, fenómenos de mayor o menor profesionalización de los productores, estilos convencionales y de avanzada, y productos (obras) de primera o de segunda línea. Además, como se verá a continuación, la propia bifurcación del campo empieza a ceder y transformarse, dando lugar a procesos dinámicos y variados de integración.

a. La *separación de la literatura entre dos campos* —el oficial y el no oficial— ha sido un fenómeno extenso e intenso durante el período del régimen militar, causado por una combinación de factores: la existencia, hasta entrado el año 1978, de la censura previa de carácter administrativo-político sobre la publicación de cualquier tipo de obra; la tradicional identificación de los escritores —no de todos, ciertamente, pero de la mayoría y de la casi totalidad de los más prestigiosos— con las corrientes políticas progresistas, simbolizada en la figura del poeta-militante Pablo Neruda; la propia muerte de éste, a poco de establecerse el nuevo Gobierno Militar, en medio de un clima hostil y persecutorio de las nuevas autoridades en torno del poeta, su familia y bienes; el exilio forzado de un número de escritores chilenos, especialmente de la generación del 50 y de las nuevas generaciones; la quema pública de libros durante las primeras semanas del nuevo Gobierno con posterioridad al golpe militar; las trabas y los controles establecidos para la importación de libros; en general, el clima anti-intelectual desatado por el nuevo Gobierno Militar.

De modo que después de 1973, el campo de la literatura se escinde en dos universos, uno de los cuales funciona bajo la protección administrativa del Estado y encuentra fácil acceso a la industria editora nacional y el otro, excluido, que debe desarrollar su propia capacidad de auto-edición de sus obras. El primero se orienta hacia una suerte de "best-sellerismo" local y encuentra apoyo en la propaganda de prensa y en el comentario de la "crítica" establecida, así como en las librerías que les otorgan generosamente su espacio y vitrinas. En cambio, la literatura no-oficial asume un claro sentido de expresión marginal, circula por medios no comerciales, en ediciones autoproducidas, de bajas tiradas, que permanecen sin comentario crítico ni publicidad, y que difícilmente acceden a las librerías. A través de este vehículo marginal se desarrolla, sin embargo, una significativa expresión de "nueva poesía", algunos de cuyos autores alcanzarán posteriormente ingreso al mercado y alta exposición en los medios, como es el caso de Zurita y,

en menor medida, de otros poetas como Martínez, Rubio, Polhammer, Lira, etc.

Distinto es el caso de la literatura en el exilio, que comprende a autores reconocidos con anterioridad a 1973 y a otros más jóvenes, forzados a salir del país o que eligen abandonarlo en búsqueda de un clima intelectual y cultural de mayor libertad. Algunos de ellos —como en los casos de Donoso y Edwards, y en la siguiente generación, de Skarmeta y Dorfman, por ejemplo— mantienen su producción personal y encuentran acceso tanto a editoriales del exterior como a traducciones a otros idiomas, y sus libros van filtrándose lentamente a Chile hasta llegar más abiertamente a las librerías, especialmente después de 1980.

Un fenómeno no directamente subsumible dentro de este esquema de separación de campos es el de aquellos autores, especialmente poetas, que con larga trayectoria y prestigio nacional o incluso fuera del país permanecen, por decirlo de alguna manera, "por encima" de ella, sea porque son reconocidos en ambos campos —como en los casos de Humberto Díaz Casánueva, Nicanor Parra y Gonzalo Rojas— o porque se proponen impugnar esa nueva estructuración del campo literario, como ocurre, parcialmente al menos, en el caso de Enrique Lihn.

Con posterioridad a 1980 se observa un gradual pero creciente desdibujamiento de esa bipartición del campo literario, con el regreso en persona o mediante sus obras de los autores del exilio, el acceso de algunos de los "marginales" o "excluidos" al mercado de libros y a la crítica establecida, la apertura de los canales de comercialización de libros, la desaparición de la censura previa, el paulatino agotamiento de la experiencia de la "cultura alternativa" y, con todo ello, una mayor unificación de los estándares de apreciación y evaluación de las obras.

Simultáneamente se produce un doble fenómeno de "explosión de género", en particular a partir de 1980. Por un lado, prolifera la llamada *literatura de testimonio*, sobre todo en torno de los temas de la violación de los derechos humanos y, por el otro, se incrementa espectacularmente la edición de libros —desde aquellos netamente académicos hasta ensayos— de corte socio-económico y político. Más recientemente, se produce asimismo un rápido crecimiento de los libros de "oferta política", sea que reflejen la postura individual de líderes partidarios o que contengan la visión de un grupo o colectividad sobre el futuro desarrollo del país.

Es interesante observar que no existe mayor interconexión, o por lo menos ella es escasamente orgánica, entre los movimientos que ocurren a nivel de la industria editorial, los que analizamos anteriormente, y aquellos que tienen lugar en el campo literario, tanto oficial como no oficial. En general, la industria del libro tiende a funcionar en circuitos de obras consagradas (best y longsellers) o "utilitarias" —enciclopedias, series de relevancia escolar, etc.—, y en un marco de rápida internacionalización, en tanto que el campo de producción literaria se mantiene en sus canales locales, de edición "para las librerías", con publicaciones de escaso tiraje y recorriendo el lento camino de acceso a la crítica, al prestigio, a los premios y, eventualmente, a las lecturas obligatorias de la escuela.

b. El *teatro chileno*, que hacia comienzos de la década pasada venía desarrollándose básicamente al amparo de algunas de las universidades del país y de compañías independientes, algunas de las cuales tenían normal acceso a la televisión, experimenta una generalizada recomposición con posterioridad a 1973, bajo la presión que separa al campo artístico en dos expresiones inicialmente sin contactos entre sí. En efecto, en el campo oficial el teatro universitario experimenta un fuerte retraimiento, perdiendo parcialmente su calidad experimental y su lugar estratégico en el desarrollo del sector. Paralelamente se desarrolla un "teatro comercial", de grandes salas, públicos numerosos y temas "vodevilescos", al mismo tiempo que, con apoyo del Estado, se impulsa una línea de extensión teatral mediante una compañía itinerante. La naciente relación de tipo experimental y de contenidos "culturales" entre teatro y televisión se interrumpe y da paso a la explosiva difusión de un nuevo género, la *telenovela*, que combina los medios de alcance masivo de la televisión con un teatro de corte neo-popular, sobre la base de arquetipos socio-culturales. El éxito de audiencia de las telenovelas ha sido arrollador, como en el resto de los países de la región, dando lugar al surgimiento de un sector específico de la industria cultural en torno de la producción de este tipo de obras. A la vez, ha hecho posible la reincorporación de actores de teatro previamente excluidos al medio televisivo —manteniéndose hasta ahora a un número en la "lista negra"— y dando un mercado laboral a una generación de jóvenes actores y actrices.

Por el lado del campo no-oficial, el teatro ha experimentado su evolución en torno de tres líneas relativamente orgánicas: el teatro profesional independiente, que ha cumplido la principal función de experimentación durante esta época, tanto a través del teatro de creación colectiva (estilo ICTUS y otros) como de obras nacionales de autor (De la Parra, Griffero y otros) y de la inclusión en su repertorio de obras extranjeras contemporáneas; el teatro aficionado "culto" (en donde nacen algunas de las obras de De la Parra, por ejemplo) y el teatro aficionado poblacional. Las dos últimas líneas, más ocasionales y menos profesionalizadas, operan casi íntegramente a través de circuitos de difusión de base comunitaria, y se desarrollan con especial vigor en tiempos de la cultura contestataria. El teatro profesional independiente, en cambio, con base en una decena de compañías que han logrado un estimable aunque precario grado de estabilidad, juegan, como se decía, el rol de pivote en el desarrollo del teatro nacional, al introducir nuevos temas, la experimentación formal y profundizar —hasta casi agotar— las posibilidades del teatro de creación colectiva, especialmente en torno de experiencias conectadas con la vida cotidiana bajo el régimen militar autoritario. Es a este sector donde se reintegran, asimismo, los actores y actrices que regresan del exilio. Forzados a trabajar en los circuitos de mercado, y a autofinanciar sus producciones, estas compañías llegaron a desarrollar lo que una analista ha llamado sus propios "públicos orgánicos"⁴³, compuestos por individuos con una sistemática asociación de características socio-educacionales y patrones comunes de consumo cultural. Personas, en efecto, con educación secundaria completa y/o educación superior, con ingresos de medios a altos, que habitan en general en los sec-

tores del oriente de la capital, y que muestran preferencias regulares de lectura de libros, de por lo menos un diario, de alguna revista identificada con la oposición, que escuchan de preferencia música "seria" y los noticieros radiales opositores y que asisten a más de una representación teatral al año. En suma, se trata de públicos fuertemente identificados; si se quiere, de un segmento altamente "orgánico" y particularizado dentro del mercado de públicos consumidores de bienes culturales.

c. El consumo de música, como veremos en su momento, es un patrón ampliamente difundido dentro de la población, aunque la *producción y difusión musical* experimentó asimismo la "división de campo" que hemos venido analizando.

Efectivamente, por el lado del campo oficial, la música producida y difundida tiene base tecnológica; es una función de la industria cultural, hacia donde convergen por lo menos tres de sus subsectores: la radio, la televisión y la industria de cassettes. Se trata, en este caso, de una línea de producción/difusión altamente comercial, sujeta a la rotación de modas o a la pervivencia de géneros musicales con sostenida demanda dentro del mercado, con un fuerte componente de internacionalización, en torno del cual gira, además, la subindustria de ídolos musicales. Lo anterior explica, asimismo, que alrededor de esta línea se desarrolle una intensa segmentación del mercado, con un fuerte componente de internacionalización, en torno del cual gira, además, la subindustria de ídolos musicales. Lo anterior explica, asimismo, que alrededor de esta línea se desarrolle una intensa segmentación del mercado de consumidores musicales, distinguiendo entre consumidores de géneros musicales de consumo masivo y géneros "serios" o de élites (desde el jazz, en el caso chileno, hasta la música clásica pasando por la "nueva música"); música nacional, géneros regionales (tango, música mexicana, salsa, etc.) y la llamada música internacional (norteamericana); música juvenil; etc.

Sin duda, ha sido el segmento de la "música juvenil" el más dinámico de estos años, con su fuerte componente internacional y su rápida sucesión de modas, mezclando a la manera de la sensibilidad "postmoderna" el gusto por definidos estilos rock, la neo-música de Kitaro o Philip Glass, el redescubrimiento "retro" de los Beatles, los Rolling Stones y otros, la música reggae, la canción nueva latinoamericana, el "new wave" y otros en el subsegmento de jóvenes con mayor educación musical y una combinación algo distinta en otros subsegmentos de consumo educacional y socialmente diversificados. No ha sido suficientemente analizado, a nuestro juicio, cuál es el exacto papel que la música juega entre las generaciones jóvenes desde el momento en que su consumo se universaliza a través de la radio transistor y del "personal stereo". Pero parece claro que nos encontramos frente a un fenómeno significativo de construcción de identidades y de desarrollo de ciertas subculturas juveniles en torno de estos fenómenos de consumo (y aprendizaje) musical, que vuelven a poner el énfasis en la estructuración de sociabilidades alrededor de "ideologías livianas" más que pesadas. En efecto, parece haber un mundo de diferencia, sin que sepamos exactamente cuáles son las implicaciones de esto, entre la conformación de

concepciones de mundo a partir, digamos, de la lectura y la conversación en torno de libros —cuentos y novelas— y las nuevas subculturas de música compartida y escuchada ritualmente por grupos de adolescentes.

Asimismo, dentro del campo oficial, se encuentra el desarrollo nítidamente elitario del consumo de música "seria" que ocupa un sector marginal de la actividad de las radios, con unas pocas emisoras FM que se especializan en este tipo de música, y las representaciones "en vivo", con apoyo y/o bajo el patrocinio de algunas universidades, de la Corporación Municipal de Santiago, de asociaciones privadas de "amigos" de la música y la participación publicitaria de algunas empresas del sector público y privado. Una recuperación, aunque no espectacular, de la ópera, da testimonio seguramente tanto del auténtico gusto por este género como del resurgimiento de la práctica de consumo artístico como ocasión de distinción social. Con todo, no sería exacto atribuir todo el universo de la música "seria" al campo oficial, ni desde el punto de vista de su creación ni del de su difusión, donde entidades independientes como la Asociación Beethoven han desempeñado un papel pionero y significativo.

Por último, la nueva relación entre música e industria cultural —especialmente la televisión— ha dado continuidad y ha reorientado incluso la realización de algunos Festivales de Música, como el festival de la Canción de Viña del Mar, que anualmente se organiza con el patrocinio de la Municipalidad de esa ciudad y la intervención preponderante del Canal Nacional de Televisión. Desprovisto ya de cualquier contenido experimental o de reforzamiento del desarrollo de la música nacional, el Festival de la Canción aparece como una desteñida imitación de los festivales internacionales comerciales, como el de San Remo en Italia u otros, atrayendo su concurso a figuras extranjeras de segundo orden y, en su parte comercial, a una figura o conjunto que inevitablemente se convierte en la estrella del evento. En torno de éste se vive anualmente una verdadera celebración de los "medios", donde la propia televisión y sus figuras, junto con los artistas, ven transformarse su vida en espectáculo.

Dentro del campo no-oficial, la música se hace cargo de las tradiciones contestatarias y de relativo compromiso político-social identificadas en los 60 y comienzos de los 70 con las corrientes progresistas y particularmente de izquierda, aunque los exponentes mayores de esa música —conjuntos como los Quilapayún y los Inti Illimani; cantantes y autores como Angel e Isabel Parra— debieron abandonar el país después del golpe militar o no se les otorgó autorización para regresar, prohibición que en algunos casos sigue vigente hasta ahora (1988), período durante el cual por lo demás todos ellos han innovado sustancialmente en sus estilos y en la orientación de sus contenidos contestatarios. De cualquier modo, sobre todo durante los primeros años después del golpe militar, esas tradiciones se mantienen vivas e incluso encuentran expresiones renovadas (Los Jaivas, Santiago del Nuevo Extremo Congreso y otros), asociándose —en los circuitos de públicos contestatarios— a la difusión cuasiclandestina inicialmente, completamente abierta después, de la música de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y otros.

Con posterioridad, sin embargo, el registro de géneros y expresiones musicales dentro de los circuitos de cultura alternativa se amplía y vuelve más heterogéneo, entrecruzándose con la recepción masiva de la música juvenil, con el surgimiento de nuevas expresiones protestatarias que cuestionan los tradicionales contenidos de compromiso político-social (como en el caso de Los Prisioneros o de la protesta de contenido libertario-humanista, etc.) y con la búsqueda de espacios de audiencia que no se agoten en los circuitos de públicos "orgánicos". En torno de estas diversas expresiones se desarrolla una rica línea de eventos y festivales musicales, que operan exclusivamente sobre la base de circuitos comunitarios, sin ingresar en la esfera de actuación de la industria cultural ni alcanzar, por lo mismo, una difusión masiva. Se trata de eventos poblacionales y estudiantiles, sobre todo en la primera época y, más adelante, de eventos ligados a la reaparición de las peñas y de centros de cultura juvenil —que pueden ser un café, una parroquia, un teatro, etc.

d. La *plástica de esta época* también separó aguas tras el golpe de 1973, reservándose al campo oficial la pintura de museo, las exposiciones, el mercado de obras y —como hecho relativamente nuevo y con un breve auge alrededor de 1980— el apoyo de mecenas privados; empresas que patrocinan exposiciones y concursos, financian salas, ofrecen subsidios y, a la par, adquieren obras de los artistas favorecidos, muchos de ellos jóvenes que inician su carrera. No hay, en este lado de la plástica chilena, mayores rupturas de la continuidad, sin perjuicio de los movimientos de escuelas, corrientes y estilos individuales. Un número de pintores de prestigio ya reconocido se ve forzado a abandonar el país o sale en busca de condiciones de mayor libertad, empezando a regresar, lentamente, hacia comienzos de la presente década.

Más activas, en su micro mundo, son las evoluciones que se producen dentro del campo paralelo, el no oficial, especialmente en torno de lo que llegaría a llamarse la "nueva escena".⁴⁴ Forman este movimiento un heterogéneo conjunto de artistas y grupos que, según su principal analista, asumen la práctica de la plástica con la conciencia "de tener que rebasarlo todo debido a la remecida (experimentada por) las estructuras de organización social del lenguaje y de pensamiento", lo que habría llevado a los "operadores de signos" en este ámbito a desconfiar de todo lo dado y del sentido garantizado por la normalidad de la comunicación.⁴⁵ De allí que se encuentre entre estos practicantes una inagotable actividad reformuladora de signos, continuamente permeada por la crítica de las representaciones, de los géneros artísticos, de sus códigos subyacentes, de los lenguajes del arte, de la historia de la pintura nacional, incluso, y sobre todo, de los propios límites que separan arte y vida, para encontrar nuevos accesos a lo real, a su fragmentación, a los soportes de la plástica y a los modos de insertar el arte en medio de la vida cotidiana. Como señala Nelly Richards, lo que se buscaba era "producir interferencias críticas en esas zonas que abarcan el cuerpo y el paisaje como escenarios de autocensura o de microopresión". Así, la plástica de la "nueva escena" se sobrecarga de autoreflexividad, se apropia de varias técnicas y soportes, se "hace hablar" por medio de discurs-

sos (directos e indirectos) que para su formulación recurren a la retórica y al aparato conceptual del postestructuralismo y engarzan con las teorías de la postmodernidad. No es curioso, por lo mismo, que la incorporación del debate sobre este último fenómeno —que en los países centrales se hace simultáneamente desde la filosofía, la historia del arte y de la cultura, las ciencias sociales y la práctica y crítica del arte— en el caso chileno, en cambio, se haga casi exclusivamente por medio de los artistas de la “nueva escena”.

Con todo, la “nueva escena” se mueve en los márgenes, incluso, del campo no-oficial, y la dificultad —densidad cultural, si se desea— de su propia propuesta la condena a unos públicos aun más restringidos y “orgánicos” que los del teatro profesional independiente. A ratos, la “nueva escena” parece producir solamente para su propio ámbito de practicantes, pues, como ha señalado Adriana Valdés, ella supone un receptor a) capaz de captar referencias culturales —artísticas, filosóficas, políticas, etc.— a veces muy finas y especializadas; b) capaz de entrar en la propuesta, entendida como un juego, y de hacer una lectura conforme a sus reglas de constitución o, al menos, un “*strong misreading*”⁴⁶, o sea, una lectura errónea pero equivalente, en creatividad, a la propia propuesta; c) capaz, a través de su mirada, de constituir (en el sentido fuerte) el texto de la obra, comprendiéndolo en varios niveles y ligándolos (a estos) entre sí.⁴⁷ En suma, la “nueva escena” representa de manera inmejorable las limitaciones y algunas de las virtudes del funcionamiento del campo no oficial: su carácter experimental, su apertura para la generación de nuevas propuestas, su independencia, su capacidad de producir “cortocircuitos” respecto de las dinámicas del mercado, su anti-conventionalismo y bajo burocratismo, su mirada de largo aliento, etc.; a la vez que, por el lado de las limitaciones, se presenta como una experiencia de ghetto, alejada de las evoluciones generales del campo, sobrecargada por la convicción de sus propios valores, con tendencias al dogmatismo y al espíritu de secta, indiferente a los públicos, con escasa institucionalización, etc.

Con el tiempo, también en este caso la división del campo en dos sectores irreconciliables empieza a ceder y da paso a un lento proceso de reintegración, el que se realiza a través de concursos, de las exposiciones en salas abiertas a expresiones de ambos lados de la plástica y, seguramente más importante que todo esto, por la pérdida de coherencia de esos dos “lados” antagónicos, en el interior de cada uno de los cuales se producen movimientos de dispersión en torno de escuelas y concepciones, de generaciones artísticas, de disputa por espacios y prestigios, que reintroducen la pluralidad dentro de este campo de las artes y una incipiente unificación de los criterios de evaluación y reconocimiento, donde el mercado de obras no deja de desempeñar, por detrás, un papel significativo, en la medida en que liga las posibilidades de profesionalización del artista (aunque sólo sea parcialmente) a la venta de sus obras.

e. Por último, la *producción de videos* se constituye en una nueva línea de producción artística, incorporando algunos de los restos dispersos de la industria cinematográfica local y dando expresión a practicantes provenien-

tes de las artes plásticas y de la literatura. En el campo oficial, sin embargo, el video retiene una función esencialmente instrumental, en torno de la producción publicitaria, la que —bajo el dinamismo de esta función del mercado durante la segunda mitad del régimen autoritario— se intensifica, se vuelve técnicamente más sofisticada y logra crear nuevos patrones de estética publicitaria en la televisión. Por el lado del campo no oficial, el video se encausa en dos direcciones principales. Por una parte, el video estrictamente artístico —ligado más o menos estrechamente según los autores al campo vecino de la plástica, especialmente dentro de sus expresiones de avanzada— y, por otra, el video de difusión contestataria, que a su vez reconoce tres vertientes distintas. El video testimonial de hechos de la vida cotidiana bajo el régimen militar autoritario, incluso con una línea de noticieros alternativos; el video de expresiones teatrales y/o cinematográficas, del estilo impulsado por el ICTUS, que llega a públicos diversos e incluso, a través de un programa especial, a las poblaciones; y el video educacional, usado como instrumento de capacitación, enseñanza y difusión dentro del movimiento de la “educación popular”.

En suma, el campo de las artes experimenta significativas transformaciones durante los últimos diez años, particularmente como producto de la “división de campo” introducida por el régimen militar autoritario, y como efecto de una relocalización de algunos sectores del campo artístico en relación a la industria cultural, especialmente la televisión y la publicidad. Las tendencias de segmentación del público de las artes se mantienen y refuerzan durante este periodo, dando lugar —en algunos casos— a la constitución de verdaderos públicos “orgánicos”, segmentos altamente especializados de públicos relativamente homogéneos que se transforman en consumidores continuos o intermitentes de una determinada línea de producción, como en el caso de las representaciones del teatro profesional independiente y de la “nueva escena” en el de la plástica. La producción, en varios sectores, debe hacerse cargo del hecho de la existencia de una comunidad de practicantes chilenos en el exilio que, por lo menos en la literatura, el cine, la plástica y la música, aportan una proporción significativa y a veces mayoritaria de las obras de mayor calidad y/o impacto de público. En el interior del país, entretanto, la tendencia general en la mayoría de los sectores de las artes es hacia una revisión de los tradicionales contenidos éticos y estéticos de “compromiso” entre el arte y la política, fenómeno sentido más agudamente entre las generaciones jóvenes de creadores y en los públicos consumidores de música, pero que reconoce asimismo, complejamente, la pervivencia de algunas de las pautas tradicionales, como puede ser la “lectura puramente política” de las obras de arte, la periódica reemergencia de la música de protesta, o la autoidentificación de creadores connotados de las nuevas generaciones con los partidos tradicionales de la izquierda. Contra la idea de que se habría producido durante estos años una penetración más o menos rápida o lineal de la propuesta postmodernista, sea como autoconcepción de los creadores o como sensibilidad de los públicos, puede observarse que tal fenómeno más bien parece reducirse a núcleos minoritarios de la plástica, a la expresión individual de algunos inte-

lectuales formados en las corrientes del postestructuralismo francés y a escritores de la más reciente generación, o a la sensibilidad (no reflexivamente asumida) de ciertos públicos juveniles educados. En general, en cambio, predomina en el campo artístico el clima cultural propio de la modernidad, con su ethos típicamente iluminista, su confianza en la razón, su intento de vincularse a los movimientos más generales de la sociedad, su búsqueda de conexiones y seguridades, el énfasis en la centralidad y originalidad de la obra, el status del artista en medio de la sociedad, la preservación de tradiciones fuertes, entre ellas la de la crítica social como dimensión ética del arte, y la consecuente expresión de utopías que animan la esperanza de una "nueva sociedad".

4. La Iglesia Católica: actor del campo cultural y la variedad de sus registros

Como institución del campo cultural, la Iglesia Católica chilena es seguramente la más compleja y con el "registro" más amplio de funciones y efectos. Su mera definición sociológica —por ejemplo, al estilo de Weber, como una corporación imperativamente coordinada que cuenta con una organización continua y que para sancionar su orden emplea la "coerción psíquica" a través de la distribución y retención de beneficios religiosos— no permite apreciar la vastedad de sus medios y la variedad de sus funciones.

Una institución cultural compleja

De hecho, la Iglesia se presenta —desde el punto de vista que aquí interesa— como un "aparato cultural" con rasgos específicos y distintivos: ella opera a través de un conjunto de medios propios, que forman parte de la estructura interna de su organización (como sus organismos territoriales y funcionales, por ejemplo), y a través de medios ligados variablemente a la Iglesia pero que se insertan en diversos subsectores del campo cultural: escuelas, universidades, radios, medios de prensa, etc.; ella produce sus propios bienes simbólicos (sacramentos, ritos, interpretaciones autoritativas de las Escrituras, etc.) y, adicionalmente, bienes culturales diversos, o incide de manera significativa y variada en su producción (y productores); ella actúa a través de un personal profesionalizado que se organiza burocráticamente dentro de la institución, bajo el mando de una jerarquía centralizada pero que actúa con flexibilidad en la ejecución de sus tareas, y, a la vez, mediante una gran variedad de grupos o a través de individuos que son parte, en sentido lato, de la organización aunque no se enmarquen burocráticamente bajo un mismo esquema de funcionamiento (desde este punto de vista la organización de la Iglesia comparte, en ciertas dimensiones y niveles, las características de las organizaciones sueltamente acopladas); ella incide dentro del campo cultural —con sus medios propios o a través de sus redes flojamente acopladas—, al mismo tiempo que su propia estructura

organizacional le permite actuar directamente en el plano de la cultura cotidiana; ella es, por ese último concepto, una de las instituciones clave en la articulación de esas dos esferas de la cultura, y así como antiguamente se hablaba de un alto y un bajo clero, ahora puede hablarse de la simultánea presencia de la Iglesia en la "alta" y la "baja" cultura, así como de su larga lucha para ajustarse a —y a la vez transformar— la cultura cotidiana de masas y sus fenómenos más relevantes; ella es, asimismo, una institución nacional y parte de una organización universal; en el plano de la cultura nacional es, además, una institución de implantación histórica y de alcance territorial global; opera a través de los más diversos medios disponibles para la comunicación, y se hace presente en las interacciones comunicativas cotidianas, pero al mismo tiempo cuenta con y apoya su acción en circuitos comunicativos "internos" a su propia organización (en sentido lato), bajo la forma, usualmente, de circuitos de base comunitaria, constituidos en torno de las parroquias, de núcleos pastorales, etc.; en fin, por todas estas características, la Iglesia Católica chilena incide fuertemente en el campo político y, en general, dentro del espacio público, redoblando con ello su impacto a nivel de la esfera privada y de sus propias redes de influencia más directa entre los fieles.

Esta breve caracterización de la Iglesia Católica en cuanto aparato cultural debe prevenirnos, de inmediato, frente a cualquier intento por reducir su acción a un solo plano o por interpretar los efectos de su actuación bajo un solo prisma. Si aquí nos vemos obligados a esquematizar, y a seleccionar unos pocos tópicos que parecen relevantes para el análisis de las transformaciones recientes de la cultura en Chile, ello no significa, entonces, que pensemos con ello agotar el tratamiento del tema; ni siquiera intentaremos un balance global de su acción.

Las dimensiones cuantitativas de la organización cultural de la Iglesia Católica chilena son difíciles de precisar, justamente por la variedad y complejidad de esa organización. Baste pues con proporcionar unos pocos datos indicativos: en Chile había en 1987 2.013 sacerdotes, y un total de 825 parroquias repartidas a lo largo del territorio nacional; los seminaristas y novicios bordeaban los mil. Alrededor de un 80% de la población nacional se declara católica en las encuestas, en tanto que, en el Gran Santiago, ese porcentaje —sumando a quienes se declaran católicos y cristianos— se ubica en 75%, mientras un 8% se profesa evangélico y un 10% se declara ateo. En una encuesta reciente (Gran Santiago), del total de entrevistados, un cuarto dijo asistir a servicios religiosos por lo menos una vez a la semana y, un 46% adicional, algunas veces al año. Durante los últimos años, además, la población chilena declara en las encuestas, consistentemente, que la Iglesia Católica es la institución que más hace por el bien del país, muy por encima de cualquier otro organismo o entidades, incluidos entre estos últimos el Gobierno, las Fuerzas Armadas, los empresarios, los sindicatos, los colegios profesionales y los partidos políticos. Además, en su carácter de aparato cultural, la Iglesia cuenta en Chile con tres universidades definidas como católicas, con medios de prensa y radio propios, con casas editoras e imprentas, etc. Sólo en Santiago hay 209 colegios católi-

cos. A nivel nacional existen 39 movimientos apostólicos, del estilo del Movimiento Obrero de Acción Católica, la Unión Social de Empresarios Cristianos, la Comisión Pastoral Guías y Scouts; la Asociación de Mujeres de Acción Católica, los Cursillos de Cristiandad, Nuevas Comunidades Cristianas, Comunión y Liberación, Justicia y Paz, etc.⁴⁸

La función dirigente de la Iglesia

En perspectiva histórica "corta", puede decirse que la Iglesia Católica realiza una verdadera inflexión doctrinaria y práctica en los años 60, al asumir de manera activa la aplicación de las reformas del Concilio: "los laicos tomaron parte activa en la vida eclesial; se aprobaron los primeros planes pastorales de conjunto; se crearon las primeras comunidades de base; se vigorizaron las estructuras colegiales como la Conferencia Episcopal; más de la mitad de 5.000 religiosos abandonaron su actividad en los colegios particulares y se volcaron a la evangelización de los sectores populares; la Iglesia entregó sus tierras a los campesinos; se implantó la renovación litúrgica".⁴⁹

Durante esos años, en particular, la Iglesia otorga un fuerte apoyo y sanciona moralmente la propuesta de reformas económico-sociales impulsada por el Gobierno de la Democracia Cristiana, a la vez que —al aceptar e incentivar la reforma agraria y al asumir la reforma de las universidades católicas— permite y facilita que se remuevan dos pilares sólidos de la cultura tradicional en Chile: la hacienda y los núcleos formativos de la intelectualidad católica conservadora.

Todos esos cambios ocurridos dentro de la Iglesia y en su entorno más inmediato harían posible, además, que surgieran los primeros sectores católicos que, en el campo político, se reclaman directamente de la tradición socialista y acogen el pensamiento marxista; en medio de una Iglesia que, a través de su Jerarquía, se pronuncia de manera cauta pero positiva frente a la eventual designación por el Congreso Nacional del candidato socialista que, en 1970, había obtenido la primera mayoría relativa en la votación popular. En aquella oportunidad, los obispos dirán que "hemos cooperado y queremos cooperar con los cambios, especialmente los que favorecen a los más pobres" a la vez que reafirmaban los valores democráticos de la nación chilena: "el pueblo chileno, decían en esa misma oportunidad, quiere continuar en el régimen y estilo de libertad por el cual viene luchando desde hace 160 años. Quiere que se mantenga y se defienda lo ya conquistado: el derecho a pensar, a difundir sus ideales, a organizarse, pero al mismo tiempo que se amplíe y perfeccione esa libertad".

Durante los breves tres años de la experiencia socialista de la Unidad Popular, la Iglesia insistirá en esa misma línea de inicial cautela: apoyo a los cambios e insistencia en la necesidad del diálogo democrático para llevarlos a cabo. Hasta el final, incluso, ofrecerá sus buenos oficios para facilitar la comunicación entre los partidos de Gobierno y el mayor partido de la oposición, el Partido Demócrata Cristiano. Fracasadas esas gestiones, pro-

ducido el golpe militar y establecido el régimen de las Fuerzas Armadas, los obispos invocarán "la cordura y el patriotismo de los chilenos y la tradición democrática y de humanismo de nuestras Fuerzas Armadas" para "volver muy luego a la normalidad institucional".

Simultáneamente, la Iglesia Católica reevalúa durante el período inicial del Gobierno Militar la experiencia de la Unidad Popular, y en un documento publicado en 1974 (sin fecha), acoge el argumento de que las FF.AA. son "la última reserva de una democracia", lo que le permitirá —todavía en 1975— reconocer "el servicio prestado al país por las FF.AA. al liberarlo de una dictadura marxista que parecía inevitable y que había de ser irreversible. Dictadura, continúa dicho documento del 75, que sería impuesta en contra de la mayoría del país y que luego aplastaría esa mayoría (...) En ese sentido, concluye, creemos justo reconocer que las FF.AA. interpretaron, el 11 de septiembre de 1973, un anhelo mayoritario y, al hacerlo, apartaron un obstáculo inmenso para la paz".

En concreto, sin embargo, sólo durante los primeros siete meses después del golpe militar, la Jerarquía de la Iglesia Católica mantiene una actitud pública de silencio —que algunos interpretarían como de aceptación o incluso de tácito apoyo— frente al nuevo régimen, al mismo tiempo que repetidamente reclamaba ante los nuevos gobernantes poner fin a las políticas y prácticas represivas que violaban los derechos humanos básicos de los ciudadanos. Luego, en abril de 1974, al realizarse la Asamblea Plenaria de los Obispos, y visto que las conversaciones privadas con la autoridad no habían logrado mejorar la situación, según relata uno de ellos, "decidimos denunciar públicamente la situación (...) Allí decíamos que nos preocupaba la situación de los derechos humanos, las injusticias económico-sociales y la falta de libertad, especialmente en los sindicatos y las universidades".

Desde ese momento se inicia la ya larga y complicada pugna entre la Iglesia y el Gobierno, en torno de tres asuntos básicos: a) las violaciones a los derechos humanos; b) la legitimidad del nuevo régimen institucional surgido del golpe militar y más adelante consagrado en la Constitución de 1980, y c) la orientación y los efectos de las políticas de "modernización de mercado" impulsadas por el Gobierno Militar.

Durante todo este período, la evolución doctrinal y el juicio ético de la Iglesia —de cara al régimen militar autoritario y las condiciones para un retorno a la democracia— se han desarrollado sin mayores discontinuidades, dando lugar a un cuerpo de ideas que Correa y Viera Gallo han resumido en los siguientes puntos, que aquí sólo enunciaremos resumidamente:⁵⁰

— existencia de una grave crisis nacional con múltiples facetas, cuya expresión más clara fue la intervención militar de 1973;

— exigencia de una "salida política" para la crisis, que se resume en la necesidad de recrear la democracia por vía pacífica. La Iglesia rechaza la violencia, provenga del régimen o de sus opositores;

— la democracia es condición para el renacer de la nación. Está en nuestra tradición y en nuestro futuro, y la Iglesia Católica se halla comprometida con la democratización del país;

—debe mantenerse la distinción de esferas de competencia entre la Iglesia y el Estado;

—la Iglesia favorece simultáneamente la organización del pueblo y la defensa de los derechos humanos, y la persuasión de los gobernantes y poderosos en torno de la necesidad de la democratización;

—la Conferencia Episcopal rechazó el plebiscito que aprobó la Constitución de 1980 por la forma en que aquél fue planteado, y rechaza el texto de la Constitución, aun reconociendo la inspiración cristiana de algunas de sus disposiciones permanentes;

—el Episcopado promueve la unidad nacional y la reconciliación en la verdad, la justicia, el amor y la libertad;

—asimismo, los obispos reconocen la legitimidad del disenso y de la protesta pacífica frente al régimen;

—la Iglesia propicia un consenso mínimo de orden social y político capaz de abrir las puertas hacia la normalización institucional. Reclama del Gobierno Militar el establecimiento de un calendario para el retorno a la democracia. Fija condiciones mínimas para la realización de cualquier nuevo acto de consulta electoral o plebiscitaria al pueblo.

En la materialización de estas ideas u orientaciones que guían su actuación, la Iglesia ha representado la fuerza primordial de denuncia de las violaciones a los derechos humanos y de defensa y promoción de los mismos; ha abierto sus espacios propios y aquellos en que tiene incidencia para dar cabida a las actividades culturales de los sectores disidentes; ha profundizado y ampliado sus actividades solidarias en los sectores populares, favoreciendo y apoyando a las más diversas organizaciones de base; ha mantenido la tensión ética y crítica frente a los intentos de legitimación del régimen y de su institucionalidad; ha promovido las principales iniciativas —y mantenido el "clima espiritual" necesario para su realización— en torno del tema de la reconciliación nacional, y ha servido, en general, como el principal contrapeso público frente al régimen y sus pretensiones de consolidar la hegemonía de su modelo de "modernización de mercado" de la sociedad.

El papel cultural de la Iglesia bajo el autoritarismo

En los hechos puede sostenerse que la Iglesia Católica opera como el más poderoso dispositivo cultural de resistencia frente a las políticas del régimen encaminadas a alterar el funcionamiento del campo cultural y, sobre todo, de reorganizar la cultura cotidiana de la nación.

En el ámbito institucional o de campo, el hecho es que la Iglesia retiene una fuerte influencia en el sistema educacional a través de sus propias escuelas y de un sector de los maestros; en el ámbito universitario donde, desprovista parcialmente del control sobre sus propias universidades por la intervención de ellas, ha dado protección y apoyo para que se desarrollara el sector independiente de centros académicos de investigación y difusión, identificados con el mundo cultural alternativo; en el plano de la comunica-

ción social masiva, a través de sus propios medios que, aunque limitados, han desempeñado un papel crucial en ciertas coyunturas. En cambio, la oposición de la Iglesia en el plano de las específicas políticas de modernización y control del campo impulsadas por el Gobierno no ha resultado, a la larga, eficaz.

Sobre todo la incidencia de la Iglesia se hace sentir durante este período en el multiforme universo de la cultura cotidiana, donde concibe su propia función en términos de una visión que es polarmente antagónica a aquella que el régimen autoritario moviliza a través del doble expediente del disciplinamiento y la subfunción de la sociedad por el mercado. En efecto, según señalan los obispos en el documento *Humanismo Cristiano y Nueva Institucionalidad* de 1978, la fe tiene un carácter esencialmente dialógico, personal y comunitario, del hombre con Dios, en un proceso "que bien puede llamarse de liberación (o salvación) hacia la nueva tierra y nuevos cielos en un Reino de Amor. En virtud de esta índole de intercambio y comunicación personales, la fe cristiana asume, fomenta y eleva todas las formas positivas de consenso vivido, en cualquier comunidad histórica concreta, operando como un fermento fecundante. Pero simultáneamente será una instancia crítica, atenta y vigilante ante cualquier intento de doblegar y anular la inagotable riqueza personal de lo humano, en aras de algún sistema cerrado de ideas férreas, aun cuando ese sistema se autoimponga como inspirado en el depósito revelado (...)" En la práctica social cotidiana, esta visión —concepción operante de la fe— supone un régimen comunicativo abierto, la formación de "consensos vividos" que la Iglesia se dispone a fomentar y, a la vez, elevar por medio del fermento de la fe. Es decir, la Iglesia insiste en los aspectos comunicativos de la "sociabilidad natural" y en sus bases comunitarias, al mismo tiempo que entiende su propia misión como una "inspiración moral y liberadora". Esta visión, como es fácil concluir de lo que llevamos dicho a lo largo de nuestro análisis del significado cultural del autoritarismo —de su proyecto disciplinador y de "modernización de mercado"— es opuesto, punto por punto, a la propuesta transformadora contenida en ese otro proyecto. Allí donde éste busca reducir los umbrales comunicativos de la cultura, la Iglesia insiste en el carácter esencialmente comunicativo de la sociabilidad natural; allí donde aquél pretende que los comportamientos se condicionen operativamente por medio de dispositivos disciplinarios, esta otra visión reclama la formación de consensos con base en comunidades concretas. Pero, además, la Iglesia Católica agrega a su propia propuesta de articulación comunicativa de la cultura cotidiana un nuevo rasgo, cual es, la tensión crítica, ética, liberadora, incluso —en el extremo— utópica: la nueva tierra y los nuevos cielos. ¿Cómo compatibilizar, siquiera poner en contacto, esta visión con aquella nacida de la ideología neo-liberal criolla, con su énfasis en el mercado, en los automatismos de éste, en su carácter "moralmente coercitivo" para que el individuo se ajuste a la realidad de sus medios, ocupe el lugar que le corresponde y ponga sus metas en un "horizonte de consumos"?

La "liberación" que ofrece el mercado, digámoslo así, es un camino individual, adquisitivo, escasamente comunicativo, sin sociabilidad comuni-

taria, reducido al horizonte del consumo y negador de la solidaridad. Por su propia mecánica de operación en una sociedad profundamente dividida en clases y sujeta a fuertes desigualdades, el mercado "libera" a costa de excluir a las mayorías incluso de esa dimensión puramente material de la "libertad de consumo". Frente a esto, la Iglesia insiste en una "liberación" de lo humano que apunta hacia un horizonte trascendente —el encuentro personal con Dios— pero que se realiza dentro de la historia, como una experiencia concreta de "la inagotable riqueza personal" puesta en comunicación y solidariamente asumida dentro de una comunidad éticamente inspirada y que, por lo mismo, busca realizar en la sociedad los valores de la dignidad humana, de la fraternidad, de la justicia, de la libertad, etc.

No caben pues dos visiones más contrapuestas de la forma que debe asumir la ordenación de la vida cotidiana que aquellas propugnadas por la Iglesia Católica durante estos años y aquella que el régimen militar ha buscado imponer a través del disciplinamiento de la sociedad y de su modernización bajo la égida del mercado.

Esta contraposición de visiones tiene su expresión posiblemente más flagrante en el mundo popular cotidiano, que la Iglesia busca asumir dentro de una perspectiva ética de "opción preferencial por los pobres"; mientras que el Gobierno Militar se aproxima a ese mundo con el doble criterio de controlarlo —represivamente en el límite, cada vez que lo considera necesario— y de erradicar —técnicamente en lo posible— las condiciones que en su visión perpetuarían la pobreza. De modo que no la pobreza, sino los pobres concretos, su humanidad individual y comunitaria, se convierten en un nuevo terreno de disputas entre la Iglesia y los promotores del programa modernizador del Gobierno Militar. En la práctica, esa pugna representa la conflagración de dos concepciones y dos sensibilidades frente al mundo popular; de dos maneras de entender la conformación y el desarrollo de su cultura.

Por un lado, el Gobierno insiste en la potencialidad subversiva de estos sectores y en su fácil manipulación política por "activistas"; en otras palabras, en su radical desintegración de la cultura que los haría asimismo participantes disfuncionales de la democracia, fácil pasto de demagogos y partidos con ofertas "maximalistas" o revolucionarias. De allí que en esta visión los pobres necesiten ser continuamente controlados e incluso ecológicamente segregados, al mismo tiempo que se "atacan" las bases de la pobreza, cuestión esencialmente técnica y, por lo tanto, entregada exclusivamente a los funcionarios, sin necesidad de contar con la participación de las propias "poblaciones-objeto" en las tareas de erradicación de la pobreza. En tanto, mientras los pobres son puestos en condiciones de integrarse al mercado laboral y al consumo de bienes materiales progresivamente más sofisticados —rito de iniciación en la verdadera ciudadanía, según esta visión—, ellos deben tener una participación compensatoria a nivel de la cultura de masas, el "mercado de mensajes", con su insistencia en la simbología del consumo, su carácter privatista y hogareño, su radical desconexión con la política, su énfasis exclusivo en la circulación de "ideologías livianas", etc. En otras palabras, los pobres inician su acceso a la modernidad a través de

su integración a la moderna cultura de masas, a la espera de que la economía produzca la siguiente fase de integración.

Por otro lado, la Iglesia —sobre todo a nivel de sus parroquias populares— se dirige al mundo de los pobres como a un mundo que expresa invertidamente el estado de "pecado social" en que se encuentra la sociedad, a través de las figuras simbólicamente cargadas de los más débiles, los pequeños, los dolientes, los perseguidos, los que no tienen pan ni voz. Va de suyo que el Estado debe hacer lo posible por remover las condiciones que perpetúan la pobreza. Pero la Iglesia va más allá: entiende que en la pobreza hay una experiencia cultural que ella quisiera rescatar; valores que es necesario preservar y proyectar; formas de sociabilidad y solidaridad que representan adquisiciones válidas de la experiencia humana; en fin, una cultura —desfigurada por las señales de la pobreza— cuyo núcleo sin embargo contiene una "interpelación" ética e histórica que la Iglesia asume de variadas maneras.

Una de ellas es reconocer en ese mundo popular, culturalmente organizado, la capacidad para intervenir decisivamente en su propia liberación. De allí, en particular, el amplio apoyo otorgado por la Iglesia a las diversas formas asociativas de los pobres, sus "ollas comunes", comités de vivienda, movimientos sociales, agrupaciones culturales, organismos de subsistencia, etc.

Otra, conectada con la anterior, es la de levantar una reivindicación crítica, más o menos generalizada, frente a la emergente cultura cotidiana de masas, no sólo en cuanto a su expresión específicamente histórica de estos años bajo el régimen militar autoritario sino, más en general, en cuanto a su estructura comunicacional, que la Iglesia percibe frecuentemente homogeneizadora, "desculturizante", alienante, desintegradora de los valores propios de las culturas tradicionales, unilateralmente volcada hacia el consumo (y fomentadora del "consumismo"), etc.

Por fin, una tercera manera en que esa "interpelación" encuentra expresión y es asumida dentro de la Iglesia es a través de un movimiento específico, conocido como las comunidades eclesiales de base. Esta realidad emergente —cuyas dimensiones no han sido bien establecidas en Chile— posee sin embargo un particular valor en la medida en que proporciona la base social más fuerte y el referente sociológico para una nueva elaboración teológica dentro de la Iglesia, la teología de la liberación. Como señala uno de los exponentes nacionales de esta corriente, la Iglesia debe convertirse frente a los pobres. Esto implicaría "el reconocimiento de una culpa cristalizada históricamente en formas de convivencia o complicidad con los poderosos y tiene, por otra parte, un doble fundamento teológico: cristológico y eclesiológico. La Iglesia reconoce que, en los pobres, es Jesucristo, su fundador y Señor, quien le sale al encuentro y la interpela (...) El ser Iglesia de los pobres pertenece a la esencia de la Iglesia (...) Es esa y no otra la Iglesia que fundó Jesucristo".⁵¹ Es decir, Dios "trabaja" en la historia desde un lugar social determinado; existiría lo que Ronaldo Muñoz denomina "la parcialidad social del evangelio".

También cabe señalar que en este período la Iglesia estimula el proce-

so espontáneo y creciente de acentuación de un fenómeno, que si bien tiene un signo ambivalente en relación a las prácticas anteriormente señaladas, tiene una raigambre muy fuerte en el mundo popular; nos referimos al conjunto de las prácticas que constituyen lo que se ha denominado la *religiosidad popular*.

En Chile, las comunidades cristianas de base se desarrollan más intensamente a partir de 1975, complementando e integrándose al movimiento reorganizativo del mundo popular. Como señalan Correa y Viera Gallo, a través de esta nueva manifestación asociativa, la Iglesia busca reencontrarse con grupos de líderes del mundo popular, a la vez que las comunidades representarían la "irrupción de los pobres en la Iglesia", alterando la composición social de sus segmentos más activos. Por último, estas comunidades representan, al nivel de base popular, el nuevo y más extenso lugar de encuentro entre la Iglesia y los cristianos de izquierda, y entre los cristianos y la izquierda en general.

Sea como fuere que se evalúe la experiencia de las comunidades eclesiales de base, y no es tal nuestro propósito, es claro que ellas representan la manifestación más nítida, y teológicamente fundada, de la visión de la cultura popular como un eje alternativo de articulación de (o resistencia frente a) la incorporación de la modernidad. Mientras la Iglesia Católica chilena —como un todo— permanece relativamente abierta frente a ese proceso definitorio de la evolución cultural del país, moviéndose entre la crítica de sus efectos y el intento por orientarlo en una dirección compatible con la encarnación de la fe, la teología de la liberación y las comunidades eclesiales de base en cuya experiencia aquélla se apoya presentan una reacción potencialmente impugnadora de dicho proceso, y contiene teórica y prácticamente los gérmenes de una propuesta alternativa frente a la modernidad.

Nos topamos aquí, en realidad, con una de las varias expresiones que va encontrando dentro de la Iglesia su propio proceso de evolución de un "marco de época" —el de la modernidad— que no nace de ella pero que la obliga, en cambio, a repensar su historia y sus formas de relación con el mundo. Desde esta perspectiva debería analizarse cómo, en América Latina y en Chile, la crítica católica de la modernidad pueda hacerse asumiendo la cultura popular, antagónicamente, ya bien como un depósito profético de liberación que impugna la modernidad por sus desfiguraciones y opresiones, ya bien como una síntesis católico-autóctona que impugna la modernidad como un artificio superpuesto a la riqueza y vitalidad de esas tradiciones populares.

En suma, como se ha intentado sugerir a lo largo de esta sección, el papel de la Iglesia en el seno de las transformaciones culturales que experimenta Chile es extremadamente complejo, apuntando simultáneamente a la "coyuntura autoritaria" —tanto en sus efectos de campo como en la cultura cotidiana— como, más profundamente, al propio proceso de incorporación de la modernidad, que la Iglesia en cuanto institución social compleja— vive complejamente desde las tensiones de la fe, de la autoconciencia de sus diversos grupos, de la imbricación entre su dimensión universal y su dimensión local y regional, de su permanente desplazamiento entre el polo institu-

cional-bucorático y el polo profético, y desde su proyección trascendente hacia una nueva tierra y un cielo nuevo.

5. Los conflictos dentro del campo cultural

Es una característica del desarrollo del campo cultural moderno, dotado por tanto de un grado alto de hegemonía sectorial, que los conflictos que en él se experimentan tiendan a asumir una doble cara: una que mira casi exclusivamente hacia dentro del campo y que se libera en términos de los expedientes especializados de los profesionales que en él operan, y otra que mira hacia fuera del campo y que liga algunos de los conflictos internos con otros externos, o introduce dentro del campo querellas y conflictos externamente originados, o que ubica los conflictos en torno de los límites del campo y de sus principios de estructuración en la sociedad. Atrás ha quedado la idea, por tanto, de que el campo cultural no experimenta conflictos, sino sólo evoluciones; o que sus principales elementos y dinámicas de conflicto son originados fuera de sus propios límites, respondiendo éste de manera puramente epifenoménica y refleja a esos procesos más "estructurales" de cambio en la sociedad.

En Chile, durante el período en análisis, nos encontramos por el contrario con una variedad de conflictos y actores que inciden sobre las transformaciones y evoluciones del campo cultural. No sólo en cada uno de sus sectores y subsectores se presentan fisuras y querellas, sino que además se desarrollan dinámicas de conflicto en los límites del campo y otros que involucran a actores externos. No sólo hay pugnas que llegan a percibirse como tales —sea por los propios actores o por sectores de la sociedad— sino, además, conflictos que permanecen latentes, pero cuya importancia es a veces decisiva para la evolución del campo o de alguno de sus sectores o subsectores. No sólo nos encontramos con querellas especializadas —que se desarrollan por así decir en el interior de los propios lenguajes profesionales del sector o subsector— sino también con pugnas por posiciones en los respectivos mercados laborales, o en torno de recursos financieros y organizacionales, o respecto de la dirección de los procesos culturales, etc. Hay, pues, una enorme riqueza y variedad de conflictos que, en su conjunto, se encuentran sobredeterminados, sobre todo en las primeras fases del régimen autoritario pero incluso más adelante y hasta ahora, por la división entre un campo oficial y uno no oficial de la cultura; aquél estructurado en torno de los principales medios e instituciones y este otro vinculado más directamente a la sociedad civil, a la cultura cotidiana de base comunitaria y a la acción de los partidos y organizaciones sociales de oposición. Por fin, como se desprende de nuestro análisis hasta este punto, hay conflictos que son estrictamente "coyunturales" —respondiendo a la actual circunstancia de evolución del campo y a su inmersión en la situación autoritaria— y otros que se interconectan con las pugnas más básicas por orientar el proceso de incorporación de modernidad o por resistirlo, como se insinuaba en algunas expresiones de la

Iglesia Católica y su defensa del núcleo profético o tradicional de la cultura popular.

Actores y conflictos en el campo cultural

Sin que podamos entrar aquí en el detalle que requeriría el análisis comprensivo de los conflictos del campo cultural, nos proponemos identificar aquellos que parecen centrales para la evolución del campo, y que son característicos de la actual situación o coyuntura autoritaria. En cambio, no haremos mención sino al pasar a los *conflictos especializados* o sea, aquellos que tienen lugar dentro de los propios lenguajes profesionales de los actores del campo, como ocurre entre visiones y estilos de la plástica, o entre las vertientes del teatro de creación colectiva y de autor, o entre los partidarios de introducir el ciclo básico en la enseñanza superior y aquellos que se oponen a esta innovación, o entre los defensores de una u otra forma de pedagogía, etc. En realidad, debido al proceso de creciente hegemonía sectorial del campo, estos conflictos son, asimismo, crecientemente relevantes, y determinan en parte la evolución de la cultura en cada sector y subsector; de las disciplinas científicas, de la organización curricular de los conocimientos educacionales, de las formas en el arte, de las concepciones literarias, etc. Su análisis requiere, sin embargo, aproximaciones también cada vez más especializadas y análisis particularmente minuciosos, que no podemos siquiera empezar a desarrollar en este trabajo.

Pensamos que los *conflictos de campo* pueden agruparse en un esquema relativamente simple, atendiendo a la *naturaleza de los actores* y al *objeto del conflicto*. Distinguiremos al efecto, simplificando extremadamente, entre actores *internos* y *externos* al campo, y entre conflictos centrados en torno de la *integración organizacional* y de la *orientación de la producción*. Podemos así representarnos cuatro clases de *conflictos típicos* en la actual coyuntura de desarrollo del campo cultural en Chile:

	Integración Organizacional	Orientación Producción
Actor Interno	A	B
Actor Externo	D	C

a. Demandas organizacionales del personal profesional

Los conflictos de tipo A son usualmente aquellos que se han venido desarrollando en las instituciones culturales donde los actores internos están en condiciones de reclamar participación en la dirección de las instituciones o en la codeterminación de sus condiciones de trabajo. No ocurren usualmente, por lo mismo, en sectores bajamente organizados del campo o en sectores con fuerte preponderancia de profesionales que operan individualmente, como ocurre por ejemplo en varios de los subcampos del arte.

En cambio, en la misma medida en que las instituciones pierden autonomía en la actual coyuntura, y tienden a ser controladas disciplinariamente por el Gobierno, este tipo de conflictos puede fácilmente asumir una connotación política antigobierno o, incluso, antirégimen. Es decir, su carácter "internalista" se vuelve frecuentemente ambiguo, conectándose fácilmente con conflictos sociales más externos, que atraviesan al respectivo sector del campo cultural y se proyectan hacia fuera de él.

Entre los conflictos de este tipo, el más decisivo durante estos años ha sido el que se ha desarrollado dentro de las universidades, particularmente en las Universidades de Chile, Católica de Valparaíso y Universidad de Concepción, movilizado por las Asociaciones de Académicos y las Federaciones de Estudiantes. En juego están aquí las condiciones de autonomía de las instituciones universitarias; el fin de la intervención universitaria por parte del Gobierno y su expresión mediante la figura de los rectores delegados; la libertad de cátedra; la elección de las autoridades académicas y la participación de los propios académicos en los órganos de dirección universitaria, elementos todos que habían estado presentes hasta el momento del golpe militar y que ahora se busca recuperar.

Simultáneamente, los académicos luchan por mejorar las condiciones de trabajo de la profesión, especialmente sus propias remuneraciones, el presupuesto y equipamiento de las universidades y las inversiones para el desarrollo académico. Esta dinámica de conflictos ha ido lentamente cambiando la coyuntura universitaria, pasándose de una situación de total control por parte del Gobierno a una de erosión de esas formas de control, acompañada de la casi total deslegitimación del sistema de intervención y de los rectores delegados, de la elección de los decanos por los propios académicos, de reajustes parciales de remuneraciones y, ya en dos casos, de la remoción del rector-delegado impuesto por el Gobierno que hubo de ser sustituido por uno, designado igual por el Gobierno, pero más representativo, por lo menos, de los valores y las tradiciones de la profesión académica.

En otros subsectores, por el contrario, ha habido una marcada ausencia de conflictos de este tipo, por la propia naturaleza de esos subsectores y por la baja capacidad de maniobra de sus actores internos. Es el caso, por ejemplo, de la televisión que, como tuvimos oportunidad de ver, opera con escaso personal, todavía con una profesionalización relativamente débil, bajo la forma organizacional de empresas privadas, sin presencia de sindicatos fuertes, y con niveles de remuneraciones que los profesionales, técni-

cos y trabajadores de los principales canales han definido, en general, como adecuados.

b. La lucha por la hegemonía en el campo

Los conflictos del tipo B tienden a asumir, frecuentemente, la forma de "conflictos especializados", expresados por tanto dentro de los lenguajes de la profesión, según el subsector de que se trate. Conflictos de este tipo han sido frecuentes, aunque de escasa relevancia pública, en algunos subsectores del campo artístico, por ejemplo en la plástica. Incluso, en algunos casos, conflictos así estructurados han sido más intensos en el interior del campo no oficial que entre éste y el oficial, como ocurre con el caso de la "nueva escena", en el subsector de la plástica, o con el movimiento musical disidente. Asimismo, se encuentran conflictos de este tipo en algunas disciplinas de las ciencias sociales, particularmente en el caso de la economía, donde la querrela entre neoliberales criollos (llamados de Chicago) versus el resto de las corrientes de la economía desbordó por completo el campo disciplinario, transformándose en una de las más decisivas querrelas ideológicas de la reciente década, la que aún continúa.

En cambio, este tipo de conflictos —que son inherentes al campo cultural cuando se halla estructurado de manera más o menos abierta y plural— ha estado prácticamente ausente de los grandes medios del campo, como la televisión y la prensa. En el caso de la prensa, seguramente, esta ausencia de conflictos ha dado lugar a una actitud de generalizada autocomplacencia con los niveles relativamente bajos del diarismo nacional, que se ha visto reforzado por el tradicional atraso y debilidad en la formación profesional de los periodistas. Por el contrario, conflictos de este tipo fueron particularmente resaltantes al comienzo de la reforma educacional impulsada por el Gobierno Militar, entre los años 1981 a 1983, cuyos ecos todavía es posible percibir en el caso de la educación superior. Con el tiempo, sin embargo, el Colegio de Profesores, que representa a la mayoría de los maestros del país, debió ir asumiendo una actitud más gremial-corporativa, de defensa de sus ingresos, su carrera funcionaria, etc., abandonando el terreno de la lucha en torno de las orientaciones del sector educacional. A su vez, la propia naturaleza de los cambios impulsados por el Gobierno —a diferencia de lo que ocurrió con la propuesta de la Escuela Nacional Unificada bajo el Gobierno de la Unidad Popular— facilitó ese "desinflamiento" de las reacciones, en la misma medida en que el Gobierno Militar presentaba su propuesta de reforma como un proceso puramente técnico-organizacional, y que de hecho ella tenía un carácter fundamentalmente organizativo, según la terminología empleada por nuestro esquema.

Más frecuentes han sido en cambio, dentro de la coyuntura autoritaria, las querrelas y los conflictos movilizadas por actores externos.

c. Las pugnas por la dirección de la cultura

En el caso de los conflictos de tipo C, ellos se han producido, principalmente, por el rechazo a la aplicación de las políticas gubernamentales de "modernización de mercado" de las instituciones del campo cultural, más que como expresión de conflictos netamente centrados en torno de las orientaciones específicas de la producción. En ausencia, sin embargo, de actores internos fuertemente estructurados y con real poder de negociación dichos conflictos no han llegado demasiado lejos. En efecto, cada vez que una institución central del campo cultural funciona orientando su producción hacia el mercado, los actores externos —redefinidos ahora como consumidores— tienden a perder poder de presión y se fragmentan en una heterogénea asociación de preferencias individuales, como ocurre en el caso de la televisión e incluso de la educación. El malestar muchas veces voceado, por ejemplo, respecto de la orientación de la televisión chilena, no logra permear las estructuras internas de las empresas que controlan los canales, y permanece por tanto en ese nivel —el de un malestar— expresado como "opiniones" de padres de familia, psicólogos infantiles, críticos individuales de la programación televisiva, etc., sin llegar tampoco a afectar el comportamiento de las autoridades de Gobierno. Algo similar ocurre en los casos de la educación, de la prensa y de otras ramas de la industria cultural. El mercado opera, en estos casos, como un dispositivo disuasivo del conflicto, despersonalizando la demanda, autonomizando a los productores, automatizando las interacciones y atomizando a los consumidores. Estas ideas han sido frecuentemente discutidas en relación al consumo de la televisión y a la orientación de la producción de este medio.⁵² En el marco de Estados totalitarios, que procuran una "resocialización total de la población", el propio Estado juega una función decisiva, como actor externo (burocracia y partido) en la fijación de orientaciones para la producción en el campo cultural, en todos los sectores y subsectores, dando lugar con ello a conflictos típicos dentro de los países de "socialismo real". En cambio, el Estado autoritario, como se analizó anteriormente, no procura establecer una hegemonía a ese nivel de la orientación de los procesos de producción de cultura de campo, limitándose a asegurar una suerte de cuasimonopolio de los medios para los actores internos partidarios, reduciéndose con ello una franja de conflictos potenciales hasta casi desaparecer. Pues las cosas se presentan como si el Gobierno no estuviera interesado en provocar un "realignamiento ideológico" de la producción; no insiste en "contenidos" en el caso de la televisión o la educación; no aparece habitualmente ejerciendo control sobre la producción informativa de la prensa (aunque en ocasiones lo hace); no promueve una visión estética determinada en el campo del arte, etc. Su acción, se despliega más bien en el sector de la integración organizativa del campo, y es por eso que allí se presentan los mayores conflictos, o por lo menos las querrelas más intensas y, con ello, la potencialidad de conflictos.

d. Conflictos en torno del control organizacional de la cultura

En el caso particular del Estado chileno, su principal pretensión ha sido, precisamente, la de modificar las condiciones de operación y estructuración del campo cultural, dando lugar con ello a una mayor potencialidad de conflictos del tipo D, que tienen que ver, justamente, con la intervención de actores externos en la esfera de la integración organizativa del campo. Una parte significativa de los conflictos en torno de la reforma del sistema educacional se produce por eso en este ámbito, llevando la discusión a nivel de los partidos, las agrupaciones de profesionales y en el interior de la propia tecnoburocracia del Estado, sobre todo en el tiempo en que aún no se había consolidado la hegemonía interna del grupo neo-liberal y que, por lo mismo, el Gobierno vacilaba entre políticas culturales originadas en una vertiente nacionalista, en una concepción elitista de la alta cultura o en la vertiente más empresarialmente orientada de la industria cultural.⁵³ La puesta en marcha de las reformas culturales posteriores a 1980, en cambio, dio lugar a una variedad de expresiones de conflictos de este tipo, en la misma medida en que ellas se orientaban en general a alterar la integración organizativa del campo, desplazando su eje desde la coordinación político-administrativa (para retener solamente el aspecto del control disciplinario) hacia la coordinación operada por el mercado. Este desplazamiento, como hemos visto en varias oportunidades, generó intensas discusiones y querrelas que no llegaron a alterar, sin embargo, los cursos de acción impulsados por el Gobierno, debido a la debilidad de los actores internos y, simultáneamente, a la relativa debilidad de los actores externos dispuestos a oponerse a las iniciativas gubernamentales. De hecho, ninguno entre esos actores, con la sola excepción de la Iglesia, lograba generar movimientos sociales o de opinión capaces de contrarrestar la aplicación de las políticas del Gobierno. En este sentido puede decirse que las discusiones desatadas por la municipalización de la educación o por la reforma de la educación superior, así como por la apertura al sector privado de la televisión por cable, o para la remoción de la censura previa aplicada a las publicaciones, o en torno de la circulación libre de la prensa, nunca llegaron a generar verdaderos conflictos, en los que participaran articuladamente actores internos y externos al campo, asegurando la movilización de suficientes recursos de organización e ideológicos como para haber obtenido resultados prácticos. Con el tiempo, las medidas impulsadas por el Gobierno se aplicaron todas o fueron removidas por éste según su propio calendario de necesidades, sin perjuicio de la influencia lateral que hayan podido ejercer movimientos de opinión y reacciones de los propios actores internos del campo afectados por esas medidas.

Por su propio carácter, este tipo de conflictos (de la clase D) tiende habitualmente a centrarse alrededor de las grandes instituciones o medios del campo —la televisión, la prensa, las universidades, el sistema formal de escolarización— y, en cada caso específico, tiende a desenvolverse en torno de unos pocos tópicos: acceso a los respectivos medios e instituciones, cobertura de los mismos, participación en ellos del sector público y del

privado, organización interna de las instituciones y medios en cuanto al grado de participación de los actores internos y de la representación, en su manejo y control, de los actores externos. De hecho, la agenda de discusión actual en torno de la televisión, la prensa, la educación superior y el sistema de enseñanza masivo gira alrededor de estos tópicos; y es en torno de ellos, por lo mismo, que se pueden identificar los mayores clivajes ideológicos y los gérmenes de los conflictos que se producirán en el futuro.⁵⁴

Dinámicas de transformación y lucha cultural

En suma, a pesar de las grandes transformaciones experimentadas por el campo cultural —y por el hecho de que éstas se dieron dentro de un marco autoritario y de control que volvía difícil la oposición, a la vez que impulsaban procesos de aproximación al mercado que por sí mismos alejaban la posibilidad de una reacción colectiva y organizada— los conflictos ocurridos en torno de ellas no han pasado, habitualmente, más allá del plano discursivo y de la confrontación ideológica. Hay excepciones, con todo, como las que acabamos de revisar, las que no han podido, sin embargo, alterar las líneas de avance de los cambios impulsados por el Gobierno.

Esta ausencia aparente de conflictos *dentro* del campo cultural se explica, además, por el hecho de que el régimen al imponer un control decisivo sobre el mismo y sus instituciones, excluyendo a los actores y corrientes disidentes, forzó a éstos a reagruparse en torno de expresiones no oficiales de campo (o en el exilio) donde, como vimos, se desarrolló una activa producción cultural contestataria y, posteriormente, alternativa, que buscaba "competir" con la producción del campo oficial —o la rechazaba y se resistía frente a ella— sin poder trasladar al interior de dicho campo el conflicto por su hegemonía. En la medida en que estos fenómenos contestatarios y disidentes han ido retrayéndose, para dar paso lentamente a una inicial y difícil reintegración del campo cultural, es posible prever que aumentarán también los conflictos dentro de éste, ahora en medio de una situación relativamente menos desequilibrada de fuerzas, con mayor juego político y con una presencia mayor de la oposición en todos los ámbitos de la sociedad.

6. Los cambios en la cultura cotidiana

Tal vez el fenómeno más sugerente de la actual coyuntura chilena sea el de las imágenes contrapuestas que sobre la propia vida cotidiana han ido formulándose en el sector partidario del Gobierno Militar y entre los sectores opositores. Como nunca antes, la producción de campo —especialmente en su sector académico y de intelectuales con una función ideológica— genera visiones polarmente contrapuestas sobre la realidad material y simbólica del país, al punto que en Chile se ha vuelto casi un lugar común hablar de la "tesis de los países". Va de suyo que el país "real" de unos es el país "inexistente" para los otros, y esta verdadera división intelectual y de sensibili-

dades produce su propio efecto de "atrincheramiento", de modo que cada posición profundiza sólo sus propios supuestos y se aleja cada vez más de la contraria.

Para la visión oficial, Chile habría experimentado una "revolución silenciosa" que en el plano de la vida cotidiana impuso cambios profundos, "modificando la forma en que las nuevas generaciones de chilenos viven, piensan, estudian, trabajan y descansan. La manera en que se visten, los alimentos que adquieren, la forma en que distribuyen su tiempo libre, las ciudades en que prefieren vivir, las carreras que quieren estudiar (...) Todo está cambiando".⁵⁵ Dentro de esta visión, Chile se ha modernizado e integrado al mundo; su población dispone de mejores y más servicios de salud y educación; el acceso a los bienes de consumo está en vías de universalizarse; han surgido nuevos polos de desarrollo cambiando la geografía del país; la información fluye cotidianamente por las redes comunicacionales de la sociedad; ha surgido un nuevo sector empresarial, ágil y eficiente, competitivo y abierto a los desafíos del comercio internacional; el Gobierno ha abandonado su pesadez burocrática y se acerca a la población; la pobreza ha retrocedido y hoy es mejor entendida y atacada más eficazmente por las políticas sociales del Gobierno; en todas partes se multiplican las opciones y se respira un clima de participación en los valores y en los beneficios del desarrollo.

La visión disidente u opositora no sólo no encuentra ese país en la realidad sino que, además, percibe uno radicalmente distinto⁵⁶: uno que ha sido destruido silenciosamente y que requiere, por ende, reconstruirse de arriba abajo. Dentro de esta visión, Chile se ha aislado del mundo y ha experimentado una modernización artificial, que sólo favorece a una escasa franja de la población; la mayoría ha perdido derechos y ventajas en el plano de la salud y de la educación; las regiones y ciudades alejadas de la capital han visto disminuir su vigor y son hoy más pobres y menos interesantes que hace 15 años; la información pública se encuentra limitada y es manipulada; los nuevos empresarios son pocos y prosperan exclusivamente en virtud del apoyo estatal, que cubre sus pérdidas y mantiene a raya la presión sindical, lo que facilita la explotación; el Gobierno se ha desprendido de sus medios de acción social y ha retenido y ensanchado, en cambio, sus capacidades de control y amedrentamiento de la población; la pobreza ha aumentado y los pobres son hoy tratados como meros objetos de políticas tecno-burocráticas; las opciones del mercado se han incrementado en favor de unos pocos al mismo tiempo que han sido suprimidas las libertades en el terreno de la política, del derecho al trabajo y de la seguridad de la vida; por todas partes se respira un clima de temor, de inseguridad, de fragmentación y de profunda crisis nacional.

Traspasar estas imágenes antagónicas, para interrogarse al otro lado de ellas por cuáles han sido los cambios experimentados por la cultura cotidiana de los chilenos, es una tarea nada fácil, pues implica reencontrar la variedad dentro de una unidad que efectivamente, a nivel ideológico y político, se halla destruida.

Las bases económico-sociales y políticas de la cultura cotidiana han

experimentado, efectivamente, una significativa transformación.⁵⁷ Los perfiles de estratificación se han modificado, las pautas de trabajo y de consumo han experimentado cambios y se han diversificado, las formas de exclusión social se han vuelto no sólo más masivas sino que más sistemáticas para un sector de la población, la acción social organizada (sindicatos, por ejemplo) ha visto alterada su importancia y masividad, el papel "benefactor" del Estado ha cambiado en función de un rol represivo y disciplinario, por un lado, y, por el otro, de su retraimiento de la economía y la distribución de beneficios sociales, la esfera pública de la elaboración de consensos e identidades políticas ha casi desaparecido. Como se señala en un trabajo reciente, "se ha consolidado una nueva forma de organización societal, a la cual los individuos primero, y los diferentes actores colectivos después (terminando por los propios partidos de posición), tienden a adaptarse. En efecto, hay una estructura económica en manos privadas y altamente integrada al exterior, se ha transformado profundamente la morfología social, la organización y funciones del Estado se han alterado radicalmente, las pautas de acción colectiva se han modificado sustancialmente, en fin, se ha producido un completo reajuste en la relación Estado/sociedad". Y un poco más adelante se concluye señalando que "es evidente que se ha producido una nueva modernización, que se identifica, (en Chile, así como en el mundo entero) con la diversificación e internacionalización de la economía, con la descentralización, tecnificación y retraimiento del Estado, con la valorización de las iniciativas asociativas e individuales (incluida la función empresarial), etc. A la nueva modernización se han incorporado de lleno la burguesía y la alta clase media. Sin embargo, ella ha ido de la mano de la exclusión de una proporción importante de la población, que aspira a mecanismos de integración propios de la "vieja" modernización: empleo en la industria, educación, provisión de servicios sociales por el Estado, participación política, etc."⁵⁸

¿Qué significan, entonces, esos cambios en la base de estructuración de la cultura cotidiana para la operación de ésta?

De entrada, su mayor *fragmentación*, entendida aquí no como pérdida de unidad —que nunca ha existido salvo en los discursos sobre la cultura cotidiana— sino como proceso de diferenciación e incremento de la heterogeneidad. Las bases de la cultura cotidiana pierden sus referentes tradicionales de clase y estrato y se vuelven mucho más "estamentales", en el sentido de constituidas en torno de atributos de participación en el consumo capaces de definir identidades o "estilos de vida", sea por inclusión o exclusión de los respectivos mercados y circuitos asociativos. Sin que ello signifique, naturalmente, la conformación de nuevos "movimientos sociales" se ve surgir, por todos lados, una mayor diversidad de "constelaciones culturales de tipo estamental", bajo la forma de culturas juveniles, cultura estudiantil, cultura de mujeres, culturas de grupos profesionales, de sectores obreros, de pobladores, de empresarios jóvenes, empresarios tradicionales, de tecnócratas, académicos, etc.

En seguida, una mayor valoración de lo privado —ya no sólo como la figura extendida del hogar— sino como una esfera extensa, la de la *socié-*

dad civil, en que es posible y necesario encontrar la propia ubicación, desarrollar las actividades posibles, integrarse a circuitos asociativos o de solidaridad y plantear, desde allí, las formas de acción colectiva. Algunos autores han hablado en este punto de una *separación* del Estado y la sociedad, o sea, de la pérdida de esa "fusión" que fue característica del desarrollo de Chile como nación y que marcó profundamente su organización, su economía, sus hábitos políticos, el papel de los partidos, la sujeción de lo social a lo político, la existencia de una cultura política estatista, etc. Confundir este fenómeno meramente con un movimiento hacia la "privatización" —entendida ésta como traspaso de recursos desde el Estado al sector empresarial— reduce la calidad de la comprensión, pues lo que va apareciendo con la "nueva modernización" no es solamente un reajuste en la distribución del poder económico sino, más generalizadamente, una nueva dimensión de la cultura cotidiana que irrumpe a través de la multiplicación de los movimientos asociacionistas (de esto hablábamos anteriormente, al analizar la nueva configuración educativa de la sociedad chilena), un naciente sentido de localidad y vecindario, una forma de comunitarismo no necesaria ni exclusivamente ligado a las reivindicaciones y movilización políticas, un grado mayor de individualismo, y un cierto sentido de que las oportunidades se hallan ligadas al esfuerzo personal, en esta esfera de la sociedad, más que a la política y a la acción de los entes propios de la esfera pública.

El *disciplinamiento* de la vida cotidiana que, como vimos, llegó a ser tan característico de la primera fase del régimen militar autoritario no desaparece pero, gradualmente, se transforma. En parte porque como se señalaba en la larga cita anterior, los individuos primero y los actores colectivos después tienden a *adaptarse* a las nuevas circunstancias; en parte porque esa propia adaptación "interioriza" por así decir los mecanismos disciplinarios y sus efectos en el interior de la cultura cotidiana, modificándolos. Nace así un nuevo sentido del "orden social", diferente del anterior, claro está, en la medida en que se halla desprovisto de componentes comunicativos elaborados públicamente; más centrado, en cambio, en esas microadaptaciones que incluyen el miedo pero lo rebasan. Pues este "sentido del orden" —como ocurre en toda sociedad donde el mercado entra a jugar un rol creciente en la coordinación de las actividades individuales y sociales— se desplaza hacia la valoración de los contenidos instrumentales, de las figuras del intercambio, de las preferencias individuales y de la ética del "doy para que des".

Puede decirse que el proceso de incorporación de la modernidad en la cultura, allí donde opera dentro de condiciones específicamente capitalistas, encuentra en ese tipo de desarrollo de la cultura cotidiana —esto es, el surgimiento de una variedad de constelaciones culturales de tipo estamental, la mayor valoración y el ensanchamiento de lo privado, y la interiorización de las disciplinas que llevan a un sentido instrumental del orden— una fuerte palanca de apoyo, seguramente más que en la difusión de una "ética puritana", según la clásica teoría weberiana.

De allí, asimismo, que las fuerzas contestatarias del régimen autoritario hayan optado en Chile, en cuanto fuerzas operantes dentro de esta esfera

de la cultura cotidiana, por oponerse sistemáticamente a esos procesos transformadores, lo que las coloca en una posición incómodamente defensiva y difícil de sostener en el mediano plazo. Su accionar, efectivamente, se ve en la necesidad de recalcar el momento puramente negativo de los anteriores procesos, confundiendo la diferenciación estamental con la atomización social, el privatismo civil con una mera privatización de recursos y la interiorización del disciplinamiento con la sujeción por el temor. Frente al rasgo estamental de una cultura que parcial pero crecientemente se define frente a un "horizonte de consumos" buscará oponer las figuras tradicionales de la acción colectiva, reivindicando culturas seguramente periclitadas, como una supuesta cultura obrera, una cultura socialmente orientada de rebeldía juvenil, una cultura de educación pública de clases medias, etc. Frente al fenómeno del privatismo civil, se ilusionaría por un instante con la posibilidad del surgimiento de nuevos y masivos movimientos sociales —que eventualmente confluirían en el tradicional "movimiento popular"—, para luego, en la fase declinante de la ilusión, aferrarse a los esquemas que predicen una situación potencialmente explosiva a partir de la anomia y la rebeldía que generarían el autoritarismo y su proyecto de "modernización de mercado" de la sociedad. Por fin, frente al rasgo de interiorización de las disciplinas, la oposición se ve forzada a oponer un discurso fundado en pretensiones puramente éticas y denunciativas, reclamando de los sujetos que pierdan el temor, se levanten y caminen en función de metas "reconstructivas" pero escasamente instrumentales que seguramente podrán despertar expectativas que, una vez cerrado el ciclo de la transferencia del poder, llevarían a un rápido desencantamiento, como el que ya se vislumbra anticipadamente entre los más jóvenes de la generación estudiantil rebelde.⁵⁹

Pero, además, la cultura cotidiana no se ha transformado sólo "desde abajo", por los cambios que experimentan sus bases económico-sociales y políticas, sino también desde el propio lado de la producción proveniente del campo cultural. Como señalamos anteriormente, se constituye durante esos años una nueva forma de *cultura cotidiana de masas*, movilizadas en torno del consumo de los bienes producidos por la industria cultural —particularmente la televisión y la radio—, y a la educación. La integración de esa cultura de masas diferenciada y heterogénea estamentalmente se produce precisamente a ese nivel —en el "mercado de mensajes"—, hecho que habitualmente tiende a ser olvidado en los análisis de las transformaciones del período, o reducido a la crítica de la televisión y el análisis de sus efectos supuestamente alienadores. En cambio, la integración que se produce por esta vía se hace a partir y supone la diferenciación estamental o de estilos de consumo, y conlleva por eso, sin duda, el riesgo de "velar" u ocultar la segmentación social de las oportunidades de acceso a otros sectores de la cultura. Se trata efectivamente —en el caso del "mercado de mensajes"— nada más que de la integración a una *forma del consumo*; no de una socialización común en los contenidos transmitidos. Integración de tipo instrumental por tanto, puesto que no atiende a la sustancia de lo transmitido, como ocurre habitualmente en el caso de las "ideologías pesadas", sino a la común participación en un mundo de "ideologías livianas", cuyo consumo se

supone suficiente para el funcionamiento de una "cultura de masas" relativamente integrada en su propio nivel de "densidad comunicativa". De hecho, la cultura de masas moderna es, en su actual fase de desarrollo, una constelación "baja en contenidos" pero no por eso menos eficaz en sus funciones integrativas. Su forma es la ideología de esa cultura, en la medida en que a través de ella se determinan imágenes del mundo y se encausa una modalidad de participación en el universo simbólico que sirve para construir identidades y para alimentar la percepción de la realidad cotidiana.

Una nueva cultura cotidiana de masas irrumpe pues en la superficie de la sociedad, y lo hace con inusitada fuerza en la medida en que su surgimiento se enmarca y descansa en esos procesos de base —la heterogeneidad estamental, el privatismo civil, y un nuevo sentido instrumental del orden— que le dan su vigor, a la vez que la alejan del modelo de una cultura de masas movilizable políticamente o interpelable, de manera directa y fácil, en virtud de proposiciones puramente éticas o de contenidos ideológicos "pesados".

La reinserción de la política de partidos en medio de esa cultura está resultando dificultosa, precisamente, por esta nueva contextura de la cultura cotidiana de masas, y no sólo o principalmente por el hecho de que la oposición se encuentre excluida o desfavorecida en el uso de la televisión. El mero hecho de que a unos pocos meses de producirse el plebiscito en que la población se verá obligada a votar Sí o No frente a la continuación del régimen y frente a la candidatura de quien lo encarna, sin que pueda decirse a ciencia cierta cuál será el resultado, parece estar demostrando de manera bastante sugerente que la cultura de masas no se moviliza ya sostenida e intensamente en torno de contenidos ético-políticos, que el conformismo obtenido por el régimen no es un fenómeno puramente pasajero y que las transformaciones en la cultura empiezan a producir efectos hasta unos pocos años inesperados o impensables.⁶⁰

Lo que parece claro, en fin, es que tras los largos años de experiencia cultural bajo un régimen militar autoritario, en que las corrientes más profundas de incorporación de la modernidad en la cultura han continuado operando ininterrumpidamente y se han visto reforzadas incluso en algunos aspectos, la cultura cotidiana no ha podido dejar de experimentar, igualmente, un fenómeno de radical reajuste y reorientación. El relato puramente "glorioso" de lo ocurrido en este plano, como viene formulado por los panegiristas de la visión oficial es evidentemente una exageración; como lo es la visión "negra" y catastrofista que a veces se alimenta en los círculos opositores. En un extremo no se consideran para nada las "contradicciones culturales" del capitalismo periférico, para parafrasear a Daniel Bell, y los efectos sistémicos de distorsión causados por el contexto militar autoritario; y, en el otro, se desconocen por completo los avances en la incorporación de la modernidad y las tensiones específicas que ella plantea, en las nuevas circunstancias de la sociedad chilena. A estos tópicos dedicaremos el capítulo final de nuestro trabajo.

7. Algunas prácticas del consumo cultural

A lo largo de este capítulo —en varias de sus secciones— hemos descrito, dimensionado y analizado prácticas de participación en la cultura. En esta sección deseamos caracterizar algunas prácticas de consumo cultural asociadas al "mercado industrial de mensajes" y a algunos sectores del subcampo de las artes, para lo cual echaremos mano de la información proporcionada por una reciente encuesta realizada en Santiago por FLACSO y CENECA.⁶¹

Frecuencias de consumo y dimensiones de la no participación

La distribución de *públicos consumidores*, según la frecuencia más alta de consumo para diversos medios, es la que se muestra en el cuadro 13.

Puede ser interesante contrastar el anterior cuadro con uno que muestre la no participación en el consumo de los bienes culturales consumidos más frecuentemente.

En breve, puede decirse que el consumo de la televisión y de la radio se encuentran ampliamente difundidos y tienen una frecuencia alta de ocurrencia; en posición semejante se encuentra el consumo de música, que parcialmente se recubre con la exposición a la radio. De hecho, un 81,3% de los que escuchan música declaran hacerlo principalmente a través de la radio.

Alrededor del 20% de los encuestados, por su parte, declaran leer diariamente un periódico o semanalmente una revista. A la vez, 25% no lee nunca una revista y alrededor de 30% no lee nunca un diario.

Equipamiento cultural de los hogares

En cuanto al "equipamiento cultural" de los hogares del Gran Santiago, la encuesta arroja la siguiente situación, que es concordante con las tendencias de consumo antes indicadas.

Rasgos del consumo masivo

Si miramos más de cerca el consumo de los medios con más frecuente participación podemos observar algunas de las pautas que regulan el consumo cultural en Santiago.

a. El *consumo de televisión* se halla ampliamente difundido. Entre los que no acostumbran ver televisión (7% de la muestra total), un 19% declara no hacerlo por no poseer un aparato de recepción, un 20% porque no le interesa y un 25% porque no tiene tiempo. En cambio, 24% de los que ven televisión lo hace por considerar que los programas son de mala calidad y 7% porque hay demasiada publicidad en la televisión. En suma, los

Cuadro 13
Frecuencias más altas de consumo para diversos medios; Santiago 1987
 (en porcentaje sobre la base del total de la muestra)

Práctica de consumo	%
Ha visto televisión en los últimos días	91,3
Escucha música habitualmente	79,6
Escucha radio FM los días de semana	68,3
Escucha radio AM los días de semana	58,0
Están leyendo actualmente un libro	26,3
Fue al cine el último mes	22,2
Leen diarios todos los días	21,1
Ha ido al teatro en el último año	19,0
Leen revistas todas las semanas	18,7
Ha asistido a recitales de música popular en el último año	16,4
Acostumbra ver videos	15,8
Ha asistido a recitales de música rock en el último año	14,0
Ha ido al teatro en los últimos seis meses	9,8
Ha ido a un concierto (música clásica) en el último año	6,9
Ha ido al ballet en el último año	5,2
Ha asistido a recitales de jazz en el último año	4,5
Ve videos frecuentemente	4,0
Ha ido a la ópera en el último año	1,9
Van al cine cuatro o más veces al mes	1,7

Fuente: FLACSO y CENECA, *Encuesta de consumo cultural, 1988.*

Cuadro 14
No participación en el consumo de los bienes que se indican: Gran Santiago, 1987.
 (en porcentaje sobre la base del total de la muestra)

Práctica de consumo	%
No acostumbra ver televisión	7,0
No escucha música	20,2
No lee nunca o casi nunca una revista	26,8
No leen nunca o casi nunca un diario	29,6
No escucha radio FM	31,6
No va nunca al cine o no va hace más de un año	33,8
No escucha radio AM	41,8
No ha leído ningún libro en el último año	45,3
No asiste al teatro hace más de un año	80,7
No asiste a un concierto de música clásica hace más de un año	93,1

Fuente: FLACSO y CENECA, *Encuesta de consumo cultural, 1988.*

Cuadro 15
Equipamiento cultural: hogares que poseen los siguientes aparatos
Gran Santiago, 1987*
(en porcentaje sobre la base del total de la muestra)

Aparato	%
Radio cassette	79,9
TV blanco y negro	71,5
Radio sola	64,1
TV color	59,0
Equipo modular	44,4
Grabadora/toccassette	37,9
Tocadiscos, tornamesa	31,9
Equipo video	5,3

Fuente: FLACSO y CENECA, *Encuesta de consumo cultural, 1988.*
 *Respuestas múltiples.

que manifiestan una actitud radicalmente crítica frente a la televisión no pasan más allá de 3% de la muestra total.

Entre los que ven televisión, sólo un 25% declara dedicar una hora o menos a la televisión durante los días de semana. 27%, en cambio, mira cuatro horas o más de televisión durante los días de semana. Los fines de semana, esta cifra aumenta a más del 50% entre los que habitualmente ven televisión. Para una mayoría (77%) de los que ven la televisión, este proceso es un proceso "familiar". Casi todos ven la televisión, además, en su propia casa. Los programas de mayor audiencia son los recreacionales o de entretenimiento, reuniendo 61% de las preferencias declaradas. Un 13% declara que el programa que más ve son los noticiarios y un 3% los programas educativo-culturales. Sin embargo, entre los que ven televisión, un 31% declara (en pregunta que admitía respuestas múltiples) que agregaría programas culturales y sólo un 2,6% agregaría programas de entretenimiento; en tanto que un 21% declara que suprimiría las telenovelas y 12% los shows. El interés por agregar programas dedicados a la realidad nacional es declarado por un 3% y por agregar foros políticos por un 2%.

Sobre algunos de los tópicos más usualmente debatidos en torno de la televisión, las opiniones del total de la muestra indican que la mayoría piensa que hay demasiada publicidad y violencia en la programación televisiva chilena y, en cambio, que faltan programas educacionales y sobre la realidad nacional. Asimismo, la mayoría piensa que la televisión es el principal medio de entretenimiento para la gente. En cuanto a si la televisión permite estar informado o no, 47% estima que sí, 32% que no, 19% se ubica en una posición intermedia y 2% no responde. Los que estiman intensamente que sí lo permite son 16%, igual que los que piensan intensamente lo contrario.

En cuanto a quiénes deberían estar a cargo de la televisión en Chile (pregunta que admite respuestas múltiples), un 68% declara que las universidades, un 21% que la empresa privada, 10% que el Estado y 6% que los gremios y sindicatos.

b. En cuanto al *consumo de radio*, los que escuchan emisoras AM durante los días de semana (58% de la muestra), dos tercios lo hacen tres o menos horas diarias. Más de la mitad declara escuchar música y noticias. En cambio, entre los que escuchan radio FM (68% de la muestra), que se reparten en proporciones semejantes en cuanto a las horas diarias de exposición al medio, alrededor del 95% escucha música y 5% noticias. Las emisoras AM más escuchadas incluyen, entre las tres primeras, a las dos mayores de la oposición, en las posiciones 1 y 3.

c. El *consumo de diarios* se reparte aproximadamente entre un tercio que lee todos los días o día por medio un periódico, un tercio que lee una o dos veces por semana, la mitad de ellos el fin de semana, y un tercio que no lee casi nunca o no lee periódicos. En la categoría de lectores que lee un diario una vez a la semana o más (cerca de dos tercios de la muestra), alrededor del 50% lee el diario *La Tercera*, un tercio el diario *El Mercurio*, 27% el diario *Las Últimas Noticias* y un 13%, en total, los dos diarios de oposición (pregunta que admite respuestas múltiples). Las secciones más leídas (respuestas múltiples) son las secciones recreacionales (deportes/hípica,

espectáculos y horóscopos), 58% y noticias y política nacional, 50%; la sección editorial "interesa más" sólo a un 5% de los lectores habituales de diarios.

Veracidad adjudicada a los medios

La veracidad adjudicada a los medios es la siguiente: se estima que el medio más veraz es la radio (41,4%), seguido de los diarios (18,1%), la televisión (14,4%) y las revistas (9,4%). No responde a esta pregunta el 13% de los encuestados y 3,7% declara que ningún medio es veraz. Entre los diarios, se adjudica mayor veracidad a *La Tercera*, *Fortín Mapocho* (oposición), *El Mercurio*, *La Epoca* (oposición), *Las Ultimas Noticias*, *La Cuarta*, *La Segunda* y, en último lugar, *La Nación* (el diario del Gobierno), en ese orden. Entre las revistas de información nacional el ranking de veracidad es el siguiente: *Análisis* (oposición), *Qué Pasa*, *Hoy* (oposición), *Cauce* (oposición), *Apsi* (oposición), *Ercilla*. Entre las radios, se considera que son más veraces las siguientes emisoras: Cooperativa (oposición), Chilena (oposición), Portales, Minería, Santiago (oposición), Colocolo, Agricultura. Entre los canales de televisión, se adjudica mayor veracidad al Canal 13 de la Universidad Católica de Chile (63,3%), seguido el Canal estatal (11,9%) y los canales 11 y 5, ambos de menor audiencia. En general, puede decirse entonces que sólo las radios son consideradas por una gran parte de la población como un medio veraz (que se corresponde con el hecho de que es allí donde la mayoría escucha las noticias); que los medios opositores tienen mayor credibilidad que los oficialistas y que, dentro de estos últimos, los de menor credibilidad son los que se encuentran directamente controlados por el Gobierno: la Radio Nacional (que ni siquiera es mencionada), el diario *La Nación* y el Canal Nacional de Televisión. Debe considerarse, sin embargo, que tanto el Canal Nacional como Radio Nacional poseen cobertura a lo largo de todo el territorio del país, siendo sus programas, en algunos lugares, los únicos disponibles.

IV. Dinámicas culturales y futuro de la cultura en Chile

A lo largo de este trabajo hemos revisado algunas de las principales tendencias que a nuestro juicio "mueven" a la cultura en Chile —su producción de campo, su difusión y consumo—; los conflictos que se producen en torno de esas dinámicas, con participación de actores internos y externos al campo, ya bien para determinar su orientación o las formas de su integración organizativa, y las evoluciones y cambios experimentados por la cultura cotidiana, especialmente con el surgimiento de una específica cultura cotidiana de masas estructurada en función del "mercado (industrial) de mensajes".

Hemos propuesto y tratado de mostrar que, en su conjunto, esas dinámicas —las evoluciones, transformaciones y conflictos— se hallan movilizadas

por el proceso de incorporación de la modernidad, que opera como la "fuerza de época" más decisiva tras de todas ellas, condicionando la autonomización del campo cultural, la profesionalización de los productores, la aparición de nuevas instituciones y medios de comunicación, la cambiante combinación de los modos de producción cultural, la diferenciación de los bienes simbólicos y su masificación para el consumo.

Además, hemos propuesto y tratado de mostrar que, en la actual situación chilena, esas dinámicas se hallan —ellas a su vez— condicionadas por la existencia de un régimen militar autoritario que ha procurado una verdadera "refundación capitalista" de la nación, tras un proyecto que combina variablemente un componente fuertemente disciplinario (y en momentos represivo) y un componente de "modernización de mercado" de la sociedad. Este contexto no sólo interfiere —positiva o negativamente, según las circunstancias— con aquel proceso de incorporación de la modernidad sino que, adicionalmente, condiciona las formas que éste asume y los efectos que desencadena en el plano de la estructuración y del funcionamiento del campo cultural y en el plano de la evolución y las transformaciones de la cultura cotidiana.

En este capítulo final nos proponemos revisar cuáles son las tendencias y los conflictos latentes del desarrollo de la cultura en Chile, de modo de discernir, hasta donde ello sea posible, el futuro que se gesta en el presente. Para ello usaremos un esquema de "análisis de tensiones" más que hacer un esfuerzo cualquiera de "futurología", los que tan pronto se aplican al plano de la cultura terminan por entregarnos, habitualmente, las imágenes de una *utopía tecnológica*, como si la cultura se agotara en —o consistiera principalmente de— artefactos, y fueran éstos los que determinarían el complejo e intrincado movimiento de la cultura.

Diferenciación, heterogeneidad, segmentación: el orden

La modernidad en la cultura introduce, antes que todo, la diferenciación. Toda "unidad" —todo lo que es sólido, decía Marx— se desvanece en el aire. Pero Marx, claro, exageraba. Lo que ocurre es que las sólidas unidades tradicionales de la cultura —religiosas, metafísicas, el "sentido común", los grandes imperios, la unidad de las pocas instituciones monopolíticas del saber, etc.—, con la modernidad, se diferencian. Todo se multiplica, todo se especializa, las redes de intercomunicación crecen, la producción se diversifica, las demandas siguen el mismo camino y un irresistible proceso de división del trabajo de producción simbólica penetra por todos lados, en todas las sociedades.

La heterogeneidad cultural es un fenómeno que se sigue de la diferenciación. Es el paisaje de la cultura posterior a la pérdida de sus unidades, aquel que algunas redes cubren ahora bajo el nombre de moda de la post-modernidad. La cultura vuelta heterogénea es aquella típicamente moderna, en cambio, con su separación cada vez mayor entre campo y cotidianidad, o con sus nuevas formas de combinación a través del "mercado industrial

de mensajes". Es la cultura donde aparentemente "todo va", desde el consumo de los cuerpos en la erótica porno hasta en el terreno más especializado de las reglas del método científico, por lo menos si hemos de creer a Feyerabend. Cultura desestructurada en su apariencia, con su explosión de signos y su velocidad de transmisión de mensajes, donde todo sentido de lo que es básico o se creía permanentemente —el alma, lo moralmente correcto, la buena vida, la belleza— pareciera haber quedado sepultado tras el ruido, los colores, el griterío en la plaza pública, la explotación de los sentimientos, el aprovechamiento del otro, su manipulación y el abuso. Cultura de las coexistencias más extrañas y paradójales, donde junto al computador en la escuela de Conchalí llega el alumno mal alimentado por la mañana; donde los ídolos de la música son producidos por la industria y los evangelios son proclamados por la televisión.

Diferenciación y heterogeneidad significan para muchos nada más que desorden y pérdida de los límites que hasta ayer parecían enmarcar y regular la vida de los individuos y sus relaciones entre sí, consigo mismos y con sus dioses. Se habla por eso de un extravío de la razón moderna, de la desaparición del humanismo, de una educación que ya no resiste a las presiones de la televisión, de religiones que se han vuelto "blandas" y de comportamientos que no encuentran explicación. La televisión norteamericana, en estos días, muestra a un grupo de mujeres que concurre a un programa con sus "esclavos" —hombres dispuestos a servirles en la materialización de sus sueños, aún los más "perversos"—. En la televisión chilena, entretanto, suele presentarse a los "subversivos" durante su proceso de "confesión" bajo el efecto de la tortura y de las drogas. En ambas instancias, se discute civilizadamente, en el abrigo del hogar, las ventajas y desventajas de tales situaciones, de las personas envueltas, de los valores que están en juego. La imaginación moderna, en fin, no tiene límites y está dispuesta —con los medios puestos a su alcance— a convertir sus "fantasías" en "bienes culturales" de consumo masivo. La cultura occidental ya no se identifica pues, exclusivamente, con la búsqueda de la verdad, de la belleza y la bondad, si acaso alguna vez estuvo a la altura de esos ideales. Hoy forman parte de la cultura, con igual título, la publicidad, la propaganda política, la crueldad, los desvaríos de la razón, la intimidad de las figuras públicas, la pornografía...

Por detrás, sin embargo, de toda esa aparente desestructuración de la cultura —cuya superficie semeja la de un mar revuelto— no es imposible identificar y analizar sus procesos de estructuración, sus "lógicas" subyacentes y sus modos de operación en cada sector y subsector del campo, en cada uno de los circuitos de su difusión, en cada instancia de su consumo. Lo que es aparente en la superficie no es, necesariamente, explicativo por sí mismo.

De hecho, los procesos de diferenciación y heterogeneización de la cultura son contrarrestados, también de manera sistemática, por procesos "generadores de orden" que pueden tener variadas expresiones. La más extrema, probablemente, es aquella que intenta poner toda la cultura bajo el control de un solo y *gran planificador* que decide qué formas y contenidos

deben ser producidos, comunicados y consumidos por quiénes y en qué lugares. Estos intentos de "gran planificación" de la cultura —típicos de los regímenes totalitarios modernos— se concretan en proyectos de "socialización o resocialización totales" de la población y es al servicio de ellos que se permitirá y orientará la diferenciación y la heterogeneidad, manteniéndolas de común dentro de límites más o menos severos, de modo de facilitar la diferenciación sin producir sus efectos heterogéneos, y colocando todos los aparatos culturales —desde las iglesias a los medios de comunicación, pasando por la educación y la industria cultural— al servicio de un común proyecto ideológico administrado por la burocracia del Estado y el partido.

En otras partes, como ha ocurrido en Chile durante estos años de régimen militar autoritario, se intenta una modalidad "generadora de orden" que no interfiere sino que más bien supone la diferenciación y sus efectos heterogeneizadores. En este caso, efectivamente, el Gobierno se limita a excluir o restringir la competencia ideológica pero, a la vez, impulsa a la producción de campo para que ésta se oriente en función del mercado a condición de que no asuma "funciones políticas". En definitiva lo que se espera es que, en ese universo cultural desprovisto de artistas políticas y de sobrecarga ideológica, el propio mercado "ordene" el consumo, segmentando a los públicos y estructurándolos jerárquicamente.

Lo que sucede, entonces, es que lo que en las apariencias ocurre como un mero movimiento de estructuración de las preferencias individuales en el incesante movimiento del mercado corresponde, en otro plano, a la estructuración de circuitos típicos de producción/comunicación/consumo culturales, asociados a las características sociales de los "consumidores". La segmentación del mercado asume contenidos *sociales* que son particularmente divisivos en sociedades con fuertes desigualdades, como la chilena. En estas circunstancias, puede ser que el orden en medio de la diferenciación se produzca, precisamente, aumentando y sistematizando sus efectos heterogéneos, de modo que, por ejemplo en el caso de la educación, se estructuren diversos *circuitos escolares*, cada uno al servicio de grupos sociales que poseen una dotación desigual de capital social, cultural y económico. La existencia masiva de la pobreza, entre otros, es un factor absolutamente determinante en este cuadro, pues allí los procesos de diferenciación y heterogeneización pueden asumir, fácilmente, ese carácter socialmente divisivo de una extrema segmentación, que en el límite pudiera tomar las formas de una "exclusión cultural". De hecho, no pareciera ser ésta la tendencia en Chile, incluso bajo el régimen militar autoritario, sobre todo si se miran las evoluciones ocurridas en el plano de la educación y de la industria cultural.

En otros lugares y sociedades, donde el mercado opera en condiciones de mayor interacción social, la *segmentación* asume crecientemente contenidos primordialmente culturales dando lugar a la diferenciación de públicos y circuitos según características de sexo, edad, región, educación, trayectoria generacional de socialización, etc. Además, el Estado suele reforzar esa tendencia, reservándose áreas de intervención precisamente con el propósito de introducir programas y contenidos que el mer-

cado no "produce" por sí solo, librado a su propio movimiento (como ocurre por ejemplo con la televisión pública en varios países del norte desarrollado). En suma, si la cultura moderna produce "heterogeneidad" como efecto de la diferenciación, en cambio las modalidades de la *segmentación* pueden responder ya bien a esa diferenciación o ser tributarias, en cambio, de las condiciones socio-económicas en que ella se apoya y que continuamente reproduce.

Sea como fuere, es posible pensar que esa tensión entre diferenciación, heterogeneidad y necesidad de orden en la cultura constituya el vector dinámico más decisivo para pensar el futuro de la cultura en Chile. Pues la gran cuestión se ha vuelto aquí, en la práctica, la de cómo mantener los altos grados de diferenciación y heterogeneidad alcanzados impidiendo que éstos asuman las formas excluyentes de la segmentación social de la cultura y facilitando, por el contrario, que a ellos se incorporen, de manera cada vez más amplia y móvil, incluso los sectores pobres de la sociedad. La solución provista por la industria cultural y la expansión del "mercado de mensajes" no parece satisfactoria, como veremos en seguida.

Integración, conformismos y participación: la democracia

Los fenómenos que hemos llamado como propios de la cultura cotidiana de masas —en torno de la expansión del "mercado de mensajes"— proveen una forma de integración que, crecientemente, incluye también a los sectores más pobres de la sociedad. Incluso hay quienes sostienen que es en estos sectores, precisamente, donde la industria cultural penetra más fácil y fuertemente, estableciéndose así un circuito poderoso, entre otros, que conectaría la difusión de la televisión con la población iletrada, por ejemplo. Se trata, como vimos a lo largo del trabajo, de una integración "liviana", especialmente apta para la generación de fenómenos de "conformismo pasivo", como el de las modas, de la rotación de ídolos, de la comunidad de identificación con personajes y situaciones, del consumo de noticias-imágenes bajamente contextualizadas, etc.

De hecho, la cultura cotidiana de masas industrialmente producida y procesada a través del "mercado de mensajes" proporciona escasas oportunidades de desarrollo de una cultura que refuerce la autoconciencia de los individuos y de los grupos y que contribuya a su participación activa en la solución de sus propios problemas. Es bajamente "educacional", en el sentido más rico de la palabra; no logra estructurar concepciones de mundo relativamente coherentes; transforma a la política y a la sociedad en un agregado de espectáculos, seleccionando fuertemente las imágenes en función de su consumo e impacto. Crea, en breve, un mundo que no soporta la vastedad y la complejidad de la cultura, "unidimensionalizándola" en función de su transmisibilidad industrial, de acuerdo con los requerimientos del medio. Sólo en este sentido puede pensarse que el famoso *dictum* macluhaniano de "el medio es el mensaje" expresa una realidad parcial de la moderna cultura de masas.

La pobreza más extendida, en cambio, puede convivir con ese mundo de mensajes, al igual que las desigualdades sociales más profundas, "integrándose" cómodamente a su consumo. No hay, en principio, nada que sea negativo en esto; lo negativo puede ser, en un plano, que ese mundo imaginario escasamente refleje las condiciones de esa pobreza y desigualdad —cosa que frecuentemente ocurre— y que, en otro plano, se convierta en el único foco de creación y transmisión de la cultura de masas, "unidimensionalizándola".

Sobre todo desde la perspectiva democrática, esta cuestión —digamos así, la de la naturaleza o "calidad" de la cultura de masas— es decisiva. En efecto el gran desafío de la democracia —aparte de producir políticas que movilicen el desarrollo de los países y superen progresivamente las condiciones de la pobreza masiva y las desigualdades de base económico-social más insoportables— es producir una cultura de masas que permita, en medio de la diferenciación y la heterogeneidad, grados cada vez más elevados de autoconciencia del individuo, de aprendizaje colectivo, de participación personal y social en los problemas comunes y sectoriales, de organización cada vez más flexible y de mayor goce de todas las potencialidades humanas. No se trata, por este resquicio, de introducir nuevamente la obsesión de la utopía y la reclamación de un cielo para la tierra. La democracia es, efectivamente, un régimen político esencialmente antiutópico, y tan pronto como se la recarga con las demandas del cielo su fino entramado de consensos, de pactos, de internegociaciones, de intereses coaligados e interactuantes se viene abajo y da paso a los "experimentos maximalistas" donde siempre, al final, los portadores de la utopía se erigen en poder y someten a la sociedad a sus sueños o mueren aplastados por la reacción que desencadenan. El camino de las utopías maximalistas está por eso plagado de guillotinas, de gulags, de campos de concentración y salas de tortura.

Para escapar al horror, sin embargo, no es cierto que sólo se abra una posibilidad: la de conservar el *statu quo* y entregar su administración al mercado, que por sí sólo iría produciendo las innovaciones y adaptaciones que su mano invisible regula. Pues entonces, en el plano de la cultura, tenemos un resultado previsible: la trivialización de todas las experiencias y su progresiva cristalización en torno de segmentos desiguales cuyos miembros viven, crecientemente, vidas separadas y paralelas. Sólo una minoría monopoliza la creatividad, el conocimiento y el poder, mientras el resto debe integrarse a un "mercado de mensajes" que les crea la ilusión de un mundo al cual conformarse pasivamente. Esa cultura "unidimensionalizada", que vive tensionada exclusivamente por referencia a un "horizonte de consumo" es, justamente, la cultura de masas que la democracia debe asumir y transformar para dotarla de mayor densidad comunicativa, de una mayor diferenciación de posibilidades e interpretaciones y de una variedad de oportunidades de participación en la empresa humana de hacer la propia historia.

Mercado, Estado, comunidad: la organización de la cultura

Como hemos visto, la hegemonía sectorial del campo cultural no significa que éste se haya autonomizado por completo, para llegar a ser una especie de sistema independiente dentro del sistema de sociedad. Por todos lados, la producción y transmisión de la cultura se institucionaliza y organiza en torno de "empresas" crecientemente profesionalizadas y especializadas que operan variablemente dentro de circuitos en que intervienen instancias del Estado, del mercado y de las asociaciones comunitarias más diversas. Gran parte de las luchas en torno del desarrollo de la cultura se libran por eso mismo alrededor del control de esas "empresas" y, por ende, alrededor de la forma de su integración organizativa, acaso ésta deba quedar en manos exclusivamente del Estado y sus entes, de las instancias de mercado y sus mecanismos anónimos, competitivos y cuasi-automáticos, o de las asociaciones voluntarias de base comunitaria.

De hecho, las grandes ideologías tradicionales que, en sentido positivo, "racionalizan" los intereses y los proyectos de los diversos actores que intervienen en y sobre el campo cultural se estructuran en torno de su preferencia relativamente excluyente por el empleo de una de esas formas de integración organizativa de la cultura. Los socialistas confían instintivamente en el Estado, los neoliberales en el mercado y los que ofrecen propuestas "alternativas" (desde disidentes hasta comunitarias, desde las iglesias hasta los promotores de la cultura popular) en las asociaciones voluntarias.

Es probable que ya en ninguna parte donde la cultura haya avanzado un tramo significativo en el proceso de incorporación de la modernidad, su organización pueda hacerse excluyentemente por uno solo de esos medios, a menos que existan condiciones políticas de contexto de total subordinación de la sociedad al Estado. Sólo en esas condiciones, en efecto, puede intentarse que el Estado ejerza monopólicamente la función organizativa de la cultura o, alternativamente, que ella sea entregada exclusivamente al mercado. Aun entonces, sin embargo, como muestran las situaciones históricas contemporáneas, es imposible suprimir por completo la franja cultural que es integrada organizativamente por las asociaciones voluntarias de base comunitaria, que continuarán expresándose de preferencia en la cultura cotidiana, en torno de los fenómenos de la religión, del arte y de la educación alternativa.

Que la balanza se incline *decisivamente* en favor de uno de esos tres polos de coordinación —el del poder, el del dinero o el de la solidaridad— puede hacer toda la diferencia para el desarrollo cultural de un país, igual como ocurrirá con las específicas combinaciones que históricamente se produzcan entre ellos.

Lo último es particularmente evidente en el terreno del tipo de cultura de masas que surja y se proyecte hacia el futuro, pudiendo establecerse —al menos como hipótesis— que sólo allí donde la cultura cotidiana de masas sea crecientemente fortalecida por la presencia y participación de las asociaciones de base comunitaria ella podrá desarrollarse en un sentido más funcional para la democracia. Dicho negativamente, ni el mercado por

sí solo, ni el Estado exclusivamente, ni ninguna combinación de sus mecanismos típicos de actuación —el dinero y el poder, respectivamente—, podrá generar una cultura de masas apropiada para la democracia y suficientemente densa y diferenciada como para superar los rasgos de "conformismo pasivo" o de "producto planificado" que adquiere allí donde queda en manos sólo del mercado o del Estado.

Lo desesperante de esta propuesta, al menos así lo entendemos nosotros, es su carácter abierto y ecléctico, que no permite su fácil manejo en la discusión polémica donde siempre se ven favorecidas las propuestas monolíticas y relativamente simples. Pues de hecho estamos postulando que para favorecer un desarrollo cultural democrático —en el terreno de la cultura cotidiana y de la producción de campo— se requiere encontrar —en cada situación histórica y para cada ámbito o medio de que se trate— una adecuada combinación o balance entre el uso de mecanismos propios de la acción pública (intervención del Estado, en general), del mercado y de la participación asociativa de base comunitaria. Ninguna de estas modalidades debería excluirse por principio; ninguna es, en sí, "anticultural". Pero ninguna, por sí sola, producirá efectos suficientes, ni hay una regla de oro que indique en qué ocasiones deben usarse tales o cuales mecanismos, o cuál combinación de ellos resultará más apropiada en la circunstancia.

Localismo, nacionalismo, internacionalismo: las encrucijadas de la "nación cultural"

La cultura —no sólo la moderna— ha tenido desde siempre una dinámica que supera las fronteras; su movimiento, en efecto, no se contiene dentro de espacios geográficos, económicos o políticos. La historia de las religiones lo muestra claramente, igual que la difusión de las lenguas, la institución universitaria desde sus orígenes medievales y, más tarde, el movimiento de las ciencias. La modernidad agrega a esos fenómenos una extensión y una velocidad antes no conocidas, creando la imagen de un mercado internacionalizado de bienes culturales: ideas que circulan por encima de las fronteras, imágenes llevadas por los satélites de televisión, comunicación instantánea entre puntos apartados del globo, modas que se desplazan desde un centro hacia los confines del mundo, ídolos que cantan en varios idiomas y religiones que encienden la esperanza de hombres de las más diversas nacionalidades. La "villa global" pareció así, por un momento, transformarse en realidad.

Sin embargo, en medio de esas figuras de la internacionalización, subsisten y se multiplican, sin desaparecer, los nacionalismos culturales; desde aquellos puramente retóricos hasta otros profundamente enraizados en la historia de una comunidad; desde aquellos que son movilizados por consideraciones geopolíticas hasta otros que se reproducen "espontáneamente", en el arte y las letras, en las idiosincrasias de una lengua y en las formas nacionales de celebrar una religión. Y dentro de casi todas las "naciones culturales", a la vez, parece asistirse —junto con la generalizada tendencia

hacia la descentralización administrativa— a una revalorización de los "localismos" culturales de región, provincia, comuna y vecindario.

En el caso de las naciones periféricas, como ocurre en Chile, esta contraposición de movimientos disímiles toma la forma de un proceso de profundización de las heterogeneidades culturales, creándose dentro de la "cultura nacional" una suerte de entremezclado "collage" en que el idioma se llena de neologismos extranjeros, en que la gente mira con renovada atención tanto su propio entorno más inmediato como el horizonte de la "villa global" que entra al hogar por medio de la televisión, en que las ciencias a la vez se internacionalizan y se vuelven más sensibles a su impacto local, en que las modas del vestir giran con leve retraso respecto de los dictados de ciudades situadas a miles de kilómetros de sus fronteras, en que la diferenciación cultural respecto de la capital adopta al mismo tiempo un tono de mayor integración a los circuitos internacionales, etc.

Internacionalismo, nacionalismo y localismo se convierten pues, en la periferia, en un terreno de especulación y lucha en torno de la cuestión de la "unidad cultural" de la nación, la que de cualquier modo se halla irremediablemente perdida en medio de la diferenciación y de la heterogeneidad. Precisamente como una forma más de reacción contra esa pérdida se erigen entonces los mitos movilizados de la "nación cultural", contrastándolos con las fuerzas "negativas" de la internacionalización, sea como una defensa conservadora del "ser nacional histórico" o como una defensa progresista del "proyecto nacional popular". De uno y otro ángulo, la industria cultural pasará a convertirse en el baño preferido de los ataques, perdiéndose de vista que en torno de ella está en proceso de elaborarse, precisamente, la única forma contemporáneamente viable de "cultura nacional de masas", abierta por completo a las dimensiones internacionalizadas del "mercado de mensajes" pero a la vez (potencialmente) capaz de estructurar sus propios canales de *recepción* de ese flujo externo y de incorporarlos dentro de una cultura fortalecida en su base comunitaria y local.

La incorporación de la modernidad en la cultura opera en efecto, en esta dimensión, como un proceso de internacionalización, lo cual significa —para la periferia— la existencia de dinámicas de difusión que necesitan ser "recibidas" e "incorporadas", antes que rechazadas o frenadas. Pero para que esos procesos de incorporación y recepción tengan un grado suficiente de autonomía y densidad nacionales es imprescindible tanto que la estructura del campo cultural se halle suficientemente desarrollada y que la cultura cotidiana de masas tenga una capacidad de respuesta comunitaria bien establecida. En cada subsector del campo cultural, dicha exigencia equivale a alcanzar ciertas condiciones de desarrollo que deben discutirse para cada uno de ellos, como por ejemplo un grado suficiente de tamaño, complejidad y productividad de las comunidades científicas; una relativa capacidad de creación tecnológica endógena y de selección de tecnologías transferidas; un aparato nacional de producción (privado o público) capaz de servir a la industria cultural, etc. En el caso de la cultura cotidiana de masas, a la vez, se trata de contar con esas capacidades endógenas de generación de mensajes para el mercado (industrial) de bienes culturales y

de desarrollar, en el interior de ella misma, sus capacidades *locales* de recepción, comprensión y aprovechamiento de esos bienes culturales. A la vez, todo ello requiere de políticas —estatales y de los varios agentes que participan en el desarrollo cultural— capaces de converger en torno de ciertas metas mínimas de construcción y fortalecimiento de esas *capacidades endógenas*, en cualquier plano de que se trate: el del desarrollo de las ciencias y la investigación tecnológica, el del desarrollo de la televisión en el propio país, etc.

Contenidos, formas y estilos: el control

Podría parecer extraño que en una reflexión sobre el futuro de la cultura en Chile nada hayamos dicho hasta aquí sobre los contenidos culturales, sus formas y los estilos de su evolución especializada. Pero en ese terreno, ¿qué puede decirse? Desde el momento en que no se opera con una visión ideológica centralizada —que estima tener las claves de la historia y por tanto cree saber en qué dirección empujarla para producir su ajuste con las leyes que la rigen— todo el terreno de los "contenidos" culturales y de sus "formas" y "estilos" debe quedar abierto a la actuación de los individuos y de los profesionales productores de la cultura. Son los *actores* de la cultura —en un nivel todos los hombres y mujeres en la sociedad; en otro, los especialistas profesionalizados del campo— los que dan a la cultura sus contenidos y crean sus formas, los que usan los lenguajes y producen las comunicaciones, los que orientan la producción y crean sus estilos.

El "dirigismo" cultural —la práctica de incidir sobre sus contenidos y formas— se presenta sin embargo como una necesidad o una tentación cada vez que se actúa frente a los grandes medios e instituciones que envuelven —por su propia operación— una responsabilidad pública, como ocurre en el caso de la educación o la televisión. En estos casos, efectivamente, continuará presentándose una pugna en torno de esos medios de dirección y control: a cuáles emplear, a la medida de su eficiencia y al grado posible de su aplicación. Tradicionalmente, se habla creído resolver esta cuestión poniendo bajo la directa tuición del Estado los respectivos medios. Con el tiempo, sin embargo, esta solución ha ido perdiendo fuerza, y hoy se descubre —y es aquí hacia donde se trasladarán crecientemente los conflictos del futuro— que las formas del control público pueden independizarse de los entes que administran y que, incluso, la localización de la propiedad de los medios no asegura necesariamente su orientación. En fin, aun cuando se postule al más bajo dirigismo posible, será necesario en cualquier caso organizar formas de control público que, en el marco de una sociedad democrática, debieran idealmente incluir a los propios profesionales del sector o subsector de que se trate, de los "consumidores" y de las asociaciones de base comunitarias más directamente interesadas en los respectivos procesos culturales.

En cambio, son los propios actores —en el seno de la sociedad y en el interior del campo— los que deben competir entre sí por determinar las

orientaciones de los procesos de producción de la cultura, confrontando sus respectivas propuestas dentro de los lenguajes especializados y de la sociedad en su conjunto, conforme a las reglas dispuestas por el juego democrático para asegurar el pluralismo, la libertad y, allí donde corresponda, la responsabilidad pública de los agentes culturales.

Es en ese terreno donde la cultura habla por sí misma y se hace: como concimientos, imágenes, información, obras, artefactos, representaciones. Finalmente, ninguna disposición organizativa de la cultura —por eficaz que sea, si acaso no asegura la libertad y no promueve la innovación— servirá demasiado para favorecer el desarrollo de la cultura y la capacidad creativa de sus actores, de la cual este desarrollo depende.

Notas

¹ El esquema conceptual esbozado ha sido desarrollado en varios trabajos anteriores. Véase Brunner, José Joaquín, *La cultura autoritaria en Chile*, FLACSO, Santiago de Chile y Universidad de Minesota, 1981; Brunner, José Joaquín y Flitsch, Angel, *Los intelectuales y las instituciones de la cultura*, FLACSO, Santiago de Chile, 1983; Brunner, José Joaquín y Catalán, Gonzalo, *Cinco estudios sobre cultura y sociedad*, FLACSO, Santiago de Chile, 1985 (Estudio 1); Brunner, José Joaquín, *Un espejo trizado. Ensayos sobre cultura y políticas culturales*, FLACSO, Santiago de Chile, 1988.

² Respecto de esta noción, véase Brunner, José Joaquín, "Los debates sobre la modernidad y el futuro de América Latina", FLACSO, *Documento de Trabajo* núm. 293, Santiago de Chile, 1986. Asimismo, versiones corregidas de ese documento en: "Notas sobre modernidad y lo postmoderno en la cultura latinoamericana", en *David y Goliath*, año XVII, núm. 52, Buenos Aires, septiembre 1987, págs. 30-39 y "Cultura y modernidad en América Latina", en revista *Mundo*, vol. 1, núm. 2, México 1987, págs. 31-43. Además, Brunner, José Joaquín, "Entonces, ¿existe o no la modernidad en América Latina?"; FLACSO, *Material de Discusión*, núm. 101, Santiago de Chile, 1987.

³ Véase sobre este aspecto Brunner, José Joaquín, "Cultura y crisis de hegemonías", *Revista de Pensamiento Iberoamericano* núm. 5 (a), enero-junio, págs. 249-310, España.

⁴ Véase Brunner, José Joaquín y Catalán, Gonzalo, *ob. cit.* (Estudio 4).

⁵ Sobre la cultura como signo privado de la aristocracia en su relación con la ópera, véase Orrego Luco, Luis, *Memorias del tiempo viejo*, Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1984.

⁶ Véase Brunner, José Joaquín, "Políticas culturales y democracia: hacia una teoría de las oportunidades", en Néstor García Canclini (ed.), *Políticas culturales en América Latina*, Editorial Grijalbo, México, 1987. Asimismo, Brunner, José Joaquín, "Cultura y políticas en la lucha por la democracia", FLACSO, *Documento de Trabajo*, núm. 206, Santiago de Chile, 1984, y "Cultura y política: algunos problemas" FLACSO, *Material de Discusión*, núm. 55, Santiago de Chile, 1984.

⁷ Entendemos por circuitos de base comunitarios aquellos que operan mediante asociaciones voluntarias de todo tipo, sea recurrir al poder o al dinero como su vehículo de transmisión y regulación.

⁸ Ver Berman, Marshal, *All That is Solid Melts into Air*, Simon and Schuster, New York, 1982.

⁹ Hemos analizado con más detalle esta perspectiva en Brunner, José Joaquín,

"Notas sobre cultura popular, industria cultural y modernidad", FLACSO, *Material de Discusión* núm. 70, Santiago de Chile, 1985. Para un tratamiento del mismo tema aplicado sectorialmente a la prensa popular, véase Sunkel, Guillermo, *Razón y pasión de la prensa popular*, ILET, Santiago de Chile, 1985.

¹⁰ Este esquema conceptual ha sido elaborado, para el caso del análisis de los procesos de transformación en los sistemas de educación superior, en Brunner, José Joaquín, *Notas para una teoría de las transformaciones de los sistemas de educación superior*, FLACSO, Santiago de Chile (en prensa).

¹¹ Sobre esto, véase Brunner, José Joaquín, *La cultura autoritaria en Chile*, *ob. cit.*; "Autoritarismo y cultura en Chile", Fundación Pablo Iglesias (ed.) *Caminos de la democracia en Chile*, Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 1984; "La cultura política del autoritarismo", en varios autores, *Chile 1973-1987*, FLACSO, Santiago de Chile, 1983; "La cultura política del autoritarismo"; *Comunicação e Política*, vol. 2, núms. 1-2, Brasil, marzo-junio, 1984, págs. 37-51; "La concepción autoritaria del mundo", *Revista Mexicana de Sociología*, Año XII, Vol. XLII, núm. 3, julio-septiembre de 1980, págs. 991-1.031.

Para una visión general del proceso político chileno durante el régimen militar pueden consultarse: Garretón, Manuel Antonio, *El proceso político chileno*, FLACSO, Santiago de Chile, 1983 y *Dictaduras y democratización*, FLACSO, Santiago de Chile, 1985; Valenzuela, Samuel y Valenzuela, Arturo, *Military Rule in Chile. Dictatorship and Opposition*, Johns Hopkins University Press, 1985; Tironi, Eugenio, *El liberalismo real*, SUR, 1986.

¹² Hemos analizado este fenómeno, a propósito de las políticas de reforma de la enseñanza superior, en Brunner, José Joaquín, "Ideologías universitarias y cambios en la universidad chilena", FLACSO, *Documento de Trabajo*, Santiago de Chile, 1981.

¹³ Sobre esto puede consultarse Vergara, Pilar, *Auge y caída del neoliberalismo en Chile*, FLACSO, Santiago de Chile, 1985; Foxley, Alejandro, *Latin American Experiments in Neo-Conservative Economics*, University of California Press, 1983, y Tironi, Eugenio, *El liberalismo real*, *ob. cit.*

¹⁴ Sobre esto puede consultarse Brunner, José Joaquín, "La Vie Quotidienne en Régime Autoritaire", en *Amérique Latine*, núm. 12, París, octubre-diciembre de 1982, págs. 31-44 y con García-Huidobro, Juan Eduardo, "Un Autre Paysage Culturel", en *Amérique Latine*, núm. 6, París, 1981, págs. 30-41.

¹⁵ Véase, sobre la evolución de las posiciones de la Iglesia Católica, Correa, Enrique y Viera Gallo, José Antonio, *Iglesia y dictadura*, CESOC, Santiago de Chile, 1987.

¹⁶ Sobre este período y las dinámicas del mundo cultural disidente o alternativo, véase Rivera, Ani, "Transformaciones culturales y movimiento artístico en el orden autoritario", CENCA, Santiago de Chile, 1983.

¹⁷ Hay numerosas obras, e interpretaciones de ellas, que podrían nombrarse aquí. De manera sólo ilustrativa referimos a los siguientes análisis que nos parecen especialmente representativos: Richards, Nelly, *Margins and Institutions. Art in Chile since 1973*, Art & Text, Australia, 1986; Richards Nelly (ed.), "Arte en Chile desde 1973. Escena de Avanzada y sociedad", FLACSO, *Contribuciones* núm. 46, Santiago de Chile, 1987; Canovas, Rodrigo, *Lihn, Zurita, ICTUS, Radrigán: Literatura chilena y experiencia autoritaria*, FLACSO, Santiago de Chile, 1986. Adicionalmente puede consultarse la producción crítica de Ronald Kay, Enrique Lihn y Adriana Valdés.

¹⁸ La literatura sobre las reformas propuestas, su aplicación y efectos hasta el presente es abundante. Para análisis relativamente comprensivos puede consultarse, desde el lado de los defensores de las reformas, Lavin, Joaquín, *La revolución silenciosa*, Zig Zag, Santiago de Chile, 1987 y Pérez de Arce, *Si o No*, Zig Zag, Santiago de Chile, 1988. Un tratamiento más académico de las diversas reformas sectoriales puede encontrarse en diversos artículos de la Revista *Estudios Públicos* del Centro de Estudios Públicos. Desde un ángulo crítico puede consultarse, varios autores, *Chile*

1973-1987, ob. cit.; Foxley, Alejandro, ob. cit.; Vergara, Pilar, ob. cit., y Tironi, Eugenio, ob. cit.

19 A este respecto puede consultarse:

— Sector educacional: PIIIE, *Las transformaciones educacionales bajo el régimen militar*, PIIIE, Santiago de Chile, 1984 (2 vols.).

— Educación superior y sistema de investigación científica: Brunner, José Joaquín, *Informe sobre la educación superior en Chile*, FLACSO, Santiago de Chile, 1986; Vergara, Pilar y Rodríguez, Teresa, "Libre mercado y educación postsecundaria", FLACSO, *Documento de Trabajo* núm. 285, Santiago de Chile, 1985; Garretón, Manuel Antonio y Pozo, Hernán, "Las universidades chilenas y los derechos humanos", FLACSO, *Documento de Trabajo*, Santiago de Chile, 1984; Academia de Ciencias del Instituto de Chile y Corporación de Promoción Universitaria (CPU), *Una visión de la Comunidad Científica Nacional*, CPU, Santiago de Chile, 1981.

— Industria cultural: Brunner, José Joaquín y Catalán, Carlos, "Industria y mercado culturales en Chile: Descripción y cuantificaciones", FLACSO, *Documento de Trabajo* núm. 359, Santiago de Chile, 1987; Portales, Diego, *Poder económico y libertad de expresión. La industria de la comunicación chilena en la democracia y el autoritarismo*, ILET-Editorial Nueva Imagen, México, 1981. Para un análisis de caso del funcionamiento de la industria cultural en Chile puede consultarse Altamirano, Juan Carlos, *Así, así se mueve don Francisco*, ILET, Santiago de Chile, 1987.

— Televisión: Fuenzalida, Valerio, *Estudios sobre la televisión chilena*, CPU, 1984 (2ª edición). Sobre la recepción de televisión, Góngora, Augusto, *La televisión del mundo popular*, ILET, Santiago de Chile, 1983.

— Radio: Lasagni, María Cristina, Edwards, Paula y Bonnefoy, Josiane, *La radio en Chile*, CENECA, Santiago de Chile, 1987, y Gutiérrez, Paulina y Munizaga, Giselle, *El sistema radial CENECA*, 1986. Trabajo mimeografiado.

— Prensa (diarios y revistas): Gutiérrez, Paulina, *Los diarios en el período 1958-1973*, CENECA, 1986, trabajo mimeografiado; Navarro, Arturo, *El sistema de prensa en Chile, 1973-1984*, CENECA, Santiago de Chile, 1985; Munizaga, Giselle, *El ámbito comunicativo de las revistas*, CENECA, 1986. Trabajo mimeografiado.

— Industria editorial: Subercaseaux, Bernardo, *La industria editorial y el libro en Chile (1930-1984)*, CENECA, Santiago de Chile, 1984 y Subercaseaux, Bernardo (ed.), *El libro en Chile. Presente y futuro*, CENECA, Cámara Chilena del Libro, CED, Santiago de Chile, 1987.

— Industria fonográfica: Fuenzalida, Valerio, *La industria fonográfica en Chile*, CENECA, Santiago de Chile, 1985.

— Industria cinematográfica: Hurtado, María de la Luz, *La industria cinematográfica en Chile*, CENECA, Santiago de Chile, 1986.

— Sector artístico: Richards, Nelly, *Institutions and Margins*, ob. cit.; Hurtado, María de la Luz, *El público del teatro independiente*, CENECA, Santiago de Chile, 1982; Bianchi, Soledad, *Un mapa por completar: la joven poesía chilena*, CENECA, Santiago de Chile, 1983; Canovas, Rodrigo, ob. cit.

— Iglesia: Correa, Enrique y Viera Gallo, José Antonio, ob. cit.

20 Para un tratamiento sucinto de este tema, véase Williams, Raymond, *Culture*, Fontana Books, Glasgow, 1983.

21 Nuestro propio análisis en Brunner, José Joaquín, *La cultura autoritaria en Chile*, ob. cit., adolece de este defecto básico, pues no sitúa el análisis de las políticas de acercamiento de la cultura al mercado impulsadas por el Gobierno Militar dentro del curso del proceso más básico de incorporación de la modernidad en la cultura, que por sí mismo implica una variedad de formas de acercamiento entre el mercado y la cultura.

22 Esta tesis está desarrollada en varios de los ensayos reunidos en Brunner, José Joaquín, *Un espejo trizado*, ob. cit.

23 Para una visión de conjunto de estos procesos puede consultarse PIIIE, ob. cit. (2 vols.).

24 Véase Rama, Germán, "Condiciones sociales de la expansión y segmentación de los sistemas universitarios", en Rama, Germán (comp.), *Universidad, clases sociales y poder*, Editorial Ateneo, Caracas, 1982.

25 Véase Aries, Philip, *Centuries of Childhood*, Penguin Books, Harmondsworth, 1973.

26 Véase sobre esto Nun, José, "El otro reduccionismo", en varios autores, *América Latina ideología y cultura*, FLACSO, San José, Costa Rica, 1982.

27 Sobre esto véase Brunner, José Joaquín, "La Vie Quotidienne en Régime Autoritaire", ob. cit.

28 Para una caracterización de este tipo de hegemonía y sus supuestos interpretativos, véase Brunner, José Joaquín, "Ideología, legitimación y disciplinamiento: nueve argumentos", en varios autores. *Autoritarismo y alternativas populares en América Latina*, FLACSO, San José de Costa Rica, 1982.

29 Rivera, Ani, ob. cit., págs. 124-125.

30 Idem., págs. 130-131.

31 Idem., págs. 143-145.

32 A ese respecto, véase Brunner, José Joaquín, "Políticas culturales de oposición en Chile", FLACSO, *Material de Discusión* núm. 78, Santiago de Chile, 1985.

33 Véase Brunner, José Joaquín, *Informe sobre la educación superior en Chile*, ob. cit.

34 Para un análisis del movimiento de protestas en el marco de la evolución del régimen militar autoritario, véase Garretón, Manuel Antonio, "Las complejidades de la transición invisible", FLACSO, *Documento de Trabajo* núm. 334, Santiago de Chile, 1987. Para una completa descripción, ver De la Maza, G. y Garcés, M., *La explosión de las mayorías. Protesta Nacional 1983-1984*, ECO, Santiago de Chile, 1985.

35 Debe recordarse que este texto fue escrito con anterioridad al plebiscito de octubre de 1988.

36 Las cifras indicadas en el texto, así como todas las siguientes hasta que se indique algo diferente, han sido extraídas de UNESCO *Anuario Estadístico*, 1987. Se usan estas cifras, a veces discrepantes con las nacionales, con el objetivo de hacer posible comparaciones regionales sobre una base homogénea.

37 Véase, sobre esto y para una mayor información cuantitativa, Brunner, José Joaquín, *Informe sobre la educación superior en Chile*, ob. cit.; y Academia de Ciencias del Instituto de Chile y Corporación de Promoción Universitaria (CPU), *Una visión de la comunidad científica nacional*, ob. cit.

38 Sobre este tema hay una extensa literatura. Para un análisis global de los cambios en todos los niveles y aspectos del sistema educacional puede consultarse PIIIE, ob. cit. y, complementariamente, Briones Guillermo y otros, *Desigualdad educativa en Chile*, Santiago de Chile, 1985. Un análisis específicamente referido a las transformaciones experimentadas por el nivel superior se encuentra en Brunner, José Joaquín, *Informe sobre la educación superior en Chile*, ob. cit. y en Vergara, Pilar y Rodríguez, Teresa, ob. cit. Una interpretación de los cambios educacionales bajo el régimen militar puede encontrarse en Brunner, José Joaquín, "La cultura autoritaria y la escuela", en *Cuadernos Políticos*, núm. 456, México, abril-junio de 1986.

39 Para una descripción de este subsector, véase Lladser, María Teresa, *Centros privados de investigación en ciencias sociales en Chile*, CESOC, FLACSO, AHC, Santiago de Chile, 1986. Para un análisis de los centros, ver Brunner, José Joaquín y Barrios, Alicia, *Inquisición, mercado y filantropía...*, ob. cit.

40 Por ejemplo, la ya clásica discusión de Althusser sobre el papel de la Iglesia y del sistema educacional en su artículo sobre los "aparatos ideológicos de Estado"; y las referencias de Debray a la universidad, las editoriales y la televisión en su libro sobre el poder intelectual en Francia.

41 En lo que sigue y a lo largo de toda esta sección nos apoyamos extensamente en un trabajo previo y en las referencias bibliográficas allí citadas. Ver Brunner, José Joaquín y Catalán, Carlos: *Industria y mercado culturales en Chile: Descripción y cuantificaciones*, ob. cit.

42 Lavín, Joaquín, ob. cit., págs. 85-86.

43 Ver Hurtado, María de la Luz, "El público del teatro independiente", ob. cit.

44 Ver Richards, Nelly, ob. cit. y Richards, Nelly (ed.), ob. cit.

45 Ver Richards, Nelly (ed.), ob. cit., págs. 2-3.

46 A. Bloom.

47 Ver Valdés, Adriana, "La escritura crítica y sus efectos: una reflexión preliminar", en Richard, Nelly (ed.), ob. cit., págs. 87-88.

48 Para mayores detalles sobre estos aspectos puede consultarse, OSORE, *Datos estadísticos, clero secular y congregaciones religiosas en Chile*, OSORE, Santiago de Chile, 1987 y *Guía de la Iglesia, 1988* Ediciones Paulinas, 1987, Santiago de Chile, 1988. La encuesta a que se refiere el texto es FLACSO, "Encuesta Comparativa para América Latina", FLACSO, *Material de Discusión* núm. 196, Santiago de Chile, 1987.

49 Correa, Enrique y Viera Gallo, José Antonio, ob. cit., págs. 74-75. En adelante nos apoyamos extensamente en este libro para todo lo relativo a la evolución de las posiciones de la Iglesia Católica chilena frente al régimen militar. Sólo en casos de citas directas remitiremos a la fuente.

50 Véase idem., págs. 158-165.

51 Castillo, Fernando, citado por Correa y Viera Gallo, ob. cit., págs. 184-185.

52 Véase, por ejemplo, Valerio Fuenzalida y Hermosilla, María Elena, *La demanda de actores sociales a la TV chilena*, CENECA, Santiago de Chile, 1987 y la obra colectiva Lira, Juan Pablo (comp.), *Televisión en Chile: Un desafío nacional*, CED y CENECA, Santiago de Chile, 1987, especialmente los artículos de Altamirano, Carlos y de Hurtado, María de la Luz.

53 Véase sobre el desarrollo de las políticas culturales del Gobierno Militar el análisis de Munizaga, Giselle y Catalán, Carlos, *Políticas culturales estatales*, CENECA, Santiago de Chile, 1986.

54 Para una visión general de las posiciones de los actores externos (políticos) en torno de las cuestiones de integración organizativa del campo puede consultarse Brunner, José Joaquín, *Un espejo trizado*, ob. cit. Para el caso de la televisión, véase Lira, Juan Pablo (comp.), ob. cit. En el caso de la prensa, Navarro, Arturo, ob. cit. En el caso del sistema escolar y de la educación superior, Cox, Cristián, *La oferta de políticas en el área educación: Actores y proposiciones (1979-1987)* (FLACSO, Proyecto Propuestas Político-Sociales y Aspiraciones de la Población, Santiago de Chile, noviembre, 1987). Trabajo mimeografiado.

Además, puede consultarse, en el caso de la industria editorial, Subercaseaux, Bernardo (ed.), ob. cit. En el caso de la industria cinematográfica, Hurtado, María de la Luz (ed.), *La industria cinematográfica chilena*, CENECA-CED, Santiago de Chile, 1987. En el caso de la industria fonográfica, Fuenzalida, Valerio, *La industria fonográfica en Chile*, ob. cit. En el caso de la radio, Lasagni, María Cristina, Edwards, Paula y Bonnefoy, Josiane, ob. cit.

55 Lavín, Joaquín, ob. cit., pág. 11.

56 Véase Tironi, *Los silencios de la revolución*, Editorial Puerta Abierta, Santiago de

Chile, 1988. Con todo, el libro de Tironi es bastante más matizado y reflexivo que la visión que a continuación se presenta.

57 Véase al respecto, Martínez, Javier y Tironi, Eugenio, *Las clases sociales en Chile*, SUR, Santiago de Chile, 1985.

58 Tironi, Eugenio, Vergara, Pilar y Baño, Rodrigo, *Chile en la post-crisis*, (marzo de 1988, págs. 77-79). Trabajo mimeografiado.

59 Ver entrevistas a Ignacio Moulian en *APSI* núm. 253, mayo de 1988, págs. 23-24; y a Carlos Cea, *APSI* núm. 254, junio de 1988, págs. 23-24.

60 De hecho, ahora por el resultado del plebiscito, podemos decir que, efectivamente, la televisión y la campaña publicitaria jugaron un rol decisivo en el triunfo del No. Véase sobre esto, Méndez, Roberto; Godoy, Oscar; Jazzos, Enrique y Fontaine, T. Arturo, "Por qué ganó el No?", en Revista *Estudios Públicos*, núm. 33, 1989.

61 Ver FLACSO y CENECA, *Encuesta de consumo cultural*, Santiago de Chile, enero de 1988. La encuesta fue realizada en el Gran Santiago entre los días 1º y 24 de mayo de 1987; su universo fue la población entre 14 y 65 años de edad residente en hogares particulares del conglomerado urbano del Gran Santiago. Se realizó un total de 1.064 entrevistas a una muestra probabilística extraída a través de un diseño multietápico.

Políticas culturales y sociedad civil en México*

Néstor García Canclini**

Patricia Safa***

I. Introducción

¿Cómo será la cultura en México en el año 2000? Hasta las elecciones del 6 de julio pasado esta pregunta parecía más fácil de responder que en otros países latinoamericanos. Varios especialistas venían señalando que el reordenamiento neoconservador de la economía estaba modificando las políticas educativas y culturales del Estado, sobre todo desde la crisis de 1982. También se había analizado la pérdida de legitimidad del gobierno, el avance de la oposición y de nuevos movimientos sociales. Pero como el sistema nacido de la revolución lograba sostener un desarrollo estable, sin golpes militares ni otros sobresaltos, los escenarios futuros se imaginaban como transiciones, más que predecibles, inevitables. En la medida en que se puede pronosticar el desarrollo sociocultural proyectando curvas de crecimiento demográfico y educativo, y en que los actores se movían con bastante regularidad, era lógico suponer que las instituciones mantendrían una orientación ya perfilada.

Así, en un número especial de la revista *Nexos* dedicado al "fin del milenio" (el 12 de diciembre de 1987), cien autores ejercían sus predicciones. Se anunciaba que en el 2000 México tendrá 103 millones de habitantes, más del doble que en 1970; siete de cada diez mexicanos vivirán en

* Investigación realizada en los marcos del Proyecto PNUD-UNESCO-CLACSO, RLA 86/001, Ciencias sociales, crisis y requerimientos de nuevos paradigmas en la relación Estado/Sociedad/Economía.

** Profesor-investigador en la Maestría de Antropología Social, Escuela Nacional de Antropología e Historia, México.

*** Profesora-investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa y en la Maestría de Antropología de la ENAH, México.

ciudades mayores de 15.000 habitantes; un 92% de la población estará alfabetizada, los estudiantes de secundaria se duplicarán (de 3 a 5,8 millones) y el nivel superior aumentará tres veces (de 911.000 alumnos en 1980 a 2.700.000). "Los estudiantes de postgrado, aspirantes inevitables a la presidencia de la república y pirámides conexas, crecerán más que nada: 10 veces, de 25 mil a 250 mil" (Héctor Aguilar Camín).

Otros veían el futuro como el agravamiento de los males crónicos del país: "una realidad trece años más deteriorada que la presente", escribió María Luisa Puga. El cansancio ante tanta estabilidad y el escepticismo ante los cambios deseados sólo les permitía a algunos jugar con la ironía. Carlos Monsiváis entrevistó una ciudad de México que llegaba por un costado hasta Guadalajara y por otro a Oaxaca, legiones columpiándose en el abismo de cada metro cuadrado, video-clips que reconvenían "a las parejas que renunciaban a la bendición demográfica de la esterilidad", sorteos en las puertas de las estaciones del metro para decidir quiénes habrían de viajar ese día. El crítico de cine Emilio García Riera anunciaba que a fin de siglo el 99% de las películas mexicanas tratarán de narcotraficantes fronterizos, se formará la Asociación de Cineastas Mexicanos Sin Empleo, y se harán homenajes a los veteranos con carreras incumplidas por falta de trabajo, "o sea, a los nuevos realizadores con 60 o más años de edad". Augusto Monterroso decía que no le importaba "todo lo bueno que este milenio haya sido, con su 'descubrimiento' de América, la correcta utilización de la pólvora y el átomo, y otros bienes. El próximo será mejor desde el primer segundo del año 2001, en que se inicie el siglo XXI. Y a propósito, ¿qué nos hace pensar que nosotros ya entramos en el XX?".

Puede sorprender que los resultados electorales del 6 de julio pasado hayan cambiado radicalmente el tono en los análisis políticos y culturales a quien no tome en cuenta que la modificación en las relaciones de fuerza clausura 68 años de hegemonía de un partido único o semiúnico. México se ha vuelto un país impredecible, y ésta es una de las innovaciones más importantes a considerar en la investigación actual. Sin embargo, queremos presentar la hipótesis de que las transformaciones recientes consisten menos en la aparición de nuevos procesos sociales, políticos y culturales que en la convergencia de un conjunto de procesos ya existentes que se potencian al ser unificados por los movimientos de oposición, como ocurre con el neocardenismo. También hay que incluir en los cambios las reformulaciones de la política oficial que, como efecto de esa nueva relación de fuerzas, han llevado a Salinas de Gortari a introducir algunas modificaciones significativas en los primeros meses de su gobierno.

Para el análisis cultural, destacaremos tres procesos clave de cambio que venían modificando el perfil de la sociedad:

- a) la expansión de los grandes centros urbanos, con la consiguiente generación de nuevas demandas, procesos de significación y organización social;
- b) la reestructuración de las relaciones entre Estado, iniciativa privada y movimientos socioculturales;
- c) el cambio en las relaciones entre educación, cultura y comunicación,

configurando un nuevo mercado simbólico en el que son alteradas profundamente dos clasificaciones habituales: la que separa lo culto, lo popular y lo masivo, y la que distingue entre tradicional y moderno. Pese a las dificultades teóricas y metodológicas que plantea correlacionar estos tres procesos, sobre todo por las deficiencias de información que señalaremos, entendemos que vale la pena intentar este análisis conjunto aunque debamos limitarnos a veces a proponer hipótesis de trabajo.

Si bien esta ubicación de la problemática cultural en diversos espacios sociales, y no sólo en las instituciones a las que ordinariamente se denomina "culturales", sugiere la amplitud con que estamos tratándola, conviene aclarar que hablamos de *cultura* en el sentido en que lo definen actualmente muchos estudios sociosemióticos y antropológicos: como *proceso social de producción-circulación-consumo de significaciones, es decir, como la dimensión simbólica presente en todas las prácticas sociales*. En cuanto a las *políticas culturales*, las definimos como "el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social" (García Canclini, 1987, pág. 26).

Por otra parte, dado que la transición presente implica un reordenamiento de estructuras de larga duración, que dieron a la historia mexicana su peculiaridad, es imposible examinar las contradicciones actuales de la política cultural sin referirnos a la manera en que la revolución de principios de siglo y su institucionalización posterior fueron configurando estos tres procesos. Al ubicar la crisis actual en esta visión diacrónica, queremos explorar también nuevas perspectivas conceptuales, tanto en la interpretación combinada de diversas bases sociales del desarrollo cultural como en la discusión sobre la modernidad.

II. Estabilidad vs. Innovación

Para explicar las casi siete décadas de continuidad institucional en México los estudios sociológicos y políticos suelen destacar el tratamiento dado, a partir de la revolución, a la burguesía, el ejército y la iglesia, las tres fuerzas que en los demás países latinoamericanos más contribuyeron a la inestabilidad. La reforma agraria suprimió a la mayoría de los grandes terratenientes y generó un sistema mixto de propiedad de la tierra, que contribuyó a mejorar la situación del campesinado —en comparación con el resto de la región— y construir el consenso del Estado. A partir de la década del cuarenta el ejército fue alejado de la vida política y circunscripto a tareas profesionales, con buenos sueldos y escaso presupuesto, mientras la administración del gobierno quedó en manos de un partido interclasista, al que se hallan subordinados los sindicatos obreros, campesinos y otras organizaciones populares. A la vez, la separación de la Iglesia y el Estado, así como la prohibición de que los eclesiásticos intervengan en política, limita la acción conservadora y corporativa de ese sector.

Sin embargo, existen pocas investigaciones acerca del papel de la política cultural y la cultura política como factores explicativos de la estabilidad institucional. Algunos estudios amplios con este fin se efectuaron en relación con la cultura indígena y la producción artesanal (Aguirre Beltrán y Pozas Arciniega; Bonfil Batalla, 1982 y 1987; Novelo, 1976). Existen trabajos especializados en la cuestión educativa, a los que luego nos referiremos, pero también se dedican casi siempre a los sectores indígenas y campesinos. Respecto del lugar que han tenido los procesos simbólicos en general en la construcción del poder existen ensayos ocasionales, unos pocos de valor reconocible (Aguilar Camín, 1982; R. Bartra; González Casanova; Monsiváis, 1978 y 1981; Margulis; Stavenhagen; Warman 1981).

Una línea clave, a nuestro modo de ver, para explicar cómo la cultura ha contribuido a la estabilidad política mexicana es la manera en que el Estado postrevolucionario desarrolló una política cultural que logró parcialmente combinar la cultura de élite y la popular, la nacional y la local, la modernidad y las tradiciones. Pensamos que la crisis de hegemonía que se vive en los últimos años en este país puede entenderse, en parte, por el agotamiento de ese modelo de organización de la cultura.

1. *Los gobiernos postrevolucionarios*, desde la década del veinte, desplegaron una estrategia educativa y cultural destinada a unificar ideológicamente a la nación y, a la vez, organizar las diferencias entre las clases y las regiones del país. Vasconcelos creyó en la educación generalizada como instrumento para mejorar la situación económica y cultural del pueblo, dar las bases de la democracia y el progreso. Con la consigna de mestizar lo indígena y lo hispano, lo nacional y lo universal, las escuelas rurales y las misiones culturales enseñaron a leer y escribir incorporando el uso del castellano en las comunidades indígenas que en esta época representaban el 37% de la población del país (Aguirre Beltrán, 1981, pág. 20). El peso numérico de la población indígena ha ido disminuyendo: durante el siglo XIX representaba el 60% de la población del país, en 1910 el 37%, en 1940 se reconocía como hablante de algún idioma indígena al 15% y en la actualidad al 10% (2% monolingüe y 8% bilingüe).

Hay que recordar que durante los primeros años de la colonia los misioneros sostuvieron una política cultural definida frente a la población del nuevo mundo. Para lograr la endoculturación, desarrollaron una serie de estrategias: la empatía (hacerse indios con los indios), el manejo de la lengua indígena (para comunicar el mensaje cristiano), el sincretismo (aprovechando las ideas, valores y prácticas de las culturas indígenas), la formación de intermediarios indios y la introducción del mensaje cristiano con los valores culturales que lo acompañaron (Aguirre Beltrán, 1983, págs. 29-40). El fracaso de estos proyectos que pretendían regular el contacto entre dos pueblos diferentes (uno colonizador y otro colonizado) se explica no sólo por la incapacidad de los misioneros para abarcar a toda la población y la existencia de muy diversas culturas y lenguas, sino también por el hecho de que estas políticas se desarrollaron en un contexto donde la explotación de los recursos y mano de obra eran prioritarias.

Cuadro 1
Número de personas que hablan alguna lengua indígena
1921-1980

Años	Población total del país de 5 o más años de edad	Población de 5 años o más que habla alguna lengua indígena	%
1921*	12.368.321	1.868.892	15,11
1930	14.028.575	2.251.086	16,05
1940	16.778.063	2.490.909	14,95
1950	21.821.026	2.447.609	11,20
1960	29.146.382	3.030.254	10,39
1970	40.057.728	3.111.415	7,77
1980**	48.051.105	5.181.038	10,41

Fuente: *Julio Cesar Olivé Negrete, 1981, pág. 123.

** X Censo General de Población, INEGI, 1984, pág. 247.

No es sino en el siglo XIX cuando vuelve a tomar importancia la discusión de qué hacer con los pueblos indígenas. Por un lado, la existencia de las culturas indígenas sirvió para justificar y legitimar las pretensiones independentistas de la población criolla; pero, al mismo tiempo, su existencia fue interpretada como un obstáculo para la realización del proyecto de Nación. La gran heterogeneidad de culturas, lenguas, estilos de vida, y la pobreza de las comunidades indígenas, se interpretó como un problema que había que resolver, aunque no se establecieron proyectos y programas específicos.

Esta relación entre políticas y programas cambia sustancialmente después de la Revolución de 1910. Para el Estado, la integración de las comunidades indígenas al proyecto nacional se convirtió en un cambio insoslayable. La investigación y el conocimiento de los grupos étnicos, así como los programas educativos y de desarrollo socioeconómico, fueron las estrategias adoptadas para cumplir ese objetivo. En las décadas de los veinte y los treinta surgieron instituciones encargadas de resolver la incorporación de los indios: el Departamento de Cultura Indígena, la Escuela Rural Mexicana, las Casas del Pueblo, las Misiones Culturales, las Casas del Estudiante Indio, el Departamento de Misiones Culturales, la Estación Experimental de Incorporación del Indígena en Carapan, los Centros de Educación Indígena y el Centro Lingüístico de Verano.

Estas instituciones elaboraron proyectos y programas que buscaban la transformación, desde su raíz, de las formas de vida de las comunidades indígenas, para elevarlas a niveles "más altos" propios de las llamadas "civilizaciones"; pretendieron homogeneizar lingüística y culturalmente a la población, y adaptarla a las relaciones de producción material y simbólica dominantes en el proceso de modernización. En estas políticas existió una contradicción entre el propósito de "valorar y respetar" la cultura de los pueblos indios y el propósito de "integrar y civilizar" a la población. El proyecto modernizador, desde la perspectiva del Estado, se contraponía a lo tradicional de la cultura y a la pobreza de las comunidades indígenas. Por eso se propició el mestizaje, el cambio en los estilos de vida a través de la educación.

La política cultural producida entre los años veinte y cuarenta fue una de las intervenciones más innovadoras respecto de contradicciones modernas: entre el arte de élites y el popular, la cultura y el trabajo, la experimentación de vanguardia y la conciencia social. No siempre la política oficial lograba contribuir a una superación equilibrada de esas divisiones, entre otras razones porque la concepción vasconcelista —que retoma el proyecto del Ateneo, gestado durante el porfirismo— adolecía de cierto paternalismo elitista. Quería "redimir a los indios" y liberarlos de su atraso; del mismo modo que la acción indigenista posterior, rescataba parcialmente las culturas étnicas, pero dentro de un proceso de integración y subordinación a la sociedad nacional, que muchas veces las erosionó.

Tal vez su impulso más fructífero fue movilizar a artistas, intelectuales y educadores para desarrollar masivamente el nuevo proyecto del país. Con el folclore de los principales grupos étnicos y la producción de los artistas,

se trató de formar un patrimonio simbólico que se propuso como matriz identificatoria a todos los mexicanos. Ese proyecto integrador nutre la educación primaria que se extiende por todo el país, las Escuelas de Pintura al Aire Libre, las misiones culturales, los talleres de arte en las escuelas comunes y en las nocturnas para obreros. Basándose a la vez en la pedagogía de John Dewey en los cambios realizados en la URSS después de 1917, se busca integrar el arte con el trabajo, capacitar a los obreros en el diseño, diluir las diferencias que separan a las clases en una cultura democrática común, en un consenso que fortalezca al Estado surgido de la revolución.

Para cumplir este proyecto fueron reformulados el trabajo plástico, las relaciones profesionales entre los artistas, y las de éstos con el Estado y la sociedad. El Sindicato de Pintores y Escultores (1922), la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (1936) y el Taller de Gráfica Popular (1937) impulsaron un reordenamiento colectivo de las prácticas artísticas y la producción de una iconografía que interpretaba los grandes acontecimientos sociales y políticos en medios que facilitaban su comunicación a las clases populares: murales en edificios públicos, calendarios de gran difusión, carteles antifascistas y revistas ilustradas (*La Vanguardia*, *El Machete*, etc.)

Por supuesto, este proceso de cambio no se realizó sin contradicciones, tanto con las estructuras del México pre-revolucionario como con nuevos movimientos artísticos y literarios que buscaban modernizar y profesionalizar las prácticas simbólicas. Grupos como el de *Los contemporáneos* reclamaban una mayor apertura del país a las vanguardias y las polémicas internacionales. Pero este proceso no se extenderá hasta mediados de siglo, cuando las transformaciones económicas y sociales vayan dando el contexto para la innovación cultural.

2. *La modernización económica y sociocultural* de México se inició en la Reforma, se profundizó en la revolución, pero el salto decisivo se da a partir de los años cuarenta. La industrialización, el crecimiento urbano, la expansión del mercado interno, van reestructurando, como en otros países latinoamericanos, las relaciones entre educación y cultura, entre cultura de élites y popular. El proyecto revolucionario cede ante el proyecto modernizador, la utopía socializante ante las expectativas desarrollistas.

Señalaremos brevemente algunos de los principales cambios socioculturales provocados por estas transformaciones y, en algunos casos, que se dieron dentro de las condiciones ofrecidas por la modernización. Pero no pueden ser derivados de ellas pues consistieron precisamente en lograr una mayor autonomía de las prácticas simbólicas, de los campos artísticos y científicos, respecto de los condicionamientos extraculturales:

a) El paso de una sociedad predominantemente rural a una sociedad mayoritariamente urbana. En 1900 sólo el 10,5% de la población habitaba en localidades mayores de 2.500 habitantes (límite censal de población urbana), en 1930 el 33% y en 1945 el 35%. A partir de ese momento, ocurre un proceso de urbanización acelerada. En 1970, la población urbana se elevó al 58,7%, habiéndose movilizado del campo a la ciudad, entre 1940 y

1970, unos seis millones de personas (Perló, pág. 110). Actualmente, México es un país predominantemente urbano con fuerte desarrollo industrial, que concentra en las ciudades el 60% de la población. Para fin de siglo, este porcentaje subirá al 70%.

b) El cambio de estructura del mercado simbólico y del horizonte cultural. Se pasa de un país donde tenían alto peso demográfico, económico y político comunidades campesinas e indígenas basadas en culturas tradicionales, locales y homogéneas, poco comunicadas con el resto de la nación, a un tipo de organización predominantemente urbana, con una oferta simbólica heterogénea, interconectada con la sociedad nacional y los sistemas simbólicos transnacionales.

En 1950, apenas el 2% de la población vivía en centros urbanos de 15 mil o más habitantes. La ciudad de México tenía 3,2 millones de habitantes y contaba con el 12% de la población total nacional (A. Alonso, 1989, pág. 17). En 1980 cerca del 55% de la población nacional habitaba en ciudades de más de 15 mil habitantes; la población en ciudades con medio millón de habitantes o más era casi la tercera parte de la total, y alrededor del 27% de los habitantes del país vivía en ciudades de un millón o más (ob. cit.). Actualmente, hay cuatro grandes ciudades que concentran el 29% de la población total del país (Monterrey, Guadalajara, Puebla y la de México). Se estima que para el año 2000 el 70% de la población nacional vivirá en ciudades de 15 mil o más habitantes y casi la mitad de ella en ciudades de medio millón o más (idem).

La tendencia a la urbanización del país y el crecimiento de las grandes ciudades se explica por varios factores. Las presiones demográficas sobre la tierra, las condiciones desfavorables en el mercado para los productos del campo y la mayor atracción de la oferta laboral y sociocultural de las ciudades provocaron vastas migraciones de campesinos, especialmente a partir de los años cincuenta.

A pesar del acelerado proceso de industrialización, la industria nunca ha podido absorber el volumen de mano de obra que llegaba del campo. El reacomodo de la población provocó, entre otras cosas, la agudización de los problemas urbanos. En la medida en que la llegada de los migrantes a la ciudad se hizo a través de un proceso no planificado ni controlado, muchas de las necesidades que surgieron comenzaron a ser resueltas por la misma población: la autoconstrucción del espacio urbano y la vivienda en las colonias populares, el surgimiento del llamado "sector informal" y las "estrategias de sobrevivencia" elaboradas por las clases populares en el contexto de la ciudad. (Lomnitz, 1975). Los movimientos urbanos de los setenta, que luchaban por obtener una vivienda a través de las invasiones y los asentamientos irregulares, fueron expresión de los problemas generados por la concentración demográfica, económica y política, por el escaso control que tuvo el Estado en el crecimiento de las ciudades. Pero a la vez engendraron nuevos actores sociales y políticos, con demandas y estilos organizativos inéditos, que han sido causa de muchos cambios democratizadores en la cultura política.

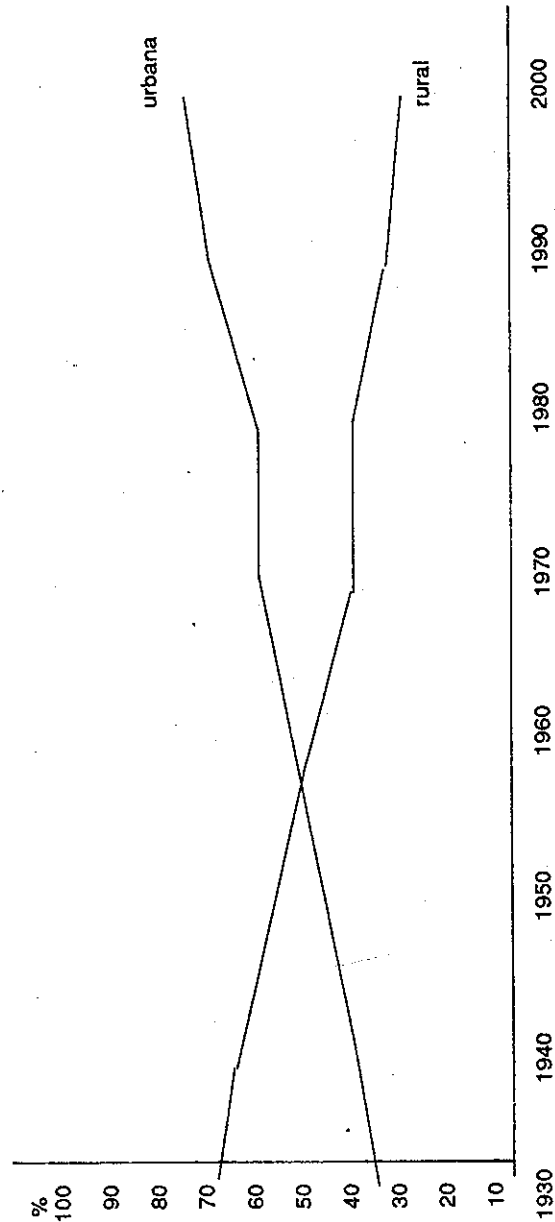
c) El desarrollo de las comunicaciones masivas. En la cultura mexicana

Cuadro 2
Población Rural y Urbana
1921-2000¹

Años	% Rural	% Urbana
1921	68,8	31,1
1930	66,5	33,4
1940	64,9	35,0
1950	57,4	42,6
1960	49,3	50,7
1970	41,3	58,7
1980	41,0	59,0
1990	35,0	65,0
2000	30,0	70,0

¹ Fuente: Las cifras de 1920 a 1970 se obtuvieron del *Manual de Estadística Básica Sociodemográfica. Población. Secretaría de Programación y Presupuesto, Coordinación General del Sistema Nacional de Información, México, 1979*; las de 1980 al año 2000 se tomaron de una entrevista con Enrique Brito en base al documento "La política demográfica en México", 1982.

Gráfico 1
Población Rural y Urbana
1930-2000



habían tenido una importante presencia desde los años veinte la radio y el cine. Al difundir simultáneamente a diversas regiones los mismos mensajes y relacionar en un sistema unificado elementos culturales de zonas antes desconectadas, ambos dieron una "vivencia cotidiana de la Nación". Si bien la acción educadora y política del Estado fue clave para esa unificación, los medios masivos, igual que en otros países latinoamericanos, se hicieron "voceros de la interpelación que desde el populismo convertía a las masas en pueblo y al pueblo en Nación" (Martín Barbero, págs. 178-179). Dice Monsiváis que buena parte del éxito del cine se debe a que en él vio el público mexicano "la posibilidad de experimentar, de adoptar nuevos hábitos y de ver reiterados (y dramatizados con las voces que le gustaría tener y oír) códigos de costumbres. No se accedió al cine a soñar: se fue a aprender. A través de los estilos de los artistas o de los géneros de moda el público se fue reconociendo y transformando, se apaciguó, se resignó y se encumbró secretamente" (Monsiváis, 1976, pág. 446).

La expansión del sistema televisivo cumplió —aun con más eficacia— la modelización unificada de la sociedad nacional y su modernización simbólica. Si bien el Estado mexicano impulsó la etapa exploratoria de la televisión a partir del gobierno de Cárdenas, apoyándose en los experimentos que el Ing. Guillermo González Camarena inició en 1934, el desarrollo del sistema comercial, que comenzó a transmitir en 1952, fue confiado a empresas privadas que ya manejaban buena parte de las radios. A semejanza de la transferencia de la iniciativa al sector privado y la concentración monopólica con que se buscó, a partir de los 50, encarar la crisis económica de posguerra, en la creación del Telesistema Mexicano S.A. se fusionaron las dos fuerzas principales en el campo comunicacional: las encabezadas por Emilio Azcárraga Vidaurreta y Rómulo O'Farril, concesionarios de los canales 2, 4 y 5. En 1959 este consorcio instala repetidoras en casi todas las regiones del país. En 1967 inicia las transmisiones a color, y al año siguiente puede conectarse con otros países a través de satélite.

El avance monopólico del sector privado suscitó preocupación en grupos oficiales. Se manifestó primero en las polémicas por el establecimiento de una Ley Federal de Radio y Televisión a fines de los cincuenta; luego, en las que se produjeron en torno del impuesto colocado por Díaz Ordaz a las empresas, que pueden cubrir poniendo a disposición del estado el 12,5% del tiempo diario de programación. Desde entonces hasta hoy, existen posiciones discrepantes, dentro mismo de los gobiernos, acerca de la manera de distribuir la responsabilidad pública y la privada en la administración del espacio comunicacional.

A medida que "el desarrollo estabilizador" de los sesenta fracasa y surgen nuevas áreas de disputa entre el Estado y los empresarios, van reorganizándose las relaciones entre ambos. El gobierno de Echeverría intenta ordenar el crecimiento de los medios masivos bajo reglas de interés social: limita el tiempo de publicidad en radio y televisión, ordena a la TV anunciar la clasificación oficial de sus programas y amenaza a veces nacionalizarla. Pero con el desarrollo del sexenio el gobierno debilita sus acciones y favorece la expansión del monopolio Televisa. Este mejora su equipamiento tec-

nológico, se introduce en el mercado en español de los Estados Unidos y acaba asociándose con el Estado, a través de la empresa Satelat, para "difundir la imagen de México en América Latina" y ocuparse de "la producción, distribución, representación, compra-venta y comercio en general de programas de televisión por satélite" (Mejía Barquera, págs. 34-35). En suma se perfila así la convergencia de intereses y políticas entre el Estado y la iniciativa privada, que dura hasta la actualidad. Es la administración de las comunicaciones masivas uno de los espacios en que mejor se advierte el surgimiento de un nuevo bloque social que combina el capital y el poder del Estado, los recursos de las empresas nacionales y transnacionales más modernas, para adaptar a la sociedad mexicana a una nueva etapa de inserción en el sistema económico internacional.

d) La desvinculación del proyecto educativo y los proyectos culturales del Estado. Salvo en los programas indigenistas y en algunos dirigidos a comunidades campesinas, desde los años cuarenta disminuye la función simbólica integradora de la educación en beneficio de su papel como agente calificador de la fuerza de trabajo. Se busca un rápido crecimiento del sistema educativo a partir del gobierno de Avila Camacho (1940-1946). El Plan de Once Años de Torres Bodet, secretario de educación, promovió la construcción de escuelas, aumentó las plazas de maestros normalistas y la inscripción de alumnos. Se quiso resolver la situación de 1.700.000 niños sin educación, del 36% que desertaba de la primaria antes de pasar al segundo grado (Cardiel Reyes, págs. 368-369).

Se suponía que el incremento y modernización del sistema escolar y del sistema productivo mejoraría el nivel de vida de la población, incorporaría a las clases medias al mercado y a la política nacional. Este proyecto cultural, a diferencia del de los primeros años post-revolucionarios, se presentó como neutro, sin conflictos o ideologías, simplemente "al servicio del proyecto civilizador", a favor de la satisfacción de las demandas generadas por la modernización que comenzó a experimentarse a partir de los cincuenta. En este período de "conciliación de intereses" fue importante la neutralización de la lucha de los maestros: en 1938 se fundó el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana (STERM), y en 1943 se unificaron, por decreto presidencial, las diferentes organizaciones del magisterio en el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE). Desde este momento, y por lo menos hasta los setenta, cuando surge la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se logró controlar cualquier movimiento alternativo.

En la perspectiva del Estado, aumentar la riqueza significaba la oportunidad de mejorar el nivel de vida de la población, incorporar a las clases medias al mercado, a la educación y a la política nacional. A diferencia de las políticas culturales desarrolladas entre 1920 y 1940, que contemplaban programas dirigidos a cambiar los hábitos y costumbres del pueblo por ser consideradas opuestas al proyecto nacional, las políticas culturales posteriores se limitaron a dar "instrumentos" (educación básica), en una acción que no contemplaba la creación de alternativas culturales: "la modernización, por sí misma, generaría las transformaciones culturales". A pesar de

que las políticas educativas después de los 40 buscaron "homogeneizar y brindar instrucción" a la población para incorporarla al proceso de industrialización y modernización del país, se mantuvieron y apoyaron los programas destinados a atender a los pueblos indígenas. En 1944, por ejemplo, durante el período de Manuel Avila Camacho, se llevó a cabo una gran campaña nacional de alfabetización y, como parte del programa, se elaboraron cartillas bilingües; en 1943, se creó el Instituto de Alfabetización para Indígenas Monolingües.

La delimitación del campo de aplicación de la acción indigenista en comunidades aisladas y autosuficientes comenzó a ser cuestionada: "los indígenas, afirmó Aguirre Beltrán, en la realidad, rara vez viven aislados de la población mestiza o nacional; entre ambos grupos de población existe una simbiosis que es indispensable tomar en cuenta" (1978, pág. 89). El Instituto Nacional Indigenista (INI) fue fundado en 1948 para el desarrollo de proyectos regionales que contemplaran una solución "integral" de las cuestiones étnicas. Aguirre Beltrán señalaba que los proyectos educativos y la introducción de elementos culturales resultaban insuficientes si no se tomaba en cuenta el desarrollo de programas que resolvieran el problema indígena en el contexto regional donde interactuaban (ob. cit., pág. 90). Entre las primeras acciones del INI estuvo la creación de los Centros Coordinadores que, hasta la fecha, se han encargado de desarrollar ese tipo de programas. Sin embargo, todas estas acciones han sido criticadas por haber aportado poco al desarrollo y defensa de las comunidades indígenas; por el contrario, se considera que no han podido superar una política integracionista con efectos semejantes a las políticas culturales anteriores.

La preocupación por desarrollar proyectos de educación bilingüe y desarrollo social de los grupos étnicos continúa siendo prioritaria, pero con una inestabilidad que se manifiesta en la desaparición y creación de instituciones. Por ejemplo, en 1976, como parte del programa de gobierno de José López Portillo, se elaboró el Plan Nacional de Educación Indígena Bilingüe-Bicultural y, en 1978, la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), dependiente de la Secretaría de Educación Pública. En la actualidad, los programas del Estado no sólo contemplan la adecuación de los planes y proyectos a las necesidades y realidad de las comunidades indígenas, sino que se propone que ellos sean los gestores principales de estos programas. Se permite que maestros bilingües sean los directores de algunas de estas instituciones (como es el caso de la DGEI) y se ha propuesto que sean las comunidades quienes participen en la elaboración de los programas educativos (DGEI, 1985).

Estamos de acuerdo con Guillermo Bonfil cuando afirma que "aunque todavía existen en el seno del indigenismo quienes continúan apegados a las viejas tesis integracionistas, puede considerarse que éstas han sido definitivamente superadas: están muertas y sólo nos queda rezar un réquiem en su memoria" (1987, pág. 88); sin embargo, poco sabemos del alcance real de esta serie de proyectos y programas. Julio de la Fuente, en 1962, se cuestionaba, después de haber participado durante muchos años en los proyectos de educación indígena, las posibilidades reales que éstos

tenían de promover el cambio socio-cultural bajo restricciones presupuestarias, carencias materiales y, sobre todo, frente a las fuertes tradiciones de las comunidades que condicionaban y limitaban los resultados propuestos (1977, pág. 131). Los programas de educación bilingüe-bicultural no sólo enfrentan restricciones económicas, sino la baja viabilidad que se les concede en los programas de "educación formal" de las mismas comunidades.

Para entender la problemática actual de los grupos étnicos en México, no basta analizar sus comunidades, aisladas o en el marco del contexto regional; es necesario conocer qué pasa con los migrantes que forman parte de la población de grandes ciudades mexicanas y con grupos enteros que pasan de braceros a los Estados Unidos. Muchos de ellos conservan tradiciones propias, como la solidaridad étnica que fomentan estos procesos migratorios, la toma de decisiones a través de formas autónomas de gobierno, y las combinan con formas modernas de consumo de objetos y bienes culturales que encuentran en los nuevos espacios de vida.

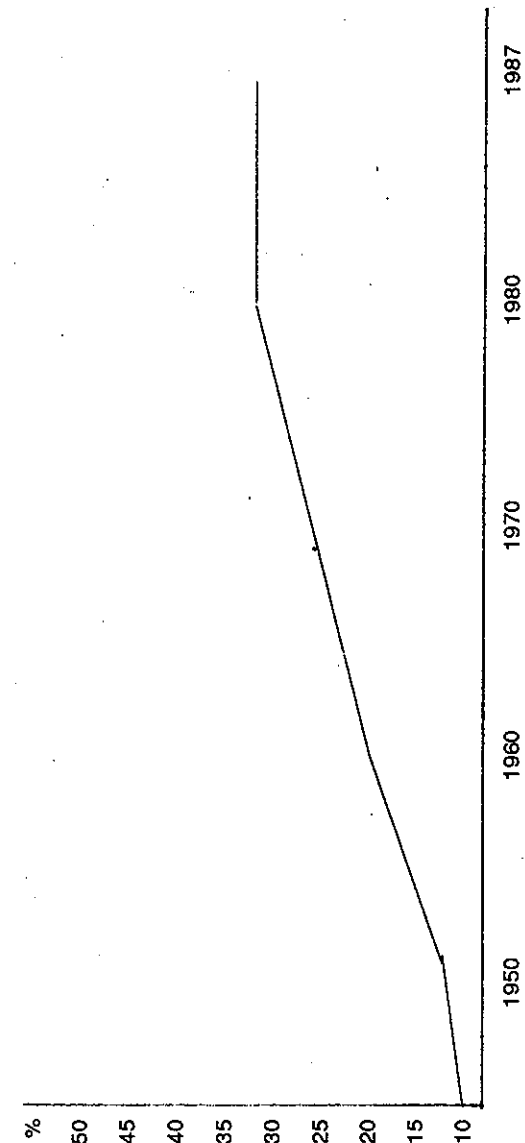
En un contexto más amplio, podemos afirmar que la participación de la población en el sistema educativo formal creció efectivamente a partir de los años cincuenta: Se estima que en 1930, el 63,6% de los mexicanos mayores de 10 años eran analfabetos y en 1983 el 10%. En 1930, el índice de escolaridad era apenas de 1,4 años, en 1960 se había duplicado y en 1985 superaba ya los seis años (A. Alonso, pág. 3).

El crecimiento de la matrícula de primaria ha sido el más significativo. De 2.997.000 alumnos en 1950 a 14.995.000 en 1987. Los demás niveles educativos sufren un aumento considerable entre 1970 y 1980: en preescolar la inscripción pasó de 9.146.000 a 14.666.000 y, entre 1980 y 1987 la matrícula aumentó más del 100%; la secundaria pasa de 1.082.000 a 3.039.000, alcanzándose en 1987 una inscripción de 4.275.000. El aumento de la matrícula de la educación superior pasó de 1950 a 1987 de 29.000 a 1.200.000, o sea 40 veces más alumnos en 37 años; sin embargo, solamente representa en la actualidad el 2,1% de la población entre 0-24 años. En contraste, la matrícula de primaria representa el 27% y la de secundaria el 8%.

En 1950 se satisfacía el 8,9% de la demanda potencial de educación preescolar, el 62,6% de primaria, el 4,1% de secundaria, el 2,8% del nivel medio superior y el 6% del nivel superior. Se considera que para 1980 se logró satisfacer el 100% de la demanda de educación primaria, el 59,4% de secundaria, el 25% de educación media superior y el 7,6% de la demanda de educación superior (Alonso, pág. 9).

e) La autonomización de la cultura de élite, la profesionalización de las prácticas artísticas, literarias y científicas, y la especialización de las instituciones culturales. Del mismo modo que en los países más desarrollados de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela), el crecimiento de la población urbana y el acceso de nuevas capas a la educación superior fue creando un público más amplio para el arte y la literatura, cuyas exigencias estéticas e incipiente poder de compra favorecieron la autonomización del campo artístico. El agotamiento de la escuela plástica nacionalista por el desgaste del muralismo, la aparición de vanguardias con pintores de

Gráfico 2
Porcentaje de la Población Nacional Total
Matriculada en el Sistema Educativo



Cuadro 3
Evolución de la Matrícula Escolar por Niveles Educativos
(en miles)

	1950 ¹	1960 ¹	1970 ¹	1980 ¹	1987 ²
Preescolar	115,3	230,1	400,1	1.071,6	2.547,0
Primaria	2.997,0	5.342,0	9.146,4	14.666,2	14.995,0
Secundaria	69,5	234,9	1.082,3	3.039,8	4.275,0
Media sup.	37,3	106,2	335,4	1.265,7	1.500,0
Superior	29,8	28,1	271,2	935,7	1.200,0
Total	3.249,2	5.941,0	11.235,6	20.973,2	24.537,0

Fuente: ¹ Fernando Solana, 1982, págs. 598-599.

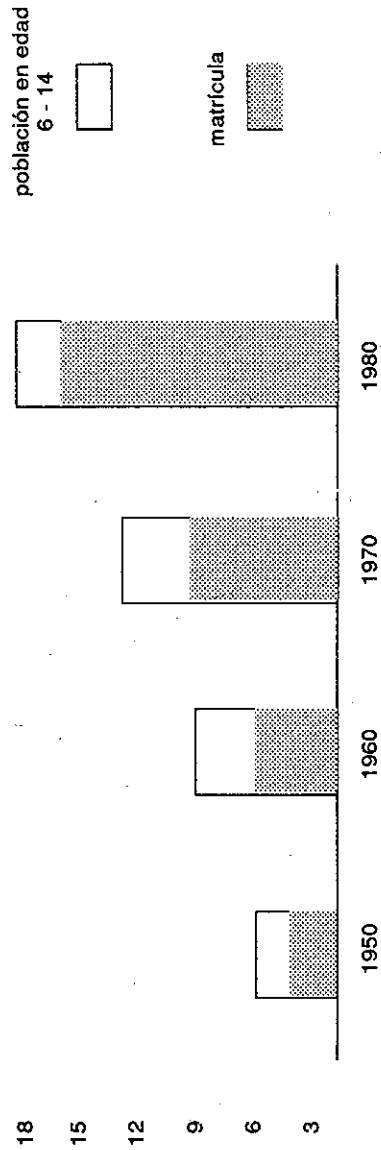
² V Informe de Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid, 1987.

Cuadro 4
Porcentaje de la Matrícula Escolar de la Población entre 0 y 24 años
(en miles)

Años	Población Total	Población 0-24	%	Matrícula escolar	% de la pobl. total	Matrícula pobl. 0-24
1950	25.791	16.884	65	3.249	12	19
1960	34.923	21.934	63	5.941	17	27
1970	48.225	31.373	65	11.235	23	36
1980	66.846	42.537	64	20.973	31	49
1987	81.741	55.734	68	24.537	30	44

Fuente: *Manual de Estadística Básica Sociodemográfica. Población SPP, 1979*; Censo General de Población, 1970 y 1980; Alejandro Aguirre, 1986; Fernando Solana, 1982, y V. Informe de Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid, 1987.

Gráfico 3
Evolución de la Matrícula de Educación Primaria: 1950-1980
(en millones)



Fuente: Necesidades esenciales en México. Educación. Coplamar y Siglo XXI, 1982: 24.

alto valor (Tamayo, Cuevas, Gironella, Vlady) y la influencia de corrientes no realistas (el expresionismo abstracto, el informalismo) generan debates específicamente artísticos, van construyendo un espacio crítico y un público que dejan de subordinar la valoración del arte a sus contenidos y su eficacia sociopolítica.

Consecuentemente, se produce una especialización de los aspectos culturales del Estado. A fines de la década del cuarenta comienzan a diferenciarse institucionalmente los tipos de arte y las políticas con que se los promueve en relación con distintas clases sociales. Es notable la coincidencia en las fechas de creación de nuevos organismos para el arte de élite y para el arte popular. En 1947 se fundan el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Museo Nacional de Artes Plásticas, las Académicas Mexicanas de la Danza y de la Opera. En los años siguientes, el INBA extiende esta acción a las provincias creando institutos regionales de arte en Sonora, Veracruz y San Luis Potosí.

Por otro lado, en 1948 es fundado el Instituto Nacional Indigenista y en 1951 el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares, con lo cual se establece un circuito institucional separado para promover las culturas tradicionales y populares. Si bien en algunos períodos el INBA realizó programas destinados a deselitizar el arte y la literatura, mientras los organismos destinados a la cultura popular han buscado con su política legitimar las prácticas subalternas, la organización diferenciada de los aparatos burocráticos redujo la unificación interclasista fomentada en la primera mitad del siglo.

La modernización complejizó el sistema de producción y circulación de la cultura, organizó públicos con demandas más diferenciadas. El Estado fue adaptándose a ese proceso y redefiniendo su lugar. Al mismo tiempo que iba transfiriendo a la iniciativa privada la mayor responsabilidad en las comunicaciones masivas, estableció políticas diversas para distintos sectores. Siguió ocupándose de la cultura tradicional, consagrándola en museos y creando nuevos organismos —la Dirección de Arte Popular, hoy Dirección de Culturas Populares, el Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías, etc.—. A la vez, generó importantes programas de reconocimiento a las nuevas tendencias artísticas, por ejemplo la Ruta de la Amistad, serie de 18 esculturas geométricas inauguradas durante los Juegos Olímpicos de 1968, y el Museo de Arte Moderno, abierto significativamente el mismo año —1964— que el Museo Nacional de Antropología. Si a esto se agrega el permanente estímulo, en otros espacios, a los representantes del muralismo y la gráfica tradicionales, es fácil ver de qué modo la hegemonía del Estado fue manteniéndose a través de una política cultural de apoyos equilibrados a los diferentes sectores, capaz de renovarse varias veces para atender las nuevas exigencias de la modernización.

Tal equilibrio implicó modificar las líneas vertebrales establecidas en las décadas postrevolucionarias. La integración nacional de todas las clases y etnias dejó de ser un objetivo central, salvo en algunos discursos, y fue cediendo lugar a una política autodefinida como pluralista y democratizadora. De hecho, la administración cultural asumió la mayor autonomía del arte

y la literatura respecto de la política, la diversificación de gustos y patrones simbólicos de la población, así como las funciones de innovación social asignadas a su creación por muchos artistas e intelectuales. Los más renovadores criticaron severamente el disciplinamiento político o nacionalista exigido a la producción simbólica, descreyeron de las funciones educativas y unificadoras del pueblo que se esperaban de ellos. Algunos ni siquiera se preocupaban por las nuevas dificultades que planteaban a las mayorías la eliminación de referencias figurativas en los cuadros abstractos y el ensimismamiento de las obras en juegos formales. Velan, por el contrario, en este saber compartido por muy pocos un recurso para distinguirse en medio de una sociedad amenazadoramente masificada. Octavio Paz, el escritor que más contribuyó con su crítica a legitimar las corrientes experimentales, escribió en 1963 un ensayo, *El precio y la significación*, en el que ataca el nacionalismo, la mercantilización y la masificación del arte: "La creación, afirma, exige cierta insensibilidad frente al exterior, una indiferencia, ni resignada ni orgullosa, ante los premios y castigos de este mundo. El artista es el distraído: no escucha al mundo y su moral porque está pendiente del hilo de una conversación solitaria" (Octavio Paz, 1967).

El Estado aceptó esta liberalización cultural dos décadas antes de que la liberalización política entrara en su agenda de cambios necesarios. Aun las vanguardias más irreverentes tuvieron sus espacios oficiales de reconocimiento y exhibición, becas y premios, ámbitos autónomos para difundir y legitimar sus obras. Varios intelectuales críticos y con proyectos individuales que desafiaban la organización corporativa y nacionalista de la cultura, como Octavio Paz y Carlos Fuentes, recibieron la consagración de instituciones oficiales y hasta fueron elegidos para representar a México como embajadores. Pero esta renovación del proyecto cultural del Estado tuvo límites políticos precisos: cuando era desafiado no por individuos o tendencias específicamente artísticas, sino por quienes buscaban modificar las relaciones del saber y la experimentación artística con los movimientos de democratización social, como ocurrió en 1968, contestó con la represión. La apertura de la sociedad civil siguió construyéndose desde el campo artístico y desde los movimientos sociales y políticos, pero tuvo que esperar hasta los ochenta para lograr efectos sobre las estructuras centrales del poder.

3. *A partir del 68: el quiebre de la hegemonía.* El modelo de sustitución e importaciones que guió la política desarrollista entre los años cincuenta y setenta logró avances relativamente consistentes. Hubo un crecimiento sostenido, sobre todo en los nuevos sectores industriales, que benefició a la burguesía y a las capas medias. La creación de empleos fue superior al aumento de la población económicamente activa. Pese a que varios de los objetivos del desarrollismo —realizar una acumulación acelerada de capital a partir de la industrialización y quebrar la dependencia externa causada por el modelo agroexportador— se frustraron igual que en otros países latinoamericanos, los efectos negativos fueron menos graves por el respaldo de las crecientes exportaciones petroleras y el control político compacto que mantenía el gobierno.

Las capas tradicionalmente sumergidas, que eran también las más perjudicadas por este tipo de desarrollo, incrementaron sus luchas. Múltiples ocupaciones de tierras, huelgas obreras y conflictos políticos regionales fueron subiendo la tensión social. A ellos se agregaron las protestas y demandas de nuevos actores: migrantes que invadían terrenos urbanos, clases medias que requerían nuevos servicios y participación política. Los sectores intelectuales, profesionales y estudiantes, supuestamente beneficiados con la modernización de la sociedad y la cultura, un mayor acceso a la educación media y superior, la autonomización del campo artístico y científico, encabezaron los movimientos impugnadores del 68.

Un México distinto del que había gestado la revolución y también diferente del que el desarrollismo intentaba configurar irrumpió en la capital. La historia de ese acontecimiento, de la represión y las contradicciones que suscitó —en los movimientos sociales y en el aparato político— fue suficientemente analizada y debatida como para que ensayemos aquí una síntesis. Entre los varios balances que se acaban de hacer con motivo del 20º aniversario, destacamos el volumen de la revista *Nexos*, dedicado a "pensar el 68" (núm. 121, enero de 1988), especialmente los artículos de Gilberto Guevara Niebla, Carlos Monsiváis, Arturo Warman y Salvador Martínez de la Roca.

Llama la atención que, pese a la profusa participación de artistas e intelectuales en esos hechos, las brigadas que formaron y su producción de carteles y volantes ilustrados (Varios, *La gráfica del 68*), se haya analizado muy poco los efectos que provocaron en la práctica artística y cultural posterior. Vamos a referirnos aquí sólo a los cambios producidos a partir del 68 en la cultura visual, sobre todo en la producción plástica, por razones de espacio y porque nos parecen representativos de las aperturas y contradicciones que presentan los movimientos alternativos, así como de los nuevos rasgos estilísticos que fue asumiendo el trabajo cultural.

Al revisar la producción artística de los grupos jóvenes y los artistas individuales que comenzaron a exponer durante los años setenta, advertimos por lo menos tres diferencias con las generaciones anteriores, especialmente respecto de los enfrentamientos entre la escuela mexicana y las vanguardias. En primer lugar, no ven como enemigas la experimentación y la política. Es cierto que no siempre fueron adversarias (recordemos el cubismo de Rivera y el uso del acrílico por Siqueiros), pero nunca se había practicado en México una búsqueda experimental tan generalizada *junto* con la crítica social. No hubo antes tantos artistas para los cuales fueran igualmente centrales en su trabajo la reelaboración del lenguaje y la búsqueda de nuevas formas de inserción del arte en las luchas sociales.

En segundo término, replantean la relación entre lo nacional y lo extranjero sin telurismos ingenuos (como en muchos muralistas y miembros del Taller de Gráfica Popular) y sin entregarse miméticamente al vértigo de las modas internacionales (al modo de varios geométricos y expresionistas abstractos). Su defensa de lo nacional, que suele basarse en investigaciones de la propia historia, no les impide apropiarse libremente de los avances experimentales y los lenguajes de las vanguardias. Dos de los mejores

ejemplos: los collages conceptuales de Carlos Aguirre y Felipe Ehrenberg que reelaboran originalmente fragmentos de periódicos, nóminas de fábricas, documentos de la revolución. Su uso del pop, el arte conceptual y las tácticas discursivas de los medios masivos para referirse a las contradicciones sociales les permitió vincularse estrechamente con los lenguajes populares y a la vez recrearlos.

En tercer lugar, no innovan sólo en las imágenes, sino que cuestionan el sistema entero de producción, circulación y consumo del arte. Proponen cambios en la producción mediante el trabajo en grupos, sin convertirlo en dogma ni renunciar a la creación individual. Respecto de la difusión, ensayan canales alternativos (la calle, los sindicatos, los pueblos indígenas), en algunos casos para alcanzar a públicos excluidos por razones económicas o culturales de los museos o galerías, en otros para burlar la censura de las instituciones oficiales. También quisieron modificar el consumo: hacer del espectador un participante, alguien que intervenga en la realización de la obra, complete la propuesta del artista, la discuta, y encuentre el goce —más que en la contemplación— en la actitud interrogativa y crítica.

Para estos artistas crear un nuevo arte no consistía sólo en introducir modificaciones formales en las obras, sino en cuestionar el sistema de relaciones entre productores, obras, intermediarios y público. Si su acción se concebía como una intervención en las relaciones sociales, era, en parte, porque también en la sociedad esas relaciones estaban cambiando. En el mundo más cercano a los artistas, el de los sectores medios, la "modernidad" —que seguía entendiéndose como la mayor aproximación posible a los EE.UU.— pasó a incluir relaciones más igualitarias entre hombres y mujeres, la liberación sexual, la crítica a toda forma de autoritarismo y la legitimización de la disidencia. Además de representar esos movimientos, los artistas se vincularon también con las luchas campesinas e indígenas, grupos urbanos emergentes, las corrientes democratizadoras de los sindicatos, las huelgas de maestros, en fin, con nuevos y viejos agentes sociales que renovaban el escenario político y parecían anunciar un cambio en las relaciones de fuerza.

Ninguno de esos grupos de los 70 subsiste hoy. Sólo unos pocos miembros mantienen relaciones orgánicas con movimientos populares o siguen representando públicamente las posiciones políticas que antes difundieron. Las causas son múltiples: competencia individual por el reconocimiento, necesidad de insertarse en el mercado para sobrevivir, hostilidad de las instituciones oficiales, represión y censura, derrotas de algunas de las luchas que los convocaban. Sería útil investigar esta descomposición para conocer mejor las dificultades que implica la articulación del arte con la sociedad, de la cultura con el poder.

En síntesis, podemos decir que en los años setenta la modernización mostró sus mayores resultados y sus límites. La expansión económica, la urbanización vertiginosa y el aumento del alumnado en los centros de educación media y superior cambiaron las bases sociales de la producción cultural. Surgieron nuevos patrones de asentamiento y de organización social, una interacción muy creativa entre las tradiciones simbólicas nacionales y la

renovación de las vanguardias intelectuales y artísticas. Pero toda esta efervescencia no encontró vías políticas para intervenir en la indispensable redefinición del proyecto nacional. Cuando los viejos y nuevos movimientos sociales presionaron, fueron reprimidos.

El gobierno demostró más interés por reconciliarse con los intelectuales, sobre todo a partir del sexenio de Echeverría, que por rediseñar las políticas educativas, científicas y artísticas con participación democrática de los interesados. Hubo incrementos reales de los sueldos en el sistema educativo y cultural, de los presupuestos, los subsidios y las becas. Hasta principios de los ochenta se veían manifestaciones culturales que correspondían a una prosperidad económica ya entonces declinante: por ejemplo, el Festival Cervantino de Guanajuato, donde se reunían anualmente decenas de grupos internacionales de teatro, de danza, música, etc., pagados por el Estado (este Festival sigue realizándose, pero ahora, más que invitar, acepta "intercambios" ofrecidos por otros gobiernos); construcciones gigantes, como el Centro Cultural de Tijuana, pocas veces originadas en demandas colectivas locales o en diagnósticos de necesidades. En un tiempo en que todavía los signos de crisis de la hegemonía parecían controlables por el Estado, éste creía poder seguir manejando la reproducción cultural de la sociedad con criterios verticales y paternalistas.

III. La crisis de los ochenta

A mediados del 82, la caída de los precios del petróleo y el "descubrimiento" de que era imposible pagar la deuda externa acumulada en la euforia desarrollista, llevaron a adoptar las recetas del monetarismo que ya estaban reorganizando las demás economías latinoamericanas. Como en los otros países, se eliminan las áreas ineficientes del capital (las estatales y las privadas más débiles), se busca recuperar la tasa de ganancia mediante la concentración monopólica de la producción y su adecuación al capital financiero transnacional —ya no al capital industrial, como en la época desarrollista—. Se prescinde de personal, se reestructuran los procesos de trabajo, son suprimidas conquistas laborales y reducidos los salarios en relación con el costo de vida. Simultáneamente, es restringido el gasto público destinado a subvencionar servicios sociales (desde los alimentos básicos al transporte), así como el financiamiento de programas educativos, culturales y científicos.

La caída acumulada del salario mínimo supera el 40% en el período 1982-1987. La participación de la masa salarial en el ingreso total bajó, en el mismo lapso, de 42 a menos del 30% (Lustig, 1988, pág. 9), lo cual tiene obvios efectos en el consumo cultural. La inflación (del 143% en 1987) agudiza las desigualdades económicas y simbólicas. Al abrirse la economía al exterior (ingreso al GATT, libre importación de muchísimos productos básicos y suntuarios, entrada de inversiones extranjeras) se acentúan los beneficios de los sectores minoritarios vinculados a este reordenamiento y que tienen sus activos depositados en el exterior (se estiman en 100 mil millo-

nes de dólares, casi el equivalente de la deuda externa) (Georges Couffignal, pág. 20). La situación actual es resultado, al menos, de la combinación de tres procesos: a) las contradicciones históricas acumuladas en el desarrollo socioeconómico y cultural de México, b) las transformaciones del mercado simbólico (reorganización de las relaciones entre lo rural y lo urbano; lo culto, lo popular y lo masivo; lo artesanal y lo industrial), semejantes a las ocurridas en muchos otros países, c) los cambios generados por la crisis económica y política reciente. Vamos a considerar cuatro áreas problemáticas en las que se advierte el sentido complejo de esta transición.

1. *¿Avances educativos?* Si consideráramos las tendencias de crecimiento educativo experimentadas en el país desde 1950 hasta por lo menos 1980 para elaborar pronósticos de crecimiento educativo los resultados podrían ser muy optimistas: "al terminar el siglo 20 el índice de analfabetismo se habría reducido a menos del 5% y el índice de escolaridad media podrá haber aumentado a poco más de 7 años llegando en el año 2000 a entre 8 y 9 años" (A. Alonso, pág. 3); "en el año 2000 se satisfará no sólo el 100% de la demanda de primaria sino también el de secundaria, el 50% de la demanda de educación media superior y el 18% de educación superior" (ob. cit., pág. 9).

Estos pronósticos se reforzarían si los relacionáramos con la tendencia al envejecimiento de la población, como resultado del control de la natalidad y el aumento de vida promedio experimentado en nuestro país durante los últimos años. Tradicionalmente, México ha sido un país de población joven: en 1921 los menores de 15 años eran el 38% de la población, en 1970 el 46,2% y en 1980 este grupo estaba conformado por 30 millones de niños (43% de la población), cifra que se proyecta estable hacia el año 2000. En 1980, 36 millones de la población estaban comprendidos en la edad productiva; esta cifra se duplicará en el año 2000 y la demanda de empleos aumentará en un 80%. La población mayor de 65 años aumentará el 250% —de dos a cinco millones— (López y Ordorika). Esta recomposición de la población alterará la composición de la demanda educativa: "la matrícula total de primaria representará una proporción cada vez menor, continuando con el patrón de evolución presente desde al menos 1950. La de preescolar, que entre 1975 y 1985 tuvo un crecimiento explosivo, pasando de medio millón a casi dos y medio, seguramente continuará incrementando su participación porcentual en el total, pero a partir de ahora con un ritmo mucho menor. Cabría esperar que la participación de la matrícula de secundaria, medio superior y superior en el total, continuase creciendo... A corto plazo, la presión sobre el sistema educativo probablemente será mayor en el nivel de secundaria, poco después lo será en el nivel medio y posteriormente en el superior" (A. Alonso, pág. 10).

Sin embargo, estos pronósticos se alteran si tomamos en cuenta que la crisis educativa se explica a la vez por las desigualdades y contradicciones históricas del sistema como por la agudización que sufren en medio de las dificultades recientes.

En un cuestionario respondido a la Revista *Nexos* en 1984 por varios

especialistas de educación (Olac Fuentes Molinar, Pablo Latapí, José Angel Pescador, Carlos Muñoz Izquierdo) acerca de las tendencias actuales de la política educativa, se hacía explícita esta combinación de factores:

a) "Hay estudios que dan como cumplida la meta de ofrecer ingresos a la educación primaria a todos los niños. Sin embargo, el censo de 1980 registró 5,8 y 8,1 millones de analfabetos mayores de catorce años de edad, y cerca de 20 millones de personas mayores de 15 años no han terminado la educación básica". "La mitad de los niños no termina la primaria y sólo en los dos primeros grados la reprobación excede al 20 por ciento. Uno de cada dos niños no tiene acceso a la enseñanza preescolar (...)"

b) Por la forma en que está distribuida la oferta educativa en México, hay aún serios problemas de desequilibrio en sexos y niveles de edad, grupos sociales y étnicos. Los logros educativos están asociados directamente con las desigualdades económicas interregionales. A mayor crecimiento económico, mayor satisfacción de la demanda de educación, por lo cual las poblaciones rurales son las que resultan particularmente afectadas.

Estas observaciones demuestran que, aunque ha existido apertura en el sistema educativo formal, gran parte de la población aún no tiene acceso a ella. Además, el bajo presupuesto destinado a las escuelas y los periódicos recortes no permiten atender los problemas "cualitativos", es decir, adaptar los contenidos educativos a las necesidades de la población, atender a los maestros para elevar la "calidad" de la enseñanza impartida, descentralizar para solucionar las diferencias y desigualdades intrarregionales.

Olac Fuentes, en el artículo "Cuatro facetas del sistema educativo que nos legó el sexenio de la crisis" (1989), completa esta evaluación sobre las políticas educativas durante el sexenio pasado:

— El sistema educativo ha dejado de crecer y existe una distribución regional desigual del servicio.

— La rápida expansión del sistema preescolar perdió su impulso desde 1987, como lo revela que el 40% de los niños de cinco años no tienen acceso al mismo.

— Hay un decremento en el ingreso a la educación primaria y ha aumentado la reprobación y deserción en este nivel: "hoy tenemos 750 mil alumnos menos que en 1983, y aunque la reducción del primer ingreso es parcialmente explicable por el abatimiento del rezago, la normalización de la entrada a la escuela y la baja en la expansión demográfica, lo que no tiene justificación alguna es la disminución del egreso" (pág. 15). Para Fuentes, esto es un reflejo del impacto de la crisis económica sobre las condiciones de vida de la población más empobrecida, pero también de la incapacidad de la escuela para enseñar y mantener a los alumnos. De cada 100 niños que inician la primaria, 48 de ellos no la terminan y 24 no llegan al tercer grado. En el estado de Chiapas, para ver las diferencias regionales, sólo el 28% termina la primaria.

La expansión de la educación básica y media ha repercutido en el crecimiento acelerado de la población estudiantil en las universidades. La educación básica y la alfabetización de los adultos fueron prioritarias para el Estado entre 1920 y 1940. A partir de 1940, se apoyaron las opciones técni-

cas con el objetivo de "preparar recursos humanos que apoyaran la autosuficiencia tecnológica del país: en 1936 se fundó el Instituto Politécnico Nacional y en 1948 el primer instituto tecnológico regional en Durango. Las universidades, hasta 1960, estuvieron reservadas para la élite: en 1950 se atendía el 1% de la demanda potencial de la población entre los 19 y 24 años de edad. A partir de 1952 la matrícula comenzó a crecer al 10,1% anual; entre 1961 y 1970 subió a un ritmo de 15,1% y del 71 al 76 al 13,2% (Muñoz Izquierdo; 1981, pág. 11). La satisfacción de la demanda también aumentó: en 1960 se atendía el 6,3%, en 1970 el 9,6% y en 1976 el 11,5% (idem). Se estima que para 1991 asistirán a las universidades 1.355.000 alumnos (SEP-ANUIES, pág. 15).

Para controlar "la saturación" de las universidades se han elaborado trabajos evaluativos, como el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (PROIDES), hecho por la Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES).

Preocupados por el bajo nivel académico de las instituciones de educación superior, por la incongruencia entre el desarrollo de las universidades y las necesidades del país, y para enfrentar las limitaciones económicas emergentes de la crisis, formulan un diagnóstico que se centra en dos tipos de problemas: el crecimiento "acelerado, desproporcionado, desequilibrado y desorganizado" de las instituciones; la baja eficiencia académica y la ausencia de criterios de evaluación del trabajo académico.

El PROIDES propuso algunas medidas correctivas: que crezcan las universidades de provincia y las que tengan menor número de alumnos, y se detenga el crecimiento de la UNAM; que se condicione la entrada y permanencia de los alumnos en las universidades; que se busque generar recursos propios; que se establezcan sistemas de evaluación académica y se "racionalicen" los recursos. En esta dirección se han afectado programas de investigación, publicaciones y difusión cultural. Los subsidios a las universidades se recortaron varias veces en los últimos años: en 1977 se destinaba el 0,74% del PIB; en 1984, el 0,57%.

Después de este documento, el último rector de la UNAM, Jorge Carpizo, intentó establecer algunas reformas: introducción de exámenes departamentales, reglamentación del pase automático a la universidad, limitación del número de exámenes extraordinarios, aumento del costo de inscripción y de los servicios educativos. Las propuestas del rector, en la medida en que reflejaban la inquietud de muchos maestros respecto de la pérdida de calidad en la enseñanza y el problema de la "masificación" de las universidades, despertaron algunas respuestas positivas; sin embargo, en la medida en que afectaban directamente los intereses de los estudiantes, generaron un movimiento de oposición que terminó con una huelga general el 27 de enero de 1987. Se cuestionaron los procedimientos en la toma de decisiones en la universidad, la forma de gobierno y las políticas educativas del Estado. El rector debió retractarse de la propuesta y aceptar un Congreso Universitario como instancia donde se discutieran los cambios.

Como resultado de la apertura del sistema educativo se modifica la

relación tradicional entre universidad y élite cultural. Los problemas de "masificación de la enseñanza y pérdida de la calidad académica" son, en parte, consecuencia de la recomposición en el número y tipo de alumnado universitario, y del surgimiento de nuevas necesidades que requieren otras formas de organización y vínculos distintos entre universidad y sociedad.

Una de las principales dificultades que las universidades enfrentan es de carácter económico: no se puede pretender elevar el nivel académico si los salarios de los profesores-investigadores son cada vez más bajos; ni exigir resultados de investigación y aportes al conocimiento que sean útiles para solucionar los problemas del país, si el recorte presupuestario está afectando cada día más los subsidios de estos proyectos. Hay otras dificultades que son resultado de problemas educativos más complejos: la deficiencia en la preparación de los alumnos porque la generalización de la educación básica aseguró el crecimiento, pero descuidó la calidad de la enseñanza. La masificación y la deficiencia terminal cuestionan seriamente los caminos elegidos para cumplir metas sin atender las necesidades surgidas en el proceso.

La problemática de las universidades permite imaginar distintas alternativas. Una de ellas podría ser volver a las universidades "a su curso normal: la educación básica es un derecho de todos, pero la universidad es para unos cuantos (...)" Una alternativa más democrática, que contemple las necesidades de la mayoría de la población, sería reestructurar el modelo mismo de universidad, buscando un equilibrio entre crecimiento y calidad. Esta elección exigiría una inversión de recursos materiales y humanos, que en el contexto de la crisis parece inalcanzable.

El estancamiento y descenso de la matrícula escolar durante los últimos años, no sólo en la escuela primaria sino en todo el sistema educativo, ha llevado a pensar a algunos investigadores que la crisis económica está alterando las características y expectativas educativas de la población (A. Alonso y Olac Fuentes). Se estima que para 1987 la educación había perdido el 35% del financiamiento real de que se disponía en 1982. La reducción financiera implica una baja notable en la inversión en planta física y equipamiento, pero uno de los efectos más dramáticos es la reducción de los salarios de los educadores: "puede estimarse que al terminar el sexenio del Presidente Miguel de la Madrid, el salario de un joven profesor de primaria ha perdido del 50% de su valor y un profesor universitario el 45%" (O. Fuentes, pág. 15).

Estos problemas han motivado un vasto movimiento de protesta que se aglutina en torno de la CNTE (coordinadora magisterial de oposición), pero también incluye a algunos de los que militan en el sindicato reconocido oficialmente. Los maestros demandan un aumento salarial significativo para recuperar la pérdida del valor de los salarios, así como la reconfiguración política del sindicato controlado por un liderazgo autoritario, corrupto e incondicional al Estado. La demanda de participación de maestros y estudiantes ha pasado a formar parte de las necesidades de la modernización y reestructuración del sistema educativo.

2. *La reestructuración de las relaciones entre el Estado y la iniciativa privada*, que venía ocurriendo desde los años cuarenta, pasa a una nueva etapa con la aplicación de políticas monetaristas. En líneas generales, el neoconservadurismo propicia, como se sabe, el adelgazamiento del aparato estatal y aumenta los espacios y volúmenes de intervención privada. Sin embargo, en las áreas educativas y culturales esta tendencia no se cumple del mismo modo. Aunque todavía no está bien definido en qué sectores prevalecerá uno u otro tipo de agentes, es posible visualizar ciertos lineamientos indicativos de la reorganización del mercado simbólico.

Dentro del sector educativo, el Estado sigue atendiendo la mayor parte de la demanda. En la enseñanza primaria, la acción privada que abarcaba un 7,1% en 1940, había descendido en 1978 a 4,9%; no pudimos obtener cifras fidedignas más recientes, pero todo indica que en los últimos diez años el crecimiento de este porcentaje es escaso y tiene que ver exclusivamente con sectores de altos ingresos. La participación privada es mucho más significativa en los niveles medio y superior, sobre todo a partir de 1968. Dos argumentos la "justifican": la crítica a las universidades por su masificación, deficiente calidad y presupuesto, por un lado, y, por otro, el rechazo de la iniciativa privada al papel que tendría en la enseñanza estatal la divulgación "de ideologías que atentaban contra las libertades individuales" y el activismo político estudiantil (Enrique Maza, 1984). La presencia privada en la educación superior no es tan importante por la población que atiende como por su influencia cualitativa: hay 54 universidades privadas, pero sólo una supera los diez mil estudiantes y cuatro los cinco mil; las universidades públicas son 38, pero absorben el 83,8% de la matrícula nacional. Estas cifras, que revelan la masificación excesiva de la educación superior estatal, dan la clave de por qué en ciertas disciplinas se devalúan los certificados de las universidades públicas y se valorizan los de algunas privadas.

El cambio de peso específico de las acciones estatales y privadas es más notable en las políticas científicas, artísticas y comunicacionales. Los insistentes recortes presupuestarios efectuados a partir de 1982 en las áreas culturales y científicas constituyen un retroceso serio. El Estado ha suprimido por razones de austeridad dependencias como la distribuidora del Fondo de Cultura Económica, el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Danza Popular Mexicana, programas itinerantes de conferencias y espectáculos, talleres populares, etc. Las dependencias que subsisten tienen que disminuir enérgicamente su actividad: el Instituto Nacional de Bellas Artes redujo en 1985 el 27% de los actores artísticos y culturales en relación con el mismo período del año anterior; la Subsecretaría de Cultura, que había iniciado en 1983 una ofensiva cultural y educativa en televisión (produjo 2120 programas durante 1984) bajó un 75% su actividad en 1985 y siguió ese ritmo decreciente en los años posteriores (Campa y Robles, págs. 46-49).

Las reducciones presupuestarias en el ámbito científico ocasionaron que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cancelara, en el programa de 1988, 70 proyectos de investigación, 600 nuevas becas y 35 proyectos de inversión destinados al fortalecimiento de la infraestructura en centros de investigación (*La Jornada*, 18-1-89). Otros factores de desaliento, entre

ellos la baja del valor real en los salarios de los investigadores, motivan un éxodo de científicos hacia instituciones y laboratorios privados del país y hacia universidades norteamericanas. Se intentan soluciones parciales, como la creación del Sistema Nacional de Investigadores, que beneficia con un sobresueldo de tres a siete salarios mínimos a unos 4500 especialistas de alto nivel. Pero las condiciones de trabajo de la mayoría empeoran afectando los programas de investigación, la calidad de la docencia y los apoyos indispensables del trabajo científico al desarrollo autónomo del país.

Entretanto, muchos de los espacios abandonados por el poder público a causa de las reducciones presupuestarias son ocupados por las empresas privadas. Su influencia se expande a través de los medios masivos, de museos e instituciones de la alta cultura, y también reelaborando los significados y las funciones de las manifestaciones populares. El ejemplo más contundente es el crecimiento vertiginoso de la cadena televisiva. Además de manejar cuatro canales de televisión nacionales con 130 estaciones enlazadas en México y 22 repetidoras en los EE.UU., muchas radios, empresas editoriales y de video, sostuvo desde 1981 hasta mediados de 1986 el Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo, principal introductor de las vanguardias internacionales. Con apoyo de la TV, este museo organizó las exposiciones artísticas con mayor público en la historia del país (las de Picasso y Rivera alcanzaron cada una el medio millón de visitantes). Se ocupó, asimismo, de las artesanías y tradiciones populares, adaptando sus significados a una visión pintoresquista y espectacular (Trejo Delarbre y otros, *Televisa, el quinto poder*, especialmente los artículos de Florence Toussaint, Fátima Fernández Christlieb y R. Trejo Delarbre).

En agosto de 1986, la Fundación Televisa entregó a la Secretaría de Educación Pública el Museo Tamayo para concluir una larga polémica, en la que algunos cuestionaron el papel de la empresa privada pero donde el hecho decisivo fue la irritación de Tamayo por el arrinconamiento infligido a su obra dentro del Museo y el habérselo ignorado en los últimos años al diseñar la política de esa institución. Inmediatamente, Televisa adaptó el edificio que había construido como oficina de prensa para el Campeonato Mundial de Fútbol a fin de convertirlo en Centro Cultural de Arte Contemporáneo. Dadas las restricciones presupuestarias que dificultan a los museos oficiales pagar los fletes y seguros de exposiciones extranjeras, ese Centro se ha vuelto el principal lugar de exhibición de artistas europeos y norteamericanos en México. Los museos estatales exponen casi únicamente arte mexicano, salvo alguna muestra excepcional conseguida mediante intercambio diplomático.

A través de esta política múltiple, que abarca lo culto, lo popular y lo masivo, Televisa se presenta como benefactora y legitimadora de la producción cultural de todas las clases; como defensora de la libertad de creación cultural y de la información política frente a cualquier "monopolio" estatal; como articuladora interna de la cultura nacional y enlace con el desarrollo internacional moderno. La iniciativa privada compite así con el Estado para sustituirla como agente constructor de hegemonía, o sea como organizador de las relaciones culturales y políticas entre las clases. Del mismo modo

que los neoconservadores subordinan la política económica del Estado mexicano a las normas del FMI (privatización de empresas públicas y agudización de las diferencias sociales al reducir la ocupación y el consumo de sectores medios y populares), en la cultura se reemplaza una hegemonía basada en la integración de las diferentes clases bajo la unificación nacionalista del Estado por otra en la que la iniciativa privada aparece como promotora de la cultura de todos los sectores.

En diciembre de 1988, al asumir el nuevo gobierno, se creó el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura que agrupa a todos los organismos del área y traslada a esta área las dependencias que se ocupan de los medios masivos, hasta ahora subordinadas a la Secretaría de Gobernación. Por una parte, este reordenamiento permite esperar una mejor coordinación conjunta de las políticas referidas al patrimonio histórico, el arte, la cultura popular y la masiva, y por lo tanto que las acciones estatales se potencien, eviten superposiciones y alcancen más eficacia. Al mismo tiempo, los responsables del Consejo anuncian que buscarán establecer mecanismos más intensos de colaboración con la iniciativa privada.

3. *La reorganización de los consumos.* Para medir la eficacia comparativa de las acciones estatales y privadas sería necesario contar con estudios de consumo y recepción de la cultura. Pero este tipo de investigaciones está notoriamente atrasada y atomizada en México en relación con otros países latinoamericanos de semejante desarrollo socioeconómico. Existen sondeos cuantitativos de mercado hechos por empresas privadas que buscan, más que una exploración cualitativa de los hábitos y patrones de recepción, confirmar o desconfirmar los movimientos de audiencias, y en algunos casos conocer las razones explícitas y coyunturales de sus cambios. Las estadísticas de los organismos gubernamentales son irregulares en su continuidad y carecen de una sistematización unificada en los procedimientos de registro. No existe, en síntesis, un ente que agrupe toda esta información, estatal y privada, ni —menos aun— efectúe evaluaciones conjuntas que permitan comparar los comportamientos globales de la población ante los diversos circuitos de difusión y participación cultural.

Cabe reconocer que en los dos últimos sexenios la Secretaría de Programación y Presupuesto ha comenzado a reunir las cifras de asistencia a espectáculos, museos y eventos recreativos, aunque sin un programa nacional para unificar los criterios y dar confiabilidad a la información. También se han realizado dos encuestas nacionales de ingreso-gasto en hogares, con rigor metodológico pero dando poco lugar a la exploración de datos culturales. En varios estudios que efectuamos en los últimos años sobre consumo cultural, tuvimos que reconstruir y coordinar informaciones dispersas en diferentes instituciones, recibiendo de los propios encargados la advertencia de que la recolección y el registro eran dudosos o contradictorios. Es significativo, por ejemplo, que en el campo patrimonial México disponga de una vasta bibliografía de catalogación y descripción de sitios arqueológicos, edificios coloniales y monumentos, obras y tendencias artísticas, mayor que la de cualquier otro país latinoamericano; pero se cuentan

con los dedos de una mano las investigaciones publicadas sobre la recepción de esos bienes. Conocemos que los museos y las zonas arqueológicas reciben anualmente un amplio público, lo cual revela un uso intensivo y extensivo de esos espacios por la población mexicana: en 1985 hubo un ingreso de 6.140.173 personas a los museos, de los cuales sólo 1.161.330 eran extranjeros. También sabemos que existe un alto número de visitantes al Museo Nacional de Historia (659.997 en 1986) y al Museo Nacional de Antropología (1.194.422 el mismo año). Pero ignoramos por qué van a estos espacios culturales, cómo los usan, qué prefieren o rechazan, de qué modo se apropian del patrimonio nacional y qué dificultades encuentran para relacionarlo con su vida cotidiana (García Canclini, 1987, págs., 17-18).

Estas carencias de conocimientos cualitativos sobre el proceso de recepción de la cultura es indicativa del carácter apriorístico y en cierto modo autoritario con que suelen diseñarse las políticas culturales. Los discursos y programas aluden a los destinatarios de las acciones culturales, pero obviamente no basta el voluntarismo para que esas acciones se relacionen efectivamente con las necesidades sociales. Mientras las políticas de difusión no se basen en investigaciones sobre lo que piensan y hacen quienes las reciben, ni conozcan sus patrones de percepción y comprensión, es difícil evaluar la eficacia y pertinencia. El riesgo es, entonces, que las políticas se orienten por exigencias burocráticas, condicionamientos políticos (extraculturales) y opiniones de especialistas (arqueólogos, historiadores, artistas), sin tomar en cuenta los cambios en los gustos y en la estructura del mercado simbólico.

En relación con las modificaciones suscitadas en el consumo por la crisis económica, algunas estadísticas evidencian una contracción de gastos culturales. Pero el análisis comparativo de cifras correspondientes a prácticas calificadas cultas, populares y masivas, así como las diferencias respecto de bienes "tradicionales" y "modernos", nos lleva a afirmar que sólo algunas reducciones del consumo se deben a la crisis, mientras que otras se explican por el reordenamiento del mercado cultural, que México comparte con muchos otros países.

Es claro que los conciertos, el teatro y el cine disminuyeron su público a partir de 1982. En el caso del cine, la reducción del 40% (*La Jornada*, 4-1-88, pág. 27) es muy significativa en un país que tiene una tradición de varias décadas en afición a este medio. Pero el caso más grave es el de la industria editorial. También en este campo México había llegado a tener una producción próspera y estable (gracias al precio del papel), que en la década del setenta podría cotizar entre 20 y 30% menos que España, Argentina y Colombia. En 1982 los precios de libros nacionales se incrementaron de un golpe el 75% y los de importados el 150. En 1987, los libros mexicanos subieron el 200 por ciento. También hubo una seria disminución en el ingreso de textos extranjeros, no sólo en las librerías; las bibliotecas de instituciones académicas encogieron las compras. En 1976, se habían traducido cinco mil libros en México; en 1985, la cifra fue tres veces menor.

Las exportaciones cayeron fuertemente por las dificultades semejantes del mercado en otros países latinoamericanos. Si tomamos en cuenta que

de 1981 a 1986 las importaciones descendieron un 49,8% y las exportaciones el 57,3, es fácil apreciar cuánto se redujo la circulación de libros en ambas direcciones. Las consecuencias, ya se sabe, no son únicamente económicas. Los editores cambian sus criterios de selección: prefieren las reimpresiones de rápida salida y se vuelven conservadores en las novedades; descienden bruscamente los títulos de ciencias puras, bellas artes, literatura y ciencias sociales; se paraliza la inversión en maquinaria, y sólo las empresas grandes dedicadas a obras más comerciales pueden incorporar los avances tecnológicos (*La Jornada - Libros*, 5-3-88, pág. 7).

Frente a este deterioro del mercado editorial, la única acción positiva del Estado fue incrementar las bibliotecas públicas, como no se había hecho en ningún período anterior: de 369 en 1983 se pasó a 1773 en 1988. Las cifras de 1987 indican que se distribuyeron más de dos millones de ejemplares en esta red bibliotecaria (*Programa de Trabajo del Subsector Cultura 1987*, págs. 19-20). Las demás medidas adoptadas en relación con este campo desde 1982 —retiro de subvenciones al precio del papel y de tarifas especiales a la circulación de publicaciones por correo, obstáculos financieros a las exportaciones— fueron concebidas en función de reducir las erogaciones del Estado y no para promover la cultura.

En la base de esta contracción de la producción y el consumo está la crisis de la industria editorial y el estrechamiento del gasto familiar. Pero no podemos adjudicarla sólo a estos factores si la comparamos con el aumento en la venta de electrodomésticos, e incluso con el creciente mercado de la "cultura a domicilio": televisores, videocaseteras, computadoras, etc. En los tres últimos años, desde que se extendió a todas las grandes ciudades la cadena de empresas dedicada al alquiler de videos, el número de afiliados llegó a 800.000 (*El Universal*, 3-6-88). Este contraste sugiere que los efectos negativos de la "sadamonetarización" de la economía, según la expresión de José Emilio Pacheco, atacan diferencialmente a distintos sectores de la cultura. Los productos más golpeados son los que se vinculan con la alta cultura y con aquellos espectáculos que requieren la asistencia a lugares públicos. Se trata de una ley general, previa al estallido de la crisis, que se cumple en casi todo occidente: como lo demuestran investigaciones realizadas en Europa (Bourdieu, 1979), Estados Unidos y Brasil (Miceli), la expansión de la TV, el video y otras máquinas culturales ha cambiado los hábitos estéticos. Se reducen los gastos familiares en publicaciones, espectáculos teatrales, musicales y cinematográficos, en tanto aumentan los que se dedican a las "máquinas culturales" que llevan esos mensajes al hogar.

Por una parte, es importante colocar comparativamente la evolución e involución de diversas partes del desarrollo cultural para dimensionar la crisis de cada área. También sirve establecer correlaciones con procesos semejantes en otros países a fin de distinguir qué cuota de la crisis deriva de políticas económicas asfixiantes y qué aspectos deben ser explicados como parte de una nueva etapa en la producción, la circulación y el consumo de cultura. Pero una reflexión prospectiva sobre políticas culturales no puede quedar en estas comprobaciones. Hay que preguntarse, por ejemplo, si nos parece deseable o indiferente la reducción de títulos o tirajes de

libros, qué consecuencias tiene sobre el desarrollo global de la sociedad, sobre el pensamiento crítico y la cultura política. Por lo tanto, deberemos retomar la cuestión en el último tramo de este texto.

4. *El desarrollo de nuevos movimientos sociales* es otro de los espacios en que se advierte de qué manera la crisis de los ochenta genera cambios en la interacción entre políticas culturales y sociedad civil. Varias de estas modificaciones ofrecen antecedentes en décadas anteriores, sobre todo a partir del 68. Las luchas de estudiantes, intelectuales y profesionales en ese año y los siguientes, las de ferrocarrileros, electricistas y otros gremios presentaron cuestionamientos enérgicos al sistema. Sin embargo, era un lugar común en la bibliografía política caracterizar a la sociedad civil como subordinada al Estado, sin capacidad para desplegar alternativas globales con una fuerza capaz de desafiar al sistema hegemónico o al menos desarrollarse con independencia.

Algunas luchas de la presente década continúan movimientos de larga historia e incluyen como parte de las demandas la defensa de esa historia. En primer lugar, muchos de los 56 grupos indígenas, que unen en sus acciones reclamos materiales y simbólicos: la defensa de tierras y también de lenguas y creencias, de hábitos de producción y estilos de consumo. A veces estos agrupamientos tradicionales enfrentan los desafíos de la modernidad, como los tarascos de Santa Fe de la Laguna que lograron impedir la instalación en sus tierras comunales, junto al lago de Patzcuaro, de una central nuclear, y los campesinos de Veracruz que están oponiéndose a otra ya construida en Laguna Verde. También las radios indígenas bilingües expresan la capacidad de algunos grupos para elaborar políticas culturales dedicadas a la vez a reavivar sus tradiciones e insertarlas en la lógica comunicacional masiva. Del mismo modo que la "Organización en defensa de los recursos naturales y desarrollo social de la sierra de Juárez", en la que zapotecos y chinantecos se unieron para proteger sus bosques frente a las grandes industrias papeleras, desarrollar una educación basada en sus formas comunales de trabajo y en una visión ecológica propia, sostenida por sus creencias en la naturaleza pero politizada a la medida de quienes arrasan sus bosques y construyen caminos pensando sólo en sus ganancias, "no para comunicar a los pueblos" (Martínez Luna).

Los movimientos socioculturales y políticos que más han contribuido a clausurar el estereotipo de las masas dóciles "regidas por el complicado matrimonio entre la obediencia y el relajo" (Monsiváis, 1987, pág. 11) son los que crecen en las principales ciudades del país. Por una parte, porque las dificultades de vivienda, salud, transporte y educación son con frecuencia más graves en el medio urbano, o al menos más patentes. Por otra, debido a que la contradicción entre los logros y las ventajas de la modernidad, al ser especialmente visibles en la ciudad, generan una conciencia crítica más radical sobre el conjunto del sistema. En tercer lugar, porque la alta concentración demográfica y de poder que la vida urbana posibilita también genera solidaridades y agrupamientos más poderosos. En el Distrito Federal, el carácter masivo de los problemas y conflictos, que se evidenció

particularmente en los sismos de 1985 y en la crisis universitaria de los dos últimos años, originó movilizaciones igualmente masivas, de amplia repercusión en la vida política y cultural del país.

Los movimientos populares y urbanos comenzaron en los años setenta como simple lucha por el territorio y la vivienda. Heterogéneos en su composición, en sus reivindicaciones y en las tácticas de enfrentamiento y negociación con el Estado, fueron una presencia aislada hasta fines de la última década. Su crecimiento en la ciudad de México y también en el interior llevó a formar organizaciones regionales: el Comité de Defensa de Chihuahua (1972), el Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey (1976), la Unión de Colonias Populares del Valle de México (1979), el Comité de Defensa Popular Francisco Villa en Durango (1976), el Frente Independiente de Colonias Populares (1979) y el Consejo General de Colonias Populares de Acapulco (1980). Estas organizaciones agruparon a poseedores, colonos, inquilinos y solicitantes de vivienda. Pero sólo en 1980, con el surgimiento de la CONAMUP (Confederación Nacional del Movimiento Urbano Popular), comenzó a existir una mayor articulación de diferentes grupos a nivel nacional.

En 1983 se calculaba que el déficit de vivienda en México oscilaba entre seis y ocho millones. En las grandes ciudades (México, Guadalajara, Monterrey, Juárez, Tijuana) existían alrededor de 1.800.000 viviendas precaristas, es decir, el 22,5% de las casas urbanas (M. Nolasco, pág. 59). El trabajo de análisis y difusión política de los movimientos populares urbanos ha llevado a sectores numerosos a levantarse más allá de estas comprobaciones estadísticas y entender que la crisis urbana es resultado de la contradicción entre la lógica de acumulación capitalista que lleva a concentrar los medios de producción, circulación y consumo en los centros urbanos, y la incapacidad de la misma lógica capitalista para proveer las estructuras necesarias para el funcionamiento adecuado de estas aglomeraciones (COPEVI, pág. 17).

Los intereses contradictorios de los diferentes grupos que participan en la producción de la vivienda en México —privado, estatal y popular— y la magnitud de la crisis urbana por el crecimiento descontrolado y desorganizado de las ciudades han presionado al Estado para intervenir en forma más activa como regulador y planificador. Hasta 1976, el gobierno mantuvo una política de "tolerancia" frente a las invasiones y fraccionamientos irregulares. Pero a partir de 1978, la planificación urbana, la regularización de la tierra y el programa de vida popular se volvieron tareas "prioritarias". Los sismos del 85 evidenciaron la ineficacia de muchos programas, orientados más a solucionar problemas puntuales que articular una política que organizara, racionalizara y planeara el crecimiento y el uso de las ciudades. Demostraron, asimismo, la incapacidad de llevar a cabo una descentralización que fuera más allá del re-ordenamiento del espacio.

A su vez, los movimientos populares urbanos han revisado sus estrategias al comprobar que las movilizaciones no avanzan si se quedan únicamente en las necesidades más apremiantes de la población. Por eso, hoy se toma más en cuenta la relación entre necesidades básicas y procesos de

significación social presentes en la vida popular. La manera en que la gente resuelve sus necesidades y las luchas que las reivindican responden, también, a costumbres y tradiciones, a prácticas culturales constitutivas de la vida diaria. Las invasiones de los setenta no sólo se generaron por la carencia de una vivienda; en ellas se depositaron, además, esperanzas de construir un espacio donde vivir y heredar. La autoconstrucción se ha realizado a partir de la cantidad de recursos disponibles, pero también a partir de formas culturales de organizar el espacio (Safa, 1987).

Los conflictos enfrentados por los movimientos urbano-populares, que no siempre se resolvieron a favor de ellos, obligaron a las organizaciones a replantear las formas de lucha, a considerar la importancia de demandas vinculadas al proyecto general del país: la petición de tierra y vivienda, pero también la moratoria del pago a la deuda externa, la oposición a las políticas de austeridad y al recorte presupuestario. Al mismo tiempo, ampliaron los vínculos con otras organizaciones, como los movimientos feministas y ecologistas, formados, en su mayoría, por clases medias sensibilizadas al deterioro de las condiciones de vida. También han cambiado las estrategias de lucha, que incluyen, junto a las marchas y plantones, la negociación con las autoridades, eventos culturales y fiestas barriales.

El crecimiento desequilibrado y descontrolado de la ciudad de México, a medida que se agudizan sus dificultades en los servicios, la contaminación, etc., aparece más claramente vinculado a la centralización económica y política. Los sismos del 85, además de dejar un saldo de 15 o 20 mil muertos y cuatro mil edificios destruidos, evidenciaron la "fragilidad de la ciudad" y la ineficiencia del Estado. Los edificios ciudadanos se desmoronaron, en parte, por la corrupción: las vecindades del centro, los edificios de Tlatelolco, el Centro Médico y 2 mil 200 escuelas afectadas, revelaron los manejos deshonestos en la elección de los materiales y el control de las obras públicas en el período en que el mayor crecimiento de la ciudad dio oportunidades de enriquecimiento a las empresas inmobiliarias y a los funcionarios del gobierno. La organización y movilización de la sociedad civil fue más allá de la solidaridad inmediata. La democratización en la toma de decisiones sobre el espacio urbano comenzó a tener un significado diferente: el rechazo a las soluciones paternalistas del Estado y la conciencia de la responsabilidad societal frente a la gravedad de problemas que excedían la emergencia del terremoto.

Dadas las características diferentes de los problemas de la ciudad, en los movimientos han participado sectores de muy diversa composición social. En la Coordinadora Unica de Damnificados (CUD), intervienen tanto las clases medias (los habitantes de la colonia Roma y de Tlatelolco), que defienden un patrimonio previamente adquirido, como las clases populares que demandan la reconstrucción de sus viviendas y vecindades (los habitantes de las colonias Guerrero y Morelos, y los de los cuartos de azotea de Tlatelolco).

Las demandas populares reclaman el derecho a "permanecer en el barrio de origen", "reconstruir la vecindad de acuerdo con la costumbre" y, otras veces, un "condominio" para vivir en condiciones "modernas y citadi-

nas". Las movilizaciones populares exigen, además del acceso a un bien necesario, el derecho a tomar parte en las decisiones para que incluyan sus necesidades y les permitan intervenir en la construcción de nuevas alternativas en los estilos de vida.

La dimensión cultural, ausente en las movilizaciones populares hasta años muy recientes, ha comenzado a manifestarse en los programas de las organizaciones populares. A pesar de que existían antecedentes excepcionales de intereses simbólicos en luchas de inquilinos, como la de los barrios de Los Angeles y Tepito en la década del setenta, los movimientos sociales urbanos se habían caracterizado por dar prioridad a las necesidades materiales. Ahora ven la ciudad no sólo como espacio de conflictos y negociaciones políticas entre intereses contradictorios: también es un lugar de interrelación, comunicación y expresión social.

Por otra parte, el movimiento estudiantil iniciado en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1986, pero con derivaciones en otros centros de enseñanza superior, que por supuesto coloca en el centro de sus demandas la cuestión educativa y cultural, ejerce una crítica sobre el conjunto del desarrollo social. Nacido, como dijimos, en reacción a un paquete de reformas impulsadas por el rectorado para paliar las deficiencias de la masificación, el movimiento estudiantil desemboca en un cuestionamiento de la falta de democracia en la universidad y en el país, y en una crítica al modelo de desarrollo. La búsqueda de excelencia académica, dicen, debe ser vinculada con otras cuestiones: de los 325.000 alumnos de la UNAM, 80.000 trabajan; el 76,2% de sus familias gana menos de dos salarios mínimos; entre 1981 y 1986 el presupuesto real de la Universidad disminuyó un 44% (Monsiváis, 1987, pág. 250). Luego, la solución al deterioro educacional no puede ser simplemente la eficiencia escolar, ni están dispuestos a aceptar "que la lógica del sistema educativo sea una lógica de eficiencia financiera". Es fácil pasar de allí a criticar la reorganización monetarista de la sociedad y la cultura efectuada en este decenio. E incluir a los profesores e investigadores, cuyos salarios reales bajaron un 67,5% de 1982 a 1986. Estudiantes y docentes, que habían tenido conmovedoras experiencias de solidaridad con otros sectores urbanos después de los sismos, encuentran pronto nexos afectivos y descontentos comunes con muchas agrupaciones urbanas. Esta interrelación, precaria y de baja eficacia hasta ahora, suscita nuevos enfoques en los que vinculan procesos económicos —el fracaso del "desarrollo", la inflación, la deuda externa— con procesos políticos —el burocratismo, la democratización— y con los específicamente culturales: demandas educativas, debates sobre las relaciones entre formación escolar, mercado de trabajo y metas del desarrollo.

"La experiencia del terremoto le dio al término *sociedad civil* una credibilidad inesperada", escribe Monsiváis. Reconoce que pocos días después comenzaron a percibirse las limitaciones de esta emergencia espontánea, la imposibilidad de desarrollar de golpe una independencia absoluta respecto de un Estado tan poderoso. Los recursos estatales y empresariales siguen siendo eficaces y más vastos que los de una insurgencia aún precaria. Quizá el resultado más notorio, agrega, sea el avance lento pero firme de

una voluntad democratizadora: "Mucho se avanza cuando los-ciudadanos-en-vías-de-serlo dejan de esperar todo del Presidente", y el gobierno "ya no dispone de las resonancias habituales, de la ingenuidad popular como el espejo magnificado de las proezas inexistentes, de la complicidad que suprime y remodela la memoria" (Idem, págs. 13-14).

El avance de la oposición en las últimas elecciones, que triunfó en las principales ciudades del país, parece indicar que esta tendencia se consolida. El apoyo al cardenismo de movimientos estudiantiles, populares urbanos, ecologistas y feministas, sugiere que el crecimiento de las corrientes democratizadoras busca retomar los núcleos culturales y políticos postrevolucionarios y vincularlos con los desafíos del presente.

IV. Escenarios en debate

¿Cómo se busca construir el futuro? En el bloque hegemónico, formado por una alianza corporativa entre el partido oficial, los empresarios y los sindicatos, existe aún la expectativa de mantener más o menos intacto el proyecto neoconservador. Sin duda, la deuda externa, las presiones del capital transnacional y mexicano, colaboran para que tanto en la economía como en la cultura se prolongue la tendencia de transferir a la iniciativa privada la mayor responsabilidad en la gestión. Se sigue concibiendo el desarrollo como un proceso de acumulación mercantil subordinado al capital financiero, y la acción política como los acuerdos necesarios entre las cúpulas de la alianza corporativa, que ahora deberán incluir de algún modo a la oposición.

Las primeras reacciones postelectorales de los tres integrantes de esta alianza muestran mayor disponibilidad para la negociación y rectificación en algunos sectores políticos del PRI, dificultades serias en los líderes sindicales para reformular sus posiciones (pese a ser los que más perdieron en las elecciones) y enorme resistencia en el grupo empresarial.

Es previsible, también, que los principales obstáculos a una revisión de las tendencias hegemónicas en la política cultural provengan en los próximos años de los empresarios que administran las comunicaciones masivas.

Pero éste no es el único escenario. Existe una oposición campesina, obrera y de sectores medios, hasta ahora censurada o restringida por el régimen político, que está logrando superar sus expresiones ocasionales y atomizadas de descontento, reduce el caudal del PRI y da el triunfo al cardenismo en varias zonas del país. Esta tendencia abarca a sectores económicos y políticos muy distintos que tienen en común el haber sido perjudicados por el avance de empresarios y tecnócratas. Incluye a quienes sólo desean recuperar poder dentro del bloque estatal hegemónico (líderes sindicales, políticos tradicionales y renovadores desplazados), a quienes repudian la política económica (movimientos campesinos, obreros y urbanos) y también a quienes persiguen una democratización de las relaciones políticas. Algunos de estos grupos demandan una renovación cultural retomando ciertos componentes del proyecto democratizador, distributivo y pluralista

del proceso político mexicano anterior al avance monetarista. Por la heterogeneidad de sus intereses y posiciones ideológicas, este conjunto no constituye un bloque social alternativo, sino más bien un conglomerado de sectores excluidos por distintas razones de la tendencia hegemónica.

Pese a que esta composición vuelve de difícil predicción el desenlace, puede suponerse que en el campo cultural crezcan grupos del aparato estatal y de instituciones relativamente autónomas, como las universidades, que en los últimos años propugnan en la educación y la cultura una política objetivamente contradictoria con el monetarismo. Buscan rearticular las relaciones entre educación y cultura, conciben a la educación no como simple calificación para el trabajo, ni a la cultura como un paquete de bienes mercantiles, desarrollan programas democratizadores y plurales, dan importancia a la reinterpretación crítica de la historia, a la vida cotidiana de los educandos y a los receptores de la difusión cultural. Estamos pensando en la Dirección General de Culturas Populares y en la Dirección General de Educación Indígena que forman maestros bilingües, promotores críticos, y capacitan a las comunidades para que participen en la elaboración de los contenidos educativos a desarrollar en las escuelas y en las instituciones culturales. También hay que mencionar el Programa Cultural de las Fronteras, que se propone "apoyar la descentralización, la democratización y el fortalecimiento de la vida cultural en las franjas fronterizas", "de acuerdo con sus necesidades y aspiraciones" (SEP, Subsecretaría de Cultura, Programa Cultural de las Fronteras, págs 1 y 2). En esta línea puede colocarse el Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria, de la Dirección General de Promoción Cultural, que buscó en el sexenio 1982-1988 una "mayor vinculación entre la política educativa y la acción cultural, así como un mejor aprovechamiento de las potencialidades del magisterio para promover la cultura"; formó a unos 2.500 maestros de primaria cada año para que actúen como promotores culturales en las escuelas en relación con medio millón de alumnos, "complementando y revitalizando los contenidos culturales de los programas de educación primaria, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación" (SEP, PACAEP, Documento Rector, pág. 1).

La orientación de estos proyectos culturales no es demasiado distinta de los que presenta la oposición agrupada en el cardenismo. En parte, porque la mayoría de los que forman este movimiento pertenecía al partido oficial, o al menos colaboró con el sistema estatal, hasta hace pocos meses. También porque los partidos de izquierda y grupos independientes han revisado sus consignas maximalistas de otras épocas y están dispuestos a reubicarlas en la lucha por la democratización. De ahí que el segundo escenario posible —cuyos núcleos ideológicos son el pluralismo y la participación democrática— implique un cambio de rumbo en las relaciones entre economía, política, educación y cultura respecto de la tendencia más reciente impuesta por los monetaristas, pero no una ruptura radical con el liberalismo nacionalista de la historia mexicana moderna.

Sin embargo, no podemos ver el futuro como la opción o la negociación entre dos tendencias del pasado. Las cifras y los datos reunidos en este

texto revelan que el proyecto nacional-popular postrevolucionario (sintetizado hoy en el cardenismo) y el proyecto modernizador (hegemonizado por su vertiente neoconservadora) no pueden repetirse si desean enfrentar los cambios del México actual: la expansión acelerada de los grandes centros urbanos, la reestructuración del mercado simbólico de masas y el ascenso de las demandas democratizadoras. Terminaremos, por eso, analizando tres núcleos del debate cultural reciente, no con la preocupación de prever su resolución sino de explicitar las perspectivas que están en juego.

1. *Modernización y desigualdad.* Si se mantiene la actual tendencia en la distribución del ingreso, según un estudio de la Fundación Barrios Sierra, en el 2000 el 10% de los mexicanos de mejores ingresos será cuarenta veces más rico que el 10% más pobre. La modernización desplegada en esta segunda mitad del siglo habrá demostrado así su contribución a la desigualdad, ya que ese 10% privilegiado era 18 veces más rico en 1950, 27 veces en 1970 y 36 veces en 1986 (Solórzano, Martínez y Alonso, citado por Aguilar Camín, 1988, pág. 24). Se sabe que este agravamiento en las condiciones de la mayoría acentúa los conflictos urbanos, los desniveles educativos y culturales que acabamos de describir.

Las elecciones recientes pueden leerse como un rechazo de esta modernización injusta y un reclamo de que se regrese a la época postrevolucionaria, donde la inflación, el desempleo, la especulación financiera, las dificultades en el trabajo y en el consumo no pesaban como ahora. Pero, ¿es posible efectuar este regreso a fines de los ochenta, cuando la reconversión industrial parece ineludible para competir internacionalmente y a la vez el pago de la deuda externa impide crecer? Si un estudio efectuado a comienzos de la crisis estimaba que la tasa de crecimiento del PIB requerida para absorber la nueva mano de obra en los últimos 20 años del siglo era del 6,6% anual, y entre 1982 y 1987 esa tasa fue de 0,4% (Lustig, 1988, pág. 24), ¿de dónde sacar los recursos para invertir, crecer y redistribuir?

Además de los problemas específicamente económicos y de renegociación política internacional que están implicados en esta *impasse*, algunos críticos, especialmente antropólogos, vienen señalando la necesidad de revisar el proyecto nacional centrado en un tipo de modernización que agrava el desempleo, la marginación, el gigantismo urbano y el desgaste de la calidad de vida. Parte del cambio, nos dicen, es abandonar el neoevolucionismo que piensa lo étnico y lo campesino como atraso, la transnacionalización y lo urbano como progreso. Si bien la persistencia de formas tradicionales de producción y cultura ha mantenido viva la pregunta por su lugar en la nación, la crisis presente obliga a repensar —sin ilusorias autonomías— su posible contribución a un modelo de desarrollo menos degradado y dependiente (Warman, 1982; Bonfil Batalla, 1988).

De todos modos, si tenemos que colocar en el centro de la prospectiva cultural estos datos estructurales de la economía es porque en esta época en que la producción artística y científica alcanza la mayor autonomía de la historia, el acceso de la población a la cultura está fuertemente determinado por las restricciones económicas. Desde luego, las tendencias gene-

rales a la privatización y a la austeridad condicionan también la producción simbólica, pero los efectos son más profundos y extendidos en el consumo.

Uno de los modos en que se manifiesta hoy la desigualdad cultural es en la creación de circuitos muy separados de internacionalización simbólica. El 10% de la población con mejores ingresos, que desde hace varias décadas se relaciona con la cultura internacional —o al menos con la de EE.UU.— mediante el turismo y enviando a los hijos a estudiar al extranjero, ahora tiene antenas parabólicas en sus casas de México y centros comerciales exclusivos a los que llegan (desde el ingreso al GATT) los más variados productos de alimentación, vestimenta, cultura y consumo suntuario europeos, norteamericanos y japoneses. Una pequeñísima franja de profesionales e intelectuales se suma a esa élite económica comprando libros, revistas, discos y aparatos importados que los mantienen actualizados respecto de las innovaciones. La distancia creciente entre los bienes culturales extranjeros y los nacionales restringe año tras año el consumo de esta minoría: por ejemplo, los libros mexicanos valen entre 3 y 10 dólares, mientras los españoles oscilan de 20 a 50.

Por otra parte, el resto de la población también está vinculada con la cultura transnacional, pero con el circuito de bienes masivos. Desde el punto de vista del origen y el significado ideológico de los productos consumidos por uno y otro sector el debate entre lo nacional y lo extranjero ha perdido bastante sentido porque todo el mercado simbólico está reorganizado, como en otros países, de modo que propicia el acceso generalizado y simultáneo a bienes locales y transnacionales. Las diferencias se construyen cada vez más no entre quienes prefieren lo mexicano o lo extranjero, sino entre la complejidad e innovación de un tipo de productos y la rutina de los demás: quienes escuchan a Sting o el último rock newyorkino frente a quienes prefieren los *Hombres G* o Julio Iglesias. Es evidente, entonces, lo que para unos y otros significa la modernización.

Pese a la pérdida de importancia objetiva de la oposición nacional/extranjero, es previsible que el agravamiento de la crisis y el fortalecimiento de opciones políticas arraigadas en la época nacionalista del sistema mexicano reavive esa oposición en términos de burguesía transnacionalizadora vs. cultura popular propia. La defensa de los sectores populares y de la necesaria protección nacional a la producción y el uso de ciertos conocimientos y bienes pasa a convertirse, en algunos sectores, en un obstáculo para repensar las nuevas tecnologías, las industrias culturales, y sus efectos en la configuración de identidades.

2. Política (s) cultural (es): autonomía del campo e innovación social.
En una sociedad donde luego de una larga estabilidad entra en rápida crisis el sistema hegemónico y donde se afirman viejos y nuevos actores (campesinos, indígenas, sindicatos independientes, asociaciones culturales, movimientos estudiantiles), uno de los problemas clave pasa a ser cómo articular las diversas demandas en un nuevo proyecto nacional. En el ámbito cultural, a la nueva situación sociopolítica se agrega la reorganización del mercado simbólico. Dos cuestiones surgen entonces como desafíos, en cierto

modo complementarios: la oposición entre los objetivos mercantiles y los simbólicos de la producción cultural y la dificultad de combinar las tendencias autoreferidas de los grupos y estratos culturales con su integración en el desarrollo nacional.

Para la mayoría de la población, la reorganización empresarial de la cultura implica un incremento en la oferta de los espectáculos masivos que pueden autofinanciarse y la reducción de las actividades culturales creadoras o que sólo tienen sentido y valor simbólicos; las prácticas lúdicas o tradicionales que sobreviven tienden a ser modificadas en función de su utilidad mercantil y subordinadas a la lógica de los grandes espectáculos (artesanías en mercados, fiestas populares convertidas en ferias o en *shows* televisivos).

Frente a esta homogeneización y masificación del consumo cultural, las élites exaltan como contraparte códigos intelectuales y estéticos cada vez más herméticos, menos susceptibles de divulgación masiva, como signos de distinción y exclusividad. Las novedades literarias y artísticas se concentran en pequeños grupos que cultivan el carácter minoritario de sus prácticas, pero a la vez —por razones de financiamiento y de manejo del poder cultural, que hoy se halla estructuralmente ligado a procesos masivos— deben tomar en cuenta circuitos amplios de repercusión.

Un ejemplo es el grupo que se nuclea en torno de la revista *Vuelta*, extiende su influencia con el suplemento cultural del diario *Novedades* y tiene excelentes relaciones con la empresa Televisa. En los últimos años se ha visto en la necesidad de adoptar posiciones duales para intervenir simultáneamente en circuitos cultos y masivos. Tal es el caso de la exposición de Picasso que realizó en 1982 en el Museo Tamayo y fue diariamente publicitada por la televisión en uno de los programas más escuchados, el noticiero de Zabludovsky. Allí se proponía una interpretación estetizante de la obra picassiana y se mostraban las interminables colas en la puerta del museo, con lo cual se incitaba a otros espectadores a aumentarla. Puestos de hot-dogs y de refrescos en la puerta, posters y playeras como souvenirs, un enorme globo y banderas con la firma del artista motivaron polémicas en la prensa acerca de la "contaminación" del Arte que engendra su difusión masiva. El Museo Tamayo intentó controlar este proceso, que él mismo había provocado con ayuda de la TV, imponiendo dentro de las salas reglas contemplativas del arte de élite: sólo permitía la entrada de 25 personas a la vez e impedía retroceder en el itinerario lineal marcado por la museografía para evitar congestionamientos. Al mismo tiempo, la presentación del catálogo, escrita por Octavio Paz y publicada también en la revista *Vuelta*, cuya lectura recomendaba Zabludovsky, buscaba despolitizar a uno de los artistas más críticos del siglo, disolver su adhesión revolucionaria en rebeldía, la política en moral, la moral en arte. La grandeza de Picasso, afirma Paz, reside en que "en medio del barullo anónimo de la publicidad, se preservó"; destaca lo que en su obra fue innovación formal para presentarla como "estética de la ruptura" con la sociedad, omitiendo toda referencia a la relación de su trabajo con la resistencia antinazi y con otras formas de lucha política.

A fines de 1985, dos debates ocuparon durante semanas las páginas culturales de los periódicos. Uno fue originado por el intento de los organizadores de la Copa Mundial de Fútbol de realizar en el Palacio de Bellas Artes el sorteo para distribuir las fechas y los lugares de juego. Sólo uno de los que intervinieron en la discusión, Carlos Monsiváis, señaló que era una manera más de privatizar espacios públicos. La mayoría de los artistas y escritores simplemente se escandalizó porque se pretendía usar al "Palacio", "nuestro primer teatro", que "representa a la cultura en su más alta jerarquía" para "eventos de carácter comercial" (Guillermo Bravo). Se dijo que era "una ridiculez, una falta de gusto", "Bellas Artes es para las bellas artes" (Salvador Elizondo) (*La Jornada*, 26-11-85, pág. 31), como si el argumento central fuera que el mundo estético sólo puede estar referido a sí mismo. Cuando se retiró la autorización dada para usarlo, el secretario de la Federación Mexicana de Fútbol y algunos comentaristas deportivos se preguntaron por qué la comunidad artística se rebelaba tan ruidosamente frente a este hecho y no lo hacía cuando el Palacio es usado para mítines políticos y sindicales (*La Jornada*, 5-12-85, pág. 31 y *Uno más uno*, 30-11-85, pág. 29).

En las mismas semanas, se efectuó en el Palacio de Bellas Artes un recital de una representante de Canto Nuevo, ampliamente difundida por televisión: Guadalupe Pineda. Varios artistas e intelectuales impugnaron esa decisión dudando de que dicha tendencia musical tenga suficiente "excelencia en la forma" (Raúl Cosío Villegas), y argumentando que ese tipo de cantantes "tiene ya suficientes foros" (Francisco Savin, director musical de la Compañía Nacional de Danza). Otros miembros del Canto Nuevo replicaron que el Palacio no debía ser sólo para exposiciones de arte culto y ópera, sino extenderse "a otras formas de expresión popular que también son parte de la historia de la música. Sobre todo porque México tiene en ese sentido un nivel importante" (Betsy Pecanins) (*La Jornada*, 8 y 15 de noviembre de 1985).

En un estudio que venimos realizando sobre las polémicas artísticas en México en los últimos años, observamos que la mayoría no se refiere a la función social del arte y de las instituciones culturales, sino a la disputa entre sectores representativos del arte culto, del masivo y del popular, y entre grupos internos de cada tendencia, acerca de la legitimidad y valor de cada una y la necesidad de mantener cordones sanitarios de distinción. Muchos de los debates son producidos por artistas que se sienten insatisfactoriamente reconocidos por los principales museos y centros de consagración pública, como lo vimos en los ataques periodísticos a la exposición de Hervé Fischer, cuando trató de introducir "la cultura de la calle" en el Museo de Arte Moderno: pocas críticas debatían el modo en que se buscó la popularización estética —sin duda polémico—; casi todas se reducían a protestas individuales de artistas reclamando el regreso del MAM a las exposiciones habituales de arte "serio".

Parecería que la crisis económica, junto con la reducción de fondos públicos, causa el estrechamiento del mercado artístico, conduce a los productores a replegarse en los temas y las tareas más tradicionales de su ofi-

cio, en los aspectos técnicos y estéticos, en la competencia por el reconocimiento. La mayoría de las obras que hoy se produce dialoga más con las tendencias actuales o recientes del arte internacional que con las condiciones socioculturales del público. Es evidente que este proceso se relaciona con el reflujó de los movimientos políticos radicales y la crisis de los paradigmas ideológicos que sostuvieron en el pasado la acción social de los artistas (el nacionalismo revolucionario, el marxismo y el populismo).

Este repliegue tiene un lado positivo, en tanto supone el abandono de ilusiones irrealizables sobre los poderes del arte. Ya casi nadie pretende debilitar al imperialismo con un mural y movilizar revolucionariamente a las masas con iconografías heroicas. Más profundamente, esta pérdida de contenido utópico forma parte de la crisis de los proyectos transformadores de la modernidad, que —como dice Habermas— lleva a la autoreclusión de un gran sector del arte actual, del mismo modo que ocurre con la ciencia y la moralidad, en la esfera autónoma de lo privado, en el goce disperso de los sujetos (Habermas, 1985).

Si bien la tendencia predominante es privatizar la cultura, convertiría en espectáculo para públicos masivos y acentuar el hermetismo de las innovaciones estéticas, subsisten corrientes que buscan desarrollar democráticamente la función social del arte. Hay movimientos artísticos que siguen vinculando su trabajo con los sectores populares, con su cultura y sus necesidades: desde grupos arraigados en una colonia popular (por ejemplo, *Tepito Arte Acá*) hasta experiencias coyunturales como las de apoyo al pueblo de Juchitán y la movilización generada por el sismo de septiembre de 1985. En esta ocasión, 17 artistas plásticos trabajaron con uno de los sectores más afectados, las costureras agrupadas en la Cooperativa Mexicana de la Confección, diseñando muñecas de trapo con motivos populares que, producidas y vendidas por las trabajadoras, ayudaron a sobrevivir económicamente y financiar su lucha. La exposición y venta de las muñecas en el Museo Carrillo Gil, que se repite cada año, como otras exhibiciones de artesanías en museos de arte, ejemplifican el reconocimiento del valor estético de los productos populares en algunas instituciones de alta cultura.

Más allá de las polémicas políticas entre lo público y lo privado, entre las funciones mercantiles, sociales y simbólicas de la cultura, hay razones más o menos objetivas que vuelven impracticable un resurgimiento del papel social que la cultura plástica tuvo en México. La organización industrial de las relaciones culturales y del espacio urbano ha cambiado el sentido y el valor del arte mural y gráfico, así como las formas artesanales de aplicación de la plástica a la comunicación social (carteles rústicos, panfletos ilustrados, etc.). La ingenua estructura visual y el frecuente esquematismo que caracterizan a muchos de éstos mensajes los coloca en desventaja ante la sofisticación y nueva espectacularidad de las imágenes producidas por la industria cultural (desde el diseño gráfico a la televisión).

Según algunos críticos, como Oliver Debroise, "el movimiento actual más virulento no es el que pueden ofrecer los pintores cultos: prueba de ello, el dinamismo de los fotógrafos de todas las tendencias e ideologías" que han vuelto su lenguaje, tanto en los museos como en la publicidad, la

prensa y los carteles, "la más elocuente de las artes visuales". También la televisión y el video, agrega, logran testimoniar la realidad nacional y reproducir las imágenes, transformar los comportamientos y desarrollar la sensibilidad estética, desbordando el campo tradicional del arte. La revaloración de las prácticas artísticas clásicas debe hacerse situándolas en esta constelación de nuevas tecnologías e imágenes.

3. *Autonomía y descentralización.* Este ensayo prospectivo tendría un sesgo muy capitalino si no aclaráramos que en provincia se comparten la mayoría de estos problemas pero con variaciones importantes. En cierto modo, todo el país vive la necesidad de compatibilizar la educación y la cultura con la actual etapa de desarrollo económico y cambio político; en las grandes ciudades del interior —Guadalajara, Monterrey, Tijuana, etc.— también las dificultades del crecimiento urbano y de la crisis económica generan movimientos sociales inéditos con demandas que alcanzan a la planificación cultural. Pero hay al menos dos diferencias importantes. Una es que la búsqueda de autonomía del campo cultural se halla en un momento incipiente, porque la orientación y la continuidad de las prácticas simbólicas (incluso en las ciudades) está subordinada a los vaivenes de un sistema político aun más dominado que en la capital por los liderazgos y las fidelidades personales. La débil constitución del campo cultural como espacio independiente, con una lógica propia, se advierte tanto en los cambios bruscos y heterónomos que la alternancia de fracciones políticas impone a los planes culturales del Estado como en la inestabilidad de las universidades de provincia por las modificaciones de los gobiernos locales y en algunos casos por enfrentamientos entre sectores de la oposición.

La otra diferencia es que en todas las regiones la autonomía cultural quiere decir descentralización, o sea disminuir los condicionamientos políticos y presupuestarios del poder central para que las actividades educativas y culturales sean diseñadas y conducidas por responsables locales y en función de necesidades propias. En el presente sexenio se dieron pasos en esta dirección al conferir mayor iniciativa a los gobiernos de los estados y crear programas destinados especialmente a algunas regiones. Sin embargo, estas actividades suelen ser recibidas en el interior como intromisiones del poder federal que buscarían reproducir en provincia, con más recursos que en el pasado, la cultura legitimada en el centro. En una investigación que estamos realizando en la frontera norte, zona tradicionalmente poco conectada con el resto del país, con crecientes vínculos económicos y culturales con los EE.UU., encontramos que los líderes locales rechazan la pretensión del gobierno central de "afirmar la identidad mexicana": argumentan que ellos son tan mexicanos como los demás, pero de otro modo; en cuanto a la "amenaza de penetración cultural norteamericana", sostienen que, si bien tienen mayor cercanía geográfica y comunicacional con ese país, las relaciones diarias y desiguales de intercambio comercial les hacen vivir constantemente la diferencia y por lo tanto tener una imagen menos abstracta e idealizada respecto de quienes reciben una influencia parecida en la capital mediante los mensajes televisivos y bienes de consumo. El

Programa Cultural de las Fronteras ha cambiado ya algunos de sus criterios "misioneros" iniciales y es previsible que en los próximos años se reduzca aun más el poder cultural y educativo del gobierno federal en beneficio de responsables locales.

Una cuestión complementaria es que la descentralización, unida a cambios regionales en las relaciones de fuerza política, puede modificar la orientación predominantemente liberal y progresista que hasta ahora tienen las prácticas educativas y culturales. Las corrientes de derecha, representadas por el Partido de Acción Nacional, cuestionan no tanto la política económica del gobierno como la corrupción y el autoritarismo de la administración política, los contenidos que ellos juzgan "izquierdizantes" y "antireligiosos" en la cultural oficial. Estos ataques se dirigen a programas nacionales, por ejemplo el Libro de Texto Gratuito, al que acusan de elogiar a regímenes socialistas y dar interpretaciones de la historia nacional contrarias a la propiedad privada y a la Iglesia Católica. En las ciudades de México y Puebla, en enero y febrero de 1988, grupos católicos irrumpieron en museos de arte para impedir la exhibición de obras que juzgaron irreverentes (por ejemplo, la Virgen de Guadalupe con rostro de Marilyn Monroe y Cristo con el de Pedro Infante); lograron la destitución de dos directores de museos e hicieron multitudinarias marchas públicas de desagravio. En varios estados (Puebla, Jalisco y los del norte del país), donde los movimientos ultramontanos son muy activos, es posible que algunas de las próximas elecciones sean ganadas por el PAN, cuyas alianzas con la derecha clerical y de los EE.UU. son ostentadas por ellos mismos. Al circunscribirse la fuerza de ese partido a estas regiones, los cambios en las políticas culturales serán visibles específicamente en ellas, pero habiendo una presencia vigorosa de esta corriente en la capital cabe esperar que las modificaciones electorales restauren también debates nacionales sobre el laicismo y el valor de ciertos principios progresistas, en la política cultural y en la política internacional, que la hegemonía del sistema postrevolucionario había establecido como indiscutibles desde las primeras décadas del siglo.

4. En la medida en que se asuman estas nuevas condiciones de la producción, la circulación y el consumo de cultura, habrán de ocurrir transformaciones en las ideologías que orientan las políticas culturales, y en las prácticas institucionales y grupales. Dichas transformaciones deberán reubicar los sistemas artísticos, artesanales y comunicacionales en la variedad de situaciones, en las condiciones de lucha por el poder simbólico, propias de sociedades masivas. Ni la estética formalista y aséptica que sigue siendo la ideología prevaleciente en los museos, ni la reivindicación folclorista o el mero rescate de las culturales marginadas parecen ser ya capaces de fundamentar políticas culturales en las sociedades de fin de siglo.

La preocupación democratizadora, que a la luz de los cambios en las relaciones políticas seguirá teniendo fuerte peso en el desarrollo cultural, puede contribuir a enfrentar las nuevas condiciones del mercado simbólico. Uno de los puntos en que los reclamos democráticos serían más eficaces es el de la defensa de la diversidad cultural frente a las tendencias homoge-

neizadoras de las industrias culturales y la transnacionalización económica y tecnológica de la producción de bienes simbólicos. Hay que preguntarse si las culturas hegemónicas —la occidental o la nacional, la estatal o la privada— son capaces únicamente de reproducirse o también pueden crear las condiciones para que sus formas regionales, heterodoxas, de arte y cultura se manifiesten y comuniquen. En esta perspectiva, el estudio del consumo, como referente indispensable para evaluar las políticas culturales, puede servir tanto para conocer los efectos de las acciones hegemónicas como para cuestionar los principios que organizan esa hegemonía, que consagran la legitimidad de un tipo de bienes simbólicos y un modo de apropiarlos.

Una política democrática es la que construye espacios para el reconocimiento y el desarrollo colectivo, y también suscita las condiciones reflexivas, críticas, sensibles para que sea pensado lo que obstaculiza ese reconocimiento. La sociedad mexicana ha logrado esto en algunos momentos a partir de la revolución. Pero el análisis hecho en este trabajo muestra la deficiente realización de los proyectos de integración en una cultura nacional del arte y las artesanías, de las culturas étnicas y regionales. La persistencia de desigualdades y contradicciones en el desarrollo educativo y cultural, las dificultades subsistentes para democratizar el Estado, las comunicaciones y hasta los movimientos de oposición, no permite imaginar con mucho más optimismo que el de los escritores citados al comienzo la aproximación al año 2000. El análisis de las ciencias sociales no da una estimación demasiado dis- de lo que ensayistas, narradores o trabajadores culturales han venido señalando. Tal vez su aporte específico sea conocer con más datos y rigor una realidad compartida por todos. En esta medida, pueda dar instrumentos para diseñar políticas adecuadas a un conocimiento más objetivo de las necesidades, y evaluar, sin ninguna pretensión de profetismo, los escenarios de uno u otro tipo de transformación.

Notas

- Aguilar Camín, Héctor, *Saldos de la revolución. Cultura y política de México, 1910-1980*, Nueva Imagen, México, 1982.
- Aguilar Camín, Héctor, "La transición mexicana", en *Nexos*, núm. 124, abril de 1988.
- Aguirre, Alejandro, "Tasa de crecimiento poblacional de 1% en el año 2000: una meta inalcanzable", en *Estudios demográficos y urbanos*, núm. 3, El Colegio de México, 1986.
- Aguirre Beltrán, Gonzalo, *El proceso de aculturación*, UNAM, México, 1957.
- Aguirre Beltrán, Gonzalo, "Integración regional", *INI, 30 años después*, México Indígena, México, 1978.
- Aguirre Beltrán, Gonzalo, *Lenguas Vernáculas (su uso y desuso en la enseñanza: la experiencia de México)*, Ediciones de la Casa Chata, México, 1983.
- Aguirre Beltrán, Gonzalo y Pozas, Ricardo, *La política indigenista en México*, Instituto Nacional Indigenista, México, 1981.

Alonso, Antonio, "Algunos futuros de la educación en México", Ponencia presentada en el Seminario "México hacia el año 2000: desafíos y opciones", auspiciado por el CIDE, el COLMEX, la UNAM en febrero de 1989.

Bartra, Roger, *La jaula de la melancolía*, Grijalbo, México, 1987.

Brío, Enrique, "Las políticas demográficas en México. Objetivos, metas y bases metodológicas", en *Investigaciones demográficas en México*, CONACYT, México, 1982.

Bonfil Battala, Guillermo (comp.), *Utopía y revolución*, Edit. Nueva Imagen, México, 1981.

Bonfil Battala, Guillermo, "Los pueblos indios, sus culturas y las políticas culturales", en García Canclini (ed.), *Políticas culturales en América Latina*, Grijalbo, México, 1987.

Bonfil Battala, Guillermo, *México Profundo*, SEP, México, 1988.

Bourdieu, Pierre, *La distinción*, Minuit, Paris, 1979.

Campa, Homero, "El Plan Nacional de Educación errado desde su concepción", en *Revista proceso*, núm. 527, 8-III-86.

Campa, Homero y Manuel Robles, "Por 'no prioritaria', el recorte presupuestal arrumba a la cultura", en *Proceso*, núm. 449, 10-VI-85, págs. 46-49.

Cardiel Reyes, Raúl, "El período de conciliación y consolidación", en *Historia de la educación pública en México*, Fernando Solana (ed), SEP/80, México, 1982.

Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, A.C., *La producción de vivienda en la zona metropolitana de la ciudad de México*, COPEVI, México, 1977.

Cimet, E.; Dujovne, M.; García Canclini, N.; Gullco, J.; Mendoza, C.; Reyes Palma, F. y Soltero, G., *El público como propuesta. Cuatro estudios sociológicos en museos de arte*, Instituto Nacional de Bellas Artes, 1987.

Colombres, Adolfo (comp.), *La cultura popular*, Premia, México, 1984.

Coplamar, *Necesidades esenciales en México. Situación actual y perspectivas al año 2000. Educación*, México, 1982.

Couffignal, Georges, "¿El fracaso del neoliberalismo en México?", en *Le Monde Diplomatique*, edición latinoamericana, año 3, núm. 19, pág. 20.

De la Fuente, Julio, *Educación, antropología y desarrollo de la comunidad*, INI, México, 1977.

De la Madrid, Miguel, *V Informe de Gobierno. Políticas del Estado Mexicano*, Presidencia de la República, México, 1987.

Debroise, Oliver, "Notas para un análisis del sistema de la cultura plástica en México", en M. Ladrón de Guevara (coord.), *Política cultural del Estado mexicano*, Centro de Estudios Educativos, México, 1983.

Dirección General de Educación Indígena, *Estrategias para el desarrollo curricular de la educación indígena* (documento de trabajo), México, 1985, trabajo mimeografiado.

Dirección General de Estadística, *IX Censo General de Población. 1970*, México, 1972.

Fuentes Molinar, Olac, "Cuatro facetas del sistema educativo que nos legó el sexenio de la crisis", en *La Jornada*, 6-I-89, págs. 1, 15 y 16.

García Canclini, Néstor, "Políticas culturales y crisis de desarrollo: un balance latinoamericano", en *Políticas culturales en América Latina*, ob. cit.

García Canclini, Néstor, "¿Quiénes usan el patrimonio? Políticas culturales y participación social", en *Antropología*, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, núms. 15-16, julio-octubre de 1987, págs. 11-24.

González Casanova, Pablo, "La cultura política en México", en *Nexos*, núm. 39.

- Habermas, Jürgen, "La modernidad, un proyecto incompleto", en Hal Foster y otros, *La posmodernidad*, Kairós, Barcelona, 1985.
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, *X Censo General de Población y Vivienda, 1980. Vol. 1. Resumen General*, México, 1986.
- Lomnitz, Larissa, *Cómo sobreviven los marginados*, Siglo XXI, México, 1975.
- López, Elsa y Ordorika, Manuel, "La población que vendrá", en *Nexos*, núm. 101, México, 1986, págs. 9-11.
- Lustig, Nora, "La desigualdad económica", en *Nexos*, núm. 128, agosto de 1988, págs. 8-11.
- Margulis, Mario, *Cultura y desarrollo en México*, INAH, México, 1988.
- Martín Barbero, Jesús, *De los medios a las mediaciones*, Gustavo Gilli, México, 1987.
- Martínez Luna, Jaime, "Resistencia comunitaria y organización popular. El caso de la organización en defensa de los recursos naturales y desarrollo social de la sierra de Juárez, A.C.", en G. Bonfil y otros, *Culturas populares y política cultural*, Museo de culturas populares/SEP, México, 1982.
- Maza, Enrique, "El Plan Nacional de Educación de los patronos propone un estudiante que crea en la libre empresa", en *Proceso*, núm. 389, 16-IV-84, págs. 7-9.
- Mejía Barquera, Fernando, "50 años de televisión comercial en México (1934-1984)", en R. Trejo Delarbre (coord.) *Televisa, el quinto poder*, Claves Latinoamericanas, México, 1985.
- Miceli Sergio, "Estado, mercado y necesidades populares: las políticas culturales en Brasil", en *Políticas culturales en América Latina*, ob. cit.
- Monsiváis, Carlos, "Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX", en *Historia General de México*, Vol. IV, El Colegio de México, 1976.
- Monsiváis, Carlos, "Notas sobre cultura y sociedad en México", en *Cuadernos Políticos*, núm. 17, julio-septiembre de 1978.
- Monsiváis, Carlos, "Entre el espíritu y el presupuesto. Notas sobre difusión y política de la cultura", en *Nexos*, núm. 41, mayo de 1981.
- Monsiváis, Carlos, *Entrada libre. Crónicas de la sociedad que se organiza*, Era, México, 1987.
- Muñoz Izquierdo, Carlos, "Socioeconomía de la educación privada y pública. El caso de México", en *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, Vol. XI, CEE, Diciembre 1985, México.
- Nolasco, Margarita, "La vivienda de los marginados urbanos", en *Nueva Antropología*, núm. 24, México, 1984.
- Novelo, Victoria, *Artesanías y capitalismo en México*, INAH-SEP, México, 1976.
- Olivé Negrete, Julio César, *La antropología mexicana*, Colegio Mexicano de Antropólogos, A.C. México, 1981.
- Paz, Octavio, "El precio y la significación", en *Puertas al campo*, UNA, México, 1967, 2a. edic.
- Perló, Manuel y Shteingart, Marta, "Movimientos sociales urbanos en México", en *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 4, México, octubre-diciembre, 1984.
- Sáenz, Moisés, *México Integro*, SEP/80, México, 1982.
- Safa, Patricia, "Movimientos urbanos y necesidades populares", en *Revista Iztapalapa*, núm. 14, México, julio-diciembre de 1987.
- Secretaría de Educación Pública, *Educación indígena. Alternativa de los grupos étnicos de México*, Dirección General de Educación Indígena, México, 1984.
- Secretaría de Educación Pública, Programa Cultural de las Fronteras, Subsecretaría de Cultura, México, 1984.
- Secretaría de Educación Pública, *Documento Rector y Manual de procedimientos*, PACAEP, Dirección General de Promoción Cultural de la Subsecretaría de Cultura, México, 1984.
- Secretaría de Educación Pública-ANUIES, *Programa integral para el desarrollo de la educación superior. Estrategia nacional*, México, 1986.
- Solana, Fernando, *Historia de la educación pública en México, SEP/80*, México, 1982.
- Stavenhagen, Rodolfo, "Notas sobre la cuestión étnica", *Estudios Sociológicos*, Vol. II, núm. 4, enero-abril de 1984.
- Trejo Delarbre, Raúl y otros, *Televisa, el quinto poder*, Claves Latinoamericanas, México, 1985.
- Varios autores, *La gráfica del 68. Homenaje al movimiento estudiantil*, UNAM, México, 1982.
- Warman, Arturo, "Política cultural: entre las vacas gordas y el vacío", *Nexos*, núm. 37, enero de 1981.
- Warman, Arturo, "Modernizarse ¿para qué?", en *Nexos*, núm. 50, febrero de 1982.

Innovaciones en políticas culturales en Brasil*

Gabriel Cohn**

Introducción

Para un territorio de dimensiones continentales, habitado por una sociedad que exhibe las marcas más extremas de diferenciación en cuanto a renta y a condiciones de vida, como es el caso de Brasil, la formulación de políticas culturales convencionales ya es un problema de tal magnitud que la cuestión de las innovaciones en esa área se impone prácticamente de inmediato, no sólo para avanzar, sino pura y simplemente para enfrentar los problemas corrientes. La cuestión obvia es quién tomará la iniciativa de esas innovaciones, ya que en la década del setenta lo hicieron los militares.

El país entra en la década del noventa con una población aproximada de 150 millones de habitantes, de los cuales cerca de un 20% está enteramente fuera del mercado económico y cultural capitalista convencional, es decir, que no son consumidores, salvo para la subsistencia inmediata, y tampoco son alfabetizados; pero no por eso dejan de pensar en términos políticos y culturales. En el polo opuesto de la escala, otros tantos constituyen un mercado en expansión, aunque altamente estratificado: cerca del 5% de la población detenta la mayor parte de la riqueza nacional. Pero ese 5% solo representa algo así como 6 millones de personas en números absolutos, lo que convierte a esa fracción minoritaria y altamente privilegiada del

* Investigación realizada en los marcos del Proyecto PNUD-UNESCO-CLACSO, RLA 86/001, Ciencias sociales, crisis y requerimientos de nuevos paradigmas en la relación Estado/Sociedad/Economía.

** Investigador del Centro de Estudios de Cultura Contemporánea, Universidad de São Paulo, Brasil.

mercado brasileño en algo mayor de lo que es el mercado de alta renta de cualquier país europeo.

En un país de esta magnitud, con esos problemas y en tan rápida transformación, se torna difícil considerar las políticas culturales sin hacer referencia a la expansión de los medios de comunicación de masas y, por lo menos idealmente, a la expansión del sistema de enseñanza formal. El sistema de políticas culturales, de comunicación y de enseñanza en el Brasil contemporáneo todavía conserva fuertes rasgos de las medidas adoptadas en la década del setenta, durante el régimen militar. En aquel período los esfuerzos se concentraban en dos frentes. El primero consistía en la búsqueda de dos requisitos "psicosociales" (para usar el lenguaje oficial de la época) para la constitución de una población ajustada a las condiciones políticas vigentes. Esto formó la base de una política educacional concentrada en programas de alfabetización de masa.

El segundo frente era la integración nacional en nombre de la seguridad nacional, que constituyó la base de una política de las comunicaciones. Los programas de alfabetización a escala nacional (MOBRAL) resultaron ser un fracaso y, junto con la desvalorización de la universidad como centro de investigación, sustituida en algunas áreas de interés militar más directo por instituciones creadas *ad hoc*, dejaron una herencia difícil de administrar en la siguiente etapa del proceso político nacional (porque introdujo también en el escenario la cuestión de la política científica y tecnológica). Con todo, el segundo frente tuvo mucho éxito desde el punto de vista de la constitución de un sistema electrónico de comunicaciones sofisticado y con cobertura nacional. En esa área se hicieron sentir los efectos de una política de muy acentuada concentración del control privado (bajo tutela estatal) hasta aproximarse, en algunos momentos, al monopolio de hecho en el área de la televisión, con el Estado entrando subsidiariamente a través del sector, políticamente rentable pero de poco peso real, de las emisoras "educativas".

La tendencia que se fue formando terminó constituyendo una gradual separación entre las políticas de cultura, de comunicación, de enseñanza y de ciencia y tecnología. A mediados de la década del ochenta cada uno de esos sectores ocupaba un ministerio diferente, en una especie de institucionalización de lo que se había hecho antes, aunque en un marco político diferente. Pero la aparente simplicidad de ese proceso oculta la formulación, en los años setenta, de concepciones oficiales de la cultura y de políticas culturales bastante complejas y con efectos de largo plazo. Esas concepciones serán examinadas en su secuencia, para después considerar la cuestión de la comunicación a través de su rama de mayor expansión en el período, que es la televisión (aunque la radio tenía enorme importancia política en el caso brasileño, todavía insuficientemente estudiada). Finalmente, se señalarán algunas perspectivas.¹

¹ En las secciones I y II se incorporan pasajes de textos publicados por mí en periódicos, en revistas culturales (*Revista do Patrimônio Histórico Brasileiro*) y en un volumen organizado por Sergio Miceli, sobre el Estado y la Cultura en Brasil.

I. Concepción oficial de la cultura y política cultural

La búsqueda de una concepción unitaria y unificada de cultura en el ámbito nacional y la formulación de políticas culturales compatibles ha sido una actividad típica de los regímenes dictatoriales o cuanto menos autoritarios, en el caso brasileño. El período dictatorial del llamado "Estado Nuevo" de Getulio Vargas (1937-1945) tuvo una política cultural bien definida, presente sobre todo en la actuación de los órganos ejecutivos de Estado, como el Departamento de Información y Propaganda, más que en los documentos programáticos. También durante el régimen militar posterior a 1964, que tuvo su auge entre 1969 y 1976, se movilizaron órganos de Estado o para-estatales a la búsqueda de una política cultural capaz de responder adecuadamente al proyecto de integración nacional y de construcción de una potencia en el Atlántico Sur, sustentado por las concepciones militares dominantes. Como todo lo que se relaciona con la cultura, eso no se hacía sin ambigüedades, y éstas se transparentan en los mismos documentos básicos.

En la primera mitad de la década del setenta se formularon dos propuestas abarcativas para el área cultural, bajo la iniciativa estatal: la primera, en 1973 y, de inmediato, la importante propuesta para una "política nacional de cultura" en 1975. En esa época, los agentes culturales de la sociedad, concentrados en la oposición, estaban mucho más atentos a la censura y a la represión impuestas por el régimen que a la búsqueda de propuestas sustantivas propias. Y, claro está, no tenían cómo intervenir en el debate acerca de esas propuestas, que se hacían a puertas cerradas. Pero los documentos resultantes son expresivos y merecen atención, incluso porque planteaban enfáticamente cuestiones que deben ser enfrentadas en cualquier propuesta de política cultural, comenzando por la idea de "cultura nacional".

En 1973 se formularon las "directrices para una política nacional de cultura", en un esfuerzo que implicaba la reivindicación implícita de un ministerio en esa área, algo imposible en aquel contexto, dado que podía conferir demasiada autonomía a un área que justamente se trataba de encuadrar en los planos económicos y políticos oficiales. "Cultura" y "nación" son las nociones centrales de ese documento. Se parte de una caracterización muy amplia de cultura, vista como la "sumatoria de las creaciones del hombre en prosecución de la obra de la propia creación", de la cual "todos participan todo el tiempo". Claro que la idea de la cultura como sumatoria de resultados implica otra, de acumulación de los resultados en el tiempo, que desempeña un papel importante en la argumentación. De la idea de participación indiferenciada en la formación y el desenvolvimiento de la cultura se extrae la exigencia de "justicia social", de que sus beneficios sean accesibles al ciudadano común y que esté adecuadamente educado para usufructuarlos, incluso porque "ya no se admiten los conceptos que sitúan a la cultura como producto de la creatividad de las élites y su patrimonio". O sea que la participación en la formación de cultura es vista como universal y no problemática, pero el acceso a los resultados se concie-

be como diferenciado y problemático. De allí la idea de la necesidad de una intervención educativa en el ámbito del "ciudadano común". Se incorpora entonces a la tradicional idea conservadora del carácter espontáneo y por lo tanto rebelde de cualquier intervención del proceso cultural, pero se busca al mismo tiempo refutar las concepciones elitistas del tema. Ya en este punto, como por lo demás en todo el documento, se transparenta un entrelazamiento contradictorio de temas y motivos.

El componente antielitista de ese punto de la argumentación deriva mucho más de la sospecha bastante plausible de que buena parte de las élites se identificaría con los segmentos sociales adversos al régimen que de cualesquiera otros impulsos democratizantes de la cultura. El énfasis en el carácter espontáneo del proceso cultural y en sus fuentes genéricamente populares, expresada en la preocupación por el ciudadano común, cumple allí la función de tornar prescindibles a las élites indeseables, pero abre camino a las objeciones liberales en lo que hace a la propia necesidad de una presencia estatal en el área cultural. A propósito de la reanudación del tema, la presentación de un Programa de Acción Cultural, el diario *O Estado de São Paulo* no perdió oportunidad para ironizar la propuesta de "devolver al pueblo lo que del pueblo nace", acotando además que el problema actual consistía más bien en el "derecho de nacer".

Sobre la base de ese impulso universalista, cuyos efectos diluyentes de los clivajes y las diferencias estructurales en la sociedad ya fueron exhaustivamente señalados por los comentaristas de textos semejantes, el documento define a la cultura brasileña como "aquella aquí creada o la resultante de la aculturación, compartida y difundida por la comunidad nacional. Comporta la expresión brasileña de vivencias brasileñas". Se lanzan así las bases para llegar al núcleo de la argumentación, cuando se revela que la real preocupación básica es por el segundo de esos temas, más que por el primero. Es que la cultura "contribuyó a formar e identificar la personalidad nacional: es además su expresión más alta y su defensa se impone tanto en el territorio cuanto en los cielos y los mares patrios". Pero la conservación del patrimonio acumulado no basta. Es necesario "promover su constante incremento", para "asegurar a la cultura brasileña una presencia influyente en el ámbito internacional y amplia capacidad de asimilación discriminativa de los contingentes recibidos de otras culturas". Por lo tanto, la cuestión básica acaba siendo la de la garantía de formación de una "personalidad nacional fuerte e influyente". Por eso, la "desaparición del acervo cultural representaría un indiscutible riesgo para la preservación de la personalidad brasileña y, por lo tanto, para la seguridad nacional". De esa forma "la intensificación de las actividades culturales está llamada a representar una de las acciones fundamentales" en aquello que realmente interesa, que es la "estrategia de desarrollo, que conmueve el alma brasileña y moviliza la potencialidad nacional". En consecuencia, la política cultural concebida en su interpenetración con las "políticas de seguridad y de desarrollo" significa "la presencia del Estado como elemento de apoyo y estímulo —que no se confundirá con coerción o tutela— en la integración del desarrollo cultural dentro del proceso global del desarrollo brasileño".

Defensa de la cultura, promoción de su acumulación, valorización internacional, intensificación de las actividades culturales, garantía de nacionalidad, integración del proceso cultural al desarrollo nacional global: no son pocas las exigencias que se van alineando para una política cultural de un Estado que, mientras tanto, se restringiría al "apoyo y estímulo de la cultura". Pero la definición final de la política cultural a la que el documento llega, sobre la base de todas estas consideraciones, prácticamente las ignora y deja la impresión de que estamos frente a dos documentos yuxtapuestos: uno, expresado en las consideraciones preliminares y destinado a los actores políticos decisivos del momento, y otro dedicado a la misma caracterización del tema, dado que la definición propuesta de política nacional de cultura la reduce al "conjunto de directrices del Gobierno Federal que buscan conservar el patrimonio cultural". Frente a todo esto se formularon tres objetivos básicos de la política propuesta: la preservación del patrimonio, el incentivo a la creatividad y la difusión de las creaciones y las manifestaciones culturales. Este último punto incluyó la "democratización de la cultura", entendida como "presentación al pueblo por los medios de comunicación de masa de sus manifestaciones en todos los sectores".

No sería difícil señalar incoherencias en este texto, pues saltan a la vista, como ocurrió hace poco, cuando el primero de los tres objetivos propuestos coincidía enteramente con la definición de política nacional de cultura, o cuando el Estado, que al comienzo tuvo una actuación restringida al "apoyo al estímulo" se vio, hacia el final del documento, comprometido a actuar "tanto en la ejecución directa de las medidas como en el incentivo, la coordinación y la fiscalización". Pero resulta claro que cuando en un documento de ese tipo las incoherencias se tornan evidentes a la primera lectura, es más apropiado suponer que apunta a dificultades reales en su elaboración.

Más que extraer fallas del texto, se trata de mostrar que sugiere fuertemente que las presiones y las tensiones en el interior del propio ministerio de Educación y Cultura y sus relaciones con otras instancias estatales tenían que ver en ese momento con el carácter simultáneamente imperativo e inaccesible de una propuesta coherente e integrada de política cultural en el plano propiamente político. Pero es necesario tomar en cuenta que el documento no se reduce a eso. Su última parte, referente a las medidas sugeridas para la "plena realización de proyectos específicos en favor de la cultura en Brasil" es clara y directa y merece atención, porque constituye el núcleo de todas las propuestas posteriores en el área. Se enumeran diez medidas básicas, relativas a la creación de servicios nacionales de música, artes plásticas, folklore; la creación de un "fondo nacional para el desarrollo de la cultura"; la creación de "casas de la cultura" en centros de influencia regional; la colaboración con las universidades; los cuidados de monumentos particulares derruidos y el financiamiento de proyectos de naturaleza cultural.

Confrontado con las "Directrices" de 1973, el documento sobre la "Política Nacional de Cultura" de 1975 exhibe algunas diferencias significativas. Los fundamentos doctrinarios son semejantes, pero el tono es más

matizado, sin el esfuerzo, tan visible en el texto anterior, por construir un lenguaje que fuese simultáneamente del agrado de los militares y de los tecnócratas del desarrollo. Por eso mismo su característica básica está plenamente a tono y puede ser explicitada, desde luego. Es que todo él está construido sobre la combinación de la concepción *esencialista* con una concepción *instrumental* de la cultura.

El argumento básico ya no invoca a las exigencias de seguridad y de fortalecimiento nacionales, sino el de que "el desarrollo brasileño no es sólo económico, sino sobre todo social y que dentro de ese desarrollo social hay un lugar destacado para la cultura". El argumento antielitista se torna más matizado y adquiere contornos más utilitarios. "Una pequeña élite intelectual, política y económica, puede conducir, durante algún tiempo, el proceso de desarrollo. Pero será imposible la permanencia prolongada de esa situación", incluso porque "la plenitud y la armonía del desarrollo sólo pueden alcanzarse con la elevación de la cualidad de los agentes del proceso que la integran". El interlocutor mayor en ese punto parece ser más el tecnócrata del desarrollo preocupado con el "capital humano" que el militar, y el documento todo está dirigido en una perspectiva "humanista" (de allí la visión esencialista de la cultura a la que aludía arriba) que permite hablar de "una verdadera política de cultura, esto es, de la plena realización del hombre brasileño como persona", y enfatizar que la "cultura no es tan sólo la acumulación de conocimientos o el incremento del saber, sino la plenitud de la vida humana en su medio". O, más sintéticamente: "se desea preservar la identidad y originalidad (de la cultura) fundadas en los genuinos valores histórico-sociales y espirituales, donde transcurre la fisonomía peculiar del hombre brasileño". Mientras tanto, del esencialismo a la concepción instrumental hay sólo un paso: "La supervivencia de una nación se enraíza en la continuidad cultural" y por lo tanto la cultura es el "medio indispensable para fortalecer y consolidar la nacionalidad". Conservación y desarrollo: entre esos dos polos oscila una argumentación que concibe uno de ellos por el sesgo esencialista y el otro por el sesgo instrumental.

El tema general de ese documento es muy representativo de una postura liberal-conservadora, con las exigencias contradictorias de la espontaneidad y de la intervención estatal, de la modernización y de la conservación del desarrollo y la protección contra sus consecuencias, de la difusión de productos listos y del énfasis en la participación creativa. "Una política de cultura debe tomar en consideración la ética del humanismo y el respeto a la espontaneidad de la creación popular. Se justifica así una política de cultura como el conjunto de las iniciativas gubernamentales coordinadas por la necesidad de activar la creatividad, reducida, distorsionada y amenazada por los mecanismos de control desencadenados a través de los medios de comunicación de masas y por la racionalización de la sociedad industrial". En respuesta a todo esto se proponen como tareas de política cultural la promoción y el incremento de la participación en el proceso cultural, el incentivo a la producción y a la generalización del consumo y el estímulo a las "confluencias cualitativas entre fuentes de producción", siempre considerando a la cultura "no en abstracto, sino en su caracterización brasileña".

Esta es concebida, análogamente a las Directrices de 1973, en términos de creación o aculturación en la "comunidad nacional". El dilema que el documento no logra contemplar, aunque es implícito a él, es el que sería después formulado por el *designer* y promotor cultural Aloisio Magalhães, que desempeñaría importantes papeles en el área a partir de esa época: el paternalismo o el dirigismo esterilizante.

Contrariamente al documento de 1973, los componentes programáticos propuestos en 1975 son más difusos, con lo que el documento gana en coherencia interna pero pierde eficacia. Todos los puntos hablan del apoyo a las diversas actividades culturales, dentro del espíritu manifiesto en otra parte del texto, centrado en los términos "respeto" (a las diversidades regionales, a la libertad de la creación) e "incentivo". En realidad, el texto está construido de modo tal, que la combinación entre las premisas y las exigencias de intervención que contempla lo lleva al borde de la paradoja de una protesta antiestatizante a ser efectuada por el órgano estatal.

El resultado es que se desemboca en una formulación de objetivos que es prácticamente autodestructiva, por contener un presupuesto inmovilizador. En efecto, se argumenta que la premisa para "*tudo o mais*" es un conocimiento esencial: "La primera acción debe ser de revelación de lo que constituye la esencia del hombre brasileño y el tenor de su vida. Antes que cualquier medida necesitamos verificar la propia esencia de nuestra cultura". Por lo tanto, la misma política cultural incluyó en su seno como condición previa insalvable un conocimiento "esencial" (aunque ya no se propone en términos irracionales, como inmediatamente accesible) del proceso en el cual supuestamente debe intervenir.

Tras este bloqueo esencialista para la efectivización de lo que se propone, no queda sino recaer en la versión más grosera del instrumentalismo ya presente en las directrices de 1973: "La desaparición del acervo cultural acumulado o el desinterés por la continua acumulación de cultura representan un indiscutible riesgo para la preservación de la personalidad brasileña y, por lo tanto, para la seguridad nacional" y ese verdadero injerito del texto de 1973, indicativo también de los embates en el interior del Consejo Federal de Cultura, se completa con otro, que reitera el tema del entrelazamiento entre las políticas de cultura, de seguridad y de desarrollo. El documento de 1975 es más elegante (aunque tampoco es difícil señalar en él pasajes sin nexos), más coherente y con tonalidades más "liberales" que el de 1973. Pero por eso mismo es más difuso y tiene un final autodestructivo en su parte programática, precisamente el fuerte del documento anterior.

Conviene no olvidar, con todo, que en el plano institucional, que escapa al presente análisis, un importante paso hacia adelante se dio en relación con el Programa de Acción Cultural con la creación de Funarte en 1975, presentada por el ministro Ney Braga en los mismos términos del documento sobre la política nacional de cultura: como el instrumento destinado a hacer frente a la obligación del Gobierno de "ayudar a dar condiciones para que el pueblo ejercite más su vocación artística en sus diferentes aspectos", ya que "no puede intervenir en el arte, que es la manifestación espontánea

del pueblo". También es importante el lanzamiento ese mismo año, fuera del ámbito del Ministerio de Educación y Cultura, del proyecto del Centro Nacional de Referencia Cultural, primer paso de una de las más importantes redefiniciones a ser desarrolladas al final de la década, la cuestión de la intervención en el proceso cultural. Se trata de una actuación desarrollada bajo la dirección de Aloisio Magalhaes en los años siguientes al Patrimonio Histórico y Artístico y la Fundación Pro-Memoria, que consistió en un repensar la "memoria nacional" más allá de las concepciones acumulativas estáticas antes vigentes también en los documentos oficiales. La nueva concepción intenta ser dinámica, abierta al proceso histórico de la sociedad brasileña. Decía su autor a la prensa en 1980: el "bien cultural" (concepto también redefinido en su orientación) en un país no "estratificado culturalmente", como Brasil, debe tener "un papel de llegar a ser, un papel proyectivo", alerta hacia la propia diversidad de cultura entendida como proceso.

Ese pasaje hacia una postura dinámica, atenta a las diferencias y las dificultades de elaboración de un sistema cerrado de política cultural, deriva en una postura muy diversa de la primera mitad de la década. La conciencia de ausencia de una política cultural integrada conduce a esfuerzos dirigidos a una mayor flexibilidad de intervención efectiva, y no a la búsqueda de un encuadramiento previo de toda acción (o de sus premisas insalvables, como en 1975). Esa postura más programática, que ciertamente no está desligada de esfuerzos en el sentido de un apoyo institucional más sólido, tiene que ver con el esfuerzo por la liberación de la cultura de la condición de instrumento de otras políticas sectoriales prioritarias, como la de la seguridad nacional en 1973. En cierto modo es una profundización de la concepción de 1975, de la cultura como dimensión nuclear de una política social, en la cual esta última es la que sufre una redefinición, con énfasis creciente en los segmentos de baja renta. En el plano institucional la contrapartida de ello es la progresiva autonomía que las decisiones en el área específicamente cultural gana en el Ministerio de Educación y Cultura a partir del final de la década.

Con esto se retoman desde otro ángulo ciertos temas persistentes en las formulaciones oficiales a lo largo de la década, especialmente del anti-elitismo, o de la personalidad o identidad del pueblo brasileño y el de la espontaneidad del proceso cultural. El núcleo temático es el mismo, pero los énfasis se oponen: de la difusión de los resultados por las agencias estatales (que previamente los seleccionan) se pasa a la preocupación por movilizar en los sectores sociales directamente involucrados en el proceso cultural, entendido en términos muy amplios, formas de conducción de la existencia cotidiana. Ya no se trata de educar al pueblo para recibir de vuelta lo que se hace, como se quería en 1973, sino de incentivar las demandas de base y tratar de responder a ellas más que intentar codificarlas en propuestas formales sistemáticas. Con eso se contornean los riesgos más inmediatos de imposición autoritaria, pero persiste el problema de escapar a la acción *ad hoc* subordinada a las expresiones puntuales del proceso cultural.

Este somero examen del modo en que se expresan en las instancias oficiales la naturaleza y los problemas de la cultura en Brasil, en ese período, revela ciertos temas y formulaciones básicas que persisten en la década siguiente, a despecho de los cambios políticos ocurridos. Un segundo examen evidencia redefiniciones de esos mismos términos que permiten reconstruir una trayectoria digna de mención.

La tendencia más general en las redefiniciones de la concepción oficial de la cultura en el período puede ser formulada desde luego en los siguientes términos: a mediados de la década del setenta se parte de una concepción de cultura como "sumatoria de las creaciones del hombre", vale decir, como herencia y patrimonio, para añadir que esa sumatoria se da en el proceso de creación del propio hombre, con lo que se introduce un componente "humanista" bastante abstracto, que constituirá uno de los temas básicos a ser reelaborados a lo largo del período. Ya a fines de la década del setenta el énfasis recaerá sobre la cultura como modo de ser, como vivencia de determinados segmentos de la sociedad. Más recientemente (ya en la vigencia del Ministerio de Cultura, a mediados de la década del ochenta) se pasa a verla en su papel de resistencia a la dominación hegemónica.

Finalmente, en la etapa más reciente (en las formulaciones del segundo Ministro de Cultura, Celso Furtado) se realiza su condición de fuente de creatividad. Se recorre así cuatro estadios fundamentales: el primero, marcado por una concepción humanista abstracta de la cultura, relativa a la creación del hombre en general y de su expresión en el contexto nacional brasileño; el segundo, marcado por una concepción existencial, relativa al modo de ser, a la vivencia de los segmentos específicos de la población; el tercero, en el que se enfatiza la dimensión política del proceso cultural en el ámbito de la diversidad de formas de vida social concibiéndola en su potencial de resistencia y conflicto, y el cuarto, que la concibe como potencial de creatividad simbólica de los diversos sectores de la población.

Esas concepciones generales, aunque abstractas cuando se expresan de manera tan sumaria, son inseparables de las propuestas más específicas relativas a los portadores efectivos del proceso cultural, incluso porque sólo adquieren sentido en la formulación de directrices prácticas por las instancias oficiales, vale decir, en políticas culturales. Y aquí se manifiesta una constante que se da en todas las concepciones: su ímpetu "antielitista" que conduce a una preocupación por la "democratización de la cultura", presente en todos los documentos importantes, independientemente de los contextos políticos de su formulación. La diferencia básica en este punto consiste en el sentido que se atribuyó a esa democratización. Si a mediados de la década del setenta se trataba de promover la integración nacional mediante la difusión de una producción cultural vista como unitaria entre una población que debería ser puesta en condiciones de recibirla mediante la educación, más adelante la preocupación mayor será la diversidad de las formas y experiencias culturales en una sociedad marcadamente estratificada y excluyente. Esto se observa nítidamente en las propuestas de la gestión Portella a fines de la década del setenta, cuando se enfatizaría la necesidad de invertir el camino hasta entonces recorrido, de oferta a partir del centro

hacia la periferia, y adquiere su expresión más acabada en el programa de trabajo de la gestión de Aluísio Pimenta en el recién creado Ministerio de Cultura, en el cual el estímulo a la diversidad cultural y el combate a la "degradación" de la cultura por la masificación y por las imposiciones del mercado son elementos destacables.

Por entonces la orden era la "descolonización" de la cultura, con la posibilidad que ello implica de formular políticas culturales pluralistas. Pero el énfasis de la democratización va más lejos, afectando a la misma definición de los portadores básicos del proceso cultural. Si a mediados de la década del setenta se retomaba el viejo tema conservador del respeto a la "espontaneidad de la creación popular", eso iba a ser redefinido a fines de la década en nombre de un compromiso con los segmentos más pobres de la sociedad. De allí la concepción de cultura como vinculada a las "formas de supervivencia" de esas poblaciones, como algo que se inscribe directamente en su experiencia de vida, en cuanto expresión de sus exigencias prioritarias y no como excedente en relación con ellas. En ese momento el antifetichismo conservador de antes se convertía en algo con marcadas tonalidades populistas, por el tránsito del énfasis en la idea de unidad nacional al énfasis en la idea de pueblo. En ese mismo sentido, en los años ochenta figura la formulación expresa del primer ocupante del Ministerio de Cultura, José Aparecido de Oliveira, al sustentar que los planes del nuevo Ministerio "van a emerger de los que crean, producen o consumen cultura, sin autoritarismos de ninguna índole. Es necesario decir que hemos llegado al momento de respetar y reconocer que el pueblo es el protagonista de la historia".

En lo que respecta al desdoblamiento de las concepciones de cultura en propuestas de políticas culturales, el elemento constante en todas las formulaciones a lo largo del período más reciente es la subordinación de la política cultural a la política social. Se asiste a una gradual "socialización" y a una "politicización" de la misma idea de cultura. Sería equivocado suponer que esas tendencias fuesen exclusivas de las manifestaciones oriundas de fuentes oficiales. Por el contrario, son vigorosamente reforzadas por las manifestaciones que se multiplican en diversas áreas de la sociedad, en el nuevo marco que se va creando, de interacción entre los órganos del Estado y los intereses civiles.

Uno de los documentos más significativos en ese contexto es el manifiesto que "trabajadores de entidades culturales y representantes de entidades y asociaciones civiles" elaboraron a comienzos de 1985, como propuesta para el recién creado Ministerio de Cultura, en el sentido de reivindicar de ese organismo el compromiso de "contribuir fundamentalmente a que el proceso de democratización del país se concrete en todos los niveles de su actuación".

El documento, que incluía entre sus signatarios al futuro Ministro de Cultura, Celso Furtado, reclamaba, en un pasaje, "que la cultura sea ampliamente concebida como un proceso emergente de los distintos modos de actuar y de pensar de la sociedad brasileña. Así, la política cultural no deberá restringir su atención tan sólo a determinadas expresiones de la cul-

tura, sino extender sus preocupaciones a aspectos fundamentales de ese proceso, como por ejemplo: salud, educación, acceso y uso del suelo, trabajo, vivienda, etc.". En este paso el proceso de socialización y politicización de la concepción de cultura llega a su ápice. La cultura ya no se entiende sólo como mera derivación de modos de actuar y de pensar que supuestamente la anteceden; la anterior subordinación de política cultural a política social se convierte en una verdadera simbiosis, o bien se da su plena inversión. Por rígidas que sean esas formulaciones, la idea implícita en ellas de que el proceso cultural no puede ser pensado aisladamente ni puede ser convertido en objeto puntual de gestión, es de la mayor importancia. Ella suscita la cuestión decisiva de la articulación entre la cultura y los demás procesos básicos en la sociedad tomados en la dimensión cultural que le es inherente. Se diseña aquí, bajo el signo de la democratización, una amplia concepción de cultura que, bien entendida, la retira del nicho en el que el pensamiento y la práctica conservadores insisten en confinarla, para que pueda ser considerada, en el conjunto de sus relaciones, en el seno de la sociedad. Por otro lado, es evidente el sesgo instrumental de la concepción de cultura y de política cultural, problema cuyo desdoblamiento práctico en este contexto es: ¿para qué un Ministerio de Cultura?

Una respuesta eminentemente política a esta cuestión y enteramente compatible con la posición que acabamos de ver, es dada en un documento semejante al anterior, pero ya de carácter paraoficial, como resultado de un Seminario organizado por el mismo Ministerio de Cultura en agosto de 1985, que reunió a representantes de diversos sectores de la sociedad. En él se reserva al Ministerio el papel de "lobby para la democratización general del país, buscando influir sobre otros ministerios, considerando que su papel por definición es el de generador y sustentador de la nueva perspectiva política inaugurada con la Nueva República".

La tendencia general de esas concepciones es clara: propuestas importantes desde el punto de vista político y social se hacen en nombre de la política cultural, pero la cultura misma se va desvaneciendo a lo largo de la argumentación, al oscilar entre concepciones tan amplias al punto de privarla de todo contenido, o tan restrictivas que la fijan como elemento subordinado a instancias sociales particulares.

La tendencia, en el sentido de una concepción de cultura que la vincula intrínsecamente a los procesos sociales y políticos, encuentra su expresión más sofisticada entre los intelectuales vinculados a la gestión cultural, en Celso Furtado, tanto en sus escritos anteriores a su conducción como Ministro de Cultura, cuanto en sus manifestaciones oficiales en ese Ministerio. En él resurge una preocupación que, en tono diferente, también está presente en las formulaciones oficiales de mediados de la década del setenta, en la cual se asocia la cuestión de la cultura con la cuestión del desarrollo. Se abre por esa vía el camino para pensar a la cultura como asociada no sólo a los procesos sociales y políticos, sino también a los procesos económicos.

La cuestión básica en ese campo, tal como él lo enuncia en su texto de

1984 sobre "desarrollo y cultura" (el orden de los términos es significativo), consiste en "indagar las relaciones que existen entre la cultura como sistema de valores y el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas, entre la lógica de los fines, que rige a la cultura, y la de los medios, razón instrumental inherente a la acumulación". La cultura, por lo tanto, es concebida en ese punto como sistema de valores regido por la lógica de los fines. Se trata de una formulación bastante clásica, pero el énfasis está en el carácter dinámico del sistema: su característica básica es la creatividad, y es en ello donde la cultura desempeña el papel decisivo.

La cuestión es entonces la de la articulación entre la inserción de los sujetos en un patrimonio simbólico y la rúputa inherente al acto creador propio del proceso cultural. De allí el énfasis de Furtado, ya ministro, por una política cultural basada en la apertura de espacios para la creatividad.

La preocupación práctica en cuestiones de política cultural induce a Furtado a formular una concepción más restringida de cultura, que contrasta con la anterior precisamente por incluir el carácter instrumental que la atención a la "lógica de los fines" antes le negaba. En esa concepción, la cultura se piensa como "el fruto de los esfuerzos que realizan los hombres para mejorar su calidad de vida", conforme la define "a los fines de este Ministerio", la exposición de los fundamentos del decreto que define la estructura que imprime al Ministerio de Cultura. Esa formulación tiene alguna afinidad con la elaborada en el Ministerio de Educación y Cultura (antes, por lo tanto, de que la cultura lograra un ministerio propio en 1984) a fines de la década del setenta, al explicitar la dimensión cultural involucrada en lo cotidiano de los hombres, de todos los hombres y no sólo de los que se identifican como productores culturales, pero se distingue claramente de ella porque enfatiza la dimensión práctica de ese proceso en lugar de la preocupación del ministro Eduardo Portella por su dimensión existencial, centrada en los modos de ser y en las formas de la experiencia.

Se trata de una concepción ingeniosa, porque permite dar prioridad, en un primer momento, a las actividades ligadas al trabajo en relación con el uso de un ocio desigualmente distribuido, pero es suficientemente amplia para alcanzar también a las formas más sofisticadas de la creación cultural, dada la elasticidad de la noción de "calidad de vida". En esas condiciones se abre el camino para asociar la cultura al desarrollo y para concebir las reivindicaciones democráticas desde la perspectiva del progreso y de la modernización capitalista. La expresión cabal de ello consiste en concebir a la cultura simultáneamente como fuente de creatividad simbólica y como área abierta a la inversión económica capitalista, con la consecuente eliminación de las figuras tradicionales del patronato público y el mecenazgo privado. Es de manera totalmente congruente con esa concepción que la exposición de los fundamentos del proyecto de ley sobre incentivos fiscales a la cultura (llamada ley Sarney) sustenta que ella "crea mecanismos que permiten el tratamiento de las inversiones en el área de la cultura como una cuestión de aplicación capitalista de recursos y no como mero mecenazgo".

Es en esos términos que se puede afirmar que la tendencia a la politización y a la socialización de la concepción de la cultura va siendo supera-

da por una fórmula que busca reaproximar la "lógica de los fines" cultural a la "lógica de los medios" de la racionalidad económica dirigida hacia la acumulación, y que la ley de incentivo a las inversiones privadas en el área cultural (ley Sarney) es un componente de una almenada síntesis de ambas. No falta quien ve en esa ley los riesgos del dirigismo y del elitismo (por la combinación entre las capacidades diferenciales de buscar y de concebir beneficios, así como hay quien señala, con aprobación, que de ese modo se creará finalmente en Brasil una "industria cultural", o quien defienda con vigor el potencial de apertura y diversificación cultural allí contenido. Con esa ley, afirma el secretario general del Ministerio de Cultura de la gestión Furtado, Fabio Magalhaes, "el presidente está transfiriendo a militares de personas la posibilidad de hacer también política cultural". En suma, la asimilación por la concepción oficial de cultura del tema de la modernización capitalista imprime al proceso cultural el sello del mercado y replantea la cuestión de concebir al conjunto de los productores culturales como clientela; sólo que ya no es pasiva, sino invitada a organizarse en moldes capitalistas modernos.

La palabra clave aquí es "moderno". Es ella la que da tono a la concepción oficial de cultura que se va formando en ese final de los años ochenta, por su eficacia real mayor que el tema alternativo de la democratización; incluso porque tiene el respaldo de un instrumento legal poderoso, que es la ley Sarney —una forma moderna de socializar los costos crecientes de los eventos culturales", según Celso Furtado—, con lo que puede ser presentada como fundamento de creación de condiciones para una democratización efectiva del proceso cultural.

Eso, por cierto, no se hace sin ambigüedades, incluso en las formulaciones más explícitas. Cuando el Presidente Sarney retoma el viejo tema de la defensa de los valores espirituales contra la pleamar de los valores materiales para introducir el tema de la constitución de la "sociedad industrial" en Brasil, lo hace suscitando la cuestión del carácter ambiguo de la modernización cultural brasileña. "Las sociedades industriales generan valores materiales" afirmaba en 1985, para agregar que "los valores espirituales son destruidos y no se crean otros". A mediados de 1986, al enviar al Congreso el proyecto de ley de incentivo a la cultura que lleva su nombre, retomó el tema: "El proyecto se destina a ubicar a la cultura dentro de la sociedad industrial que estamos construyendo, pues muchas sociedades industriales matan su cultura y no desarrollan nuevos valores, quedando muchas veces vulnerables a una colonización cultural".

En ese orden de reflexiones se introduce el tema de la entrada de Brasil en la lista de las "sociedades industriales" (vale decir, del capitalismo avanzado) invirtiendo el entendimiento habitual de la cuestión. Rara vez se señala a las sociedades del capitalismo avanzado como destituidas de cultura, y más raro aun es verlas como colonizadas y no como colonizadoras culturales. Esa mezcla de apología de la modernidad con temas conservadores expresa perfectamente los dilemas que atraviesan las concepciones oficiales de la cultura en Brasil a lo largo del período más reciente.

II. Cultura y comunicación: el caso de la TV

Se dio el momento de la música popular, se dio el momento del cine. En los años ochenta y, probablemente, en los años noventa la producción cultural brasileña es internacionalmente competitiva sobre todo en el área de la televisión. Con una diferencia: en el caso de la televisión la producción cultural competitiva en el exterior es también internamente dominante. Pero no lo es aisladamente, sino integrada al gran sistema del que la televisión es cada vez más el núcleo dinámico de Brasil, la industria cultural. Por eso mismo es imposible hablar de cultura y de políticas culturales en el Brasil contemporáneo sin hablar de industria cultural. A lo largo de las últimas décadas se fue consolidando un sistema de medios de comunicación que, en su sector dominante, ya alcanzó un nivel de diferenciación y de integración excepcionalmente alto. En el centro de ese proceso está la expansión de la televisión, que por lo tanto brinda los elementos para la caracterización de las tendencias más generales.

En cuatro décadas la televisión brasileña recorrió todo el camino entre la improvisación y los lances de audacia propios de un capitalismo aventurero, y su consolidación como componente importante de un capitalismo organizado y con fuerte matiz monopolístico. En muchos aspectos su trayectoria fue ejemplar, al expresar de manera más enfática la dinámica del desarrollo brasileño reciente y al constituirse en uno de sus sectores de punta. No se trata, con todo, de una trayectoria lineal. A lo largo de toda la trayectoria, desde su implantación en el país tiende a haber un desfase entre las orientaciones que la TV asumió y las grandes tendencias de la sociedad brasileña en ese período.

Fue "elitista", dirigida hacia unos pocos propietarios de aparatos receptores, en la década del cincuenta, cuando la vida política brasileña estaba marcada por la presencia de masas en diverso grado de movilización y la actividad económica se expandía bajo el signo del desarrollismo. Fue "populachera" durante buena parte de la década del sesenta, al tiempo que la fase populista de la historia política brasileña ya formaba parte del pasado. En ese período ella lanzaba las bases hacia su operación en gran escala y hacia su articulación con los demás medios de difusión, para formar un sistema empresarialmente integrado, cuyo ejemplo más acabado sería la Rede Globo. Su empeño se dirigía en el sentido de convertir a amplios segmentos de la población, antes disponibles para una movilización política, en consumidores; sobre todo, en consumidores de su propia programación y, de ese modo, de aquello que se vehiculizaba a través de la propaganda comercial e institucional.

Después, en la década del setenta, pasaría por su período de mayor expansión (el crecimiento del sector de productos electrónicos fue prácticamente el doble del crecimiento de la economía como un todo a comienzos de la década) y desarrolló relaciones cada vez más fluidas con los centros de poder político y económico, marcando una fase de creciente convergencia entre las líneas de desarrollo de la TV y las de la sociedad como un todo. Y, en la década del ochenta, entra en su fase de diversificación del

mercado, de consolidación de su papel dominante en el sistema de la industria cultural (ella sola absorbe cerca de 60% de las tandas publicitarias y llega a tres cuartos de la población).

Por lo tanto, se trata de una trayectoria larga y compleja. Consta que, a fines de la década del cuarenta, cuando el gran pionero del sector, Assis Chateaubriand se preparaba para promover la instalación de la primera emisora de TV en el país, el parecer técnico que le fue presentado por sus asesores era totalmente desfavorable, dado que no habría en Brasil condiciones para absorber esa innovación de manera rentable. Con todo, había una imagen de pionero en juego y, sobre todo, una visión muy aguda que el ya propietario de diarios y emisoras de radio, Assis Chateaubriand, tenía de la conveniencia de cerrar las redes de su imperio de comunicaciones, cuando no por imperativo económico-administrativo directo, por lo menos en nombre del acceso a un instrumento de actuación en el área del prestigio y del poder político.

Es posible que la estricta racionalidad empresarial no recomendase la instalación de TV en Brasil en el momento en que se dio, pero es necesario destacar que por la iniciativa de Chateaubriand ya empezaba su carrera en Brasil en el lugar que le compete, o sea, ligada a otros vehículos en el interior de un complejo empresarial en el área de las comunicaciones, aunque su articulación con los demás medios todavía fuese débil. Por otro lado, el carácter en cierto modo improvisado de su implantación en Brasil tiene mucho que ver con la circunstancia de que ella se implantó conforme a patrones ya en vías de superación en los países donde primero se desarrollara.

En esas condiciones, su carácter de desdoblamiento de la radio aparece con especial nitidez, ayudando a fijar el papel fundamental que en ella siempre tendría el componente auditivo. Este persiste incluso luego de la superación de la fase heroica de la TV, incluso porque es un rasgo común con toda la televisión estrictamente comercial: al final es por esa vía que el consumidor —que no es simple espectador o por lo menos es un espectador muy propenso a la distracción— puede ser cercado y atrapado siempre que se aparta demasiado del aparato receptor. Ese rasgo parece ser compartido por la TV brasileña y la norteamericana, que se organizan de modo muy semejante: predominio de empresas privadas que operan con concesión estatal (Ragmond Williams llegó a sugerir la designación de "radio visual" para los noticieros de la TV norteamericana, en contraste con los británicos).

Es posible que ese componente haya sido uno de los responsables de la rápida asimilación de la TV por participantes de culturas llamadas "tradicionales", con su énfasis en la moralidad. Eso permite recordar, por lo demás, que los elementos generales, universales en la TV tienen que ver con la organización de su producción y con la naturaleza formal de sus productos, pero no necesariamente con los patrones de consumo, que son variables. En este sentido, los datos sobre tiempo de exposición diario a la televisión son interesantes pero incompletos, debido a la variación de los mismos patrones de exposición.

Mientras tanto, la TV solamente hace valer su peso específico cuando se articula sistemáticamente con los demás medios de comunicación, en el interior de complejos empresariales integrados. En Brasil eso sólo empezaría a correr en la década del sesenta, cuyo final asistió al gran impulso de expansión de la TV como área de actividad económica, por lo menos a partir de 1967 —que se señala como el año de decolaje de la red Globo—. Las condiciones eran especialmente propicias para ello. Los años cincuenta habían contribuido, con la profundización de los procesos de industrialización y de urbanización, vinculados con las migraciones internas, al desarraigo y a la privación cultural de segmentos considerables de la población y a la privatización de las condiciones de vida en el medio urbano.

A ello se sumó la represión de la actividad pública a partir de la segunda mitad de la década del sesenta, por la cual la privatización de la vida cotidiana como consecuencia de procesos económicos era reforzada por la acción de procesos políticos. La TV tuvo, entonces, todo el incentivo para expandirse en ese período y más aun a comienzos de la década del setenta, porque a ella le cabría el papel de ofrecer un sucedáneo de vida pública de contacto con el mundo exterior en el contexto de un confinamiento de los ciudadanos al ámbito de la vida privada. La gran fase de expansión de la TV, cuando realmente consolidó su posición nuclear en el sistema de la industria cultural brasileña en la década del setenta, fue también en ese período en el que mejor podría hablarse de un proceso de "masificación" en la sociedad brasileña. El desencadenamiento y el mantenimiento de ese proceso no pueden atribuirse a la TV, claro está, pero sin duda ella reunía las mejores condiciones para implementarlo.

En efecto, los años setenta fueron la década de la televisión. En medio del ahogo general en el campo de la cultura, la TV estuvo en condiciones de consolidar su posición nuclear y dominante en el interior del complejo empresarial de la industria cultural. Resta saber si eso tiene su contrapartida en el campo propiamente cultural. En líneas generales, el fortalecimiento de la presencia económica y social de la TV en ese período es incuestionable. Es cierto que su trayectoria refleja más las características de la política económica que las de una política cultural, por lo demás siempre mal definida en el período: alto grado de concentración de la propiedad y del control; importación en gran escala de *know-how* y de productos acabados; expansión estimulada por la presencia en Brasil de multinacionales productoras de equipamientos para la retransmisión y la recepción y la orientación hacia la integración de la sociedad brasileña a partir de sus centros urbanos más desarrollados.

Todo eso tiene como telón de fondo el mismo régimen político, dirigido al desmantelamiento sistemático de todas las formas autónomas de organización cultural, social y política, lo que permitió a la TV representar efectivamente, en ese período, el papel de medio de comunicación "de masas" orientado a la difusión en gran escala de mensajes hacia un gran agregado de consumidores que podía ser tratado como si fuese indiferenciado.

Más que sus eventuales potencialidades culturales la TV demostró, en

esta década, el alto grado de compatibilidad que su funcionamiento puede tener con un régimen político represivo y un sistema económico marcado por el oligopolio (en TV, casi el monopolio integral) y por el incremento de la concentración de la renta.

Es necesario no perder de vista que, más que cualquier otra rama de la industria cultural, la TV está orientada a venderse a sí misma como vehículo. Eso implica ampliar al máximo su propia imagen empresarial, lo que, de una u otra forma, la lleva a enfatizar su importancia cultural. Claro que desde el punto de vista de la condición que realmente le interesa acentuar, que es la de vehículo de propaganda, la TV ya ocupaba un lugar dominante. Cerca del 40% de las tandas de propaganda eran para ella; incluyéndose la radio y la industria de las grabaciones, que cada vez se articularon más con ella, los vehículos electrónicos absorbían más del 60% del total de la publicidad del país. La cuestión es saber si eso también significaba una dominación en el campo cultural propiamente dicho.

En rigor, sólo hemos oído hablar de una dominación en el campo cultural cuando la entidad dominante tiene iniciativa en ese campo, cuando es capaz de anticiparse y movilizar el proceso cultural en su conjunto. Y es precisamente eso lo que la TV no hizo en esa década, ni parece ser capaz de hacerlo aun hoy.

Sin duda, la TV trata de vender una imagen de agente dinámico del proceso cultural, pero en lo esencial sigue siendo una caja de resonancia de procesos y tendencias de cada momento, al adherir a ellos, al reforzarlos en cuanto puede o le conviene y al acompañar sus cambios. Su dinámica es adaptativa. Su aparente carácter innovador y transformador de formas de vida deriva, en realidad, de la rapidez con que sabe, y necesita, adaptarse a las situaciones. Ella no desencadena nada, sólo acompaña, pero rápidamente.

Es claro que su gran penetración no puede ser despreciada, pero lo esencial es que esa capacidad suya sólo se acciona cuando las tendencias culturales y sociales ya cristalizaron en los segmentos sociales a los que le interesa llegar (claro que en eso reside una fuente de desfases importantes en relación con el conjunto de la sociedad, cuando ésta tiene dinanismos muy diferenciados). Un ejemplo evidente de ello es el trato dado a la mujer de clase media urbana (léase: la consumidora autónoma) en la prensa, desde la década del sesenta y por la TV a partir de fines de la década del setenta.

La pregunta decisiva en esta área fue hecha al comienzo de la década del setenta por un profesional de la televisión: al final, en ella, ¿quién ve a quién? Porque todo el truco consiste en eso: la televisión no se limita a ofrecer estímulo visual y auditivo a sus consumidores sino que, a su manera (por la investigación de mercado, por ejemplo) los ve y escucha de manera decisiva. La televisión constituye un complejo de poder de base empresarial y es por esa vía que su audiencia es vista básicamente como un conjunto de consumidores.

Hasta aquí estamos en un terreno importante pero relativamente trivial, e insuficiente para diferenciar a la televisión de otras ramas de la industria cultural. La cuestión se torna más interesante si recordamos una segunda

característica de la televisión, que tiene que ver con la interacción de su base tecnológica con su organización de poder. Es que, como diversos analistas ya pusieron de realce, la televisión es, en gran medida, un subproducto del desarrollo de la tecnología bélica. Eso tiene consecuencias que van más allá de las circunstancias de que la producción de equipamientos de integración empresarial en esa área pasan por el lado más duro de los intereses ligados al complejo industrial-militar, incluso en escala internacional. Y en vista de eso, la misma organización y el funcionamiento de la televisión posee el sello de sus afinidades de base con cuestiones que desembocan en la temática de la "seguridad nacional". No será casual que el sistema brasileño de telecomunicaciones, y con él la televisión, se expandieron como sectores de punta en el área tecnológica, así como en el área de servicios durante la década del setenta.

En este punto entra en juego la doble faz del control en el ámbito de la televisión: el control estatal sobre ella y el control de ella sobre su audiencia. En realidad, más que servir a su audiencia la televisión le marca el paso, a veces en los pormenores de su acción. Claro que ello siempre marcado por la ambigüedad. Incluso en los peores momentos de su articulación con un régimen autoritario la televisión también da sus guiños cómplices a su audiencia y, por el propio peso que tiene, abre con ello rumbos suficientes para tornar inviable una dominación monolítica.

Esas ambigüedades se hacen más nítidas en el modo en que se articula la relación básica de la TV con el Estado y su relación con sus consumidores. Se trata del carácter de concesión o incluso de donación que el acceso a sus programas asume a los ojos de una parte importante de sus consumidores. Ello se asocia, en casos como el brasileño y también el norteamericano, con una segunda y decisiva concesión, representada por la misma licencia de explotación del canal transmisor, concedida por el Estado. Y en esa doble concesión —de uso del canal por la emisora y del uso de sus programas por los consumidores— es donde reside el núcleo de gran parte de las características de la TV, particularmente en lo que respecta a las relaciones que se establecen entre las empresas de TV, sus consumidores y el Estado.

La concesión efectiva, legal, que es del Estado a la emisora, no aparece en primer plano y es sustituida por la ficticia de emisora a consumidor. Esta, a su vez, se vincula con un intermediario fundamental, que es el patrocinador, o sea, la empresa o institución que compra el tiempo de emisión y posibilita la "donación" del programa al espectador. De ese modo, queda representada una red de relaciones en la que la empresa emisora de TV, las empresas patrocinantes de programas y las instituciones estatales acaban formando un bloque del que el espectador/consumidor es la parte dependiente. Es sobre él que inciden los supuestos favores y los reales controles de todos los demás componentes de ese conjunto. En cuanto a estos, las relaciones son más de dependencia mutua y, en la medida en que la TV como componente de un complejo empresarial participa de grupos de intereses con capacidad de presión, tiene cierto grado, evidentemente variable según la coyuntura, de autonomía respecto del Estado.

La TV no es destinataria pasiva de una concesión de funcionamiento y de control estatales, sino que constituye en sí misma, una estructura de poder. Y, aunque el control directo sobre ella aumenta en los períodos de concentración del poder del Estado, su propio poder sobre su clientela también aumenta en dichos períodos, sobre todo porque sus consumidores finales —la audiencia— no tienen cómo organizarse en torno de sus intereses específicos. No es casual que el impulso más fuerte para la expansión de la TV en Brasil tuviera lugar en los últimos años de la década del sesenta y a comienzos de la del setenta y que después sólo restara consolidar la posición central que ella conquistara en el complejo empresarial de la industria cultural.

A ello se suma que las relaciones básicas de la televisión, en cuanto conjunto empresarial, se dan con otras instituciones y no con los consumidores finales de su programación. En última instancia, la clientela de esa programación no es la audiencia sino sus patrocinadores. A ellos debe responderles por lo que se hace, así como a los organismos estatales. El peso relativo dado a unos y a otros varía coyunturalmente.

Estas consideraciones permiten enfocar la cuestión del carácter de la TV brasileña con el objetivo de identificar sus posibles tendencias. ¿Es un instrumento de una "desnacionalización" de la cultura? ¿Es "masificadora", diluyendo las diferencias culturales y sociales? ¿Es "alienante" en relación con la realidad?

La primera de esas preguntas es un buen punto de partida para el examen de la cuestión más amplia. Ella parte de la idea de que, por la importación de enlatados —en 1974 el ministro de Comunicaciones informaba que, de cada 109 horas semanales de programación, 78 eran emitidas con material importado—, la televisión comercial estaría comprometiendo la autenticidad de la cultura brasileña. En general, esto es acompañado por una propuesta, más o menos explícita, de aumento del control estatal sobre las emisiones o incluso de plena estatización. Dejando de lado la cuestión de la especificidad histórica de la producción cultural en Brasil, todavía queda mucho que discutir sobre el tema.

En primer lugar, todo indica que, dado el carácter que asume la TV en todo el mundo, una creciente internacionalización del mercado de programaciones es la tendencia más probable. En esas condiciones, no se trata tanto de pensar los grupos empresarios brasileños en el área de la TV simplemente como importadores y productores locales, sino también como exportadores de sus propios enlatados. O sea, el incentivo al aumento de la producción local se vincula cada vez más con la disputa por los mercados externos; incluso porque la TV brasileña ya sobrepasó amplia e irreversiblemente el nivel de mera retransmisora de material importado, al punto de haber invertido íntegramente en 1984 la situación señalada por el ministro en 1974, si tomamos como referencia la gran red nacional que es Globo, la cuarta red de comunicaciones en el mundo en 1982: 70% de su programación es endógena. Además de ello, se amplía la exportación, que a mediados de la década del ochenta llegaba a 100 países, convirtiendo a la TV brasileña en el sexto mayor exportador de programas.

Todo esto tiene sin duda importancia, pero es secundario en este momento, dado que no se trata de argumentar que Brasil importará valores culturales ajenos a cambio de exportar los suyos. Lo fundamental es que toda la argumentación en torno del carácter nacional o no de los valores culturales vehiculizados por la TV se concentra en aquello que es menos relevante, es decir, los contenidos transmitidos. Pero lo que caracteriza a la TV no son los contenidos (que ella comparte con los otros medios) sino el modo específico en que ellos son procesados y difundidos. Toda discusión sobre "dependencia cultural" en la era de la comunicación electrónica, debe partir de ese dato. El punto realmente decisivo es que la implantación de la TV en sociedades como la brasileña implica la importación de patrones de producción y de difusión de *cualesquiera contenidos*, junto con el equipamiento y el *know-how* correspondientes. La importación de productos acabados sólo refuerza los efectos ya involucrados en la incorporación local de las propias técnicas y formas de organización; la cuestión de la dependencia, no es la de los productos, sino la de los esquemas de producción.

Es por eso que el cambio de contenidos no es decisivo. Tomado *en sí* ella solamente conduce a la producción de "similares nacionales", capaces de penetrar en el mercado dejado libre por el retiro de tal o cual enlatado.

En esas circunstancias, ¿cuál es entonces el papel desempeñado por la televisión en la sociedad brasileña? No faltan respuestas listas, pero por lo general sólo satisfacen a quien las formula o a quien ya las espera. Resulta claro que la cuestión consiste en enfrentar el problema decisivo de la especificidad de la inserción de la TV en el proceso capitalista en Brasil. Y aquí nos enfrentamos con un enigma aún no descifrado. Es tarea muy difícil discernir lo que es propio de la TV en el proceso capitalista brasileño y aquello que refleja sus características más generales o lo que es simple expresión de procesos sobre los cuales no tiene una apreciable influencia.

Es perfectamente válido tomar como punto de referencia la idea de que, en una sociedad dada, la TV toma sistemáticamente visibles ciertos aspectos, en tanto oculta sistemáticamente muchos otros. La cuestión sería entonces descubrir cómo opera esa dinámica de exhibición/ocultación en el caso brasileño y con qué consecuencias. Nadie niega, por lo demás, que el capitalismo se desarrolla en Brasil conforme a un patrón altamente concentrador y excluyente en todas las dimensiones, incluyendo la producción cultural. La TV ¿tiene entonces entre nosotros un carácter autoritario? Claro, pero no más que la sociedad brasileña como un todo, y probablemente mucho menos. Como componente de punta de un proceso de "modernización" (o sea, de promoción de condiciones para la expansión del capitalismo) la TV acaba revelando la importancia específica que asume su organización peculiar en Brasil, donde un complejo empresarial altamente organizado y eficiente ocupa hasta el momento una posición dominante y casi monopólica en el mercado.

Bien o mal, la expansión de la TV en Brasil expresa más al capitalismo que rompe barreras locales y nacionales en su expansión que al arbitrio y la violencia locales o nacionales. Claro que ambos no son independientes y pueden incluso coincidir, pero en el ámbito de la TV hay un desfase entre

ellos que, a su vez, se traduce en un desfase entre la violencia abierta de las modalidades dominantes de la acumulación capitalista en Brasil y la relativamente refinada condición de representante del capitalismo monopólico más avanzado asumido por la TV. No se puede dejar de considerar la hipótesis de que la fragmentación del sistema de TV en múltiples canales locales podría haber tenido efectos más oscurantistas que cualquier otro a lo largo del tramo decisivo de estas últimas décadas.

Por otro lado, el elevado grado de autoritarismo que permea históricamente a la sociedad brasileña imprime su sello sobre aquello que en sociedades en las que el principio ideológico/burgués/capitalista básico de la ciudadanía está arraigado puede tratarse como mera hipótesis, como ocurre con la tendencia a responsabilizar al consumidor (el "gusto popular") por la calidad de los productos ofrecidos. En otros lugares eso es una disculpa clínica, en Brasil es congruente con la tendencia general de los poderosos en el sentido de atribuir al ciudadano común la culpa de no poder hacer aquello que por otra parte le es negado, como optar libre y organizadamente, intervenir eficazmente en los asuntos de su interés y así sucesivamente. Poco aporta entonces aquí la desmistificación crítica referida a la TV: por detrás de la frase falsa no está la sonrisa clínica de este o aquel "manipulador de opinión", sino el semblante de una violencia más honda.

Queda claro que, como lo demás, la TV necesita ser democratizada y que eso no sólo implica cambios en su organización interna (que no se confunden con la simple multiplicación de canales, sino que implican un mínimo de corrección, con la participación de los interesados directos, de la enorme capacidad ociosa con la que opera en términos de personal sumamente competente en todos sus niveles), como también la creación de condiciones más amplias, por las cuales la TV sea llevada a competir con otras modalidades de la información y de uso del ocio y no solamente entre sí y conforme a sus propias reglas del juego.

Un aspecto aparentemente trivial pero decisivo para entender el real papel de la TV en Brasil consiste en que, especialmente en las condiciones brasileñas, la TV no puede encararse como si fuera ante todo un medio de difusión de necesidades, no importa si reales o ficticias, especialmente ligadas al consumo. Es que ella misma es percibida y tratada como una necesidad por la gran masa de sus consumidores. Eso le confiere un grado de autonomía en relación con otras necesidades, incluyendo las que ella vehiculiza, que necesita ser mejor evaluada para saber lo que realmente representa en todos los planos, por comenzar por el de la propaganda comercial e institucional. Toda la cuestión de sus efectos y de su eficacia debe tener en cuenta este dato.

Aunque sea posible señalar, a pesar de todo, un potencial democrático en la TV, no hay evidentemente alguna afinidad intrínseca entre ella y formas democráticas de vida —aunque sea tal vez un poco precipitado sustentar que ella es intrínsecamente autoritaria. Hay una tendencia fundamental, con todo, que plantea problemas serios en esa área. Ya es tradicional criticar a la TV como instrumento de "masificación", que disolvería las diferencias culturales. Todo indica, entre tanto, que el desarrollo domi-

nante se da en el sentido opuesto, o deberá acentuarse en el futuro próximo.

O sea que, sobre la base de la estratificación del mercado hacia el cual la TV orienta su programación, ella tiende a operar cada vez más en términos diferenciados, considerando los sectores específicos de consumidores. La misma evolución de la tecnología de las comunicaciones puede contribuir a ello. Esa tendencia debe ser universal, pero tiene especial importancia en sociedades como la brasileña, en la cual el fundamento ideológico de cualquier homogeneización cultural —la idea de igualdad y autonomía de los ciudadanos, por lo menos en el mercado— siempre fue tapado por la presencia histórica de un fuerte matiz autoritario, sedimentando diferencias sociales que la TV más legítima que oculta.

Es posible que la TV acabe deteniéndose a medio camino en el movimiento que la llevaría a promover, a su modo, la integración de una "cultura nacional" brasileña por sobre las diferencias sociales y regionales y que respete, vale decir, explore y consolide esas diferencias.

III. Rumbos de las políticas culturales

Mientras el núcleo duro de la industria cultural iba creando las condiciones para realizar el sueño militar-tecnocrático del cambio nacional por las redes transmisoras y retransmisoras de radio y televisión (a mediados de la década del ochenta el número de aparatos receptores de TV superaba los 20 millones, mayormente en la región Centro-Sur pero esparcidos prácticamente por todo el territorio y el país, se preparaba para lanzar su primer satélite de comunicaciones) el cine, la literatura, las artes plásticas y la música buscaban asegurar políticas diferenciadas.

El rasgo más importante del período reciente es que las políticas culturales y las políticas de comunicación son concebidas y ejecutadas en marcos institucionales diferentes y tienden a marchar paralelas, como si en la práctica las dos áreas no se entrelazaran constantemente.

Es significativo que las primeras propuestas consistentes para una "política nacional de cultura" en los años setenta tuviesen lugar luego de que el área de la comunicación ya tuviera su propio Ministerio. Significativo es también que el Ministerio de Comunicaciones haya sido creado bajo la inspiración de las concepciones militares sobre la necesidad de asegurar la "integración nacional", entendida como unificación de voluntades, aspiraciones y modos de pensar en el territorio nacional, al tiempo que el Ministerio de Cultura fue el resultado, ya en los años ochenta, de consideraciones más prosaicamente políticas, relativas a los esfuerzos de Tancredo Neves de acomodar alianzas y tendencias en su Ministerio.

En esas circunstancias, las relaciones entre el Estado y las distintas formas de producción y difusión cultural son también bastante diferenciadas. En el área de la comunicación el entrelazamiento de los organismos estatales con las empresas, especialmente en el área de la radiodifusión, es más estrecho, incluso cuando en el auge del régimen militar las tensiones existieran y se tradujeran en una mayor rigidez de los controles sobre los

vehículos, especialmente en el área informativa: noticieros radio-televisivos y prensa. En las áreas de la producción cultural artística, antes reservadas al Ministerio de Educación y Cultura, y posteriormente al Ministerio de Cultura, las relaciones siguen caminos más diferenciados.

El primer motivo de ello es evidente: en el sector de las comunicaciones opera una política centrada en la figura de la concesión de derechos de transmisión a empresas privadas, asociada a la participación directa de los organismos estatales o mantenidos por el Estado, como las radios y televisoras educativas y las imprentas oficiales, al tiempo que en las áreas oficialmente definidas como culturales, las políticas se articulan conforme a tres ramas de control más indirecto: la preservación del patrimonio (refente a sitios, edificios y monumentos) y apoyo a la producción (básicamente bajo la forma de financiamientos directos y de premios canalizados a través de organismos específicos como Embrafilme en el área del cine) y las actividades de animación cultural (en general más descentralizadas, en Estados y municipios).

La segunda fuente de esa diferenciación resulta de un hecho de importancia decisiva en ese proceso. Se trata de la formulación, de los responsables de los documentos sobre la "política nacional de cultura" de la década del setenta, de la distinción entre "cultura brasileña" y "cultura de masas", en nombre de la defensa de la autenticidad de la producción cultural brasileña, a la que se considera amenazada por los efectos "masificadores" de los vehículos de comunicación.

En consecuencia, de allí quedó oficialmente consagrada una distinción entre política cultural en el sentido estricto y política de comunicaciones. Esa distinción fue cuidadosamente preservada por los sectores que comandaban, y aún comandan, las políticas de comunicaciones: militares y sectores conservadores del *establishment* político, que tradicionalmente tienen encargado hacer oscilar esa área entre el control represivo y la actuación clientelística.

Para ilustrar este último punto basta con recordar que buena parte de la expansión de la radiodifusión en el país durante los últimos años se debe a la distribución de concesiones para operar emisoras de radio locales o retransmisoras de televisión a clientelas del gobierno federal.

En ambos casos, con todo, la presencia del Estado ha sido decisiva hasta el período más reciente, cuando los cambios introducidos en las políticas culturales del Ministerio de Cultura por la ley de incentivos fiscales al financiamiento de la producción artística (la llamada ley Sarney) empezaron a hacerse sentir. La característica básica de la presencia de los organismos estatales es clara. Se trata de convertir a los productores culturales en clientelas, conforme diversos mecanismos, que pasan por la concesión en el área de la radiodifusión, por los procesos de selección de pedidos de financiamiento en las áreas del cine y del teatro, o por el dirigismo directo mediante la explicitación de temas preferenciales para financiamiento, como ya ocurrió en el área del cine. Aparte de esa similitud, las políticas culturales y de comunicación se distinguen por dos aspectos: el de su modernidad relativa y por el tipo de organización y de acción política que suscitan.

En cuanto al primer aspecto hay una aparente paradoja en el hecho de que el área de comunicaciones, que está organizada de manera más moderna y eficaz y es inmensamente más poderosa que el área de producción artística, es justamente aquélla sometida a políticas menos modernas o bien retrógradas, al tiempo que las políticas del Ministerio de Cultura en los años recientes se dirigen más bien a la creación de oportunidades de acción autónoma para los productores culturales, en nombre de la defensa de la creatividad (término que, en la gestión de Celso Furtado, sustituyó significativamente al de "autenticidad").

En la adquisición de un mayor margen de acción por parte de los productores culturales pesa bastante la oportunidad, propiciada por la "ley Sarney", de búsqueda de apoyo financiero fuera del ámbito estatal, apelando al apoyo empresarial. Se trata de una ventaja cargada de ambigüedades pero, en las condiciones brasileñas, llegar al nivel de un capitalismo razonablemente moderno en esa área no es poca cosa. Claro que la aparente paradoja a la que aludimos arriba desaparece si consideramos que es precisamente por ser poderosa que el área de las comunicaciones ha sido sometida a políticas clientelísticas y fuertemente conservadoras. Y, más de una vez, es en el uso del mecanismo de concesión que eso se hace sentir con más nitidez, como ocurrió en el período reciente, cuando lo que quedaba de la primera gran red nacional de radio y televisión fundada por Assis Chateaubriand en 1950 fue dividido en varios canales de televisión. En esa ocasión se presentaron empresas modernas, como Abril Cultural o el Jornal do Brasil, pero las concesiones fueron hechas a un empresario ultráconservador y que se jacta de no ser más que "office-boy" del gobierno (Silvio Santos) y a un propietario de revistas "low brow" en Río de Janeiro, Adolfo Bloch. (Claro que aquí también las cosas no ocurren sin ambigüedades: al buscar un nicho en el mercado de programación la red de Bloch, la TV Manchete, fue llevada a componer una programación dirigida a un público urbano más rico y diversificado.

El segundo aspecto es la contrapartida del anterior, pero tiene mayor importancia. Formulada de manera más sumaria, es el siguiente. Por cuanto en el área de la producción cultural de cuño artístico los productores se organizan fundamentalmente en términos corporativos y formulan demandas en ese mismo nivel, o se lanzan individualmente en un mercado que, en algunas áreas de las artes plásticas, gana carácter de capitalismo competitivo, es justamente en el área de las comunicaciones, que se presenta más atrasada en el campo de las políticas oficiales, que demandas corporativas han encontrado condiciones para convenirse en demandas políticas, con consecuencias importantes. Es que, si las políticas oficiales en el área de las comunicaciones son las menos modernas, las demandas generadas en el interior de las grandes organizaciones capitalistas, que son empresas de punta en esa área, pasan por sus productores culturales efectivos simultáneamente con las políticas empresariales y estatales.

Esa circunstancia se reveló decisiva, porque permitió ya en la década del ochenta la constitución de un núcleo aglutinador de concepciones y esfuerzos de diversos segmentos de la sociedad, en nombre de la formula-

ción de propuestas alternativas en la política oficial en el área. Sobre esta base, toda la legislación y toda la organización efectiva del área fue sometida a un examen crítico, hecho inicialmente por los profesionales de las distintas ramas de la comunicación, con el apoyo de centros y núcleos de investigación autónomos.

El resultado fue la formulación de propuestas de gran alcance en favor de la desconcentración del control sobre la comunicación y la producción cultural en general, la reforma de la legislación represiva en el área de apertura de acceso a la transmisión por radio y, eventualmente, televisión de baja potencia y organizaciones locales y comunitarias y, especialmente, de subordinación de la concesión de canales de radio y televisión al Congreso Nacional (item que fue incorporado a la nueva Constitución brasileña y que configura un avance real).

También se buscó asegurar la formación de un Consejo nacional de comunicación social, integrado por representantes de diversos sectores sociales con poderes de control sobre el desempeño de las comunicaciones entendidas como servicios públicos y apto para formular políticas en el área. La amplitud, el vigor y la solidez de las propuestas formuladas y sustentadas en diversos foros, entre ellos la Asamblea Nacional Constituyente, por los grupos involucrados en la búsqueda de alternativas a las políticas de comunicación vigentes, revela la otra fase del patrón de desarrollo de la industria cultural en Brasil: su capacidad de engendrar, desde su interior, fuerzas de oposición a su propia obra concentradora y tendencialmente monopólica, y también de repulsa al monopolio estatal en la definición de lo que es público en la sociedad.

Parece razonable suponer que en el futuro próximo, la industria cultural será cada vez más la arena de confrontación y de definición de políticas de comunicación y de políticas culturales, artificialmente mantenida hasta por la diferenciación ministerial, pero refutada en la práctica por el predominio creciente de la industria cultural (contra la cual los productores culturales formalmente autónomos no tienen defensa mientras perdure esa distinción) acabará siendo cuestionada desde su interior, con la formulación de líneas alternativas que podrían definirse como políticas de cultura y de comunicaciones.

Eso también permitirá formular con más precisión la naturaleza de las alternativas que efectivamente se presentan a las formas culturales dominantes. Permitirá, por ejemplo, enfrentar mejor la cuestión del carácter nacional o no del proceso cultural y de comunicación, que tanto peso tuvo en el período reciente, cuando, a partir de mediados de la década del setenta, se formuló una política de comunicación centrada en la idea de lo nacional concebido como *integración* y una política cultural centrada en la idea de lo nacional concebido como *autenticidad*, contra el telón de fondo opositor (y en una ocasión específica, convertida en la fracasada política de comunicaciones, en 1974) de lo nacional concebido como *independiente*. Todas esas concepciones, y las que a ellas se vinculan, como la de lo regional, probablemente serán reformuladas a partir de la experiencia y de las formas de organización de los productores culturales en un contexto

de internacionalización real de la producción y difusión culturales.

Otro tanto deberá ocurrir con la cuestión de las "culturas populares" como formas alternativas de producción simbólica. No parece razonable generalizar, pero, en contextos nacionales complejos y con la presencia de una industria cultural desarrollada, como es el caso de Brasil, las culturas populares difícilmente podrán continuar siendo pensadas en términos de formas culturales existentes fuera del ámbito de la industria cultural y resistentes a ella. La cuestión deberá asumir la forma de explícitos proyectos políticos que tomen en consideración las posibilidades de diferenciación organizacional y simbólica y de desarrollo tecnológico de los medios de punta en la producción y difusión cultural. La idea aquí y en toda la exposición hecha es que las formas de resistencia a la cultura dominante, en presencia de una industria cultural desarrollada, deben lograrse primero en el mismo interior de ésta y no en lo que hubiera de "popular" o de "élite" fuera de ella.

Esto significa que es en el campo de los productores culturales formales, cuando no estrictamente profesionales, insertados en las grandes empresas de la industria cultural y en los órganos estatales que se pueden encontrar las fuentes de las reformulaciones culturales innovadoras capaces de cuestionar simultáneamente el conservadurismo de la "espontaneidad" de una producción cultural popular aplastada entre la pérdida de significado de las prácticas locales y el avance de la producción y la difusión en gran escala para la industria cultural. ¿Habrá espacio para formas de organización de los productores culturales directos que trasciendan el ámbito corporativo y alcancen la formulación específica de políticas culturales? Parece que el período que ahora se abre permitirá vislumbrar algunas condiciones para ello; en lo que atañe a las relaciones con el Estado, no cabe abandonar la hipótesis de modalidades creativas de uso de los mismos mecanismos de mercado en lo referente al estímulo y el apoyo a la producción cultural.

En lo que respecta a la misma industria cultural, es necesario considerar que, en su condición de puesto avanzado de constitución de una sociedad capitalista moderna en el país, ella desarrollará cada vez más una dinámica compleja cuyos polos son la integración de las diversas formas de producción cultural en el nivel nacional (con referencias constantes al mercado internacional) y la diferenciación de públicos, audiencias y consumidores, conforme a criterios socioeconómicos y regionales. En el interior de esa dinámica deberán abrirse los espacios para formas de acción no convencionales.

Se replantea así la cuestión de la articulación entre los productos culturales y las diversas formas de organización de la sociedad. Dada la experiencia brasileña, en la que la "sociedad civil" fue supervalorizada como instancia de resistencia del régimen autoritario y después sufrió una relativa desmoralización por el carácter amorfo asumido por el proceso de transición (que, en varios puntos, ha servido mucho más para consolidar el poder de los grupos forjados a la sombra del régimen anterior) esa cuestión asume especial importancia. Esto porque, en esas circunstancias, las políticas cul-

turales se presentan como una dimensión estratégica de un proceso de revalorización y revitalización de la sociedad civil en la construcción de un Estado democrático. Para ello es condición necesaria pensar en los procesos culturales de modo más amplio que la preservación del "patrimonio histórico" y el fomento a la creación simbólica corriente.

Se trata de articular las políticas culturales *strictu sensu* con las políticas científicas y tecnológicas (la reserva de mercado en informática y el desarrollo de una industria local en el área tiene efectos directos en la formulación de programas de difusión de facilidades para innovaciones en la creación cultural, por ejemplo), y con las políticas educacionales, comenzando por la cuestión del nuevo carácter de la alfabetización, en una era en la que leer y escribir dejan de ser instrumentalmente decisivas en dominios crecientes de participación cultural y política —incluso para votar, en la nueva Constitución brasileña— si bien alcanzan dimensiones sustantivas todavía no exploradas a fondo, en relación con el universo de la informática y de la industria cultural.

Durante la dictadura y el régimen autoritario la cultura fue concebida por las oposiciones democráticas de manera ultrapolitizada. En seguida, corren el riesgo de despolitizarse. El desafío a las innovaciones en políticas culturales que se diseña en el horizonte inmediato en Brasil consiste en replantear, en términos mucho más sutiles y diferenciados, la cuestión de la politización de la cultura y de sus relaciones con las formas de "culturas políticas" presentes en la sociedad.

Traducción de Luciana Daelli

Innovaciones en políticas culturales y transformaciones en el campo cultural: El caso de Perú*

Roberto Miró Quesada**

Introducción

A partir de 1968, la sociedad peruana entra en un proceso de cambio que es causa y efecto de un movimiento popular de gran envergadura y de un Estado que cambia sus ejes: se agranda, se moderniza y se democratiza (en términos relativos). Este movimiento envuelve a toda la sociedad, y dentro de ella al movimiento cultural (desde sus múltiples espacios). Analizar este proceso es fundamental en la medida en que los aspectos culturales han sido sistemáticamente dejados de lado por las ciencias sociales, aunque el movimiento cultural peruano de las últimas dos décadas es de gran pujanza y complejidad. Para situar este proceso es indispensable retroceder hasta las características que lo cultural —público y privado— tuvo durante el período oligárquico, para así entender mejor los cambios que se dan a partir de 1969. Es decir, el análisis que se propone comprender tres períodos básicos.

a) Características del Estado oligárquico (sus políticas culturales), y las organizaciones culturales de la sociedad civil (hasta 1968).

b) Características del Estado reformista (sus políticas culturales, y las organizaciones culturales de la sociedad civil (1969-1975).

c) Características del Estado neoliberal (sus políticas culturales, y las organizaciones culturales de la sociedad civil (1975-1988).

Tanto las acciones públicas como aquellas de la sociedad civil en materia cultural, se analizarán a través de los siguientes espacios:

* Investigación realizada en los marcos del Proyecto PNUD-UNESCO-CLACSO, RLA 86/001, Ciencias sociales, crisis y requerimientos de nuevos paradigmas en la relación Estado/Sociedad/Economía.

** Investigador del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Lima.

a) Educación

La red estatal de educación comprende desde la escolaridad inicial hasta la superior más especializada, ofreciendo otras instancias técnicas y de mando medio. La sociedad civil ofrece el mismo panorama, con una red amplísima que cubre todas las demandas posibles en un país como el Perú.

b) Cultura andina

Secularmente, tanto el Estado como la sociedad civil han tenido políticas implícitas con respecto a la población andina. Pero es a partir de la década del 50 que el Estado asume un rol más explícito respecto de esta problemática a través de un sistema de reglamentación cada vez más complejo. La masiva migración serrana hacia la costa no sólo obliga a modificar las políticas públicas respecto de la población andina, sino que la sociedad civil en su conjunto tiene que redefinir su correlación de fuerzas y su escala de valores debido a la nueva situación.

c) Los medios de comunicación

Son espacios privilegiados en la construcción e implementación de valores culturales. En estos medios, la importancia de las acciones civiles sobrepasa largamente a las desplegadas por el Estado. Al igual que en otros espacios, la red de comunicación y de difusión del país se ve atravesada por opciones de clase y de etnia.

d) Actividad editorial

También en esta actividad la acción civil es aquí mucho más importante que la estatal, aunque hubo épocas en que el Estado asumió un rol editor agresivo.

e) Promoción artística

El soporte oficial es magro, aunque no siempre fue así. Frente a esta indiferencia oficial, la respuesta de la sociedad civil es dispar: también indiferente por parte de los grupos dominantes, pero explosiva por parte de los sectores populares.

A través del movimiento cultural oficial y no oficial, lo que se ha ido construyendo es una visión del país que refleja las tensiones fundamentales que la recorren: un sistema de clases mal conformado que ha llevado a una gran fragmentación social; tensiones étnicas muy agudas; y un sistema autoritario que atraviesa toda la sociedad peruana, desde el hogar hasta el Estado, pasando por sindicatos y asociaciones de todo orden (partidos políticos incluidos). Más propiamente, una ideología que sirve de afianzamiento del sistema imperante pero que al mismo tiempo abre resquicios por donde pasan propuestas culturales alternativas. Hay, pues, una matriz cultural conformada por un espectro ideológico que diseña un proceso cultural caótico, inestable, en formación.

Estas corrientes culturales, donde la clase y la etnia se interpenetran y se enfrentan, han ido conformando una visión del Perú y una intención de

identidad nacional que puede leerse desde el Estado, desde la clase y desde la etnia. Hoy en el Perú, esos tres niveles se están reformulando en sí mismos y en sus relaciones externas, y sus propuestas acentúan cada vez más desencuentros seculares (las visiones del Perú de estas tres instancias nunca fueron coincidentes, pero el sistema oligárquico ocultó las diferencias; con el proceso de democratización/modernización, las diferencias se han convertido en desencuentros, polarizándose). A estas tres instancias habría que agregar dos categorías más que tienen gran relevancia: las organizaciones juveniles y las organizaciones de mujeres, que aportan al conjunto de la sociedad una visión *sui generis*. En la actualidad, el Perú es un país donde la mayoría de la población vive en centros urbanos y es menor de 24 años. Esta combinación es decisiva en el replanteamiento de la visión que siempre se ha tenido del Perú, donde las versiones oficiales —desde el Estado y desde los grupos dominantes— van siendo modificadas aceleradamente. Las instancias oficiales y de la sociedad civil interactúan, se definen mutuamente, creando constantemente nuevos espacios de convergencia y disensión. Es decir, hay escenarios caducos y actuales, y escenarios en el movimiento popular como eje constructor de identidades. Desde el Estado, en cambio —y desde los sectores medios— lo étnico andino sigue siendo impulsado. Hay aquí un factor de desencuentro —en el interior de la sociedad civil y entre esta sociedad civil y el Estado— que se va constituyendo como uno de los escenarios privilegiados donde la democratización y la modernización del país se van a definir en términos políticos.

Para poder seguir ajustadamente el movimiento cultural de los últimos veinte años en el Perú, es preciso definir categorías tales como: *cultural popular*, pues sólo así podremos avizorar la tendencia. El proceso del movimiento cultural en el Perú está íntimamente ligado al concepto de *identidad nacional*, que está angustiosamente planteado desde Garcilaso. Hoy esa preocupación vuelve a adquirir gran significación, planteándose desde las agrupaciones artísticas más marginales hasta las disquisiciones académicas más especializadas. Es en el movimiento cultural, entonces, donde mejor se encarnan las potencialidades del cambio, pero también los mecanismos ideológicos de sujeción. Hay, por lo tanto, dos niveles en el análisis que se propone: un quehacer cultural cotidiano en acelerado proceso de expansión y, a partir de este proceso cotidiano, una redefinición de los parámetros de la identidad nacional. En el Perú actual, éste es un proceso abierto de difícil prognosis.

Algunas precisiones conceptuales

Según Agnes Heller, la modernidad en el mundo occidental se estructura a mediados del siglo XVIII a partir de tres componentes fundamentales: el capitalismo, la industrialización y la sociedad civil; componentes que a su vez responden a tres lógicas distintas, donde capitalismo y la industrialización generan —aun a su pesar— su propia lógica, pero no les es posible realizarla completamente sin socavar las bases mismas de la modernidad.

Es decir, la modernidad social es en sí misma de equilibrio inestable, y además contradictoria.

En el caso particular de América Latina, el surgimiento de la sociedad civil está ligado a la aparición de movimientos sociales de los sectores desplazados del poder; y como sostiene Portantiero, los sectores populares se convierten en actores sociales a partir de la crisis, y no tanto por voluntad hegemónica de sus organizaciones. Es decir, que una crisis de hegemonía del sector dominante catapulta a los movimientos sociales marginales en actores sociales de primer orden. Por lo tanto, categorías como movimiento popular, lo popular, lo masivo, lo cultural, pasan a cobrar ahora una significación principal para entender el proceso social en América Latina. De alguna manera, la constitución del movimiento popular emerge por negación, y conceptos como los de nacionalidad y modernidad surgen también de aquella crisis de hegemonía. Los esquemas más en uso en las ciencias sociales —y en sus contrapartidas políticas— se vieron sorprendidos por la "desviación latinoamericana" de los esquemas más prestigiosos, porque de pronto las luchas populares se extienden fuera del campo de la producción: luchas contra formas de poder, de represión y discriminación en la vida cotidiana, luchas por el acceso a servicios y al consumo, como sanidad, vivienda, etc. Y estas nuevas luchas van a ser conducidas por nuevos actores sociales: grupos étnicos, femeninos, juveniles, religiosos, etc. Estas luchas, que inciden escasamente en el proceso de la producción, tampoco generan demasiado interés en los partidos políticos tradicionales (tanto de izquierda como de derecha) que siguen negociando con las instituciones (sindicatos, ejército, Iglesia, etc.). Lo cultural, entonces, se convierte no en un espacio más, sino en aquel donde se articulan los procesos económicos y políticos. Tomar en cuenta lo popular significa revalorizar articulaciones y mediaciones de la sociedad civil, percibir el sentido social de los conflictos más allá de esquemas políticos dados y el reconocimiento de experiencias colectivas no encuadradas partidariamente.

Este interés por la cultura popular responde a varias razones, como lo precisa García Canclini:

1. Socioeconómicas: presencia masiva del "pueblo" en las ciudades, la política, el consumo, etc.
2. Políticas: su movilización política se logra a través de necesidades no políticas (populismos).
3. Crisis ideológico-cultural: crisis de hegemonía. (García Canclini 1987-A, pág. 22).

En una primera versión latinoamericana, la modernización significaba llegar a ser una nación (aproximadamente durante la década del 20 y del 30). Y en una segunda versión, desarrollarse (sobre todo durante los años 60). Pero durante los 80, la crisis de hegemonía agudiza la contradicción entre el carácter nacional de la estructura política y el carácter transnacional de la estructura económica. Es en esa contradicción en la que se filtra el movimiento popular, convirtiéndose, para el caso específico del Perú, en la locomotora del proceso histórico del país. A diferencia del estatismo, que subordina lo popular al Estado-Nación, los movimientos populares promue-

ven formas independientes y horizontales de organizaciones de base. Todo esto inaugura formas distintas de hacer política que chocan con conceptos preestablecidos. Con las migraciones y el urbanismo —como bien lo señala Monsiváis— las tradiciones se van diluyendo o recomponiendo, con lo cual la experiencia nacional queda en gran parte en manos de los medios masivos de difusión. Las alternativas se van cerrando desde lo dominante, de ahí que desde lo popular no se tienen opciones sino respuestas (de sumisión, de parodia, de resistencia). La cultura popular, por lo tanto, se estructura principalmente (y casi exclusivamente) en las áreas urbanas; es un fenómeno actual y masivo, conformado por sectores marginales, obreros, clase media baja, clase media. Es una cultura mayoritaria, generalizada, constituyéndose en lo histórico, recreándose permanentemente (Nicolás Casullo). A su vez la categoría pueblo sería el conjunto de las clases subalternas y los instrumentos que le sirvan (aunque éstos no sean un producto auténtico de los sectores populares).

Si, como dice Foucault, todo se reduce a un ejercicio del poder, entonces las culturas populares, para ser competitivas, deben adquirir grados de formalización y objetivación para adecuarse a las nuevas condiciones y dejar de estar acorraladas. Es decir, analizar el movimiento popular es seguirlo desde su propia óptica, diseñando líneas investigativas que tomen en cuenta el proceso paradójico de gestación de lo masivo a partir de lo popular (Martín Barbero, 1987-A, pág. 44); percibir los procesos de presencia/ausencia y afirmación/negación con respecto al campo hegemónico, así como los usos populares de lo masivo. Igualmente, detectar códigos que son al mismo tiempo contradictorios y complementarios (la tradición, lo ingenuo, la resistencia). Separar las instancias de lo popular y de lo dominante como entidades autónomas es dejar de percibir la complejidad de un proceso histórico que ha ido construyendo, a través de los siglos, una matriz cultural estructurada políticamente, pero no sólo políticamente; porque la matriz no se refiere a lo arcaico, sino a aquello que persiste a través del tiempo matizando lo actual. Hay entonces, un *residuo* cultural (Williams) que se va sedimentando y expandiendo al conjunto de la sociedad por caminos fuera de los ejes establecidos por la cultura hegemónica.

El movimiento social que hoy recorre América Latina ya no puede ser abordado únicamente desde sujetos sociales y políticos con peso en sí mismos, autosuficientes: a lo que hay que darle prioridad, más bien, es al conflicto social desde los atributos de los sectores, y éstos se dibujan no solamente en el terreno de lo económico, sino también en el de lo simbólico. "Porque es ahí —como dice Martín Barbero— donde se articulan las interrelaciones desde las que se constituyen los sujetos, las identidades colectivas" (Martín Barbero, 1987-B, pág. 226). Esto presupone ir elaborando continuamente los paradigmas y a partir de ellos analizar el seguimiento del movimiento popular en todos sus niveles.

Pensar nuestra identidad, por lo tanto, es pensar la coexistencia, la combinación de las luchas étnicas con las de clase, la interpenetración de esas fuerzas en la historia (García Canclini). Si bien los mensajes recibidos

por el movimiento popular desde la sociedad hegemónica apelan al individuo, lo popular es sustancialmente colectivo y la recepción de ese mensaje es recibida entonces colectivamente. Esto supone, así, que la legitimación social del movimiento popular —de la cultura popular— deberá hacerse semantizando el código hegemónico (como quería Gramsci). Este proceso explica por qué las articulaciones y aspiraciones culturales de lo popular parten necesariamente de una apropiación del código hegemónico. Por otra parte, la hegemonía no se arraiga en ideas alienadas, sino en la internalización de la desigualdad social: hasta dónde puede aspirar cada uno. "Por lo tanto, existe una interacción dialéctica entre la estructura de las disposiciones y las oportunidades u obstáculos de la situación presente" (García Canclini, 1987-A, pág. 33).

García Canclini da una definición de lo que debería ser una política cultural: conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios, organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social" (García Canclini, 1987-B, pág. 26). Si asumimos esta propuesta como correcta, sólo interrelacionando estas tres instancias es como podremos auscultar el movimiento cultural del país. Y aunque la aspiración de García Canclini de conseguir esa interrelación sea para obtener consenso con vistas a una transformación social, en la práctica a esa aspiración se tiende, aunque no exista una conciencia explícita por parte de los actores sociales involucrados. La interrelación entre estas instancias no es ni única ni principalmente económica y política, sino que comporta necesidades de tipo cultural y simbólico. Es decir, es en ese campo específico en el que debe incidir el mayor peso del análisis de los movimientos culturales (las políticas que ese movimiento genera tanto a nivel del Estado como de la sociedad civil). No hay que perder de vista, entonces, que el objeto de investigación debe incidir en las desigualdades y conflictos entre manifestaciones de clases que no pueden expresarse autónomamente (matriz cultural).

Contexto histórico

El Estado Oligárquico (hasta 1968)

Julio Cotler sostiene que el Perú no ha contado a lo largo de su historia con una clase dirigente con capacidad y voluntad para realizar lo que tendría que haber sido el "programa" mínimo de una clase rectora:

1) Organizar un mercado integrado, lo cual habría significado una relativa homogeneización de la estructura productiva y al menos una organización de las relaciones entre las clases.

2) Incorporación progresiva de las exigencias populares, para así crear un consenso entre los sectores dominantes y dominados acerca de la legitimidad del Estado y de los procedimientos institucionales de la participación política.

3) Una centralización estatal realmente efectiva, con miras a superar la fragmentación cultural entre las clases y así favorecer la constitución de una identidad colectiva.

Es decir, una total incapacidad y falta de voluntad para levantar un Estado que siquiera en apariencia se presente al país como representando los intereses generales de la nación. Lejos de eso lo que el Estado oligárquico construyó fue la permanente inestabilidad política que ha caracterizado nuestra historia. La existencia de tal Estado está mostrando la inexistencia de condiciones mínimas para el surgimiento de una burguesía con voluntad política. De ahí que la penetración del capital norteamericano a comienzos de siglo la permeará sin apelaciones. La aparición del sector burgués de la capa de propietarios no fue el resultado de contradicciones internas, sino de un acomodo que siguió permitiendo la hegemonía oligárquica y la consiguiente marginación popular. Por todo esto, el capital extranjero penetró en el país sin propiciar el capitalismo.

El proceso social correlativo de aquel proceso económico fue determinando la acumulación de fuerzas en los sectores populares, los cuales irrumpen en la vida política del país con fuerza inusitada durante la década del 50 (una primera irrupción se produce en la década del 20). El campesinado, el proletariado, los migrantes y los nuevos sectores medios adquieren una presencia que no puede ser ignorada, frente a lo cual hubiera sido preciso la reestructuración del Estado oligárquico, preparándolo para canalizar las cada vez más amplias demandas del campo popular. Eso no ocurrió, optándose, por el contrario, por un modelo liberal que se diseñaba a partir del carácter dependiente de la economía peruana. Los nuevos partidos políticos que surgen en la década del 50 para ocupar el vacío que el APRA iba dejando en el centro, así como el Ejército y la Iglesia, entendían que era indispensable modernizar las estructuras del país, y que la mejor forma de hacerlo era desde arriba, mediante medidas tecnocráticas que permitieran mantener el "principio de autoridad". Esta visión no solamente se nutre de la movilización interna del país, donde los sectores revolucionarios de izquierda adquieren perfiles cada vez más consistentes, sino por los efectos de la Revolución Cubana y su contrapartida la *Alianza para el Progreso*. Dice Cotler: "En este escenario surgió en el Ejército la teoría de la seguridad nacional. Sólo las reformas sociales que propendían al bienestar y desarrollo podían servir de baluarte contra el desquiciamiento institucional que significaba la intensificación de la lucha de clases y el desarrollo político autónomo de las clases populares. También, sólo la aplicación de un conjunto orgánico de reformas sociales podía cohesionar a los peruanos y desarrollar sus potencialidades para defender de las acechanzas externas: el comunismo ateo, la expansión geopolítica de los Estados vecinos, los gobiernos y las empresas imperialistas que amenazaban disolver la débil entidad nacional. (Cotler, 1985, pág. 37). Por su parte, la Iglesia recibe el remezón del Concilio Vaticano II y su opción por los pobres. Es decir, que dos de los pilares fundamentales sobre los que se asentaba el Estado oligárquico, dejan de servirle de apoyo. De esta manera, la década del 60 se inicia con una clara tendencia reformista,

que no solamente apunta a desbancar al Estado oligárquico, sino a llenar el espacio progresista que el APRA iba abandonando aceleradamente.

Desde luego, las reformas planteadas por el primer gobierno de Belaúnde (1963-1968) fueron boicoteadas por los sectores tradicionales en cuyas manos aún estaba la organización de la producción, por el capital extranjero a pesar de los postulados de la *Alianza para el Progreso*, y por la coalición formada por el APRA y el partido de su antiguo perseguidor, el general Odría. Frente a tal oposición, y a las demandas crecientes de los sectores populares y medios, los coauspiciadores del nuevo reformismo —la Iglesia y el Ejército— impusieron su receta tecnocrática como única manera de evitar una sublevación popular que percibían en ciernes. Es decir, el movimiento popular que se organizaba y pugnaba por un espacio, presionando la democratización del país, no encontró respuesta en el incipiente reformismo y en el populismo de la década del 60. La dependencia del Estado del capital extranjero, así como su ligazón con los terratenientes, le impidieron la autonomía necesaria para conducir el proceso político que se desarrollaba en el país. Por su parte, las alternativas que ofrecían los sectores medios al movimiento social resultaron insuficientes ante las demandas populares, con lo cual grandes capas de esos sectores populares empezaron a organizarse fuera del sistema político pequeño-burgués, perfilando sus intereses sectoriales con más nitidez. La imbricación de todos estos elementos se anudó a fines de la década del 60 para desplazar definitivamente al sistema oligárquico que dominó el proceso peruano.

La década del 60 conoce la crisis del sistema oligárquico, coincidente con una pérdida del hegemonismo político del APRA. Los pactos entre Odría y Haya de la Torre —uno de los grandes escándalos políticos e ideológicos de la reciente política peruana— dejan vacío un espacio que propiciará la aparición de nuevos partidos políticos, como Acción Popular, la Democracia Cristiana y el Social Progresismo. Esta nueva clase media, de rasgos progresistas en términos relativos, tendrá que adoptar una ideología nacionalista que le dé especificidad política y la diferencie claramente de los otros sectores. El hispanismo que se asocia con la mentalidad oligárquica se ha convertido en una instancia desprestigiada, del pasado, retrógrada. En el otro extremo del espectro, la clase trabajadora ya estaba organizada por el Partido Comunista, lo que hacía difícil su cooptación; a ello debe agregarse el miedo innato que los sectores medios sienten por los trabajadores organizados. Es decir, estos nuevos sectores de clase media tendrán que apelar al único espacio ideológico que era compatible con su posición nacionalista: la "revaloración" de la cultura andina como la base fundamental de la identidad nacional. De esta manera, los sectores medios urbanos pequeño burgueses se convierten en los primeros defensores de la supuesta pureza de la cultura andina. Belaúnde pondrá, entonces, algunos conceptos y prácticas que serían propios de aquella cultura: el trabajo por cooperación popular, la minka, etc. Esto va a dar sustento a un gobierno y a un Estado que va a tomar lo andino de manera periférica, presentando los valores andinos como un santuario inamovible. Ciertamente, más que la cultura andina realmente existente, lo

que se propagandizaba era la imagen que la ideología oficial siempre tuvo del imperio incaico.

"Esta suerte de neoindigenismo estatal, por más tibio o inconsecuente que haya sido de modo general, fue capaz de arrastrar en sus inicios a importantes sectores de la juventud universitaria, y abrió un espacio que hizo posible el trabajo de la Casa de la Cultura del Perú en esos años. Primero bajo la dirección de José María Arguedas y luego de Fernando Silva Santisteban, ambos antropólogos apasionados del mundo andino, se fue rompiendo la antigua imagen de la cultura como patrimonio exclusivo de 'élites' intelectuales y artísticas, para ponerse a la cultura indígena en el centro del debate" (Ansión, 1986, págs. 39-40).

Hay en todo esto una voluntad de implementar una política cultural explícita, lo que sin embargo no impidió que el presupuesto destinado a estas actividades siguiera siendo sumamente exiguo. Por otra parte, difícilmente la visión de la cultura de alguien como Arguedas podía compatibilizarse con la perspectiva del gobierno populista; de ahí que los logros culturales de aquel entonces se deban sobre todo a una personalidad como la de Arguedas y no tanto a un presupuesto ideológico emanado del gobierno.

El Estado Reformista (1968-1975)

Inmediatamente después de tomar el poder en octubre de 1968, el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada emprendió una serie de reformas que significaron un cambio importante de la estructura general del país. Su sentido de la seguridad de la nación —de la que se sienten los únicos custodios— los llevó a determinar que la dependencia externa, el sistema oligárquico y la incapacidad de los civiles para controlar la movilización popular, eran las causas de que la integridad de la nación estuviera en peligro. Por eso reestructuraron el sistema productivo eliminando la estructura terrateniente, a las burguesías comercial y agraria, y al enclave extranjero. De esta manera, el Estado se convirtió en el principal agente económico; mientras en 1965 la participación pública en la inversión total era de 16%, en 1975 era de 50% (Cuentas Nacionales, citado por Cotler). Estas medidas tenían por finalidad redefinir las relaciones del Estado dentro y fuera del país; hacia afuera, replanteando los términos de la dependencia; hacia adentro, recomponiendo la correlación de fuerzas, desplazando a la oligarquía y señalándole el camino a la burguesía industrial. De esta manera sería posible redistribuir la propiedad y el ingreso y horizontalizar el país. Por supuesto, todo esto controlado por el gobierno militar. Esta horizontalidad económica debía derivar en una democratización social y cultural. La acumulación capitalista del Estado y la del sector privado debían contribuir a la formación de un mercado interno sólido, eje a partir del cual se integraría al país económica y socialmente. Esto, a su vez desembocaría en la unidad cultural, para lo cual se dispuso la reforma de la educación y la estatización de los medios masivos de comunicación.

La modificación de la estructura de la propiedad alteró el mapa de la

apropiación del excedente, pero dejó relativamente inalterado el uso de dicho excedente económico. La reforma de la tierra y de la industria dieron lugar a una redistribución del ingreso que benefició únicamente a las capas sociales de más altos ingresos relativos; y la consolidación de la política de sustitución de importaciones incrementó el consumo de esas clases. Todo esto llevó, a pesar de la intención distributiva en favor de los sectores populares y del aparato productivo del Estado, así como en favor de la burguesía nativa, a que se consolidara un proceso de acumulación concentrado en las actividades de las empresas multinacionales asociadas al Estado. No obstante, estas medidas dificultaron el movimiento fluido del capital, agravado por la participación obrera en la conducción de las empresas, lo cual fue percibido por el sector dominante como un régimen que no favorecía sus intereses en la medida en que no obtenían las ganancias esperadas. De esta manera, el gobierno militar comenzó a jugar sólo; la burguesía industrial consideró que sus intereses y niveles de capitalización eran afectados; los sectores obreros veían recortada su capacidad de participación por un régimen que los dirigía pero no los consultaba; el consumo seguía restringido para los sectores más amplios, incluidos los medios, de la sociedad; la pequeña burguesía intelectual radicalizada se sintió frustrada en sus aspiraciones de un real cambio. En general, el desfase entre discurso y práctica por parte del gobierno militar lo aisló de casi todos los sectores sociales, a lo cual hay que sumar el creciente déficit fiscal que agudizaba duramente la situación económica de la población. Si bien fue esa importante autonomía del gobierno militar frente a los distintos sectores sociales del país la que le permitió afianzarse y realizar sus principales reformas con costos sociales muy bajos, al final, esa autonomía se convirtió en el aislamiento que precipitó su caída.

En lo que a política cultural se refiere, el gobierno que se inaugura en 1968 deja traslucir su óptica general de lo que debe ser la nación peruana que se está construyendo. La presencia de científicos sociales en el gobierno le da a esa visión una tónica dependentista que organizaba en aquel entonces la visión de lo nacional en América Latina. La cultura, por lo tanto, era vista como alienada por esa dependencia, debiendo ser liberada. Lo nacional, lo peruano, volvía nuevamente los ojos hacia lo andino, aunque de manera más moderna y cosmopolita. A pesar de los cambios políticos y sociales con respecto a la visión oligárquica, lo andino sigue siendo un punto nodal frente al cual hay que tomar posición, pero quedándose en la periferia del asunto; se oficializa el quechua, por ejemplo, pero ese acto no deja de ser pura retórica pues nunca se encarnó en la realidad cotidiana del país. Acorde con la visión globalizante de la sociedad, lo cultural también es percibido en términos de identidad nacional, elaborándose políticas específicas al respecto. Es entonces que la Casa de la Cultura se transforma en Instituto Nacional de Cultura, para luego devenir Ministerio de Cultura. Su presupuesto es más amplio, pero su autonomía sigue siendo restringida, ya que depende del Ministerio de Educación y del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), el ente vertebrador más importante del gobierno militar. Esto nos está mostrando que la cultura es entendida en tér-

minos sociales y políticos, lo que representa un cambio sustancial con respecto a concepciones anteriores. Sin embargo, lo cultural responde a instancias que se consideran más importantes, como la movilización social en términos políticos. El centralismo del régimen también se expresa en la política cultural, para lo cual es obvio el modelo cubano. No obstante, nunca el INC ha sido tan activo como en este período, donde crece una política editorial importante, se consolida la Orquesta Sinfónica Nacional, el Ballet Nacional, el Ballet Folklórico, se crea el Teatro Nacional Popular, hay una preocupación por la Biblioteca Nacional, por el patrimonio arqueológico de la nación, se ordena y se protege el patrimonio artístico, los archivos y la investigación, etc. Pero la centralización de estas actividades superó las posibilidades del INC, el que colapsa más adelante.

El Estado Neoliberal (1975-1988)

En 1975, con la destitución de Velasco Alvarado por las propias Fuerzas Armadas, se inicia la llamada Segunda Fase del régimen militar iniciado en el 68, y cuya característica principal fue el dismantelar las reformas estructurales iniciadas por Velasco y su equipo. Ante el aislamiento en que cayó la Primera Fase, era imprescindible optar por una alianza estratégica que diera al gobierno el apoyo que ya no tenía. Se optó por el capital, en sus diversas formas, para lo cual fue preciso desactivar la participación popular (que se había desarrollado más allá de los gustos de los propios militares reformistas de la primera época).

El patrón de crecimiento que se organiza en el Perú después de la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por un auge de la economía exportadora, basada sobre todo en el sector primario semi-industrial. Paralelamente, se produce una migración masiva del campo a la ciudad, de la sierra a la costa y del país hacia Lima, conformando una masa ciudadana que no puede ser atendida en sus reclamos de servicios. Como dice Efraín Gonzales de Olarte: "Este patrón de crecimiento creó sus propios gérmenes de crisis económica de corto y de largo plazo, los que se vieron reforzados o aminorados por la gestión de la política económica del Estado, es decir, las crisis en el Perú se pueden explicar por dos ingredientes, uno, de base, relacionado con las características de la acumulación capitalista, con el crecimiento demográfico, y el otro, relacionado con las decisiones de política económica tomadas desde el gobierno por grupos de poder (partidos y militares) de variadas y variable inspiración ideológica y económica (Gonzales de Olarte, 1987, pág. 14).

La crisis de corto plazo se inscribe en una crisis de largo plazo cuyas características pueden agruparse de la siguiente manera:

- 1) Una menor intensidad de la acumulación del capital respecto del crecimiento poblacional.
- 2) Una estructura productiva dependiente del extranjero, que no integró los sectores internos ni fomentó relaciones horizontales entre sectores y regiones.

3) La estructura distributiva no cambió entre 1950 y 1972 (Webb y Figueroa), empeorando después de 1976.

Este patrón de crecimiento económico, que se inaugura en la década del 40, es el que permanece hasta hoy, explicando la continuidad de una crisis que se agudiza a partir de 1976-77, pero cuyo origen no está ciertamente ahí.

Así, el segundo gobierno de Fernando Belaúnde (1980-85) no puede hacer frente a la crisis porque cuenta con un Estado que posee estrechos márgenes de maniobra debido a un impresionante movimiento popular —que determinó la vuelta a la democracia liberal representativa— y a una deuda externa que no está en capacidad de negociar (agudizada por la especulación, la fuga de capitales y el terrorismo), y por la ausencia de un proyecto nacional que se basara en consensos mínimos. Siendo el crecimiento económico insuficiente para absorber una fuerza laboral que creció aceleradamente fuera del ciclo económico, el sub-empleo ejerció una fuerte demanda sobre el Estado que éste, sin embargo, no pudo satisfacer. Como lo sostiene Figueroa, la distribución del ingreso ha sido continua desde 1950 hasta 1980; ha aumentado la desigualdad global. "Es decir, estamos frente a una estructura económica y política que no tiende a hacer participar en los frutos del crecimiento a los segmentos de la población que no tuvieron la capacidad de articularse o integrarse económica o políticamente en los sectores o regiones más dinámicos, siendo el caso más extremo el de los campesinos serranos. Por esta razón, la crisis de participación política ha estado latente, en la medida en que las bases distributivas han permitido la mantención de desigualdades, ampliadas durante la fase de recesión del ciclo económico, haciendo difícil canalizar institucionalmente las demandas, que no se podían satisfacer a través de la economía de mercado (González de Olarte).

Si en la primera mitad de la década del 70 el sector laboral luchaba por incrementar sus logros, el salario y las condiciones de vida y de trabajo, a partir de 1975 y sobre todo en la presente década, los obreros se enfrentan a una sistemática y constante pérdida de sus derechos adquiridos e incluso de sus niveles y del puesto de trabajo. En este período la inflación alcanzó una velocidad sin precedentes, multiplicándose por veinte el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana (entre 1979 y 1984). Igualmente aumentaron el desempleo y el subempleo, disminuyendo casi en veinte puntos el empleo adecuado en 1985 con relación a 1980. El PBI experimentó un lento crecimiento, para luego decrecer severamente en 1983; el sector fabril sufrió una brusca recesión, descendiendo la producción industrial un 5% en 1982 y un 18% en 1983 (Jorge Parodi). En 1981 se superó el récord de huelgas de 1973, y se implementaron otras acciones de fuerza como la toma de locales, huelgas de hambre e incluso el secuestro de un ministro para "interpelarlo" ya que el Congreso no lo hacía. Entre 1977 y 1984 —es decir, los gobiernos de Morales Bermúdez y Belaúnde— se realizaron ocho paros nacionales, siendo el primero de ellos, el del 19 de julio de 1977, el responsable de que el gobierno convocara a la Asamblea Constituyente para reingresar a la democracia liberal representativa. No obstante este

panorama, las luchas laborales que se dan durante el segundo gobierno de Belaúnde no abarcaron propuestas más amplias, limitándose a reclamos coyunturales muy específicos. En esto jugó un papel importante la falta de solidaridad de los sindicatos grandes con respecto a los chicos; éstos últimos no tenían el peso suficiente para constituirse en un real desafío al gobierno que restituyó la inestabilidad laboral. De esta manera, el movimiento sindical no fue representativo de la globalidad de la masa trabajadora del país. Un segundo factor estará en la visión que la clase obrera tiene de la legalidad, a la que considera simplemente burguesa. Es decir, el logro de conquistas que signifiquen ir ocupando espacios cada vez mayores dentro de la legalidad burguesa, no era una prioridad. La lucha era reivindicativa y economicista, y no por espacios políticos explícitos. Todo esto llevó a reducir la participación política y a luchar contra el gobierno; y en esta estrecha concepción participaron los partidos de izquierda que dirigían el movimiento sindical, para quienes la política no es negociación sino propuesta.

El gobierno que Alan García inaugura en 1985, no solamente contó con una adhesión masiva y sin precedentes en la historia del Perú, sino que esa adhesión se incrementó en los primeros meses de su gestión. Sus banderas principales fueron su voluntad de encarar la crisis (aunque ahora se ve que no fue más que voluntarismo); reactivar el aparato productivo; contener la inflación; dar prioridad a los intereses de la economía nacional; proteger la producción local; limitar el pago de la deuda externa y cortar con el FMI; prometer el restablecimiento de la estabilidad laboral. Al cabo de año y medio de gestión, el gobierno de García puede mostrar los logros siguientes: la actitud tomada frente al FMI y la deuda externa; el aumento de la producción y la relativa recuperación del ingreso real y del empleo; la inflación fue reducida de 158% (1985) a 63% (1986); el PBI creció de 1,4% a 8,5%; el empleo aumentó y los salarios reales mejoraron.

Durante la primera mitad del gobierno de García aumentó el consumo, pero sin ningún freno al consumo suntuario e importado. Contra sus propuestas de nacionalizar el consumo, derrochó las escasas divisas, reservas generadas para abaratar el lujo y la importación innecesaria. Esta política oficial se desentendió de la planificación, con lo cual se dejó de invertir en la ampliación de fábricas y no se crearon nuevas; de ahí la necesidad actual de importar acero, papel/insumos para la industria química, petróleo, etc., productos que siempre hemos producido. Esta imprevisión ha llevado a una quiebra de confianza que ha tenido como consecuencia una retracción en la inversión, aumentándose la dependencia del exterior. El proceso de desmantelamiento del Estado se inicia con el gobierno de Morales Bermúdez a partir de 1975, continúa con Belaúnde, y Alan García se inscribe en esa política, generándose una disminución del gasto público y un aumento del déficit fiscal. Al no hacer un plan de gobierno claro —ni siquiera conocido— las marchas y contramarchas se han convertido en la tónica general del gobierno. El gobierno aprista nació sin organizaciones importantes, tanto laborales, como campesinas, ni tampoco empresariales, ni poblacionales. En vez de convocar a la participación democrática y autónoma de las orga-

nizaciones sociales, excluyó al pueblo organizado de todo diálogo y concentró su esfuerzo en la concertación con el sector financiero-industrial del país. No obstante sus promesas, prácticamente todas las reservas del país durante 1986 se destinaron al pago de la deuda, al envío de ganancias al exterior y al pago de servicios de dudosa calidad. Todo esto ha llevado a que este gobierno se caracterice por su absoluta falta de credibilidad por parte de todos los sectores del país, lo que condujo a Alan García a una soledad política muy seria que se evidencia por los índices de las encuestas de opinión y la masiva movilización popular. Su discurso a la nación del 28 de julio último mostró ya sin ninguna duda el viraje del gobierno aprista hacia los intereses del capital. Sin embargo, tampoco estos sectores se han decidido a brindarle su apoyo, y el llamado a la concertación política ha sido explícitamente rechazado por todos los sectores del país, aduciendo que la agenda propuesta por el gobierno es incoherente. De esta manera, no solamente hay en la actualidad un Estado que se debilita y pierde capacidad de arbitraje, sino un gobierno que cada vez tiene menos espacio político. Es decir, las fuerzas sociales, económicas y políticas de la nación han entrado en un proceso de enfrentamiento directo.

A partir de 1975, empieza una lenta restauración del liberalismo, que también se traduce en la política cultural. Consecuente con su ideología, se piensa que el Estado no es buen administrador y que la iniciativa privada es la que debe conducir al país. De esta manera, el INC comienza a ser desmantelado hasta convertirse casi en una simple oficina sin presupuesto y sin capacidad de gestión. Entes como el Teatro Nacional, el Ballet Folklórico, el Coro del Estado, etc., son suprimidos; la Orquesta Sinfónica Nacional entra en una inopia que la paraliza, y muchos proyectos de restauración y conservación del patrimonio de la nación son suspendidos. Hay una crisis económica en el país que determina en gran medida estos recortes, pero también es cierto que este desmantelamiento del INC responde a una óptica liberal específica. Lo penoso del asunto es que la cultura nunca ha sido considerada importante por la iniciativa privada, de ahí que el retiro del Estado en materia cultural no haya sido reemplazado por una política privada consistente. A esto hay que añadir la dación de una Ley de Amparo del patrimonio nacional que no es otra cosa que amparar las colecciones privadas para que éstas puedan salir del país sin que la nación peruana tenga ninguna capacidad de control al respecto (esta ley se dio con la colaboración parlamentaria del APRA). Al dejar Belaúnde el gobierno en 1985, la inoperancia del INC es total, inoperancia que se fue trabajando, nuevamente, en colaboración con Directores de clara filiación aprista.

El gobierno de Alan García no ha significado un cambio evidente en lo que a política cultural se refiere. El INC ha seguido siendo el pariente pobre del Estado, manejando un presupuesto por demás limitado que le impide toda iniciativa. Además, la concepción aprista de la cultura se inscribe dentro de los parámetros de la ideología liberal. Lo cultural sigue siendo entendido como lo artístico, y no hay una política cultural explícita a partir de la cual el país pueda opinar. La vieja concepción populista ha vuelto a enseñorear, embarcándose el gobierno en proyectos elefantíacos como un museo

de la nación reminiscente del de México, y encuentros latinoamericanos sumamente costosos que se han caracterizado por su inoperancia y por servir intereses políticos del Presidente García a nivel latinoamericano y no las necesidades culturales del país. Respecto de la escasa asignación de recursos al campo cultural, las universidades son el caso más dramático, especialmente San Marcos. Asimismo a esto se agrega la descoordinación entre las diversas instancias de la actividad cultural oficial, como el INC y el Ministerio de Educación, principalmente; y también, la ausencia flagrante de las organizaciones populares en el diseño de una actividad cultural que sea coherente con la idiosincracia del pueblo peruano. Los Rimanakuy, por ejemplo, encuentros entre el gobierno y las organizaciones campesinas—, podrían haber sido aprovechados para engarzar lo económico con lo cultural, como debe ser, pues no se entiende el uno sin el otro. Sin embargo, la falta de una política cultural no permitió ver la ligazón (en los Rimanakuy no se respetó a las organizaciones populares ya existentes, práctica democrática elemental). Aun en el período en que la economía nacional creció hasta en un 8% (85-87), la cultura no fue partícipe de esa bonanza, y la pobreza de los organismos encargados de la política cultural siguieron su caída. Es decir, el desarrollo del país y el de la cultura siguieron por rumbos distintos. La posterior crisis que se instaura a partir del 88 ha hecho que la caída, en lo que a cultura se refiere, sea por demás dramática. Y al igual que durante el gobierno militar, se han creado organismos culturales paralelos al INC, en lugar de concentrar los magros recursos para cultura en el ente oficial —el INC—. Entre éstos, se crearon la Oficina Cultural de la Presidencia de la República y el Consejo de Integración Cultural Latinoamericano (CICLA), entidades competitivas entre sí.

Los dos polos del proceso político de los 80: movimiento popular y terrorismo

La agudización de la crisis y la progresiva incapacidad del Estado para controlar la situación, así como tres décadas de migraciones y creciente escolaridad, han producido uno de los movimientos populares más amplios y originales de América Latina. Una inmensa cantidad de organizaciones espontáneas se han diseminado por los sectores pobres, especialmente en la ciudad de Lima, como una respuesta a la indiferencia del sistema ante la crisis. Alimentación, salud, cuidado de niños, acondicionamiento urbano, protección contra la delincuencia, han generado una respuesta popular que se organiza fuera del Estado y de los partidos políticos; y más aun, reivindican tercamente su autonomía frente a esas dos instancias. Su forma de organización está basada en prácticas inéditas que se van creando cotidianamente.

Ese movimiento popular se refleja en las condiciones y la fisonomía que ha adquirido la ciudad de Lima en la presente década; casi el 80% de la población metropolitana vive en barrios populares. El ritmo de crecimiento de la capital es superior al de la república. Mientras la primera tuvo una tasa

de crecimiento medi-anual de 3,7% entre 1972-78, la segunda sólo tuvo 2,5% en el mismo lapso. A julio de 1984, puede afirmarse que cerca del 50% de la población urbana nacional, así como más del 30% de la posición total del Perú, vive en el área metropolitana de Lima. La estructura física, económica y política de la ciudad no estaba preparada para recibir a los migrantes, por lo cual se vieron obligados a organizarse y a forzar al sistema formal. Las invasiones de terrenos fueron y son una verdadera avalancha, y resisten a la represión policial hasta que por fin logran conseguir títulos de propiedad. Y las construcciones que empiezan siendo de esteras terminan de material noble, con trazo de calles, lugares comunales; agua y luz; escuelas, postas médicas y la gran lucha final: que el Estado les ponga transporte. El encuentro de migrantes de diversas zonas del país en un espacio común signado por la absoluta carencia, ha permitido que la secular fragmentación de la sociedad peruana se vaya modificando, y así tradiciones disímiles van haciéndose comunes propiciando una interrelación cultural de nuevo estilo. En esta confluencia de todas las sangres del Perú de la que hablaba Arguedas, el peso de lo andino es evidente, aunque también es cierto que es un andino que trata de acceder a una modernidad que le exige el cambio radical de muchos de sus valores más acendrados.

"Si bien es cierto que los habitantes de Pueblos Jóvenes aparecieron primero como fenómeno migratorio, luego como parte del problema de la vivienda hasta devenir finalmente fuerza de presión sobre el Estado en torno de la distribución de los beneficios urbanos y del equipamiento colectivo, su impacto en la transformación de la ciudad y del país es más profundo" (Degregori, 1986, pág. 21). En este proceso migratorio pueden leerse varios hechos que están originando y son consecuencia al mismo tiempo de la violenta transformación que sufre el Perú en esta década.

1) De estar en condiciones de servilismo o de clientelismo en sus pueblos de origen, los migrantes hacia Lima se convierten en pioneros que invaden tierras y las reivindican. En la construcción de nuevos asentamientos humanos y en su presión al Estado en demanda de servicios, hay un proceso de democratización que estos migrantes introducen, pues están conquistando su ciudadanía en base a igualdad de condiciones sociales con los otros sectores. La conquista de esta ciudadanía no es el resultado de la negociación con el sector formal en los términos de esa formalidad, sino producto de luchas cruentas y sostenidas.

2) La migración constituye en sí misma un acto de modernidad, pues emigran los que no se resignan, los que apuestan por el cambio. No es accidental que el mayor porcentaje de migrantes se encuentre entre los más jóvenes y los más instruidos.

3) La democratización y la modernización que significa la conquista de la ciudad ha sido posible a través de la acción organizada de los migrantes y pobladores. Además, estas organizaciones no son rígidas ni inmutables sino múltiples, flexibles y cambiantes, es decir, una misma persona puede participar en diferentes organizaciones: vecinales, sindicales, provinciales, culturales, religiosas, juveniles, femeninas, políticas, etc. Esta diversificación no solamente les permite ver claramente los puntos que los asemejan

entre sí sino los puntos que los diferencian, como grupo de otros sectores de la sociedad.

4) Esta red de interrelaciones va creando las condiciones para el fortalecimiento de un tejido nacional y una identidad popular (Degregori).

Pero el Estado en el Perú nunca llegó a constituirse en un Estado-Nación bien sedimentado que fuera incluyendo los diversos agregados de la nacionalidad peruana. No hubo nunca una voluntad colectiva nacional popular (en la concepción de Gramsci), por el contrario la parcial integración del país se debió sobre todo a la expansión de un mercado interno que, sin embargo, no surgía de la voluntad de los actores peruanos sino de la inserción del Perú en la división internacional del trabajo. En el nivel de las organizaciones populares, el proceso también queda trunco porque no hay una voluntad hegemónica por parte de este sector popular. Es decir, no se pasa de la democratización social a la democratización política.

En la conjunción entre un Estado que pierde espacio político, una crisis económica francamente recesiva, y un movimiento popular en ascenso que no encuentra una representación política consistente, se da un desfase generalizado que es el que permite la aparición y el avance de una propuesta como la de Sendero Luminoso. El proceso de democratización que vive el país se inclina por una radicalidad política en los sectores mayoritarios de la población; pero al mismo tiempo que este proceso tiene lugar, corre paralela la subversión armada, el narcotráfico y la creciente autonomía de las Fuerzas Armadas. Esta situación explosiva, de un movimiento social que apunta hacia la democratización, y de formas sociales institucionales obsoletas, es capitalizada por Sendero, quien se apoya en el antiestatismo de vastos sectores de la sociedad. A diferencia del narcotráfico que busca infiltrar las esferas del Estado, corrompiéndolo, Sendero no ha pretendido nunca capturar al Estado desde dentro. Esta característica del Estado peruano de no haber tomado en cuenta las demandas más elementales de las mayorías nacionales, y de haberse circunscripto a cumplir el papel de gendarme represivo, no solamente ha dejado fuera del sistema oficial a esas mayorías, sino que ha creado en ellas un sentimiento que percibe al Estado como el enemigo. Muchos de estos sectores, disímiles entre sí, se hermanan en cuanto no se sienten representados por el Estado: los campesinos andinos, productores de coca del Alto Huallaga, los jóvenes urbanos y los vendedores informales, todos ellos tienen eso en común. Por su parte, la estrategia antisubversiva ha puesto —mediante su ineficacia— en evidencia la obsolescencia del sistema político peruano, incapaz de modificar sus parámetros de acción de manera imaginativa y en concordancia con el movimiento de la sociedad hacia la democracia.

Uno de los rasgos más característicos de la sociedad peruana es su acendrado verticalismo y autoritarismo. Este rasgo ya está inscripto en la personalidad andina antes de la llegada de los españoles, y se anuda con el autoritarismo que los europeos traen. Es decir, el autoritarismo se instala en el Perú desde los ámbitos más públicos (relaciones con el Estado, los sindicatos) hasta los más privados (el patriarcado de la familia). Por lo tanto, hay una tensión continua y profunda entre esos rasgos idiosincráticos y las ten-

dencias democratizadoras y horizontales que han surgido en el movimiento popular como resultado de tener que enfrentar la crisis de manera muy puntual, cotidianamente. Una propuesta como la de Sendero se inscribe en el vértice de esta contradicción, pues si bien aprovechó el autoritarismo "natural" de la sociedad peruana, también debe enfrentar la tendencia horizontalizadora del movimiento popular. Sendero lleva ese verticalismo hasta límites verdaderamente extremos, donde las directivas se acatan sin discusiones ni murmuraciones. En un movimiento popular que ha luchado denodadamente por conseguir el derecho a opinar y ser oídos, el verticalismo de Sendero no encuentra el terreno más propicio para sus prácticas. Por eso Sendero fracasó ahí donde hay organización política: no puede entrar en sindicatos y en el caso concreto de Puno, fue el campesinado organizado quien los expulsó de la zona, y no la represión ciega de la Fuerza Armada. En el último Paro Nacional de junio pasado, Sendero no pudo infiltrarse ni provocar desorden. Es decir, parece ser que solamente con la construcción de una democracia popular es posible quitarle espacio a la militarización de ambas orillas, que ya ha producido en lo que va de la década alrededor de doce mil muertos. El movimiento popular, obviamente, no es solamente organización política en un determinado sentido. Es también, y sobre todo, la construcción de una identidad y de una cultura alternativas, categorías éstas que no son simples epifenómenos de lo económico, sino que tienen especificaciones propias que es preciso conocer y respetar. Ese gran movimiento cultural se desenvuelve vertiginosamente fuera del sistema económico, social y político vigente, pero también fuera de las opciones políticas de una izquierda que dice representarlo. Es esa construcción de la cultura popular lo que nos indica la tendencia histórica del país (cuyos resultados no son garantía *per se*).

Movimiento cultural

Educación

Frente a la visión oficial acerca de la historia del Perú, que resalta positivamente la presencia de la cultura occidental, va surgiendo una visión crítica que lee el proceso peruano desde otra óptica. Es una visión del país que, sintetizando ideas largo tiempo vigentes con otras distintivamente nuevas, va ganando audiencia entre los sectores populares, moldeando cada vez con más fuerza sus opiniones sobre lo que el Perú es, ha sido y puede ser (Portocarrero, 1989, pág. 104). La verificación de que la historia del Perú es una sucesión de fracasos y humillaciones, es lo que posibilita una preocupación por rechazar las versiones oficiales y buscar las explicaciones desde otras perspectivas. Según la versión oficial, el destino del país está en un mestizaje conducido por el sector criollo, esencia de la peruanidad. Tal perspectiva no coincide con el sentir de la mayoría de la población, de ahí que haya sido posible la elaboración de otras lecturas. La religiosidad secular del pueblo peruano brindaba una explicación coherente a la secuela

de sufrimientos del país. La decadencia de la religiosidad colonial debilita la justificación trascendente del sufrimiento y cuestiona la legitimidad de la dominación tradicional. El oprimido ve en su situación ya no la prueba de Dios sino la conveniencia de otros hombres (Portocarrero, 1989). Este cambio de mentalidad es consecuencia y a la vez sustento de la difusión del marxismo, que proporciona los elementos ideológicos que permiten explicar de manera científica la historia del Perú. Así, el pueblo aparece como estafado, siendo preciso un despertar de la conciencia nacional. Coherente con los postulados de Marx, se entiende que hay dos ejes fundamentales para entender —y liberar— al pueblo oprimido: el factor económico y la lucha de clases.

Es en el espacio de la Universidad Nacional de la década del 60, que se gestó el núcleo ideológico de la idea crítica, debido a las profundas transformaciones que tienen lugar: el APRA pierde definitivamente el control del movimiento estudiantil, emergiendo la izquierda marxista como el grupo hegemónico incuestionado. A esto hay que añadir la expansión explosiva de la matrícula en las universidades, lo que permite la entrada masiva en la universidad de amplios sectores antes marginados. Son los profesores de educación y ciencias sociales los que trabajan y difunden la nueva visión del país. Por su parte, los alumnos que vienen de los sectores marginales se deciden por estas carreras profesionales debido a la poca exigencia de los estudios y a la relativa facilidad para conseguir empleo en esos rubros. Para hijos de campesinos o hijas de empleados o pequeños comerciantes, la carrera magisterial resulta una alternativa atrayente; de ahí que la Facultad de Educación fuese la más radicalizada de la universidad en el dictado de sus clases. Su acceso a la bibliografía especializada es por lo general muy reducido debido tanto a lo exiguo de las remuneraciones como a la falta de incentivos. A los problemas señalados se suma en provincias, la casi inexistencia de librerías; los materiales bibliográficos accesibles al profesor son las revistas chinas o soviéticas, separatas mimeografiadas, manuales de tecnología educativa vendida por los ambulantes o en alguna feria del libro organizada en el local del SUTEP (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, abiertamente marxista) o en la universidad, donde pueden ser adquiridos a precios módicos (Portocarrero, 1989, pág. 117). Así, la visión crítica de la sociedad va ocupando cada vez mayor espacio. Desde el dirigente sindical hasta el profesor escolar, hay una creciente preocupación por la realidad nacional, percibida como un oprobio que es imperativo superar.

En el país se ha experimentado durante los tres últimos decenios una fuerte expansión educativa. En 1961, el 44% de la población con cinco años y más no tenía nivel educativo, porcentaje que se reduce a 30 en 1972 y a 16 en 1981. De manera inversa, este mismo grupo ha incrementado de 47% en 1961 a 51% en 1981 su nivel de educación primaria. La extensión de la cobertura escolar en este período ha logrado incorporar y retener en el Sistema Educativo a la niñez de tal manera que esta retención se ha ido traduciendo en un aprendizaje equivalente a 2,6 grados en 1961; 3,7 grados en 1972 y 4,6 grados en 1981; para 1985 se llega a 5,2 grados. Lo anterior

ha contribuido a la reducción del analfabetismo en la población de 15 y más años, que de un 38,9% en 1961 ha bajado a 17,4% en 1981. Asimismo, la tasa de escolaridad del 34,6% que observa el grupo poblacional de 3 a 24 años en 1961, casi se ha duplicado en 1984 hasta alcanzar el 67,9%. En los períodos intercensales desde 1961 hasta 1984, las estadísticas indican que las tasas de crecimiento promedio anual de la matrícula han sido mayores a sus similares poblacionales. Así, mientras la población de 3 a 24 años creció anualmente de 1961 a 1972 en un 3,2%, la población escolar lo hizo al ritmo de 7,0% anual; de 1972 a 1984 el crecimiento de la demanda fue de 2,6% y el de la matrícula 5,0%. La evolución de la educación inicial desde 1961 presenta las cifras siguientes: en 1965 eran atendidos en este nivel 3 de cada 100 niños, indicador que ha ido mejorando hasta señalar para 1984 una atención de 32 niños de cada 100. Esta mejora sustancial se debe a que durante el último decenio el país ha asumido la forma de educación no escolarizada como alternativa innovadora para reducir los déficits de atención educativa sobre todo en educación inicial, donde los agentes educativos, familia, educando, profesores, comunidad y Estado, se integran de manera más directa y visible.

En cuanto a la educación primaria, el 95% de este grupo poblacional (entre 6 y 11 años) está dentro del Sistema Educativo. En 1972 la tasa de escolaridad de este grupo fue de 76% aumentando a 80% en 1981 y a 82% en 1984. Entre 1972 y 1984 la educación primaria de menores se expandió a una tasa promedio anual de 3%, la cual es mayor que la tasa de crecimiento demográfico intercensal que fue, del 2,6%. La educación secundaria, por su parte, se ha visto incrementada en un 6,3% entre 1974-1985, mientras la tasa anual de crecimiento de esa población (entre 12 y 17 años) fue de 2,8%. En 1972, accedían a la enseñanza secundaria 34 de cada cien jóvenes, elevándose esa tasa a 53 en 1985. La demanda efectiva sigue subiendo rápidamente no sólo por el crecimiento del grupo de edad sino también porque se incrementa el porcentaje de los mismos que termina la primaria y desea continuar sus estudios, lo cual representa una fuerte presión por mayores recursos financieros, materiales y humanos. A partir de este nivel se puede apreciar que el sistema educativo se convierte en uno de los factores condicionantes de la movilización poblacional desde el área rural hacia la urbana. De 1.403.649 alumnos que cursaban la secundaria en 1981, el 93,1% lo hacía en zonas urbanas; sin embargo, la población rural reunía el 35% del total.

Una gran masa de jóvenes que egresan de la educación secundaria pugnan por ingresar al nivel superior. Una serie de fenómenos socio-económicos y educativos, entre los que se destacan la presión de la educación primaria y secundaria, han creado una fuerte demanda por estudios superiores, especialmente universitarios que anteriormente eran casi la única opción para este nivel. El aumento de la matrícula universitaria, excesiva para su capacidad instalada pero deficitaria para los contingentes de egresados de secundaria, ha llevado a la formación de profesionales cuyas especialidades no siempre corresponden a la oferta del campo laboral ni están de acuerdo con las prioridades del desarrollo nacional. (de 131.639

matriculados en las mismas universidades en 1981, y a 358.337 en 1985). La demanda de matrícula para el nivel educativo superior fue de 9,2% en 1972, de 15,6% en 1981 y de 16,7% en 1985.

Como un complemento de la educación que se imparte en los diferentes niveles, se ha formalizado la modalidad de educación especial, ocupacional y a distancia. En la última década, la atención del sistema educativo se ha incrementado en un 48% pasando de 4.460.223 alumnos en 1975 a 6.583.384 en 1985, observándose en este lapso un aumento de la participación del sector no estatal que del 15% pasó al 16%. Las modalidades de educación especial y ocupacional que en 1975 constituían el 2% del total de alumnos del sistema, en 1985 alcanzan el 2,3%, incremento que si bien se relaciona con el total no es significativo. Al analizarlos horizontalmente se aprecia que la educación especial ha crecido en un 111%, correspondiéndole al Estado un aumento de 131%, por lo que en 1985 atiende a 83 de cada 100 inscriptos en esta modalidad. En cuanto a la educación ocupacional ha ido cobrando mayor presencia el sector no estatal, el cual en 1975 atendía al 37% de los alumnos registrados, y en 1985 alcanza el 56%. La educación ocupacional está destinada a los adolescentes y adultos. Integra la acción educativa con la preparación y perfeccionamiento de la actividad laboral. La población femenina es la que más concurre a esta modalidad, pues siete de cada diez alumnos son mujeres; y aunque este servicio se da en casi todo el país, Lima acapara el 50% del alumnado. De acuerdo con el Censo de 1981, de los 5.169.660 pobladores de 15 años y más de edad que tenía el país como población económicamente activa, 625.329 poseían algún grado de estudios superiores que los calificaba para desenvolverse en el campo laboral, quedando el 88% restante presionando las instituciones de educación superior.

No obstante este incremento en la cobertura del sistema educativo oficial, la relación del sector educación con los restantes del país no presenta el mismo incremento. Si observamos los gastos del Gobierno Central en el sector educación y universidades públicas, el desinterés oficial en educación es alarmante. El decrecimiento del gasto en educación con respecto al Presupuesto Nacional es sostenido; del 35% en 1960 al 9,6% en 1985. El gasto en universidades sigue una pauta similar (siempre con respecto al Presupuesto Nacional), de 3% en 1960 a 2,2% en 1985. Los aportes del Tesoro Público por alumno universitario decrecieron de 5.777 (miles de soles constantes de 1960) en 1960 a 2.463 en 1985. Inversamente a este decrecimiento en la inversión estatal con respecto a la educación, la población que se educa ha ido en gran aumento. En 1960, las universidades nacionales registraban 27.040 alumnos (89,4%) y las privadas 3.207 (10,6%); en 1976, las nacionales tenían 138.505 (72,3%) y las privadas 53.099 (27,7%); en 1986, las universidades nacionales tenían 250.600 alumnos (66,3%), y las universidades privadas 127.600 alumnos (33,7%). Solamente la población universitaria creció en el Perú en el orden de 1.250% entre 1969 y 1986. Con respecto al PBI, el presupuesto en educación fue decreciendo: 4,7% en 1965 y 3,2% en 1984. Si comparamos las cifras con otros países de la región (cuadro 1), vemos que el Perú ocupa

Cuadro 1
Gastos Públicos en Educación

País	% del total de Gastos Públicos	% del PBI
Venezuela	28,3	8,1
Bolivia	25,8	7,9
Colombia	21,5	2,9
Brasil	18,4	3,3
México	17,2	4,3
Panamá	17,5	5,3
Honduras	16,9	4,3
Rep. Dominicana	16,0	2,3
Paraguay	15,1	1,7
Perú	14,7	3,3
Jamaica	14,6	7,5
Guatemala	12,4	1,8
Trinidad y Tobago	12,3	5,4
Guyana	9,6	8,9
El Salvador	8,5	3,8

Fuente: Extraído de Tedesco, Juan Carlos, *El impacto de la crisis en el sector educativo. Situación actual y perspectivas futuras*, UNESCO, 1987, cuadro pág. 20.

Cuadro 2
Países de Nivel Medio de Desarrollo
Evolución: 1960-1982

	Tasa de crecimiento anual promedio per cápita	Tasa de crecimiento anual promedio Agricultura	Tasa de crecimiento anual promedio Minería	Tasa de crecimiento anual promedio Exportaciones	Porcentaje con educación secundaria o superior sobre total de población juvenil
	1960	1960	1960	1960	1980
Perú	1,0	2,0	2,8	2,7	19
Otros países	3,6	3,2	6,2	3,8	52

Fuente: Richard Webb.

una de las tasas más bajas al relacionarse gasto público en educación con Presupuesto y PBI; y otro tanto en los niveles de desarrollo sectorial (cuadro 2); sin embargo, el mismo cuadro 2 está indicando que el Perú, paradójicamente, tiene los índices más altos de la región en lo que se refiere a la población con niveles educativos secundario y superior.

Si bien es cierto que seguramente somos uno de los países con más alto índice de alfabetización en la región, también debe ser cierto que nuestra educación debe ser de las de más baja calidad. El deterioro de la calidad educativa del país es por todos aceptada, y si la que más se ha deteriorado ha sido la del sistema oficial (por la enorme presión demográfica), también la educación privada, aun la más cara y sofisticada, no alcanza buenos índices de calidad. De ahí que los niveles de conocimiento de los alumnos que ingresan a las universidades sean alarmantemente bajos. Este deterioro del sistema educativo en general —incluido el nivel superior— se debe a una explosión demográfica, a un acelerado proceso de democratización que pugna por mayor acceso a servicios, y a una crisis económica que no permite esos incrementos; además de un Estado que responde a los requerimientos del modelo neoliberal, es decir recesivo. Frente a esta situación, se ha ido creando un sistema educativo paralelo al estatal y al privado "tradicional". Este último sector ha incrementado sus costos hasta niveles inalcanzables para la mayoría de la población, reduciéndose la educación privada a sectores que ocupan los niveles económicos más altos de la escala. Y como el sistema educativo oficial no da a basto porque no crece al mismo ritmo que la demanda social, los sectores populares han ido desarrollando un sistema paralelo, copiado en sus postulados básicos al oficial, y que trata de ajustarse a demandas más ideológicas que reales. Pues es obvio que el sistema económico del país, su estructura productiva, no puede hacerse cargo de toda la demanda profesional que proviene de la sociedad civil. Han proliferado un sin fin de academias donde puede aprenderse de todo, y la mayoría tiene valor oficial. Lo que no se ha controlado es la calidad de la educación, que es bajísima. Es decir, hay una masa juvenil que crece geométricamente y que va llenando este sistema educativo cuasi informal, donde se prepara para ocupar plazas de trabajo que no existen. La Universidad Nacional de San Marcos, por ejemplo, recibe anualmente 50 mil postulantes para 3.500 vacantes únicamente. Es por eso que las academias preuniversitarias "con ingreso garantizado a las universidades" han proliferado como hongos en cada barrio de la ciudad. El Estado es incapaz de planificar la producción, y por ende es incapaz de orientar las tendencias profesionales y ocupacionales que el país requiere. Si en algo ha fracasado estrepitosamente el Estado neoliberal de esta década, es en el sistema educativo, totalmente rebasado por la presión popular. Si entrar en el sistema educativo es una de las aspiraciones más sentidas del sector popular, habiendo luchado por ello denodadamente como una manera de ser admitido al sistema, esa entrada significa hoy una de las más grandes frustraciones de ese sector: cuando por fin consigue entrar, esa entrada no le sirve casi para nada. Y lo dramático del asunto es que el sistema paralelo que ha creado para acceder a la educación, copia en lo ideológico al mismo siste-

ma oficial que ha fracasado. A esto hay que agregar que el gremio de maestros es sumamente radicalizado, transmitiendo a sus alumnos la convicción de que deben exigir por sus derechos. Es aquí, pues, en el sistema educativo donde se vertebran las contradicciones más agudas del sistema liberal, y donde seguramente los enfrentamientos serán decisivos (ya lo son).

Cultura andina

Siempre se dijo que Lima no era el Perú, como sostenía la ideología oficial centralista; sin embargo, hoy esta frase cobra un peso real debido al proceso migratorio interno del país. En 1940, el 64,61% de la población vivía en las zonas rurales, modificándose esta tasa a 35,14% en 1981. Estas cifras se han invertido en la actualidad pues más del 66% vive en las zonas urbanas. Según el censo de 1981, Lima ocupa el primer lugar con el 27% de la población total del país (Consejo Nacional de Población). Una de las características más nítidas de la ciudad de Lima es su inercia en la dinámica de la economía nacional. Ha subordinado a las regiones a partir de su propia lógica centralista. Esta dominación no es únicamente económica, sino también ideológica debido a la difusión, desde Lima, de los medios masivos de comunicación. A esto hay que añadirle, obviamente, su peso político y administrativo, debido a la ausencia de canales adecuados entre las instituciones públicas y la sociedad; el enfrentamiento violento se ha convertido casi en la vía exclusiva de toda negociación. De esta manera, Lima se constituye en el eje básico del Patrón Nacional de Acumulación, así como el irradiador ideológico por excelencia. (Caravedo, 1987, pág. 25).

El claro crecimiento industrial que se produce entre 1950 y 1975 estuvo asociado a un cambio en el tipo de ramas predominantes, perdiendo fuerza la industria tradicional. El modelo sustitutivo que se diseñó paradójicamente incrementó la importación de insumos y maquinaria, limitándose la capacidad de absorción de mano de obra. El peso de la industria en relación a la importación fue muy alto, llegando a representar el 70% del total importado. Por estas razones el dinamismo urbano de la población no encajó adecuadamente en la industria ensambladora. La recesión económica e industrial de la segunda mitad de la década del 70 y la gran crisis de los 80 alimentó el sector terciario, y la capacidad instalada en la industria se encontró ociosa. Lima, entonces, ha tendido a concentrar la producción nacional bajo estas circunstancias: en 1981, Lima concentra el 57,1% del PBI total del país. No obstante el enorme peso de la industria en el área de Lima, es el sector terciario el que predomina en la capital, lo cual ha cambiado la estructura económica y la fisonomía cultural. A inicios de los 80, el 63% de su PBI provenía del sector servicios (Caravedo, 1987, págs. 34-41).

Ciertamente, el flujo migratorio se orienta de lo rural hacia lo urbano y de la sierra hacia la costa. Al ser la población rural preponderantemente andina, la masiva llegada de la cultura andina hacia la costa —principal-

mente Lima— ha determinado un cambio de la fisonomía urbana, pero también una alteración sustancial de los valores andinos.

Ciertamente, la pauperización del agro —especialmente el serrano— ha sido y es un factor migratorio decisivo, que se acentúa cada vez más en la medida en que el patrón de desarrollo del país se diseña a partir de una industria dependiente. Pero también juega un rol importante la penetración masiva de medios de comunicación que transmiten estilos de vida alternativos que son percibidos como "modernos", vale decir "mejores". La masificación de la educación a partir de la década del 50, el acceso a mayores fuentes de información, ha hecho posible que el sentimiento de exclusión que siempre caracterizó a la población andina con respecto al resto del país se vea alterado; ahora esta población demanda un lugar paritario, y para ello es preciso conocer las reglas de juego del dominador (el mito de la escuela del que nos habla Rodrigo Montoya: solamente a partir de la educación que imparte la cultura dominante será posible entrar a competir". Todo esto no solamente significa emigrar hacia el centro desde donde se irradia lo moderno, sino adaptarse a ello. Un proceso semejante obliga a adaptaciones: los estilos y valores de la cultura andina no pueden ser trasladados tal cual a la nueva realidad urbana y costeña, habiendo un deseo consciente por integrarse a la nueva cultura a partir de la asunción de sus valores. De esta manera, lo que en el contexto andino y rural forma parte constitutiva de su cultura —vestido, fiestas, idioma— pasa a adjetivarse en una ciudad como Lima: no se pierden las costumbres, pero se las resitúa; por ejemplo, el vestido tradicional no es usado cotidianamente sino únicamente en determinadas ocasiones celebratorias; las fiestas se siguen practicando, pero más como rito que como sustento ideológico. A pesar de la persistencia de ciertos valores andinos, éstos han pasado a convertirse en objetos venerados, casi santuarios de museo. El caso del idioma es, quizá, el más claro: en 1972, el 68,28% era castellano hablante, mientras en 1981 los castellanos hablantes eran 72,98% (Datos elaborados por Madeleine Zúñiga). Desde luego que hay diferencias sustanciales entre las tasas que se dan en la sierra respecto de lo que ocurre en la costa; pero es justamente la desmesurada importancia de Lima en el contexto nacional lo que permite inferir el proceso social peruano a partir de la tendencia limeña.

La crisis por la que atraviesa actualmente la sociedad peruana no es únicamente producto de sucesos coyunturales específicos claramente discernibles —*impasse* económico y violencia desatada, urbanización acelerada y aparición de nuevos actores sociales— sino resultado de un proceso histórico que se inicia mucho antes de la llegada de los españoles, pero que se estructura de manera dramática en el encuentro entre occidente y los Andes. Este es un país andino donde lo andino —a partir del siglo XVI— ha sido constreñido y vejado. No es de extrañar, entonces, que como reconocieron Basadre y Víctor Andrés Belaúnde, y también González Prada y Mariátegui, lo indígena sea el problema sociológico número uno del país. Y lo sigue siendo, aunque ahora el nudo gordiano de nuestra nacionalidad no se ate ni se desate en la persistencia de la cultura andina y sus valores, sino más bien en el proceso de desandinización por el que está atravesando.

Entender lo que ahora sucede en el Perú supone dilucidar un proceso histórico sumamente complejo en el cual se fue estructurando una idiosincracia que en estos momentos es un punto de llegada y de ruptura.

Pensadores como Garcilaso, Guamán Poma, Mariátegui y Arguedas parecen coincidir —aunque de manera distinta— en que la pertinencia de conceptos como nación, el idioma castellano y de un programa político que los estructure, denotan la presencia de occidente como un hecho irreversible que ha logrado crear una matriz cultural donde lo occidental no es el único componente, pero es el que comanda la matriz. La nacionalidad, entonces, es una instancia por construirse a partir de la opción modernizadora que occidente supone (al menos en teoría). Sin embargo, España no fue la cimentadora de esa modernidad que se abrió paso con el capitalismo europeo. El proceso histórico español, la formación de su nacionalidad, lo anclaron paradójicamente en una feudalidad ideológica que pasó a América. Por su parte, la sociedad andina, hasta el siglo XVI, no había logrado implementar un Estado normativo y hegemónico, producto de la estructura endogámica del sistema de parentesco de los Andes; todo lo cual posibilita la entrada de los valores españoles con excepcional rapidez; los vencidos asumen aquellos valores por provenir de los vencedores, y esos valores, que se habían estructurado en la lucha contra los moros, apuntaban a la pureza racial, a la división de la sociedad en castas y al consiguiente desprecio por toda lateridad fuera de la casta española.

En el siglo XVI, entonces, se encuentran una serie de factores que propician la entrada de la cultura andina, no en la modernidad occidental, sino en la feudalidad ideológica española. Por consiguiente, a partir de ese momento, la ideología andina se reestructurará predominantemente desde la óptica española. Esto nos estaría llevando a considerar que lo que durante cinco siglos hemos tenido como característico de lo andino, ha sido en buena parte la visión feudal española de lo andino. Más exactamente lo que la feudalidad ideológica española quiso que fuera lo andino. Y todavía más: la ideología andina se asumió a sí misma desde aquella óptica ibérica del siglo XVI. De ahí los desesperados esfuerzos de Garcilaso por construir una nacionalidad que forzara a la modernidad, no sólo a la cultura andina sino también y principalmente a la española. Y la angustia de Guamán Poma por impedir una mezcla racial que intufía, efectivamente, como una pérdida de la identidad andina.

Nuestra dependencia de occidente nunca significó un acceso a la modernidad: ni en el siglo XVI, ni tampoco respecto de Estados Unidos a inicios del presente siglo. En ambos casos se reforzó la idiosincracia precapitalista de la sociedad peruana. No puede extrañarnos, por lo tanto, que la ideología oficial de turno se haya esforzado por mantener, durante estos cinco siglos, las condiciones de ese precapitalismo; vale decir, había que mantener puras aquellas raíces andinas que los españoles fundaran en el siglo XVI. Por otra parte, la conducción "occidental" de la matriz cultural peruana tuvo siempre muy poco de occidental y mucho más de esa feudalidad ideológica española a la que hemos aludido. Es decir, la visión de un Perú moderno en la costa y de un Perú atrasado en la sierra desde el punto

de vista económico, no se condice con una unidad ideológica que habría estructurado nuestra realidad, y que ciertamente nunca nos puso en la mira de ninguna modernidad existente.

Cuando a mediados del presente siglo el sistema político oligárquico empieza a deteriorarse ostensiblemente, la pequeña burguesía urbana que lo reemplazará deberá cambiar de postura frente a la cultura andina. Cambio de postura que, sin embargo, no conlleva un cambio ideológico: la cultura andina seguirá siendo entendida a partir de los mismos parámetros establecidos por el pensamiento oligárquico, sólo que ahora esos valores andinos serán asimilados a un discurso que los acepta positivamente. Lo que antes era malo ahora es bueno, pero en el fondo se trata de lo mismo: mantener a la cultura andina en aquellas raíces que inauguran en el siglo XVI. Así, la pequeña burguesía que surge a partir de la década de 1960 se vuelve más papista que el Papa, convirtiéndose en una defensora acérrima del andinismo que heredó de la oligarquía. Como el pueblo andino empieza a moverse, —consecuencia del proceso de urbanización y de industrialización de mediados del siglo XX—, es preciso controlar ese movimiento. La pequeña burguesía necesita un sustento ideológico que no puede —ni quiere— encontrar en las capas populares políticamente organizadas. Deberá echar mano del contingente andino para enfrentarse a la oligarquía, revalorando aquello que la oligarquía despreció. Pero ese uso de los valores andinos tendrá que ser estrictamente controlado, por eso lo convertirá en folklore y pieza de museo. Creo que esta actitud puede explicar mejor que nada el fracaso de aquellos populismos pequeño burgueses: siguieron viendo a la cultura andina con los mismos ojos que los españoles del siglo XVI, aunque ahora les convenía verla positivamente.

En aquella gran crisis del siglo XVI, la sociedad andina se dejó atar a los intereses occidentales. Ahora, finalizando el siglo XX, esa misma sociedad andina parece haber entendido que ha llegado la hora de desatarse de aquellos intereses occidentales que no son, por cierto, los mismos intereses occidentales de hoy.

Si el problema sociológico número uno del país es la posición que ocupa la cultura andina, es obvio que el proceso de modernización por el que atraviesa el Perú pase principalmente por redefinir esa posición. Según lo observado, no han sido los sectores "occidentales" del país los que han estado interesados en la modernización. No puede extrañarnos, entonces, que no sea de sus canteras de donde provienen los ímpetus modernizadores. Una ideología que proviene directamente de la feudalidad española del siglo XVI y que se ha transformado muy poco desde aquel entonces hasta aquí —como lo prueba su visión de lo andino— no está capacitada para entender que modernización en el Perú significa, antes que nada, democratización; que esta democratización, aun dentro de los parámetros del liberalismo, supone un mínimo de horizontalidad que haga posible el encuentro de derechos adquiridos en un espacio político común. Algo de eso se está dando en el Perú, y si ahí adhieren amplios sectores de la pequeña burguesía, es sobre todo por la enorme presión de los sectores populares que se han organizado políticamente a partir de la urbanización del país.

Las ciencias sociales de las últimas décadas han producido evidencia suficiente para aceptar como cierto que es la experiencia migratoria provincial hacia Lima la que está determinando conductas culturales que inauguran nuevas relaciones sociales en el país. Parece claro que, desde la sociedad andina, por primera vez, empieza a construirse el concepto de nación por encima de los asfixiantes regionalismos de siempre. La ausencia de nación —que tanto angustiara a los pensadores peruanos desde Garcilaso en adelante y que nunca estuvo presente en los proyectos políticos oficiales —empieza a tomar cuerpo a partir de una cultura andina no sólo en proceso de desandinización por la fuerza de los cambios, sino ella misma interesada en esa desandinización, como ya lo percibiera Arguedas a partir de sus observaciones del Valle del Mantaro y de Puquio. La identidad nacional que se está formando tiene, entonces, como actor privilegiado a esa sociedad andina que cambia de identidad. Este hecho positivo —el encuentro de una identidad nacional— proviene, no obstante, de una cultura que ha estado sometida durante cinco siglos a una dominación vejatoria y alienante. Siendo así, hay que preguntarse por los valores que esa cultura está aportando a la mencionada identidad. Ya Mariátegui admitía que la cultura andina no había sido capaz de crear nuevos valores después de la llegada de los españoles, limitándose tan sólo a preservar, mal que bien, lo que ya tenía. Esto nos lleva a una reflexión fundamental: siempre se dijo que la fuerza de la cultura andina le permitió sobrevivir a cinco siglos de bárbara explotación. Sin embargo, habría que preguntarse si esa supervivencia no habría que buscarla en el lugar que la sociedad occidental —antes y después de la independencia— le asignó; es decir, en los límites de la posibilidad humana, para que no desaparezca pero tampoco para que se desarrolle. Si lo andino realmente existente es sobre todo una construcción de la feudalidad española, lo que hoy se estaría desandinizando no sería otra cosa que aquella feudalidad ideológica. Como dije anteriormente: desanudar lo que se anudó en el siglo XVI. ¿Qué significa esto? ¿Que la cultura andina vuelve a aquel punto de partida, al de aquella sociedad endogámica incapaz de estructurar un Estado normativo con posibilidades horizontales? Si a aquella incapacidad para instaurar la norma le agregamos cinco siglos de deprecación cultural, ¿cuál es el resultado?

La sociedad peruana es sumamente vertical y autoritaria, donde el abuso y la arbitrariedad, el engaño y la violencia son monedas corrientes del intercambio social. Semejante idiosincracia es producto de la feudalidad ideológica española, pero también de la idiosincracia social y política andina de aquel entonces. Aun el sistema de reciprocidad andina puede ser visto como la instancia que permite la fluidez de una sociedad vertical. De todas maneras, la forma de inserción del Perú en un sistema mundial de relaciones económicas y sociales, los cambios internos que esto supone, como el proceso de urbanización, cinco siglos alienantes que alguna lección dejan, así como cambios ideológicos a nivel nacional e internacional producto de la crisis del oficialismo, cualquiera que éste sea, han inducido a que la sociedad andina entienda que debe moverse hacia el cambio, y no únicamente resistir; y es ese movimiento el que nos ha preci-

pitado —entre otras cosas— en el remezón estructural en el que estamos inmersos.

Como mencioné anteriormente, la presencia andina siempre ha sido maniatada, circunscripta a espacios económicos, políticos y sociales muy concretos. Primero fue el colonizador español; luego la oligarquía republicana; últimamente la pequeña burguesía populista teñida de nacionalismo. Sin embargo, en este movimiento andino que pretende cambiarse y cambiar la sociedad nacional, hay elementos que apuntan a una horizontalidad social inédita en el país. No basta con decir que es el pueblo andino; hay que precisar más: es el migrante andino en tanto encuentra una realidad distinta a la cual debe adaptarse, pero domándola si de veras quiere sobrevivir. Yo me atrevería a estrechar aun más las precisiones: ese pueblo andino en la urbe conoce la experiencia de organizaciones barriales que corren paralelas a las organizaciones estatales y sindicales (lo que no significa que la experiencia estatal y sindical no sea valiosa en lo que tiene de aprendizaje urbano). Pero si me permiten, quiero reducirme un poco más: el migrante andino en la ciudad que tiene experiencia barrial y que además es mujer.

Es decir, el núcleo de la matriz del cambio cultural estaría centrado allí, en la visión femenina de la marginalidad migrante de provincia. Hay en ese núcleo una posibilidad de liberación que veo como una de las principales salidas. Desde luego que las acechanzas se multiplican, no sólo desde la ideología dominante —que es compartida por los denominados hombres y mujeres— sino también desde ideologías alternativas que en este punto coinciden con los dominadores. Esto no debe entenderse en el sentido de que las organizaciones barriales conducidas por mujeres están libres de verticalismo y arbitrariedad; pero si en alguna parte hay *atisbos* de horizontalidad, es en algunas de estas organizaciones.

Ahora que la sociedad andina se mueve nuevamente con inusitado énfasis, me pregunto si un fenómeno como Sendero Luminoso no responde a esa tradición verticalista cuyo fin último parece ser el maniar todo movimiento de la cultura andina. Antes desde la extrema derecha, más recientemente desde las capas medias, y ahora desde la extrema izquierda parecería que asistimos a un pacto que se va pasando la posta para que el problema sociológico número uno del Perú no pierda su primer puesto, para poder reeditar un verticalismo ancestral que siga impidiendo la instauración de toda norma.

No puede negarse que desde la pequeña burguesía de izquierda se han venido dando alternativas de cambio importantes; las organizaciones barriales dan buena cuenta de ello. Y si bien en esa pequeña burguesía aún subsisten visiones feudales de lo andino —y de las relaciones sociales en general— también hay posiciones que asumen lo andino desde una realidad occidental irrenunciable, estableciendo de esta manera el diálogo enriquecedor que quería Mariátegui y que cierra las puertas a toda restauración reaccionaria. Por el lado de lo andino nos encontramos con la misma dicotomía: fuerzas que significan cambios sustanciales hacia la horizontalidad, pero también elementos disociadores capaces de reeditar verticalismos ancestrales.

Es preciso intermediar las relaciones interculturales a partir de un programa político que deje de lado, de una buena vez, las concepciones apriorísticas que nacen de una mentalidad feudal que con el tiempo se teñió de mala conciencia. Es necesario tener un gran pragmatismo para construir la cultura popular y nacional que nunca hemos tenido. Hay mucho de ese pragmatismo en algunos movimientos andinos de las últimas décadas. Sólo las fuerzas más reaccionarias pueden ver raíces nacionales donde sólo hay un proceso histórico signado por relaciones asimétricas donde la cultura andina fue reelaborada a partir de utopías tendientes a impedir su modernización y su avance. La sociedad andina vuelve hoy a enfrentarse a sus mitificadores de siempre, y en esta nueva confrontación necesitará de aquellos sectores de otras culturas que entienden que la única manera de vivir con dignidad es creando una nacionalidad inédita. Es entonces el concepto mismo de identidad el que hay que revisar. Quizá en el Perú no pueda hablarse todavía de identidad cultural sino de una identidad cívica expresada en un Estado plural, democrático y popular. Esto estaría demostrando que en el Perú recién estamos en la etapa de establecer la convivencia, punto inicial de toda identidad. Como en el siglo XVI; donde la preocupación fundamental era aprender a convivir, allí estamos todavía. Y hoy como en aquel entonces, esa convivencia pasa por la construcción de una nación.

Medios de comunicación

El medio de comunicación masivo por excelencia en el Perú es la radio, comprobándose que más de dos millones trescientos mil radioreceptores sintonizan diariamente durante un mínimo de dos horas las diversas emisoras del país, aproximadamente doscientas (Ballón). Y es sobre todo con el proceso de expansión capitalista de la década del 50 que la radiofonía empieza a propagarse. A mediados de aquella década, el número de emisoras llegaba a 159 en todo el país, existiendo por lo menos una en cada departamento de la República. En la costa se concentraba el 53%, en la sierra el 39% y en el oriente el 8% de las emisoras. En 1972, el número de emisoras llegó a 303 en todo el país, conservándose más o menos las proporciones anteriores.

Pero es a partir del régimen reformista de Velasco Alvarado que la radiodifusión de 1970 alteró sustancialmente el estatus de la radiodifusión: el Estado controlaría el 15% de las acciones de las emisoras comerciales, mientras en el plano de los contenidos se estipuló que por lo menos el 60% de los programas de cada emisora deberían ser productos nacionales, se prohibió todo programa discriminatorio y se limitó la transmisión de programas violentos para después de las 9 de la noche. Con respecto a la publicidad, se prohibieron los mensajes alienantes y se controló el empleo de idiomas extranjeros (especialmente el inglés). Los sustentos para esta reglamentación estaban basados en tres preocupaciones: como promoción de la producción nacional; como resguardo al patrimonio cultural propio y como instrumento de apoyo a la seguridad nacional. Incluso en la ley de

educación se establecía el rol educador de la radiodifusión, aunque nunca se llegó a implementar esa disposición. En 1978, el 21% de la programación musical era en inglés, y en algunos casos ese porcentaje llegaba hasta el 70%.

Al asumir Belaúnde nuevamente al poder, los medios de comunicación vuelven mayoritariamente al sector privado. Al devolverles estos medios a sus antiguos propietarios, éstos se beneficiaron triplemente:

a) Todos aquellos que fueron expropiados por el gobierno militar a través de una amnistía tributaria muy amplia, recibieron teóricamente una suma similar al valor de lo que les expropiaron.

b) La empresa estatal de radiodifusión modernizó los equipos de muchas emisoras y compró incluso equipos nuevos para algunas de ellas. Desde 1980 viene entregando esos equipos como parte de los activos fijos de las empresas, facilitando así una capitalización acelerada de varios de los grupos económicos que fueron afectados por las expropiaciones.

c) Muchas de las frecuencias de las emisoras que quebraron son disputadas por grupos privados con el beneplácito y aval del Estado (Ballón).

Del total de 189 emisoras que operaban a fines de 1980, 177 lo hacían con licencia comercial y únicamente 12 tenían licencia educativa. "Así, tras doce años, por lo menos, de control formal por parte del Estado, las emisoras y los grupos de poder económico, a través de la Asociación de Radiodifusoras y las distintas agencias de publicidad, han multiplicado sus posibilidades no sólo de controlar los medios, sino fundamentalmente de ejercer la propiedad y el control de los contenidos sin ninguna intervención estatal. Situación ésta más grave en un país como el Perú, donde la radio es un canal fundamental de integración nacional y difusión ideológica entre la población" (Ballón, 1987, pág. 28).

El gobierno de Alan García no ha significado una alteración del patrón neoliberal con respecto a la radiodifusión. El sistema público de emisoras no ha sido mejorado ni incentivado, e incluso una importante red de comunicaciones privadas expropiadas por el régimen militar debido a acciones fraudulentas ha sido devuelta a sus ex-propietarios por el gobierno de García; gobierno que cuenta entre sus principales asesores a uno de los propietarios más influyentes del sector privado de la radio y televisión.

Actualmente, la distribución musical en las radioemisoras es la siguiente:

Música en español	41%
Música internacional en inglés	27%
Música peruana	10%
Música instrumental	4%
Música clásica	2%
Publicidad en programas de música en español y en inglés	16%

Dentro de la música peruana, el acervo andino es ampliamente mayoritario. Hay en la actualidad 80 espacios diarios de música andina de una

hora de duración, mientras los espacios de música peruana no andina (criolla o costeña) solamente llega a las 12 horas diarias. Estos programas de música andina incluyen también mensajes y noticias de las regiones serranas, aspectos de la cultura local, etc. Generalmente se transmiten entre las 3 de la madrugada y las 8 de la mañana, y aunque se ha sostenido que ello se debe a una discriminación de la música andina de los horarios estelares, también es cierto que hay razones de otra índole en la medida en que los usuarios de esos programas empiezan su jornada muy temprano en la madrugada, y que a esa hora la transmisión a distancia (a zonas rurales) es más nítida. Es interesante constatar, sin embargo, que estos programas de música andina tienden a tener más audiencia si se concentran en determinadas regiones provincianas, y no tanto si asumen una postura panandina. Y es que estos programas no sólo sirven de entretenimiento sino, y quizá principalmente, para mantener la comunicación abierta con sus lugares de origen. A esto hay que agregar que los directores y locutores de estos programas son de origen andino y ligados al quehacer artístico, muy conocidos en su medio; se dirigen por momentos a sus oyentes en el quechua regional. Es decir, no son técnicos en comunicación en el sentido formal del término. En cuanto a la financiación, dependen de pequeños comerciantes serranos que realizan actividades relacionadas con la población migrante: agencias de transporte interprovincial, comités de vivienda y urbanizadoras populares, organizadores de actividades artísticas, empresas de discos y de venta de instrumentos musicales andinos; restaurantes, sastres, carpinterías, puestos del mercado, etc.

En el interior del país la gran mayoría de emisoras radiales son comunales y muy pequeñas, con un instrumental pobre. Por su parte, las emisoras limeñas de gran alcance son eminentemente comerciales, lo cual está indicando la inexistencia de programas educativos no solamente por parte de la red privada, sino incluso del Estado, que a pesar de tener una red más o menos poderosa, no implementa programas de servicio a la comunidad rural. A pesar del enorme interés del medio rural por la educación, las políticas oficiales a este respecto no logran suplir esa demanda, dejando de lado las posibilidades que podría ofrecer la comunicación a distancia.

En cuanto al sistema alternativo de radiodifusión, éste puede sintetizarse en los siguientes puntos (Ballón):

a) La gran mayoría de experiencias que se vienen desarrollando y que indudablemente concurren a la construcción de una alternativa radial peruana tiene límites muy precisos, tanto en términos del modelo de comunicación que se postula y que mantiene el esquema vertical y unilineal (emisor/receptor) de la comunicación tradicional, cuanto en las posibilidades de participación directa de la audiencia.

b) El trabajo desarrollado hasta la fecha es fundamentalmente artesanal. Prácticamente sin financiamiento, sin equipo de producción mínimo, la mayoría de experiencias se encasilla en formas radiales convencionales, lo que restringe sus posibilidades de creación y recreación del lenguaje radial.

c) El papel que desempeña la Iglesia Católica y un conjunto de instituciones de promoción y servicios que trabajan en radio tiene un peso hasta ahora decisivo.

d) La presencia de las organizaciones populares, incluso su interés por el medio, aún aparece un tanto limitada, en abierto contraste con su enorme necesidad del mismo. De allí la gran importancia de todas las experiencias de bocinas populares, expresión más directa de la participación de los sectores populares organizados en la radiodifusión.

En este rubro de comunicaciones, las bibliotecas populares ocupan un lugar destacadísimo. Empiezan a implementarse en la década del 70, pero es sobre todo en la presente década en que cobran un gran auge. En realidad, sobre todo son centros comunales, cívicos, cuyas actividades abarcan bastante más que las actividades tradicionales de cualquier biblioteca (almacenamiento de libros que se prestan en consulta). Esta red de bibliotecas populares surge por iniciativa comunal, a partir de organizaciones barriales, y tiene por objeto brindar información y apoyo a la comunidad. No se limitan al acopio de documentos, sino que se preocupan por organizar actividades culturales que van desde encuentros musicales a ciclos de charlas sobre distintos temas, y en la discusión de los problemas más urgentes de la comunidad. Surgen ligadas a hechos muy concretos: programa del Vaso de Leche, Posta Médica, etc. En el aspecto educativo, estas bibliotecas buscan integrar los programas escolares oficiales con la realidad del distrito o de la zona, incorporando para ello diferentes actividades artísticas y recreativas dirigidas a los jóvenes, padres de familia y profesores. Ligado a esto es común la creación de talleres de lectura, a partir de los cuales se ha venido promoviendo la lectura en niños y jóvenes del barrio, relacionándola con los problemas de la comunidad y la recuperación de tradiciones y cuentos con la colaboración de adultos. Lo que prima en la mayoría de estas bibliotecas populares es integrar a la comunidad en base a sus necesidades más importantes, al mismo tiempo que trabajar una identidad propia a partir de sus problemas más cotidianos. Es común a este trabajo el tratar de identificar a los pobladores con su barrio, despertando en ellos su condición de pioneros, de constructores, de responsables de su propio desarrollo sin esperar ayudas externas, o buscándolas de manera creativa. Eso ha llevado a ciertos observadores a preguntarse por el papel integrador que se forja a nivel nacional, toda vez que se le da prioridad a lo referente al barrio.

Si bien estas bibliotecas populares nacen por iniciativa comunal, son autónomas y no reciben ayuda estatal. Hay experiencias que buscan ligarse a la red estatal, aunque defendiendo tercamente su autonomía, inclusive a nivel municipal. Estas bibliotecas son fundamentalmente barriales y están ligadas al movimiento popular barrial. En realidad, la preocupación es por integrar las bibliotecas tradicionales, que lejos de salir en busca de la comunidad se limitan a esperar que el usuario llegue para brindarle casi exclusivamente textos (si es que los tiene). En cambio, el dinamismo de las bibliotecas populares responde a una concepción más abierta, más integral de lo que significa la cultura, adecuándose a las necesidades que la comunidad va encontrando en su desarrollo cotidiano. Si en algún rubro es evidente la

obsolescencia del Estado, es en la red de bibliotecas populares. Y esta diferencia es aun más notable en las bibliotecas populares, también ligadas a la comunidad y cuya extensión de servicios e imaginación en la operatividad son dignas de asombro.

Son generalmente las parroquias, las Juntas Directivas Vecinales y los grupos juveniles los que promueven y sostienen las bibliotecas populares. En la mayoría de los casos, las Juntas Vecinales son las que sostienen económicamente esta experiencia. Los recursos económicos son escasísimos, de ahí que el trabajo sea voluntario, especialmente por parte de los jóvenes que cuentan con más disponibilidad debido a la alta tasa de desempleo en el país. Adscriptos a las bibliotecas populares existen talleres artesanales como un medio de capacitar a los jóvenes en un oficio que les sirva de medio de vida. Es decir, que las bibliotecas populares combinan aspiraciones "abstractas" (búsqueda de una identidad cultural) con aspiraciones concretas (resolución a problemas de sobrevivencia diaria). Por ello su proliferación, porque responden a una necesidad impostergable. Hacia julio de 1987, el número de bibliotecas populares en Lima Metropolitana era de 132, frente a 80 del sector público.

En comparación con la mayor parte de países de América Latina, el número de centros privados de investigación y promoción en el Perú parece ser enorme. Su crecimiento explosivo se ve en su proliferación; de un centro en 1964, se pasa a más de 30 en la actualidad. Esta proliferación responde principalmente al descalabro de las universidades nacionales y al repliegue estatal. Esto permite engrosar el contingente de cuadros medios, vincular a los profesionales con las organizaciones de base, elevar el nivel de profesionalización y acentuar la dinámica nacional de las ciencias sociales (trabajo inédito de Carlos Iván Degregori).

En la actualidad (datos de CONCYTEC), alrededor de 1.700 científicos sociales trabajan en los centros, además de profesionales de otras ramas como agronomía, educación, medicina, ingeniería, psicología, etc. En algunos centros el personal llega hasta 500, mientras en otros son apenas cuatro o cinco; y su campo de estudio va desde el ámbito nacional hasta temas y espacios bien definidos. Los menos se dedican a la investigación-acción, la promoción, la educación popular y la difusión. El campesinado, el desarrollo rural y el agro siguen constituyendo uno de los focos centrales de su interés. Esto explica que a partir de la segunda mitad de la década pasada se rompa la inicial concentración en Lima, multiplicándose en provincias: 43% de estos centros están fuera de la capital. Como bien señala Degregori, los centros surgen y proliferan en el punto de intersección de tres vectores, por los cuales se encuentran tensionados: la necesidad de los nuevos profesionales de encontrar un lugar en el mercado de trabajo; la disposición de las fundaciones extranjeras para canalizar fondos hacia organizaciones no gubernamentales de desarrollo y la demanda de capacitación generalizada en los sectores populares.

El movimiento social de mujeres tiene en el Perú una trayectoria que puede rastrearse de manera nítida a partir de la década del 50, cuando la fuerte migración rural hacia Lima coincide con una economía nacional en

proceso de desarrollo. Un gobierno dictatorial como el de Manuel Odría estará interesado en brindar ayuda paternalista y populista como medio de morigerar las demandas populares (generadoras de violencia). Pero el avance del movimiento popular incluye una presencia femenina muy marcada, lo cual lleva a que surjan organizaciones femeninas y feministas durante la década del 70. La nueva correlación de fuerzas que las mujeres van forzando responde principalmente a la aguda crisis económica que las impulsa a elaborar estrategias de sobrevivencia. En este sentido, la crisis ha permitido un proceso de democratización en las relaciones interpersonales; proceso lento y aún muy lejos de ser satisfactorio, pero que ha ido afianzándose de manera irreversible.

Esta presencia femenina va alterando los viejos espacios de corte fundamentalmente masculino. Esto se ve en las organizaciones campesinas, obreras y sobre todo en las barriales. Cincuenta y ocho años después de fundada, la Central General de Trabajadores del Perú pudo realizar el I Encuentro de Mujeres de la CGTP, aprobándose la creación de Secretarías de Asuntos Femeninos en los diferentes sindicatos y federaciones afiliadas. Hay un proceso similar en los partidos políticos, y aunque la mayoría de centros promotores son izquierdistas y reconocen explícitamente los derechos de la mujer, la práctica política no condice con estos postulados. La dirigencia femenina en los principales partidos políticos se distribuye de la siguiente manera: APRA, 15% de dirigentes mujeres; Acción Popular, 23%; Partido Popular Cristiano, 3%; Izquierda Unida, 1% (Franke, 1985).

La enorme red de organizaciones femeninas que se expande aceleradamente en los sectores populares se caracteriza, entre otras cosas, por una cierta desconfianza por la presencia masculina y por relacionarse demasiado estrechamente con los partidos políticos, incluso los de izquierda; reivindican orgullosamente su calidad de mujeres autónomas. Hay aquí un replanteamiento de los espacios tradicionales de la política, ya que el rediseño de las prácticas políticas y reivindicativas no se circunscribe a la negociación formal acostumbrada, sino que propone una vía alternativa: la política de izquierda no se agota en lo clasista, sino que supone espacios cotidianos donde el rol de la mujer es definitivo. Como sostiene Virginia Vargas: "La identidad de las mujeres parecería comenzar a perfilarse así a partir de este engarce entre lo privado y lo público, donde no renuncia a lo que siempre ha sido suyo, más propio (el "buen sentido" que según Gramsci tienen todas las personas), pero tampoco renuncian ni se resignan a permanecer al margen de lo público". (Vargas, 1987, pág. 225). La sociedad peruana está en proceso de redefinir la visión que tiene de sí misma, producto de la crisis, de la presencia cada vez más amplia de los sectores populares como sujetos políticos y de la incapacidad del Estado para articular ambas circunstancias de manera positiva. La aparición de la mujer como sujeto político y social en esta coyuntura es fundamental, proponiendo una visión alternativa que ciertamente contribuye a redefinir la identidad cultural.

Es sobre todo durante la primera década que ese decaimiento se agu-

diza. Ante las continuas devaluaciones, que encarecen el papel, los editores peruanos tienen que retraerse, lo mismo que los importadores, ya que los precios de los libros extranjeros van alcanzando precios prohibitivos. La respuesta a esto es el cierre de casas editoras y de librerías, limitándose la actividad editorial a volúmenes de lujo subsidiados por bancos y entidades similares. En el pasado decenio, la industria editorial peruana había logrado avanzar hacia una situación expectante. Dicho avance no se expresó únicamente en la proliferación de títulos, sino también en la formación de una infraestructura industrial, artística e intelectual vinculada con la producción del libro, y concentrada en el desarrollo de imprentas, empresas y profesiones especializadas en esta rama productiva. Este crecimiento estuvo huérfano de apoyo estatal. Pero en la presente década, la coincidencia de la crisis económica y una nueva disponibilidad de divisas para la importación ha empezado a afectar la circulación y producción del libro peruano, precisamente cuando empezaba a perfilarse la posibilidad de una estructura empresarial dirigida hacia la exportación (que tampoco se incentiva). En los pasados cuatro años ha desaparecido la inmensa mayoría de las editoriales empresariales, dejando el campo a la edición institucional (universidades, bancos, centros académicos), cuya capacidad de oferta es limitada.

Mientras la situación editorial del Perú se deteriora, la de países vecinos recibe incentivos estatales, lo que hace mucho más rentable importar libros e incluso imprimir afuera. El propio Estado peruano así lo entiende, ya que los textos escolares que antes se imprimían en el país, ahora son traídos del extranjero. La producción editorial nacional, comprendidos libros y folletos, fue en 1979 de 957 títulos. Al año siguiente, la cifra se redujo a 602 títulos. Esta pérdida del 35% se recuperó un tanto en 1981, al editarse 767 títulos (20% menos que en 1979). En el 82 sólo aparecieron 628 títulos, que decrecieron drásticamente en el 83: 217 títulos (cifra que no alcanza ni al 23% de lo publicado durante el régimen militar). Las estadísticas a este respecto han dejado de aparecer, pero todo hace suponer que el descenso continúa. La empresa estatal productora de papel monopoliza el 75% de la producción; entre sus productos existía un tipo de papel especial para libros, más barato. Desde hace dos años ese producto ha sido suprimido, con lo cual los costos de edición aumentan. Junto a esto, el gobierno ha dispuesto la prohibición de importar papel, con lo cual las cuotas para la edición de libros se han reducido enormemente, además de hacerse más costosas. Eso ha llevado a que la capacidad instalada ociosa de las empresas editoriales y actividades conexas llegue al 72%. Dentro del régimen de devaluaciones diferenciadas, los productos culturales entran en el mismo rubro que los artículos de lujo, con lo cual, a fines de 1987, la devaluación de la moneda nacional para insumos culturales fue del orden del 182,49%. Si el monto anual de las divisas utilizadas para importar libros está entre los 22 y 28 millones de dólares, tenemos que el Perú sólo dedica a este rubro 1,50 dólares per cápita.

Promoción artística

El interés en las manifestaciones artísticas siempre ha estado ausente dentro de las políticas en el Perú. Salvo el corto período del gobierno militar, donde la Casa de la Cultura pasó a ser Instituto Nacional de Cultura (con vistas a que luego fuera Ministerio, cosa que no ocurrió), los diferentes gobiernos han dado a la cultura un trato francamente vejatorio, con ausencia de leyes promotoras o incluso con la dación de dispositivos entorpecedores. Con la creación de la Casa de la Cultura durante el primer gobierno de Belaúnde, hubo un movimiento de interés en los aspectos culturales y artísticos que coincidía con los propósitos populistas del régimen. Pero la relativa y pasajera importancia de la Casa de la Cultura no se debió tanto a la acción directa del Estado cuanto a la presencia de José María Arguedas en su dirección. A pesar de la visión universalista de Arguedas, el peso de la cultura andina en los proyectos culturales del Estado fue muy grande, coincidiendo en esto también con la necesidad de la pequeña burguesía de procurarse raíces nacionales que la distinguieran claramente de la oligarquía extranjerizante. Belaúnde mismo se rodeará de símbolos provenientes del incario. Por eso no es en absoluto accidental que los dos directores de la Casa de la Cultura, durante la década del 60, hayan sido antropólogos (Fernando Silva Santisteban sucedió a Arguedas, y antes de este último ocupó el cargo, brevemente y a modo de organizador, Mariano Peña Prado). El gran mérito de Arguedas fue reconocerle a la cultura andina el sitio de primera importancia que ocupa en la realidad nacional, organizando archivos del patrimonio cultural oral y levantando mapas culturales de diversa índole. Asimismo, se editaron revistas de gran calidad donde asomaba un concepto de cultura mucho más amplio y profundo que aquel que considera lo cultural como lo artístico, y lo artístico como sinónimo de arte occidental.

Con la llegada del régimen militar reformista en 1969, el interés en la cultura aumenta considerablemente y la Casa de la Cultura se convierte en un Instituto Nacional de Cultura centralizador y engrandecido. Se sigue dando gran impulso a las manifestaciones de la cultura andina, pero también a otras manifestaciones que permitieron un auge del teatro, la música erudita y el ballet. Las cifras presupuestales para cultura en aquel entonces (cuadro 3) no dan cuenta cabal de ese impulso, pues muchas de las actividades culturales se cumplían fuera del INC a través de SINAMOS, un organismo encargado de promover la participación popular. Una de sus principales funciones, por ejemplo, fue la creación de festivales nacionales donde se mostraba la gama amplia de la cultura nacional, desde artesanía y plástica hasta música y comida. Y ese apoyo al proceso que SINAMOS era encargado de promocionar, redundó en la proliferación de una actividad plástica importante, sobre todo gráfica, propagandizando las grandes reformas del régimen, como la agraria y la educativa, principalmente. En el rubro editorial, el INC empezó un programa de ediciones que impulsaban a las ciencias sociales y a la poesía joven, a través de libros muy económicos que alcanzaron gran difusión. Pero desde el INIDE (Instituto Nacional de

Cuadro 3
Ejecución presupuestal del Gobierno Central, del Pliego de Educación. Organismo de Cultura, de 1963 a 1984
(en millones de soles)

Año	Gobierno Central	Pliego Educación	% Educación Gob. Central	Organismo de Cultura ¹	% Org. de Cul. Pliego Educativo
1963	14.612,9	2.889,2	19,8	—	—
1964	16.185,5	3.598,9	22,2	—	—
1965	19.919,2	5.731,3	28,8	37,4	0,65
1966	23.784,1	7.154,5	30,1	38,7	0,54
1967	34.462,9	9.835,3	28,5	—	—
1968	30.745,0	7.106,1	23,1	64,0	0,90
1969	27.288,0	6.267,1	23,0	—	—
1970	45.502,9	9.027,0	19,8	—	—
1971	—	—	—	—	—
1972	119.416,5	22.623,8	18,9	157,9	0,70
1973	—	—	—	—	—
1974	174.447,4	32.828,6	18,8	357,0	1,09
1975	—	—	—	—	—
1976	280.189,0	52.025,0	18,6	653,3	1,26
1977	221.746,1	37.047,2	16,7	462,2	1,25
1978	350.838,4	47.966,5	13,7	677,5	1,41
1979	739.363,8	67.264,7	9,1	1.018,1	1,51
1980	1.641.662,8	111.759,8	6,8	1.907,8	1,71
1981	2.033.371,5	200.954,1	9,9	3.598,9	1,79
1982	3.545.856,0	489.764,8	13,8	4.956,0	0,94
1983	5.298.565,5	893.438,4	16,9	8.964,9	1,00
1984	—	1.936.609,4	—	16.435,9	0,85

¹ Hasta 1965: Comisión Nacional de Cultura; de 1966 a 1968: Consejo Superior de Fomento a la Cultura; desde 1971: Instituto Nacional de Cultura.

Fuente: Cuentas Generales de la República. Cuadro elaborado por Claudia García Bedoya y Juan Ansión.

Educación) también empezó un esfuerzo editor que apuntaba a renovar los textos escolares para ponerlos a tono con la reforma. Esta actividad dio cabida a profesionales de diversos campos, pues no se trataba únicamente del texto, sino también del aspecto gráfico y editor del programa.

A partir de 1975, las principales reformas del gobierno militar empiezan a ser desmanteladas, y en éste lo concerniente a la cultura tiene un lugar principal: prácticamente el INC es desmontado hasta convertirse en una oficina administrativa que casi no administra nada y que por el contrario sirve de traba burocrática a las acciones culturales que provienen de la sociedad. Es sobre todo a partir del segundo gobierno de Belaúnde (1980-85) y del actual de Alan García que la debacle y desprestigio del INC alcanza su punto más bajo. La crisis económica que golpea al país, especialmente lo hace con la cultura: desaparecen el Coro del Estado, el Ballet Folklórico Nacional; la Orquesta Sinfónica y el Ballet Nacional se quedan sin fondos y sin locales; la subvención para teatro es irrisoria (desaparece el Teatro Nacional Popular), las investigaciones sobre patrimonio cultural desaparecen, lo mismo que el apoyo a las artesanías; desaparecen también los festivales culturales. Durante el gobierno militar se implementaron dispositivos que impulsaron la actividad cinematográfica; ahora, una ley de cine duerme en el Congreso, lo mismo que la ley del artista. Lo que sí se implementó en el anterior gobierno de Belaúnde fue una ley del patrimonio artístico —aprobada entre belaundistas y apristas— que apuntaba sobre todo a proteger al coleccionista privado, permitiéndoles sacar fuera del país los objetos de arte. El pensamiento neoliberal del segundo belaundismo se expresa de manera cabal en una declaración de Vargas Llosa de aquel entonces —Vargas Llosa fue coautor de un Documento de Bases para la formulación de la Política Cultural—, según la cual la mejor política cultural es la ausencia de política cultural.

El gobierno aprista que se inaugura en 1985 no lleva a cabo ningún cambio respecto del anterior de Belaúnde. El INC sigue en bancarota económica y moral y los incentivos al quehacer artístico son inexistentes; incluso más que eso, son decididamente entorpecedores: los trámites burocráticos más elementales han impedido el viaje de artistas al extranjero a festivales de toda índole. Y se ha dado el caso de que exoneraciones tributarias para la salida del país han sido emitidas meses después que los artistas ya estaban de regreso al país. El gobierno de García, plétórico de discursos que no coinciden con la práctica, ha tenido gestos grandilocuentes con respecto al arte y a la cultura: una invitación masiva de artistas de todos los géneros a un almuerzo en el Palacio de Gobierno, donde prometió lo imposible; alusiones constantes a nuestro rico acervo cultural, etc. Sin embargo, la actividad del gobierno en lo que concierne a cultura se dispersa incomprensiblemente. Mientras el INC es dejado a su suerte —a su muerte— el gobierno crea el Consejo Internacional de Cultura Latinoamericana (CICLA) con el propósito de congregarse en Lima, durante una semana, a artistas latinoamericanos de diversos géneros: un gran festival de las artes cuyo objetivo último era catapultar al gobierno de García a nivel continental a través de las manifestaciones artísticas. Se gastó en esa semana un millón de dóla-

res, y pasada esa semana todo se diluyó, pues ni siquiera se implementaron talleres para que los artistas nacionales aprovecharan la presencia de artistas de renombre. En un país donde la cultura se debate para subsistir; el gobierno aprista gastó un millón de dólares que se esfumaron en una semana. En la organización del CICLA, el INC fue totalmente dejado de lado; como fue totalmente dejado de lado por las actividades culturales que se organizaban a partir de la Presidencia de la República, como las exposiciones en el Palacio de Gobierno que nadie podía ver —se organizaban para un almuerzo en honor de Guaysamín, por ejemplo, ediciones de libros y revistas de arte muy costosas y un mal uso de los escasísimos fondos que el gobierno de García destina a las actividades culturales.

Frente a esto, el movimiento popular ha desarrollado una actividad artística y cultural de gran empuje. Ya desde la década del 70 empieza a organizarse un movimiento artístico que crece a la vera del movimiento popular —el gran protagonista del movimiento social de aquella década— y que no ha dejado de crecer. Aparecen en aquel entonces los talleres de creación colectiva, que comprenden teatro, música, poesía y plástica, con un carácter político muy definido: constituir una identidad nacional a partir de las experiencias populares. La movilización social que permite el régimen militar contribuye a ello, pero también los parámetros de esa movilización que el régimen militar controla, impulsan al movimiento popular a buscar caminos propios de expansión que escapan al control oficial. En la década del 70 se da un movimiento artístico en expansión, imaginativo, contestatario, agresivo. Del 80 en adelante, el quehacer artístico del país está en manos de la sociedad civil: por parte del sector privado ligado al capital, se han creado fundaciones destinadas a financiar la música erudita, el ballet clásico —muy recientemente la danza moderna—, libros de arte, etc. La infraestructura, tanto pública como privada, es muy reducida; no pasan de doce las salas formales para espectáculos artísticos. Los costos de estas salas propician que únicamente las usen los grupos artísticos "formales", es decir, aquellos que hacen un arte que se mueve dentro de los parámetros del arte occidental.

Pero por fuera de la actividad oficial y de la privada, hay un movimiento —sobre todo teatral y musical— que se expande por toda la ciudad y el país, especialmente en los sectores populares. Hay en la actualidad más de 100 grupos teatrales de este tipo, casi todos de creación colectiva; y más de 40 grupos solamente de rock, además de los de música andina y tropical. Estos grupos no se han sentido limitados por la dificultad de acceso a las salas convencionales, sino que han tomado por asalto todos los espacios posibles: plazas públicas, calles, locales parroquiales, locales comunales, sindicatos. Estos grupos están dejando de ser *amateurs* para convertirse en profesionales que viven a tiempo completo y dedicación exclusiva de su arte, y que no solamente se limitan a la ciudad de Lima —su principal mercado— sino que viajan constantemente a provincias, generalmente contratados por sindicatos. Un análisis de contenido de estas manifestaciones artísticas nos muestra que su preocupación principal es expresar una visión alternativa sobre el ser nacional, y si bien su actividad todavía tiene una

carga política de tipo planfletario, hay una tendencia creciente a adquirir técnicas más sofisticadas para encontrar un lenguaje que sea menos sociológico y más artístico. Frente a la inoperatividad del Estado y al convencionalismo de la iniciativa privada ligada al capital, el movimiento popular despliega una actividad artística de gran envergadura, y en términos comparativos, éstos son los sectores populares que producen y consumen la tasa más alta de productos culturales en el país.

Conclusión

Producto de la aguda crisis que se genera a partir de la segunda década del 70, surge un movimiento popular cuya principal razón de ser es la de constituirse en una alternativa ante el receso del Estado. El Estado en el Perú, en cualquiera de sus expresiones, siempre fue un integrador precario en la medida en que su rol distributivo de la riqueza nacional estuvo concebido a partir de los intereses de los sectores dominantes. Mientras ello no hizo crisis, ese rol del Estado configuró una visión del país. Pero al producirse la crisis, lo que primero es dejado de lado es todo lo relacionado con el quehacer cultural. Ante esto, el sector popular tiene que organizarse de manera alternativa, fuera del Estado; y ese cambio va a significar, al mismo tiempo, una percepción distinta del país. No es lo mismo una visión de país desde un Estado eminentemente oligárquico o neoliberal, que desde un movimiento popular que se organiza para sobrevivir y que reclama un espacio político y por ende cultural alternativo. Las posibilidades, por lo tanto, de construir una identidad nacional son ahora distintas debido a que el sujeto social que organiza esa nueva visión es otro. La recesión del Estado ha sido, pues, definitiva para este cambio de rumbo. De ahí que la precisión de lo que entendemos por popular —y por arte, entendido éste como el campo de lo simbólico donde se manifiestan los cambios ideológicos— sea indispensable para poder reflexionar acerca de la tendencia en que se inscribe el proceso actual.

¿Qué entendemos por *lo popular* y qué entendemos por *arte*? Por obvias que puedan parecer estas dos categorías conceptuales, el hecho de que estén de moda en las ciencias sociales en la actualidad ha generado más confusión que esclarecimiento, convirtiéndolas en espacios neutros que pueden ser llenados de diversa manera. Además, lo popular adquiere en un país como el Perú connotaciones específicas debido al componente étnico que atraviesa su proceso histórico, a su condición de país dependiente del capitalismo hegemónico y a la ausencia de una conciencia nacional generalizada cuya responsabilidad recae sobre todo —aunque no exclusivamente— en los sectores dirigentes (de corte primordialmente oligárquico).

Lo popular, por una declinación semántica obvia, es entendido como aquello que proviene del pueblo. Pero también popular tiene una connotación de *mayoría*, y siéndolo así de *democrático*. Lo democrático, a su vez, es asumido como lo éticamente correcto. Estas consideraciones adquieren matices específicos si se trata de países subdesarrollados, con lo cual lo

popular va unido a lo que es *pobre*. Pero en un país subdesarrollado como el Perú, interviene otro elemento: el grupo étnico que fue primero y directamente despojado de sus derechos por el capitalismo invasor (no olvidemos, ahora que se aprestan celebraciones, que la invasión de América fue, antes que otra cosa, una empresa comercial). Es decir, lo popular ha venido siendo entendido como aquella mayoría pobre de origen andino cuyos supuestos culturales son asumidos como correctos por el solo hecho de ser mayoritarios, pobres y andinos. Al margen del peso real de la cultura andina, mayoritaria y agraria hasta bien entrado el siglo XX, la pobreza y lo mayoritario son categorías sociales pero que no se convierten en categorías sociológicas de manera automática. Dependen de una instancia política que les dé sentido. Es decir, lo popular no sería una realidad dada, sino la construcción de un espacio social que redefine la realidad a partir de lo político. Y lo político, como sabemos, no es un principio abstracto, sino la resultante de un análisis politizado de la realidad. En un país como el Perú ¿de qué manera podemos construir la nación que queremos, la identidad cultural a la que aspiramos, nuestra inserción en el ámbito internacional de la manera más adecuada?

Hay que precisar que nuestra inserción en el contexto internacional, a partir del siglo XVI, se hace de manera dependiente desde el punto de vista económico; y sin apelar a posturas mecanicistas, esa condición económica dependiente delineó el mapa sobre el cual se fue construyendo la opción cultural del Perú. El pueblo andino se fue acomodando como pudo a las reglas de juego impuestas por el invasor, aprovechando y resistiendo al mismo tiempo. En ese juego —que es pasivo y activo al mismo tiempo por ambas partes— se fue formando una matriz cultural (y también económica) donde lo andino y lo occidental están representados, aunque ciertamente de manera desigual. Cinco siglos de tal interacción hacen imposible cualquier "pureza", hoy sólo podemos hablar de lo andino o de lo occidental desde aquella ambigüedad. Más aun: resulta un desgaste inútil de energías hablar, con respecto al Perú, desde campos culturales cerrados. El Perú es una confluencia cultural, y es desde esa confluencia que tenemos que comunicarnos. La manera como se estructuró nuestra matriz cultural, sin voluntad integradora debido a los términos avasalladores del encuentro, ha llevado a dicotomizar alternativas en lugar de complementarias. Lo occidental fue visto como fuente de dolor y sólo de dolor, ante lo cual lo andino adquirió, por contraposición, la categoría de dador de felicidad y sólo de felicidad. Este esquematismo conceptual anuló todo diálogo creativo y apuntaló inversamente el etnocentrismo occidental: habría culturas malas y buenas, correctas e incorrectas, dominadoras y dominadas, avanzadas y atrasadas, modernas y estancadas. Todo lo cual desconoce que esas diferenciaciones son ideológicas, y que si todas las culturas son igualmente válidas, hay que admitir que en todas esas culturas hay valores que provienen de la experiencia humana como tal. Decir que la cultura occidental es *sólo* individualista ha llevado a considerar que la cultura andina es *sólo* solidaria. Un simplismo de este tipo ha entrampado el análisis de la realidad nacional, identificando modernidad con occidentalidad y por ende con dominación. Es

decir, se confunde capitalismo con cultura occidental, sin entender que una cultura, cualquiera que ésta sea, no se define desde una sola perspectiva. Además, y para hacer las cosas más confusas, se equipara modernización con modernidad, sin ver que por modernidad hay que entender la asunción de una nueva postura epistemológica que ejercita la reflexión crítica del pasado para recomponer el presente sobre bases distintas que nos permitan delinear el futuro que deseamos. Una acción como la de Tupac Amaru y un pensamiento como el de Mariátegui se yerguen como espacios de modernidad en el proceso social peruano. La modernización, por el contrario, es la puesta al día, de un sistema que no se intenta cambiar sino tan sólo modificar.

La modernidad así entendida, entonces, no puede ser patrimonio de ninguna cultura, y en el caso peruano ésta sólo será posible a partir de la confluencia debido a que nuestra matriz cultural y social es inclusiva. No haberlo entendido así por parte de los sectores dominantes es la causa de la honda crisis —la permanente crisis— del proceso histórico peruano, impidiendo toda construcción de una nacionalidad. Como reacción, desde los sectores intelectuales de la pequeña burguesía se ha venido elaborando una propuesta que pretende ser alternativa pero que en el fondo es el complemento de aquella postura excluyente de los sectores dominantes. En este punto de nuestra historia parece claro que la ideología de los sectores dominantes no está capacitada para proponer una nacionalidad inclusiva (valga la redundancia), pero tampoco la ideología de los sectores dominados en tanto éstos sean entendidos únicamente a partir de lo étnico. Los valores de lo que será la identidad cultural nacional no se encuentra, entonces, en una cultura determinada; y los que ahí se encontrarán sólo serán efectivos en los espacios de encuentro. La identidad cultural no es sólo ni principalmente un asunto de valores intrínsecos, sino el resultado de una correlación política de fuerzas. Los valores de los sectores dominantes logran imponerse no solamente por el ejercicio de la fuerza, sino porque logran un nivel de convencimiento, producto a su vez de presiones que vienen del campo dominado. Si así no fuera, habría que aceptar que los sectores dominados han perdido toda capacidad de reflexión y han adquirido una capacidad inusitada para el sufrimiento. Qué se acepta como valor común y qué se rechaza, entonces, es producto de una convención ideológica que deriva de una determinada correlación de fuerzas: la ideología que domina lo logra sobre todo a partir del convencimiento y no únicamente de la fuerza (si así no fuera su dominio sería muy precario y difícilmente podría ejercerse por espacio de cinco siglos). Y todo convencimiento, huelga decirlo, supone un nivel de satisfacción. En ese nivel de satisfacción lo que se negocia políticamente y va modelando la idiosincracia de un pueblo no es únicamente cuánto más queremos, sino qué queremos y es ese *qué* lo que define nuestra opción cultural (el *cuánto* es sólo una desinencia de lo que queremos).

Si aceptamos que son los puntos de encuentro los que definen los valores culturales, entonces la cultura que queremos será aquella que nazca de una confluencia explícitamente deseada. Por otra parte, la matriz

cultural que ahora tenemos y queremos cambiar está conformada por una confluencia desigual que deseamos horizontalizar. No está en ninguna utopía, de uno u otro lado, sino en la única que tenemos como realidad: nuestro presente, que se estructura a partir de una determinada correlación política de fuerzas. Si la pelea es entre lo dominante y lo dominado, la definición de esos campos es lo sustancial; y esa definición no puede concebirse en términos restringidos como lo étnico o la pobreza, sino apuntando a un espacio social más amplio y que redefine la lucha entre aquellos que controlan la producción y la redistribución de la riqueza, y aquellos que son víctimas de aquel control. Es desde este último campo que, en el Perú, es posible imaginar una alternativa cualitativa diferente —moderna y no solamente modernizadora— que conduzca a la nacionalidad y a la democracia popular. Es decir, un espacio donde los requisitos para acceder a él no se circunscriben a lo étnico ni a lo económico, sino que suponen imaginar una sociedad diferente a partir de lo posible: vale decir, redefinir el campo de lo simbólico. ¿Y desde dónde redefinirlo? Desde aquellos espacios que incluyen sin que esto suponga renunciar a valores propios que se tienen como sustanciales. Es decir, construir una identidad cultural que respete la pluriculturalidad de un país como éste. Lo popular, por lo tanto, no radica en ninguna cultura en especial, porque todas las culturas poseen aquellos valores que deseamos, sino en los espacios de confluencia que se definen a partir de un replanteamiento de la producción de la riqueza, de un replanteamiento de la distribución de la riqueza pero sobre todo de un replanteamiento del uso de la riqueza a partir de valores inéditos en su práctica. Por ejemplo, resituar la reciprocidad andina en un contexto urbano moderno, etc. La cultura popular que queremos construir estaría en esos espacios de confluencia que es preciso redefinir ahí donde se encuentre, o crear allí donde no existan.

Propongo, por lo tanto, una primera hipótesis: lo popular en el Perú es un espacio político y cultural a construirse a partir de una redefinición de la correlación de fuerzas entre los actores sociales. Lo popular no está dado en ninguna de las instancias de la matriz cultural, ni en los puntos de confluencia actualmente existentes. Se dará únicamente en los espacios de confluencia cuando éstos sean redefinidos.

En cuanto al concepto de arte, el análisis ha avanzado más profundamente. Hoy ninguna investigación sería al respecto asume que el arte es el producto de alguna inspiración individual. Tampoco es posible seguir insistiendo en que el arte es apenas un epifenómeno de la realidad económica más inmediata.

Entre ambas visiones se ha ido abriendo paso una teoría social del arte que entiende lo artístico y lo cultural como un producto simbólico derivado de una realidad específica, pero atravesado por urgencias también específicas de la experiencia humana. Si las manifestaciones subjetivas son entendidas como relaciones objetivas interiorizadas, entonces la obra de arte debe entenderse como una representación simbólica que se va formando en el circuito de la producción, la distribución y el consumo. Esta concepción de la obra de arte es de la mayor importancia, porque supone que un objeto artístico es antes que nada un objeto históricamente determinado cuya com-

pletud depende de un circuito que lo va definiendo. Así, el artista no sería otra cosa que el iniciador de aquel proceso. La experiencia humana necesita simbolizar porque sus relaciones son siempre intermedias —vía la ideología— y la forma que adquiere esa simbolización responde a la situación que ocupa el artista y la clase que representa en el sistema de correlación política de fuerzas. Por eso la obra de arte es, además, el espacio desde donde puede imaginarse lo imposible: lugar de llegada que condensa los determinantes sociales, pero también lugar de partida hacia alternativas distintas. Así, el arte es conservador y subversivo al mismo tiempo.

Lo que comúnmente entendemos por arte, es la manera en que simboliza la burguesía occidental. Incluso no todas las formas de simbolización que utiliza son consideradas arte por ella misma. De esta manera, las formas de simbolización de otras clases sociales, de otras culturas, no son consideradas arte (de ahí la desvalorización del folklore o de la artesanía). Redefinir, por lo tanto, la cultura significa redefinir los espacios de la simbolización, ampliándose a otras manifestaciones artísticas. No sólo debe ser entendido como artístico aquello que los sectores dominantes definen como tal, sino incluir en esta categoría necesidades de simbolización que respondan a otras necesidades que van más allá de las del sector dominante. La clase en el poder define su campo de acción y lo cierra, protegiéndolo y protegiéndose de propuestas alternativas. No sólo se trata, por lo tanto, de lograr acceder a ese campo, sino de proponer otros que se han ido formando a través del conflicto social. Aquí también, entonces, la correlación política de fuerzas es decisiva, y el campo de lo simbólico se estructura a partir de una matriz cultural y por ende simbólica.

Terminando el siglo XX, son los medios de comunicación masiva los que se yerguen como los conductos por excelencia de la matriz cultural (cualquiera que ésta sea). Esta hegemonía de los medios masivos se debe a que las sociedades actuales son eminentemente masivas, con el consiguiente adelgazamiento de posturas clasistas. Cada vez más gente consume, en términos culturales, lo mismo. Y lo artístico y lo cultural han dejado de ser las expresiones de la élite: la élite produce cada vez menos y consume cada vez menos sus propios productos culturales. Hay, pues, en camino una producción cultural masiva. Si lo artístico es el resultado de una realidad específica, pero también su trascendencia, entonces la cultura masiva que se está forjando en un país como el Perú se deriva de una confluencia en proceso de redefinición. Esa confluencia, en el campo de lo simbólico, proviene de valores culturales occidentales hegemónicos, pero también de valores de las culturas dominadas que pugnan por hacerse un espacio. Siguiendo el razonamiento acerca de lo popular, no hay formas artísticas correctas o incorrectas según provengan de culturas tales o cuales; lo que hay son propuestas simbólicas que apuntan a afianzar hegemonismos o a debilitarlos (aunque seguramente contribuyan a ambas cosas). Por lo tanto, arte popular sería aquel que es capaz de responder a los anhelos de las amplias capas sociales que luchan por redefinir los términos del intercambio social, tanto económico como político.

Lo que define la popularidad de una obra de arte no radica en su forma

(estilo), ni en su origen (andino, occidental, africano, etc.), ni en su antigüedad (prehispánico, etc.), sino la forma de su consumo. Un espectáculo de ópera no es popular o elitista en sí mismo, como tampoco lo es un huayno o un espacio de la TV. Lo que hace a estas manifestaciones artísticas elitistas o populares es el espacio cultural que ayudan a construir, los valores que propone, la nacionalidad que definen. Pero en sociedades masivas como las contemporáneas, no es solamente desde los contenidos que debemos definir el campo de lo popular, sino también desde esa masividad de la cual no podemos prescindir y que tiene su propia lógica de desarrollo. Una canción que sea cantada por la mayoría del país y cuyo contenido sea, por ejemplo, la condición subordinada de la mujer, no está apuntando a la construcción del campo de lo popular como aquí lo hemos definido. Pero una canción que tenga un contenido solidario y que no tenga una audiencia amplia, tampoco contribuye al afianzamiento de lo popular en la medida en que su mensaje no es ampliamente compartido y por lo tanto se diluye. Es preciso moverse dentro de los límites de la realidad, imaginar opciones que lleguen ampliamente para que el cambio sea realmente posible. Si bien es cierto que las vanguardias se caracterizan por escapar a los parámetros impuestos por la cultura dominante, si no encarnan en sectores amplios ese enorme esfuerzo de reflexión se desperdiciará. Lo que interesa es que la ruptura que toda vanguardia significa no se dé únicamente en el nivel de los estilos, sino que suponga, sobre todo un replanteamiento en las relaciones entre artistas, obras, intermediarios y público, y de todos ellos con la estructura social. Definir ciertos espacios culturales como alienados recorta posibilidades precisamente a los esfuerzos de desalineación. Aun los sectores más sometidos económica y culturalmente reprocesan los contenidos en función de sus intereses. Lo popular se estructura precisamente en ese reprocesamiento; y el arte, al simbolizar las relaciones sociales públicas y privadas, es un campo fundamental para tal reprocesamiento.

Desde esta perspectiva, propongo una segunda hipótesis: arte popular sería aquel que proponga una remantización del campo simbólico a partir de espacios culturales amplios, apuntando a un replanteamiento social de las relaciones interpersonales en sentido horizontal.

Ese arte, en el Perú, está por construirse. Existen elementos que apuntan en esa dirección, los cuales se encuentran en las diversas culturas que conforman la matriz cultural. Siendo la identidad cultural una instancia sobre todo política, ningún elemento cultural o artístico está dado de antemano u ostenta una legitimidad a priori. Es la convención de valores que surge del sistema de poder lo que va definiendo los elementos en situación; por lo tanto la eficacia es fundamental para incorporar aquello que es correcto desde el punto de vista de lo popular. ¿De qué sirve una propuesta correcta sistemáticamente derrotada? Lo que proporciona corrección a una propuesta es también —aunque no solamente— su eficacia; de ahí la importancia de seleccionar muy bien los medios a través de los cuales impulsar la construcción de lo popular. Esos medios, en el Perú de hoy, es lo masivo, que es ahora mayoritariamente urbano y mayoritariamente joven. Estos dos datos

objetivos contextualizan lo que entendemos por eficacia: los espacios de confluencia pasan sustancialmente por lo urbano y la juventud. Plantear, por lo tanto, el debate sobre el arte popular en términos de permanencia y cambio no lleva a ninguna reflexión provechosa, porque la construcción del arte popular no se juega en esa oposición —artificialmente creada por una ideología pequeño-burguesa que cree no tener raíces— sino en el campo de lo político escudriñado desde lo simbólico. El equívoco proviene de identificar popular con andino o campesino, y el arte popular como a las manifestaciones que surgen en esos espacios. Así planteado, y teniendo en cuenta la corrección de valores ancestrales por el simple hecho de ser ancestrales, puede entenderse la preocupación que genera la arremetida de una cultura distinta que altera lo ancestral; y al mismo tiempo la angustia frente a un quedarse ante avances de otras culturas. No entiendo lo popular desde esta óptica, como he tratado de demostrar; ni el arte como depósito de valores permanentes. Que el arte andino avance o retroceda, cambie o permanezca, depende exclusivamente del lugar que ocupa la cultura andina en la correlación general de fuerzas en el ámbito nacional. Y ese espacio de lo andino —como el de las otras culturas que aquí habitan— depende a su vez del lugar que ocupan en el campo de lo popular. Por lo tanto, no se trata únicamente de la forma de inserción en la matriz cultural y de la posición frente a la cultura dominante, sino también y principalmente de las relaciones con las otras instancias de esa matriz empeñadas en subvertirla. Esa subversión, ahora en el Perú, sólo es posible desde el espacio de lo popular, que es un espacio de confluencia en proceso de construcción. Nada garantiza, por otra parte, que ese espacio popular sea construido. Y si lo fuera, su mérito mayor tendría que ser su constante reformulación, porque la cultura no es nunca un espacio cerrado y el arte es siempre alternativa. Si así no fuera entonces no estaríamos hablando ni de arte ni de cultura, y la construcción de lo popular no sería posible porque es impensable todo cambio cualitativo que no comporte un cambio profundo en términos culturales (expresados en términos artísticos).

Bibliografía

- Ansión, Juan, *Anhelos y sinsabores*, GREDES, Lima, 1986.
- Ballón, Eduardo, "La radio en el Perú", en *Radio y comunicación en el Perú*, CEPES, Lima, 1987.
- Caravedo, Baltazar, *Lima: problema nacional*, GREDES, Lima, 1987.
- Casullo, Nicolás, "Cultura popular y política desde una reflexión sobre el intelectual", en *Comunicación y culturas populares en Latinoamérica*, G. Gilli, México, 1987.
- Cotler, Julio, "El gobierno militar: perspectiva histórica", en *El gobierno militar, una experiencia peruana 1968-1980*, IEP, Lima, 1985.
- Degregori, Carlos Iván y otros, *Conquistadores de un nuevo mundo*, IEP, Lima, 1986.
- Franke, Marfil, *Las mujeres en el Perú*, Flora Tristán, Lima, 1985.

- García Canclini, Néstor, "De qué estamos hablando cuando hablamos de lo popular", en *Comunicación y culturas populares en Latinoamérica*, G. Gilli, México, 1987A.
- García Canclini, Néstor, *Políticas culturales en América Latina*, Grijalba, México, 1987B.
- Gonzales de Olarte, Efraín, *Crisis y democracia: el Perú en busca de un nuevo paradigma de desarrollo*, IEP, Lima, 1987.
- Martín-Barbero, Jesús, "Comunicación, pueblo y cultura en el tiempo de las transnacionales", en *Comunicación y culturas populares en Latinoamérica*, G. Gilli, México, 1987A.
- Martín-Barbero, Jesús, *De los medios a las mediaciones*, G. Gilli, México, 1987B.
- Parodi, Jorge, *Ser obrero es algo relativo*, IEP, Lima, 1986.
- Portocarrero, Gonzalo y Ojart Patricia, *El Perú desde la escuela*, Instituto de Apoyo Agrario, Lima, 1989.
- Vargas, Virginia, "El aporte de la rebeldía de las mujeres", en *Feminismo y sectores populares en América Latina*, EMAS, Lima, 1987.
- Webb, Richard y Figueroa, Adolfo, *Distribución del ingreso en el Perú*, IEP, Lima, 1975.

Cultura cotidiana, autoritarismo y campos culturales. Formación y transformaciones recientes en el Paraguay*

Tomás Palau**
Luis Galeano**
Miguel Chase Sardi**
Ramón Fogel**

Introducción

El trabajo que se presenta, realizado en el marco del proyecto PNUD/UNESCO/CLACSO, RLA 86/001, para la dimensión "Políticas culturales y transformación del campo cultural", tiene en el tratamiento de la situación paraguaya restricciones importantes.

Existe en el país una marcada ausencia de trabajos previos que vinculen la acción cultural del Estado y de otros actores hegemónicos con la demanda o el impacto que estas acciones ejercen sobre los sectores sociales subordinados, o de estudios simplemente que describan la situación de los aspectos culturales en el país, lo cual obliga a hacer avances excesivamente preliminares sobre el tema y a abordarlo de modo sinuoso y muchas veces indirecto. En lo que concierne particularmente a las transformaciones ocurridas en las interacciones cotidianas y reproducción de la vida cotidiana por efecto del proceso de modernización y la crisis, la disponibilidad de trabajos es aun menor, a excepción de la amplia bibliografía proveída principalmente por etnógrafos, pero referida como es de suponerse, casi exclusivamente a la descripción de la cultura de los pueblos indígenas. Por lo demás, estos estudios están centrados en una acuciosa descripción del universo micro social de los sujetos.

Esta primera restricción para abordar el tema obliga a encararlo de modo bastante general con lo cual el estudio pierde especificidad. Igual cosa sucede con los intentos por periodizar determinados procesos; los

* Investigación realizada en los marcos del Proyecto PNUD-UNESCO-CLACSO RLA 86/001, Ciencias sociales, crisis y requerimientos de nuevos paradigmas en la relación Estado/Sociedad/Economía.

** Investigadores de BASE y del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES), Asunción, Paraguay.

intentos de periodización para que cumplan sus propósitos teóricos requieren metodológicamente un manejo relativamente detallado de información acerca de los factores que producen una inflexión histórica en el decurrir de dichos procesos. Ante la ausencia de dicha información, los conatos de periodización para analizar la cuestión cultural en el Paraguay tienden a parecer subjetivos, caprichosos y, no pocas veces, sesgados.

Por otra parte, se ha considerado importante en el caso paraguayo prestar más atención a los aspectos históricos que condujeron a la internalización de una cultura autoritaria. El tratamiento de este tema es también preliminar. Los tres primeros capítulos se ocupan de él. En ellos se pretendió, en primer lugar, esbozar el aporte de la cultura guaraní al sustrato de la cotidianeidad campesina. Seguidamente se aborda el tema de la constitución del campesinado mestizo en el país y la temprana sujeción económica y dominación política de la población por la forzosa militarización de la sociedad. En último lugar, esta introducción histórica concluye discutiendo la vinculación entre poder político y el régimen de latifundio-minifundio y la consolidación de la figura del caudillo.

La segunda parte del trabajo aborda el estudio de los cambios acaecidos en la cultura cotidiana bajo los efectos de la modernización conservadora y la emergencia de manifestaciones culturales de contestación. Desafortunadamente, no fue posible completar este análisis con la inclusión del tratamiento de algunos campos culturales que hubieran resultado importantes, como el de la educación, la radio y la televisión. Tareas que quedarán necesariamente como tarea futura.

A. Cultura guaraní y cultura campesina: nexos apenas estudiados*

Miguel Chase Sardi

1. El Mito Guaraní

Dice Julian H. Steward¹ en la Introducción al libro de los esposos Service, *Tobati: Paraguayan Town*, traducida al castellano y publicada como artículo, que: "Se ha estereotipado la falsa noción de que los paraguayos son esencialmente un pueblo indígena Guaraní, o sea que la herencia cultural, lingüística y física o biológica del pueblo moderno, deriva de los indios guaraníes aborígenes".

A esto llama Steward "mito guaraní", lo que, agrega, se ha convertido en símbolo de nacionalismo de los intelectuales paraguayos.²

Sigue aseverando nuestro autor, que los esposos Service, que trabajaron en el Paraguay un año, entre 1948 y 1949, desbarataron este mito y resolvieron tres aparentes paradojas: 1) el rápido cambio de la cultura indígena por la hispánica, a pesar de que los españoles que llegaron al Paraguay fueron un pequeñísimo puñado; 2) las violentas guerras nacionalistas, emprendidas por un pueblo manso, y 3) la constitución de una "nación", sin el auxilio de las instituciones fuertes que requiere la formación de un Estado.³

La estereotipia hallada en el Paraguay se encuentra también en otras partes del continente americano. Se considera a las clases bajas y al campesinado descendientes de indígenas y a las altas y refinadas de origen ibérico. Esta creencia, que se ha generalizado erróneamente, es propagación de los modelos tomados de México y las zonas andinas.⁴

Se considera integrantes de una cultura derivada de la indígena a los trabajadores urbanos y campesinos, sin tener en cuenta que la invasión ibérica trajo, por lo menos, dos subculturas. Y ellas eran de cierta complejidad, aunque tenían "un cimiento esencialmente agrario". Por un lado, los terratenientes, con un género de vida relativamente refinado y, por otro, los labriegos y trabajadores agrícolas, herederos de la baja cultura del siglo XVI. Además existen múltiples variables que hacen más complicado el problema y la simpleza de querer adherir las culturas neoamericanas sencillamente a las fuentes indígenas o hispánicas. Los Service, según Steward, tuvieron en cuenta esta multiplicidad de variables durante su investigación en Paraguay, que fue razonablemente precedida de un estudio de dos años en España, en los archivos donde se encuentran los documentos relativos a la conquista y la colonia en Paraguay. Esto motivó un esquema más coherente y comprensible de la cultura paraguaya.

Lo que Steward no descubrió es que esta exhaltación se refiere únicamente al Guaraní histórico, dándose la ambivalencia, paralelamente, de un desprecio prejuicioso hacia el indio actual y contemporáneo.⁵

* Este capítulo es una versión abreviada de la contribución del autor.

Resalta Steward que: "Uno de los resultados sustantivos más importantes del estudio de los esposos Service consiste en la revelación de que el pueblo paraguayo, esto es, el núcleo que vive en la porción del país circundante a la capital y al que llamaremos 'población nuclear' es enteramente hispánico en cultura, a pesar del uso prevalente del guaraní y de la ausencia, en general, de muchos rasgos tenidos convencionalmente por españoles".

Estos integrantes de la "población nuclear" constituirían el pueblo típicamente paraguayo, que hay que diferenciar de otras zonas, como la del Chaco, poblada por "indios de arco y flecha"; del Alto Paraná, con una población de inmigrantes europeos recién llegados; y de las llanuras del sur de la Región Oriental, de grandes estancieros, con escasa densidad demográfica, identificados con el Estado, pero con estrechos contactos con el mundo exterior, por lo que deben ser diferenciados culturalmente de la "población nuclear".

Durante toda su historia, colonial y republicana, el Paraguay no tuvo —o muy poca— exportación de frutos comerciales. El Paraguay estaría constituido, de acuerdo con las observaciones de los Service y los comentarios de Steward, por agricultores de subsistencia, sin clases agrícolas ricas, sin manufactura. Habría relativamente, ricos y pobres, pero no existiría una división neta entre ambas clases.

En zonas como la ocupada por México y Guatemala actuales, así como la amplia región de los Andes, los españoles se encontraron con verdaderas civilizaciones y pudieron aplicar el gobierno indirecto; mientras que en el Paraguay esto no dio resultado, ni el régimen de la encomienda, pues la economía de subsistencia de la población aborigen bastaba, apenas, según nuestros autores, para sostener una cultura de clase baja.⁶

Fue difícil constituir una nación, sobre todo porque los Guaraní no conocían ninguna forma estatal, la Iglesia era débil y la cultura hispánica se basó en la agricultura de subsistencia, no desarrolló manufacturas y el comercio fue sumamente escaso. El Paraguay, por ello, haciendo excepción de los indios del Chaco y de los colonos europeos del Alto Paraná: "(...) podría casi ser tenido por un área de cultura de gran homogeneidad, una serie de sociedades parecidas pero bastante independientes, antes que una nación integrada".⁷

Y luego de hablar Steward del gobierno indirecto, que no se dio en Paraguay, establece que también para estudiar el cruce de culturas es necesaria la categoría de explotación directa y la de los campesinos agricultores. Parece que los Service, seguidos por Steward, aplican esta última categoría al Paraguay. Y terminan afirmando que: "Tanto en el Paraguay como en el Brasil, en el sudeste de los Estados Unidos y las Antillas, el colono ibérico se estableció y se casó con la mujer nativa y españolizó rápidamente a toda la población. La convirtió en lo que se podría llamar clase baja de subcultura ibérica, a pesar de muchas diferencias locales".⁸

Hasta aquí, el fiel resumen que Steward hace del libro de los Service, que fue el primero y casi el único estudio de comunidad hecho desde la óptica de la antropología social en el país.

2. Las falencias de la antropología paraguaya

Cadogan,⁹ con la prudencia que lo caracteriza, dice que mientras no se hagan exhaustivos estudios de la antropología social y del folklore paraguayo y se profundicen las investigaciones, no se podrá llegar a inclinar el fiel de la balanza hacia el mito guaraní o hacia el mito hispánico.¹⁰

Con relación a esto, hay que tomar en cuenta las opiniones de Egon Schaden, el mayor especialista actual en cultura guaraní: "(...)é notório que a cultura Guaraní e o seu substrato biológico estão profusamente representados na atual população mestiça, mormente do Paraguai, tendo aí dado origem a uma cultura híbrida ibero-indígena sui generis, merecedora de cuidadosa análise antropológica sobretudo por causa de sua multiplicidade de aspectos, variando entre formas quase-tribais e rurais, de un lado, e culturas urbanas de acentuado caráter civilizatório, do outro".¹¹

Nosotros no hemos usado la prudencia de Cadogan y aventuramos atrevidas afirmaciones ya en 1969 con respecto a esta polémica.¹² Algunos trabajos buenos sobre los guaraní, como los de Métraux, son como islas en la gran laguna del mapa etnográfico paraguayo. Este autor, entre otras cosas, proporciona datos acerca de las relaciones entre la cocina guaraní y la paraguaya¹³, sobre las villas guaraníes fortificadas con doble empalizada y todo un sistema de trampas frente a ellas. El mismo sistema defensivo, que se usó en la guerra contra la Triple Alianza, sobre todo en la fortificación de la batalla de Curupaty.

También en el hilado y en tejido quedan rastros, en el Paraguay, de la manufactura indígena.¹⁴

Métraux nota que la yerba mate es usada de la misma manera que entre la población paraguaya, en el mate frío o tereré y en el mate caliente.

3. La composición social y la estructura del poder

Para los Guaraní históricos es posible que la unidad social fuese la gran familia patrilineal extendida, compuesta, probablemente, por los consanguíneos. Sesenta o más de ellas, en ciertos casos, vivían bajo un mismo techo en grandes chozas de forma rectangular. Cada comunidad tenía un jefe político, pero actualmente el poder está, generalmente, en la persona de un chamán. Los grandes líderes guaraníes que resistieron y se sublevaron contra los españoles, en las primeras épocas, poseían poderes divinos. Algunos de ellos traspasaban el área de su Te'yi o de su Tekohá, y llenaban con su influencia una gran zona. Un Consejo de Jefes y hombres adultos que decidían las cuestiones legales y políticas de la comunidad o la región y designaban a los jefes guerreros que comandaban las operaciones bélicas.¹⁵

Curt Unkel Nimuendajú¹⁶, dice: "Antiguamente los Guaraní no tenían otro dirigente que al paié (...)

"La libre sumisión a la teocracia de su jefe-paié era la única organización arraigada en el carácter y conceptos de estas tribus, que no se podían cambiar por ninguna otra".

Posiblemente en esto se base Métraux para decir que la mayoría de los jefes Apapokuva-Guaraní fueron chamanes poderosos en su profesión y que habrían sido acreditados por sus dotes sobrenaturales y milagros, desempeñados en beneficio de sus pueblos.

La sucesión seguía la línea de la primogenitura, excepto en los casos en que hubiera algún hombre más fuerte y hábil en la familia. Además, cualquier hombre que mostraba un valor extraordinario en la guerra podía convertirse en jefe. Pero, como dice Clastres¹⁷: "el jefe tiene un poder sin poder (...) Jamás tiene la seguridad de que sus 'órdenes' serán ejecutadas".

Los que no estaban de acuerdo con su líder, tenían la plena libertad de separarse y formar otra comunidad.

Como lo explican Meliá y los Gründberg¹⁸, entre los Paí Tavyterá actuales, las decisiones que están por encima de la familia extensa, se toman en el Aty, reunión de una comunidad, o en el Aty Guasú, reunión de varias o todas las comunidades de la etnia. Ellas pueden ser convocadas por cualquiera de los miembros de la etnia. Los asuntos que se tratan son los de sucesión o destitución de los cargos comunales; la constitución en Tribunal, para juzgar delitos y crímenes; para la defensa de sus tierras, y la preparación de las ceremonias religiosas o las actividades económicas.

En palabra de estos autores: "El mecanismo para llegar a decisiones es muy diferente del nuestro, considerado 'democrático'. En todas las sociedades guaranílicas el proceso de decisión sigue el esquema siguiente: En presencia de un problema importante que afecta a la comunidad, a iniciativa de un hombre de prestigio se reúnen los jefes de familia y discuten exhaustivamente la cuestión. De ninguna manera se adopta resolución alguna y se abstiene igualmente de llevar las opiniones de los presentes a un denominador común. Con la discusión así iniciada se prosigue seguidamente de manera informal en el seno de las familias nucleares o extensas, en donde se trae a consideración lo enunciado por las distintas personas importantes, y cuáles propuestas de solución poseen las mayores probabilidades de ser llevadas a la práctica. Si con esto se llega ya a un acuerdo de opiniones, se adopta informalmente la decisión, y en el siguiente aty se la ratifica simplemente presentando todos los presentes las mismas propuestas de arreglo. Cada decisión se adopta por unanimidad, una victoria por mayoría de votos según patrones occidentales resulta impensable para los Guaraní. Frecuentemente empero no se llega a una armonización de opiniones en el primer intento. En este caso se reinicia el proceso desde el principio, y en la segunda asamblea se exponen nuevamente propuestas de soluciones, donde se delinearán ya con mayor precisión las alternativas principales. Nuevamente la resolución no es adoptada en la asamblea, sino de una manera informal con posterioridad a ella. Luego en la tercera reunión, ésta se vuelve obligatoria y oficial para todos por declaración conjunta. Si no obstante reiterados intentos no se llega a un acuerdo común, no se adopta resolución alguna, o bien, en una cuestión de vital importancia, se llega a una división de la comunidad en grupos separados autónomos, los cuales pueden nuevamente adoptar resoluciones unánimes entre ellos. Este sistema requiere mucho tiempo y en épocas críticas puede llevar a un fracciona-

miento que provoque la incapacidad del grupo de actuar, pero por otra parte proporciona al individuo la mayor libertad posible de servir a su comunidad en conformidad con su conciencia y sus conocimientos. Es muy importante de tomar en cuenta este modelo para nuestro trabajo. Solamente entendiendo y siguiendo las reglas del ne'ñe jojá (hablar parejo) podremos participar en los procesos de decisión de los tekohá".¹⁹

A esto habría que agregar lo anotado también por estos investigadores, sobre el hecho de que en la asamblea tienen voz y voto todos los hombres iniciados en la ceremonia del mitá pepy, perforación del labio inferior y colocación del tembetá o labrete y las mujeres que hayan llegado a la menarquía.

Resumiendo, las decisiones entre los Guaraní no se toman por mayoría, como en la cultura occidental, sino por consenso. Y si a éste no se llega, o no se toca más el tema y se olvida o, en el caso de ser de importancia capital, el grupo se divide y se forman dos unanimidades distintas. Podría aventurarse que de nuestros ancestros, los Guaraní, hemos heredado, en nuestra política criolla, el hecho de que en todos los partidos políticos se sigue un esquema análogo. Con este procedimiento se llega a la atomización actual de partidos, movimientos, grupos y grupúsculos políticos. Se rechaza el sano disenso y se busca tercamente el consenso mutuo. Y si se llega, irremediablemente a aquel, se conforman dos o más unanimidades recíprocas o irrevocablemente enemistadas. El problema es de importancia política, pues si bien en la cultura guaraní funcionaba este modelo, puede resultar atentatorio para la institucionalización de una moderna democracia.

4. La economía

Lo que SúsNIK²⁰ llama el "ethos del oguatá", el deseo incontenible de caminar, de migrar, de conquistar nuevas tierras, se asentaba sobre el sistema de roza de los Guaraní, que empobrecía rápidamente la tierra de la floresta que quemaban y les obligaba a buscar nuevos lugares para el cultivo. Otra de las causas de este ethos de movilidad y de conquista era el deseo individual, de todo guerrero guaraní, de obtener el estatus social que sólo podía darle los adornos de metal que ostentaba con orgullo, producto de la rapiña guerrera. La guerra con la muerte de enemigos en combate y, sobre todo, la toma de prisioneros para la práctica del rito antropofágico también era motivo de migraciones. El P. Meliá me hizo notar (comunicación personal) la intensa movilidad espacial que existe entre los actuales campesinos paraguayos. Algunas veces, esta movilidad está justificada por causas reales, pero en muchas ocasiones se apela al más baladí de los motivos.

La agricultura de los Guaraní, como en los tiempos precolombinos, sigue siendo de roza. Los grandes árboles son volteados por los hombres, de tal manera que en su caída arrastren a los de menor tamaño. En el corte de las ramas, las mujeres ayudan a los hombres. Una vez seco el material se le prende fuego a la maleza. Después de que deje de arder la chamicera con la ayuda de un palo puntiagudo —que tanto servía de arma ofensiva,

como medio para alcanzar los frutos de los árboles de la selva, o para extraer los tuberos comestibles de la tierra— se hacían los hoyos entre las cenizas, en los cuales se depositaban las semillas.

"Cada año se prepara un nuevo rozado, koyrá de 1/2 a 2 hectáreas por familia, especialmente para la planta del avatí moroti".²¹

Como se sabe, en la agricultura campesina paraguaya lo único que se ha agregado es el arado, a cambio del palo cavador. Esto, por supuesto, hasta fines de la década de los años sesenta, en que entró con fuerza el monocultivo con uso de maquinarias y agroquímicos que, evidentemente, no están al alcance de los campesinos pobres sino de los grandes terratenientes y las transnacionales. Pero, hay que reconocer, grandes cambios durante el transcurso de la década de los años ochenta, dejándose de lado, por la propaganda y la imposición oficial, los cultivos de subsistencia, y dedicándose, casi plenamente, a los comerciales.

La horticultura, entre los Paí Tavyterá, suministra el 80% de la alimentación. La recolección tiene una importancia práctica superior a la de la caza, según nuestras observaciones personales, pero esta tarea es de menor prestigio, a pesar que la yerba, ka'a: "(...) es considerada tanto como alimento, así como remedio de múltiple uso".²²

La caza, según los mismos estudiosos, presenta una disparidad entre el gran valor que le dan en los comentarios y relatos alrededor del fogón y su poca monta como fuente alimentaria. De acuerdo con éstos, la cría de animales domésticos habría comenzado hace más o menos un siglo y medio.

La tierra, el agua, el aire y el sol son las cuatro cosas que no se pueden comprar ni vender, según las palabras de los sacerdotes y sabios de la etnia Paí Tavyterá, son de común uso, están a discreción de todos. Se quejan de y satirizan a los blancos que "solo el sol aún no pudieron comprar ni vender". Sin embargo, los objetos adquiridos de la cultura occidental constituyen propiedad individual y los compran y venden de la misma manera que el paraguayo. No obstante, la reciprocidad generalizada hace que sea muy fácil, para cualquier Paí Tavyterá, tomar en préstamo u obsequio, sin ningún tipo de retribución inmediata, cualquiera de estos objetos de otro coaldeano. Pero tendrá la íntima convicción que el favor será retribuido en cualquier momento, tarde o temprano. Hay un verdadero "comunismo primitivo" entre los Guaraní, como lo explican Meliá y los Grünberg: "Si un Pa'í entra en un tekohá ajeno para vivir allá, se lo comunica al tekoharuvicha (sacerdote-jefe) y le indica, más o menos, el lugar que ha previsto para casa y chacra. Si no hay un problema social muy grave (por ejemplo, conflicto con otro tapicha), el nuevo poblador asume su derecho divino de cultivar la tierra en el tekohá elegido y sus mejoras se consideran su propiedad (imba'e) indefinidamente".²³

El trabajo en la chacra, la construcción de la choza, etc., es además, casi siempre, colectivo y llamado mba'e pepy. Tiene mucha semejanza con la "minga" criolla, también llamada jopói y, en el Brasil, puxirão o mutirão. Hay una colectivización que alcanza, entre los Paí Tavyterá, a todos los miembros de la etnia. Existen ciertas restricciones, pues algunos cultivos, el

producto de la caza y de la pesca, así como el de la recolección, llegan sólo a distribuirse entre los miembros de la familia extensa.

En otro trabajo de Grünberg, firmado con un pseudónimo²⁴, se dan, como su título lo dice, los *Aportes indígenas al problema rural del Paraguay*, que sería largo relatar aquí. Sin embargo, notamos que este investigador resalta más las diferencias que las semejanzas. Nosotros nos inclinamos más a distinguir las analogías y derivaciones de la economía rural desde sus fuentes guaraníes. Sin embargo, nos parece útil citar las conclusiones que da Grünberg en otro trabajo suyo.²⁵

"Resumiendo podemos constatar, que en el caso de los campesinos paraguayos criollos (koyguá) se trata de una 'economía de subsistencia' en un régimen en el cual las unidades de producción y consumo mayormente son idénticas y la circulación es mercantil. En el caso de los Paí Tavyterá (en su forma tradicional), se trata de una 'economía de subsistencia' en la cual las unidades de producción y consumo son idénticas y parcialmente colectivas y con circulación mercantil muy reducida. La diferencia entre ambos modelos no existe en los medios de producción (tierra, herramientas), en la división del trabajo, en las formas de cooperación (minga, mba'e pepy, jopói) o en las relaciones de intercambio externo de los productos y servicios (changa), sino en los conceptos de propiedad y relaciones de poder distintas".

5. El intercambio de símbolos

Como lo explica Pierre Clastres²⁶, siguiendo a su maestro Claude Lévi-Strauss, la cultura es intercambio. En primer término, es trueque de objetos materiales, especialmente de comida. Segundo, es canje de mujeres y por último, es intercambio de símbolos: las acciones, las actitudes del cuerpo, los gestos y, fundamentalmente, las palabras. A esto hay que sumarle el hecho que todo intercambio de cosas, todo intercambio sexual, está cargado de connotaciones simbólicas.

La reciprocidad generalizada, en la gran mayoría de las culturas indígenas, hacía que los Guaraní tuvieran como un deber darlo todo al primer ruego, pedido o requerimiento. Comida, instrumentos o adornos, pasaban de mano en mano en vueltas interminables, sin que esto contradijera el "derecho de propiedad" que tenía —más tendiendo hacia el prestigio que hacia la realidad— sobre ellos el que los había recolectado, cazado o manufacturado.

En el intercambio sexual, entre los Aché-Guayakí, se establecen verdaderas alianzas entre las hordas. Hay una coexistencia simultánea de poliandria y poliginia. Pero aquí podría decirse que se inclina más al "intercambio de hombres" que al de mujeres. Uno de los múltiples motivos por los que nos repugna la machista expresión lévi-straussniana "intercambio de mujeres"; pues, como lo hace notar Súsni²⁷: "(...) la vida sentimental y conyugal es dominada esencialmente por la mujer".

Entre los Paí Tavyterá, el varón queda, en general, en la casa de los

suegros viviendo con ellos. Al tener el primer hijo, se independiza y se traslada a su propia casa. Pero en algunos casos, sobre todo cuando la esposa es huérfana o los padres del marido son de extraordinario prestigio, la pareja permanece en casa de éstos. Por lo que, también en este caso, no siempre hay "intercambio de mujeres".

Apoyándose en Montoya, con relación a los Guayrá y a los Tapé, Súsnik²⁸ comenta algo que sí daría pábulo al mentado "intercambio de mujeres": "La poligamia caracterizaba a todos los jefes aldeanos; su proyección social era importante; una mujer cosignificaba 'lote, fuego, hamaca, prole'; por otra parte, los jefes aldeanos podían mantener una sólida alianza con toda la parentela de las mujeres, éstas quedando en sus 'teyy' originarios o ya viviendo en el 'teko'a' de sus maridos". Pero aquí mismo, como se ve, la residencia, por lo menos pasajera, podía ser matrilocal y es así que la citada autora remarca que: "Siempre se pretendía la residencia uxorilocal, lo que aumentaba la potencialidad socioeconómica de los antiguos 'teyy' (...)".

En cuanto al intercambio de símbolos, sobre todo de símbolos lingüísticos, se puede decir que era intenso y profuso entre todos los Guaraní.

No solamente el estatus de jefe podía obtenerse con el arte de la oratoria, ya que nadie tenía poder de coerción sobre nadie, sino también la misma lengua se constituía en el centro, la médula, la espina dorsal de la cultura. Esto fue cambiando ante las derrotas frente a la superioridad técnica del invasor blanco, tal es así que: "La superioridad etnocéntrica de 'cultura-lengua' de los Tupí-Guaraní, antiguamente tan agresiva e impositiva, volviéronse aislacionistas y defensiva".²⁹

Lo dice Montoya³⁰ y lo cita Súsnik³¹, que la virtud más grande de los caciques guaraníes era su elocuencia, pues "con ella agregaban gente y vasallos" y le permitían a: "(...) sus plebeyos hacerles roza, sembrar y coger mieses, hacerles casas, y darles sus hijas cuando ellos las apetecen (...)".

Pero lo que hay que comprender, por encima de estas palabras prejuiciosas del misionero jesuita, es que por el deber de la reciprocidad el cacique, paralelamente, estaba obligado a proporcionarles alimentos, ofrecerles banquetes y embriagarlos con el kagui, la chicha o cerveza de maíz que corría a raudales en las ceremonias organizadas por estos jefes. La ayuda que significaba tener mbojá, seguidores —y no vasallos como afirma el misionero— y el honor de ser anfitrión de tan numerosa gente, recompensaba ampliamente al líder y elevaba su estatus social.

A estas consideraciones hay que agregar que los Guaraní cuando reducían al vasallaje a otros pueblos no guaraníes, como en el caso de los Chiriguano sobre los Chane-Arawak, lo primero que imponían era la adopción del idioma guaraní. Es por ello que había tantos pueblos que pertenecían a la familia lingüística, Ge, —por ejemplo en la Región Oriental del Paraguay los Ingaín, y Guayaná, llamados por los Guaraní, Yvyrajara y por los conquistadores "indios camperos"— que fueron totalmente guaranizados.

Hay sin embargo otro tipo de reciprocidad, llamada por Marshall D. Sahlins³² "reciprocidad negativa". Este tipo de relación va desde el juego sucio, la trampa, el robo, a la rapiña guerrera. Lo practicaban los Guaraní,

sobre todo para la realización del rito antropofágico. Cuando no había gente de otras etnias en las cercanías, la guerra se realizaba entre los Guara. Súsnik describe con lujo de detalles los catorce Guara que existían en el Paraguay prehistórico. Ellos constituían regiones geográficas, donde las parcialidades guaraníes estaban en libre posesión y comunicación amistosa. Entre Guara y Guara podían existir ocasionales alianzas, ante un peligro común o, lo que ocurría generalmente, una permanente guerra entre ellos. El penetrar en un Guara ajeno, sin el permiso correspondiente, era motivo de represiones bélicas.³³

Era incomprensible para los no guaraníes el riesgo de la propia vida que los guerreros corrían con el solo fin de tomar prisioneros vivos y, si fuera posible, sanos. Como dijimos, cuando la guerra no se podía hacer con gente de otras etnias, se la practicaba entre las propias parcialidades guaraníes. El prisionero maniatado era arrastrado con una cuerda atada al cuello, paseado por todas las aldeas amigas, donde era presentado como "mi animal doméstico" o "mi comida". Luego el dueño o captor lo llevaba a su propia choza, donde lo trataba como familiar, dándole incluso una hermana, hija o sobrina como esposa. Si el prisionero era Guaraní seguramente no escaparía, pues sería un enorme deshonor para él no afrontar con valor su suerte. Además, el guerrero que moría en acción de combate o sacrificado ritualmente, tenía asegurado su paso al Yvy Mará'eyva, a "la tierra sin males", el paraíso guaraní. Si no era Guaraní, se le daba también cierta libertad, pero era vigilado por toda la tribu y también por la esposa que se le había asignado. Posteriormente el cautivo era sacrificado y sus restos repartidos para comida ritual entre los miembros de la aldea.

Todavía en 1954, León Cadogan³⁴ comprueba un caso de antropofagia perpetrado por un indígena, hijo de padre mbyá y madre chiripá, en la persona de un paraguayo que había ultrajado a su esposa. El mismo investigador, en colaboración con Maxence de Colleville, da importantes transcripciones de relatos aché-guayakies, obtenidos en sus investigaciones de los años 59 y 60, sobre casos de antropofagia y canibalismo.³⁵

Es importante para un estudio pleno del intercambio de símbolos en la cultura guaraní, lo anotado por Súsnik³⁶ con relación a la ideología de esta etnia. Aquí ella no toma la palabra ideología en su acepción de falsa conciencia, sino de toda la superestructura mental. Y encuentra en ésta, tres rasgos básicos elementales: "(...) la movilidad estimulada y estimulante del oguatá migratorio, expansivo y dispersivo; el teko-cavi, la vida con la chicha de maíz como símbolo de la abundancia económica en las nuevas tierras ocupadas, siempre con expectativa y volición conscientes; y el yvy mará' v que fundamentalmente interpretaba una búsqueda del mítico tamoi abuelo, en son de una respuesta positiva frente a las circunstancias de una mutación adversa (...)".

Y unas páginas más adelante dice textualmente: "El antiguo oguatá migratorio y dispersivo conjugaba dos aspectos: guerrero y shamánico, siendo esencialmente los shamanes que 'garantizaban' —por medio de sus 'tupichúa espíritus familiares'— el éxito en la empresa en búsqueda de tierra fértil y por ende, de verdadera ocupación de las zonas que significaban

la seguridad subsistencial y vivencial; los 'karai-shamanes' se convertían así en verdaderos impulsores del ideal antropodinámico de los Tupi-Guaraníes. La 'tierra sin mal', 'yvy mará'ey', de los tiempos del oguatá dispersivo, era una meta real y concreta, una verdadera expectativa de la 'vida', del aguiyé y de 'la abundancia'.³⁷

Es decir que una "tierra prometida", llena de abundancia, a consecuencia de la "mutación adversa" que para ellos constituía la conquista y la colonización española, se convirtió en un "paraíso". Lo que hizo que la "tierra sin males" se volviera cada vez más un edén, que si bien estaba, para muchos grupos sobre la tierra, allende el mar, se alcanzaba con la danza, el canto y la oración, que hacían que el cuerpo se volviera más liviano que el aire y permitía volar hasta él, donde se encontraba la inmortalidad y la eterna felicidad en cuerpo y alma. Con esto coinciden los últimos estudios del Padre Bartomeu Meliá (comunicación personal). Supone él que, en tiempos prehistóricos, el yvy mará'eyva, no era nada más que la buena tierra, fértil, con frondosa vegetación llena de animales silvestres, manantiales, arroyos y ríos con abundante pesca.

Interesa acá comprender que el milenarismo en que entraron progresivamente los Guaraní, les ha llevado a poner, junto a la lengua, en el corazón, en el meollo de su cultura, su religión. Esto lo expresa Egon Schaden con muy bellas palabras diciendo: "En la superficie de la tierra no hay, por cierto, un pueblo o tribu a la que mejor se aplique que al Guaraní la palabra evangélica: 'mi Reino no es de este mundo (...)' Deseos de prosperidad económica, ambiciones políticas o cualquier otra aspiración terrena, poco significan para él y no le preocupan. Su ideal de cultura es de otro orden: es la vivencia mística de la divinidad (...) Y como las aves del cielo, que no siembrán ni cosechan, ni recogen en graneros, el Guaraní va viviendo su vida sin preocuparse por las necesidades económicas que por ventura le puedan sobrevenir".³⁸

6. Consideraciones finales

Se conoce, por los estudios de múltiples etnólogos e historiadores, que el pensar "arcaico" así como el pensar "moderno" están atravesados por lo mitológico. Nosotros, los supuestamente modernos, no tenemos la perspectiva suficiente para observarlo en nuestras culturas. Pero ello resalta ante nuestros ojos, nítidamente, en las llamadas culturas "primitivas". En ellas vemos, claramente, que el pensamiento es fundamentalmente analógico. Se expresa con metáforas, metonimias, sinécdoques y alegorías. Como lo hace notar Maurice Godelier³⁹, el pensar analógico tiene la posibilidad de recorrer trayectos teóricos opuestos e inversos. Estos itinerarios toman cuatro direcciones distintas: de la naturaleza a la cultura, de la cultura a la cultura, de ésta a la naturaleza y de ella a sí misma.

En el Paraguay no se ha hecho un acabado estudio de la mitología guaraní ni de la mitología y de las leyendas campesinas. Todo lo que hay al respecto es vana literatura. Hay supuestos investigadores del folklore, como

Narciso R. Colmán (Rosicrán)⁴⁰, por ejemplo, que son grandes poetas populares, pero sus temas nacieron de su pura imaginación y no de la recolección paciente de datos en el trabajo de campo.

Los sociólogos suelen despreciar las investigaciones mitológicas, sin darse cuenta, como lo anota Miguel Alberto Bartolomé⁴¹, que: "(...) el mito, en su surgimiento, constituye una metáfora de lo social que a través del poder normador que adquiere, hace que lo social sea, a su vez, una metáfora del mito".

Como vimos, el único estudio antropológico social serio sobre el Paraguay, el de los Service, adolece de grandes defectos. Por otro lado, Cadogan clamaba y Schaden sigue clamando por más estudios etnográficos sobre los Guaraní sobrevivientes, los únicos documentos vivos —sin por ellos negar el dinamismo y el cambio sociocultural— de los Guaraní prehistóricos.

Repetimos hoy, en 1989, algo semejante a lo que ya decíamos en 1969; no existen estudios globales sobre las sociedades y culturas guaraníes ni sobre las campesinas paraguayas. Una excepción es *El valle y la loma* de Ramiro Domínguez⁴², pero que se circunscribe solamente a la zona del Guairá.⁴³

Las síntesis de Ramiro Domínguez, la de Ticio Escobar⁴⁴ y la de Alfredo Vara⁴⁵, cada una desde su perspectiva específica, tendrán que considerarse, muy especialmente, para la obra más abarcante que analice las relaciones entre la cultura guaraní y la campesina paraguaya. Obra que aún está por hacerse.

B. Colonlaje, mestizaje y aculturación autoritaria

Tomás Palau

Las raíces culturales del campesinado paraguayo en los pueblos guaraníes que habitaban la región antes de la colonia, tema sobre el cual, como acaba de apuntarse en el capítulo anterior, existe cierta discrepancia entre autores, parecería, desde la perspectiva del análisis social, haber tenido una indudable importancia en la explicación del comportamiento colectivo del sector en lo que se refiere a sus formas de organización cultural, política y de vinculación con agentes externos.

En este capítulo se señalan brevemente algunos elementos, como el tipo de mestizaje verificado a través de la colonización, la organización autoritario-militar de la vida civil desde los albores como nación y del campesinado como sector, y algunas formas de sujeción económica y política de la población, para iniciar el debate acerca de la decisiva importancia de la internalización de una cultura autoritaria en el campesinado y su proyección —más tardíamente— a todo el conjunto de la sociedad nacional una vez que se desarrolla la integración de la misma como Estado-nación.

1. El proceso de mestizaje; convergencia y subordinación de culturas

El parejo proceso de mestizaje impuesto por los españoles tuvo un efecto desestructurante sobre las formas ancestrales de la organización social y familiar guaraní. Las tempranas formas de subordinación a que la población indígena estuvo sujeta y, sobre todo el cruce de los españoles con las mujeres nativas, aseguró desde un comienzo la transmisión de la lengua y los demás valores culturales a la descendencia a cargo de la influencia materna. El criollo o mestizo constituiría en poco tiempo la población mayoritaria de la región.

Sobre esta base poblacional y cultural se iría gestando una sociedad que reúne hoy dos características particulares o específicas, en el contexto de las demás sociedades nacionales latinoamericanas. Se da por un lado, una relativamente alta homogeneidad étnica entre la población de origen mayoritariamente campesina, lo cual, unido a otras variables de tipo económico o social y políticas, ha contribuido a una indiferenciación racial entre las distintas capas, acentuando con ello la idea de un país único (a diferencia de otras sociedades, como las andinas, en las que el componente étnico es un primer elemento diferenciador). Pero por otro lado, se da una alta especificidad lingüística según la cual un pueblo étnicamente homogéneo retiene un distintivo lingüístico que lo diferencia del "europeo". En efecto, Paraguay tiene el bilingüismo más difundido entre los países con idiomas indígenas en la región.⁴⁶

Estas dos características hacen que la identidad campesina haya sido

relativamente impermeable a las influencias de culturas externas, toda vez que la unidad social y su diferenciación lingüística le confirió un sentido de pertenencia cultural revestido de un complejo andamiaje simbólico. Ambos rasgos supusieron, igualmente, que el campesinado acepte, desde su conformación histórica, solo pasiva y escépticamente propuestas que no surgen de su propia vivencia y convicción⁴⁷, pero de manera aun más importante, el contexto cultural propio y la lengua conforman una poderosa fuerza para la determinación de modalidades de acción colectiva.⁴⁸ En suma, la colonización si bien introdujo una forma de dominación y cosmovisión ajenas, produjo también propuestas culturales, "imponiendo valores y pautas de conducta que se combinaron con los de la base social indígena, de modo tal que lo que se incorpora, reelabora y tiene vigencia en una formación social —aun con los conflictos y contradicciones que se van generando— se torna propio, hasta que el conjunto social admita la sustitución".⁴⁹

El concepto y la vivencia de la autoridad debe ser sin embargo aquel que ha sufrido una de las mutaciones culturales más importantes con el advenimiento de la colonia y sus secuelas posteriores. En particular, la forma como la misma era culturalmente administrada. Según Meliá⁵⁰ el Estado entre los guaraníes no existía, al menos según la concepción occidental que tenemos de él, sino que la autoridad era ejercida por notables de las casas-aldea en que se estructuraban las comunidades y más en virtud del mandato que éstos portaban de *asambleas* en las que se tomaban decisiones por *consenso*. Por lo demás, la autoridad estaba fraccionada al menos en cinco tipos de figuras según el ámbito en que se la ejercía.

Con la constitución de la Provincia del Paraguay formando parte del Virreynato del Río de la Plata, la sujeción de los pueblos guaraníes a los gobernantes locales y a los encomenderos supone la ruptura de los vínculos tribales de la organización social guaraní y con ello, cuando se habla de pueblos cautivos, la disolución de las antiguas formas de responsabilidades y administración interna del poder. Con ello se sientan las bases para la adopción coactiva de una cultura que girará en torno de la voluntad autoritaria del jefe o caudillo. El proceso de mestizaje que se verifica posteriormente estará normativamente orientado por estos nuevos "valores".

2. Constitución del campesinado y "militarización" de la organización social

En sentido estricto la formación del campesinado en el país se da con la colonia y con la población mestiza que puebla principalmente los alrededores de Asunción y otros pocos pueblos del interior. Este proceso empieza a verificarse luego del primer tercio del siglo XVII una vez que la población indígena se redujo drásticamente como resultado de los sistemas coercitivos de explotación del trabajo que habían sido aplicados sobre ella. Las tierras que los indígenas habitaban (la escasa población indígena de la región oriental vivía ya en "reducciones" o "pueblos de indios"), son ocupadas por el campesinado mestizo ya que se verifica en la época una retracción eco-

nómica y una ausencia de inmigración que facilita la ocupación de tierras libres.⁵¹ Posteriormente, durante el siglo XVIII el auge del comercio de la yerba y la instalación de "obrajes" motivará una migración hacia el norte de la región oriental de camadas de campesinos sin tierra que en un primer momento serán peones pero que posteriormente darán pie a una expansión de la frontera territorial, lo cual motivará un aumento de la importancia relativa del estrato de pequeños propietarios campesinos.⁵² Este campesinado debe soportar desde sus propios albores una relación política de sometimiento y una fuerte subordinación económica transfiriendo excedente a los representantes, españoles y criollos, de la corona. Eran también frecuentemente reclutados por el ejército español para defender los territorios reclamados por los portugueses.⁵³

Con la independencia adviene al poco tiempo el gobierno de Don José Gaspar Rodríguez de Francia y con él se inicia el largo y penoso proceso de formación del Estado nacional paraguayo signado por dos rasgos que repercutirán históricamente hasta el presente. Por un lado, se estructura un Estado en base al poder despótico de una persona que gobierna autoritariamente por la necesidad (aunque no solamente por eso) de combatir en el frente interno las pretensiones oligárquicas de las élites criollas, y en el externo las intenciones del gobierno porteño —recién independizado también de España— de continuar manteniendo anexada como provincia al Paraguay. A esto debía sumarse las "continuas correrías de portugueses indígenas en la frontera norte y el saqueo de las misiones por los ejércitos tanto porteños como de Artigas".⁵⁴ Esta situación obliga a Rodríguez de Francia a cerrar las fronteras, a gobernar autocráticamente, abortando de paso, la contemporánea constitución de las clases sociales fundamentales que se daba a la sazón en las demás sociedades de la región. Por otro lado, el militarismo emerge con fuerza y casi como forma de organización social. En las circunstancias históricas recién descritas se volvió imperativo, en primer lugar, constituir un ejército nuevo, no el legado por la corona y dirigido por los oficiales insurgentes de mayo de 1811 (a quienes Francia acusó de vinculados a los porteñistas y fueron destituidos o ejecutados), sino uno bajo su poder discrecional. Esto implicó un tipo de reclutamiento que incorporó al campesino mestizo. En segundo lugar, razones de sobrevivencia —al haberse roto los lazos comerciales con el exterior— obligaron a Francia a propiciar la formación de unidades productivas estatales dirigidas a la usanza militar en tierras pretenecientes al Estado. Estas "estancias de la patria" creadas originalmente para aprovisionamiento del ejército llegaron en corto tiempo a extenderse "por toda la república y ser más de setenta y cinco".⁵⁵

La nación era el Estado francista, la autoridad de Francia y el ejército era la nación. De este modo, la noción de autoridad tan ajena a los ancestros guaraníes del campesino, pasa a tener, desde la colonia, una vigencia cotidiana que termina siendo colectivamente internalizada.

Pero la militarización de la organización social continúa, con breves interrupciones hasta hoy, marcando la cotidianeidad del paraguayo. En efecto, el período de Don Carlos A. López con su breve apertura y la guerra

posterior contra la Triple Alianza afianzarán aun más la idea de que la nación depende del ejército y la autoridad militar. Después de esa guerra emergen dos actores de máxima importancia para la constitución de un campesinado desmovilizado, fragmentado y atomizado, que no logrará articularse políticamente hasta comienzos de la segunda mitad de este siglo. Esos dos actores son, por un lado, los partidos políticos tradicionales que instalarán un sistema político en base al compadrazgo, la clientela y el caudillismo, a tal punto que las únicas movilizaciones campesinas de importancia durante el último siglo han sido de hecho una instrumentación política de dicho sector social. El otro actor de gran relevancia es la gran empresa de capital extranjero, que si bien existió anteriormente, no había tenido hasta el período de la post-guerra Grande la influencia determinante en procesos de temprana minifundización y contratación de mano de obra campesina cautiva y semi-cautiva.

3. Las variadas formas de sujeción de la sociedad campesina; explotación económica y dominación política

La presencia dominante de los latifundios madereros y yerbateros, así como de las estancias ganaderas, fue resultado de las graciosas concesiones fundiarias que los gobiernos paraguayos de la época dieron a los intereses de los gobiernos aliados vencedores después de finalizada, en 1870, la guerra. La gran empresa se constituirá desde entonces en un agente activo de empobrecimiento y desmovilización campesina a través de la mediación que ejerce el control de los mercados, principalmente de trabajo y de tierras.

Una documentación relativamente completa de carácter periodístico está contenida en la obra de Rafael Barrett⁵⁶ acerca de las condiciones de vida y explotación económica a que estuvo sometida la mano de obra cautiva ("mensú") que trabajaba en los obrajes y yerbatales de grandes propietarios luso brasileños y anglo argentinos.

La irrupción de los primeros problemas que culminó con la Guerra del Chaco (1932-35) significó de nuevo la militarización de la sociedad paraguaya que alcanzó a todos sus niveles; en esta ocasión histórica, el campesinado participó activamente con el envío de importantes contingentes que se alistaron como tropa. Con la finalización de la guerra, algunos militares triunfantes con apoyo de algunos grupos civiles y particularmente de la juventud, dan un golpe que instala el corto gobierno "febrerista" que pretendió iniciar reformas sociales de importancia, entre ellas la reforma agraria. Las medidas adoptadas no alcanzan siquiera a ser implementadas y se restituye a lo dieciocho meses la administración liberal. En 1940 asume la presidencia el general Estigarribia que había ganado la guerra, y con él asumen formalmente los militares al poder. El mismo año se redacta una nueva Constitución que otorga máximos poderes al Ejecutivo, con una orientación totalitaria, sin división real entre los tres poderes. Ese año se sanciona también el Estatuto Agrario que permitía, entre otras cosas, la expropiación de

los latifundios. La muerte de Estigarribia ese mismo año acelera lo que aquel Estatuto en el fondo pretendía, neutralizar las reformas febreristas. Asume Morínigo con el apoyo de una de las fracciones del partido colorado. Este es un momento histórico en el que la reconfiguración del poder político afecta a la ciudadanía en general y al campesinado en particular, en el sentido de su instrumentación para consolidar aquellos pactos. En 1947, es una masiva movilización campesina la que logra, después de casi 9 meses de guerra civil, mantener el control político en manos de los colorados. Los "pynandi" le pasarán la cuenta al partido, siete años después, cuando Stroessner asume, siempre con apoyo de fracciones del partido colorado, el control del gobierno. La deuda política con el campesinado minifundizado de las zonas próximas a Asunción se pagó con tierra repartida clientelísticamente en pseudo-programas de loteamientos, de tierras públicas, bajo el pomposo rótulo de la Reforma Agraria Colorada. La desmovilización campesina con respecto a su interés de clase sigue garantizada por la vigencia del bi-partidismo tradicional y por el control que la oligarquía y los grandes empresarios ejercen sobre la estructura fundiaria y del mercado de trabajo. Es a partir de ese momento, segunda mitad de la década del 50, cuando se consolida en lo político —al decir de Fogel⁵⁷— "un grupo con fuerte ascendencia militar que cuenta con importante apoyo externo y busca una salida autoritaria al estancamiento (económico), apoyado en un partido prebendario y respondiendo a un pacto de dominación". Este pacto integra los intereses de la oligarquía ganadera, los del capital financiero y comercial y a los más débiles intereses de una burguesía industrial vinculada al capital internacional y del pequeño empresariado asentado en unidades artesanales. Los campesinos y obreros no participaban de este pacto. En este contexto, siempre siguiendo a Fogel, sin canales de participación como no sean los establecidos por los partidos de patronazgo, el campesinado se identifica con líderes externos al sector y se mantiene incorporado al proceso político en forma dependiente a través de relaciones de clientela. Cuando el campesinado en estas condiciones generó organizaciones relativamente autónomas de los grupos dominantes, generalmente de tendencias prepolíticas, necesitó de la alianza de agentes extracampesinos. El caso de las Ligas Agrarias (que será más desarrollado en el capítulo siguiente) es un ejemplo de este tipo de vinculación.

Siguiendo acá el trabajo de Verón y Causarano⁵⁸ pueden aislarse tres rasgos (ideológicos, políticos, culturales) que explican en gran medida la vigencia de la cultura autoritaria en el Paraguay.

El *militarismo*, que como se vio impregnó históricamente la formación nacional. Al decir de aquellos autores, "la confianza, el respeto (y el temor) hacia el ejército se configuran —más sólidamente— después de la guerra contra Bolivia. Desde 1936 hasta 1954 se sucedieron cuatro presidentes militares. Stroessner toma el poder luego de un período muy convulsionado y es visto como el hombre que, con el apoyo del ejército, impone el 'orden' en un país en el que 'reinaba la anarquía' y estaba 'ensangrentado por luchas fratricidas'.⁵⁹

A los militares, siguen diciendo nuestros autores "se les reconoce

capacidad organizativa y operativa (...) estos aspectos más resaltantes de la ideología dominante se presentan, por lo general, articulados. En Stroessner se condensó el autoritarismo, el caudillismo, el militarismo, el anticomunismo y el discurso nacionalista". Estos rasgos sin embargo, "no son originados del stromismo sino que arrancan, algunos, de los orígenes mismos de la formación social paraguaya".

El otro rasgo con el que se explicita la cultura autoritaria es el del *caudillismo*, "ligado a los orígenes históricos de la sociedad paraguaya. La adhesión al "hombre justo, en el momento justo"⁶⁰, al líder providencial, es alimentada por la ideología dominante a través de la educación formal (una historia hecha por héroes) y de la práctica política autoritaria que acostumbra a delegar el mando en un líder carismático".

"Al caudillo se rinde pleitesía y de él se esperan favores; se afirma en el puesto y es prácticamente irremovible del cargo. En los ámbitos partidarios, gremiales, en los grupos sociales, se busca el dirigente, el conductor en quien delegar las decisiones".

"La participación es una práctica desconocida; existe una sensación de irresponsabilidad colectiva con respecto al país, una minoría de edad política que fomenta la aparición de actividades caudillescas".

"Muchos temen la desaparición de Stroessner porque no se presenta otro capaz de sustituirlo con la misma eficacia, capaz de 'poner orden' y de controlar el país".

Finalmente, Verón y Causarano anotan la importancia y vigencia ideológica del *nacionalismo*, el cual "proviene también de los orígenes de la formación social paraguaya, el cual se vio reforzado con la guerra victoriosa contra Bolivia, en defensa del territorio chaqueño. La revolución de febrero del '36, recibe la ola expansiva del fascismo europeo, se combina con los componentes del populismo en ascenso en América Latina y se incorpora como patrón ideológico rescatando la memoria de los héroes de la nacionalidad".

Ideólogos colorados hablan de una "esencia" o "ser" paraguayos "eternos" que determinarían un modo de ser propio y singular.⁶¹

"El nacionalismo se inculca en las escuelas y colegios (canto diario del Himno nacional, culto a la bandera), está presente en los discursos oficiales (todo lo hecho por el régimen se justifica porque engrandece a la nación y la conduce a su destino glorioso)".

Estos tres rasgos adquieren nuevas modalidades, reaparecen reelaborados en las dos últimas décadas, cuando la sociedad paraguaya inicia su tardío proceso de "modernización" económica y productiva. En efecto, a partir de comienzos de la década pasada se inicia un rápido proceso de "modernización" agraria, hasta 1981, el cual supuso una inserción violenta del campesinado a la economía de mercado que pauperizó también rápidamente y "descampesinizó" relativamente el agro. Esta modernización implicó una reconfiguración de la estructura de clases en el interior del sector⁶², la emergencia de la gran empresa agrícola moderna, la mayor presencia estatal, pero supuso también el ocaso de la cultura tradicional campesina.

El auge de la década del '70 produjo masivas migraciones campesinas a los núcleos urbanos, principalmente la periferia de Asunción y Ciudad del

Este a raíz de la construcción de Itaipú. A la bonanza de los buenos precios internacionales del algodón (cultivo campesino) y la soja (cultivo empresarial o semi-empresarial) se le sumó el flujo de capital financiero público (Itaipú) y privado. Pero el auge duró poco, disminuyendo a partir de 1982 abruptamente la oferta de empleo en las ciudades, generándose entonces una tendencia de aquellos migrantes hacia una recampesinización conflictiva, toda vez que para esa fecha, la disponibilidad de tierras sin dueño había desaparecido, al menos en la región oriental del país.

Los fenómenos económicos, políticos y sociales descriptos plantean el tema de la disolución de la identidad cultural campesina que en gran medida fue también la identidad nacional paraguaya. En principio, ésta puede considerarse el resultado de procesos de exclusión social que formaron parte del estilo de crecimiento implantado en el país. Morandé⁶³ sostiene que el sacrificio social es exigido a la misma sociedad moderna por la "modernidad", pero es principalmente exigido a todos aquellos pueblos y culturas que, por distintas razones, no han completado aún su proceso de integración a la modernidad, deduciéndose de esto, que la misma contiene una necesidad expansiva que le es inherente.

La expansividad de lo moderno se expresa no sólo en su ubicuidad para ocupar colonialmente los espacios culturales "no modernos", sino en permear distintos planos, sectores, actividades de lo cotidiano. Siendo como es, básicamente "un modo de pensar", los reproductores ideológicos de la modernidad no se satisfacen con la introducción de nuevas tecnologías en los procesos productivos, o readecuando el funcionamiento económico a las nuevas exigencias de los flujos financieros, o incorporando nuevos rubros a la producción agrícola desplazando prácticas y costumbres campesinas, o transformando la estructura ocupacional y educacional de la población. La reproducción de la modernidad, dado lo anterior, se realiza en la esfera de lo que es más inmediatamente próximo al campesino, a su comunidad y a su organización, se realiza en la forma como él percibe su entorno, como él percibe a los no-campesinos y como él se percibe a sí mismo.

C. Relaciones mercantiles, cultura política y poder local

Luis Galeano

La cultura política autoritaria reconoce antecedentes remotos en el Paraguay, tal como se puso de manifiesto en los análisis formulados en los capítulos precedentes. En términos explícitos o implícitos se ha evidenciado que el régimen dictatorial, en la práctica, supo apropiarse de componentes clave de esa cultura tradicional, especialmente en lo referente al ejercicio paternalista de la autoridad y a la adhesión a una mentalidad filial; elementos que los incorporó como bases de su propia legitimidad.

Sin embargo, el régimen encabezado por Stroessner los había asimilado recodificándolos. Con el transcurso del tiempo fue vaciando, separando, aquellos elementos más éticos, que tanto la tradición cristiana como los legados de una incipiente y temprana modernidad los habían conformado. Aunque posteriormente retomaremos esta hipótesis, en los puntos que siguen intentaremos caracterizar e interpretar los rasgos primordiales de la cultura política autoritaria constituida durante el lento período de formación de la sociedad agraria desde fines del siglo pasado y hasta mediados del actual. De esta manera, esperamos aportar criterios analíticos apropiados a una correcta comprensión del "vaciamiento cultural" al que hemos aludido.

1. El marco estructural del latifundio-minifundio

Una vez concluida la guerra de la Triple Alianza (1864-1870), se recompuso la estructura de la gran propiedad y el latifundio; proceso en el cual incidió directamente la venta de tierras públicas, llevada a cabo por el Estado a partir de entonces.⁶⁴ De esta forma, se había concretado una de las vías de inserción de la economía nacional a las redes del capitalismo internacional. Entre 1881 y 1914 se enajenó un total aproximado de 26 millones de hectáreas (actualmente el territorio paraguayo comprende cerca de 41 millones de Hs).⁶⁵

¿Cuáles fueron las modalidades de articulación entre este latifundio y el minifundio agrícola que paralelamente se constituyó? Dejando de lado cuestiones que ya fueron abordadas en otro capítulo, interesa consignar que los agentes del capital anglo-argentino instalaron explotaciones ganaderas e industrias tanineras en el Chaco y en Alto Paraguay, y explotaciones de yerba y madera (explotada como materia prima) en el Alto Paraná. Eran auténticos enclaves, que aparte de absorber a una pequeña proporción de fuerza de trabajo de las áreas rurales con mayor super-población relativa, no tuvieron mayores nexos con el minifundio agrícola y la población campesina propiamente dicha.

Una más alta articulación, por el contrario, existió entre el latifundio ganadero y el minifundio agrícola. Por articulación debe entenderse el pro-

ceso contradictorio de asimilación y de exclusión al mismo tiempo. La asimilación se dio a través de la absorción del peonaje, especialmente del asalariado temporal. Téngase en cuenta de todas formas que la producción de fuerza de trabajo incorporada por la mediana y gran ganadería fue mucho menor que las asimiladas por el latifundio yerbatero y, sobre todo, por toda la gama de unidades productivas que desde principios de la presente centuria comenzaron a instalarse en las provincias fronterizas argentinas (Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones). En efecto, la migración temporal, a esas provincias, de contingentes de cosecheros —recolectores de algodón generalmente—, constituidos por campesinos semi-asalariados, había adquirido una envergadura significativa durante el período histórico referido.⁶⁶

2. La expansión fragmentaria de las relaciones mercantiles y los tipos de caudillo

Para 1920 se ha estimado⁶⁷ que el Paraguay tendría entre 800 a 900 mil habitantes. De ellos, el 80% residía en áreas rurales y que, en su inmensa mayoría, estaba integrado por población estrictamente campesina. Dicho dato se correlaciona con el perfil de la distribución de la tierra agrícola que entonces existía. De las 38.212 explotaciones agropecuarias, los que tenían hasta 50 Hs. alcanzaban un total de 301.708 Hs., y los que poseían 51 y más Hs. representaban una superficie de 15.348.008 Hs.⁶⁸

Más que a las limitaciones y a las relaciones heterónomas impuestas por el latifundio ganadero, el estancamiento de toda la economía agrícola y, por ende, de la economía campesina, se debió al escaso dinamismo de la economía de mercado, de las relaciones mercantiles. Durante todo este período histórico, "resulta más coherente hablar de la "no-rentabilidad" de la agricultura en el Paraguay como una expresión concreta de la inexistencia de dos condiciones fundamentales, una a nivel de producción y otra a nivel de comercialización para el auge de la pequeña y mediana explotación agrícola eminentemente empresarial".⁶⁹ La primera se tradujo en la escasez de fuerza de trabajo libre (se dijo que los cosecheros migrantes eran campesinos semi-asalariados). La segunda consistió en la desarticulación regional y en la precariedad de los medios de transporte.

Precisamente, "el tráfico de productos del campo a la ciudad se estableció dentro de un cuadro de mercadeo rudimentario".⁷⁰ Los puntos de comercialización se instalaron en las proximidades de las principales vías de comunicación de la época —vía férrea y ríos— y en las de aquellas más incipientes y de menor infraestructura —carreteras—. Al analizar el proceso de urbanización durante este período (1870-1950) y al verificar la pequeñez y la apreciable desarticulación de la red urbana (Asunción apenas habría contado con alrededor de 100.000 Hs.), así como las funciones socio-económicas y políticas que desempeñaba, Ratinoff sostenía que "los enclaves urbanos constituían a lo más una red elemental cuyas tareas esenciales implicaban el mantenimiento de nexos con el exterior, y de un sistema de

dominación política de naturaleza tal que no parecía indispensable una articulación operativa del territorio".⁷¹

En este escenario histórico-estructural tanto el poder socio-económico como la matriz cultural condicionaron y legitimaron que el ejercicio de la autoridad, en la sociedad civil y en la práctica, recayera en dos tipos de caudillo: el *patrón hacendado* y el *patrón comerciante*. En este punto interesa especificar que la hacienda ganadera ha aquilatado solo parcialmente los rasgos sociológicos señalados por Medina Echeverría en su célebre conceptualización sobre la hacienda latinoamericana: 1) célula de poder político-militar al lado del económico; 2) núcleo de una dilatada estructura "familiar"; 3) modelo circunstancial de autoridad; y 4) creadora de un tipo humano, de un "carácter" singular.⁷²

Con excepción de los enclaves agro-industriales y forestales de capital extranjero, de hecho el poder militar no fue controlado por los hacendados. El poder político de los mismos no consiguió legitimarse y regir a nivel nacional, sino más bien en los ámbitos de determinadas regiones, zonas o localidades. Los rasgos que mayor trascendencia tuvieron en la sociedad agraria paraguaya fueron los de haber constituido la hacienda ganadera un modelo de autoridad, y sobre todo, un tipo socio-cultural especial. En la cultura política, conformada en el curso de estas décadas, el ejercicio de la autoridad basado en un modelo paternalista logró definirse con perfiles inequívocos. Era un modelo en el que el caudillismo se depositaba en la figura del Señor. Hasta hoy en día pervive una memoria colectiva, muy destenida por el despotismo impuesto por la dictadura stronista, que distingue entre las distintas categorías de caudillo o señorío. Cuando en guaraní se califica a una persona como el *Karai Guazú* (Gran Señor) de una localidad, paraje o pueblo, ello implica que se trata de un líder natural comunitario que, independientemente de su poder económico, posee un prestigio y una ascendencia sobre los miembros del grupo o de la comunidad que no poseen los restantes caudillos. Era una cultura cuyos valores y pautas, en parte, se cimentaron en la tradición católica, como las referentes a la religiosidad de distinción o la magnanimidad. Valores que coexistían con otros de contenidos opuestos: la magnanimidad podría transformarse en ostentación y el arrojo noble en el machismo vacío, por ejemplo.

El patrón-comerciante recién más tardíamente consiguió conquistar una cuota de dominación significativa a nivel de los poderes locales, aunque nunca comparable con la poseída por el hacendado. Téngase en cuenta que el poder político de este último se cimentaba, entre otros condicionamientos, en el hecho de residir en los centros urbanos de más envergadura del interior, o bien en la propia Asunción, en los casos de los grandes hacendados. Ambas categorías de caudillo compartían, por un lado, la condición de constituirse en nexos básicos de estructuras familiares, a las que aludía Medina E., o de compadrazgos, que en la práctica integraban reconocidos círculos de clientelas adherentes de los grandes partidos políticos tradicionales: el Liberal y el Colorado.⁷³ Por otro lado, ambos tipos de caudillos recurrieron a formas de autoridad legitimadas en elementos de una cultura de corte autoritario-paternalista. Esos elementos se concentraban en

tres creencias: 1) en el valor cordial de las relaciones personales; 2) en el amparo en un momento de crisis; y 3) en el poder de jefe.⁷⁴ Eran elementos a los que también se oponían contravalores, como fueron: las rivalidades, las insensibilidades y las deslealtades.

Por último, como corolario de los aspectos considerados, y a falta de una historia social sistemática, basándonos en indicios y testimonios dispersos, cabe señalar que los antecedentes de la cultura autoritaria analizados no impidieron la asimilación del incipiente estilo de vida modernista. Ya mencionamos que los grandes hacendados vivían en la capital. A este dato debemos añadir la circunstancia de que en los principales centros urbanos del interior se instalaron pequeños grupos de inmigrantes europeos (españoles, italianos y franceses) que, además de insertarse en posiciones estratégicas de las primeras redes nacionales del comercio, prontamente comenzaron a operar en la producción agrícola ganadera y en el de la agro-industria. Pues bien, estos grupos sociales echaron los cimientos para la difusión de algunas pautas culturales propias del mundo urbano-industrial. Por más que los contactos entre los pequeños centros urbanos no eran densos, en algunos de ellos se iniciaron el cultivo del arte moderno (pintura, música clásica y teatro). En determinadas regiones (Concepción, Guairá, Misiones, Itapúa y Neembucú) emergieron círculos de una burguesía rural, que supieron combinar el autoritarismo paternalista como modelo de autoridad, con las pautas de vida aristocrática, sustentada igualmente en una ética conservadora.

D. Las transformaciones en la cultura cotidiana bajo los efectos de la modernización conservadora

Ramón Fogel*
Tomás Palau

1. La debilidad de la estructura de clases y la modernización desde arriba

El proceso de modernización que afectó y afecta a la sociedad paraguaya tiene rasgos específicos. El mismo fue impulsado desde el Estado, se dio con retraso en relación a otras formaciones sociales, y se orientó básicamente a la estructura agraria. Por otra parte, la inserción en el mercado de la población campesina —como resultado del referido proceso— fue más limitada en algunas regiones.⁷⁵

Ya en la década del '40 se expresaron los primeros intentos modernizadores en el país.⁷⁶ En el contexto de una sociedad agraria basada en una agricultura atrasada y estancada, con un campesinado con memoria colectiva limitada a luchas puntuales por la tierra y sin actores sociales subalternos, los gobiernos con fuerte ascendencia militar de los Generales Estigarribia y Morínigo intentaron, sin resultado, impulsar un proceso de cambio social articulado en la expansión de su incipiente sector industrial.

En efecto, el general José Félix Estigarribia, conductor victorioso de la Guerra del Chaco, al poco tiempo de asumir la presidencia de la República, en 1939, solicitó al gobierno norteamericano un apoyo financiero y misión técnica para asistir al Paraguay en la modernización de su agricultura y de su estructura financiera. Los proyectos trunco de Estigarribia, que falleció en un accidente en 1940, fueron retomados por su sucesor, el General Higinio Morínigo.

Las propuestas de Morínigo comprendían el apoyo estatal a proyectos de desarrollo industrial, que permitirían las diversificaciones de la economía nacional. El programa de desarrollo industrial enfatizó la instalación de plantas agroindustriales que procesaran la materia prima nacional y a su efecto se sancionó, en 1942, la "Ley de Privilegio Industrial" y el mismo gobierno constituyó la Corporación Nacional de Alcohol.

En abril de 1942, el gobierno del General Morínigo solicitó 2,1 millones de dólares del Export-Import Bank para ser asignado a "Plantas Industriales". Como reacción al pedido, los técnicos del Banco expresaron su escepticismo en relación a las posibilidades de ejecución de un programa de desarrollo en el Paraguay y concluyeron que "no había esperanzas de desarrollo económico del país", particularmente en los proyectos de desarrollo industrial. Los insistentes reclamos posteriores del gobierno paraguayo ante el Departamento de Estado, no dieron el resultado esperado.⁷⁷

En los años '60, los esfuerzos orientados a la modernización conserva-

* Investigador del Centro de Estudios Rurales de Itapúa (CERI).

dora se despliegan con el mismo trasfondo estructural; en una sociedad marcada por la debilidad de la burguesía nacional, la modernización pasa a ser concebida y empujada básicamente a partir del Estado, con un fuerte apoyo externo, en un contexto necesariamente autoritario, ante la fragilidad de la estructura de clases. Dado el tipo de inserción del Paraguay en la división internacional del trabajo, esta dinámica no se orientó a una sociedad urbana-industrial sino a una organización marcadamente agraria, capaz de alimentar un modelo agro-exportador basado en la especialización productiva.

A la hegemonía detentada por el Estado en esta última etapa de expansión del crecimiento económico iniciada hacia 1972 le sucede después, casi inmediatamente, el liderazgo que empieza a asumir el capital financiero transnacional, que desplaza a las élites político-militares afianzadas en el Estado hacia el manejo de las actividades insertas en la economía informal. Ambos grupos dominantes encuentran en el país una situación particularmente ventajosa en cuanto a la fuerza con que pudieran contar propuestas antagónicas. No existe, en otras palabras, ni un campesinado ni un proletariado lo suficientemente articulados como para ofrecer resistencia al proyecto eficientemente conservador de las relativamente nuevas élites.

A diferencia de la mayoría de los otros países de América Latina, el Paraguay no adviene nunca a la etapa de sustitución de importaciones. Este hecho parece tener una buena carga explicativa en la debilidad de la estructura de clases; no se conforma ni una burguesía, ni un proletariado. Las antiguas oligarquías ceden paso a una de nuevo cuño que, sin abandonar sus importantes patrimonios inmobiliarios, otorga mucha mayor importancia a negocios comerciales y financieros, casi todos de tipo especulativo, como forma de acumulación de riquezas, y el campesinado, secularmente atomizado se transforma gradualmente en un sub-semi-proletariado con escasas posibilidades de aglutinar masivamente los fragmentados rasgos de identidad de una clase social, por otro lado, crecientemente difusa.

El largo período de vinculación paraguaya a la economía regional a través de la exportación de materias primas no elaboradas, que se constituye ya ella tardíamente en el país (primero por el bloqueo establecido por José Gaspar Rodríguez de Francia entre 1814 y 1840 y por la guerra de la Triple Alianza posteriormente (1865-1870), origina un campesinado libre, autosuficiente, pero tempranamente minifundizado, que combina el trabajo predial con actividades en obrajes de yerba y madera. La matriz sigue siendo la casa-chacra a la cual siempre regresa sin que se constituya ni siquiera transitoriamente en obrero agrícola, dadas las características del trabajo en obrajes: dispersión de los asentamientos y ausencia casi completa de unidades de transformación. Este período, que también estuvo dominado por la presencia de grandes estancias ganaderas, entra en su ocaso final durante la década del '60, época para la cual muchas de las economías latinoamericanas estaban ya asistiendo al agotamiento del período de sustitución de importaciones, relevante en términos de construcción de los Estados nacionales, en la medida en que, a) permitió la reconstitución de los aparatos productivos mediante procesos sostenidos de industrialización, b) estuvo asociado en lo político a la conciencia de ciertas élites políticas y militares

vinculadas al Estado de la fragilidad de un desarrollo basado casi exclusivamente en la exportación de productos primarios no elaborados, c) estuvo marcada en lo ideológico, por la idea del "desarrollo" difundida por aquellas élites modernizantes, ideología que contó con suficiente apoyo de importantes actores sociales impregnados de nacionalismo, propiciándose con ello el advenimiento de movimientos populistas, del nacionalismo militar (que en el Paraguay tuvo apenas una influencia en el discurso de algunos líderes bajo la forma de nacional-socialismo), d) administrativamente, el período de sustitución de importaciones se asoció a la tendencia por un crecimiento de la demanda por la centralización del poder, a la expansión burocrática y a una clara aproximación estatizante hacia el desarrollo económico. Finalmente, e) en lo social, la dominante presencia de las élites agroexportadoras que fueron responsables de la introducción y expansión del capitalismo en el agro desde el siglo pasado, son desplazadas de sus posiciones por los nuevos actores dominantes de la escena política, quienes adquieren mayor fuerza, trasladando desde el Estado beneficios legales y económicos a la emergente clase obrera que se constituye a partir de estos beneficios y se convierte en defensora de esa identificación entre desarrollo e industrialización.

Esta etapa, como se dijo, no existió en la historia económica del Paraguay, sino que se pasó de aquella primera de "crecimiento hacia afuera" de exportación de materias primas no elaboradas al mercado regional sin transición, a una nueva forma de orientación hacia el mercado exterior, ahora exportando bienes primarios con algún valor agregado de acuerdo con las recomendaciones de la ley de las "ventajas comparativas" internacionales. El advenimiento de la dictadura de Stroessner en 1954 garantizó el mantenimiento del control político sobre la fuerza de trabajo de tal modo que la transición no implicara costos políticos (como los que debieron pagar diversos países de la región ya sea con la militarización del Estado o con el ocaso democrático que caracterizó al período que se inicia en 1964) y pudieran implantarse las nuevas medidas que exigían los intereses económicos hegemonizados a nivel internacional. Esta particular circunstancia del caso paraguayo interesa para el análisis de las transformaciones en las políticas y patrones cotidianos de interacción cultural por un doble motivo, al menos.

Por un lado, el proyecto de "modernización" que ha caracterizado principalmente en lo económico al período que se inicia hacia 1972 (aunque como se mencionó al comienzo, puede rastrearse hasta la década de los 40 en lo socio-político) ha ido conformando —como resultado de las transformaciones estructurales— una orientación de los valores, cuyos ejes centrales son la modernidad (con parámetros proporcionados por los países metropolitanos) y la eficiencia, entendida como un rasgo que define la habilidad de administrar recursos y que es propia de los reductos "modernos" del aparato económico (algunas industrias y ciertas ramas del sector servicios) a través de los cuales se verifica en buena medida el más dinámico proceso de acumulación de capital. Además de estos dos ejes centrales de vigencia generalizada, en el Paraguay la coexistencia duradera de moderni-

zación y dictadura, así como la de crecimiento económico y exclusión, ha hipervalorizado la motivación hacia el logro económico independiente (o sea, despojado de cualquier connotación de naturaleza ética) de los métodos que se utilicen para lograrlo. La legitimación de la violencia directa o simbólica es otro proceso que ha sido estimulado por esta etapa peculiar del "desarrollo" doméstico.

Por otro, al no haberse llegado nunca a la constitución de organizaciones sólidas de trabajadores (industriales, rurales o de servicios), la capacidad de resistencia de estos sectores sociales subordinados ha sido escasa y particularmente vulnerable a su asimilación como clientela política del proyecto dominante y como "consumidores" de una propuesta económica inherentemente anti-popular y des-nacionalizadora. Los macro-procesos que se gestaron, principalmente la inserción a los mercados de la economía campesina, las rápidas transformaciones y segmentación de los mercados de trabajo, la urbanización sin industrialización, la mayor cobertura del aparato educacional del Estado, la expansión inusitada de los medios masivos de comunicación, conformaron en muy corto plazo (durante la década de los 70) una situación de des-identidad cultural de la población pobre del país —principalmente campesina— resultado del cambio de identidades sociales gestadas por aquellos procesos en las matrices mismas en las que se reproducía la cultura; la familia, los vecinos y la comunidad aldeana.

2. Los componentes principales del proceso de modernización agraria y su impacto

Los diversos componentes del proceso modernizador en el agro comprenden la penetración del capitalismo, tanto por vía del auge de los *farmers* como por la de la gran empresa, la expansión y tecnificación de cultivos comerciales y de la pecuaria, la colonización oficial y de inmigrantes extranjeros y la expansión y transformación del Estado. Los procesos señalados tienen efectos desestructurantes de la cultura campesina cotidiana, que abarca la desintegración de las relaciones entre las unidades campesinas —con el consiguiente debilitamiento de la identidad social— y dentro de las propias unidades domésticas campesinas.

En la ponderación de los efectos desestructurantes de los procesos señalados, la cultura campesina es referida a la reproducción de la vida diaria. Esto es, a nivel de individuos, de unidades familiares —nucleares y extendidas—, de redes comunales y locales. Lo doméstico privado queda acotado como ámbito de la producción y del consumo, comprendiendo básicamente la vida laboral y familiar.

a) Intensificación de las relaciones capitalistas en el agro y la colonización

Particularmente, en la década del 70 se intensifica la instalación de empresas agrícolas grandes y medianas, ligadas en su mayoría al capital

extranjero y en menor medida a agentes vinculados estrechamente al Estado. Los primeros esfuerzos por constituir un empresariado agrario se inician a mediados de los años 60 con los proyectos de desarrollo ganadero y el Plan Nacional del Trigo.

La ejecución de esos emprendimientos transformó la hacienda tradicional, y al aumentar la presión sobre las tierras en zonas de viejo asentamiento, condujo al cercamiento de campos comunales.

Ya en los años 70, el mismo Instituto de Bienestar Rural (IBR)—entidad oficial encargada de la colonización— con la asignación de grandes lotes a empresarios y a funcionarios civiles y militares posibilitó la constitución de la gran empresa. La incorporación de funcionarios influyentes y de militares en el emergente empresariado facilitó la creciente militarización del espacio rural, con la multiplicación de destacamentos militares en torno de estos empresarios tipo *junker*.

La constitución de estas empresas no sólo tuvo incidencia en la vida campesina, al presionar sobre las tierras ya ocupadas por pequeños productores, sino también al crear un nuevo mercado de trabajo y al destruirle el entorno ecológico. Si bien las empresas agropecuarias ocuparon mucha tierra y crearon pocos puestos de trabajo, las mismas generaron una demanda estacional importante de asalariados, que debieron migrar temporalmente. En efecto, en 1981 las explotaciones de 500 hectáreas y más, ocupaban menos de 8.000 asalariados permanentes y aproximadamente 12.000 asalariados temporales.

La colonización fue uno de los instrumentos más importantes de la modernización de la estructura agraria. El IBR asignó 80.112 lotes con 5.286.711 hectáreas, entre 1963 y 1982; de este total, 74.797 parcelas familiares con 1.399.629 hectáreas corresponden a productores campesinos, y 5.315 lotes con 3.887.082 hectáreas fueron asignados en grandes lotes a empresarios, o a altos funcionarios —civiles o militares— para su apropiación productiva o su eventual re-venta.

La colonización significó la relocalización de miles de familias campesinas de la región central en áreas recién habilitadas a la agricultura, en un modelo de colonización con lotes cuadrículares, que dispersa físicamente a la población y la atomiza socialmente. Esta relocalización disolvió las redes informales de cooperación así como a la familia campesina extensa, y de este modo la preexistente organización de la producción y del consumo.

La nueva unidad nuclear ya no puede apelar al intercambio de trabajo para cubrir las necesidades de mano de obra en momentos críticos; a falta de minga se debe contratar trabajo asalariado en períodos de cosecha. La pérdida de valores tradicionales ligados a la autoayuda y de procesos comunicativos afecta necesariamente la identidad campesina.

Al pasar del asentamiento aldeano al parcelario, la familia campesina deja un espacio social caracterizado por relaciones internas densas y comunicaciones frecuentes e intensas y se incorpora a otro, caracterizado por el aislamiento. La segmentación creciente de las familias de los colonos en sus lugares de destino se proyecta en procesos diferenciados de resocialización, según sexo y edad.

b) La transformación de los mercados de trabajo y del empleo

El empleo agropecuario, sin embargo, no fue alterado sólo por las empresas capitalistas medianas y grandes, ya que también las empresas familiares de tipo *farmer* —ligadas a migrantes japoneses, germano-brasileños y brasileños— se incorporaron como unidades demandantes de mano de obra en un mercado de trabajo con poco crecimiento.⁷⁸ En este sentido, debe tenerse en cuenta que si bien el crecimiento económico histórico excepcional que se dio en el decenio 1972-82 comportó la expansión del empleo global a una tasa del 3,4% anual, ese crecimiento fue más reducido en la rama agropecuaria, llegando al 2,1% anual entre 1972 y 1982, a pesar de la expansión de los cultivos comerciales.

De estos datos resulta que la modernización de la estructura productiva rural liberó fuerza de trabajo y afectó la composición de la PEA. En efecto, según relevamientos censales, la PEA rural descendió del 58% en 1972, al 52,7% en 1982, en tanto la PEA agropecuaria descendió por debajo del 50%. Sin embargo, considerando la época de mayor demanda de fuerza de trabajo, aún en 1982, la PEA agropecuaria habría sido ligeramente mayor al 50%. Posteriormente, con la finalización de las obras conexas a Itaipú, la PEA ligada a actividades agropecuarias habría aumentado, teniendo en cuenta la escasa demanda de fuerza de trabajo por parte del débil sector industrial y de las masivas ocupaciones de tierra que se dieron a partir de 1984. Esta importancia relativa de la PEA ocupada en el sector primario sitúa al Paraguay en el pequeño grupo de países con predominio de la producción agropecuaria; en este sentido téngase en cuenta que solo en El Salvador y Guatemala —además de Paraguay— la población agrícola representa más de la mitad de la PEA (Durstón, 1985).

Diversos cambios se dieron en la estructura de la PEA del sector primario, entre 1972 y 1982. Si bien creció en términos absolutos la población ocupada en el sector primario⁷⁹, la misma cayó en su peso relativo, contrastando con el aumento de la importancia relativa de la PEA ocupada en construcción y en empleos informales. El crecimiento del mercado informal de trabajo, básicamente el de vendedores ambulantes, tiene diversa incidencia en la cultura campesina, ya que estos trabajadores integrados al mundo urbano mantienen contacto con la vida rural. Así, los 7.000 "mesiteros" —vendedores ambulantes— de Pto. Pte. Stroessner se redujeron a la mitad a diciembre de 1988, regresando parte de los desgranados a sus áreas rurales de origen.

Como ya se señaló, la modernización de la estructura productiva, que privilegia las formas de producción con uso intensivo de capital y de energía, expulsa fuerza de trabajo, a partir de la escasa demanda de trabajadores por parte de las empresas de tipo capitalista; las unidades productivas campesinas, a su vez, no pueden retener a la nueva fuerza de trabajo que emerge entre sus miembros, a tal punto que los trabajadores familiares no remunerados bajan en su peso relativo del 22,3% en 1972 al 20,4% en 1982.

La empresarialización de la agricultura se refleja así en la disminución,

en términos absolutos, de los empleadores y en la caída de la importancia relativa de los asalariados. En los extremos de la estructura rural, los asalariados, en cuanto categoría social, ni formulan demandas, ni manifiestan capacidad de autorepresentarse. Vale decir, la asalarización, en sus modalidades predominantes, que atomiza a un subproletariado rural, no conduce a la constitución de nuevos actores sociales subalternos, aunque sí tienen incidencia en la organización socioeconómica de las unidades domésticas ofertantes de fuerza de trabajo: cambian las obligaciones, prerrogativas y los mismos roles productivos de los miembros de la unidad, incluyendo a las mujeres. Ciertamente en el caso de las mujeres se trata de un cambio significativo en las expectativas normativas referidas a los roles en el ámbito doméstico. A este cambio contribuyeron tanto las transformaciones estructurales, como las ideas venidas de afuera.

La movilidad ocupacional y la diversidad de ocupaciones altera diversos aspectos de la vida cotidiana campesina, tales como las relaciones informales de cooperación —imposibilidad de integrar grupos de minga, de intercambiar cosas compradas, etc.— y los patrones tradicionales de consumo.

La destrucción del entorno ecológico, desencadenada con la empresarialización de la agricultura, afecta necesariamente la relación del campesino con la tierra.

c) Migrantes extranjeros y complejidad de la diversidad etnolingüística

En la ampliación de la frontera agrícola participaron, además de las reparticiones públicas, las colonizadoras privadas, que asentaron a inmigrantes brasileños y a extranjeros de otra nacionalidad (mennonitas, germano-brasileños, japoneses, etc.). En esta colonización privada se constituyeron asentamientos de empresarios familiares tipo *farmer* con rasgos étnicos particulares; en el caso de las colonias brasileñas, con frecuencia los productores contratan a asalariados de la misma nacionalidad y, en esa medida, pasan a constituir enclaves etno-culturales⁸⁰, en los cuales se habla el portugués, se ve TV brasileña, se utiliza el Cruzado como moneda, y hasta las parejas se eligen dentro de la misma comunidad étnica. Se trata de la introducción apabullante y excluyente del modo de vida propio del Brasil, repitiendo, en un contexto socio-histórico distinto, la ocupación compulsiva del espacio nativo. En estas colonias los lazos sociales se basan en características culturales —idioma, religión, nacionalidad, hasta color de piel— ajenos a los campesinos criollos.

Diversos son los efectos, en la cultura campesina, de la instalación y expansión de los enclaves etno-culturales. De modo general, el más significativo es el resquebrajamiento de la identidad cultural campesina, como resultado de la verdadera invasión de su territorio, por parte de grupos de inmigrantes extranjeros poderosos y el aumento de las interferencias lingüísticas.

Al multiplicarse los enclaves brasileños, alemanes, menonitas, japo-

neses y de otro origen, se rompe la continuidad del espacio de la cultura nacional. El campesino paraguayo se siente como extranjero en su propio país y con frecuencia pasa a ser despreciado y rechazado por los inmigrantes extranjeros, quienes refuerzan su identidad étnica con las ventajas económicas proporcionadas por el enclave.⁸¹ Una de las consecuencias de esta extranjerización del espacio es, como se verá, la pérdida de centralidad de la cultura nacional.

Un fenómeno colateral a la instalación de colectividades de inmigrantes extranjeros, es la aparición de sectas religiosas —milenaristas y de otra orientación— ligadas básicamente a capas de cultivadores brasileños pauperizados. Estos movimientos religiosos se proyectan en la cultura campesina cotidiana, generando movilizaciones de orientación comunitaria de tipo conservador, ya que los mismos no buscan influir en la esfera del Estado para promover el interés de sus miembros, sino más bien se orientan a transformar el comportamiento de sus adherentes en el ámbito privado. Las acciones de los mencionados movimientos no están referidas al orden social, que en esa visión será transformado por obra de fuerzas sobrenaturales.⁸²

d) Especialización productiva y densificación técnica del proceso productivo

La tecnificación de la agricultura campesina, para volcarla al mercado, fue otro de los componentes importantes de la modernización ya que aunque prevaleció el criterio —en la implementación de las políticas públicas— que atribuía a las empresas la capacidad de dar un uso más racional a la tierra, las pequeñas parcelas también fueron incorporadas a la especialización productiva. De hecho el algodón es cultivado sólo en el sector campesino.

El vuelco a cultivos comerciales y los esfuerzos por convertir en mercancía los factores de producción, incluyendo los mismos lotes de los colonos, fue posible mediante la implementación de los Proyectos de Desarrollo Rural Integrado (PDRI), la notable expansión del crédito institucional y las inversiones en la agricultura realizadas por el Estado. Los PDRI integran como componentes básicos la titulación de lotes, construcción de caminos, créditos, asistencia técnica y salud.

Considerando sólo los proyectos implementados desde 1978 y negociados hasta 1984, se ejecutaron 15 proyectos, con un costo total de 447,94 millones de dólares. Si bien el impacto de los PDRI es más intenso en algunas regiones, los mismos se vienen implementando en casi todas las regiones del país, aunque con intensidad variable. Estos proyectos constituyen ciertamente un medio de expansión de las relaciones de producción de tipo capitalista.

La referida tecnificación y la concomitante expansión de cultivos en las unidades domésticas campesinas requirió un aumento apreciable del crédito oficial, a tal punto que los 15.821 millones de guaraníes⁸³ de la década del 60 aumentan a 62.667 millones —de guaraníes constantes de 1977— en los primeros años de la presente década.⁸⁴

Para las unidades domésticas campesinas el vuelco a los cultivos comerciales comporta un cambio sustancial en su organización socioeconómica, por cuanto la mayor venta en el mercado se corresponde con la mayor cantidad de artículos comprados, al disminuir los cultivos de autoconsumo. La incorporación creciente en el mercado, además de transformar los patrones de consumo, aumenta la desigualdad de los términos del intercambio entre los productos que el campesino vende y los que compra.

En efecto, con estos proyectos de desarrollo surgen nuevas formas de extracción de excedentes, básicamente el uso del crédito y de insumos tecnológico-intensivos. Estos últimos, ligados a nuevos paquetes ajenos al conocimiento campesino tradicional, generaron mayor dependencia hacia agentes externos; la crisis de identidad fue la otra cara de la moneda, de un proceso que tornó inservibles los conocimientos y destrezas de los campesinos.⁸⁵ Aun los pequeños productores con buenas tierras, que mejoraron su productividad y su entrada bruta —con el crédito y la asistencia técnica que recibieron— no aumentaron su ingreso neto ni su capital neto, ya que debieron destinar una proporción creciente de sus ingresos al pago de insumos y del crédito.⁸⁶

3. La consolidación del Estado autoritario y la mayor incidencia de las políticas culturales

En las transformaciones de la cultura campesina incidió no solamente la modernización de la estructura de las relaciones socioeconómicas en el campo, ya que las políticas culturales fueron adquiriendo mayor peso a medida que crecía el propio Estado.

Según se verá, es tal la fuerza del campo cultural que el mismo llega a redefinir los principios de organización de la vida cotidiana. En cuanto a los campos culturales, a su vez, tienen mayor peso relativo la educación y la industria cultural; básicamente la radio y la TV.

En la ponderación de la incidencia de las políticas públicas debe tenerse en cuenta que la conversión del Estado en principal protagonista de la modernización, se dio a lo largo de un proceso de expansión y transformación del mismo, con un importante papel jugado por la corporación militar. Este proceso fue el que suplió el débil impulso de la burguesía urbana, tan dependiente del Estado como la decadente oligarquía ganadera y permitió el crecimiento del clientelismo. La referida expansión del Estado como agente económico fue alimentada ya entrado el período de auge económico, con las divisas provenientes de la construcción de las represas de Itaipú y Yacyretá, que entre 1974 y 1984 generaron un ingreso de 2.437 millones de dólares.⁸⁷ Este notable flujo de dinero, canalizado por un grupo limitado —estrechamente ligado al Estado— y destinado más al consumo suntuario que a la inversión productiva, afirmó en la conciencia campesina la visión de un poder extraordinario de las élites hegemónicas.

El manejo creciente de recursos por parte del Estado autoritario le permitió someter a su control a distintos sectores de la sociedad civil, combi-

nando la persuasión y la represión directa con gratificaciones simbólicas y materiales. Las gratificaciones materiales son concedidas a través de un extendido sistema prebendario.

Si bien es cierto que la creciente praxis prebendaria sólo llegaba hasta los eslabones intermedios del sistema, la inserción en relaciones de clientela es la que da cierta seguridad a los campesinos, en cuanto es la relación con caciques locales lo que permite encarar los frecuentes abusos y aliviar los efectos del intenso empobrecimiento.

Esta integración política del campesinado, a través de clientelas, se ve facilitada por los casos de movilidad vertical; los caciques promovidos con los mismos rasgos etno-lingüísticos campesinos alimentan con eficacia una cultura política autoritaria, de sumisión a los jefes y hostilidad en relación a los pares que utilizan pañuelo de otro color.

La integración política del campesinado, a través de clientelas, está apoyada en desarrollados mecanismos de control social y político y en un discurso inmovilizador, que legitimó al gobierno a través del desarrollo, el orden y la paz social.⁸⁸ La sujeción, alimentada a nivel local con relaciones asimétricas de dominación establecidas en pequeños espacios —por autoridades y líderes políticos locales— estuvo reforzada cotidianamente con mensajes transmitidos por medios masivos.

Resultan permeables a este discurso autoritario, por una parte, la emergente burguesía agraria sin bases económicas propias y la originada en el capital internacional, y por otro, los colonos que operan empresas familiares de tipo *farmer* —ligados a la inmigración extranjera— que se ven favorecidos por el proceso de modernización impulsado por el Estado.

El discurso que define la identidad atribuida al campesino lo presenta como el *pynandí* (hombre descalzo del campo), respetuoso del orden y la jerarquía y baluarte en la implacable lucha contra el comunismo.

La transmisión del discurso político autoritario —que define hasta el papel de la religión— se ve facilitada por el monopolio que venía ejerciendo el Estado sobre los medios de comunicación de masas.⁸⁹ En un contexto marcado por la cultura oral, la radio es el medio más adecuado. En efecto, entre 1972 y 1982 los hogares con aparatos de radio pasan del 70% al 86%.⁹⁰

La exposición de mensajes radiofónicos de corte autoritario es muy alta si se tiene en cuenta el estricto control que se ejercía desde el Estado sobre el sistema nacional de radiodifusión. La "cadena paraguaya de radiodifusión" se transmite hasta hoy obligatoriamente, dos veces por día, por todas las radioemisoras. "La voz del coloradismo" también encadenaba diariamente a casi todas las radioemisoras durante media hora.

El control se ejerce también a través de la propiedad directa de seis radioemisoras⁹¹ y la marcada influencia sobre la gran mayoría de los otros propietarios, que son altos funcionarios del gobierno.

La TV ha sido otro de los aparatos culturales controlados por el Estado, caracterizado por la expansión permanente de la cantidad de receptores.⁹²

Estos medios que crecientemente llegan al campo insisten en las ideas de orden, subordinación y jerarquía y transmiten mensajes e informaciones

ajenos a la cultura campesina, que refuerzan la valoración de criterios y de símbolos de prestigio inalcanzables para el campesino, los cuales en esa medida alimentan el fatalismo y cierto rechazo de la identidad campesina. Los esquemas de percepción, las concepciones sobre la política y el Estado y los mismos hábitos que derivan del bombardeo de mensajes —y que por fuerza son internalizados por los campesinos— que tienen un marcado contenido estatista, al promover la sumisión, el clientelismo y la lealtad al "único líder", bloquean sistemáticamente la formación de identidades sociales.

La escuela colabora con los medios de comunicación de masas en la legitimación del sistema de relaciones dominantes, encubriendo su carácter arbitrario y con frecuencia compulsivo, presentando como natural y necesario el ejercicio de las relaciones de poder, en su forma vigente.

La movilización discrecional de estos aparatos culturales por parte del Estado facilita la producción y reproducción de concepciones acerca de lo político y de sus relaciones con la sociedad, que fortalecen la cultura autoritaria, ya bastante arraigada en el medio rural. Uno de los resultados de las políticas culturales es la reestructuración de la vida cotidiana en torno del principio de sujeción-obediencia. Como en el caso de otras sociedades con regímenes políticos autoritarios este principio se apoya en la movilización de recursos represivos.⁹³

En medida importante se reemplaza la formación de sentidos que resulta de la comunicación personal interactiva, en pequeños espacios; el autoritarismo afecta el sentido de las rutinas que conforman la vida cotidiana de producción cultural propia de los micro-espacios, sin embargo, fue menos afectada en colectividades campesinas aldeanas y en aquellas caracterizadas por una fuerte presencia de la Iglesia Católica.

Como consecuencia de la sujeción comentada y de la masificación cultural, se altera la conciencia colectiva de tal modo que la sociedad misma aparece como construida por fuerzas metasociales y los agentes pierden la capacidad de negar el orden social dominante aun en el plano de la utopía.

En cuanto a las interrelaciones entre lo público y lo privado la modernización conservadora comporta, por una parte, la privatización de lo público, y por otra, el control estatal creciente de ámbitos considerados privados.⁹⁴ En efecto, mientras lo público se iba debilitando, la vida social se va limitando a lo privado; cuando se buscaba descalificar a una organización constituida desde la sociedad civil, se le imputaba que "estaba haciendo política", mientras los líderes del partido de gobierno repetían que las decisiones políticas correspondían al "único líder".

Este líder en cuestión y los que constituían su entorno inmediato, a su vez, tendían a equiparar la administración del Estado con el manejo de una empresa propia, así como se equipara a los colaboradores en la administración del Estado como sirvientes personales.

El marcado predominio de lo privado en la vida social coincide con la exacerbación del individualismo, en la medida en que en la cultura cotidiana gana más peso el consumo. En el contexto definido por la expansión de la economía negra, en las capas medias, se tornó frecuente tener un automóvil "mau" y por extensión, bienes suntuarios introducidos de contrabando.

A medida que crece el ámbito privado a expensas del público son más los aspectos de las actividades privadas que son objeto del escrutinio del Estado. Hasta las reuniones sociales llegaron a ser objeto de la regulación estatal y la censura afectó diversas formas de expresión artística (festivales de la canción, conciertos de rock, etc.). Ámbitos de sociabilidad informal, como los clubes de fútbol debían contar con dirigentes oficialistas y en las cooperativas, la gestión exitosa supuso también dirigentes partidarios del gobierno.

En el contexto que se reseña, en la cultura campesina resultante, se afirma también la aceptación, como un hecho natural, de la desigual participación en procesos de toma de decisión, la pasividad y la aceptación de las relaciones paternalistas.

Como consecuencia de los procesos apuntados, las formas como las capas campesinas se representan el ejercicio del poder, resultan funcionales a la reproducción del sistema social; los modos de conciencia emergentes bloquean la posibilidad de transformación de la sociedad.

4. La emergencia de la cultura cotidiana de masas

a) Urbanización y escolarización

La dinamización del campo cultural tiene incidencia no sólo en el fortalecimiento de la cultura autoritaria sino también en la aparición de la cultura de masas en la sociedad rural paraguaya. Si bien el acceso a este tipo de civilización se dio en el caso paraguay —como lo señala Luis Galeano⁹⁵— sin pasar por una cultura urbano-industrial, su impacto es mayor en la capital y en el complejo urbano formado por Ciudad del Este - Pdte. Franco - Hernandarias.

La población migrante, que siempre mantiene contacto con su lugar de origen, establece la conexión entre aquellas ciudades y frecuentemente entre Buenos Aires y el mundo rural.

En este proceso de masificación cultural se homogeneizan patrones de consumo, se estandarizan las referencias, maneras de vestir y hasta la producción de ídolos. Los medios de comunicación masivos alteran la concepción misma de las necesidades básicas y de los satisfactores; la masificación cultural generada, comporta la pérdida de las formas preexistentes de concebir y organizar la vida cotidiana. La misma organización de la cotidianidad se altera con el debilitamiento de la cultura tradicional de corto alcance —personalizada, oral y de corto alcance—, a expensas de la producción y transmisión cultural de largo alcance, dirigida a públicos masivos.

Los efectos de la industria cultural, fundamentalmente de la radio y la televisión, la uniformidad cultural y la consolidación de la cultura autoritaria, se ven reforzados por la masificación de la educación formal, que ha estado creciendo en forma constante desde la década del 60. Así la tasa de analfabetismo, del 31,9% en 1962 desciende al 19,5% en 1972; la tasa de escola-

ridad de la población de 7 a 14 años pasó del 60,4% en 1950 al 76% en 1962 y al 82,2% en 1972.

La masificación de la educación llegó también al ciclo secundario, a tal punto que la asistencia a centros educativos de la población de 15 a 20 años pasó del 25,3% en 1972 al 31,9% en 1982.

b) El peso del proceso de internacionalización y el debilitamiento de la cultura nacional

La incorporación de la sociedad campesina a la cultura de masas comporta necesariamente el debilitamiento de la cultura nacional, en tanto ésta expresa una idiosincracia ligada al territorio y a la sangre y se enraza en el proceso socio-histórico.⁹⁶

La cultura nacional tradicional que es afectada no constituye una totalidad homogénea. Como creación colectiva ella tiene configuraciones diferenciadas, según sectores de la sociedad y aun en las mismas categorías sociales adopta formas ambivalentes, que se expresan en el bilingüismo.⁹⁷

En este punto debe tenerse en cuenta que el Paraguay es el país más bilingüe del mundo, en tanto una proporción más alta de la población que en otros casos históricos habla dos idiomas. Asimismo, debe apuntarse que por mucho tiempo el guaraní fue la lengua dominante; al permanente aislamiento geográfico —determinado por la mediterraneidad— se sumaron las décadas de aislamiento político, como factores que reforzaron la importancia del guaraní. Este idioma nativo salió robustecido en las guerras y se convirtió en elemento básico de la identidad nacional.

La coexistencia de dos lenguas comporta, en el caso de la sociedad paraguaya, la yuxtaposición de dos sistemas de representación.

La correspondencia entre dualidad cultural y lingüística, que ya se remonta a la colonia, gana en complejidad en el período histórico posterior. La bipolaridad cultural, en el caso paraguayo, se proyecta en la ambigüedad del comportamiento, o en una suerte de yuxtaposición de sistemas normativos, que se proyectan en el "toba mocõi" (actuar a dos caras). Se trata de la yuxtaposición de dos culturas, una de las cuales permanece sumergida en situaciones normales, mientras emerge la que corresponde al polo dominante, incorporado en un proceso de asimilación compulsiva.

De este tipo histórico de doble herencia cultural resultan comportamientos contradictorios, de un campesino peleador y arrogante, o sometido y sumiso, según las circunstancias. Branislava Súsnik caracterizando los resultados del brutal proceso de imposición colonial señala: "(...) el esforzado y guerrero cario que acompañaba a los conquistadores (...), el rebelde guarambarensé, el altivo y belicoso panaense, el resistente arecayense, el orgulloso itatin, todos estos caracteres del siglo XVI volviéronse pronto en pasivos, resignados o dóciles, aglomerados en sus nuevos pueblos, sufriendo el impacto de las vejaciones (...)."⁹⁸

No se trata, a nuestro juicio, de indios valientes y soberbios —que corresponden a una cultura del pasado, ya sepultada—, que son reemplaza-

dos por indios o mestizos sometidos, que reflejan en cada comportamiento la derrota que llevan muy adentro. Se trata más bien de expresiones de dos culturas yuxtapuestas, que corresponden a una doble herencia, que genera tensiones no resueltas y se proyecta hasta el presente.

En una primera aproximación a la incidencia del bilingüismo, el español, ligado a la dominación foránea, sería la lengua del intelecto, mientras el guaraní, vehículo de siglos de vivencias nativas, sería la lengua no escrita, la de la resistencia de los oprimidos y el medio de comunicación obligado dentro de las colectividades campesinas. Sin embargo, el guaraní considerado aisladamente se caracteriza ya por su ambivalencia. Así, durante la época colonial fue tanto elemento de domesticación utilizado por los jesuitas, como idioma de los yara-y monteses o caaguá y de los reductos de indios libres.

El debilitamiento de la cultura nacional tradicional resulta tanto de la operación del escenario cultural, como de la extranjerización del territorio nacional. Este escenario es operado lejos de los grupos subalternos y en gran medida ligado a procesos transnacionales de producción y transmisión cultural —telenovelas, teleevangelismo, etc.—.

En cuanto a la extranjerización del territorio nacional debe tenerse en cuenta que en el contexto de instalación y expansión de colectividades de inmigrantes extranjeros, la desarticulación de la cultura campesina reproduce la relación de dominación y discriminación que se dio en el espacio colonial. Las respuestas alternativas de los campesinos siguen comprendiendo el desplazamiento a otros espacios y la asimilación a la cultura del extranjero. En este último caso se asume que los colonos extranjeros, con una cultura superior, contrastan con los nativos, caracterizados por una serie de atributos negativos (poco apego al trabajo y al ahorro, partidario de la vida fácil, etc.); la asimilación se refuerza políticamente restringiendo toda manifestación cultural de los grupos nativos y estimulando las expresiones artísticas en los enclaves de los inmigrantes extranjeros.⁹⁹

Por otra parte, con frecuencia, la expansión económica en estas colonias de extranjeros genera competencia —por recursos escasos— entre grupos etnoculturales, que se transforma en hostilidad recíproca entre campesinos paraguayos y los inmigrantes indeseados. Las tensiones entre los campesinos pobres y los extranjeros que monopolizan los recursos productivos se proyectan en la constitución de la identidad social campesina, que se define por sus carencias y su oposición a lo extranjero.

La implantación de los enclaves etno-culturales se proyecta también en alteraciones del universo lingüístico campesino.

Con la expansión de colectividades de alemanes, japoneses, chinos y brasileños, aumentan las interferencias lingüísticas, ya que al "jopará" (mezcla de español-guaraní, se incorporan elementos de otros idiomas, básicamente del portugués, que cubre aspectos relativos a la producción agropecuaria y a la tecnología.

En torno de los enclaves etno-culturales se observa una situación de regresión lingüística con el uso creciente de signos que no son útiles para la comunicación en el interior de las colectividades nativas. El guaraní, no utili-

zado como lengua escrita, queda confinado a la esfera familiar y se va empobreciendo, ya que para los guaraní-parlantes los instrumentos conceptuales se van limitando. El campo de las relaciones signo-idea se va reduciendo, en tanto cada vez se pueden designar menos ideas con los signos usados. Este hecho, sin embargo, no impide que el idioma nativo siga empleándose como medio de resistencia cultural a procesos de asimilación.

La internacionalización de la cultura, como fenómeno de campo, tiene efectos diferenciados según sean los contextos y la recepción ya que los mensajes están necesariamente mediados por los sistemas de significación empleados por los receptores. Así, la incidencia de este proceso de producción y transmisión de bienes culturales centradas en comunicaciones de largo alcance y operadas desde afuera, es menor en colectividades con interacciones interpersonales intensas y frecuentes, o tocados por aparatos culturales con desempeño en ambientes personalizados —como los de tipo religioso—.

Los mencionados procesos del campo cultural y la extranjerización del territorio tuvieron, además de los efectos señalados, otras consecuencias en la cultura nacional tradicional. Esos procesos no disminuyeron las incongruencias y las tensiones de un capital cultural heterogéneo, más bien agudizaron esas insuficiencias. Los referidos procesos más bien incrustaron desde afuera nuevos elementos que entraron en conflicto con las estructuras significantes preexistentes.

En este proceso la cualidad originada en un tipo de asimilación compulsiva —impuesta por el orden colonial— fue reforzada por la modernización, pero la vitalidad de las manifestaciones simbólicas propias no pudo ser destruida. La resistencia cultural inicial se proyecta a través de elementos que perviven y de reelaboraciones encaradas por las capas campesinas en sus vicisitudes posteriores para dar sentido a su posición subalterna.

Los nuevos cambios, asociados a la resocialización desarrollada a través de los medios de comunicación de masas y del sistema educativo, incorporaron nuevas formas de percepción y comprensión y como resultado reforzaron la dualidad. Ahora coexisten yuxtapuestos en la filosofía espontánea de los campesinados sistemas normativos contradictorios: el correspondiente al teko porá (verdadero modo de vida) de la cultura tradicional, por una parte, y el que corresponde a la modernización conservadora —generadora de cultura autoritaria— y en esa medida alimenta el tova mokõi (actuar a dos caras), por otra, que refleja un sistema normativo contradictorio. Así, el campesino por una parte se siente explotado y parte de un colectivo, pero al mismo tiempo aspira a la obtención de capital de trabajo para contratar asalariados.

5. Los límites de la modernización, la crisis y la recomposición de la cultura campesina

La finalización de las obras de Itaipú, coincidentemente con el inicio de la recesión de la economía nacional, hacia 1982, tiene diversas consecuen-

cias. La fuerza de trabajo que se había desruralizado quedaba, en medida importante, desocupada, al llegar a su término las obras conexas de Itaipú y retraerse al mercado de trabajo de la construcción y al alimentado por el sector industrial.

La fuerza de trabajo disponible siguió básicamente dos cauces. Por una parte, una cierta recampesinización, fundamentalmente a través de las ocupaciones masivas de tierras libres¹⁰⁰, y por otra, la incorporación al entonces ya extendido mercado informal. Este mercado informal urbano, con predominio de cuentapropistas-vendedores ambulantes, acentúa la fragmentación del mercado de trabajo.

En los mercados de trabajo rural, con la crisis, se agudiza la subasalariación, que absorbe fuerza de trabajo sólo en algunas épocas del año con sistemas de enganche que atomizan a los cultivadores.

En esta dinámica de empobrecimiento, la mujer se incorpora en forma creciente al mercado informal de trabajo¹⁰¹ fuera de la propia finca; este cambio redefine la organización socio-económica de la unidad doméstica campesina, que sigue siendo de producción y consumo, aunque esta última función se cubra crecientemente a partir del mercado en los casos de mayor descampesinización.

Además de las transformaciones en los mercados de trabajo, la crisis trajo otros cambios. Los términos del intercambio campesino con el mercado empeoraron, ya que a la caída de precios del algodón y de la soja en el mercado internacional, se sumó la diferencia de cambio como un nuevo mecanismo de extracción de excedente utilizado por el Estado.

La respuesta campesina a este deterioro en la esfera de la organización de la producción fue la recampesinización, expresada en el retorno al policultivo, que minimiza el riesgo y la extracción de excedentes y disminuye el agotamiento del suelo. En su adaptación a condiciones económicas más restrictivas las capas campesinas, sobre todo en algunas regiones —tales como Caazapá, Misiones, Concepción y San Pedro—, desarrollan respuestas culturales que comportan el retorno, aunque en un nuevo contexto, a relaciones comunitarias y en esa medida a la recomposición de la identidad social campesina.

Esta respuesta comunitaria (refuerzo de los lazos comunitarios, regreso a las relaciones informales de cooperación, solidaridad con los necesitados de la localidad, etc.) está asociada a la labor promocional de la Iglesia y frecuentemente toma las formas de comunidad eclesial de base, o de grupos de pastoral social y es la que tiene mayor significación cuantitativa. En este sentido un informe reciente consigna la existencia de 1170 organizaciones locales de base.¹⁰²

En el modelo organizativo de la comunidad eclesial de base se busca satisfacer las distintas necesidades de la comunidad, tanto las relativas a la orientación de la fe como las ligadas a la promoción humana; la organización se basa en equipos de trabajo, liderados cada uno de ellos por el coordinador-responsable.

Si bien las líneas de acción pastoral ligadas a estas organizaciones son diversas (capacitación, promoción de la salud, fondo de crédito y comerciali-

zación, servicios de promoción de la fe, etc.) las diferentes actividades tienen efectos agregados comunes, siendo uno de ellos el ejercicio de la participación democrática en micro-espacios. En efecto, en estas comunidades eclesiales de base los campesinos, integrados a grupos vecinales, celebran servicios religiosos y participan, sobre bases igualitarias, en actividades grupales.

En una sociedad que niega la participación democrática, estos grupos eclesiales de base constituyen espacios de participación en los cuales se forman liderazgos, que valoran el consenso concebido como alternativa a la imposición compulsiva.

Con relativa frecuencia los esfuerzos organizativos que enfatizan la necesidad de mejorar la espiritualidad de sus miembros, se definen por su orientación simbólico-expresiva, que se limita a la afirmación de la existencia colectiva. En estos casos, al aumentar con la crisis las carencias comunes y la conciencia de esas carencias por parte de capas campesinas de diversas regiones, se va reconstituyendo una identidad social que permanece muy primaria, en tanto la autoconciencia no integra las relaciones que los enfrenta a otros grupos y la identidad resultante no incorpora un proyecto de transformación social compartido. En esta orientación, la recreación de relaciones comunitarias constituye más bien un mecanismo de defensa frente a la cultura dominante que legitima las relaciones de clase establecidas.

Otro rasgo común de los grupos campesinos de orientación comunitaria es la percepción incompleta de los antagonistas. En este sentido, los campesinos movilizados en la recomposición de su identidad no articulan todos los elementos que operan en su situación de clase. Así, por ejemplo, en su autopercepción como categoría social enfatizan el hecho de que el campesino es objeto de extracción de excedentes por parte de acopiadores y comerciantes, pero excluyen los mecanismos de apropiación utilizados por el Estado.

En la respuesta que conlleva la autovaloración (de movimientos de mujeres, de protesta de tinte regionalista como el de Concepción, de campesinos pobres, etc.) se demanda reconocimiento —como grupo especificado frente a otros— y con frecuencia participación. Este tipo de reacción colectiva ante la crisis se reduce a los microespacios y la acción transformadora no trasciende el propio grupo. En esa medida, la identidad queda limitada a una visión interna y permanece aislada y primaria. Los grupos movilizados se sienten parte de un colectivo distinto de otros, pero no se reconocen como actores, ni reconocen con claridad el campo de lucha. En el hecho de que las capas campesinas movilizadas no se representen como actores, pesa la negación de reconocimiento por parte de otros actores. Sólo la Iglesia, en el marco del Diálogo Nacional, reconoció a muchos de estos movimientos y organizaciones. Recientemente, sin embargo, como resultado del golpe militar de febrero del '89, han surgido varias alternativas de articulación de estos movimientos.

De ellos, los movimientos de mujeres tienen particular incidencia en la

transformación de la cultura campesina cotidiana. En efecto, una de las novedades en la escena social campesina está dada por la aparición de la mujer; organizaciones de mujeres buscando definir una identidad como sector diferenciado de la sociedad, plantean el tema de la emancipación. Movimientos y organizaciones de mujeres postulan demandas referidas al plano de la reproducción, pero también se plantean cambios en la condición tradicional de la mujer. Este tema comporta el replanteo de las concepciones estereotipadas sobre el papel de la mujer.¹⁰³

Con el planteo de la emancipación lo que está en juego es la representación de la posición de la mujer en la esfera de la familia y de las relaciones en la esfera doméstica y en el ámbito cotidiano. La dominación de género se ejerce primariamente en el ámbito de lo privado y de lo cotidiano (la sexualidad, la familia, la reproducción, la cotidianidad, etc.) y su cuestionamiento afecta las concepciones acerca de la posición de la mujer en la visión del trabajo, en los procesos de tomas de decisión, en las obligaciones y en las prerrogativas.

Las ocupaciones masivas de tierra constituyen otra respuesta campesina ante la crisis, con implicaciones en la transformación de la cultura cotidiana, en cuanto ellas comportan la reconstitución de lazos internos densos entre los ocupantes y generan nuevas formas de entender y hacer política en microespacios.

En los casos de ocupaciones masivas de tierras las movilizaciones colectivas comportan la reconstrucción de la identidad social. En estas ocupaciones, con frecuencia, a la orientación económico-corporativa que lleva a los movilizadores a la demanda de tierra, se suma una orientación socio-política que se proyecta en la demanda de cambio social. En estas movilizaciones, la autoconciencia comporta la visión del antagonista y del campo de lucha que los enfrenta y que debe ser transformado.

Un efecto indirecto de esta forma de acción colectiva, en la cultura política, es la que se relaciona con el rechazo de las pautas tradicionales de autoridad y con la emergencia de formas de autogobierno local. En efecto, en los casos de rechazo de intentos de desalojo, la desobediencia civil a la que recurren los ocupantes erosiona la idea de obediencia absoluta a la autoridad, tan enfatizada a través de los aparatos culturales que refuerzan la cultura autoritaria. En un contexto en el cual las relaciones políticas se militarizan y se exalta la figura de héroes autoritarios, los grupos de ocupantes rechazan un tipo jerárquico de participación.

Recapitulando, en la discusión sobre la incidencia de las distintas formas de acción colectiva debe puntualizarse que tanto las movilizaciones con orientación puramente comunitaria, como aquellas que expresan demandas de tipo corporativo o de cambio social, comportan la redefinición de valores y normas que toman usos y significaciones. En el proceso de reelaboración provocado por la crisis, se inicia la destrucción de esquemas de pensamientos y hábitos y se incorporan otros nuevos, o se revalorizan aspectos de la cultura campesina tradicional.

En este proceso, colectividades locales recuperan la confianza en sus

propias posibilidades y recrean mecanismos de decisión y acción colectivas. Si bien la participación se limita a microespacios, la misma comporta ya la emergencia de una nueva cultura política y el debilitamiento de los estigmas (malos paraguayos, subversivos, izquierdistas, etc.) atribuidos, en el marco de la cultura autoritaria, a los que rechazan la identidad de campesinos sumisos.

Los movimientos y organizaciones campesinas son portadores de gérmenes de una cultura política democrática al revalorizar el igualitarismo y la participación en decisiones internas. La búsqueda del consejo en los procesos de toma de decisión —que se observa con frecuencia entre campesinos movilizadores— conlleva el rechazo de los tipos jerárquicos de toma de decisión y de los liderazgos autoritarios.

Con la democratización de los procesos de toma de decisión y el respeto creciente a las diferencias en puntos de vista, en el ámbito comunitario, y con la extensión de la participación a cuestiones ligadas a la vida cotidiana, se amplía la idea de democracia más allá de la institucionalidad política.

Influyó también en alteraciones sustanciales de la cultura política campesina el "acuerdo democrático" a través del cual líderes de los principales partidos, tradicionales adversarios, declaran su interés en colaborar, conjuntamente, para la democratización del país. Con este pacto se cambia la concepción del partido, como mecanismo de clientelas y control, con un tipo de adhesión afectiva, que alimenta el comportamiento campesino, que rechaza a sus pares por pertenecer a un partido distinto. Esta disminución del fanatismo político partidario y la concomitante transformación de la forma como las capas campesinas se representan el papel de los partidos, es mayor en los contextos de movilización.

Otro componente importante de la cultura política emergente en las movilizaciones campesinas con orientación socio-política es el que se refleja en las demandas de transformación del sistema político. Más allá de las relaciones de poder opresivas vigentes, capas campesinas se imaginan —en el plano de la utopía— un orden político distinto. En la reelaboración simbólica de las relaciones políticas lo central es la negación del orden autoritario.

Otro cambio post-crisis con incidencia en la cultura rural es el abandono del campesinismo por parte de algunas organizaciones campesinas, que en medida creciente aceptan ser apoyadas por organizaciones no gubernamentales (ONG). La presencia de éstas —con técnicos ligados al mundo urbano— en las áreas rurales comporta mayor exposición de los campesinos a la influencia de agentes externos y una nueva forma de integración, que limita el aislamiento campesino anterior.

La incidencia de las ONG varía según contextos regionales y las orientaciones a las cuales se adscriben y que, por cierto, cubren una amplia gama con diversidad de matices. Parte importante de estas agencias son de tipo confesional y ligadas a grupos etno-culturales extranjeros.

El hecho de que las movilizaciones campesinas últimas representan esfuerzos por reconstruir identidades sociales no debe hacer perder de

vista sus insuficiencias. Entre ellas, debe anotarse la falta de articulación entre las organizaciones locales y las nacionales. Las organizaciones y movimientos tienen un alcance muy puntual, localizado, o buscan operar directamente en el plano nacional. La superación de la extremada fragmentación de múltiples movilizaciones locales y muy puntuales requiere la reelaboración simbólica de factores convergentes que no se vislumbran aún.

E. Política cultural autoritaria y cultura cotidiana

Luis Galeano

En este capítulo interesa analizar la incidencia de las acciones y del cúmulo de medidas emprendidas en el régimen autoritario, desde el ámbito de la "política cultural" sobre la cultura cotidiana. ¿Qué cambios experimentó esta última en virtud de las intervenciones directas e indirectas —incluidas las omisiones— llevadas a cabo por el Estado autoritario?¹⁰⁴

En los puntos siguientes retomaremos las hipótesis y los desarrollos analíticos incluidos en los capítulos precedentes, por una parte. Asimismo, debe especificarse que la atención estará puesta en los procesos acaecidos durante las últimas fases de dicho régimen, por otra. Concretamente, el tiempo que se abarcará comprenderá el que se inició a principios de la última década pasada y se extiende hasta los años más recientes de la actual.

1. El Estado autoritario y la modernización conservadora¹⁰⁵

Un primer aspecto que requiere ser descrito e interpretado correctamente es el carácter, la naturaleza, de la modernización socioeconómica y cultural verificada en los últimos dos decenios. Es a partir de este inicial ejercicio analítico que se espera poder definir y comprender correctamente el tipo de cultura, social y política, autoritaria imperante, así como los cambios, o las transformaciones, experimentadas por la cultura cotidiana.

Desde fines de los años sesenta se concretó, en el Paraguay, una modernización a la que cabe calificarla como un proceso conservador, tardío y parcial. Ha sido una modernización conservadora en la medida en que al Estado autoritario le cupo desempeñar un papel sumamente destacado en su promoción y dinamización. Fue un fenómeno tardío y parcial, pues tuvo una realización reciente y sus impactos tuvieron manifestaciones limitadas y disímiles a nivel de la estructura socio-económica y cultural.¹⁰⁶

La modernización ha sido parcial, o limitada, en razón de que las relaciones de producción y de las socio-económicas en general, no lograron ser incorporadas plenamente a la lógica capitalista. Por ejemplo, el capitalismo agrario ha penetrado en mayor medida en ciertos contextos (la cuenca del Paraná y determinados enclaves de colonos extranjeros: Mennonitas en el Chaco fundamentalmente) y en algunos rubros productivos vinculados a la exportación.¹⁰⁷ Los límites de la modernización económica se verifican en términos acabados considerando que, prácticamente, hasta la actualidad "el Paraguay careció de un sector industrial significativo. Las unidades fabriles de cierta significación, tanto en cuanto a volumen de producción y capital invertido se refiere, se concentraron en el procesamiento de productos agropecuarios en vistas a la exportación".¹⁰⁸

A pesar del limitado avance de la industrialización y del dinamismo más bien moderado del fenómeno de la urbanización, la sociedad paraguaya

también ha logrado acceder a una singular cultura de masas. La irrupción de esta nueva "civilización", por cierto, ha tenido lugar sin que el país haya atravesado por una "civilización urbano-capitalista".¹⁰⁹ He aquí la diferencia sustancial observada con relación a los casos típicos de modernización conservadora contemplados en la conocida obra de Barrington Moore, referidos a la Alemania y al Japón.¹¹⁰ En estos países la sociedad agraria tradicional cedió el paso a la sociedad industrial burguesa. La experiencia paraguaya inclusive se ha distinguido de las otras naciones de la región. En efecto, Cardoso señala que en pocas regiones del mundo, como en América Latina, se vio "una ruptura tan drástica entre el estilo de vida rural y urbano".¹¹¹ En el Paraguay la falta de ruptura se patentiza en el hecho de que probablemente cerca del 50% de la población continúa residiendo en la zona rural (según el último censo 1982, concretamente el 57% de los habitantes se localizaba en dicha zona).

2. Las etapas del autoritarismo y los cambios en la vida cotidiana

Los cambios operados en la cultura cotidiana han variado en sus contenidos y alcances tal como el propio Estado autoritario ha venido atravesando por etapas distintas durante este último tramo histórico.

a) El apogeo del régimen autoritario

Los años de la década del 70 representaron un período en el que se manifestaron dos procesos estrechamente correlacionados entre sí. Por un lado, el régimen estaba ubicado en el *apogeo de su legitimidad*. Existieron factores internos, de tipo económico (crecimiento excepcional de la economía y recepción de importantísimas partidas de capital extranjero, a través de la construcción de obras hidroeléctricas y leyes de inversiones altamente permisivas) y de tipo político (consolidación definitiva de la oligarquía isomorfa dominante: cúpula de militares comandada por el propio Stroessner, burócratas del Estado —ministros "vitalicios" y directores de empresas estatales— y círculos del empresariado comercial y financiero vinculados a los dos núcleos de poder citados), que posibilitaron el fortalecimiento del régimen autoritario. También existieron factores externos que favorecieron aun más dicho fortalecimiento, entre los que se destacaron: la vigencia de dictaduras militares en los países del cono sur y el imperio de la doctrina de la seguridad nacional —asimilada muy particularmente por cierto—.

Por otro lado, fue en este período en el que la modernización conservadora había expandido, en el ámbito de la cultura cotidiana, sus principales efectos. Los voceros y los representantes del Estado autoritario incesantemente machacaban sobre una suerte de *sentimiento triunfalista*. Lo hacían a través de los más diferentes canales y en los más diversos espacios y escenarios sociales y políticos. No sólo utilizaban los medios masivos de comunicación (prensa escrita, oral y televisiva), sino que, al mismo tiempo,

interventaban en las aulas de las escuelas y de los colegios y en los actos públicos de todo tipo, para proclamar los signos del progreso stonista: carreteras pavimentadas, instalaciones escolares, obras hidroeléctricas, mecanización de la agricultura, records del crecimiento económico, expansión edilicia de Asunción y otras ciudades, etc. Este discurso, no obstante su profusa y agresiva difusión, no fue capaz de ocultar el *carácter cosmético y perverso de la modernización conservadora*.

El otro lado perverso de la modernización se manifestó, entre otros aspectos, en la emergencia de una especie de *cultura del exhibicionismo*. Aunque abierta a los cambios, de hecho se apoya en pautas imitativas antes que creativas.¹¹² Los nuevos ricos reflejaban la adopción del nuevo estilo de vida en la construcción de viviendas fastuosas, mientras las capas medias y, en menor medida los sectores populares, se embarcaban en un consumismo desconocido en épocas precedentes.

El escenario de esta particular cultura de masas cabe caracterizarlo más cabalmente al considerar la concreción de dos hechos correlacionados entre sí: por una parte, la notable expansión de las actividades del contrabando y la instalación de grandes galerías comerciales y de bazares, por otra, manejados mayoritariamente por inmigrantes orientales (coreanos y chinos, especialmente).

En este punto, un interrogante tendría que ser contestado. Al igual que en la experiencia chilena —por ejemplo—, en el mencionado período del autoritarismo objeto de estudio: ¿también se dio el *disciplinamiento de la cultura cotidiana*? En términos similares que el chileno, igualmente en el caso paraguayo el Estado intentó reordenar dicha cultura movilizándolo ampliamente los aparatos y recursos represivos y apelando, hasta cierto punto, a la doctrina de la seguridad nacional.¹¹³ Sin embargo, a diferencia de la citada experiencia, en el Paraguay no se observó la redistribución del poder en la sociedad. El poder continuó siendo monopolizado por el Estado y éste no dio chance para que ese monopolio fuera cercenado.

Lo expresado, por cierto, no desconoce el hecho de que el Estado autoritario paraguayo no haya logrado inducir comportamientos político-sociales conformistas. No obstante, para ello, además de emplear discrecionalmente las medidas represivas, ha recurrido a una serie de acciones y mecanismos de índole más bien "disuasiva". Fue en este último orden de cosas que el Estado apeló a valores y pautas propias de la cultura política tradicional. El mecanismo más importante obviamente lo constituyó el sistema prebendario, mediante el cual supo encubrir sus lazos y acciones de cooptación social y política a través de un clientelismo paternalista. Uno de los principales administradores prebendarios fue el Partido Colorado.

Para el régimen dictatorial, el conformismo político ha sido sinónimo de desmovilización de la sociedad. De ahí que más que el disciplinamiento le interesaba mantener un *control vigilante sobre el orden social y cultural*. Si en unas ocasiones empleó procedimientos más propios de la cultura social y política tradicional, en otras recurrió a fórmulas más o menos "sofisticadas" de control ideológico. En este sentido, cabe mencionar que el control ejercido sobre el sistema educativo, en particular, ha combinado ambas

vías. Por un lado, el cuerpo docente era integrado a través de la filiación partidaria, especialmente a nivel de la enseñanza pública primaria y secundaria. Por otro, el contenido curricular fue vaciándose de aquellos componentes, cognitivos y valorativos, que pudo alimentar ciertos niveles de pensamiento crítico considerados atentatorios al orden autoritario.

b) La rutinización y el relajamiento del control autoritario

Una segunda etapa arrancó desde la retracción de la economía verificada hacia el 81 y 82 y se proyectó hasta el momento del derrocamiento de Stroessner (2 y 3 de febrero de 1989). Este período se vio profundamente impactado por la crisis de autodescomposición del Estado autoritario; crisis que inclusive lo arrastró a su ocaso definitivo hacia principios del año en curso. Es en virtud de las implicaciones de esta crisis que resulta pertinente sostener la hipótesis de que en el ámbito de la cultura cotidiana se asistió a un proceso de *rutinización y relajamiento* del control vigilante impuesto por el orden autoritario en la etapa precedente.

La crisis económica había desgastado fuertemente el sistema prebendario del Estado autoritario. Dicho mecanismo de articulación entre Estado y sociedad ya no lograba reproducir el clientelismo social y político de las décadas anteriores. Donde la autodescomposición del Estado se manifestó con toda nitidez fue en la crisis interna del Partido Colorado, cuyo punto culminante tuvo lugar en ocasión de la convención celebrada el 1º de agosto de 1987. En esa fecha se selló la escisión irreversible entre *militantes*, partidarios confesos del régimen dictatorial y *tradicionalistas*, abiertos hacia opciones democratizantes. Como se dijo previamente, durante la era Stronista, el Partido Colorado venía cumpliendo dos funciones básicas: 1) desempeñar una parte importante de los roles prebendarios del Estado, y 2) alimentar los principios de legitimación del régimen (cultivar el nacionalismo épico y ciertos valores de la cultura política tradicional —los que fundamentaban el ejercicio paternalista de autoridad y la conciencia filial—). A partir de aquella fecha, el partido oficialista prácticamente dejó de cumplir su función legitimadora. Inclusive su papel prebendario tuvo que asumirlo sobre bases de un clientelismo descarnado y oportunista.

Esta crisis global desencadenó una deslegitimación del sistema dictatorial.¹¹⁴ El recurso a la fuerza y a todo tipo de represión directa era el medio que utilizó para desactivar las protestas y las luchas promovidas por: los campesinos y los sub-proletarios y marginales urbanos ocupantes de tierras, por el incipiente sindicalismo independiente y por el movimiento estudiantil contestatario. Censuró y clausuró los órganos de prensa (periódicos y radios) que difundían mensajes considerados atentatorios a los principios del orden autoritario. Y la politización y el control ideológico del sistema educativo llegaron a sus niveles más extremos en este período, obteniendo éxitos dispares según los casos.

En la enseñanza primaria y secundaria pública, la selección y el nombramiento de maestros y profesores dependían ineludiblemente de la adhe-

sión a la corriente militante-stronista. Por esa vía el régimen logró asegurar —en este aspecto sí— el disciplinamiento del cuerpo docente. Por el contrario, los resultados no fueron idénticos en el ámbito universitario. Aquí, la imposición de rígidos reglamentos de disciplina, en determinadas facultades (Ingeniería, v. gr.), destinados a inmovilizar a la organización del estudiantado independiente, no redundó en los éxitos esperados. La primera gran batalla perdida por el autoritarismo stronista tuvo lugar en el seno de la juventud universitaria, incluida la de filiación colorada. “Antes que por su propia crisis (la del Estado), tal vez la rutinización del poder autoritario traducida en el culto reiterativo a la persona del Líder Supremo (Stroessner), y el vaciamiento creciente de la ideología nacionalista sustentada, hayan sido las motivaciones básicas del desencanto juvenil”.¹¹⁵

En síntesis, todo el cúmulo de medidas y acciones represivas emprendido por el régimen en esta última etapa no obtuvo los “réditos” ganados en épocas precedentes. Esas acciones consiguieron aquietar las protestas y las luchas dirigidas a socavar el orden autoritario. Pero no pudieron desactivarlas totalmente. Apenas había un resquicio y las demandas sociales y políticas eran practicadas. Y si el Estado se encontraba ante coyunturas internas y externas que las asumía en posiciones defensivas, esas demandas inclusive apuntaban directa o indirectamente hacia el cambio social y político y, específicamente, hacia la democratización. Tal fue, precisamente, la experiencia que vivió la gran mayoría de los sectores populares, del campo y de la ciudad y de la clase media, en ocasión de la visita del Papa en mayo de 1988. No solo la juventud, los sindicatos y gremios independientes y las organizaciones campesinas, fueron los actores que ocuparon los escenarios instalados durante la visita, sino que los más postergados y excluidos de la sociedad paraguaya, los indígenas, también hicieron escuchar sus voces de denuncia ante las explotaciones e injusticias padecidas. El clamor por los derechos humanos, incluida la democracia, fue incontenible y su eco, desde entonces, ya no desapareció de la vida cotidiana de una gran parte del pueblo paraguayo.

La rutinización y el relajamiento de los mandatos y controles de la dictadura, en el campo cultural, no se debieron exclusivamente a la crisis del Estado y a la coyuntura excepcional últimamente mencionada. Igualmente esa situación debe ser atribuida a la tendencia asumida, durante estos años más recientes, por la modernización conservadora. Esta, como se dijo, había impulsado el avance de la cultura de masa. Aunque no se debe desconocer que su expansión, a través de la radio y de la escuela, ha impactado las necesidades básicas y los satisfactores del sector campesino, además de reforzar la cultura política autoritaria, dicho avance no impidió el resurgimiento de antiguas pautas culturales campesinas: las acciones solidarias y comunitarias.

La crisis económica, por su parte, limitó la ampliación de lo que podría denominarse “nuevas formas de consumo cultural” promovidas por el “mercado de mensaje”.¹¹⁶ El consumismo de los años setenta no arrasó con el estilo de vida de cuño antiguo. Ambos convivieron en una simbiosis particular y contradictoria. Si bien, por ejemplo, la televisión se instaló en los hoga-

res del mundo popular urbano, sus mensajes no lograban dominar el lenguaje de la calle, de la convivencia barrial. Aquí eran las categorías del guaraní las que comúnmente se usaban, y los temas preferidos eran el fútbol, los problemas familiares y de la subsistencia diaria.

Al tornarse más rígidas las estrategias de supervivencia, se restringió notablemente la adopción de pautas de consumo propias de la cultura de masas, de gran aceptación en la etapa precedente. Mientras tanto, los nuevos ricos y los grupos vinculados al poder político y económico (constituido en torno del capital especulador y usuario), daban rienda suelta a su exhibicionismo arrogante y desenfrenado (grandes y principescas mansiones, coche de lujo, etc.). Esta era la cara perversa de la modernización conservadora y el resultado del profundo relajamiento ético de la dictadura, en la medida en que este enriquecimiento fue el fruto de la deshonestidad y de la corrupción.

F. Actores sociales y manifestaciones culturales de contestación

A partir de los antecedentes analizados, cabe sustentar la siguiente hipótesis: las demandas de los sujetos populares podrían responder a discursos, sociales y políticos, incoherentes o contradictorios, debido a los efectos de una cultura cotidiana estructurada a través de una amalgama de elementos, unos de remotos orígenes y otros generados por el proceso de modernización conservadora reciente. Los principales obstáculos tienen que ver con la construcción de una identidad colectiva propia y ofensiva¹¹⁷, capaz de fundamentar la estructuración de movimientos sociales; obstáculos que provienen tanto de esa cultura cotidiana en plena incubación como de las restricciones e imposiciones dictadas por el régimen autoritario y de las inconsistencias de los agentes mediadores (partidos políticos, Iglesia, ONG, etc.).

a) Las demandas campesinas: diversificación y limitaciones

En la medida en que la crisis socio-económica y política ha venido complejizándose, las demandas campesinas se han diversificado, ampliando sus contenidos y orientaciones. En algunos casos esta diversificación ha sido realizada por un mismo sujeto campesino. Tal ha sido, por ejemplo, la experiencia de las bases campesinas pertenecientes o desprendidas de las comunidades eclesiales de base, promovidas por la Iglesia Católica en el Norte de la Región Oriental (Departamento de Concepción fundamentalmente). Estas organizaciones se abocaron prioritariamente a la construcción de una identidad colectiva, recreando acciones y orientaciones de valor comunitarias.¹¹⁸ Esta demanda por identidad y participación estuvo acompañada por otra que apuntó al cambio social, pues, además de requerir la implantación de una nueva reforma agraria, también ha exigido la democratización de la sociedad y del Estado.¹¹⁹ Esta última propuesta ha provenido de aquellas comunidades que están consiguiendo autonomizarse de los agentes de la Iglesia. Las que no lograron dar este paso —que hasta hoy son la mayoría—, en cambio, se limitaron a desplegar sus acciones en las primeras orientaciones citadas. Con esto se verifica que el paternalismo de los agentes pastorales es una actitud que aún continúa impidiendo la gestación más plena de la autonomía del sujeto campesino.

La demanda más explícita por el cambio social ha sido sostenida por el denominado Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), creado en los inicios de la crisis (1980). El hecho de estar liderado por ex-miembros de las juventudes cristianas, con experiencias inclusive en la organización sindical, que se adhieren a un modelo societal y estatal de neto corte socialista, ha impreso a la organización un esquema clasista.¹²⁰ La Coordinación Nacional de Productores Agrícolas (CONAPA) constituida en 1986, ha sido, y continúa siendo, otro de los proyectos para estructurar la agremiación campesina a nivel nacional.¹²¹ En razón de su posición campesinista, esta organización (que aglutina preferentemente minifundistas) ha coincidido, a

nivel de los discursos formales por lo menos, con la anterior (que nuclea mayoritariamente a campesinos sin tierra) en la defensa de la identidad campesina. Las diferencias se dieron en la práctica. Las bases campesinas integrantes de CONAPA tendieron a edificar la identidad a partir de la comunidad. Para el MCP, en cambio, el principio ha respondido a una orientación clasista. En el primer caso el contenido de la demanda era de carácter preferentemente cultural, en el segundo ha tenido un alcance más netamente político.

El alcance diferencial de la construcción de la identidad ha sido uno de los condicionamientos principales en la asunción de las otras orientaciones de valor. A diferencia del MCP, la CONAPA ha puesto más énfasis en demandas por modernización¹²², que en aquellas referidas al cambio social. Es probable que esa diferencia se habría debido a la influencia ejercida por las ONG. En una alta proporción, los grupos (comités y coordinaciones zonales) actualmente asociados a CONAPA fueron creados con la intervención de ONG.

Las capas campesinas desarraigadas, o semi-asalariadas, organizadas o no organizadamente —en la mayoría de los casos—, retomaron, con mayor fuerza y vigor aún, la vieja lucha por la tierra. Entre 1983 y 1986 más de 15.000 familias campesinas tomaron parte de ocupaciones de tierras.¹²³ Los casos más importantes —por su envergadura, gravedad y repercusión política— tuvieron lugar en los escenarios rurales en los que la modernización capitalista había conseguido impactar más fuertemente —Caaguazú, Alto Paraná e Itapúa—. El fundamento central de esta demanda era el de reconstruir la identidad colectiva campesina. Más allá del derecho de disponer de una tierra propia y el de reclamar la distribución de las tierras inexplotadas (latifundios), consagrados por la Constitución Nacional, los campesinos sin tierra han optado por esta alternativa extrema, sabiendo los altos riesgos que ella implicaba (represiones, desalojos violentos), no sólo por responder a una cruda lógica de sobrevivencia, sino también motivados por el apego a la tierra. En los momentos actuales dicho apego no necesariamente remite a la adhesión sentimental por el paraje de nacimiento. Los elementos que los conforman también tienen que ver con la condición del campesino como un cultivador de la tierra, es decir, la agricultura es la profesión que mejor conoce.

Las demandas reseñadas intentaron responder a los grandes problemas provocados por la crisis que ha venido afectando al campesinado paraguayo. Esa crisis se ha manifestado en múltiples obstáculos en el ámbito de la cultura cotidiana campesina. La modernización conservadora ha roto gran parte de los antiguos lazos de cooperación, antes que en los pequeños límites de su unidad doméstico-familiar, sobre su desprotegida individualidad. Ha sido por ello que dichas demandas procuraron forjar una cultura solidaria. Los intentos y los esfuerzos se encontraron con limitaciones notorias. Así, por ejemplo, en no pocas circunstancias el participacionismo se convirtió, desde las Ligas Agrarias (años 60 y 70) hasta las organizaciones campesinas actuales, en un campesinismo basista. Los postulados excesivamente utópicos de cambio social, en otros casos, han caído en ideologis-

mos dogmáticos. La modernización de hecho ha desembocado en propuestas tecnocráticas disturbadoras de la cultura campesina (como resultado del absorbente rol del agente externo). Inclusive la reconstrucción de la identidad en algunos casos podría haber contenido gérmenes de comunitarismo excluyente.

Pues bien, en el Paraguay de los últimos años más que movimientos, se dieron luchas campesinas a través de acciones colectivas mínimamente organizadas o simplemente espontáneas. A pesar de todo, dichas acciones estuvieron motivadas en una cultura cotidiana imbuida de valores solidarios de la ética cristiana. Además de los que ya fueron adelantados en puntos anteriores, nos referimos a ciertos tipos de demanda campesina de contenido más netamente cultural. Tenían que ver con el imaginario popular, como la música, la poesía e inclusive el teatro. En esas expresiones se denunciaban las condiciones de explotación y subordinación, y se reclamaban un lugar y un rol más protagónico del campesino en el plano de la ciudadanía social y política.

b) La reconstrucción de la identidad obrera

Frente a las reivindicaciones más típicamente obreristas, el régimen político dominante prefirió recurrir a mecanismos más bien disuasivos y de congelamiento de las demandas. En el caso del ajuste salarial, por ejemplo, optó por poner en práctica la política del arbitrio de la "decisión última". Ya sea ante la "iniciativa" de la CPT (expresión típica de sindicalismo amarillo) o ya sea de motu propio, los incrementos salariales decretados durante los últimos años, antes que responder a una política económica coherente, se basaron en motivaciones más netamente políticas. Dichas motivaciones se fundamentan en una lógica populista conservadora. En efecto, normalmente ha sido, y continúa siendo, un populismo oportunista y contradictorio. Los ajustes suelen aparecer en medio de un clima de espera deliberadamente cultivado por los agentes del Estado autoritario. Dicha estrategia estuvo dirigida a capitalizar las actitudes propicias de los sectores populares, alimentadas por la mencionada cultura de la sobrevivencia.

Pero ese oportunismo también tuvo sus contradicciones. Los empleados públicos y los maestros de las escuelas estatales, por ejemplo, son hasta hoy uno de los grupos profesionales peor remunerados del país. Así, cuando se dio un resquecio mínimo para protestar ante tamaña discriminación, se registró uno de los conflictos laborales más impactantes de los últimos años. Nos referimos a la huelga de los trabajadores del Hospital de Clínicas (dependiente de la Universidad Nacional), en 1986. Por el incremento de salarios, se enfrentaron dichos trabajadores (médicos, enfermeras y auxiliares) y el Estado. Triunfó el más fuerte; pero éste no pudo remediar el daño irreparable experimentado por su imagen "populista", como así tampoco acallar las voces ni mucho menos la conciencia de los oprimidos.

Con el propósito de encarar sobre bases más firmes los efectos adversos de este problema clientelista, y la creciente insensibilidad de un empre-

sariado atrapado en la lógica de la "acumulación protegida" por el Estado, determinados sindicatos se lanzaron a la conquista de un espacio alternativo a la CPT. Tal como adelantáramos previamente, la gran propuesta del Movimiento Intersindical de Trabajadores (MIT), desde 1985, es la de reasumir los principios de la autonomía del sindicalismo obrero.

Este sindicalismo orientó sus demandas prioritariamente hacia los principios de *identidad* y de *modernización*, en ese orden. La identidad fue promovida a partir de nuevos elementos culturales e ideológicos. La misma ya no intentaba apoyarse en una cultura clasista, como era el propósito del sindicalismo obrero de las primeras décadas de este siglo. En los tiempos actuales la identidad es reclamada en vista de vigorizar una cultura más amplia, en la que sean reconocidos todos los trabajadores asalariados (proletarios y de cuello blanco). Lograr el reconocimiento como sujetos sociales (ciudadanía social) y políticos (ciudadanía política) es el objetivo primordial del naciente sindicalismo autonomista. En ese sentido, la meta inmediata es ganar espacio a la cultura social paternalista conservadora y a la cultura política clientelista autoritaria. Concretamente, la "unidad de todos los trabajadores" y la acción "en base a los problemas comunes" son los objetivos básicos reconocidos en los estatutos del MIT.

¿Podrá consolidarse este nuevo modelo cultural? Al intentar edificarlo sobre bases amplias, el propósito consistió en dar cabida a la amalgama cultural generada por la modernización conservadora reciente, y así responder a los distintos obstáculos y problemas enfrentados por las diversas categorías de trabajadores, en los órdenes socio-económico, cultural y político. Sin embargo, esta amplitud de horizonte corre el riesgo de sub-valorar aquellos elementos de la cultura cotidiana que fundamentan la identidad particular de cada una de esas categorías. En el seno de éstas debería darse los primeros pasos de la autonomía de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales. El bajísimo nivel de sindicalización registrado en la masa asalariada del país ha sido uno de los graves obstáculos que tuvo ante sí el sindicalismo independiente. ¿Cómo hacer para que esa masa anónima y despersonalizada pueda "sacudirse" de la cultura de masas y del clientelismo político?

No fue casual que el liderazgo del MIT recayera, en estos primeros años, en el sindicato de más alta cobertura asociativa, el de los empleados bancarios, y que las demandas hayan sido de naturaleza reivindicativa: mejores salarios, firma de contratos laborales, reconocimiento de derechos y beneficios sociales, etc. Si a esto se añade el propósito de capacitar a los dirigentes ("colaborar en la formación de líderes representativos" dice el MIT), se explica que la modernización también se haya constituido en otra de las grandes orientaciones de la acción del actor sindical emergente.

La demanda por cambio social ha sido más bien ambigua, poco definida. Inclusive el reclamo del reemplazo del sistema dictatorial por el democrático no escapa a propuestas muy genéricas, poco explícitas. De ahí que, en la práctica, el MIT tampoco fue ajeno a la opción del populismo y del nacionalismo. Al no existir una proyección orgánica entre el actor social (el proletariado), el actor político (el sindicalismo o el partido obrero), se optó

por una correspondencia genérica y abarcante: los trabajadores (actor social) deben ser quienes integren genuinamente el pueblo (actor político). Mientras que el de la primera mitad de esta centuria dio cabida a una alianza de clases, el sindicalismo actual está recurriendo a nexos culturales e ideológicos para conseguir la unificación anti-autoritaria, a través de la categoría pueblo; categoría tan amplia que hasta llega a confundirse con la de la nación.

Las demandas más estrictamente culturales del nuevo sindicalismo han sido aun más incipientes, por ejemplo en el campo de las artes (música, literatura, teatro, etc.) o de la recreación. Los esfuerzos no tuvieron mayores repercusiones en el plano de la cultura cotidiana de los trabajadores. Estos durante las jornadas laborales o de descanso, en su inmensa mayoría, o han estado expuestos a los mensajes despersonalizantes de los medios masivos de comunicación y a la propaganda inmovilizadora del Estado autoritario, o bien asistían a la efímera y casi única recreación masiva: el fútbol.

c) Dos demandas urbanas: nueva identidad y modernización

La principal orientación de valor de los sectores *marginales urbanos* estuvo representada por la conquista de una nueva identidad, más específicamente de una identidad gremial como habíamos adelantado. En efecto, en los espacios sociales y políticos conquistados, en no pocos casos efímeros, a través de las luchas¹²⁴ entabladas por grupos de marginados urbanos (insertos en el empleo informal) en los casos de las ocupaciones de lotes baldíos, tal ha sido la orientación preferencial de las acciones colectivas. Tales acciones eran expresiones de la demanda de un techo propio. En el mercado de la tierra y de la vivienda urbana los precios se volvían inaccesibles a las capas populares. La situación se vio agravada por otros impactos de la modernización urbanística (elevación de los costos del mejoramiento de calles, incremento del costo de los servicios públicos, etc.). Al mismo tiempo, las demandas populares comprendieron: 1) la reapropiación de los símbolos políticos tradicionales en favor de los intereses populares (los ocupantes, por ejemplo, enarbolaban banderas de los partidos y del Papa como signos de actitudes no subversivas); 2) el derecho de ganar espacios —controlados rígidamente por la dictadura— en la prensa y la opinión pública, con el fin de formular denuncias contra la represión arbitraria o la dilación de los juicios en los tribunales; y 3) la conquista de la autonomía organizativa.¹²⁵ Precisamente esta última demanda dio cabida a la práctica de acciones de cooperación y la asunción de valores solidarios y democráticos extraños a la cultura autoritaria.¹²⁶

No sólo en los ámbitos de estas luchas sociales se observaron demandas por identidad y participación. También en la experiencia de las organizaciones barriales populares constituidas para la gestión de la instalación, o la misma construcción, de obras y servicios comunitarios (capillas, dispensario o centro de salud, construcción de empedrado, de calle o capa asfálti-

ca, etc.), las acciones colectivas estuvieron motivadas en esas orientaciones de valor. Teniendo en cuenta que estas acciones se practicaban en tiempos de menor conflictividad y lucha, las demandas adquirieron alcances y repercusiones menores. Entre los factores limitantes se destacaron: 1) la heterogeneidad de clase de los actores populares; 2) el apego al clientelismo paternalista y a las relaciones personalizantes propias de la cultura barrial, y 3) las acciones represivas y disuasivas del régimen prebendario. El partido oficialista (el Colorado) desempeñó en estos micro espacios dos funciones ambivalentes y, no pocas veces, contradictorias; administrar la prebenda y desmovilizar a los grupos populares —vía el miedo, la delación o colaborando directamente en la represión—.¹²⁷ En suma, estos y otros factores, que no fueron mencionados (las contradicciones de los agentes mediadores como la Iglesia por ejemplo), condicionaron que la identidad germinal de los marginados no tuviera una solidez y vigencia más plena y amplia.

La demanda por modernización fue la motivación básica de las acciones colectivas emprendidas por grupos de vecinos en otros casos de protesta y lucha social. En uno de ellos, toda una barriada, Santísima Trinidad —una de las más populosas de Asunción—, se alzó contra una empresa que tenía instalada, en esa área, una planta de gas. Ante el peligro comprobado de contaminación del medio ambiente, debido a los escapes continuos del gas, e inclusive frente al peligro de que se provocase una catástrofe causada por la explosión del citado combustible, los vecinos (pertenecientes en su mayoría a sectores de clase media) realizaron, en una primera etapa (fines del 86), concentraciones y manifestaciones públicas masivas. En esa fase, el principio de la participación fue un elemento aglutinante, que impulsó fuertemente la protesta y lucha vecinales.¹²⁸ Sin embargo, cuando la disputa fue entablándose en otros escenarios (especialmente en el de los estrados tribunales —se había entablado un juicio de reubicación de la planta—), de nuevo el reclamo por vivir en un ámbito urbano no contaminado y sin mayores riesgos para la vida se convirtió en la meta principal de los vecinos de Trinidad. Antes que rechazarla, valorizaban altamente los logros del mundo moderno; lo que impugnaban eran los efectos nocivos provenientes del manejo inadecuado de un recurso tecnológico. De ahí que tampoco en esta experiencia pudo forjarse —a partir de la lucha social— un proceso significativo de identidad vecinal, basado en la internalización de una ideología de corte ecologista, que tuviera notorias proyecciones en la vida cotidiana.

Otro caso semejante al comentado fue el protagonizado por los vecinos del barrio Villa Morra, ubicado en las inmediaciones del más antiguo y grande cementerio de Asunción (La Recoleta). También integraban sectores medios, aunque —a diferencia de los que residían en Trinidad— estaban insertos en situaciones de clase social más homogéneas y encumbradas. Desde 1987, se propusieron impedir la ampliación del perímetro de aquel, tal como había decidido la Junta Municipal, a partir de una ventajosa y rentable oferta presentada por una firma inmobiliaria. De nuevo, la defensa de una vida cotidiana no expuesta a la insalubridad pública se convirtió en el

elemento articulador de la acción vecinal. La construcción de una ciudad moderna en la que la convivencia comunitaria sea más ordenada, menos caótica, era uno de los ideales que sustentaba la iniciativa de los vecinos. En este caso, dado el menor grado de enfrentamiento y conflictividad que el observado en Trinidad, la participación social y la gestación de la identidad vecinal fueron de menor alcance. La demanda todavía no ha sido satisfecha, aunque las autoridades y los organizados municipales decidieron congelar la ampliación de la Recoleta.

d) Las demandas de la juventud universitaria: identidad y cambio social

Uno de los actores sociales que fueron protagonistas de acciones colectivas más próximas a las constitutivas de un movimiento social ha sido el conformado por los estudiantes universitarios. El movimiento estudiantil paraguayo tiene remotos antecedentes.¹²⁹ Empero, en esta oportunidad aludiremos a su experiencia más reciente.

En abril de 1987, se hizo pública la creación de la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay (FEUP), por parte de trece centros gremiales de la Universidad Nacional y de la Católica. La FEUP retomaba algunas de las banderas reivindicatorias del Movimiento Independiente (MI), el que —juntamente con las Ligas Agrarias Cristianas— fue violentamente reprimido y, de hecho, desarticulado hacia fines de los setenta, y a la vez, suplantaba a la muy disminuida y desprestigiada Federación Universitaria del Paraguay (FUP), copada y férreamente controlada por los agentes del régimen dictatorial. En 1988 prácticamente la FUP no sólo desapareció de la escena social y política, sino también lo hizo del propio ámbito universitario.

Aquí cabe reiterar lo adelantado previamente. La primera gran batalla perdida por la dictadura se verificó en el seno de la juventud estudiantil. Inclusive la de filiación colorada le había dado las espaldas. Tal como se mencionó en puntos precedentes, la modernización conservadora y la "corrosión" irreversible del Estado autoritario habían provocado una crisis generalizada de identidad colectiva en todos los sectores y clases sociales. Los estudiantes universitarios fueron los primeros y los que más decididamente intentaron reconstruir ese principio articulador de todo actor social. De ahí que se explique que una de las reivindicaciones más decididamente proclamada por la FEUP haya sido la defensa de la autonomía gremial ante el Estado, los partidos políticos y la Iglesia.

Otro conjunto de demandas giraba en torno del cambio social y político: lucha por una sociedad y un Estado democráticos. Se recuperaba así la memoria del movimiento estudiantil independiente de épocas anteriores. No obstante, a diferencia de su antecesor más importante (el M.I.), este nuevo movimiento estudiantil apeló a un discurso más retórico, fue práctico y activista. En las luchas, esta pauta hizo que fueran los reclamos del primer tipo los que tuvieron mayor trascendencia. Es decir, en las acciones de la FEUP

primaron las orientaciones simbólicas —expresivas— mediante las cuales “la lucha y movilización antiautoritaria o anti-exclusión adquiere sobre todo el sentido de búsqueda o cimentación de una identidad y de la capacidad de expresarla. Así, importan menos los resultados materiales o políticos alcanzados que la afirmación de una existencia colectiva y el reconocimiento de ella de otros actores, aun cuando ésta se da como condena o como represión en el caso del gobierno”.¹³⁰

Este carácter del reciente movimiento estudiantil se explicaría, entre otros factores, por el rígido control que —a pesar de su irreversible deslegitimación— mantenía el Estado autoritario sobre la reducida arena política, y por la fragmentación de actores sociales que habían conquistado importantes espacios socio-políticos en épocas pasadas (Ligas Agrarias, por ejemplo).

e) Mujeres: entre la participación y la identidad

En el Paraguay hasta hoy no se observa un movimiento social de la mujer consolidado. Es decir, su participación “no se ha plasmado aún en un movimiento permanente y continuo de lucha por su reivindicación de género, como para transformar ese protagonismo en un hecho socio-cultural indiscutido”.¹³¹

Si bien existen algunos remotos antecedentes históricos, tanto a nivel de un incipiente pensamiento feminista como en lo atinente a unas primeras organizaciones reivindicativas¹³², fue a partir de fines de la década del 60 en que se verificó un creciente protagonismo de las mujeres en diferentes espacios de la sociedad civil y de la política.

La participación social tuvo lugar fundamentalmente en los ámbitos de las organizaciones gremiales —estudiantiles y sindicales— y de las de base, urbanas y campesinas. No pocas mujeres llegaron a ocupar niveles directivos, especialmente en este último tipo de organizaciones. Menor relevancia, en cambio, ha tenido la intervención femenina en los partidos.¹³³ Más allá de las limitaciones y las contradicciones del proceso, lo sustancial radicó en el hecho de que estas acciones femeninas comenzaron a adquirir, en términos cada vez más nítidos, un fundamento en la demanda de la legitimidad de la participación propia, destinada a conquistar un papel efectivo en la ciudadanía social y política.

La construcción de una identidad basada en la defensa de los valores y derechos del género, como adelantáramos, ha sido y es aún incipiente y fragmentaria. Las pautas de la cultura tradicional sustentadas en los valores patriarcales y las del autoritarismo político impidieron doblemente (por la restricción general a toda la ciudadanía y por motivos de discriminación de género), que el actor femenino haya podido forjar una identidad vigorosa y ofensiva, más allá de pequeños círculos de activistas e intelectuales.¹³⁴

Notas

¹ Steward, J. H., “El pueblo paraguayo”, en *Historia paraguaya*, Anuario del Instituto Paraguayo de Investigaciones Históricas, Asunción, 1956, págs. 90-102.

² Este punto ha sido ya desarrollado y aclarado, en los artículos de Barreiro Saguié, R., “La generación nacionalista-indigenista y la cultura Guaraní”, en *Actes du XLII^e Congrès International des Américanistes*, IV. París, 1978 y de Chase-Sardi, M. y Vysokolán, O., “El etnocidio en el pensamiento paraguayo”, en *Suplemento Antropológico*, XIX, núm. 1, Asunción, 1984, págs. 109-119.

³ Steward, J. H., ob. cit., 1956.

⁴ Idem., pág. 92.

⁵ Chase-Sardi, M. y Martínez Almada, M. “Encuesta para detectar la actitud de la sociedad nacional ante el indígena”, en *Suplemento Antropológico*, VIII, núms. 1-2, Asunción, 1973, págs. 163-170, y Shvartzman, M., “El indio y la sociedad: los prejuicios étnicos en el Paraguay”, en *Suplemento Antropológico* XVIII, núm. 1, Asunción, 1983, págs. 179-243.

⁶ En el Paraguay la encomienda no pudo funcionar como gobierno indirecto porque no se daban las condiciones esenciales. Los indios vivían dentro de una economía de subsistencia; la producción agrícola bastaba para satisfacer sus necesidades —alimentos, vivienda, vestidos, etc.— pero no para sostener una clase dirigente y las instituciones de un Estado. El nivel de integración sociocultural más elevado era el conglomerado local. En rigor, una extendida familia patrilocal formaba la base de la sociedad, como entre tantas otras tribus de las selvas tropicales de Sud América. Pronto los españoles se dieron cuenta de que tenían que casarse dentro de estas familias y adaptarse a un nivel de vida muy bajo, o dejar el país. Los que quedaron, se casaron con las mujeres nativas y se convirtieron en cabezas de unidades domésticas poligámicas. A la vuelta de pocas generaciones, era evidente que habían adoctrinado a su prole racialmente mixta en todos los aspectos de la manera de vida española, con excepción de la lengua. En vez de una clase alta española y una clase baja nativa, el Paraguay se convirtió, desde el principio, en una mezcla racial de campesinos españolizados. (Steward, J. H., 1956, ob. cit., pág. 100).

⁷ Idem., pág. 101.

⁸ Idem., pág. 102.

⁹ Cadogan, L., “Breves consideraciones sobre algunos aspectos del folklore paraguayo”, en *Revista de Antropología*, IV, núm. 1, São Paulo, 1956, págs. 63-66.

¹⁰ El Mito Hispánico pretende la tesis opuesta a la de los Service y Cadogan es quien de modo más ilustrativo se encarga de develarlo. En contraposición a aquéllos, Cadogan, en lo esencial, asume como de raíz estrictamente guaraní costumbres, tratamientos medicinales, personajes míticos. Con argumentos mejor fundamentados, Cadogan si bien admite que el idioma es lo principal que la cultura guaraní ha legado al pueblo paraguayo, rescata el origen nativo de componentes clave de la cultura cotidiana paraguaya.

¹¹ Schaden, E., *Aspectos Fundamentais da Cultura Guaraní*, E.P.U.-EDUSP, São Paulo, 1974.

¹² “El trabajo más extenso y serio realizado en una comunidad paraguaya, Tobatí, por los Service, llega a conclusiones sumamente dudosas ya discutidas por Cadogan. Estas conclusiones son fruto del desconocimiento del idioma nativo por los investigadores por aquello muy propio del campesino paraguayo: Ambo hova tavy pe gríngope, ‘lo engaño a este gringo (...)’.”
“(...) Guiados por el prejuicio de que la cultura paraguaya es un trasplante de la baja

cultura española del siglo XVI, afirman la no existencia, a excepción hecha de la lengua, de todo rasgo indígena guaraní. Creemos, con Julian Steward, en la importancia de esta tesis sobre el mito guaraní entre los intelectuales paraguayos, que como él afirma debe ser estudiado en sus raíces. Pero el no haber podido estudiar la onomástica guaraní donde ella se encuentra; el haber encontrado sólo un apellido autóctono y no haber averiguado que a fines del siglo pasado, los encargados de las oficinas de Registro Civil inauguradas en los pueblos traducían al castellano los apellidos guaraníes para anotarlos en los libros, ni haber investigado los móviles de esta conducta. El haber hecho un estudio muy superficial del parentesco ceremonial, afinal y consanguíneo y sacar la conclusión de que los pocos términos del parentesco guaraní que quedan son sólo traducciones que hoy están cargadas de las connotaciones de los términos españoles equivalentes, invalida en gran parte la tesis sustentada por los Service y reclama nuevas investigaciones (...)

"(...) La escasez de las pesquias de campo nos hacen llegar a la conclusión de que no hay tradición antropológica social. No existen trabajos estructurales sobre los grupos indígenas de la Región Oriental ni sobre los guaraníes del Chaco y mucho menos sobre la población criolla paraguaya". Chase Sardi, M. "Aproximación a la antropología social paraguaya", en *Mundo Nuevo*, núm. 37, París, 1969, págs. 35-41.

13 Métraux, A., "The Guaraní", en Steward, J., *Handbook of South American Indians*, III, Washington, 1948, págs. 69-94.

14 Se sabe que entre los Guaraní, tanto el hilado como el tejido se desarrollaron bajo la influencia Arawak, los grandes transportadores de cultura. Aún hoy, entre los indígenas de la Región Oriental, se usa el tejido de algodón o de fibras de la bromeliácea Karaguatá y de la palmera Mbokajá (*Acrocomia totia*). El algodón se hilaba con el huso de madera y se teje en un telar vertical con urdimbre circular. Generalmente se usa el blanco o éste con franjas marrones o negras o los tres colores alternados. Las tintas se fabrican con la corteza del *ybyrá pytá* (*Peltophorum dubium*), el *katigua* (*Trichilia catigua*) y el *urukú* (*Bixa orellana*). La pieza de tejido se forma zurciendo las franjas con los diversos colores (Idem., 1948, pág. 84). Es decir, se procedía de manera muy análoga a los tejidos hechos por nuestras abuelas en el campo, durante el siglo pasado y bien entrado el presente, antes de la introducción de las tintas industriales. Y el famoso poncho de sesenta listas, que aún se usa, es una directa derivación de este tipo de tejido y teñido, adaptado a las condiciones de las técnicas modernas.

15 Métraux, A., ob. cit., 1948, págs. 85-6.

16 Nimuendajú Unkel, C., *Los mitos de creación y de destrucción del mundo como fundamento de la religión de los Apapokuva-Guaraní*, Centro Amazónico de Antropología y de Aplicación Práctica, Lima, 1978.

17 Clastres, P., "Cambio y poder: filosofía de la jefatura india", *Aportes*, núm. 10, París, 1968, págs. 70-84.

18 Meliá, B., Grünberg, G. y F., *Los Paí Tavyterá. Etnografía Guaraní del Paraguay Oriental*, Centro de Estudios Antropológicos, Asunción, 1976.

19 Idem., pág. 221.

20 Súsniak, B., *Apuntes de etnografía paraguaya*, Manuales del Museo Etnográfico "Andrés Barbero", Asunción, 1961.

21 Meliá, B. y Grünberg, G., ob. cit., 1976, pág. 207.

22 Idem., págs. 209-10.

23 Idem., págs. 211-13.

24 Monteverde, J., "Aportes indígenas al problema rural del Paraguay", en *Acción*, XVI, Asunción, 1972, págs. 22-24.

25 Grünberg, G., "Dos modelos de economía rural en el Paraguay: Paí Tavyterá y Koyguá", en *Estudios Paraguayos*, III, núm. 1, Asunción, 1975, págs. 31-39.

26 Clastres, P., ob. cit., 1968.

27 Súsniak, B., *Los aborígenes del Paraguay, Ciclo vital y estructura social*, Museo Etnográfico "Andrés Barbero", Asunción, 1983.

28 Idem., pág. 84.

29 Súsniak, B., *Dispersión Tupí-Guaraní prehistórica. Ensayo analítico*, Museo Etnográfico "Andrés Barbero", Asunción, 1975.

30 Montoya, A. R., *Conquista espiritual hecha por los religiosos de la Compañía de Jesús en las Provincias del Paraguay, Paraná, Uruguay y Tapé*, Bilbao, 1892.

31 Súsniak, B., ob. cit., 1975, pág. 126.

32 Sahlins, M. D., *Las sociedades tribales*, Barcelona, 1972.

33 Súsniak, B., *El rol de los indígenas en la formación y en la vivencia del Paraguay*, IPEN, 2 Tomos, Asunción, 1982-1983.

34 Cadogan, L., *Ayvu Rapitá. Textos Míticos de los Mbyá-Guaraní del Guairá*, Universidade de São Paulo, 1959.

35 Cadogan, L. y Colleville, M., "Les Indiens Guayakí de L'Yfiarö (Paraguay)", en *Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg*, Tlías III, Strasbourg, 1963.

36 Súsniak, B., ob. cit., 1975, págs. 121-2.

37 Idem., pág. 141.

38 Shaden, E., *Aculturação Indígena*, São Paulo, 1964.

39 Godelier, M., *Economía, fetichismo y religión en las sociedades primitivas*, Madrid, 1974.

40 Colmán, N. R., *Nande Ypy Kuéra*, Biblioteca de la Sociedad Científica del Paraguay, VI, Asunción, 1936.

41 Bartolomé, M. A., *Shamanismo y religión entre los Avá-Katú-Etá*, Instituto Indigenista Interamericano, México, 1977.

42 Domínguez, R., "El Valle y la Loma. Comunicación en Comunidades Rurales", en *Suplemento Antropológico*, I, núm. 2, Asunción, 1966, págs. 127-241.

43 En estos últimos años han aparecido dos trabajos de monta, que deben ser tomados muy en cuenta. El primero es un enfoque desde el ángulo de la estética. Un profundo análisis de las artes plásticas de los indígenas, pasando por la colonia y las misiones, hasta el folklore moderno paraguayo. Se trata del primer tomo de la obra de Ticio Escobar. El segundo es del psicoanalista argentino Alfredo Vara, desde la perspectiva de su especialidad. Este libro tiene la virtud de ser una de las pocas síntesis, que pretende cierta totalidad, sobre la sociedad y la cultura guaraní, con un límpido estilo divulgatorio, que no desmerece la seriedad del trabajo y una muy buena elección antológica de textos; pero, primando en su interpretación, como dijimos, la visión psicoanalítica.

44 Escobar, T., *Una interpretación de las artes visuales en el Paraguay*, Tomo I, Asunción, 1982.

45 Vara, A., *La construcción Guaraní de la realidad*, Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica, Asunción, 1984.

46 Según Natalia Krivoshein, "Necesidad de un programa de educación bilingüe de recuperación para el Paraguay", BASE-IS, Asunción, julio 1989, trabajo mimeografiado, en 1980 70% de la población entre 3 y 5 años y 40,1% del total de la población nacional era monolingüe guaraní, 48,6% era bilingüe (guaraní-español), y sólo 6,5% era monolingüe español.

47 "Es así como la mayoría de los nacionales y casi todos los extranjeros, suponen pereza, indolencia e inconstancia en el indio de raza guaraní, cuando sus malos resultados generalmente son debidos a la costumbre general de tratar al peón como a persona muy inferior. Y es así como la mayoría de los colonos y extranjeros explica sus dificultades con el peón nacional. Cuando generalmente debe atribuirlos a su manera de mandar habitualmente altanera, y su actitud más o menos despreciativa. Pues si la educación moderna de familia ha podido quebrantar la fuerza de voluntad individual y hacer dócil y sumiso al criollo paraguayo, tanto por ser éste el más fuerte rasgo característico del indio guaraní, como por haber heredado estos mestizos un espíritu semejante de sus padres españoles, junto con cierta hidalguía, de la que el espíritu de dignidad es inseparable.

"Criado según hemos visto y formado en hábitos de voluntad individual, impregnado de espíritu de dignidad y en extremo susceptible, el indio guaraní no admite nunca imposiciones, y no hace nunca sino lo que quiere hacer. Peor si se le insiste mucho y con alguna actitud de superioridad. Su contestación habitual es ésta: 'che iyapó-potá-reih rerekovo, ndayapó chéne', o sea, 'lo que no está en mi voluntad de hacer y modo de ser, no lo haré'. Frase terminante, absoluta, contra la cual resultará vana toda imposición, toda fuerza, toda amenaza, ni el inminente peligro de vida. Esto es tal vez sin ejemplo en el mundo. Es seguramente exagerado. Pero trae a la mente la sentencia de Cicerón, dado por él más bien como incitación y no como crítica: homo sapiens nihil facit invitus. O sea: 'el hombre muy inteligente nada hace contra su voluntad'. Y el gran filósofo romano se distinguió siempre como espíritu práctico, a la vez que muy elevado, por haber sido un insuperable conocedor del alma humana y de la esencia de las cosas. Esto lo justifica mucho. En todo caso, entre los dos extremos ¿puede haber duda?. Muchísimo más fácil es moderar un exceso de virtud o de fuerza, que crear a ésta donde falta. El espíritu de dignidad es un ejemplo".

Bertoni, Moisés, *La Civilización Guaraní*, Edit. "Ex Silvis", Pto. Bertoni, Alto Paraná, 1927.

48 Jürgen Habermas afirma al respecto que "Para poder formar y portar una identidad colectiva ha de tenerse significativamente en cuenta el contexto lingüístico-cultural de la vida. Tan sólo la construcción narrativa de un acontecer con sentido ajustado al propio colectivo ofrece perspectivas de futuro orientadas a la acción y cubre las necesidades de afirmación y de reconocimiento", en "Conciencia histórica e identidad postradicional", en *Letras*, primavera 1988, págs. 5-13.

49 Causarano M. y Verón C., "Paraguay, el permanente encuentro/desencuentro entre lo propio y lo ajeno", Asunción, setiembre 1988. Trabajo mimeografiado.

50 Mellá, Bartomeu, *Economía Guaraní*, BASE/ISEC, Asunción, Documento de Trabajo núm. 11, junio 1988.

51 Todos estos datos fueron proporcionados por Mario Pastore en una conferencia presentada al Simposio de Estudios Latinoamericanos, realizado en Asunción entre el 9 y el 11 de junio de 1988 y que fuera publicada por el IDIAL, *Primer Simposio Internacional de Estudios Latinoamericanos*, IDIAL, Asunción, junio 1989, págs. 62-71, bajo el nombre "Formas de trabajo y de propiedad agraria en la Cuenca del Plata".

52 White, Richard Alan, *Paraguay's Autonomous Revolution*, University of New México, Albuquerque, 1978.

53 Un tratamiento de estos temas puede encontrarse en López, Adalberto, *The revolt of the Comuneros, 1721-1735. A study in the colonial history of Paraguay*, Schenkman Publishing Co. Inc., Cambridge, Mass., 1976 y Saeger, J. Schofield, "Origins of the rebellion of Paraguay", en *Hispanic American Historical Review*, vol. 52, núm. 2, mayo 1972, págs. 215-229.

54 White, R. A., "La política económica del Paraguay popular (1810-1840). La primera

revolución radical de América. Segunda parte", en *Estudios Paraguayos*, vol. III, núm. 2, diciembre 1975, págs. 45-138.

55 *Idem.*, pág. 123.

56 Barrett, R. *Obras Completas*, RP Ediciones, Asunción, 1988.

57 Fogel, Ramón, *Movimientos campesinos en el Paraguay*, CPES, Asunción, 1986, pág. 47.

58 Verón, C. y Causarano, M., *ob. cit.*, 1988, págs. 11-12.

59 En su primera proclama después del reciente golpe del 3 de febrero, resulta elocuente que Rodríguez declarase que el mismo fue realizado para "salvaguardar el honor de las fuerzas armadas". A su vez, la Junta de Gobierno unificada del Partido Colorado lanzó el mismo día del golpe un comunicado en el que lo califica como "la fiesta del triunfo de las fuerzas armadas de la Nación", omitiendo expresamente referirse a la "fiesta" cívica por el derrocamiento de la dictadura. Ver Schwartzman, Mauricio, *El discurso de la pre-transición*, BASE-IS, Asunción, en prensa.

60 Schwartzman, M., *Contribuciones al conocimiento de la sociedad paraguaya*, CID-SEP, Asunción, en prensa.

61 Rodríguez Alcalá, Guido, RP Ediciones, Asunción 1987. Ver en particular, el capítulo dedicado a "Dos ideólogos nacionalistas: O'Leary y González", págs. 91 y siguientes.

62 Este tema está ampliamente tratado en Palau, Tomás y Heikel, María Victoria, *ob. cit.*, 1987.

63 Morandé, P., *Cultura y modernización en América Latina*, Cuadernos del Instituto de Sociología, Universidad Católica de Chile, Santiago, 1984.

64 Véase: Pastore, C., *La lucha por la tierra en el Paraguay*, Montevideo, 1973.

65 Galeano, L. A., "Dos alternativas históricas del campesinado paraguayo: migración y colonización (1870-1950)", en *Revista Paraguaya de Sociología*, núm. 41, 1978.

66 Ayala, E., *Migraciones*, Santiago de Chile, 1941.

67 Pastore, C., *ob. cit.*

68 Herken, J. C., *El Paraguay rural entre 1869 y 1913*, CPES, Asunción, 1984.

69 *Idem.*

70 Galeano, L. A., *ob. cit.*

71 Véase Ratinoff, L., "La urbanización en el Paraguay", en D. Rivarola y G. Heisecke (Ed.), *Población, urbanización y recursos humanos en el Paraguay*, CPES, Asunción, 1970.

72 Medina Echeverría, J., *Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo económico*, Solar/Hachette, Buenos Aires, 1964.

73 Sobre el clientelismo político de este período, véase Campos, D., "Lucha por la tierra y políticas públicas: un intento de periodización socio-histórica, 1811-1954", en *Revista Paraguaya de Sociología*, núm. 70, 1987.

74 Véase Medina Echeverría, J., *ob. cit.*

75 Véase Luis Galeano, *Crisis, cultura y demandas populares*, 1988.

76 En estas notas entendemos por modernización el proceso de cambio social, con receptividad al progreso técnico, que permite un crecimiento económico sostenido, con difusión de la racionalidad de tipo instrumental, y de normas seculares de la cultura. Véase Joaquín Brunner, "Notas sobre la modernidad y lo post-moderno", en *David y Goliath*, núm. 52, 1987.

77 Sobre este tópico véase, especialmente, Michael Grow, *The Good Neighbor Policy*

in Paraguay, Lawrence, The Regents Press of Kansas, 1981, págs. 72-79. Véanse también Alfred Sheiferheld, *El Nacimiento y Facismo en el Paraguay*, Editorial Histórica, Asunción, 1986; y Servicio Interamericano de Cooperación Agrícola, *Economic Resources and Agricultural Development Problems of Paraguay*, STICA, Asunción, 1951.

⁷⁸ Téngase en cuenta que las explotaciones con un tamaño que oscila entre las 20 y 500 hectáreas ocuparon, en 1981, 15.500 trabajadores permanentes, y 53.000 trabajadores temporales. Véase Secretaría Técnica de Planificación, *Diagnóstico sobre la situación y evolución de la fuerza de trabajo y del empleo*, julio de 1984.

⁷⁹ Según el censo de población de 1982 la PEA agropecuaria habría llegado a 445.519, pero esa participación de las actividades del sector primario en la ocupación de la población activa habría sido mayor, si se considera que el censo fue levantado en uno de los meses de más baja actividad agrícola (julio). En efecto, según el Censo Agropecuario de 1981, que recoge información en un período de mayor demanda laboral —agosto/octubre— la PEA agropecuaria llegó a 602.100. Véase STP, *Diagnóstico sobre la situación y evaluación de la fuerza de trabajo y del empleo*, Asunción, junio 1984.

⁸⁰ El enclave étnico, como segmento del mercado de trabajo, es el formado por unidades económicas operadas por inmigrantes, que tienden a incorporar trabajadores inmigrantes de la misma nacionalidad. Este tema ha sido tratado en Palau, Tomás y Heikel, Ma. Victoria, *Los campesinos, el Estado y las empresas en la frontera agrícola*, BASE/PISPAL, Asunción, 1987.

⁸¹ Téngase en cuenta que el éxito económico de estas colonias de extranjeros se debe, en parte importante, a ventajas económicas proporcionadas por el propio Estado a través de subsidios financiados por los campesinos criollos.

⁸² Véase Fogel, Ramón, *Movimientos campesinos en el Paraguay*, CPES, Asunción, 1986.

⁸³ Se trata de Guaraníes constantes de 1977.

⁸⁴ Véase FAO/World Bank, *Report of the Paraguay Credit Project*, Roma, 1982.

⁸⁵ En relación a este punto véase, Ramón Fogel, ob. cit., 1986.

⁸⁶ Idem., págs. 150-151.

⁸⁷ Véase Luis Campos, "Expansión y crisis del neoliberalismo económico paraguayo", en *Economía 1986*, CPES, 1987.

⁸⁸ "Este es un gobierno que hace", fue una expresión repetida durante más de tres décadas por el aparato propagandístico de Stroessner.

⁸⁹ Véase Domingo Rivarola, "Alternativas de una transición democrática: el caso paraguayo", en F. Calderón y M. dos Santos (comps.), *Los conflictos por la constitución de nuevo orden*, CLACSO, Buenos Aires, 1987.

⁹⁰ Véase Rogelia Zarza, *La radio en el Paraguay*, BASE/ALER, Asunción, febrero 1988. Trabajo mimeografiado.

⁹¹ Incluyendo las emisoras, propiedad de ANTELCO.

⁹² Actualmente el 42% de los hogares a nivel nacional cuentan con aparatos de TV. Véase, Rogelia Zarza, ob. cit., 1988.

⁹³ Para el caso chileno véase J. J. Brunner y otros, *Chile, transformaciones culturales y conflictos de la modernidad*, Santiago, 1988. Trabajo mimeografiado.

⁹⁴ Sobre este punto existe una diferencia de criterio con Luis Galeano en su trabajo contenido en esta misma publicación. Ver cap. siguiente.

⁹⁵ Véase Luis Galeano, ob. cit., 1988.

⁹⁶ Véase José J. Brunner y otros, ob. cit.

⁹⁷ En relación al fenómeno del bilingüismo véanse Graciela Corvalán y Germán de Granda (comps.), *Lengua y sociedad: bilingüismo en el Paraguay*, CPES, Asunción, 1982; y Bartomeu Meliá, *Una Nación, dos Culturas*, RP Ediciones, Asunción, 1988.

⁹⁸ Véase Branislava Súsniak, *El indio colonial del Paraguay*, Museo Andrés Barbero, Asunción, 1965, pág. 215.

⁹⁹ Resulta ilustrativo el caso registrado en Ciudad Pde. Stroessner en los últimos meses del año 1988, donde mientras prohibían un festival de cultura popular, se apoyaba un festival chino.

¹⁰⁰ Téngase en cuenta que entre 1983 y 1986 más de 15 mil familias ocuparon tierras libres.

¹⁰¹ Este tema ha sido tratado por Heikel, Ma. Victoria en "Ser mujer en el Paraguay. Estadísticas de la discriminación", en *Por nuestra igualdad ante la Ley*, RP Ediciones, Encuentro Nacional de Mujeres, Asunción, 1987.

¹⁰² Véase CEP, *Informe del Equipo Nacional de Pastoral Social a la 110ª Asamblea Ordinaria*, Asunción, 1987.

¹⁰³ Para la discusión de casos históricos similares, véase Guillermo Campero, "Democracia y actores sociales en Chile", en F. Calderón y M. dos Santos (comps.) *Los conflictos por la constitución de un nuevo orden*, CLACSO, Buenos Aires, 1987.

¹⁰⁴ Régimen y Estado, durante la era stronista, de hecho se fundieron en un único sistema autoritario.

¹⁰⁵ En esta sección se sintetiza y reformula el análisis planteado por L. A. Galeano, *Crisis, cultura y demandas populares*, versión preliminar, CPES, Asunción 1989.

¹⁰⁶ En 1950, excepto Asunción, no existía ningún centro urbano que superara los 20.000 habitantes. Los estudios más completos publicados sobre la modernización y las tendencias de la urbanización véanse en: Boh, L. A. y otros, *Ciudad y vivienda en el Paraguay*, SAEP, Asunción, 1984.

¹⁰⁷ Véase Rivarola, D. y otros, *Estado, campesino y modernización agrícola*, CPES, Asunción, 1982, SAEP/CEP, *Tierra y sociedad*, Asunción, 1984; Campos, L. A. y otros, *Pequeños campesinos y su incertidumbre*, El Lector, Asunción, 1986; Palau, T. y Heikel, Ma. V., *Los campesinos, el Estado y los empresarios en áreas de frontera agrícola*, BASE/PISPAL, Asunción, 1987, y Fogel, R., *Modernización, crisis y cultura campesina cotidiana*, Asunción, 1988. Trabajo mimeografiado.

¹⁰⁸ Herken, J. C., "La industria en el Paraguay", en *Economía del Paraguay contemporáneo*, CPES, Asunción, 1984.

¹⁰⁹ Cardoso, F. H., "Desarrollo y medio ambiente: el caso del Brasil", *Revista de la CEPAL*, núm. 12, Santiago de Chile, 1980.

¹¹⁰ Moore, B., *Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia*, Ed. Península, Barcelona-España, 1983.

¹¹¹ Cardoso, F. H., ob. cit., 1980.

¹¹² Véase Morínigo, J. N., "El impacto de la cultura urbano-industrial", en *El hombre paraguayo y su cultura*, Cuadernos de Pastoral Social núm. 7, Conferencia Episcopal Paraguaya, Asunción, 1986.

¹¹³ Para el análisis de la experiencia chilena, véase Brunner, J. J. y otros, *Chile: transformaciones culturales y conflictos de la modernidad*, FLACSO/SENECA, Santiago de Chile, 1988.

¹¹⁴ Véase Galeano, L. A., "Paraguay: la crisis del Estado autoritario", *Revista Ñande Reko*, Misión de Amistad, Asunción 1987.

¹¹⁵ Véase Galeano L. A., ob. cit., 1987.

116 Véase Brunner, J. J. y otros, ob. cit., 1988.

117 La identidad ofensiva, según Touraine, es aquella que es capaz de "insuflar vida a la acción colectiva". La identidad defensiva, en cambio, es aquella que encierra la acción colectiva "dentro de las murallas de una secta". Véase *El regreso del actor*, EUDEBA, Buenos Aires, 1987, pág. 115.

118 Fogel, R., ob. cit.

119 Por *identidad* debe entenderse los procesos de auto-conciencia, de formación comunitaria y los discursos culturales. *Participación* comprende la apropiación de instancias de decisión propias, a partir de esquemas ideológicos democráticos. El *cambio social*, como orientación de valor implica el propósito de transformar la sociedad y el Estado. Estas conceptualizaciones fueron extraídas de José Bengoa, "La educación para los movimientos sociales", *Proposiciones*, núm. 11, SUR, Santiago de Chile, 1987.

120 Véase Arditi, B. y Rodríguez, J. C., *La sociedad a pesar del Estado. Movimientos sociales y recuperación democrática en el Paraguay*, CDE, Documento de Trabajo núm. 11, Asunción, 1987.

121 Existen otros proyectos de promoción de organizaciones campesinas nacionales, pero tienen una cobertura menor que los dos anteriores. Una es la *Union Campesina Oñodivepa*, liderada por Marcelino Corazón Medina, vinculado al MOPOCO, fracción disidente del Partido Colorado, y la otra es la *Organización Nacional Campesina* (ONAC), vinculada a la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), de tendencia demo-cristiana. Sobre estas experiencias véanse Arditi, B. y Rodríguez, J. C., ob. cit., y González, C. A. y otros *Organizaciones políticas en el Paraguay*, CIDSEP, Asunción, 1987.

122 Es decir, adquisición de instrumentos o recursos, que permitan la transformación o la movilidad social de los individuos y de los grupos. Véase Bengoa, J., ob. cit.

123 Cifra mencionada por Fogel, R., ob. cit. Cuatro de los casos más notorios de estas ocupaciones son analizados por Olga Zarza, "Las ocupaciones de tierras en Paraguay", *Revista Paraguaya de Sociología* núm. 71, 1988.

124 En las luchas sociales, la identidad del actor social, la identificación de los enemigos y los mecanismos organizativos de la acción colectiva no tienen la consistencia y el alcance como se observan en los movimientos sociales. Véase Touraine, A., "Reacciones antinucleares o movimientos antinucleares", *Revista Mexicana de Sociología*, 2/82.

125 Véase Galeano, L. A., *Demandas populares urbanas...* ob. cit.

126 En uno de los casos de ocupaciones urbanas más importantes de los últimos años (Sagrada Familia - Lambaré), se verificó que los propios líderes "percibían que ocupar un cargo fue, en el esquema tradicional, utilizarlo como trampolín político y económico (...)". La mayoría de los ocupantes rechazaron "el sistema organizativo convencional como mecanismo de auto-defensa ante la represión; cuanto menos visible y más cerca de sus bases se encuentre el líder, menos expuesto estará a ser descabezado el movimiento". Véase Olga Zarza, *Organizaciones barriales y lucha social urbana en Paraguay*, Asunción, 1987. Trabajo mimeografiado.

127 Galeano, L. A., ob. cit.

128 Véase Zarza, O., ob. cit.

129 Además de la obra de B. Arditi y J. C. Rodríguez citada, véanse: Laterza, G., "La experiencia autonómica del movimiento estudiantil paraguayo", en D. Rivarola (comp.), *Los movimientos sociales en el Paraguay*, CPES, Asunción, 1986; y Lezcano, C. M.

130 Campero, G., "Luchas y movilizaciones sociales en la crisis ¿se constituyen movimientos sociales en Chile", en F. Calderón (comp.), *Los movimientos sociales ante la crisis*, CLACSO, Buenos Aires, 1986, pág. 301.

131 Rivarola, M., "Mirando el futuro: mujer y democracia", en *Paraguay Siglo XXI*, Ed. Geopolítica y Relaciones Internacionales, Asunción, 1988.

132 Barreiro, L., *Situación de la mujer en el Paraguay*, CDE/CEDHU, Asunción, 1987.

133 Zarza, O., *La situación de la mujer en el Paraguay en las dos últimas décadas*, CPES, Cuadernos de Discusión, 1988. También pueden verse: Corvalán, G., "La acción colectiva de las mujeres urbanas en el Paraguay", en D. Rivarola, *Los movimientos sociales...*, ob. cit.

134 Véase Corvalán, G., *Las mujeres urbanas en el Paraguay: olvido, represión y cambio*, CPES, en prensa.

**Políticas culturales y cultura política:
Bolivia 1980-1987***

Luis H. Antezana J.**

En tanto que es un elán propio de todas las épocas, la autodeterminación de la masa, sin embargo, es el principio de la historia del mundo. Es un oficio del hombre el disputar sobre las proposiciones del mundo. La autodeterminación en cambio es ya la aplicación de ese ademán por parte de la masa. Es en ese sentido que lo que tiene el hombre de humano es lo que tiene de democrático, porque está controvirtiendo todo lo que existe.

René Zavaleta Mercado

Introducción

En este trabajo, dedicado a examinar las "políticas e innovaciones" culturales en Bolivia durante el período 1980-1987, el horizonte de referencia más notable es ciertamente, el Estado del 52. Los hechos y procesos culturales que nos ocuparán se entienden, aceptablemente, bajo los alcances, desarrollos y límites de dicho Estado.

Someramente (más adelante vendrán precisiones): el Estado del 52 es el que sustituye, a partir de la Revolución Nacional del 9 de abril de 1952, al Estado articulado en torno de la minería del estaño (bajo el llamado "supe-

* Trabajo elaborado en el marco del Proyecto PNUD-UNESCO-CLACSO RLA 86/001, Ciencias sociales, crisis y requerimientos de nuevos paradigmas en la relación Estado/Sociedad/Economía.

** Investigador del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), Cochabamba, Bolivia.

restado minero" de Patiño, Hoschild y Aramayo). Supone un amplio movimiento popular hegemonizado, en su momento, por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), incrementado, en los primeros cuatro años, gracias a la Nacionalización de las Minas (1952), la Reforma Agraria (1953) y la promulgación del Voto Universal (1952).

Si lo asumimos como un "ciclo", el Estado del 52 iría desde 1952 hasta, dicho sea indicativamente, 1977; desde su consolidación hasta su actual crisis y posible sustitución (1977-1987). En su interior, las fluctuaciones entre gobiernos más populares o más dictatoriales, constitucionales o *de facto*, no alterarían sus límites gubernamentales. Al referirse a esas fluctuaciones, René Zavaleta Mercado (1983, pág. 11) y Jean Pierre Lavaud (1985, págs. 50-52, 55), señalan la tensión básica que opone al movimiento sindical (liderado por la Central Obrera Boliviana, COB) índice del polo popular de este Estado, ambos polos pueden coincidir como en los gobiernos constitucionales del dictador Barrientos (1966-1969) o los "golpes populares" de Ovando (1965-1966) y Torres (1970-1971). Por el lado "cultural", la ideología constitutiva de este Estado, el nacionalismo revolucionario (NR), permite una constante alternancia entre sus polos: el privilegio de una perspectiva revolucionaria, por un lado, o una perspectiva nacionalista, por el otro (Cf. Antezana, 1983).

Para facilitar posteriores referencias, recojamos un cuadro a propósito de estas alternancias gubernamentales.

Bajo ese horizonte de referencia y sus avatares, dentro del período que nos ocupa, cremos que es en el terreno de la "cultura política" donde la variable *cultura* mejor explicita su lugar dentro de la actual vida social boliviana. De ahí que, como en un "estudio de caso", nuestro trabajo enfatizará, en su segunda parte, ese aspecto; pero, previamente, en una primera parte, destacaremos algunos aspectos más generales de la cultura en Bolivia, de modo que el horizonte de referencia se tiña, pues, de los colores de esta variable. Forzando un contraste meramente operatorio, digamos que la primera parte destacará aspectos de la "cultura cotidiana" mientras que la segunda explicitará la "cultura política" dentro del período que fundamentalmente nos ocupa (1980-1987).

Antes de seguir, una breve nota sobre el concepto de "cultura" que nos guía y otra sobre nuestra perspectiva analítico-descriptiva.

a) Aquí, en principio, la cultura está considerada como un ámbito (no un sistema) productor de valores sociales, donde los valores, *more semiótico*, suponen sentidos (significados y símbolos) en relación a referentes, procesos e interpretantes. Marcando la noción de símbolo generalmente privilegiado al tratar los procesos culturales, recojamos esta caracterización hecha por Walter Percy donde se destaca su vínculo con la noción de "intersubjetividad" a la que recurriremos frecuentemente sobre todo al tratar la constitución de los sujetos sociales en la "cultura política"; dice Percy (1978, pág. 281): "Además del símbolo, la conceptualización y la cosa, hay en el acto de simbolización otros dos términos que también le son esenciales. Tenemos el 'yo', la conciencia que se enfrenta con la cosa y que genera el símbolo gracias al cual se articula la conceptualización. Pero también ahí

Cuadro 1
Los Gobiernos Bolivianos después de 1952

Víctor Paz Estenssoro	MNR	1952-1956	<i>De facto</i>
Hernán Siles Zuazo	MNR	1956-1960	Constitucional
Víctor Paz Estenssoro	MNR	1960-1964	Constitucional
René Barrientos	Militar	1964-1965	<i>De facto</i>
René Barrientos y Alfredo Ovando	Militar	1965-1966	<i>De facto</i>
Alfredo Ovando	Militar	1966	<i>De facto</i>
René Barrientos	Militar	1966-1969	Constitucional
Luis A. Siles Salinas	PSD	1969	Constitucional
Juan José Torres	Militar	1970-1971	<i>De facto</i>
Hugo Bánzer	FSB-MNR		
	Militar	1971-1978	<i>De facto</i>
Juan Pereda	Militar	1978	<i>De facto</i>
David Padilla	Militar	1978-1979	<i>De facto</i>
Walter Guevara Arze	MNR		
	Alianza	1979	Interinato Constitucional
Alberto Natush Bush	Militar	1979	<i>De facto</i>
Lidia Geyler Tejada	MNR		
	Alianza	1979-1980	Interinato Constitucional
Luis García Meza	Militar	1980-1981	<i>De facto</i>
Junta Militar	Militar	1981	<i>De facto</i>
Celso Torrelio	Militar	1981-1982	<i>De facto</i>
Guido Vildoso	Militar	1982	<i>De facto</i>
Hernán Siles Zuazo	UDP (MNR+ PCB+MIR)	1982-1985	Constitucional Restaurado
Víctor Paz Estenssoro*	MNR	1985-1989	Constitucional

Fuente: Lavaud, 1985, pág. 5

*Actualizado.

está el 'tú'. En su esencia la simbolización es una intersubjetividad. Si sólo hubiera una persona en el mundo, la simbolización sería inconcebible (aunque no así la significación) [...] Por lo tanto, todo acto de simbolización, sea en el lenguaje, el arte, la ciencia o aun en el pensamiento, debe darse en la presencia de un tú real o un tú ideal para que el símbolo tenga un sentido. La simbolización presupone una tríada de existentes: yo, el objeto, tú." (Subrayados del autor).

Esta simbolización en intersubjetividad será para nosotros, constitutiva del ámbito cultural y los sujetos (sociales) ahí implicados; siempre dentro del Estado del 52 y su proceso crítico.

También podemos señalar que, dadas las características de la sociedad boliviana, esta conceptualización tocará, por un lado, matices cuasi-antropológicos, donde la "cultura" tiende a ser índice de "identidades colectivas", como cuando nos acercamos a los componentes étnicos o regionales del país, y, por otro, que cultura se limitará a tratamientos instrumentales, como cuando nos acercamos a los procesos educativos, a los medios de comunicación masivos, donde los contenidos de las expresiones suponen un entramado múltiple y complejo, difícil de tratar apropiadamente dentro de los límites de este trabajo. Esperamos que, en los diversos casos, el contexto precise el uso, aunque siempre tendremos en mente la definición operatoria adelantada.

b) En general, este trabajo es, sobre todo, descriptivo-analítico; tiende a minimizar la discusión teórica. Sin embargo, aquí y allá, recurre a un aparato conceptual y teórico especialmente ajustado al asunto que nos ocupa, derivado de los trabajos de René Zavaleta Mercado y, sobre todo, de sus *Las masas en noviembre* (Zavaleta Mercado 1983, págs. 11-68). Su conocida proposición que "la crisis es la forma clásica de la revelación o reconocimiento de la realidad del todo social" (1983, pág. 16) puede considerarse un *leitmotiv* de este trabajo.

Con estas breves referencias preliminares, vayamos, pues, en primer lugar, a lo que denominamos "cultura cotidiana", para luego concentrarnos en los procesos de la "cultura política" en el período 1980-1987.

I. Cultura cotidiana

La Revolución Nacional de abril de 1952 no sólo se tradujo en las célebres medidas económicas y políticas de la Nacionalización de las Minas, la Reforma Agraria y el Voto Universal sino que también buscó implementar una Reforma Educativa (1955). Esta estaba destinada, por un lado a llevar el sistema fiscal de educación más allá de sus estrechos límites previos (sobre todo hacia el mundo rural) y, por otro, a constituir una moderna "conciencia o identidad nacional" boliviana a explicitar, pues, esa Nación que, según Montenegro en *Nacionalismo y Coloniaje* (1943), habría estado secularmente negada por la Antinación.

Aunque en lo inmediato al 52 la educación parece ser el objeto privilegiado de las políticas culturales estatales (el Instituto Boliviano de Cultura

se instituirá recién en 1975), paralela y casi simultáneamente esta política estatal supone un activo complemento discursivo e instrumental de los medios de comunicación de masa. Tempranamente, el periódico *La Nación* (1952) y la radio *Ilimani* (1952) se constituyen como órganos de la Revolución Nacional. Notablemente, también el cine se articula en esta dinámica con la creación del Instituto Cinematográfico Boliviano (1953). Estos cuatro elementos (educación, prensa, radio, cine) tienen su historia y nos servirán de guía para diseñar las políticas estatales por el lado de la cultura a partir del 52 y, por ahí, perseguir algunas de sus tensiones al correr el tiempo. En su momento destacaremos otros factores que se articulan con éstos, digamos básicos.

Teniendo en cuenta que el Estado del 52 es una "estructura de poder" (Almaraz 1976) tendiente a articular los diversos actores y procesos sociales dentro de ciertos alcances y límites más o menos hegemónicos según las condiciones contextuales, la hipótesis que guía esta primera descripción sería la siguiente: que las diversas políticas e iniciativas estatales en torno de la educación y de la cultura han ido encontrando, con el correr del tiempo (1952-1977, sería el período demostrativo), sus límites articularios y que, actual y tendencialmente, éstas se hallan desplazadas hacia una reformulación de sus objetivos en términos de administraciones más regionales y locales, por un lado, y, por otro, se las puede reconocer diversamente entramadas con iniciativas privadas e institucionales, unas marcadamente empresariales y otras más bien contestatarias al Estado que las habría, a su manera, generado.

Educación

El énfasis estatal en la educación se suele medir por el alto porcentaje (una constante de 25,8%) del presupuesto nacional que se suele dedicar a este rubro. También ahí habría que tener en cuenta las funciones educativas que asumen ciertas empresas estatales "descentralizadas" como, notablemente, la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y los Yacimientos Fiscales Petroleros de Bolivia (YPFB).

La educación boliviana supone las formaciones pre-básicas (optativa), básica, intermedia y media, por un lado, institutos de formación técnica y de adultos, y las normales de maestros, por otro. Las universidades fiscales dependen económicamente del Estado, aunque son autónomas las veremos en su momento.

A partir de 1952, el Estado ha formulado e implementado diversas políticas educativas de alcance nacional. Las cuatro más notables serían las siguientes: el Código de la Educación Boliviana, fruto de la Reforma Educativa de 1955, la Reforma Educativa de 1968-1969, el Primer Congreso Pedagógico Nacional de 1970 y la Ley de la Educación Boliviana de 1973. Políticas que, a su manera, responden a las diversas reformulaciones gubernamentales dentro del Estado del 52. Actualmente se encuentra en debate un nuevo proyecto de Ley Educativa, cuyo más notable rasgo es

el postulado de una descentralización de la educación, donde el Estado delegaría su función a los distintos departamentos y municipalidades. La aprobación (o no) definitiva de este proyecto de Ley Educativa ha sido postergada hasta el período legislativo de 1989. Antes de detallar las mencionadas políticas, señalemos que, por cosas del tránsito de la dictadura a la democracia, actualmente es el Código de la Educación Boliviana de 1955 la referencia más evidente en lo que a políticas educativas se refiere.

En su *Análisis de la educación popular en Bolivia desde 1952*, José Subirats (1984) analiza el contenido de las cuatro políticas educativas mencionadas según "cinco ideas-clave" que explicitan bastante bien los avatares de la perspectiva estatal ante la educación. Las "cinco ideas-clave" que propone Subirats (1984, pág. 72) son las de: Integración Nacional, Ciencia y Tecnología, Realización Personal, Educación Popular y Revolución. El siguiente cuadro, que luego comentaremos, sintetiza el lugar de estos cinco indicadores en esas cuatro políticas educativas.

Destaquemos que los momentos 1955 (Código) y 1970 (Congreso) suponen al Estado en etapas donde el péndulo del nacionalismo revolucionario (NR) se inclina hacia el lado popular de sus fluctuaciones (primer gobierno de Paz Estenssoro y gobierno de Ovando, respectivamente), mientras que los momentos 1968-1969 (Reforma) y 1974 (Ley) tocan el polo dictatorial (gobiernos de Barrientos y Bánzer, respectivamente), lo que desde ya tiñe de contenidos diversos a los indicadores. Así, por ejemplo, aunque el indicador "Revolución" estaría presente en los cuatro casos, en unos se carga del sentido de "transformación social" mientras que en otros se desliza hacia una "transformación" asociada a una "modernización" del país. En general, teniendo en cuenta las articulaciones fluctuantes propias al Estado del 52, estas diversas y renovadas políticas estatales sobre la educación operan explicitando las iniciativas coyunturales (más populares, más dictatoriales) según los gobiernos de turno, por un lado, y, por otro, apuntan todas a un permanente e irresuelto "problema educativo". De todas maneras, después del 52, la educación fiscal habría tendido a diversificar, incrementar y modernizar sus alcances, a conformar una "identidad nacional" y a contribuir a la transformación del país.

Teniendo en cuenta los dos últimos censos realizados en Bolivia (1950 y 1976), el analfabetismo, por ejemplo, habría disminuido desde un 69% a un 37% (Iriarte 1985, pág. 51); una inferencia de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe señala para 1985 un 25,8% (1987, pág. 50). Este claro logro, sin embargo, se relativiza mucho cuando consideramos, por una parte, los altos índices de "marginalidad" en las zonas rurales y, por otra, los altos grados de deserción observables en una "pirámide educativa". Sobre una población en Edad Escolar (PEE de 5 a 19 años) de 2.203.750, para 1983, los "marginados" alcanzan a un 0,02% a nivel urbano y a un 64,30% a nivel rural (CEDOIN 1987, pág. 14). Evidentemente, los logros educativos se traducen sólo a nivel urbano. Y aun así, bajo ese marco, la deserción y repetición escolar (primer básico a cuarto medio) alcanza a un 82,4% (CEDOIN 1987, pág. 17). Para 1980, Iriarte propone la siguiente "pirámide educativa": de "1.000 alumnos que comienzan el básico: 320 ter-

Cuadro 2
Importancia relativa a las Ideas-clave

Código (1955)	Reforma (1968-69)	Congreso (1970)	"Ley (1973)
1. Integración nacional	1. Ciencias y tecnología	1. Revolución	1. Integración nacional
2. Educación popular	2. Revolución	2. Educación popular	2. Realización personal
3. Revolución	3. Integración nacional	3. Ciencia y tecnología	3. Ciencia y tecnología
4. Ciencia y tecnología	4. Realización personal	4. Realización personal	4. Educación popular
5. Realización personal	5. Educación popular	5. Integración nacional	5. (Revolución)

Fuente: Subirats 1984, pág. 175.

minan el cuarto año, 180 comienzan el ciclo medio, 30 salen bachilleres, 25 comienzan la universidad, 3 terminan la universidad (1985, pág. 45). En esto se motivarían las permanentes reformulaciones de las políticas educativas en Bolivia: los logros parecen siempre insuficientes y el problema se agudiza cuando se presta atención a los relativamente escasos logros a nivel rural.

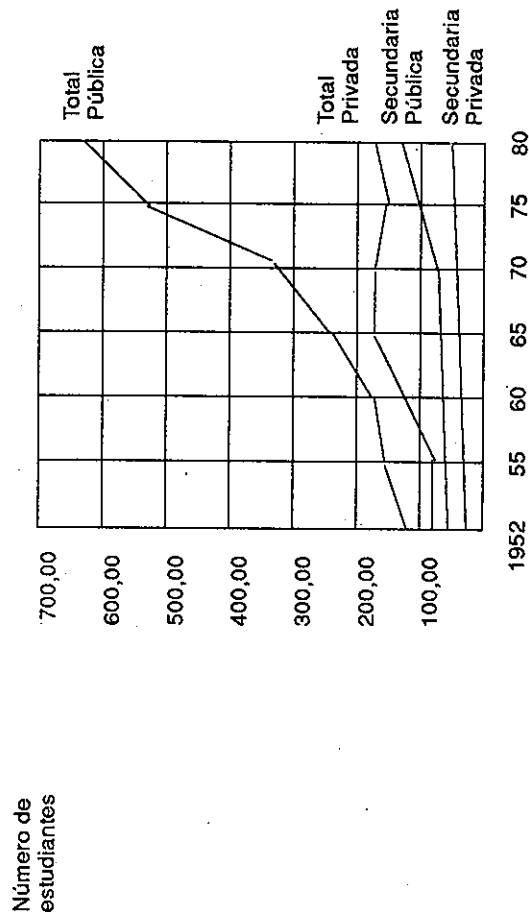
Teniendo en mente ese 0,02% de "marginalidad" a nivel urbano, podríamos también apuntar a otro tipo de debilidad del sistema educativo estatal: la educación urbana supone un alto grado de educación privada. Antes de anotar brevemente el tema, veamos un gráfico que hasta 1980 destaca las proporciones entre la educación fiscal y la privada (en general).

Como se puede ver, sobre todo a nivel medio (Subirats funde el nivel intermedio con el medio, dicho sea de paso, para distinguirlo del básico), el peso de la educación privada es muy significativo y, siguiendo nuestro hilo argumental, hay que situarla fundamentalmente a nivel urbano. Lo que permite apuntar, por un lado, a las falencias de la educación manejada por el Estado y, por otro, al desplazamiento de las funciones estatales hacia otro tipo de "actores". Pero, desde el punto de vista de las políticas estatales educativas, pese a los distintos regímenes administrativos (fiscal/privado) hay dos factores que establecen fuertes vínculos entre ambos tipos de educación. En primer lugar, ambas educaciones implementan los mismos planes y programas, los determinados por el Ministerio de Educación. En segundo lugar, teniendo en cuenta una vez más el carácter fundamentalmente urbano de la educación privada, el mismo cuerpo docente opera prácticamente en ambos regímenes; esto es posible gracias a las 72 horas/mes que constituyen el "tiempo completo" de un maestro en la educación fiscal, tiempo de trabajo que ciertamente permite ocupaciones suplementarias (necesarias, dicho sea de paso, dado el mínimo alcance del sueldo de un maestro en Bolivia, de Bs. 50 a 150, según CENDOIN 1987, pág. 46).

Brevemente, tendríamos, por un lado, logros educativos (cuantitativos) a nivel urbano, relativizados en el contraste entre una educación fiscal y otra privada; por otro, las carencias educativas a nivel rural son las que más claramente permiten indicar los límites y fracasos de las diversas políticas educativas permanentemente reformulados. Al respecto, señalemos un factor de articulación entre el mundo rural y el Estado que ha jugado su papel en esto de convertir las políticas en hechos.

Desde 1952, el mecanismo de articulación entre el mundo rural y las políticas estatales ha sido el sindicalismo campesino, sustento del Estado desde las milicias obrero-campesinas (1952-1964) y a través del "Pacto militar campesino" (1964-1974). En lo que a la educación se refiere, el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA), nudo entre el sindicalismo campesino y el Estado, administró, por ejemplo, desde 1953 hasta 1970, una "educación rural" paralela a la urbana, la que implementó hasta sus *propias* Normales Rurales de Maestros. Desde la perspectiva de las políticas estatales, el desarrollo y arraigo de la educación dependió, pues, del grado de la organización sindical campesina. Esta se concentró y

Gráfico 1
Sectorios privados y públicos desde 1952



Fuente: Subirats 1984, 1987.

desarrolló notablemente en los valles centrales cochabambinos y en parte del altiplano, sólo fue prácticamente nominal en el resto de las zonas afectadas por la Reforma Agraria e inexistente en zonas más alejadas y en el Oriente, que no entraron en dicha Reforma. Pero aun ahí donde se arraigó, la inercia política hizo de esta estructura un sistema cupular donde fundamentalmente fueron los niveles federativos departamentales y el confederativo nacional los realmente operativos y donde lo educativo, entre otros planes y programas (producción, salud, por ejemplo), estaba subordinado a los vaivenes políticos del país. Quizá a ello se debe la poca efectividad de las políticas educativas estatales en el mundo rural. Hay otras moralejas afines, pero no es éste el lugar para explicitarlas.

Un efecto de esta situación (fracasos educativos en el campo, interferencia del aparato sindical-estatal) fue la conformación, en enero de 1970 (en convenio con la UNESCO), del Servicio Nacional de Alfabetización y Educación Popular (SENALEP), organismo "descentralizado" que intentará efectivizar la educación en el campo. Notablemente, intenta articular una alfabetización bilingüe según las zonas, abarcando no sólo la PEE sino también los adultos. También, destacando el regionalismo vigente en los movimientos sociales bolivianos, sus materiales (cartillas de alfabetización, por ejemplo) recogen en sus ilustraciones y textos características de las tres más notables diferencias: altiplano, valles y llanos. Sus intentos no habrían alterado mayormente los índices arriba señalados y, por otra parte, también SENALEP se vio sujeto a los vaivenes políticos pues, en su conformación, contemplaba a organizaciones populares como la Central Obrera Boliviana y la Federación de Juntas Vecinales, actores a menudo antagónicos al Estado y a sus avatares.

En las últimas décadas, es por el lado eclesial y privado donde quizá habría que apuntar a un renovado esfuerzo educativo y formativo en el mundo rural.

La multiplicación de las ONGs —unas 800 operando en Bolivia (Comunicación personal de Elizabeth Landaeta, FLACSO-México)— es un claro ejemplo del proceso de desplazamiento hacia otros sujetos cuando las políticas estatales (sobre todo de salud, producción, educación y organización) hallan sus límites. Generalmente, las ONGs que trabajan en el mundo rural se encuentran relacionadas con los sindicatos comunitarios y las Subcentrales cantonales —algunas pocas (como INEDER en Carrasco-Cochabamba, por ejemplo) alcanzan el nivel de Central provincial—. Bajo diversos objetivos ("Desarrollo integral", "fomento a la organización campesina y popular", "producción organizada", "evangelización", "Pastoral rural", etc.), las ONGs constituyen una amplia, dispersa y compleja red cuyos efectos educativos todavía no han sido medidos. En muchos casos, como en otros sectores del hacer cultural, estas ONGs suponen políticas si no explícitamente contestatarias sí alternativas a las estatales. En estos casos, en la última década, se puede afirmar que el trabajo de las ONGs rurales, por lo menos en su acompañamiento formativo y de fomento a las organizaciones campesinas, se articuló finalmente (1979) con la conformación de la Central Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y a través

de ella estos diversos objetivos y esfuerzos se vieron temporalmente articulados con la "cultura política" del período.

En este breve diseño de la educación, consideremos ahora brevemente el nivel universitario. Actualmente son 9 (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Beni, Chuquisaca y Siglo XX) las universidades que dependen económicamente del Estado. La Nueva Política Económica (NPE, DS. 21060, 1985) ha reformado la tradicional dependencia de las universidades —de acuerdo con su tamaño— del Presupuesto General de la Nación. Ahora, dicho brevemente, las universidades dependen de los impuestos y regalías departamentales, con ajustes desde el Presupuesto General de la Nación de acuerdo con las carencias económicas de los departamentos. Por otro lado, las universidades privadas son pocas aunque su número tiende a crecer sobre todo en la región de Santa Cruz: la Universidad Católica (La Paz y Cochabamba) es la más antigua (1966); en esta década, en Santa Cruz precisamente, han surgido la Universidad Evangélica (1982), la Universidad NUR (1982) y la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (1984).

Dada su autonomía, sobre todo a partir de 1964 (gobierno de Barrientos), las universidades fiscales han sido un permanente antagonista del Estado. Este antagonismo se ha traducido en dos fuertes intervenciones, una durante el gobierno de Bánzer (1971-1977) y otra durante el de García Meza (1980-1981). En el primer caso, la intervención estatal suponía una amplia política educativa, la relativa a la Ley de Educación Boliviana de 1973, cuyas tendencias indicamos más adelante. Esa política supuso, entre otros, la creación del Consejo Educativo de la Educación Boliviana (CEUB) que centralizaba y articulaba todo el funcionamiento universitario fiscal en sus diversos niveles. Actualmente, en torno de los procesos de recuperación de la democracia, el CEUB es, por resolución del V Congreso Nacional de Universidades (1978) una instancia de coordinación entre las diversas unidades autónomas, pero carece ahora del peso educativo que tenía en la época de la intervención banzerista.

Sujetas a dependencias económicas y políticas, agravadas por la crisis económica y el proceso de recuperación de la democracia afines al período que nos ocupa, las universidades bolivianas subordinan, en general, sus labores de educación, investigación y extensión a las tensiones propias a aquellas variables. Su prácticamente ininterrumpido ritmo de paros, marchas y huelgas permite fácilmente ilustrar esta dependencia. Fuera de sus constantes paros motivados por demandas al Estado, intensificados por las características de la NPE, las universidades detienen sus labores constantemente en apoyo a las demandas sindicales o populares tanto nacionales como departamentales; son un permanente *partenaire* de la Central Obrera Boliviana y de sus filiales departamentales y gremiales. Tensiones e irregularidades a las que habría que sumar las relativas al co-gobierno docente-estudiantil que caracteriza a la autonomía universitaria boliviana y donde los códigos partidistas y políticos priman, ciertamente, sobre los académicos. En suma, dadas estas dependencias y tensiones, las universidades fiscales bolivianas tienden a un bajísimo rendimiento en su tres funciones básicas: educación, investigación y extensión.

Conscientes de sus deficiencias, por resoluciones del VI Congreso Nacional de Universidades (1984), las universidades fiscales tienden a implementar actualmente "reformas" y "reactualizaciones", las que todavía se encuentran a nivel de postulados y diagnósticos (cf. De Urioste 1988, Rodríguez 1988). Académica y burocráticamente pervive la inercia de las ineficacias acumuladas en las últimas décadas. Lastimosamente, no hay un "sin embargo" que matice este último aserto.

Antes de dejar este breve diseño del panorama educativo en Bolivia, volvamos un momento a la nueva Ley Educativa que se encuentra en debate legislativo. Desde ya no implica a las universidades cuyos procesos de "reforma" y "reactualización" internos siguen sus caminos —limitados y "descentralizados" por la NPE de 1985—. Esta nueva Ley supone, declaramos, una "descentralización" de la educación fiscal, delegándola a los departamentos y municipios. Como en los otros casos de reforma en las políticas estatales, la motivación explícita es la relativa ineficacia del sistema. A diferencia de las otras reformas en las políticas educativas, ésta tiende a salirse de los marcos propios del Estado del 52. Este proyecto, por supuesto, es parte de una política estatal más general; se articula con la NPE, de corte "neo-liberal" que rige actualmente al país. Pero también coincide con procesos sociales más amplios como la creciente importancia de los movimientos regionales (cf. Calderón y Laserna compiladores, 1983) y, más recientemente, con la restauración, por ejemplo, de la autonomía democrática (1986) de las municipalidades. Consideremos, pues, este nuevo proyecto de política educativa estatal un índice de los límites alcanzados por el Estado del 52 y de los actuales procesos de "reformulación" del Estado que atraviesa la sociedad boliviana.

En suma, las políticas estatales sobre la educación tienden a una constante reformulación al interior de un estado que, por ahí, encuentra permanentemente sus límites (y posibilidades). En el proceso, las funciones estatales, sin embargo, se cumplen, en cierta forma, desplazándose hacia otros sujetos que las asumen (educación privada, ONGs) de manera creciente y por ahí, en convergencia con otros procesos sociales, se irán explicitando aspectos (culturales) del proceso crítico que examinamos. Pasemos ahora a tratar los otros temas que nos guían en este diseño.

Prensa

A partir de 1952, el periódico *La Nación* fue el órgano de prensa oficial del nuevo gobierno y Estado, fruto de la revolución Nacional de abril. Destrozados e intervenidos *Los Tiempos* (Cochabamba) y *La Razón* (La Paz), "órganos de la 'Rosca minero feudal'", *La Nación* fue, en un principio, el cotidiano de mayor alcance y difusión nacionales. También lograron ese alcance *El Diario* (que, más adelante, se tolerará como portavoz de la oposición al Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR) y *Presencia*, órgano de la Iglesia Católica, fundado en 1953. Con el golpe de Barrientos (1964), *La Nación* dejará de existir y las iniciativas privadas desplazarán a las esta-

tales, las que aparentemente dejan de tener una política explícita al respecto —aunque, las intervenciones y censuras son parte de los momentos dictatoriales de este Estado. Actualmente, la prensa boliviana opera fundamentalmente bajo criterios privados (empresariales), con perspectivas propias según los casos. Aunque muchos de los cotidianos se distribuyen, sobre todo, en las ciudades más importantes (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba), *Presencia* y, en menor medida, *El Diario* serían los de mayor alcance y difusión a nivel nacional. He aquí un cuadro relativo a este medio.

Desde la consolidación del suplemento dominical "Presencia Literaria" (1956) de *Presencia* y de la revista de los viernes "Semana" (1975) de *Ultima Hora* (vespertino que, aunque local, llegaba esos viernes más allá de La Paz), los más importantes periódicos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba han multiplicado la edición de suplementos de diverso orden (deportivo, infantil, juvenil; cultural, histórico-social, económico, pedagógico, de entretenimiento), los que, actualmente, se publican alternativamente y a diario. Su universo de contenido supone, en algunos casos, materiales complementarios a la educación (como hasta la publicación en serie de textos y libros contemplados en los programas del Ministerio de Educación y Cultura), pero, en general, cubren un ámbito cultural amplio, urbanizado e internacional. La recepción de este tipo de publicaciones no ha sido medida pero desde el punto de vista del emisor (la prensa) hay, por una parte, un proceso de modernización bajo cánones internacionales y, por otro, la interpelación a auditorios "especializados" según los días y temas de estos suplementos.

Dentro de líneas que nos guían, la prensa supone, sobre todo, un sujeto emisor ligado a iniciativas privadas y empresariales, y por otro un receptor que es fundamentalmente urbano. Si bien aquí las iniciativas estatales estarían ausentes en el sentido en que operaba *La Nación*, sin embargo, por el lado del contenido, el más somero de los exámenes notará que, en lo que al país se refiere, el Estado es *par excellence* el generador de noticias, tanto nacional como regional y localmente.

En este medio, no hay muchos emisores más. A un nivel puntual aunque intenso de este medio, desde 1962 funciona la agencia de noticias FIDES, fundada por el sacerdote José Gramont y ligada a la radio *Fides*, de la Compañía de Jesús. A fines de 1969, el Ministerio de Información proyectó una Agencia Boliviana de Noticias; proyecto que quedó en nada después del golpe de 1970. La imagen de Bolivia hacia el exterior se proyecta, sobre todo, a través de las agencias internacionales, las que, por su parte, saturan no sólo el ámbito informativo de la noticia internacional sino que también alimentan los suplementos antes mencionados (cf. Rivadeneira, 1982, págs. 121-128).

Aparte de algunos órganos de partidos políticos de dispersa publicación y escasa difusión (que suelen intensificar sus ediciones coyunturalmente, sobre todo en época de elecciones), el semanario *Aquí* (1978) habría sido el más importante vehículo de una perspectiva anti-estatal. Su impacto fue muy significativo en la época de la resistencia a la dictadura banzerista y la recuperación de la democracia. Fue intervenido en 1980 (bajo García

Cuadro 3

Periódico	Sede	Nº páginas promedio	Formato	Circulación
Presencia	La Paz	20	grande	nacional
El Diario	La Paz	20	grande	nacional
Hoy	La Paz	32	tabloide	nacional
Meridiano	La Paz	8	grande	local
Ultima Hora	La Paz	16	grande	local
Jornada	La Paz	8	grande	local
El Mundo	Sta. Cruz	12	grande	nacional
El Deber	Sta. Cruz	16	tabloide	local
El País	Sta. Cruz	8	tabloide	local
El Comercio	Sta. Cruz	8	tabloide	local
El Día*	Sta. Cruz	12	tabloide	rural
Los Tiempos	Cochabamba	16	grande	local
Opinión*	Cochabamba	12	grande	local
La Patria	Oruro	8	grande	local
El Expreso	Oruro	8	grande	local
El Siglo	Potosí	12	grande	local
El Noticiero	Sucre	8	grande	local
Frontera Norte	Riberalta	16	grande	local
La Verdad (interdiario)	Tarija	16	tabloide	local

Fuente: Rivadeneira 1982, pág. 118.

*Añadidos.

Meza) y su director, el sacerdote y crítico de cine Luis Espinel, fue asesinado. Recuperada la democracia, *Aquí* renueva sus ediciones; su impacto ha disminuido mucho, y actualmente, transcurre prácticamente sin ser atendido.

Luego del explícito uso de *La Nación* en función del estado (1952-1964), crece el dominio de la iniciativa privada en este medio y, hoy por hoy, bajo cánones internacionales y muy modernizada técnicamente, la prensa de corte empresarial ocupa prácticamente todo este espacio discursivo y cultural.

Radio y televisión

Por el lado de la radiodifusión el proceso es algo análogo: las iniciativas estatales se ven desplazadas por otras; aunque, en este caso, su "oralidad" la hace apta para otro tipo de desplazamiento que los sólo privados y empresariales. En 1952, radio *Illimani* se convierte en la "emisora del Estado". Entre 1952 y 1957, ya la reforma agraria en marcha, la emisora del Estado, "Radio Illimani", alcanza una cobertura total del país y difunde la ideología del "Nacionalismo Revolucionario", a la vez que ataca sistemáticamente a la "Oligarquía feudal", desplazada del poder y a los "Cachorros de la Rosca" (La Falange Socialista Boliviana) (Rivadeneira, 1982, pág. 132). En esas épocas, el MNR distribuía aparatos de radio entre campesinos, fabriles y mineros.

En este campo, el desarrollo es notable. En 1980, ASBORA, la Asociación Boliviana de Radiodifusión registraba 124 emisoras, 61 urbanas y 63 rurales. Si las emisoras privadas (de alcance local) dominan a nivel urbano, a nivel rural priman las emisoras implementadas o apoyadas por la Iglesia. Al respecto, más allá de la mera emisión de programas, este tipo de radiodifusión rural busca ser una "educación alternativa" y se apoya en una serie de ONGs cuyos equipos formalizan esos esfuerzos educativos acompañándolos en el campo mismo. Estos esfuerzos han dado lugar a la conformación de las Escuelas Radiofónicas de Bolivia (ERBOL) fundamentalmente volcadas hacia el ámbito rural y atentas a las diversidades lingüísticas y culturales que lo caracterizan.

Un desarrollo convergente, aunque no generalizable, de este tipo de radiodifusión puede ser ejemplificado con el de la radio *Pío XII*, instalada por los oblatos en Siglo XX (1959), o sea, la manera como las radios afines a la Iglesia se identificaron con los movimientos populares contestatarios al Estado y a las dictaduras. Recordemos que Siglo XX ha sido a lo largo de la historia de la minería del estaño en Bolivia el principal núcleo del sindicalismo minero, clave de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). En principio, radio *Pío XII* fue un esfuerzo pastoral pero, con el tiempo, se convirtió en un aliado de los trabajadores y mineros y uno de sus más importantes instrumentos de comunicación. La historia de ese desarrollo se la puede leer en *Radio Pío XII: Una mina de coraje* (López Vigil, 1985). Bajo otras condiciones, otras emisoras católicas —radio *Fides*

de La Paz, por ejemplo— también se identificaron con los movimientos populares contestatarios al Estado y a la dictadura. (Tal vez el cambio de perspectiva de la iglesia ante los movimientos populares se dé después de los congresos de Medellín y de Puebla).

Una vez más, como en el campo de la prensa, la iniciativa y centralidad del Estado del 52 se diversifica y, en este caso, los desplazamientos tienden no sólo hacia la empresa privada sino también hacia la educación alternativa, la cual influye en las tensiones que mueven a la cultura política del país. Pero si el Estado fue notablemente desplazado del espacio radiofónico, su política buscó otro código para la difusión de sus iniciativas, oral y visual esta vez, el de la televisión.

En 1969 se inaugura el Canal 7 (órgano estatal), el que con 40 repetidoras a lo largo y ancho del país es hasta hoy el único canal de alcance nacional. Las primeras intenciones de hacer de este canal también un productor de programas nacionales a la larga se diluyeron en la dependencia de programas extranjeros que actualmente caracteriza, en general, a la televisión de Bolivia. En todo caso, en este canal la perspectiva que domina es la "oficial".

Casi simultáneamente, primero como talleres a circuito cerrado y luego como pequeñas emisoras, algunas universidades comenzaron a implementar sus propios canales. Por un lado, intentaron fomentar la difusión de programas educativos y, por otro, buscaron vehicular discursos alternativos y contestatarios a los del Estado. En teoría conforman una "red universitaria" de apoyo mutuo. Los límites económicos harán de estos canales medios de constante emisión aunque poco significativos en el actual mapa televisivo del país.

A partir de 1984, un inaudito desarrollo de los canales de la empresa privada irá desplazando tanto al canal estatal como a los canales universitarios; el crecimiento es de este orden: "A octubre de 1984, 9 canales (1 estatal y 8 universitarios). A octubre de 1985, 45 canales (1 estatal, 8 universitarios y 36 privados)" (Rivadeneira y Tirado 1986, pág. 141). Los canales 9 de La Paz, 4 de Cochabamba, 8 de Oruro, 11 de Potosí y 9 de Sucre conforman una pequeña red nacional, la "Red ATB", que crece constantemente instalando, por ejemplo, estaciones repetidoras en los valles centrales de Cochabamba, los más poblados de la región.

Los códigos de estos canales privados son internacionales y, salvo algunos programas (sobre todo noticieros y deportes), las teleseries y películas venidas del exterior dominan su programación; pauta que, como ya señalamos, también sigue el canal estatal y, en menor grado, los menos pudientes canales universitarios. Verosímilmente, lo que se podría denominar la "cultura televisiva" del país, es pues, además de masiva, marcadamente internacionalizada. Estudiosos del tema, como Rivadeneira y Tirado, señalan la carencia de políticas globales en este ámbito y destacan que, aunque de estructura de propiedad diversa (estatal, privada, universitaria), "el cordón umbilical de estas estructuras diferenciadas es y seguirá siendo el modelo de comunicación tradicional mercantilista, competitivo y de captación de audiencia en pos de un 'rating'

inductor de consumo. Esto es común a las tres categorías mencionadas". (1986, pág. 83).

Tendencialmente, es verosímil asumir que este medio de comunicación de masa diluya el proceso de las culturas nacionalistas afines al Estado del 52 y que este ámbito cultural masivo se imbrique cada vez más con los efectos de la NPE conformando una "cultura urbana" masiva bajo cánones internacionales, la que no dejará de tocar el mundo rural ya sea directamente o a través de las migraciones.

Cine

Tempranamente, junto a la prensa y a la radio, el Estado del 52 buscó en el cine un medio para la difusión de sus políticas y logros. En 1953 se creó el Instituto Cinematográfico Boliviano y una de sus principales funciones era la de realizar noticieros y cortometrajes destinados a difundir la Revolución Nacional del 52 y sus logros. Su rendimiento no sólo fue constante; fue, además, campo de trabajo para muchos de los más importantes cineastas del país. Como en los otros medios ya anotados, el cine también conoció un proceso de desplazamiento desde la iniciativa estatal hacia una, en este caso, contestataria a sus políticas (cf. Gumucio Dagrón 1982, pág. 187 y ss).

Este proceso se puede seguir en lo que a partir de 1967 será el Grupo Ukamau. Jorge Sanjinés, Oscar Soria, Ricardo Rada, Antonio Eguino, Alberto Villalpando trabajarán en el ICB y producirán los célebres cortometrajes *Revolución* (1964), *Aysa* (1965) y la película *Ukamau* (1966), sin dejar de cumplir con los noticieros del Instituto. Será la presentación de *Ukamau*, precisamente, la que motive la reacción del entonces presidente Barrientos, clausurando el ICB y expulsando a su personal. Evidentemente, el discurso era de denuncia y contestatario a las políticas del Estado.

Y por este camino se desarrollará el trabajo del más importante grupo de cineastas que ha tenido Bolivia y que suele indicar, a través de las obras de Sanjinés y Soria, de alcance internacional: *Yamar Mallcu* (1969) y, notablemente, *El coraje del pueblo* (1971). Films que, para Olivia Harris, desarrollan un cine político mucho antes que "el concepto de 'cine revolucionario' latinoamericano haya ni siquiera sido inventado" (1985, pág. 36).

Este desplazamiento cultural converge con los ya anotados pero, quizá, es el que mejor permite destacar una tensión siempre presente en el desarrollo de las políticas culturales del Estado del 52: no sólo que el Estado encontraría sus límites y de ahí los desplazamientos hacia otros sujetos sino que, en cierta forma, este Estado del 52 posibilita las dimensiones que le serán contestatarias; quizá habría que suscribir la caracterización de Malloy (1970) y considerar estas tensiones como parte de una "revolución inconclusa".

El Instituto Boliviano de Cultura (IBC)

En su intento de constituir una "identidad o conciencia nacional", la Revolución del 52 buscó también incentivar otros ámbitos, de ahí el Ministerio de Educación y Cultura; su mecanismo más evidente fue el de recuperar (asimilar) las culturas indígenas, sobre todo las andinas, en una cultura de élite en nombre de la Nación. Su modelo más evidente fue, sin duda, *La Creación de la Pedagogía Nacional* (1910) de Franz Tamayo, obra ampliamente difundida y que destacaba al "indio" como esencia de la nación: una evidente manifestación de este esfuerzo fue el movimiento denominado "mística de la tierra" por Francovich (1956) uno de cuyos cultores es Fernando Diez de Medina, primer ministro de Educación y Cultura del "nuevo" Estado. Ahí, desde ya, opera una reducción andino-criollo-céntrica que será permanentemente problematizada por las reivindicaciones de las otras regiones del país (por ejemplo la región cruceña) y de las diversas etnias (los indigenismos, por ejemplo, que se resistirán a esta reducción y asimilación).

Los diversos esfuerzos estatales a este nivel, que se traducían sobre todo en fomento a publicaciones, se sistematizarán recién en 1975 con la creación del Instituto Boliviano de Cultura (IBC), "como entidad descentralizada del Ministerio de Educación, con personería jurídica propia y autonomía administrativa" (cf. Harvey, compilador, 1981, págs. 65-66). El IBC buscaba sistematizar desde el Estado todas las gamas de actividad cultural así como también su estudio. Estos eran los institutos que lo constituían: Instituto Nacional de Arqueología, Instituto Nacional de Antropología, Instituto Nacional de Artes Plásticas, Instituto Nacional de Historia y Literatura, Instituto Nacional de Música y Danza, una "División de Educación Extraescolar" y hasta preveía "otros institutos a crearse en el futuro, así como filiales en las capitales departamentales" (Harvey, compilador, 1981, pág. 66).

En sus primeros años, el IBC intentará, efectivamente, organizar y fomentar la producción cultural del país; más allá de su instalación burocrática, una de las manifestaciones más evidentes de su trabajo fueron las publicaciones de sus diversos institutos alrededor de 1975, el sesquicentenario de la República. La crisis económica limitará mucho sus actividades y salvo excepciones —su atención a los Museos del país— se lo tiene apagado e inmerso en la rutina burocrática y sin mayores iniciativas. Con todo, sigue siendo la referencia estatal para convenios culturales de carácter internacional.

Aunque la existencia del IBC —si no la efectiva eficiencia— puede servir para simbolizar la intención estatal de articular y encaminar la producción cultural del país, bajo ese modelo de una asimilación de las culturas nativas por parte de una cultura de élite "nacional", proceso que, por otra parte, se buscaría fomentar y difundir a través de los medios de comunicación de masas, es claro que tanto por razones económicas como sociales estos esfuerzos encuentran pronto los límites y las contradicciones propios a la constitución del Estado del 52.

Sin embargo, el entreverso de los códigos (y valores) culturales en juego no es tan lineal como esta descripción (en cierta forma "vertical") quizá sugiere; habrá que tener en cuenta también aquellos procesos propios a la "cultura popular" durante el período que someramente examinamos. Veamos.

Culturas nativas y popular

Tanto a nivel de interpelación como de emisión las comunidades indígenas rurales suponen un permanente horizonte de referencia cultural. Destacando que estas culturas no son simplemente "frías", en el sentido antropológico del término dado su entronque histórico con el Estado colonial, primero y, luego, con el republicano, sus valores conocen diversos circuitos. Los más articulados con el proceso de constitución de Bolivia son, muestra la historia, las andinas y ahí encontramos matices entre el altiplano y los valles.

Desde su perspectiva ideológica, la Revolución Nacional del 52 buscó integrar esos valores culturales andinos como marca de la "identidad y conciencia" nacional. Pese a algunos logros, a la larga, la pervivencia de las comunidades indígenas, sobre todo en el altiplano, tendió a reforzar una creciente autoconciencia india de esa particularidad cultural. De ahí, por ejemplo, el particular matiz que la Reforma Agraria de 1953 logra en el altiplano, donde, como anotan Albó y Barnadas (1985, págs. 237-250), el sindicalismo campesino toma la forma de una serie de pequeños "superestados" (es decir, administraciones autónomas nada dóciles a determinaciones verticales y exógenas) dentro del proceso de la Revolución Nacional; matiz que podría contrastarse, por ejemplo, con el sindicalismo campesino de los valles cochabambinos mucho más subordinado al Estado del 52 —este sindicalismo campesino cochabambino estaba en la base de las milicias obrero-campesinas, sustento del Estado del 52 en sus primeros años, y del "Pacto militar-campesino" que se implementa a partir de 1964—. Tal vez en ello se motivó el desarrollo del indianismo e indigenismo que caracterizará el "katarismo" que se manifiesta en la zona (cf. Hurtado, 1986) y que llevará a la conformación de la CSUTCB alternativa al sindicalismo campesino paraestatal y aliada, en 1979, a la COB ante el Estado.

Si las comunidades indígenas altiplánicas son, hoy por hoy, las que más claramente tienden a explicitar y valorar su identidad y cultura indias, hay ahí un notable efecto que en cierta forma ha alterado el monológico proyecto nacionalista del 52 desplazándolo hacia una reformulación de la supuesta "identidad nacional" boliviana al considerar al país como una multitud de naciones (indias) en contacto territorial. Esta reformulación puede considerarse una de las "innovaciones culturales" más notables del período estudiado aunque no hay que perder de vista que, de todas maneras, el marco de referencia es el Estado del 52 y el sindicalismo campesino que le es afín a partir de la Reforma Agraria.

Menos "cerradas" que las comunidades altiplánicas, las vallunas

—dominantemente quechuas— serían las que más claramente permiten entender la circulación de los diferentes valores culturales por el entramado social boliviano (andino). Ya señalamos la fuerte articulación de su sindicalismo con el Estado del 52 y sus avatares. Se podría apuntar a un entramado cultural donde lo criollo colonial y lo indígena ya habrían intercambiado sus valores; no tanto en un mestizaje, como quiere la fórmula tradicional, sino en una andinización de la cultura criolla y colonial. Los valles cochabambinos pueden ser considerados ejemplares al respecto, con sus diversos grados de integración al Estado boliviano (cf. Laserna 1984, Albó 1987 a).

Las múltiples culturas indígenas que ocupan los llanos y selvas orientales del país han sido crecientemente objeto de esfuerzos de integración a través de contactos con procesos de evangelización, colonización y desarrollo del Oriente boliviano. Generalmente víctimas de las iniciativas externas, parte de esas "culturas condenadas", de las que habla Roa Bastos (1987) conoce actualmente un proceso de creciente autoconciencia como por ejemplo la conformación de la Central de Pueblos y Comunidades Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) permite indicar. De todas maneras, su articulación con el resto de la sociedad boliviana es todavía puntual, según las penetraciones (productivas, evangelizadoras, colonizadoras) en sus territorios y, sobre todo, dependiente del desarrollo que a partir de 1952 conoce la región cruceña en particular y la oriental y septentrional en general.

La problemática de la "región cruceña" nos permite introducir otro nivel de las culturas populares en Bolivia: el tema de las identidades regionales. Dado el particular crecimiento y desarrollo de la ciudad y región de Santa Cruz, el postulado de una "identidad regional" —la identidad cambia, en este caso— se ha probado ejemplar y ha sido imitada en otras regiones del país, en la conformación de los Comités Cívicos regionales, por ejemplo. Aunque ahí podemos reconocer procesos de descentralización alternativos al tradicional centralismo del Estado boliviano, es claro que un factor marcadamente cultural ha jugado un importante papel en esa valoración local.

Pese a los códigos diferentes, la valoración de lo regional tiende, por otro lado, a asumir los códigos culturales indígenas; en un cierto sentido, la valoración lograda en Santa Cruz obedece a la política cultural del Estado del 52 —la "identidad nacional" en referencia a valores indígenas— sólo que plasmada en una versión parcial, local. En este caso, serían las culturas indígenas de las selvas y llanos orientales las que se reivindican como constitutivas de la esencia de la identidad regional. "Lo cambia" es un valor indígena asumido hegemónicamente por una oligarquía que en lo fundamental es criolla (blanca). Desde un punto de vista discursivo e ideológico esa asimilación es ciertamente un logro. Por otra parte, la histórica oposición a "lo colla" (el Occidente) permite reforzar el peso de las reivindicaciones y derechos regionales. (Ya "en casa", el adjetivo "cambia" sigue siendo peyorativo, análogo al "indio bruto" de las oligarquías andinas).

Dicho sea de paso, esta notable recuperación de la identidad indígena para una funcionalidad hegemónica oligárquica fue también intentada en otras zonas del país. Lo que se logró en Santa Cruz no está lejos del postu-

lado de Tamayo de que el indio era la esencia de la nacionalidad o del hecho de que Arguedas haya escrito novela indigenista, él que consideraba a éste un *Pueblo enfermo*.

En todo caso, bajo el modelo cruceño el postulado de algún tipo de identidad regional está connotado en las diversas Corporaciones de Desarrollo Regional y en los Comités Cívicos departamentales alternativos, muchas veces, a las políticas centralistas surgidas desde el Estado. Complementariamente, estos desarrollos culturales regionales no son del todo cerrados y, por ejemplo, el culto a la Virgen de Urkupiña (Quillacollo, Cochabamba), una puntual tradición local, se ha visto catapultada a niveles masivos con la asunción cambia de ese culto en la última década. El eslabón más evidente en esta circulación de valores son las masivas migraciones de mano de obra andina hacia la zafra y cultivo de algodón en la región cruceña. (Complementariamente, habría que asumir que el culto se multiplicó cuando, dado el crecimiento económico de la región (el más importante del país en estas últimas décadas), la Virgen otorgaba los bienes que se le pedían...). Sea como fuese, es claro que los valores culturales circulan, y en este caso existe una leve —pero intensa— andinización en las tradiciones culturales cruceñas.

Conclusiones Parciales I

Hasta aquí pues un breve diseño de las políticas culturales desde el Estado, matizadas con un breve contraste desde el punto de vista de la "cultura popular", y la manera como esas iniciativas se desplazan hacia otros sujetos sociales. En general, se diría que el Estado del 52 tiende a diseminar sus políticas, pero no tendría la capacidad de implementarlas objetivamente y de allí vendrían los desplazamientos, algunos de ellos contestatarios al Estado mismo.

En todo esto, poco se ha dicho de la cultura de élite la que, sin embargo, parecía ser el criterio de referencia para las políticas culturales del Estado del 52. Se la considera restringida a grupos pequeños y aislados, dispersas y sin una mayor resonancia en la sociedad civil amplia, aunque por un lado haya asimilado valores populares en el proceso. Al respecto, y al terminar esta primera parte, tiene algo de sugerente que en la nueva moneda boliviana, aquella afín a la NPE, los billetes llevan figuras de intelectuales y artistas (Franz Tamayo, Gabriel René Moreno, Melchor Pérez de Holguín, Pantaleón Dalencia, Cecilio Guzmán de Rojas, Adela Zamudio, Fabián Vaca Chávez) y un banco en su publicidad televisiva destaque que el dinero, las finanzas y la cultura andan siempre juntos. Será que la cultura de élite se ha reducido a un nivel simbólico, ¿o que, en verdad, cultura y finanzas, hoy por hoy, andan muy juntas? Bajo la NPE, en efecto, la cultura boliviana parece fundamentalmente "económica" (y política).

A continuación, examinaremos con algún detalle el proceso de "defensa y recuperación" de la democracia en el período 1980-1987. Nuestro horizonte de referencia será la "cultura política" del país.

II. Cultura política

En estas notas nos ocupamos de la conformación (¿constitución?) de los sujetos en la formación abigarrada boliviana, desde el punto de vista de las "innovaciones culturales" para el período 1980-1987. El marco temporal y social que nos servirá de referencia es el relativo a la "recuperación y defensa" de la democracia. Por razones que quedarán más explícitas en lo que sigue, el proceso más notable, en relación a nuestro asunto, es el que va desde 1977 a 1982, es decir, desde la huelga de las mujeres mineras hasta la instauración del gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP). De modo que el período escogido para esta investigación se articula, por un lado, con el proceso mencionado y, por otro, nos permite seguir sus efectos hasta nuestros días.

La "recuperación y defensa" de la democracia estará en el nudo de nuestras preocupaciones. Desde el punto de vista de una "novedad" cultural, destacaremos la asunción por parte del movimiento obrero y popular de la consigna democrática. Antecedentes y efectos posteriores nos permitirán diseñar el "espacio cultural", valga la expresión, donde sucede este tipo de conformaciones sociales y sus alcances. En la conclusión destacaremos los rasgos más notables del proceso y propondremos un modelo para su explicación.

1. Hacia la instauración de la democracia

1.1 Los procesos de "innovación cultural" que ahora nos ocupan, aunque toman la forma de alternativas sociales posibles, tienden a desdibujarse con el correr del tiempo, sin que sea posible —dentro de lo dado y conocido— postular taxativamente o una desarticulación de facto de las conformaciones producidas o una especie de "retirada táctica" coyuntural que espera una mejor ocasión. De todas maneras, su manifestación —aunque sólo sea coyuntural— supone condiciones contextuales y/o históricas cuyo discernimiento permite diseñar el mapa de esos sucesos. Ahora bien, para no caer en culturalismos, esos contra los que prevenía Romero al examinar la "cultura política" y los mecanismos de "concertación social" (1987, pág. 162), podríamos aplicarle a la sociedad boliviana aquello que alguna vez señalara Koyré a propósito de ciertas "novedades culturales": que, en esos casos, "los 'efectos' son la 'causa'", es decir, que las manifestaciones permiten reconocer sus antecedentes, pero éstos, si entiendo bien el alcance de la precisión koyreana, no serían suficientes para motivar la posterior novedad cultural (Koyré 1973, pág. 18). Este es el caso de las articulaciones y procesos sociales relativos a la "recuperación y defensa" de la democracia, tal como éstos se dan en Bolivia a lo largo de la última década.

Desde 1977 hasta 1982, desde la huelga de hambre de las mujeres mineras hasta la instauración del gobierno de la UDP, Bolivia reconoce un ininterrumpido y creciente proceso de articulación social cuyo objetivo es, reitero, la "recuperación y defensa" de la democracia. En este período, es

notable la conformación de sujetos-actores colectivos prácticamente inéditos si tenemos en cuenta el carácter relativo de su conformación: obreros y campesinos, por ejemplo, instauran una efectiva alianza, decisiva en el logro del objetivo social propuesto; por otro lado, formas partidistas para-estatales, casi en contradicción con su previa "administración" dictatorial del Estado, convergen en torno de esa finalidad. En tales condiciones hay, pues, "innovaciones culturales" relativas a los actores-sujetos sociales en juego en relación a los nuevos y diversos grados de "intersubjetividad" social motivados (o mediatizados) por esta coyuntura pro-democrática.

Más adelante, poco a poco a partir de 1982 —cuando el movimiento obrero retorna, dada la postergación de la solución a los problemas económico-salariales, a la tradicional ecuación gobierno=Estado; cuando los partidos de oposición asumen sus proyectos propios—, ya en 1984 —cuando, para evitar una "crisis estatal", "el gobierno de la UDP reduce en un año su mandato constitucional y convoca a nuevas elecciones— y, definitivamente a partir de 1985 —instauración del gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y suscripción del "Pacto por la Democracia" entre el MNR y la Acción Democrática Nacionalista (ADN)—, las articulaciones previas parecen haber perdido toda coherencia y hoy los sujetos-actores populares no acaban de concentrar, salvo la oposición y resistencia, una manera efectiva de validar su presencia en el escenario socio-político boliviano; por el otro lado, las fracciones ahora gobernantes se hallan comprometidas en un "nuevo" Estado de corte marcadamente neo-liberal, pragmáticamente enfrentado con los problemas económicos nacionales e insensible (¿indiferente?, ¿incapaz?) ante los costos sociales de su proyecto —el que tampoco acaba por lograr una forma definitiva, sometido a la tradicional "lógica del fortalecimiento del Poder Ejecutivo" y a la "formación de élites cerradas", como señala R. A. Mayorga (1987, pág. 13)—. En todo caso, la "democracia" sigue siendo la referencia.

Bajo este marco eventual, tendríamos dos tiempos socio-culturales distintos: el primero nos señala una creciente intersubjetividad social, donde la Central Obrera Boliviana (COB) juega un papel protagónico, y el segundo se traduce en una dispersión de los sujetos-actores sociales producidos y donde, desde el punto de vista de las organizaciones populares, es ostensible hasta un cierto paralogismo, como si el hecho democrático *tel quel* hubiera alterado todas sus referencias. Veamos, en primer lugar, el entramado de la primera parte del proceso y, luego, como *suite*, su segunda manifestación.

1.2 Al alcanzar los sucesos de noviembre de 1979, momento ciertamente "crítico" en el proceso que estudiamos, Zavaleta Mercado destaca el hecho de que el movimiento obrero, a través de la COB, asuma como objetivo propio la "recuperación y defensa" de la democracia. "La democracia, dice, se convierte en una bandera de masas, de masas que se habían educado en el vilipendio de ella" (cf. Zavaleta Mercado 1983, págs. 34-40). En efecto, en ese entramado de objetivos políticos y gremiales que caracterizan al movimiento obrero boliviano, en ese enfrentamiento básico entre el Estado del 52 y sus avatares civiles y militares, este componente de

la sociedad boliviana no asume en ningún momento de su historia ese objetivo programático; quizá porque para el movimiento popular boliviano la democracia no se mide por el funcionamiento formal del Estado sino por su relación con la participación popular. Pero, en el caso que nos ocupa, se trata tan sólo de la democracia representativa ("formal") y hasta de su codificación constitucional vigente— el actual proceso se enmarca en referencia a la Constitución Política de 1967—. Esta es, ciertamente, una "novedad" socio-política en este horizonte cultural.

Esta novedad programática es un objeto discursivo pleno de aristas. Aunque a lo largo de estas notas veremos algunos de sus aspectos más notables, adelantamos que la "democracia" como programa societal tiene un trasfondo y hasta su arraigo en lo que podríamos llamar, siguiendo a Lazarte, la "historia subjetiva" de la masa boliviana.¹ De una u otra manera, desde la fundación de la República, la "democracia" es parte de un sistema de valores (+ y -) que, bajo diversos rostros, ha definido un campo discursivo a la práctica política —pensemos, por ejemplo en un período relativamente inmediato, en el alcance del Voto Universal implementado por el Estado del 52; en el vago pero constante funcionamiento del Poder Judicial; en la oposición semántica "democracia/dictadura" y sus múltiples usos; o en que hasta algunas formas dictatoriales (el barrientismo, el tránsito Bánzer-Pereda) buscaron una validación por esa vía—. Por lo tanto, hay una referencia socio-histórica para la relativamente reciente asunción popular de esta "recuperación y defensa" de la democracia. Pero, en lo que nos ocupa, la "novedad" es la torsión discursiva: que ésta devenga objeto-de-deseo popular cuando su formalidad estaba directamente asociada con el Estado democrático = instrumento dictatorial burgués, como reza la conocida fórmula.

Es que la "democracia" es parte de un espacio ideológico cultural con múltiples espesores y velos. El levantamiento histórico de los velos, siguiendo con la metáfora, tendría distintos niveles de valor de acuerdo con el interpretante. La coyuntura que nos ocupa habla de una coincidencia sobre el objeto-de-deseo, pero las lecturas determinarían diversos niveles de valor, los que, a la larga, se prueban unos más *reales* (esto es objetivos) que otros. Dicho de otra manera, estamos ciertamente frente a un objeto "sobredeterminado". Su arraigo histórico es, pues, un campo de posibilidad, el que además se inserta en una muy precisa situación contextual.

Así, por otra parte, esta novedad programática supone, en lo relativamente inmediato, una serie de alteraciones en el escenario social boliviano relativas al desgaste de la dictadura y, más concretamente, del banzerismo. Entre estas alteraciones tendríamos: la galopante "crisis económica", las presiones internacionales y, muy probablemente, una saturación de las posibilidades administrativas de la dictadura. Aunque es difícil señalar el peso relativo de cada uno de estos factores —los que, además, tienen sus matices propios (pensemos, por ejemplo, en la diversa naturaleza de las presiones internacionales)—, es claro que su suma o articulación conforma al objeto en su disponibilidad coyuntural. Y la sociedad boliviana —salvo estertores de su núcleo represivo y prebendario— opta por su asunción.

Aunque insuficiente para explicitar todo el entramado, el movimiento obrero (vía la COB) nos permite seguir un (grueso) hilo de esta asunción. De partida, señalemos que desde 1964 (barrientismo, pacto militar-campesino), la COB fue el lugar de refugio institucional —manifiesto o clandestino— para las iniciativas de los partidos "populares". De ahí que además de la economía propia al juego político de estos partidos dentro de la COB, habría que tener en cuenta las "reformas", si vale la palabra, experimentadas por éstos, las que los llevarían a suscribir —e impulsar— el proyecto democrático. Dado el desarrollo masivo del proceso, las opciones tácticas o estratégicas que motivarían esas "reformas" carecen, en rigor, de valor diferencial: la movilización popular afín a la "recuperación y defensa" de la democracia vence las posibilidades de los partidos. Sin embargo, aunque la movilización popular no se deja reducir ni siquiera a explícitas alianzas partidarias (como, por ejemplo, la de la UDP) y aunque la COB conformaría un acto social no subsumible a los partidos o líderes que, según las coyunturas, la administran —esa "COB concreta" como "consejo de trabajadores" de la que habla Calla (1985, págs. 65-128)—, es cierto que las iniciativas programáticas que examinamos suponen actores más concretos que la amplia movilización popular o la propia COB y, por lo tanto, los partidos que ahí operan parecen ser aceptables indicadores de un buen grado de la asunción programática del hecho democrático. Mas si tenemos en cuenta que en el horizonte inmediato de cada una de las etapas del proceso estaban en juego las elecciones nacionales donde, evidentemente, los partidos jugaban un notable papel. En suma, aunque la COB juega un papel protagónico en la amplia movilización popular en favor de la "recuperación y defensa" de la democracia, papel no ajeno, por supuesto, a sus tradicionales funciones en la sociedad boliviana (cf., para una caracterización de las mismas, Lazarte 1987, págs. 253 y ss.), los partidos políticos y el entramado electoral afín a la democracia permiten apuntar procesos de relativa "reforma intelectual", que ayudan a localizar, en un cierto grado, algunos nudos de esta asunción.

Por supuesto, el entramado electoral —ese permanente horizonte en el proceso que examinamos— pone en juego a otros partidos más que los afines a la COB y su economía política interna; notablemente —si nos guiamos por los resultados de las diversas elecciones— los partidos afines a las previas administraciones dictatoriales del Estado. Aunque su inscripción en el proceso tiene matices propios —como veremos— esta relativización que hacemos tiende a indicar que la asunción popular de la democracia supone proyectos diversos coyunturalmente convergentes en la instauración más estable del sistema democrático. Volvamos a nuestro hilo conductor: la COB y la amplia hegemonía (¿instrumental?) que logra en este proceso.

Desde sus orígenes, la COB —con la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB)— ha asumido diversas verbalizaciones programáticas mucho más amplias que su mero espectro gremial; como señala Lazarte al analizar la actual crisis que afecta a la COB (1987, pág. 261): "Desde su constitución el 17 de abril de 1952, la COB fue más un actor político que social. Sus orientaciones fundamentales fueron más

nacionales que corporativas y más políticas que gremiales. Ordenaba sus acciones teniendo como horizonte la realización de su proyecto alternativo de sociedad, sin reparar en la urgencia del presente. Su espacio de acción fue preferentemente el del poder, siendo ella misma un poder. Pero éste no fue el de un aparato sino la traducción concentrada y canalizada de la tendencia de los trabajadores organizados a intervenir en política y ser poder ellos mismos.

De algún modo, la COB fue el sustituto funcional de los partidos que no pudieron canalizar respectivamente esta tendencia".

Ciertamente, las condiciones de su constitución, las instancias gremiales o partidarias que la componen habrían permitido tales alcances; sin embargo, nunca un programa como el democrático habría contado con tan notable consenso social y, lo que es más importante, no habría logrado una efectiva *actualización o realización* —es difícil pensar en otros términos— como la relativa a la instauración del gobierno de la UDP en 1982. Los avatares de esta instauración suponen una continuidad y una intensidad sociales tales que llevan a pensar más allá del tradicional "centralismo obrero" de la COB, pese a su papel protagónico, y de sus partidos y líderes, pese a su capacidad de iniciativa e impulso. Reiteremos: la COB hegemoniza, pero, por así decirlo, "más allá de sí misma". Sucede como si las funciones históricas de la COB la situaran en un lugar privilegiado para canalizar apropiadamente las pulsiones sociales existentes, pero el objetivo democrático es ciertamente más amplio y diverso de lo que ella —a la larga— puede efectivamente administrar.

Volviendo al contrapunto de un párrafo anterior, se podría asumir, entonces, un apoyo social suplementario al tradicional a la COB que vendría, por ejemplo, del interés electoral de los partidos tipo MNR y ADN; ciertamente sí, pues su peso electoral en la serie 1978, 1979, 1980 —y, más adelante, 1984— dicen de su irradiación social y de los intereses que vehicular; pero esa sumatoria no parece suficiente. El proyecto democrático que hegemoniza la COB vence el horizonte formal afín a estos partidos, aunque lo suscribe. Un breve recurso a la anécdota nos permitirá precisar la naturaleza de la hegemonía cobista.

La impugnación a las elecciones fraudulentas (1978) que promovían la transición Bánzer-Pereda, la resistencia popular al golpe de Natush Bush (1979) apuntan a un sujeto social, manifestado por la COB cuyo horizonte de realización y viabilidad son, sobre todo, los frentes afines a esta organización laboral traducidos en la UDP y el Partido Socialista (PS-1) de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Electoralmente, esa posibilidad se viabiliza en las elecciones de 1980 y se concretiza en la instauración del gobierno de la UDP en 1982. Sabemos que ante el fracaso administrativo de la UDP, la COB pierde también su poder y alcance hegemónico y con ella los partidos que la acompañan. Mucho indica, pues, que la COB hegemonizó un proceso donde la "recuperación y defensa" de la democracia tenía un horizonte de gobierno (o sea ejercicio del poder) donde se entramaron, sin solución objetiva, un acceso al gobierno=poder y la tradición contestataria (anti-estatal) propia de la COB. De ahí que la suma de las otras fuerzas sociales

como las afines a la irradiación del MNR y la ADN, aunque no menos embarcadas, a la larga, en el elán democrático, pueden considerarse sólo cuantitativamente significativas.

1.3 El desarrollo que hemos optado para estas notas recién nos permite destacar un factor esencial en la relación al amplio alcance de esta "innovación" socio-cultural. Un notable indicador de las transformaciones culturales afines a este proceso, que se agrega a las capacidades de la COB y de los partidos políticos ya señaladas, es la reformulación que sufre el movimiento campesino. Para decirlo directamente: es la participación campesina la que permite entender el inusitado alcance de la asunción democrática hegemonizada por la COB. Destacando el peso de este factor en la coyuntura, al comentar el bloqueo campesino que acompaña la huelga obrera en noviembre de 1979, señala Zavaleta Mercado (1983, pág. 24): "La consistencia con que actuó el movimiento campesino sobre todo aymara y en el departamento de La Paz tanto en relación a las tres elecciones (de modo aun más relevante en la primera) como respecto a la crisis social de noviembre, es un verdadero viraje de la sociedad boliviana. [E]n cualquier forma, el campesinado, que había sido la base de la forma militar posterior a 1964 es ahora la novedad esencial en el período. La Paz misma es una de las zonas más poderosas del país por el concepto que se elija. El despertar político de los kollas resultaba un tanto tardío, porque el auge campesino tuvo su epicentro en los cincuenta en Cochabamba. Los vallunos habían sido el polo de centralidad en la revolución agraria; ahora, con todo, el katarismo ponía el peso de las formas organizativas milenarias: era como el ayllu en acción". (Los subrayados son nuestros).

En efecto, la Central Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) —que integrada a la COB desde 1979 sustenta el programa democrático e impulsa sus alcances más allá de cualquier ámbito tradicionalmente articulado por la COB— es culturalmente *otra* que la imaginada en las múltiples "alianzas obrero-campesinas" de las verbalizaciones previas y tradicionales y, ciertamente, supone una notable reformulación de los alcances del Estado del 52 y su ideología constitutiva, el nacionalismo revolucionario (NR).

Por un lado, esta CSUTCB ahora aliada con el movimiento obrero no es parte de un mero postulado programático relativo a la alianza entre "clases oprimidas", es concreta, es decir, existe y sucede de hecho; por otro lado, es programáticamente indigenista, aunque capaz de asumir su pacto de reciprocidad con el movimiento obrero afín a la COB. Además, supone una ruptura con el "Pacto militar-campesino" que, desde 1964, sustentaba la manifestación dictatorial del Estado del 52 y, culturalmente, su valoración de las "nacionalidades indígenas" altera notablemente los alcances ideológicos del NR. Al respecto, detengámonos un momento sobre esta dimensión ideológico-cultural.

En cierto sentido, la "novedad" —asunción popular del proyecto democrático—, cuyo hilo hemos seguido a través del papel cumplido por la COB, es ideológicamente compatible con el NR y el Estado del 52 y, por lo tanto, sus alcances pueden ser relativizados. La "torsión" que más arriba asociá-

bamos con el movimiento obrero podría ser entendida como una explicitación de la "letra" del NR, cuya ideología contempla una democratización popular. Bajo ese marco, sólo el movimiento campesino afín a la CSUTCB permite indicar una posible "reforma intelectual" quizá sustancial, aunque su código no sea, necesariamente, "nuevo".² Limitándonos a lo ideológico, destaquemos tres rasgos notables: uno, que el postulado del sujeto "indio" altera las reducciones (economicistas) afines al concepto de "campesino" propio del Estado del 52 y el NR; otro, que el postulado de las "naciones (o nacionalidades) indígenas" socaba —inquietantemente— los múltiples componentes relativos al postulado de la constitución de la "nación boliviana", postulado ideológico cuyas raíces forman parte, quizá, de la constante oligárquica que podemos asociar al ejercicio del poder en la sociedad boliviana; y, tercero, un rasgo problemático aun en el interior de la propia CSUTCB (cf. Cárdenas 1987, págs. 228-229), el que problematiza el horizonte que concibe la historia como conflicto de clases desplazándolo a un conflicto étnico.

Este tercer rasgo permite diseñar la naturaleza del pacto de reciprocidad entre la COB y la CSUTCB, que no se reduce, pues, a un acto homogéneo. Si el indigenismo o katarismo de la CSUTCB permite apuntar diferencias más o menos sustanciales con la tradición obrerista de la COB, habrá que reconocer que el complejo entramado político afín al movimiento y sindicalismo campesinos supone una serie de puentes con el movimiento obrero y, por supuesto, con el Estado del 52 —la siempre enunciada "alianza obrero-campesina" y el practicado "Pacto militar-campesino" pertenecen, por ejemplo, a ese complejo discursivo e institucional—. En parte, la asunción del programa democrático por parte de la CSUTCB podría ser entendido bajo esas variables— y, de hecho, la articulación del sindicalismo campesino a la estructura del Estado del 52 mostrará su peso a partir de 1982. Solamente a nivel ideológico —por el momento— podemos entender otro código, parte de la perspectiva indigenista del movimiento campesino en esa coyuntura, que llevaría a la CSUTCB a un decisivo compromiso con esta "recuperación y defensa" de la democracia: la CSUTCB contempla la posibilidad de una administración *autónoma* del hecho campesino e indígena en la sociedad boliviana (cf. Albó 1987). Antes de examinar este aspecto con algún detalle, una palabra sobre el pacto de reciprocidad COB-CSUTCB.

Tomando como índice la resistencia de noviembre de 1979, desde el punto de vista de la conformación de los sujetos sociales, tenemos aquí una "intersubjetividad" coyuntural cuyo trasfondo es, sin duda, el sindicalismo (obrero y campesino) afín al Estado del 52. Este trasfondo es fuerte. Por el lado obrero jugaría la propia constitución de la COB que, aunque contestataria al Estado del 52, operaría dentro de sus parámetros (para un detalle de las articulaciones entre la COB y el Estado del 52, cf. Lazarte 1987); o por el lado campesino, entraría en juego la "memoria corta" (Rivera Cusicanqui 1986, págs. 155-162), es decir, la relativa a la Reforma Agraria del 53 y al Estado que la implementó. Esta relación —vía Estado del 52— se reformularía coyunturalmente en dos "novedades" convergentes: la asunción obrera de la dimensión democrático-popular de la "letra" del NR —más las "reformas" en los partidos dentro de la COB— y la explicitación de la

"memoria larga" (Rivera Cusicanqui) campesina como horizonte alternativo a la continuidad colonial que signaría el destino de las comunidades indígenas en esta sociedad. Esta formulación explica tentativamente, bajo el contexto que describimos, no sólo el notable alcance que adquiere el movimiento popular en torno de la "recuperación y defensa" de la democracia sino, también, los sucesos posteriores a 1982, cuando los movimientos obreros y campesinos se ven empujados a refugiarse en su núcleo sindical resignando, se diría, sus objetivos más excesivos y, desde su perspectiva, más "democráticos". De ahí su formulación más bien cauta relativa al Estado del 52 y sus efectos. Pasemos ahora a diseñar el escenario social más amplio, donde, por lo adelantado, se jugaría el horizonte de versión democrática asumida por la CSUTCB.

1.4 En un cierto sentido, aunque hemos propuesto articulaciones relativas, hasta aquí sólo hemos *agregado* los factores que hacen de este proceso un fenómeno amplio y poderoso por parte de la sociedad civil. Aunque es posible creer con Calla (1985, pág. 128) que la democracia por estos lados es una conquista fundamentalmente obrera y popular, esto no resuelve el problema amplio del surgimiento, valga la expresión, de la *consigna democrática* en el horizonte de la sociedad boliviana actual, en las dimensiones que logró hasta 1982. Pues, a la larga —y como ya adelantamos—, la suma de participantes deberá incluir actores un poco más ajenos —según categorías tradicionales— al movimiento popular más evidente; actores como la Empresa Privada, parte de las propias FF.AA., movimientos regionales y, ciertamente, los partidos (y su irradiación) afines al ejercicio dictatorial del poder estatal; actores que, con matices, parecerían contradecir su historia y contexto al sumarse activamente al proceso de "recuperación y defensa" de la democracia. Aunque podemos discernir grados crecientes de participación en el proceso, éstos no son solamente tácticos —en ese ámbito, dicho sea de paso, la resistencia al golpe de García Meza (1980) y sus avatares es incomprensible sin su participación consensual—, de allí que habrá que asumir también una especie de "reforma intelectual" dictada por las circunstancias y refugiada en la "letra" del NR, en última instancia.

Tomando por referencia la administración del poder estatal es claro que la asunción de la democracia —en la forma excesiva que impulsó, finalmente, la COB— por parte de estos actores es, hasta 1980, marcadamente táctica y aun rodeada de un aura de reticencia notable, por ejemplo, en el proyecto de desplazamiento electoral Bánzer-Pereda (1978), el golpe de Natush Bush (con evidente apoyo del MNR reducido, anecdóticamente, a la figura de Bedregal, 1979), su "consenso" a los gobiernos interinos que se suceden (Guevara, Gueiler) y que sólo se extrema ante el ya explícitamente prebendal golpe de García Meza y el alud popular correspondiente. Ciertamente, es comprensible que no se puede dejar "así nomás" el poder gustado. Por lo tanto, hay algo irremediable por ahí, algo que les hace asumir también esa "recuperación y defensa" de la democracia como un objetivo componente de la realidad: ¿Las presiones internacionales?, ¿la crisis económica?, ¿la saturación de las capacidades administrativas de la dictadura. Visto de lejos, desde hoy, bajo el actual gobierno del MNR y el "Pacto

por la democracia", es claro que las "presiones internacionales", y el enfrentamiento a la "crisis económica", con sus límites, son variables controlables bajo una democracia institucionalizada y, por lo tanto, algo sucedía por el lado del Estado y su capacidad de ordenar la sociedad civil.

Los analistas del Estado boliviano en estas circunstancias señalaron que, en efecto, el Estado del 52 habría entrado en crisis (cf. Malloy 1982; R. A. Mayorga 1985, 1987, págs. 17-90, 129-159; Zavaleta Mercado 1983, 1986, págs. 44-75; respecto a la crisis ideológica, cf. F. Mayorga 1987). La creciente informalidad de la sociedad civil ante el (¿incapaz?) capitalismo de Estado, la ya parcial convocatoria del NR como factor hegemónico, las diferencias en el interior de las FF.AA., la crisis económica, la corrupción estatal mayor que su continente, habrían imposibilitado, finalmente, un sostenido control del Estado por parte de su protagonista más evidente, las FF.AA., y de los grupos afines a ese ejercicio del poder. La imagen de una nave que se va a pique —tan frecuentemente utilizada, sobre todo cuando se privilegiaba el tema de la "crisis económica"— y que hay que salvar convence a sus actores a intentar el proceso democrático tácticamente al principio, decididamente más adelante.

Algún almarizista diría que ahí se jugaba un "vacío de poder" (1988, pág. 30). Se diría, más bien, que el poder se había ido desplazando del Estado hacia las fracciones de la sociedad civil. En ese caso, las diversas asunciones de la *consigna democrática* suponen, a la larga, la puesta a prueba de los poderes (económico, social, político y cultural) logrados por los diversos sujetos-actores sociales de esta "sociedad abigarrada". Así, la democracia jurídico-formal sería el terreno donde —junto con una posible administración del Estado— se desarrollen las posibilidades de los poderes fragmentarios propios de los diversos actores en juego. Si asumimos, además, que el proceso relativo a la "recuperación y defensa" de la democracia *entraza* esa referencia en la cultura política de los actores en juego, lo que podemos medir en los hechos posteriores a la "más estable" instauración de la democracia —o sea, a partir de 1982— es el uso y desgaste de los poderes previos... o su mejor aprovechamiento. Se diría, entonces, permitiéndonos una obvia gratuidad, que el "tiempo democrático" sugería, presumiblemente, un más largo plazo a los poderes diversos para ejercer su posible hegemonía que el atomizado "tiempo dictatorial" afín al "golpe" o al "motín". Como seguramente el análisis del Estado boliviano, parte del proyecto, detallará estas (y otras tensiones) al respecto, ahora nos detendremos, bajo este diseño, en algunos corolarios afines a los temas que examinamos.

En primer lugar, quisiéramos destacar una posibilidad gnoseológica general, afín a los vínculos que Zavaleta Mercado (1986a, págs. 9-20) establece entre conocimiento y crisis social en una "sociedad abigarrada". Este breve paréntesis no es teórico sino descriptivo; propone un marco gnoseológico para el paso de una comprensión para-estatal de la sociedad boliviana hacia una más matizada captación de su realidad social objetiva. Los diversos actores que se entranan en el proceso de "recuperación y defensa" de la democracia se definen bajo diversos paradigmas (clasistas, regionales, nacionales, étnicos, estructurales, históricos) los que, al mismo tiempo,

implican proyectos distintos así como autodefiniciones diversas. Esta pluralidad apunta, ciertamente, al objetivo abigarramiento de la sociedad boliviana. Convergentemente, la "democracia" parece entenderse como una posibilidad de "descentralización" (estatal) y, además, la conformación de "mediaciones" —"diálogo", "concertación", "representatividad", "derechos", etc.— capaces de articular horizontalmente a los sujetos-actores en juego. Dicho brevemente, la asunción del proyecto democrático supone autodeterminación que, al mismo tiempo, buscaría defender o desarrollar poderes sociales parciales que, objetivamente, explicitan mejor la más concreta realidad social boliviana. En este sentido, la imagen propuesta de que el ejercicio del poder se desplazaría hacia la sociedad civil no ignora, por supuesto, el juego para-estatal y, en ese sentido, ya más arriba suscribimos la conclusión de R. A. Mayorga (1987, pág. 13) de que el proceso democrático por estos lados obedece más a una "lógica de concentración del poder" que a una "participación y diseminación" del mismo—, pero se destaca que la crisis del Estado del 52 también involucra procesos cognoscitivos que es necesario señalar para un análisis cultural del período. Fin del paréntesis. Vayamos ahora, precisamente, a anotar algunas de esas dispersiones en juego.

Bajo esta perspectiva, a diferencia del movimiento obrero y la hegemonía de la COB que opera con un horizonte electoral destinado al ejercicio del poder en el Estado —logró actualizado, reiteremos, con la instauración del gobierno de la UDP, que se evidenciará, en última instancia, en la posibilidad de un co-gobierno COB-UDP, debatido al final de ese gobierno—, el movimiento campesino sin descuidar este polo (de ahí, en parte, su pacto de reciprocidad con la COB), habría apuntado más bien a un ejercicio de poder a nivel de la sociedad civil, buscando alterar, por ejemplo, el monológico espacio "nacional" tradicional en un "plurinacional". Destaquemos, por ejemplo, este postulado de la "Tesis Política 1983" de la CSUTCB (Rivera Cusicanqui 1980, "Anexo" 7, págs. 97-214), que dada la diversidad de "lenguas, culturas, tradiciones históricas y formas de organización y de trabajo", propone que: "La CSUTCB debe convertirse en expresión cada vez más fiel y unitaria de esta diversidad. Esta consigna tiene también proyecciones en el plano político. Nuestra lucha tendrá que orientarse a que esta diversidad se exprese en todos los ámbitos de la vida nacional. Porque no queremos parches ni reformas parciales, queremos una liberación definitiva y la construcción de una sociedad plurinacional y pluricultural que, manteniendo la unidad de un Estado, combine y desarrolle la diversidad de las naciones aymara, quechua, tupiguaraní, ayoreode y todas las que la integran. No puede haber una verdadera liberación si no se respeta la diversidad plurinacional de nuestro país y las diversas formas de autogobierno de nuestros pueblos" (1986, pág. 211).

Ciertamente se trata de un postulado programático; pero, nos interesa señalar que su escenario es más la sociedad civil que el Estado. Este es, pues, un primer corolario relativo al desplazamiento del poder estatal —centralizado— hacia la sociedad civil —disperso—. Bajo esa perspectiva, la "campa", que limitó un más amplio desarrollo del movimiento campesino en

este sentido, tendría que ver con una incapacidad de modificar sustancialmente el espacio afín al sindicalismo del 52 y superar las tensiones gremiales, políticas, regionales que le son afines (cf. Rivera Cusicanqui 1985, Cárdenas 1987, págs. 230-232). Las tensiones relativas en este espacio están lejos de ser superadas en uno u otro sentido (cf., por ejemplo, los análisis de R. Puente en torno del Congreso Nacional de la CSUTCB —1987 y 1987a—, donde se evidencia el contraste entre una visión etnicista y otra clasista del movimiento campesino).

Un segundo corolario es que se hacía urgente una cierta "modernización del Estado", según la fórmula de R. A. Mayorga, para articular más efectivamente ciertos desarrollos socio-económicos en la sociedad civil que tocarían los límites de su posibilidad bajo el Estado del 52, el que, ciertamente, los permitió. Por este lado se pueden entender, los llamados regionales a la descentralización administrativa del Estado. El paradigma cruceño es, bajo esta perspectiva el hecho más notable; aunque dada la irradiación de sus logros se trata de un (disperso) fenómeno a nivel nacional.³

Desde el punto de vista cultural, el paradigma cruceño implica un componente ideológico —de larga historia— del que carecerían las otras regiones, aunque sí pueden invocar categorías análogas: el idiólogo "camba" (definido, en su espectro, en oposición a "colla"), que permite a esta región una "identidad" amplia, hegemonizada por sus clases dominantes. Aunque otras regiones —en última instancia, "departamentos", diría, quizá, Roca (1983, pág. 43) — desarrollan momentos económicos análogos (traducidos, por ejemplo, en las corporaciones de desarrollo) y políticos "informales" (comités cívicos) que ciertamente hicieron y hacen lo suyo en beneficio de sus respectivas regiones, por ahora, sólo balbucean una más sustancial identidad cultural.

O sea, brevemente, se jugaban ejercicios de poder a nivel de la sociedad civil contestatarios a la centralidad del Estado del 52. Y asumimos al respecto que el movimiento obrero hegemonizado por la COB doblaba su perspectiva anti-estatal con un proyecto de co-gestión y de co-gobierno, que, aunque ambiguo respecto de estos otros sucesos, estaba coyunturalmente articulado, como señalamos anteriormente. Es claro, entonces, que la "democracia" permitía desarrollos potenciales.

Un tercer corolario tiene que ver con los partidos de función administrativa durante las dictaduras y que disputan un mayor arraigo en el poder desplazado hacia la sociedad civil con miras a una posterior reforma del Estado dado el "largo plazo" del tiempo democrático y que se planteará, en los hechos, bajo un modelo neo-liberal. Aquí, la sugerencia koyreana invocada en nuestras primeras líneas —que los consecuentes permiten reconocer (o constituir) los antecedentes— nos viene muy bien: *a posteriori*, en el actual ejercicio de la administración del Estado, reconocemos claramente esta pulsión en el "Pacto por la democracia" suscrito entre el MNR y la ADN, el que, vía diversos mecanismos (donde no falta, ciertamente, el "clientelaje parasitario", como diría J. Malloy), habría permitido arraigos y desarrollos a nivel de la sociedad civil —como su hegemonía en el Congreso y sus logros en las recientes elecciones municipales permiten fácilmente explicitar—. Más

adelante, cuando detallemos el período post-1982, tendremos oportunidad de precisar estos desarrollos; por ahora, que queden destacados algunos intereses de poder que buscaban arraigarse, desarrollarse a nivel de la sociedad civil.⁴

1.5 El 10 de octubre de 1982 se instaura el gobierno de la UDP. Esta referencia nos dice de la estabilidad final del proceso de "recuperación y defensa" de la democracia. Concentradamente, Laserna resume muy bien los múltiples actores que ahí participaron y cuyo entramado cultural hemos diseñado (Laserna 1985, págs. 7-8): "El 17 de septiembre de 1982, cuando apenas se habían cumplido 21 horas de la huelga general indefinida convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), el gobierno militar presidido por el Gral. Guido Vildoso expresó su reconocimiento a la legitimidad de las elecciones realizadas en julio de 1980 y convocó al Congreso emanado de aquella votación para que culminara la constitucionalización que había sido interrumpida, precisamente, por un golpe militar.

"Aquella huelga representaba la culminación de un largo y difícil proceso de luchas sociales que, al intensificarse, habían ido ampliando los espacios de expresión, representación y autodeterminación de los actores colectivos. Hitos fundamentales de ese proceso son los intentos de golpe protagonizados por jóvenes oficiales acantonados en Cochabamba, la rebelión militar de Santa Cruz que logra la renuncia de García Meza, la heroica marcha de los fabriles de Cochabamba, la conminatoria de los Comités Cívicos que precipita la renuncia de Torrelío, la huelga general e indefinida de los mineros de Huanuni que inicia la embestida final contra el autoritarismo, a la que se adhirieron o sobrepusieron las acciones de los sindicatos, las juntas vecinales, las organizaciones empresariales y, naturalmente, los partidos políticos y los medios de comunicación.

"La coyuntura democrática que formalmente se inicia el 10 de octubre fue, en consecuencia, un genuino producto de la acción social o, si se quiere, un resultado indirecto de la insurgencia de la sociedad en contra del autoritarismo estatal".

Antes de pasar a examinar el segundo momento (1982-1987), algunos de cuyos rasgos nos han ya servido para afinar ciertas articulaciones del período tratado, resumamos muy brevemente lo expuesto.

En torno de 1977, se diseña una institucionalización democrática marcadamente formal, promovida desde el vértice gubernamental que, a la larga, adquiere un alcance inusitado dada la generalizada asunción del programa democrático por parte de la sociedad civil boliviana, hegemonizada por la COB, irradiada por la CSUTCB e intensificada por la decidida participación de los más diversos sujetos-actores de esta sociedad. En sus diversos avatares, el proceso toca —como en noviembre de 1979— los límites internos del Estado del 52 y, por ahí, se juegan también diversos esfuerzos hegemónicos a nivel de la sociedad civil.

Culturalmente, se podrían anotar las siguientes "innovaciones" más notables: a) una decisiva asunción del proyecto democrático en el interior de la COB y partidos y gremios que la constituyen; b) la explicitación de una reformulación del movimiento campesino *vis-a-vis* del Estado del 52, desta-

cable en su pacto de reciprocidad con el movimiento obrero y la formulación indigenista de su proyecto ideológico y político; c) la resolución de posibles reformas estatales a través de recomposiciones del poder a nivel de la sociedad civil. Globalmente, se diría que los múltiples sentidos de la "democracia" se incrustan en los diversos universos conceptuales (culturales) de los sujetos-actores sociales bolivianos, los que, cada uno a su manera, tratan de actualizar esa nueva cosmovisión.

2. Dispersiones y reducciones

La "resolución" social de 1982, aunque ciertamente supone una victoria popular ante el núcleo dictatorial del Estado, tiene en sus manos un objeto de aristas múltiples, las que no son arbitrarias. Habría que asumir, a la manera de Bloch cuando estudiaba los "efectos políticos del desarrollo desigual" (1982), un entramado múltiple donde las sincronías suponen diversos procesos diacrónicos no resueltos y cuyas fuerzas pueden, en rigor, ir por cualquier lado. En lo inmediato, por el lado gubernamental, la UDP ejerce el ejecutivo, mientras que, en el legislativo, la hegemonía es, más bien, del MNR y de la ADN. El problema de la "crisis económica" toma el primer plano y, desde entonces hasta hoy, este problema y las maneras de tratarlo pueden considerarse el "grado cero" de la discursividad social boliviana. Motiva todos los actos estatales y las acciones de los diversos actores sociales. Jugando con la terminología alemana se diría que las "formas aparentes" han cedido paso a las determinaciones sustanciales, las que ahora andan a la luz del día. Las crisis sociales y políticas previas se postergan, pues el gobierno de la UDP obtiene un plazo de tres meses de "tregua social" para modificar, de alguna manera, la problemática económica. La sociedad civil, tan activa en el período anterior, retorna a sus espacios más gremiales y aguarda no mucho.

2.1 En efecto, no pasará mucho tiempo y la "crisis económica" se hermanará con una "crisis social" creciente hasta que, en 1984, ante un posible golpe "correctivo" (cf. Barrios Morón 1987) una concertación social mediada por la Iglesia (cf. Muller y Machicado 1986) acortará en un año el gobierno de la UDP y se convocarán nuevas elecciones nacionales, las que darán lugar al actual gobierno del MNR (1985-1989) —y al "Pacto por la democracia" entre el MNR y la ADN—. Aunque las condiciones contextuales pueden explicar en parte el fracaso administrativo de la UDP es también evidente que esta fórmula y su trasfondo de apoyo —el movimiento popular— fueron incapaces de manejar el doble código que tenían entre manos al asumir el gobierno y el proyecto democrático: por un lado, reformar el Estado hacia una (indefinida, hay que decirlo) "democracia popular" y, en otro, enfrentar la "crisis económica" que, con sus múltiples facetas, exigía, por lo visto en los hechos posteriores, otras imaginaciones que las que estaban en juego o, como la Nueva Política Económica (NPE) implementada por la bi-partidaria puso de manifiesto, un costo social que la UDP y su entorno social y político, *a priori*, no podían intentar.

Siguiendo la variable que nos ocupa, veamos cómo el movimiento popular que tan alto grado de integración y fuerza alcanzara hasta provocar, precisamente, la instauración del gobierno de la UDP no sólo desandaró, por así decirlo, el camino recorrido sino que enfrentará actualmente un inusitado grado de dispersión, atomización inéditos y hasta un cierto generalizado paralogismo ante la actual "naturaleza" de la sociedad boliviana. Se diría, con J. Mediana (1986, pág. 51), que el mito de Sísifo exigía que se reinscribiera el ascenso, valga la paradoja, cuando las intensidades se miden hacia arriba. El núcleo de esa creciente dispersión no fue únicamente el sistema de "actos fallidos" que compartieron la UDP y el movimiento popular bajo la iniciativa de la COB —que pronto retornó a su lógica antiestatal y la ecuación que la gobierna, Estado=instrumento de la burguesía, del imperialismo— sino el enfrentado y desarticulado contexto que habría motivado, precisamente, la asunción democrática. Múltiples análisis posteriores destacan que el período de gobierno de la UDP sólo habría acelerado una profunda crisis estatal no resuelta por la instauración de la democracia (cf., entre otros, Laserna, compilador, 1985, R. A. Mayorga, compilador, 1987, FLACSO-ILDIS 1987). El cúmulo de esas circunstancias viene así caracterizado por R. A. Mayorga (1987, págs. 26-28): "[C]reo que es imprescindible poner de relieve que la crisis del Estado y del sistema político se caracteriza por cuatro elementos fundamentales:

"1) Una relación de fuerzas 'estática' de continua neutralización y veto recíproco entre los actores principales de la escena política (gobierno, COB, partidos políticos, FF.AA.). Esta relación de fuerzas hace imposible que uno de estos actores pueda imponer al resto sus proyectos e intereses (incapacidad hegemónica), pero tampoco crea condiciones para estrategias de articulación de intereses y constitución de pactos políticos.

"Definido por tal situación, el sistema político, exento de sustentación en un pacto constitutivo y apoyado más en la manipulación de intereses y en la coerción, es incapaz de crear alternativas estables de gobierno, no funcionan en base a reglas de juego reconocidas reciprocamente y, siendo esencialmente anónimo, obedece a prácticas políticas de imposición de objetivos.

"Este sistema político está además doblemente fracturado en un conjunto atomizado de partidos de débil o ninguna representación y por un divorcio entre los partidos y el movimiento sindical y popular que tradicionalmente ha ejercido una amplia supremacía sobre los partidos.

"2) La debilidad constructiva de las fuerzas políticas y sociales que supone esta situación rígida y permanente de empate y bloque mutuo, frustra la reconstrucción de esquemas viables de poder nacional y mediación de intereses, y el conflicto político se desenvuelve en el contexto de un pluralismo fragmentado y pervertido de los sindicatos, las asociaciones empresariales, los partidos y el gobierno. En términos gramscianos, no existen clases o fuerzas sociales con capacidad de construir una dirección hegemónica sobre la sociedad.

"3) La dispersión y neutralización política, sumada a la incapacidad hegemónica, remiten al agotamiento de las orientaciones y los esquemas

ideológicos predominantes desde la década del 40 (marxistas y nacionalistas). Los códigos discursivos que prevalecen en la lucha política son obsoletos y estériles. Dominados por una serie de mitos como el estatismo en la ideología de la izquierda marxista, estas ideologías producen discursos autoclausurados que son incapaces de responder creativamente a los múltiples problemas generados por la sociedad.

"4) Estos tres factores confluyen en el tremendo deterioro de la capacidad de la sociedad para responder a los problemas que ella suscita. Es decir, la complejidad de la realidad social y de la crisis nacional ha superado la capacidad ideológica y política de reducción y solución de esta complejidad. La gravedad de la crisis se manifiesta precisamente en este enorme desajuste: la sociedad boliviana ha producido nuevos problemas y realidades mientras que las ideologías del marxismo dogmático y del nacionalismo revolucionario han quedado rezagadas. Por otra parte, las prácticas políticas tradicionales son notoriamente caducas y contrarias a una resolución democrática de la crisis".

Se trata, evidentemente, de un escenario donde las prácticas tradicionales (puntos 1 y 2) y sus límites ideológicos (puntos 3 y 4) no estarían a la altura de las problemáticas sociales que, de una u otra manera, habrían buscado el camino democrático para su solución.

En la caracterización citada, habría que entramar el complejo tejido de la "crisis económica" que es la que más evidentes problemas sociales motivaría. El análisis más detallado de esta variable —o, "constante", si se prefiere— es tema de otra parte del presente proyecto; pero, en lo que nos ocupa, convendría figurarla operatoriamente como el terreno-de-prueba donde juegan su eficacia las acciones gubernamentales. En el período inmediato, popularmente, ésta se ve nula o mínima —la hiperinflación, el mercado paralelo del dólar, los sucesivos "paquetes" económicos, en fin, la inestabilidad como norma y la ausencia de un horizonte de posibles soluciones medran, a cada momento, el apoyo popular que llevó a la UDP al gobierno— no el voto de 1980, por supuesto, sino el masivo apoyo del 82. A la larga, la UDP desaparecerá del panorama electoral boliviano.

Por otro lado, poco a poco, la COB va rompiendo uno a uno sus vínculos con la UDP, vínculos que, en el período anterior, habían permitido canalizar el amplio movimiento popular hacia la instauración, precisamente, de esa fórmula en el gobierno. Paradójicamente, sin embargo, las incapacidades del gobierno ante la crisis y sus efectos sociales, incapacidades que, como señalábamos, le restaban apoyo y sustento popular, no necesariamente incrementaban el poder popular de su cada vez más evidente antagonista: la COB. Al contrario, a la larga, la COB —y en/con ella el movimiento sindical obrero y campesino— quedó casi irremediadamente dañada por el fracaso administrativo de la UDP. Por lo visto, la sociedad boliviana operaba bajo otras complejidades que las imaginadas por sus más públicos antagonistas y de ahí que el fracaso de uno de ellos no significó esta vez beneficios para el otro. Desde esa perspectiva, las finales tentativas por un posible co-gobierno COB-UDP parecen el intento por suscribir un pacto de descenso compartido.

Este fracaso curiosamente compartido bajo una lógica antagónica entre los actores más evidentes (gobierno/movimiento obrero) no es nada fácil de explicar dado el amplio espectro que implica y la radicalidad del mismo. Sobre todo, porque es difícil suponer un vínculo estructural o histórico tan fuerte entre la COB y la UDP que la caída o fracaso de ésta suponga necesariamente la de aquélla y bajo esas circunstancias antagónicas que, usualmente, sirven para marcar diferencias; pero, algo así sucedió. La circunstancia se complica si tenemos en cuenta otros matices que acompañan esa caída. Que la crisis de la COB resulta ser algo más que coyuntural, pues implica una dispersión y desarticulación del movimiento sindical obrero y campesino que, en cierta forma, se ven reducidos a atómicas situaciones de emergencia. Que, en la misma coyuntura, los partidos de izquierda sufren un destino análogo y, "de súbito", "se ven enfrentados a un mínimo de representatividad, convocatoria y portadores de un radical vacío ideológico frente a la actual sociedad boliviana, la que, por lo menos en las inmediatas elecciones de 1985 frecuentará otras opciones. Sorprende, pues, que además todo ello haya sucedido en un tiempo relativamente mínimo (dos años, prácticamente) y que ese quiebre haya tenido por inmediato antecedente todo el intenso proceso relativo a la "recuperación y defensa" de la democracia anteriormente descrito. Ciertamente, por este lado de la "cultura política", los paradigmas parecen estar en un radical entredicho.

Tentativamente, habrá que asumir, de acuerdo con lo adelantado, que el proceso de "recuperación y defensa" de la democracia estaba ligado a una profunda crisis estatal. Bajo esas condiciones, los años de la UDP, dadas las dificultades e incapacidades que las acompañaron e intensificaron, habrían colaborado a vencer los límites que se tocaron en ese notable movimiento popular. Ciertas inercias suelen arrastrar a sus más evidentes conductores, sobre todo cuando éstos no saben muy bien hacia dónde se camina. También es posible pensar que la real dimensión de la problemática económica no estaba por excesos por el lado político-social. También es evidente que el pasado dictatorial había eliminado toda la estructura de mediaciones y representaciones que supone la práctica de la democracia. De todas maneras, lo cierto es que el quiebre y la dispersión del intenso movimiento popular previo —jugado en los años udepistas— causó efectos notables y duraderos por el lado de las organizaciones y movimientos populares, y por el de los partidos que se reclamaban de ellos. Para Lazarte, "tanto el movimiento obrero como la COB están en un proceso de crisis", el que "rompió los ejes y dimensiones alrededor de los cuales se constituyeron en el pasado" (1987, pág. 252).

Persiguiendo un poco más el entramado relativo a la COB y la crisis que la afecta, habrá que señalar que bajo el gobierno del MNR y su NPE (signada por el célebre D.S. 21060), su núcleo histórico y sistémico, la FSTMB, se verá fuertemente afectada por el "Plan de rehabilitación" gubernamental de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), que supone un cuantioso despido de trabajadores mineros, conocido bajo el eufemismo de "relocalización". Éstos son, por ejemplo, algunas referencias cuantitativas al respecto (Lazarte 1987, pág. 269): "En un solo año, 1986, la reducción de la

fuerza de trabajo en la empresa estatal fue del 65%. Catavi, que había sido el sector de punta del movimiento minero, se contrajo de 4.277 al mes de diciembre de 1985 a 795 a diciembre de 1986. En el presente sólo quedan alrededor de 500".

Esta alteración cuantitativa, sin embargo, sólo se añade a la crisis orgánica arriba señalada. En efecto, antes de que el gobierno del MNR hiciera conocer su "Plan de rehabilitación" de la COMIBOL (6-VII-1986), la FSTMB había realizado su XXI Congreso Minero, en mayo de 1986. Desde ya, implica la necesidad de enfrentar, de alguna manera, la crisis que afecta a la COB y al movimiento sindical, pues por razones estatutarias la dirección de la FSTMB supone la dirección de la COB. En el tema que nos ocupa, el alejamiento de Juan Lechín Oquendo de esa dirección, la que ejercía ininterrumpidamente desde 1945, es un claro indicador de que las estructuraciones previas estaban en entredicho (cf. Calla 1986, Medina 1986). El tiempo todavía dirá de los alcances del fin de la "Era de Lechín" y de la reformulación que la sucede. De todas maneras, destaquemos que la problemática que afecta a la COB involucra, pues, no sólo sus extensiones sino, notablemente, su núcleo: la FSTMB.

2.2 Paralela y convergentemente, el movimiento campesino liderado por la CSUTCB —ahora articulado a la COB, pero no estrictamente subordinado— revela también sus límites objetivos y, en cierta forma, retorna a su núcleo ideológico y programático. Sin embargo, a diferencia de la COB que, dados sus alcances y peso histórico, enfrenta problemas básicos, la CSUTCB confrontaría más bien, como la formula V. H. Cárdenas (1987, pág. 223) una "crisis de crecimiento" —recordemos que la CSUTCB se constituye recién en 1979—. De todas maneras, su problemática está definida por el contexto que examinamos, de modo que también el movimiento campesino conoce de dispersiones, desarticulaciones y regresiones.

Si, desde el punto de vista cultural, la participación de la CSUTCB en el proceso de irradiación de la "recuperación y defensa" de la democracia aportó decisivamente gracias a su amplia convocatoria y en la introducción de alternativas ideológicas al hegemónico NR a través de la propuesta indigenista, actualmente se hace evidente que la organización enfrenta la casi imposibilidad de traducir sus principios programáticos en términos de avances objetivos en la sociedad civil, escenario donde, como adelantamos, se jugaría el verdadero peso de su "reforma intelectual". Sin necesidad de ir más allá del movimiento campesino mismo, un rasgo que permite marcar esa imposibilidad son los actuales límites políticos e ideológicos en los que se debate la CSUTCB. En efecto, el III Congreso Campesino, realizado en Cochabamba del 26 de junio al 3 de julio de 1987, puso en evidencia esos límites: una diferencia de sólo 90 votos entre los representantes al Congreso (495 a 405) separa la versión katarista del hecho campesino de la marxista. Se podrá discutir por mucho tiempo cuál de las dos es más apropiada para la realidad social boliviana, pero los números indican, prácticamente, dos versiones distintas que suponen problemas hegemónicos dentro del movimiento. Esta dualidad, todavía sin mediaciones objetivas, problematiza sin duda el real alcance de la CSUTCB.

La relativamente corta vida de la CSUTCB presenta, bajo las actuales circunstancias, un interrogante respecto del amplio alcance de su convocatoria, durante el proceso de "recuperación y defensa" de la democracia. ¿Cómo llegó tan lejos si aun su hegemonía interna es harto problemática? Si bien es cierto que la CSUTCB ha desplazado al sindicalismo campesino-oficial post-52 —ése enraizado en el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios—, es también cierto que esta nueva organización sigue articulada con las estructuras nacionales y regionales afines a ese sindicalismo y, como señala S. Rivera Cusicanqui en una evaluación posterior (1985, págs. 45-150), un problema no resuelto por la CSUTCB sigue siendo el de la contradicción entre "movimientismo" e "indigenismo". Si el problema mencionado en el párrafo anterior es de carácter político-ideológico, éste, en cambio, supone una compleja estructuración social cuyas articulaciones van más allá de postulados principistas y tienen que ver con las múltiples dimensiones de la organización social en el campo boliviano. A este nivel básico, más allá de su posible convocatoria en casos extremos y excepcionales como los de la "recuperación y defensa" de la democracia —donde, dicho sea de paso, *todos* contribuyeron—, la hegemonía de la CSUTCB puede considerarse todavía relativamente puntual.

Una problemática análoga es la que enfrenta la CSUTCB ante las nacionalidades indígenas del Oriente boliviano, con las que todavía no ha sabido articularse apropiadamente. Al respecto, señala Cárdenas (1987, pág. 232): "Otro problema es la insuperada relación de la CSUTCB aymara y quechua con las minorías orientales, no sólo como personas sino como pueblos organizados. Por ejemplo, la CSUTCB no clarificó sus relaciones con la Central de Comunidades y Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) o la Asamblea Guarani. En el segundo Congreso un representante guaraní fue integrado al Comité Ejecutivo. El resultado no fue beneficioso para la Confederación, tampoco para el dirigente guaraní. En el último Congreso un representante del pueblo guaraní es miembro del nuevo Comité Ejecutivo. Pero continúa la indefinición orgánica. ¿Cómo se une el discurso de la CSUTCB con su práctica referente a lo cultural y nacional? ¿Cómo se concreta en el interior de la propia CSUTCB el planteamiento plurinacional y pluricultural?"

Esta problemática, más que meramente corporativista, indica, por otro lado, un asunto que una reflexión sobre los hechos culturales en Bolivia no puede dejar de mencionar y que está presente en las preguntas finales que se hace Cárdenas: el problema de la articulación social de la diversidad cultural, tan amplio cuando se tiene en mente la pluralidad de las minorías étnicas que, dispersamente, pueblan los llanos y selvas orientales (al respecto, c.f., por ejemplo, CIDOB 1986).

En suma, bajo el contexto que nos ocupa, la CSUTCB se vería restituida a sus más reales dimensiones y, por el momento, salvo su arraigo tradicional entre los aymara y parte de los quechua —y la "oficialización" de la organización vía la COB—, es claro que el movimiento se ha visto reducido a su ámbito ideológico, programático y político donde, por otra parte, están en un muy equilibrado juego hegemónico la versión marxista del hecho campesino en Bolivia ante la versión katarista, más indigenista.

Tampoco habrá que descuidar el hecho de que la estructura sindical campesina operaría todavía bajo los modelos afines al Estado del 52.

2.3 Antes de entrar a examinar un poco el escenario más general en curso, destaquemos algunos rasgos discursivos de la "cultura política" afín a las organizaciones populares en este segundo momento del proceso, luego de la caída de la UDP.

Salvo algunos grupos que habrían asumido el proyecto democrático de una manera sustancial hay, en general, una dinámica de retorno a posiciones previas al proceso vivido hasta 1982. Esto es notable, por ejemplo, en la reinterpretación marxista tradicional del hecho campesino cuando la insurgencia de 1979 parecía indicar que el aporte indigenista era esencial para la objetiva comprensión de ese hecho. Por otro lado, los partidos de izquierda menores que tampoco tuvieron parte, por así decirlo, en la instauración del gobierno udepista, ratifican sus posiciones previas dada la "prueba" del fracaso udepista y dado el actual ejercicio de un gobierno derechista. Podría decirse que los códigos de la izquierda tradicionales vuelven a ser esgrimidos y que el hecho democrático y el indigenista, aunque han logrado algún arraigo, transcurren entramados en un entredicho donde parecen primar inercias previas.

Convergentemente, entre líneas —pero como un hilván en este entretejido, valga la metáfora— hay un notable y generalizado retorno a la "letra" del NR. En este caso, las verbalizaciones son marcadamente reivindicativas (puestos, salarios, derechos laborales, cosas así). El sustento de este factor discurso parece ser una cierta defensa del Estado del 52 —que está en vías de ser reemplazado por uno de corte fundamentalmente neoliberal—, el que garantizaba un estrecho vínculo entre las estratégicas empresas propiedad del "capital estatal" y sus organizaciones laborales —pensemos, por ejemplo, en COMIBOL. Por razones estructurales, en estos casos, las organizaciones laborales podían ejercer efectivos actos de poder *vis-a-vis* sus empleadores. La FSMTB y, con ella, la COB han frecuentado este discurso al defender sectores de la minería nacionalizada.

Estos serían, en gruesos rasgos, las discursividades más notables en las actuales circunstancias que signan la dispersión del movimiento popular y su esfuerzo de re-articulación.

2.4 Cuando la UDP asumió el gobierno en 1982 la democracia, dijimos, "se estabilizó", es decir, entra a ser el código de referencia para la administración estatal, por lo menos, en lo que a elecciones se refiere. Que detrás de ese código los decires y haceres no tengan mucho que ver con una "democracia real" es otra historia. En este código, el debilitamiento y final colapso de la UDP supuso réditos para sus opositores, es decir, para los partidos y grupos que, en el marco del legislativo, ofrecían esa cara. Por ese lado se orientó la sociedad civil y en las elecciones de 1985 los principales actores fueron el MNR —que lograría la nominación presidencial— y la ADN. La sociedad civil, por el lado de su función electoral, atendió al código de la oposición democrática y no al de la oposición social —por ese lado, como vimos, la COB y su entorno acompañaron el destino de la UDP. Esto es algo que aún no podemos medir.

Las acciones más públicas del nuevo gobierno tienen que ver con su enfrentamiento a la "crisis económica" y, sobre todo, con la ya espectacular hiperinflación desarrollada durante el período udepista. La NPE introduce un modelo neo-liberal donde, poco a poco y a la larga, también se implementa una reformulación del omnipresente y centralizado Estado boliviano efecto del 52. Esa NPE, que abstrae el costo social de su empresa, se acompaña funcionalmente con el "Pacto por la democracia". Los del MNR asumen el aparato ejecutivo del Estado (gobierno nacional, prefecturas departamentales) mientras que la ADN se hace cargo de las instituciones paraestatales, llamadas "descentralizadas" o "semiautónomas" (corporaciones productivas y de desarrollo); aquí y allá, hasta las venideras elecciones municipales (1987), los dos partidos se reparten gobierno y administraciones locales menores de acuerdo a su peso o arraigo local. Por supuesto, fuera de la funcionalidad afín a este reparto, ambos partidos se beneficiarán del clientelaje que sustentará mejor su relación con la sociedad civil. Aunque en el caso del MNR también podemos suponer una re-actualización de su histórica estructura partidaria. De todas maneras, administrativamente, la NPE se apoya en esa burocracia bi-partidaria experimentada en el manejo del país.

Si por el lado formal, es decir de representantes y partidos en el legislativo, la bipartidaria no conoce oposición, por el lado social, debido al quiebre de las organizaciones populares, tampoco habrá mayor oposición... efectiva, quiero decir. Por lo tanto, las iniciativas del gobierno del MNR se irán concretizando y plasmando objetivamente, de modo que actualmente su modelo económico y estatal son la referencia vigente más allá de su inadecuación a las necesidades de la mayoría de la población o a otros proyectos de posible organización óptima de esta sociedad. La suscripción internacional a la continuidad democrática añade su peso a la validación del gobierno —y administración— en ejercicio.

En estas circunstancias, el escenario nacional tendría los siguientes temas dominantes: La NPE, su ambiguo acompañante: la amplia y diversa "economía informal", la producción de coca y el narcotráfico, una creciente reforma neo-liberal del Estado y sus instituciones, una activa vigencia de los Comités Cívicos regionales, y el disperso hacer de las organizaciones populares que buscan re-articularse o que resisten puntualmente a las iniciativas gubernamentales, sin mayores resultados aparentes.

La economía se puede considerar operatoriamente como el terreno-de-prueba para las iniciativas gubernamentales. Aunque la siempre proclamada "reactivación económica" no acaba de llegar —pese al D.D. 2166—, el gobierno del MNR sí demostró poder detener (y controlar) la espiral inflacionaria. Argumento por argumento, dado el peso del "tema económico" en la sociedad boliviana durante la última década, ese logro permitía —quizá todavía permite— minimizar los altos costos sociales que supone el conjunto de medidas que acompañan ese más público logro. En la cultura cotidiana lo económico es, hoy por hoy, la superficie de los hechos.

Bajo ese horizonte, el anterior gobierno de la UDP aparece también como el intento —imposible— por manejar un máximo de variables econó-

micas y sociales simultáneamente. Más caótico, más ineficaz, ese gobierno, sin embargo, como el proceso que lo instauró, tendía a tratar con un país más grande. En contraste, aunque más ordenado y más efectivo, el actual aparato administrativo del país —el gobierno del MNR y el "Pacto por la democracia" tratan, ciertamente, con un país más pequeño. Si, para fines expositivos, simplificamos las variables a dos macro-nacionales, diríamos que la UDP quiso manejar lo social y lo económico; y que el MNR se limita a lo económico. Este país más pequeño se piensa —trabajadores, campesinos más o menos— como una especie de Consejo Estatal de Empresas, si vale la expresión.⁵

Podemos figurárnoslo como sigue. Mientras se construye, quizá, un nuevo tipo de Estado y mientras el del 52 no acaba de irse, parece haber una superposición entre los intereses de la empresa privada y los nacionales. No en vano, durante el proceso de "recuperación y defensa" de la democracia, este sector no dejó de aportar lo suyo —cf. Illanes (1987), para una perspectiva de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) respecto del proceso democrático y sus perspectivas—. La "crisis económica" habría ajustado las relaciones en este sentido. Desde ya, el modelo económico en ejercicio —el de la NPE gubernamental— supone una estrecha relación entre los intereses de la empresa privada y los nacionales; es parte de su axiomática básica. De ahí que, en un cierto sentido, la administración estatal los atiende bajo una especie de determinación relativa, con sacrificios para uno u otro lado según las circunstancias, pero siempre bajo una perspectiva común. Este es el pequeño país que hoy por hoy se atiende y cuida. Lo notable al respecto —aunque hay, ciertamente, algunos antecedentes inmediatos, como el Servicio Civil Obligatorio implementado durante el gobierno banzerista permite señalar— es que la actual administración económico-estatal es prácticamente indiscernible de una político-empresarial: numerosos empresarios privados ocupan cargos representativos o ejecutivos en todos los niveles del hacer político boliviano. Parece que las actuales condiciones de "crisis económica" obligan a los empresarios a dedicarle directamente sus esfuerzos al Estado, tal vez para atender mejor sus propios intereses privados. Quizá también habrá que recordar que la "clase política" más evidente, después de su pasaje por previas administraciones del Estado, se ha ido transformado en una "clase empresarial". En estas condiciones, uno no puede dejar de recordar a los "patriarcas de la plata" (Mitre 1981), los que debían cumplir funciones gubernamentales análogas, pues no contaban, como diría S. Almaraz (1976, pág. 9), con una "estructura de poder" delegable a la "clase política" más evidente. Por supuesto, sería un falso corolario reducir, en estas condiciones, a los partidos gobernantes a una mera "clase empresarial"; su irradiación electoral, por ejemplo, dice de otras muchas otras cosas más, pero en lo que nos ocupa estos índices administrativos, bajo el código dominante de la NPE, nos permiten diseñar los límites del país que actualmente está en juego.

La discursividad estatal que acompaña esta administración *more empresarial* recurre, por supuesto, al NR, insistiendo, sobre todo, en su

"polo nacionalista", contextualizado en una situación de aguda crisis que es necesario superar —pero sin descuidar dimensiones más "sustanciales"; así, por ejemplo, se implementó, como era de esperar, un nuevo intento de "salida al mar", que el gobierno chileno descartó enfáticamente (IV, 1987). Bajo el marco de la NPE y la "reactivación económica" del país, el NR se reformula en términos de una "modernización" y, así, una categorización tecnocrática va reemplazando las más tradicionales categorías del "polo revolucionario" del NR —un futuro tecnológico, se diría, reemplaza al futuro social de la revolución—. Convergentemente, las categorías democráticas —esto es, las asumidas sin mayores ambigüedades, salvo las que permite el amplio espectro de sus connotaciones— vienen marcadas por esa "modernización" que enmarca el discurso estatal: la democracia vigente sería parte de una puesta-al-día del país donde la "reactivación económica" y los derechos ciudadanos, digamos por ejemplo, van mano a mano. Esta discursividad no es rigurosamente local: según un término de Malloy en *La revolución inconclusa* (1970), se diría que desde el Estado y su administración un "centro pragmático" emite una buena parte de esta discursividad en función de un interlocutor internacional, quizá porque por ahí pasan muchos de los caminos de la NPE. Más localmente, el terreno-de-prueba económico y el ejercicio de la democracia jurídica —llamado y realización de elecciones municipales, por ejemplo— parecen ser los argumentos mejor cuidados y, por supuesto, difundidos bajo el NR modernizado.

En el marco de la tendencia a una reformulación del Estado, habría que tener también en cuenta una multiplicación de dialectos —a veces *políticamente opositora*— relativa a las emisiones locales de los Comités Cívicos y de los gobiernos regionales más locales. Pese a las referencias locales que evidentemente tienden a diseminar las diferencias, estos dialectos también están fuertemente marcados por la categoría de la "modernización" —en ellos se articula en esta categoría contrastada con la de "necesidades" que, casi siempre, suponen atrasos y rezagos que necesitan ser superados. Hay pues una cierta hegemonía —digamos "tecnocrática"— donde lo local y lo nacional intercambian sus términos referenciales bajo ese espectro común: el tiempo histórico como un futuro donde se solucionarán los actuales problemas y donde se dará sentido a los actuales sacrificios. Estos son sintéticamente algunos rasgos de la actual discursividad estatal y sus más locales versiones.

2.5 Ciertamente, ese (indicativo) "país más pequeño" que se administraría oficialmente tiene sus extensiones y sus (borrosas) fronteras. Después de la estabilización democrática, algunas de sus extensiones sociales se suelen explicitar cuando, por ejemplo, en torno de elecciones (sucedió en las municipales de 1987 y comienza a suceder en vista a las nacionales de 1989), es necesario invocar a una más amplia gama de interlocutores. Pero, más directamente, bajo el marco de la problemática económica cuyo monólogo a lo Hamlet suele borrar otras, habrá que entenderlo —a ese "pequeño país"— diversamente entramado con la "economía informal", la que en sus más extensos tratamientos incluye las ilegalidades relativas al contrabando, por ejemplo, y el narcotráfico.⁶ Aunque vence los lími-

tes jurídicos de la NPE, esta "economía informal" supone toda una serie de vínculos con la "formal", aunque éstos todavía no estén estrictamente precisados empíricamente y teóricamente (cf. para localizaciones recientes de las problemáticas empíricas y teóricas de la "economía informal" en Bolivia y, en general en América Latina, Rivera 1988, cap. 2). Suponiendo, pues, que el "pequeño país" de la NPE implica, de todas maneras, este más diverso y esquivo universo económico —cuyos "orígenes", por supuesto, vencen de lejos nuestros marcos de referencia—, señalemos, desde el punto de vista cultural que nos ocupa, primero, que sus implicaciones sociales vencen las fronteras de la "cultura política" cuyos rasgos actuales hemos ido diseñando en estas páginas y, segundo, que, muy verosímilmente, ahí se juegan "innovaciones culturales" a las que convendrá prestar atención. Digamos algo, muy breve al respecto.

En una temprana caracterización de la "economía informal" y su importancia en Bolivia", Dandler (1985) destacaba la necesidad de entenderla como una "estrategia de vida" y no como un sector económico. Decía Danler —en un contexto afín a los trabajos de De Soto y de Mar, como precisa Rivera (1988, pág. 6)— que: "[L]o informal no es un sector. Es más bien una estrategia de vida: a) frente a otras posibilidades u oportunidades que ofrece la economía formal, b) que se combina y complementa con lo formal o c) que a partir del ámbito formal e institucionalizado, opera informalmente en otras actividades y ámbitos.

"[L]a noción de estrategia de vida es más apropiada que la de estrategia de sobrevivencia, supervivencia o subsistencia, ya que la primera incluye no sólo la connotación de contar con recursos como tierra, capital y fuerza de trabajo, sino también tiempo, información, redes sociales e identidad como recursos sociales para cualquier actividad informal.

"[P]ara entender lo informal necesariamente debemos considerar una perspectiva histórica, como parte de un largo proceso, y no simplemente como un fenómeno generado por una crisis del capitalismo mundial o de las economías capitalistas periféricas (...)" (1985, pág. 1-2).

Comentando el trabajo de Dandler, un estudioso del tema, Doria Medina (1986, pág. 25), subrayaba que "la consideración de lo informal en Bolivia es de particular atención, ya que en ciertos ámbitos de actividad, no es la actividad marginal o residual. Opuestamente, esas actividades informales son centrales en la estructura y desarrollo de la economía". Definido, pues, en las fronteras de la NPE, digamos siguiendo nuestras referencias, este universo de la "economía informal" supone toda una posible serie de actores sociales que al ir enfrentando las actuales condiciones de vida en Bolivia conformarían no sólo importantes núcleos económicos sino también esas "estrategias de vida" que suponen, pues, activas y objetivas maneras de ir tratando esta sociedad y los problemas que la aquejan, casi independientemente de las iniciativas y proyectos más oficiales o evidentes. Es claro que, por ahí, se conforman sujetos-actores que, si no se los reduce a tratamientos economicistas o sustancialistas, habrá que entenderlos, uno, haciendo uso activo de recursos culturales pre-existentes y, dos, innovando, como todo lo demuestra, el crecimiento de la "economía informal" como

"estrategia de vida" es también un sistema de soluciones frente a los actuales problemas. En el ámbito que nos ocupa, destacaríamos indirectamente que los problemas empíricos y teóricos que frecuenta el tratamiento científico de este ámbito suponen también problemas conceptuales y de perspectiva global para los discursos más evidentes y dominantes de las "culturas políticas" —valga el plural— vigentes en este escenario; caso contrario, por ejemplo, este universo social ya sería parte de su sintaxis, retórica y de sus programas y ése no es el caso.

Siguiendo un poco más este hilo —y para finalizar esta parte del trabajo—, señalaríamos que en Bolivia la "economía informal" supone fuertes vínculos con la "economía campesina", uno de cuyos componentes esenciales es esa "otra cara" de nuestra historia, como dirían X. Albó y J. Barnadas (1985), la que, ciertamente, marca definitivamente a esta sociedad y la que, en un cierto sentido, puede considerarse uno de los códigos más importantes de ese palimpsesto que sería la "economía informal". Por cierto, no es éste el lugar ni el tema para desarrollar las múltiples implicaciones del aserto precedente; sólo quisiéramos dejarlo en sus sugerencias y, para ello, retornaríamos a uno de los momentos clave ya examinados en torno de la "recuperación y defensa" de la democracia: la decisiva participación del movimiento indio en relación a la resistencia popular de noviembre de 1979. Aunque esta participación sí podemos entenderla dentro de los ámbitos de la "cultura política" examinada, donde debe, por ejemplo, explicitar sus diferencias ideológicas, es también cierto que hay que entenderla (cf. Rivera Cusicanqui 1986) entramada con esa "otra cara" de nuestra historia a la que hacemos referencia. Y quizá podemos asumir que la temporalidad de las "innovaciones políticas y culturales" que hemos examinado es todavía demasiado reducida para las reales implicaciones del tema, sus problemas y alcances.

3. Conclusiones parciales II

Al comenzar estas notas habíamos asumido la noción zavaletiana de la "crisis como conocimiento" y, por lo tanto, relativa a una "sociedad abigarrada", es decir, una diversidad donde las reducciones operatorias se muestran casi siempre impertinentes. A través de referencias, hemos intentado acompañar el diseño de este "espacio cultural", concentrado en las discursividades políticas, con las dimensiones afines a las dinámicas ideológicas, estatales y también económicas. Por supuesto, domina una versión pragmática de "cultura" como un conjunto de haceres —donde también los decires son haceres—, cuyo posible "sistema" lo hemos referido, en analogía con Bloch, a un "desarrollo desigual", concepto afín, creo, al de "sociedad abigarrada".

Bajo ese marco, la "cultura política" aquí examinada debe considerarse —y hemos frecuentado de modo consciente el término— indicativamente diseñada, es decir, como un signo que permite enmarcar una referencia pero que no se refiere directamente a ésta ni que tampoco la simboliza, o sea, que no la capta en su función derivada. Sin embargo, tampoco se trata de un fenómeno

no superficial que habría que explicar por sus determinantes más sustanciales; es parte de un entramado que no se agota, ciertamente, en esencialidades supuestas o postuladas y que, precisamente, ese entramado implica a la cultura como una variable ineludible e inevitable, la que, en nuestro caso, hemos perseguido sobre todo en su dimensión política y en torno del proceso de "recuperación y defensa" de la democracia en Bolivia. Como esperamos hayan sugerido las diversas referencias históricas, el proceso que se sigue no es tanto ni la punta de un iceberg ni la vanguardia de un avance: es una de las diversas direcciones que, de acuerdo a la perspectiva, se reconoce en este proceso social poco homogéneo.

En el período que nos ha ocupado, podemos considerar notable el cambio de una amplia hegemonía popular en el primer período de "recuperación y defensa" de la democracia hacia una tendencia a la dispersión y hasta a un cierto paralogismo frente a la sociedad, que se darían posteriormente al gobierno de la UDP. Operativamente, es cierto, esa dispersión y paralogismo en el lado popular de la "cultura política" problematiza el alcance de las organizaciones existentes y su efectividad social; pero, por otro lado, también problematiza esquemas quizá ahora insuficientes que tendían a identificar tradicionales suscripciones productivas con las políticas. Los índices electorales, por ejemplo, con todos los límites que hay que tratarlos y entenderlos, permiten destacar esa complejidad categorial, la que, vinculada con una necesaria mejor atención a la referencia social existente, tiene su lado positivo en la medida en que afinaría las discursividades dadas. Se ha intentado indicar, pues, que esa dispersión y ese paralogismo conducen hacia una valoración de la complejidad de la referencia social para esos discursos cuyos paradigmas, siguiendo una imagen de Kuhn, se muestran insuficientes —pequeños— ante sus objetos; los que, si alguna "novedad" tienen, no es ajena a las condiciones culturales previas —esos "viejos paradigmas"— que los fueron viendo anteriormente. Si los lentes deben amoldarse a los ojos para ver mejor el objeto, como sugería Proust, se podría añadir que también colaboran a su transformación.

Al examinar el desarrollo de la instauración de la democracia en 1982, habíamos concluido esa unidad destacando tres "innovaciones culturales" del período: una sustancial asunción del hecho democrático por parte del movimiento popular, la articulación del movimiento indio en el proceso político y el desplazamiento de ciertas dinámicas de ejercicio o construcción de poderes más de parte de la sociedad civil que del Estado. Las alteraciones del segundo momento examinado, luego del recorte al ejercicio de la UDP, aunque enmarcan estas dinámicas bajo un espacio social menos amplio y "entusiasta" que el anterior, no parecen haber perdido su arraigo, vigencia ni importancia en la sociedad civil, pese a ciertas regresiones opositoras, precisamente, a la discursividad dominante, la que, por su parte, trata de asimilar a su manera tales innovaciones. En todo caso, dado el escenario vigente, habrá que ir diseñando el mapa de estas reformulaciones.

El escenario actual lo hemos tratado de sugerir, bajo la dominante económica en vigencia, como un "país más pequeño", entendido y tratado *more empresarial*, cuyo dictamen más certero vendrá, dado el código, por el

lado de los análisis estatal y económico del proyecto. Sin embargo, señalando sus fronteras nos pareció importante destacar, rápida y brevemente, las implicaciones afines a la "economía informal" cuyo modelo de tratamiento como "estrategia de vida" no sólo implica nueva atención a variables culturales cuyo peso histórico conviene tener en cuenta sino que se acerca, precisamente, a esa innovación antes mencionada que, formulada como paralogismo, supone la necesidad de no reducir las complejidades propias a esta "sociedad abigarrada".

Ya al finalizar estas notas, quisiéramos señalar dos aspectos —uno relativo al alcance de las "innovaciones" del primer momento y, otro, sobre las variables históricas— que pueden considerarse parte del marco de referencia para el estudio o postulado de tendencias futuras de la "cultura política" y su espectro relativo.

En el proceso examinado, si asumiéramos, por ejemplo, la perspectiva de la CEPB complementada por las de las FF.AA., tal como se manifestaron en torno de los fines del gobierno udepista: el primer período de instauración de la democracia vendría marcado por un alto grado de caos, desorden (dominado por el "anarcosindicalismo", como suelen decir), mientras que el siguiente significaría un mayor grado de orden y coherencia sociales. Al respecto, quizá la diferencia entre la espiral inflacionaria del período udepista y el control de la misma que luego se ejercita ilustra bien esa perspectiva. Sin negar el valor de esa nueva situación económica y sus alcances, por ejemplo, en términos de estabilidad, planificación y, quizá, de control y dominio, el contraste no sería tan evidente en términos culturales. Si nos referimos a la descripción del proceso de instauración de la democracia, parece, por lo visto, que situaciones "caóticas" como aquella dicen más de lo social y quizá hacen más por ello porque abarcarían más (¿y mejor?) este tipo de sociedad que otras situaciones más ordenadas y tecnocratizadas como sucede con ese "país más pequeño" actualmente en vigencia. En otras palabras, podríamos asumir que los procesos informes suelen manejar simultáneamente varias variables propias a una sociedad dada y que no es necesario entender su multiplicidad como una falta de rigor; por lo menos, en este caso, hasta la instauración de la democracia, esa diversidad se mostró eficiente. Ciertamente, siempre queda el interrogante de por qué esos procesos se quedan "por ahí", delegan el ejercicio estatal del poder logrado, y los diversos sujetos-actores implicados retornan a sus más tradicionales lugares a veces para comprobar que el proceso de desarrollo había inutilizado en su camino las articulaciones que les sirvieron de arranque. Aun suponiendo que el período udepista todavía operó con muchas de las variables puestas-en-scena en el proceso precedente, su caída signó, ciertamente, la dispersión y el paralogismo señalados. Ese resultado puede ser entendido —por lo menos en sus rasgos más notables— en términos de la crisis del Estado del 52, pero, junto a las inercias y regresiones ahí implicadas, habría que tener en cuenta las "innovaciones" que entonces se explicitaron y, aunque en términos de poder y beneficios objetivos no lograran traducirse en transformaciones sociales evidentes, parece aceptable asumir que por allí se explicitaría un conocimiento crítico de esta sociedad, no *por* conocimiento poco importante.

Complementariamente, se han señalado y destacado dimensiones históricas relativas al proceso examinado. Al respecto, en estos casos la historia se entiende menos como una determinante que como un componente cultural (cognoscitivo), afín a lo que Zavaleta Mercado llamaría la "acumulación en el seno" de las masas, o sea, parte de las condiciones subjetivas que acompañan las condiciones materiales y que, a su manera, también suponen límites y posibilidades objetivos. En ese sentido, se tiende a indicar una más fina atención a las diacronías no siempre uniformes e integradas en homogeneidad que operarían en el "espacio cultural" boliviano, como los movimientos indios y regionales permiten señalar.

Intentando, pues, proponer un leve modelo de lo examinado, destacaríamos el contraste entre una percepción y administración de la sociedad boliviana que vía reducciones —no necesariamente arbitrarias— enfrenta los actuales problemas y circunstancias, y otra que logró la instauración de la democracia, menos eficiente en lo inmediato, pero quizá más atenta a las pluralidades sociales en juego. Las "innovaciones" logradas en esta cultura política, en el intenso proceso social que iría de 1977 a 1982, no habrían perdido su pertinencia y arraigo pero estarían reformuladas en un escenario menos amplio (y "entusiasta") y, por el lado de la acción organizada, estarían articuladas con la crisis y reforma del Estado previo. Junto con los evidentes ejercicios de poder que implica, la "democracia institucional" sería indicativa de las transformaciones o reconstituciones de los sujetos-actores sociales en el actual panorama boliviano.

Notas

¹ Al examinar los diversos contextos de uso de la noción "acumulación en el seno de la clase" en la obra de R. Zavaleta Mercado, J. Lazarte propuso entenderla como el intento teórico de pensar la "historia subjetiva de la clase", es decir, siguiendo una veta de Luckacs, pensar los grados de conciencia de una clase en una formación abigarrada, teniendo en cuenta su lugar en la estructura productiva, por un lado, y, por otro, su suceder en la historia. O sea, en otras palabras, se trataría de la "memoria" de una clase en una determinada formación social, la boliviana, en este caso. (Ese análisis lo desarrolló J. Lazarte en el seminario dedicado a "El pensamiento de René Zavaleta Mercado", CISO-PORTALES, Cochabamba, 24-26/II/1988). El desplazamiento hacia una posible "historia subjetiva" de la masa no sería del todo arbitrario teniendo en cuenta la relación que establece R. Zavaleta Mercado entre "clase" y "masa" cuando discute, por ejemplo, los "Cuatro conceptos de la democracia" (1983) (sobre todo, págs. 110 y ss.).

² Para una detallada historia —sea militante— del katarismo y sus alcances, cf. Hurtado (1986). Su conclusión refleja, para el período que nos ocupa, las posibilidades que se perfilaban en la rearticulación del movimiento campesino en/con la COB; dice Hurtado: "La reincorporación del campesinado a la COB, llevando su tradición cultural, sus formas de organización y carácter autogestionario, fortalece en la COB la recuperación del carácter de organismo de poder popular que ésta tuvo durante los primeros meses de 1952 y los períodos de crisis políticas como durante los golpes militares en que asume el papel de dirección política. La COB es la matriz del factor subjetivo en Bolivia y se puede afirmar que estas luchas han generado un embrión de estado popular para la transición hacia otro tipo de sociedad. La katarización de la COB nos alum-

bra la posibilidad de construir en el futuro un socialismo andino" (249). Por otra parte, la "Bibliografía" utilizada por J. Hurtado ofrece un amplio y apropiado panorama sobre el tema.

³ En su trabajo "Movimiento regional cruceño": aproximación e hipótesis, C. Flores (1985) ofrece una relativamente breve pero apropiada caracterización de este movimiento regional, el más notable del país en las últimas décadas. En un cierto sentido, es hegemónico para el resto, pues las otras regiones siguen, por así decir, sus paradigmas. Para el período que nos ocupa, una cierta versión "oficial" del papel del movimiento regional cruceño puede leerse, por ejemplo, en Landívar (1987), donde la última frase del texto relativa a la necesidad de una descentralización administrativa del país es ilustrativa de la "voluntad social" (digamos) que se juega: "Bolivia debe seguir nuestro ejemplo", termina enfáticamente J. Landívar (1987, pág. 372). Para una más amplia perspectiva sobre los diversos movimientos regionales en Bolivia, cf. un seminario al respecto (Calderon y Laserna (comps.), 1983) y un panorama más reciente en Flores y Laserna (1985).

⁴ En un modelo que busca interpretar "la inestabilidad política en Bolivia (1952-1980)", J. A. P. Lavaud (1985) propone, además del "juego de báscula" entre la FSTMB y las FF.AA. (proceso que, en nuestros términos, se jugaría a nivel estatal), un segundo eje que opone a las regiones de Santa Cruz y La Paz (proceso que, en nuestra perspectiva, indicaría de poderes a nivel de la sociedad civil). En lo que nos ocupa, el modelo propuesto por Lavaud ayuda a ilustrar cómo ciertas suscripciones a los partidos de poder estatal, en este caso la del movimiento regional cruceño, alterarían su relación con el Estado y suscribirán, finalmente, el proceso democrático. En este cambio (dicho sea de paso para redondear los múltiples factores en juego), el movimiento regional cruceño se embarcará en el proceso de "recuperación y defensa" de la democracia reconociendo sus intereses locales mejor cuidados en esa perspectiva —y no sería inverosímil agregar que ante ese hecho la ADN también intensifica su compromiso—. La oposición declarada del movimiento regional cruceño se da cuando el gobierno de García Meza firma (el 14-VII-1981) el decreto que autoriza la construcción de la refinería de San Buenaventura en el departamento de La Paz. Al día siguiente, anota Lavaud, "todo el departamento está en huelga, paralizado por una población unánime que vincula estrechamente la lucha por los intereses departamentales con la lucha por la democracia" (1985, pág. 54). Este "tardío" apoyo no será, sin embargo, pasajero; la identificación entre los intereses regionales y democráticos puede considerarse, desde entonces, constante.

⁵ Esta posible diferenciación entre un "país más grande", el de la UDP, y uno "más pequeño", el del MNR y el "Pacto por la democracia", nos trae, comparativamente, a la memoria los trabajos de A. Mitre, *El monedero de los Andes* (1986) y *Los patriarcas de la plata* (1981), los que leídos en esa sucesión nos muestran, por un lado, un primer Estado boliviano quizá disperso, tal vez más articulado, pero ciertamente más pequeño (el de la oligarquía de la plata). En su ensayo "Espacio regional andino y política en el siglo XX" (1982), Mitre terminaba así su trabajo proponiendo una comparación sobre ambos Estados: "en resumen, el conocimiento, todavía superficial, del período oligárquico nos deja la fuerte impresión de un Estado poco unificador, distante cada vez más del país rural y con una presencia administrativa, jurídica y militar restringida a un espacio social y geográfico considerablemente menor a aquél sobre el cual se proyecte el Estado de la fase proteccionista" (1982, pág. 75). Con todas las distancias del caso, el paralelo que proponemos nos parece útil para comprender lo que sucede en el tránsito estatal de estos últimos años.

⁶ Ciertamente, la más estudiada de las dimensiones afines a la "economía informal" es la relativa a la producción de la coca en Bolivia y sus vínculos con el narcotráfico (cf., para una visión de conjunto, por ejemplo, Aguilo 1987). Esa problemática además de lo que implica toca una completa forma de "estrategia de vida" o de "sobrevivencia", que ha motivado significativos desplazamientos poblacionales, sobre todo al Chapare, configurando todo un universo donde lo delictivo y lo cotidiano, lo "formal" y lo "infor-

mal" entremezclan permanentemente sus términos, tiene también aspectos que tocan las matrices organizativas del país y de allí que no sea nada marginal a los procesos que hemos ido examinando. Ahí no sólo se involucran las unidades organizativas como el gobierno, el que debe, a la vez, enfrentar el narcotráfico y "racionalizar" de alguna manera el peso económico que esta producción y derivación suponen —y además, en las actuales condiciones críticas—, sino también las organizaciones sindicales de base y, ciertamente, la COB. Sólo indicando algunos nudos, señalaríamos, por ejemplo, el carácter ilustrativo que tiene, para apuntar hacia las complejas negociaciones y mediaciones que entran en el juego social en torno de este nudo económico, el convenio suscrito en 1987 por las Federaciones Campesinas de Productores de Coca —nótese la especificidad—, el Gobierno y la COB (cf., "Anexo" en *Debate Agrario* 11, 1988, págs. 79-83). Como es fácilmente inferible, estos actores sociales suponen una discursividad multifacética donde la cultura, aun en sus formas más retóricas, tiene su parte (no poco de las movilizaciones para no caracterizar a la planta de la coca como droga se apoyan, precisamente, en sus usos tradicionales, como el pijchado y su papel en los rituales y medicina nativos); ni qué decir de la "cultura política" en juego que entrama dimensiones gremiales, locales, nacionales y, por supuesto, internacionales. Una vez más, indicando simplemente nudos relativos a nuestro tema, destacaríamos un texto que al caracterizar el amplio problema implicado en esta producción y derivación de la coca, enfatiza sus vínculos con la práctica democrática. El Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales (ILDIS) al resumir —muy apropiadamente, dicho sea de paso— el debate del X Debate Agrario (25-VII-1987), concluye: "Bolivia debe, en el plano internacional, debatir y negociar en cuantas oportunidades se presenten los términos de equidad en los cuales comprometer su participación en la solución de un problema de nuestro tiempo. Y en el plano nacional, debe romper el círculo estrecho de negociación gobierno-campesinos, para abrirlo a la participación del conjunto de la sociedad civil, que tiene el derecho y el deber de no permitir que se enmascare detrás de una región o un sector productivo la gravedad de una situación que la afecta y en cuya solución debe participar activamente. ¿No es éste el contenido de la Democracia?" (*Debate Agrario* 10, 1987, pág. 70). Como se ve el nudo es intenso y la democracia no le es ajena, ni qué hablar de las posturas antiestatales y anti-imperialistas que ahí se entrecruzan. En todo caso, nos interesa señalar las diversas aristas del asunto, que son parte de los recodos de la "cultura política".

Bibliografía

- Aguilo, Federico, "El complejo coca-cocaína", en *Economía y Sociedad*, suplemento de *Opinión*, Cochabamba, 1987, 26-VII, págs. 4-8.
- Albó, Xavier, "El proyecto campesino de Estado y sociedad en Bolivia", en MBL (comps.), págs. 299-342, 1987.
- Albó, Xavier, "Zonificación rural de Cochabamba". Ponencia presentada al I encuentro Regional de Estudios Bolivianos-Cochabamba, 17-20-XI, 1987a.
- Albó, Xavier y Barnadas, Josep M., *La cara campesina de nuestra historia*, UNITAS, La Paz, 1987.
- Almaraz, Sergio, *El poder y la calda*, Los Amigos del Libro, Cochabamba-La Paz, 1976 3.
- Almaraz, Sergio, *Requiem para una República*, Los amigos del Libro, Cochabamba-La Paz, 1988 4.
- Antezana, Luis H., "Sistema y proceso ideológico en Bolivia (1935-1979)", en Zavaleta Mercado (comp.), págs. 60-84, 1983.

- Barrios Morón, Raúl, "Fuerzas Armadas y democracia en Bolivia", en MBL (comps.), págs. 109-132, 1987.
- Bloch, Ernst, "Efectos políticos del desarrollo desigual", en Lenk (comp.), págs. 109-118, 1982 2.
- Calderón, Fernando y Laserna, Roberto (comps.), *El poder de las regiones*, CERES, Cochabamba, 1983.
- Calla, Ricardo, "La encrucijada de la COB: Temas del movimiento obrero boliviano en la coyuntura democrática (1982)", en Laserna (comp.), págs. 65-128, 1985.
- Calla, Ricardo, *La derrota de Lechín*, Ediciones Tigre de Papel, La Paz, 1986.
- Cárdenas, Víctor Hugo, "La CSUTCB. Elementos para entender su crisis de crecimiento", en FLACSO-ILDIS (comps.), págs. 223-248, 1987.
- CEDOIN, *La educación en crisis y crisis de la educación*, CATEP, La Paz, 1987.
- CIDOB (Central de Pueblos y comunidades Indígenas del Oriente Boliviano), "El CIDOB", en *Economía y Sociedad*, suplemento de *Opinión*, Cochabamba, 20-XI, págs. 7-8, 1986.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe, *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe*, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1987.
- Dandler, Jorge, "Apuntes generales sobre 'economía' informal y su importancia en Bolivia". Presentado en el seminario "Desempleo, trabajo y sectores invisibles", La Serena, 22-30-IV, CEPUR-Fundación Hammarskjöld, 1985.
- De Urioste, Rodrigo, "La crisis universitaria: Colapso o renovación", en *Cambio* 1, agosto, pág. 7-8, 1988.
- Doria Medina, Samuel, *La economía informal en Bolivia*, La Paz, 1986.
- FLACSO-ILDIS (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales) (comps.), *Crisis del sindicalismo en Bolivia*, FLACSO-ILDIS, La Paz, 1987.
- Flores, Gonzalo, "El movimiento regional cruceño: aproximación e hipótesis", en Laserna (comp.), págs. 253-289, 1985.
- Flores, Gonzalo y Laserna, Roberto, "Movimientos regionales en Bolivia", en *Caravelle* 44, Toulouse, págs. 59-76, 1985.
- Francovich, Guillermo, *El pensamiento boliviano en el siglo XX*, Fondo de Cultura Económica, México, 1956.
- Gumucio Dagrón, Alfonso, *Historia del cine en Bolivia*, Los Amigos del Libro, La Paz-Cochabamba, 1982.
- Harvey, Edwin R. (comp.), *Legislación cultural andina. Tomo II-Bolivia*, SECAB-UNESCO-FIPC, Bogotá, 1981.
- Hurtado, Javier, *El Katarismo*, HISBOL, La Paz, 1986.
- ILDIS (Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales) (comps.), "La economía campesina y el cultivo de la coca", en *Debate Agrario* 10, La Paz, 1987.
- ILDIS, "La economía campesina y el cultivo de la coca-II", en *Debate Agrario* 11, La Paz, 1988.
- Illanes, Fernando, "Política de concertación de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia", en R. A. Mayorga (comp.), págs. 297-315, 1987.
- Iriarte, Gregorio, "Análisis de la realidad boliviana: Aspectos sociales", en *Esquemas para la interpretación de la realidad*, 4, SENPA, La Paz, 1985.
- Koyre, Alexandre, *Du monde clos à l'univers infini*, Gallimard, París, 1973.
- Landívar, Jorge, "El movimiento regional cruceño, descentralización administrativa

y participación social", en R. A. Mayorga (comp.), págs. 355-372, 1987.

Laserna, Roberto, *Espacio y sociedad regional*, CERES, Cochabamba, 1984.

Lavaud, Jean-Pierre, "Pour une interprétation de l'instabilité politique de Bolivie (1952-1980)", en *Caravelle* 44, Toulouse, págs. 39-58, 1985.

Lazarte, Jorge, "El movimiento obrero: crisis y opción de futuro de la COB", en FLACSO-ILDIS (comps.), págs. 251-291, 1987.

Lenk, Kurt (comp.), *El concepto de ideología*, Amorrortu, Buenos Aires, 1982 2.

López Vigil, José Ignacio, *Radio Pío XII: Una mina de coraje*, ALER, Quito, 1986 2.

Malloy, James M., *The uncompleted revolution*, University of Pittsburgh, Pittsburgh, 1970.

Malloy, James M., "Bolivia: el triste y corrompido final de la revolución (1952-1978)", en *Historia Boliviana* 11/2, Cochabamba, págs. 141-152, 1982.

Mayorga, Fernando, "La crisis del discurso del nacionalismo revolucionario", en MBL (comps.), págs. 221-247, 1987.

Mayorga, René Antonio, "Movimientos sociales y sistema político: la crisis del sistema democrático y la COB", en Laserna (comp.), págs. 25-64, 1985.

Mayorga, René A., "Crisis del Estado y democracia", en R. A. Mayorga (comp.), págs. 129-159, 1987.

Mayorga, René A., "Las paradojas e insuficiencias de la modernización y democratización", CERES, La Paz, 1987a. Trabajo mimeografiado.

Mayorga, René Antonio, *Democracia a la deriva*, CLACSO-CERES, La Paz, 1987.

MBL (Movimiento Bolivia Libre) (comps.), *Repensando el país*, MBL, La Paz, 1987.

Medina, Javier, "Epílogo del editor: Lechín mediador", en *Calla*, págs. 51-58, 1986.

Mitre, Antonio, *Los patriarcas de la plata*, IEP, Lima, 1981.

Mitre, Antonio, "Espacio regional andino y política en el siglo XIX", en *Historia Boliviana* 11/2, Cochabamba, págs. 165-177, 1982.

Mitre, Antonio, *El monedero de los Andes*, HISBOL, La Paz, 1986.

Muller y Machicado (comps.), *El diálogo para la democracia*, Muller & Machicado, La Paz, 1987.

Percy, Walker, *The Message in the Bottle: How Queer Man is, How Queer Language is and What One Has To Do with the Other*, Farrar, Straus & Giroux, New York, 1978.

Puente, Rafael, "La Federación Única, ¿ya no es única?", en *Economía y Sociedad*, suplemento de *Opinión*, Cochabamba, 29-VII, pág. 4, 1987.

Puente, Rafael, "La Federación Única, ¿ya no es única? - II", en *Economía y Sociedad*, suplemento de *Opinión*, Cochabamba, 29-VII, pág. 4, 1987a.

Rivadeneira Prada, Raúl, *Resistencia y coexistencia*, Gisbert, La Paz, 1982.

Rivadeneira Prada, R., *El laberinto político de Bolivia*, CINCO, La Paz, 1984.

Rivadeneira Prada, Raúl y Tirado, Nazario, *La televisión en Bolivia*, Quipus, La Paz, 1986.

Rivera, Alberto, "La vivienda en economías informales de Cochabamba", CERES, Cochabamba, 1988. Trabajo mimeografiado.

Rivera Cusicanqui, Silvia, "El movimiento sindical campesino en la coyuntura democrática", en Laserna (comp.), págs. 243-280, 1985.

Rivera Cusicanqui, S., *Oprimidos pero no vencidos*, UNRISD, Ginebra, 1986 2.

Rivera Cusicanqui, S., "Autonomía y dependencia en el movimiento campesino contemporáneo: la CSUTCB y el proceso democrático", en R. A. Mayorga (comp.), págs. 243-280, 1987.

Roa Bastos, Augusto (comp.), *Las culturas condenadas*, Siglo XXI, México, 1987 3.

Roca, José Luis, "Observaciones en torno a la cuestión regional", en Calderón y Laserna (comps.), págs. 43-52, 1983.

Rodríguez, Alberto, "Una etapa de subutilización de la autonomía universitaria", en *Cambio* 1, agosto, págs. 11-13, 1988.

Romero, Salvador, "Cultura política y concertación social", en R. A. Mayorga (comp.), págs. 161-176, 1987.

Subirats Ferreres, José, *Análisis de la educación popular en Bolivia desde 1952*, CEBIAE, La Paz, 1984.

Zavaleta Mercado, René, *La masa en noviembre*, Juventud, La Paz, 1983.

Zavaleta Mercado, R., *Lo nacional-popular en Bolivia*, Siglo XXI, México, 1986.

Zavaleta Mercado, R., *Escritos sociológicos y políticos*, Taller de Estudios Sociales "René Zavaleta Mercado", Cochabamba, 1986 a.

Zavaleta Mercado, René (comp.), *Bolivia hoy*, Siglo XXI, México, 1983.

Las políticas culturales en Guatemala*

Arturo Arias**

I. Introducción: de 1944 a 1980

A. *Las relaciones entre Estado, sociedad y cultura durante el período 1944-1954*

El período 1944-1954 fue el único efectivamente democrático de Guatemala. En él se iniciaron una serie de transformaciones que fueron posteriormente truncas con la invasión que sufrió el país en junio de 1954.

Este período histórico, sin embargo, define mucho de lo que el país va a vivir posteriormente como experiencia política y cultural, y continúa en buena medida marcando las pautas de las aspiraciones populares en cuanto a programas económicos, políticos y culturales. De allí la necesidad de empezar una reflexión sobre las políticas culturales de los años ochenta con un balance —por sumario que sea— de lo que representó culturalmente la década bautizada por el escritor Manuel Galich como los "diez años de primavera en el país de la eterna tiranía".

Fundamentalmente, las dos fuerzas principales que impulsaron el proyecto de 1944 estaban constituidas por maestros de escuelas secundarias y estudiantes tanto de escuelas secundarias como de la Universidad. Dada la naturaleza de ambos sectores, y su composición social, ellos en forma inmediata llevan a cabo un serie de demandas, de naturaleza cultural, que van a buscar implementar en los programas de trabajo del período 1944-54.

* Investigación realizada en los marcos del Proyecto PNUD-UNESCO-CLACSO, RLA 86/001, Ciencias sociales, crisis y requerimientos de nuevos paradigmas en la relación Estado/Sociedad/Economía.

** Investigador del Programa Centroamericano de Ciencias Sociales (CSUCA), San José, Costa Rica

Además, eligen a un presidente, Juan José Arévalo, que es maestro y teórico en pedagogía.

A este respecto, Angela Delli Sante nos dice: "Juan José Arévalo no era político cuando llegó a la presidencia, ni eran definidas sus ideas políticas: era humanista, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, Argentina. Era profesor en la Universidad de Tucumán, Argentina, cuando fue llamado de la Nación en 1945, con el apoyo de la juventud del país y de las masas populares".¹

Por extensión, Arévalo creía que la educación era la solución para casi todos los problemas políticos y, en buena medida, sus planes de gobierno son, casi en sí, una gran política cultural.²

Es importante hacer notar que la pobreza cultural del país en ese período era patente, después de dos largas dictaduras (Manuel Estrada Cabrera, 1899-1920 y Jorge Ubico, 1930-1944) en que se habían hecho incontables esfuerzos por mantener al país aislado del mundo y la vida cultural de todo tipo se la tuvo bajo estricto control de la seguridad del Estado. Es en referencia a esta marginación de los grandes eventos históricos y sociales de este siglo que el gran poeta Luis Cardoza y Aragón afirma que el país "entra al siglo XX en 1944". El escritor Manuel Galich recuerda que sólo las revistas norteamericanas *Life* en español y *Selecciones* del Reader's Digest podían circular libremente en el país.³

Arévalo había vivido su exilio en la Argentina. Pero el resto de jóvenes dirigentes de aquel entonces lo había hecho en México. Por lo tanto, estaban muy marcados por la influencia mexicana, sobre todo la del período cardenista entonces recién concluido. Por lo tanto, mucho de lo que se busca implementar en Guatemala en ese momento es copia, hasta cierto punto, de lo que ha acontecido en México en el período inmediatamente anterior. Incluso se invita a mucha de la gente que estuvo activa en México a visitar Guatemala, desde dirigentes sindicales como Vicente Lombardo Toledano hasta escritores y artistas.

En este período se llevaron a cabo una serie de iniciativas de naturaleza cultural tales como la creación de la autonomía universitaria que hasta entonces se logra, la creación de la facultad de Humanidades, el impulso a las artes tradicionales, literatura, pintura, etc. Se llega a la creación de la orquesta sinfónica nacional y se impulsa el muralismo y se desarrollan las artes plásticas que, en Guatemala, con la excepción de Carlos Mérida y Rina Lazo, no habían tenido un incentivo muy fuerte.

Según Carlos Illescas, el período inmediatamente anterior a 1944 había sido muy pobre en cuanto a la plástica porque "la pintura estaba condicionada por los gustos oficiales (...) Estaban unos señores que practicaron un realismo jicarero, como les diría Cardoza, mi maestro: regionalismo, gigantismo, quietismo. Todo esto contribuía a no apreciar la plástica más que desde un punto de vista de realismo fotográfico".⁴ En este período van a surgir los más grandes pintores que ha tenido el país fuera de los ya mencionados. A su vez, se va a iniciar toda una tradición de la pintura que continúa, y que va incluso a desembocar en escuelas de pintura indígena ya

hacia fines de los años sesenta, tales como las escuelas de Comalapa y de Santiago Atitlán.

En la literatura también hubo mucho impulso. En aquellos años un grupo de jóvenes, que siendo jóvenes escritores ya están en posiciones de poder en el gobierno de Arévalo, impulsan toda una política literaria a la vez que producen revistas. En el campo literario se crean la colección "15 de septiembre" y el premio del mismo nombre, fecha de la independencia de Centroamérica, así como el grupo Saker-Ti (Amanecer en cakchiquel), frecuentado por escritores, pintores, músicos, etc., que en aquel entonces trabajaba de manera bastante cercana a lo que fue el realismo socialista pero con algunas variantes importantes. De hecho, este grupo defendía un arte "nacional, democrático y realista" que era, en pocas palabras, una ensalada de las propuestas de Zhdanov mezcladas con ideas maofistas a ese respecto. Desde esta óptica, acusaban a Cardoza y Aragón de "surrealistas" por defender también las expresiones que nacen de la imaginación, de la sensualidad y de la sensibilidad.

A pesar de lo anterior, varios de ellos tuvieron contacto y relaciones con Luis Cardoza y Aragón. Este último ejerció un papel decisivo, aunque no siempre reconocido, como autoridad moral y política para evitar que se cayera en los extremos que los planteamientos del grupo *Saker-Ti* señalaban para la cultura guatemalteca.

Cardoza y Aragón dirigió en esas fechas la célebre *Revista de Guatemala* así como la Casa de la Cultura Guatemalteca donde, incidentalmente, el Che Guevara durmió algunas noches a su llegada al país a principios de los cincuenta. Sin embargo, a pesar de todo fueron años difíciles para los innovadores culturales. Cardoza mismo lo ha descrito así en sus memorias: "En el consejo de *Revista de Guatemala*, Antonio Goubaud Carrera, en ese momento nuestro único antropólogo, graduado en la Universidad de Illinois. Era conservador; por ello, lo necesitaba con el fin de reunir todas las voces cultas (...) Así, los varios nombres más, con el afán de ir adelante, modestamente, con crítica y calidad (...) La devoción por la cultura de Alfonso Reyes hubiese parecido la de un lanzador de bombas (...) No conseguía siquiera apartamiento. Los casatenientes, luego de aceptar sus requisitos, al oír mi nombre inventaban alguna excusa y se persignaban (...) Terminamos en una pocilga".⁵

El impulso fundamental de aquel período fue, sin embargo, la educación pública. Fiel a su posición, Arévalo veía la solución a todos los problemas en la educación. Elevando el nivel de educación y haciéndola accesible a los medios rurales, decía, el indio podría "integrarse" a la cultura nacional. Así, se crean en esa época un sinnúmero de escuelas públicas, de escuelas rurales y se implementan las reglas según las cuales los maestros al graduarse de la escuela normal tienen que hacer servicio en las escuelas rurales antes de poder optar para escuelas en la ciudad. Se crea también el escalafón magisterial, una de las reivindicaciones principales de los maestros.

Los patrones culturales en buena medida retoman la experiencia educativa mexicana. Hubo mucha influencia de lo que fueron los programas de

los años 20 en aquel país, traducidos al ámbito guatemalteco. Se adaptaron textos para el nivel primario, se recrearon muchos de los programas ya probados en la experiencia del vecino país. Además, se inició el proceso de creación de textos escolares, porque no existían textos guatemaltecos hasta 1944. Todos los textos se importaban principalmente de Cuba, secundariamente de la Argentina, pero no existían textos de historia guatemalteca a nivel primario. Y esto pasa a ser el énfasis del nuevo período.

Otro fenómeno que se da en estos años es el de la democratización de la radio. Hasta ese entonces en Guatemala existía una sola radiodifusora que era la TGW, radio nacional de Guatemala. TGW continúa existiendo hasta la fecha y aún es la única radiodifusora nacional. Sin embargo, en aquel momento se posibilita la ampliación de la radiodifusión y tanto la iniciativa privada como algunos sectores populares crean sus propias radios. A partir de entonces se inicia un proceso de multiplicación de las radiodifusoras que siguen siendo hasta la fecha un factor fundamental en el país.

En el período 1944-1945 se hicieron esfuerzos porque muchas de estas radiodifusoras estuvieran en manos de sectores tales como sindicatos, obreros, campesinos, etc. Posteriormente a la caída del gobierno en 1954 todas se acumularon en manos del sector privado.⁶

El movimiento 1944-1945 fue eminentemente ladino. Por ladino llamamos en Guatemala al mestizo. Y, desde ese ángulo, la visión que se tiene de Guatemala del nacionalismo que se quiere impulsar y de cómo se articulan programas educativos, radiales, etc., tiene como meta la ladinización. En la experiencia guatemalteca se retoman muchos de los planteamientos formulados hacia fines de los años treinta por el antropólogo mexicano Gonzalo Aguirre Beltrán. La formulación es que se define el problema indígena tomando en consideración una serie de diferencias culturales que distinguen a los indígenas del resto de la población. Tales diferencias conforman un problema en tanto que representan obstáculos para su integración en la cultura nacional, que es la que identifica precisamente a ese "resto de la población" de carácter ladino.

Esa misma fórmula se siguió en Guatemala durante aquel período. Arévalo nunca salió del mito de que la situación del indio era ante todo "un problema de cultura", eco del indigenismo institucionalizado de México, tal y como lo plantearon ideólogos como Alfonso Caso. En Guatemala se dijo en aquellos años que las culturas indígenas son resabios del pre-capitalismo y como el país ha entrado a una etapa en que se va a pasar a construir un Estado capitalista, nacionalista e independiente —como decían los postulados de la época—, entonces se requiere la liquidación de esos resabios pre-capitalistas en aras de crear un Estado nacional, una cultura nacional. Como consecuencia de lo anterior, aunque no hay hostigamiento de ninguna índole en contra de los grupos étnicos, tampoco se les toma en cuenta. Están al margen del proceso.

Guatemala, además, está casi dividida. La capital está en el centro. Todo el oriente es ladino, todo el occidente es indígena. Entonces el proceso en marcha —la reforma agraria, mejoras educativas, salud pública,

etc.— se vive principalmente en la parte ladina del país, y especialmente en la costa del Pacífico, donde se encuentra ubicada el área para la agroexportación (algodón, caña, café) y donde operan los principales sindicatos campesinos.

En esa zona se vive el proceso revolucionario. Allí es donde surgen los comités agrarios locales que se transformaron prácticamente en un nuevo poder local y que condujeron a la oligarquía hacia la contrarrevolución. Fue allí también donde surgieron casas de la cultura campesina vinculadas a esos comités agrarios locales. Estas casas cumplieron funciones elementales de naturaleza cultural: acogieron artistas que realizaron giras por el interior del país, pequeñas exposiciones plásticas, estimularon la alfabetización, fomentaron la enseñanza de la historia nacional en lugares donde no existían escuelas. Pero los indígenas se quedaron al margen de estos beneficios, aun cuando esto los salvó de la represión cuando entró la contrarrevolución triunfante en 1954.

B. Del nacionalismo cultural al Mercado Común Centroamericano

La contrarrevolución en el poder buscó hacer tábula rasa con casi todos los logros que se tuvieron en el período 1944-1954. Sin embargo, muy pronto se vio claro para el nuevo sector dominante que era imposible hechar atrás el calendario y volver a los tiempos anteriores a 1944.

A pesar de esto, nunca se viabilizó una verdadera política cultural, más bien se repondió a fenómenos que tenía que confrontar por la naturaleza misma de la situación heredada, lo que los estadounidenses llaman un *first come-first serve basis*.

Su política cultural consistió entonces en neutralizar políticamente algunas cuestiones, tratar de ganarse otros sectores, y tolerar hasta cierto punto —en medio de un régimen bastante represivo—, ciertas expresiones opositoras.

Uno de los objetivos principales del nuevo gobierno que entra en 1954 es el de neutralizar o ganarse al sector magisterial. Para esto le ofrece toda una serie de prebendas que incluyen la creación de la "colonia del maestro", donde se reparten casas a los maestros a un costo muy bajo. Esta era una de las reivindicaciones que traía el magisterio desde antes de la caída del gobierno anterior. Por problemas burocráticos y presupuestales, la creación de la "colonia del maestro" no se oficializó sino hasta 1959 y las primeras casas se entregaron en 1962.

Sin embargo, se cambian los programas educativos, quitándoles su contenido marcadamente nacionalista. Este último paso se hace con una fuerte asesoría norteamericana en términos de programas educativos. Se crea el Servicio Cooperativo Interamericano de Educación (SCIDE) financiado por los Estados Unidos, y con un director estadounidense. Este centro crea nuevos programas de estudio así como las "escuelas laboratorio" que son las primeras escuelas públicas que empiezan a incorporar los nuevos programas. Se inician, a la vez, intercambios con los Estados Unidos. Los

maestros comienzan a tener becas para ir a dicho país, para aprender inglés y para implementar la educación bilingüe (inglés/español) en Guatemala.

Asimismo, se inicia un abandono sistemático (que llegará a niveles alarmantes hacia los años setenta) de la educación rural. Cada vez más el énfasis se pone en la educación urbana, en las escuelas urbanas y en neutralizar al sector del magisterio urbano con pequeñas prebendas. Incluso, los nuevos maestros de la escuela normal ya no tienen como obligación el dar servicio en el área rural, sino que pueden quedarse desde un principio en la capital. Esto generaliza el divorcio entre el sistema educativo urbano y rural, además de contribuir a ahondar las diferencias tan marcadas entre el campo y la ciudad, entre la cultura ladina y la indígena.

Por otro lado, se tolera que la universidad vaya a continuar siendo un centro de la oposición e incluso de posiciones revolucionarias, y se respeta su autonomía. En aquel primer momento se le mantiene, además, el presupuesto que establecía la constitución de 1945: el uno por ciento del presupuesto nacional.⁷

La universidad se vuelve un bastión de la izquierda en todo sentido. Principalmente, en el período de fines de los cincuenta en que no existe otro espacio de oposición política. Posteriormente, se convierte en espacio de reclutamiento y de formación de cuadros para la izquierda revolucionaria.

El Estado respeta el espacio físico del campus y la autonomía universitaria, pero sus publicaciones o cualquier otra iniciativa cultural que hagan fuera del campus es sistemáticamente agredida u hostigada para impedir su circulación entre las masas.

En los años cincuenta, la universidad hace la única política cultural en el sentido de crear revistas literarias, buscar galerías para exposiciones de obras plásticas, empezar a conformar los primeros grupos musicales populares.

Algunas de las expresiones de la cultura de élite, tales como la orquesta sinfónica, que habían sido creadas en el período anterior se mantienen e incluso se les da más apoyo. Pero todo lo que tenía dimensión popular, desde las ediciones masivas de libros por parte del Ministerio de Educación hasta las casas de la cultura campesina, es liquidado, incluso violentamente.⁸

Igualmente, las radiodifusoras que estaban en manos de sindicatos, gremios, etc., fueron recuperadas por el Estado y luego se vendieron en licitación pública para que las adquiriera el sector privado. Esto generó un enorme y rápido desarrollo de la radio hacia fines de los años cincuenta, pero ya en manos privadas. Los sectores populares no volverían a tener acceso a la radio sino hasta la segunda mitad de los años setenta, y generalmente con el apoyo del ala progresista de la iglesia católica.

Se crea también la televisión guatemalteca, privada, a partir de 1956. Desde un primer momento estuvo vinculada a la producción de programas enlatados de los Estados Unidos. Nunca hubo programas de televisión guatemaltecos, aunque varios cineastas nativos presentaron

propuestas para realizarlos. Todos los programas entre la fecha de su aparición y principios de los sesenta fueron exhibidos en México y en Cuba en un primer momento.

Posteriormente a 1961, varios de los animadores de televisión cubanos que se exilian de su país con el triunfo de la revolución llegan a Guatemala y ellos dirigen los únicos programas que hay en vivo en el país. El show de Gaspar Pumarejo fue quizás el más famoso de todos. Pero no hubo programas en vivo dirigidos por guatemaltecos o donde predominara una presencia artística guatemalteca del nivel que fuera. Cuando participaba algún cantante nacional era porque ya había triunfado en el extranjero.

Otro fenómeno que se da en ese período que cubre más o menos desde 1954 hasta el principio de los ochenta, es aquel en el cual el Estado ve con mucha sospecha, casi con paranoia, todo el quehacer cultural en general.

En los gobiernos de 1944-54 casi todos los que ejercieron funciones gubernamentales eran intelectuales o artistas, pero principalmente escritores. Manuel Galich fue ministro de Educación, Mario Monteforte Toledo fue vice-presidente de la república y presidente del Congreso, Miguel Ángel Asturias embajador en Argentina y El Salvador, Augusto Monterroso cónsul en Bolivia, Carlos Illescas secretario privado del presidente Arbenz, Arévalo mismo era escritor. Entonces, en la mentalidad militar que toma el poder en 1954 y que dura hasta principios de los ochenta aproximadamente —diferente de la nueva mentalidad militar que surge a partir de 1982—, al intelectual y al artista se lo ve *a priori* como sospechoso de ser subversivo.

Como resultado, el Estado va a tratar de cerrarle los espacios al máximo, de ahógarlo y llevarlo a la marginación. No existe un proceso de captación, de tratar de ganárselo. Al contrario, se trata de hostigar, de limitar su expresión.

Esto sucede en un primer momento porque se veía a todos los intelectuales y artistas como vinculados al gobierno que estaba siendo derrocado, al gobierno de Arbenz y, por extensión lógica, al "comunismo". Ellos no hicieron distinciones de tipo ideológico al tomar el poder en 1954. Cualquiera que tuviera algún vínculo con el gobierno democrático, de la naturaleza que fuera, era automáticamente sospechoso de ser comunista. Esta visión simplista que confundió las distinciones entre lo democrático y lo genuinamente comunista, así como cualquier otro tipo de matiz intermedio, tuvo consecuencias negativas para el desarrollo cultural de Guatemala durante los siguientes treinta años.

En esos años comienza a manejarse públicamente una imagen negativa del trabajador cultural, alentada por el Estado y por los medios de comunicación bajo la iniciativa privada, identificados con el movimiento golpista. Según esta nueva imagen, el que es artista o intelectual es generalmente homosexual y es siempre subversivo. Representa, pues, un peligro para la sociedad. Y entonces ésta tiene que tomar medidas defensivas, crear anticuerpos para evitar que su organismo sea afectado por estos microbios que desafortunadamente son imposibles de liquidar aunque se busca hacerlo en

la medida de lo posible. Esto forma parte del discurso oficial que se maneja en prensa, radio y televisión.

De esta manera, cualquier joven aspirante a poeta, por escribir un poemita, bueno o malo, de amor o de cualquier otro tema igualmente inocente, automáticamente sabe que si intenta publicar y se da a conocer públicamente como "poeta" va a ser calificado como subversivo.

El mencionado fenómeno tiene toda una implicación ideológica que va volcando cualquier tipo de expresión cultural hacia un proceso de transformación social. Este mecanismo va a tener mucho que ver con el hecho de que tanto el joven artista como el escritor se incorporen a la guerrilla de los años sesenta. Es un efecto movilizador, pero también devastador: Guatemala perdió una generación entera de artistas y escritores de esta manera, a parte de mucha otra gente valiosa.

Incluso se ve el vacío de esta generación cuando se hacen antologías de literatura guatemalteca. Aparecen los que salieron al exilio en 1954: Monterroso, Illescas, etc., y de allí las antologías saltan hasta la generación de los setenta. En medio sólo queda la poesía de los guerrilleros heroicos que pudieron publicar, Otto René Castillo y Roberto Obregón. El resto no llegó ni a publicar. Murieron inéditos.

Todo esto crea un ámbito en el que lo cultural —todavía entendido desde una óptica eminentemente ladina e identificada con la noción de cultura de élite— pasa a ser asociada con subversión y con necesidad de transformación social.

Los cafés donde se reúnen jóvenes escritores y artistas son los mismos donde se encuentran jóvenes revolucionarios. Incluso interactúan y, generalmente, no hay distinción entre ellos. A veces hay unos que son un poquito más revolucionarios que poetas. Están los que solo después de tres cervezas sacan su poemita y lo leen. Pero no hay un divorcio real entre dirigencia revolucionaria y quehacer artístico. Incluso la práctica social que se vive es la que ellos mismos bautizaron como "bohemia revolucionaria". Ser de la bohemia revolucionaria implica vida nocturna, cafés, dramas de cantinas o de prostíbulos. En pocas palabras, marginalidad. De paso, hay que observar que también fue por esa vía que sectores lumpen fueron siendo asociados y articulados con el movimiento revolucionario guatemalteco. Estos sectores van a desempeñar papeles decisivos en las insurrecciones urbanas, la de marzo y abril de 1962 y posteriormente en el período 78-82 y aún actualmente, en la de agosto y septiembre de 1985.

Otro factor que empieza a jugar un papel importante a partir de 1954 y que va a tener una transformación muy interesante a partir de los sesenta es la iglesia.

Desde la conquista española, la iglesia siempre había estado aliada con los sectores más conservadores del país, siendo el arma ideológica para el sometimiento de las masas. De allí que contribuyera a la caída del gobierno de Arbenz, llamando a las fuerzas mercenarias a invadir el país, invasión que bautizó como "una nueva cruzada". Incluso se llegó al extremo de proclamar al Cristo de Esquipulas, la imagen religiosa más reverenciada de toda Mesoamérica, como "comandante en jefe de las fuerzas de liberación".

Sin embargo, la influencia de la iglesia en términos de movilización real o de jugar un rol de peso político se daba más en los sectores que ya estaban en la "contra". La iglesia no movilizó masa, no movilizó a los sectores populares que adherían al proyecto revolucionario.

Lo que la iglesia inicia a partir de 1954 es lo que ellos llaman la "recristianización" de Guatemala. En la óptica de la iglesia, Guatemala cayó en manos del comunismo ateo. Entonces ahora se requiere recristianizar. Para lograr este propósito, importan una cantidad considerable de misioneros principalmente del sagrado Corazón de España y de la Orden Maryknoll de los Estados Unidos.

Los que llegaron a Guatemala por la Vía de los Maryknoll eran veteranos de la China que los habían expulsado de ese país con el triunfo de la revolución maoísta. Llegaban, pues, con el ánimo de recuperar el terreno perdido en el continente asiático. Los que venían de España eran producto del franquismo. Los misioneros que llegaron fueron enviados inmediatamente al campo. Varios de ellos cuentan que no pasó de 24 horas su estadía en la ciudad. Llegaban a Guatemala e inmediatamente partían hacia las zonas más profundas del campo guatemalteco. Y allí comienzan su labor.

Esto va a ser un factor muy importante porque 10 años después estos misioneros virarán psicológica e ideológicamente y se aliarán con las posiciones de la teología de la liberación, e inician el movimiento campesino en el país e, incluso, la primera guerrilla católica.

Dentro del sector indígena, el movimiento es aparentemente muy lento hasta los años sesenta, pero su constitución toma un ritmo muy acelerado.

En realidad, el movimiento se venía dando a todo lo largo de este siglo. Simplemente, los científicos sociales carecían de la información —o de la óptica— para poder analizarlo. Con la transformación del campo en Guatemala por la introducción del café en el último cuarto del siglo XIX se crearon por primera vez mercados locales significativos. Esos mercados pasan a ser controlados por un nuevo sector de las poblaciones indígenas que no era el que tradicionalmente dominaba las comunidades. De lo anterior se deriva una pugna que se desata desde 1934 y que va a durar hasta los sesenta. En ella, los sectores más tradicionales se identifican con lo que ellos llaman "la costumbre" que son las prácticas religiosas más ancestrales, de raíz netamente maya prehispánica. En cambio, el sector comercial, que va acumulando capital por la vía de los mercados locales, se identifica con Acción Católica, organismo controlado por la iglesia que se funda en el período 1944-1954.

Hay embriones de esta organización desde los años treinta, pero la Acción Católica moderna también es producto del período posterior a 1954. Como consecuencia de su "cruzada anticomunista" y del triunfo de la "liberación", la iglesia siente la necesidad de articular a las masas dentro de un marco católico, integrista. Esto va a servirle de base para la creación del partido Democracia Cristiana Guatemalteca en 1957. Tiene, en aquel primer momento, mucha influencia del *opus dei* y aspira a hegemonizar a los sectores laicos ante el vacío ideológico que ha dejado el éxodo

de 1954. Lo significativo de la Democracia Cristiana Guatemalteca es que se funda en Santa Cruz del Quiché, una de las principales ciudades indígenas del país; esto se explica porque sus bases son principalmente miembros de Acción Católica que, a su vez, son principalmente indígenas del nuevo sector comercial; este sector ve en el partido la posibilidad de abrir un espacio.

La fundación de la DCG y la articulación de Acción Católica dentro de sus estructuras fortalece al sector comercial y los impulsa a continuar la lucha por la hegemonía de las comunidades en contra del sector costumbrista. A todo lo largo de la década del cincuenta, entonces, se vive un conflicto, una pugna de poder dentro de las comunidades, en el cual ambos sectores buscan hegemonizar al conjunto de la comunidad. Esta pugna tendrá efectos decisivos posteriormente, no sólo en el desarrollo y transformación de la cultura indígena, sino sobre el conjunto del país y sus opciones futuras.

C. ¿Qué pasó culturalmente durante los años del Mercomún?

En 1960 se inicia una de las transformaciones más aceleradas e importantes que ha vivido Centroamérica en el plano económico: la creación del Mercado Común Centroamericano.

Se ha analizado hasta el cansancio el significado económico que el Mercomún tuvo en la región, sus efectos, sus aciertos, sus grandes carencias. Pero nunca se ha reflexionado sobre las implicaciones que el mismo tuvo en el plano de lo cultural.

Y, de hecho, esas implicaciones existen, y están vinculadas a la búsqueda de transformar a Centroamérica en una región que opere auténticamente como una unidad. Esto va a tener una serie de consecuencias que van más allá del control estatal y de las políticas culturales explícitas que se hayan implementado.

De hecho, no existían en aquel entonces políticas culturales ni estatales ni de la iniciativa privada. Sin embargo, grupos de intelectuales y artistas identificados con los sectores populares buscan generar actividades culturales entre los diferentes países centroamericanos con fines eminentemente contra-hegemónicos. A pesar de su signo ideológico, estas actividades están más enmarcadas dentro de lo que sería la cultura tradicional: encuentros de escritores, encuentros de artistas. Sin embargo, tienen como virtud el hecho de que por primera vez desde 1954 se abre ese intercambio entre productores culturales centroamericanos, agilizándose las influencias mutuas y la elaboración de proyectos en común, amparados por la sombrilla de la expresión cultural del Mercado Común y de la integración centroamericana. Como ya explicamos que muchos de los artistas e intelectuales de aquella época eran a la vez dirigentes revolucionarios, es fácil visualizar la importancia política de tales intercambios.

A manera de ilustración, Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista, estuvo en Guatemala en encuentros culturales a principios de

los sesenta. Dirigentes guatemaltecos que pronto se convertirían en guerrilleros estuvieron en El Salvador, los salvadoreños estuvieron en Nicaragua, viajaban constantemente a Guatemala. Eso generó todo un intercambio que no era sólo cultural pero que se da en el marco de lo cultural y de la acción cultural que generaba el mercado común. Y además la retórica del mercado común era la integración centroamericana en todo sentido. Y entonces las actividades culturales, en la medida en que también hablabán de integración, estaban amparadas, cubiertas y financiadas por el manto del mercado común. Esto continuó así por lo menos hasta mediados de los sesenta, donde la polarización política fue tal que sostener aquello ya no fue posible.

Esta actividad, sin embargo, dejó muchas enseñanzas. Internacionalizó buena cantidad de factores de la dimensión regional, rompió el aislamiento provinciano que se vivía en cada país centroamericano hasta aquellos años y posibilitó el primer conocimiento real de los países vecinos por parte de los productores culturales/dirigentes revolucionarios que les permitió comenzar a ver Centroamérica ya no en el sentido retórico de que "Centroamérica es una" sino comprender y matizar las implicaciones más profundas de esa frase de una manera más rica.

Rompió incluso algunos comportamientos tradicionales, tales como los hegemonismos que ejercían los guatemaltecos frente al resto de los centroamericanos, así como la rivalidad Costa Rica-Guatemala que se daba en lo económico y en lo cultural y con prejuicios étnicos, como los existentes entre los costarricenses y el resto de sus vecinos.

Asimismo, en el marco del Mercado Común se crearon las primeras instituciones regionales de estudios superiores. Surgió el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) integrado por las universidades nacionales de los seis países centroamericanos, confines de investigación y también de elaboración de programas y proyectos de estudios superiores a nivel regional. Dentro del CSUCA surge la Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA), primera editorial eminentemente regional y que pronto se convirtió en la más fuerte y destacada del istmo. Y surgen, también, en el ámbito de la iniciativa privada, las universidades católicas, controladas todas ellas por los jesuitas.

En Guatemala, la DCG fue un factor para la fundación de dicha universidad. Para horror de su dirigencia, la juventud del partido se estaba formando en la universidad nacional con parámetros marxistas. Esto los llevó a hacer dentro del partido exigencias de naturaleza revolucionaria. La respuesta fue la creación de la universidad católica Rafael Landívar, la primera universidad privada que se crea en el país, en 1962. Dado el marco regional, sin embargo, esto tuvo un efecto multiplicador, y en cuestión de años todos los países tenían su universidad católica, y existía una coordinación tácita entre ellas.

En su primer momento, las universidades católicas fueron más bien conservadoras. Sin embargo, el fermento cristiano tuvo muchos cauces en esos años. Los misioneros se habían transformado ya para aquel entonces, gracias a las miles de experiencias vividas al lado del campesinado, y en

este mismo período desembocan en una posición militante revolucionaria. Ya en 1966 esta posición lleva a muchos a pensar que la única alternativa es la creación de una organización guerrillera revolucionaria. Así comienza un grupo de trabajo denominado *Cráter* que se prepara como embrión de una futura guerrilla católica. Se piensa en crear una columna guerrillera en occidente, donde todos los miembros son indígenas. También se inician negociaciones con la guerrilla ya existente en aquel momento para buscar confluencias con la misma. Estos hechos contribuirán a transformar en la década siguiente las orientaciones cristianas en el país y en la región, y facilitarán la transformación vivida por el pueblo indígena hacia fines de los años setenta.

D. La "década indígena": los años setenta

Los años setenta representan la entrada de lleno de la cultura indígena al centro de la conciencia nacional.

Este no fue un proceso lineal ni mucho menos. Venía desarrollándose ya desde la expansión del capital por todo el altiplano durante la década anterior. Entre los efectos que esto generó estuvo el que los indígenas se replantearan su manera de relacionarse con las cabeceras departamentales, es decir, con la expresión regional del Estado. Frente a ese Estado comenzaron a erigirse como estructura autónoma a partir de cauces que el Estado aceptaba pero de manera contradictoria. Y, más importante aun, la iniciativa la había tenido la sociedad civil, como especie de iniciativa orgánica de las comunidades, aunque con la incidencia decisiva de los misioneros y con el apoyo institucional de sus respectivas órdenes y de la DCG.

En los primeros años de la década de los setenta, la tendencia siguió siendo la misma. Sin embargo, para la población indígena este proceso iba más allá del marco estrictamente económico; porque al volverse por primera vez indispensable que los campesinos minifundistas dispusieran de capital (aunque fuera en cantidades muy pequeñas) como condición indispensable, cambiaba su relación con los objetos de su entorno, y hasta su relación con el maíz, que o bien dejaba de ser exclusivamente un producto de autoconsumo para pasar a ser vendido en el mercado, o se reducía la extensión de la "milpa" (plantación de maíz) para darle algún espacio a cultivos más comerciales tales como el trigo, con los cuales no existe la misma relación simbólica que se da con el maíz.

No hay que olvidar que los sistemas de representaciones simbólicas que conforman las culturas son resultantes de modos específicos de apropiarse de la naturaleza y de ubicarse en ella y de relacionarse con ella. Los códigos mentales surgen de estos sistemas simbólicos. De ellos mismos se desprende un lenguaje, vehículo que articula una forma de pensamiento particular, y que en el acto de nombrar las cosas y el entorno implica una relación particular con el medio en cuestión.⁹ Nombrar es introducir sentido y es también introducir orden; un cierto tipo de orden social del

cual se desprenden los valores intrínsecos que van a regir a esa comunidad particular.

Por lo tanto, como dice Jesús García Ruiz,¹⁰ toda relación social, en tanto que articulada como resultado de una cosmovisión particular, no es una casualidad; obedece a una lógica social.

Asimismo, esos códigos simbólicos son los que confieren autoridad. Entre la población indígena, el hombre, como jefe de familia, era el poseedor de la tierra y el responsable de traer el maíz al hogar, depositándolo en el granero familiar que era dominio de la mujer. Así, el sistema de autoridad dentro del mismo grupo familiar se articulaba a partir de las mismas funciones productivas.

Y en el centro de todo este fenómeno se encuentra ubicado el maíz. Desde el mismo *Popol Vuh*, libro sagrado de la población maya-quiché, se narra cómo los hombres fueron hechos de la mezcla de maíz amarillo y maíz blanco, y se explica —en el mito sobre el origen del maíz— porqué la agricultura tiene un carácter sagrado. Así, en el espacio indígena de raíces mayas el maíz ocupa siempre el centro de la creencia, es el signo de identificación del grupo, lo que lo define como unidad étnica y como universo cultural. —En el caso del mundo ladino —es decir, de un mundo más específicamente capitalista donde sus valores no se derivan de un entorno agrario— se le niega al maíz estos valores "míticos" y se lo reduce a un objeto de mercancía. La diferencia estriba precisamente en que desde la perspectiva agrícola —de corte pre-capitalista— se establece un estado de comunicación entre el hombre y la naturaleza (y no cualquiera, sino un ecosistema en particular), ente el hombre y su alimento, entre el alimento y la tierra, entre el hombre, el alimento y la tierra. Simbólicamente, entonces, el hombre es el maíz, el maíz es la naturaleza y sólo el hombre que vive en la naturaleza y es al mismo tiempo parte de la misma, puede perdurar.

Pero es, precisamente, toda esa lógica, toda esa cosmovisión, la que comienza a cuestionarse y a entrar en crisis desde principios de los setenta, como consecuencia del proceso vivido en la década anterior. Para el minifundista, las transformaciones introducidas en tan breve tiempo ya no representaban tan sólo el optar por cultivos comerciales para disponer de un pequeño capital, comprar radios a transistores y abono para que la tierra pueda dar más, y endeudarse con los bancos del Estado (directamente, o con la cooperativa como intermediaria) que nunca antes le habían hecho préstamos de ningún tipo. Implica renunciar a toda una forma ancestral de pensar y comenzar a elaborar nuevas maneras de ver el mundo a partir de la redefinición de sus relaciones con el Estado y su vinculación a la economía nacional y al sistema capitalista internacional. Fue en este nuevo espacio que las jóvenes generaciones indígenas que absorbieron la experiencia de los sesenta y que fueron formadas como dirigentes comunales por Acción Católica, comenzaron a trabajar.

Como parte del proceso de capacitación implementado por los organismos cristianos durante la década anterior, un pequeño número de cuadros indígenas no solo terminó sus estudios secundarios en sus respectivas

cabeceras departamentales sino que, incluso, fueron becados para continuar estudios universitarios en la capital del país.

La llegada de indígenas que no pretendían esconder su identidad étnica y que se defendían enérgicamente del racismo sacudió al medio universitario de aquellos años e incluso fue factor de un polémico debate acerca de la situación indígena en el país.

Es justo en ese marco que se funda el Centro de Estudios Folklóricos (CEFOL) por Roberto Díaz Castillo como un centro de investigaciones adscrito a la Universidad de San Carlos. Dicho centro se propone las tareas que nunca cumplió el Instituto Indigenista Nacional: rescatar la cultura indígena para revalorarla y rearticularla en el marco de una problemática popular de mayor envergadura, que genere un nuevo movimiento social en el país. Gracias a los esfuerzos iniciados por el CEFOL, a partir de los años sesenta se "descubre" al indígena por parte del sector ladino y se reconoce que el problema de la identidad pasa a ser el elemento crucial para constituir el ser indígena, pero también para reconstituir un movimiento popular en el país.

El debate sirvió de trasfondo para la búsqueda de nuevos valores que, para los indígenas, restablecieran el estado de comunión entre sus comunidades y su nuevo ambiente, que pudo restituir el valor sagrado entre ambos, a partir de los rápidos cambios vividos. Esto implicó una búsqueda en el ámbito de lo cultural para encontrarlos.

Como no existían más modelos que los tradicionales y los patrones y valores cristianos introducidos por los misioneros y que rápidamente se redefinían en lo que más tarde se llamó "teología de la liberación", se partió desde este último, con una campaña de alfabetización que duró tres o cuatro años consecutivos a partir de 1972. El número de participantes en esa campaña era todavía bajo. El trabajo de alfabetización implicaba no sólo enseñar a leer y escribir sino, en primer lugar, enseñar el castellano a indígenas que hasta ese entonces no lo hablaban. El método de enseñanza empleado buscaba a la vez romper con la enseñanza tradicional del idioma y del alfabeto, centrándose sobre todo alrededor de las necesidades y problemas del campesinado indígena en aquel momento, según los modelos introducidos por Paulo Freire. Por ejemplo, el problema del abono: "Hay mucho problema alrededor de las posibilidades de conseguir abono, fertilizante, para una buena cantidad de campesinos en Santa Cruz del Quiché. Estábamos a 5 ó 6 años de todos los años de apogeo de la revolución verde (...) Sin embargo, por la inflación misma y la mayor pobreza, mayor miseria entre los campesinos, eso hacía que la obtención del abono fuera más difícil. Decía lo del abono porque cuando empezamos la alfabetización, una de las palabras clave, motores, generadores de discusión era 'abono'. Usábamos su composición: empieza con la 'a', sigue con 'bo'; entonces todo el 'ba', 'be', 'bi', 'bo', 'bu', combinaciones que se dan y luego introducir la 'n'. Además, por los sonidos mismos, las sílabas mismas, es una palabra que se presta bastante a que se pueda conjugar sus sílabas por parte de los compañeros campesinos".¹¹

De esta manera, los alfabetizadores comienzan a "escarbar" todos los

problemas que se derivan de la situación misma del campesinado indígena, para generar progresivamente una toma de conciencia, para ir forjando una nueva identidad.

La gran mayoría de los alfabetizadores había participado, años atrás, en las experiencias de catequización impulsadas por los organismos cristianos surgidos de Acción Católica y estaban estrechamente ligados a los sectores comerciales indígenas. Asimismo, todos los alfabetizadores eran indígenas que estudiaban su escuela secundaria en Santa Cruz del Quiché, aunque venían de diferentes lugares de ese departamento, y como estudiantes habían iniciado su militancia en la cabecera departamental, en las filas de la Juventud de Acción Católica Rural Obrera (JACRO). Posteriormente, en 1970, se constituyó la rama femenina de esa misma organización, llamada Juventud de Acción Católica Rural Obrera Femenina (JACROF).

Junto con esta redefinición de la identidad, se forma en 1971 en ese mismo departamento lo que se llamó la Asociación Indígena Pro Cultura Maya-Quiché, que más adelante se llamó solo Asociación Pro Cultura Maya-Quiché. Esta era una organización indígena con reivindicaciones eminentemente indígenas, que centraba su accionar en el plano cultural, con vistas a minar la opresión y discriminación, así como acelerar la concientización de la identidad indígena.

Por ejemplo, fue esta asociación la que inició en 1973 la pelea para que a la reina indígena se le dieran también cien quetzales (en ese entonces, el quetzal estaba a la par del dólar) tal como se le daban a la reina ladina del departamento. Hasta ese entonces, a la reina ladina le otorgaban cien quetzales y a la reina indígena solo veinticinco, argumentándose que ésta última no tenía que comprar un vestido blanco para el baile de coronación. Asimismo, la asociación planteó que las dos fueran reinas o que las dos fueran señoritas, pues había una connotación de discriminación muy fuerte al llamar a la reina indígena "princesita Gumarcaaj" y a la reina ladina "señorita Quiché". Finalmente, exigieron carroza y ceremonia de coronación para ambas.

También, dentro de la misma línea de forjar una identidad, se formó en la misma época una agrupación de estudiantes que tomó el nombre de Asociación de Forjadores de Ideales Quichelenses (AFOIQUI). Entre sus ideales se hallaban la formación de equipos de fútbol, de basquetbol, y la enseñanza del ajedrez. Sin embargo, todo eso iba conformando una cierta homogeneización dentro de la misma asociación, para que ya en 1973 fuera partícipe activa del trabajo de alfabetización impulsado en la zona de Santa Cruz del Quiché.

El otro elemento que aparece hacia la misma época es el trabajo impulsado por la Pastoral Indígena, el cual además de sus propias campañas de alfabetización y evangelización se fijaba como ideal retomar la conciencia de los valores indígenas. Este trabajo era la última etapa de Acción Católica en su propia evolución hacia un mayor compromiso de naturaleza política. A diferencia de las agrupaciones antes mencionadas, tenía la ventaja de operar a nivel nacional, con importantes destacamentos no sólo en la capital

sino también en Quezaltenango, segunda ciudad del país y donde se concentraba la burguesía indígena, en el Quiché, en Totonicapán y en las Verapaces. A través de la Pastoral Indígena, los miembros de las distintas etnias se fueron conociendo entre sí, discutiendo problemas comunes y soluciones comunes, y expandiendo su propia visión más allá de la problemática eminentemente local y de su etnia. Por eso, a partir de 1974, esta agrupación fue tomando un gran impulso, llegando al punto más alto de su actividad en el año siguiente y continuando dicho ritmo hasta el terremoto que asoló la capital y todo el altiplano central del país el 4 de febrero de 1976.

Asimismo, otro elemento de índole nacional que hizo su aparición en este mismo período fue la realización de los Seminarios Indígenas, que se iniciaron en 1972: "Eran eventos bastante grandes, con características suficientes para denominarlas nacionales en cuanto a cierta representatividad de etnias, de pueblos; no tanto que hubieran generado un movimiento grande, trascendente en la organización popular de aquel entonces. Estos Seminarios Indígenas eran impulsados por indígenas que de algún modo tenían alguna profesión, eran maestros o eran estudiantes universitarios o iban para maestros. Estaban bastante radicalizados, en el sentido de a veces pretender que necesariamente había que conformar una organización indígena para poder desarrollar una lucha indígena y para poder resolver la situación nacional del país".¹²

El primer Seminario Indígena se celebró en la ciudad de Quezaltenango y contó con representantes de todas las zonas indígenas del país. Al decir de los participantes, el mismo tuvo gran calidad, y de hecho inauguró la posibilidad de una lucha indígena más desarrollada que la impulsada hasta ese entonces.

Es de hacer notar que varios de los iniciadores de estos Seminarios Indígenas pertenecían a la burguesía indígena conformada en su esencia a partir del sector comercial, y sus intentos iban en el sentido de reconstituir una cosmovisión que no cuestionara su nueva calidad de clase. A este respecto es importante recordar los señalamientos de Pierre Bourdieu en el sentido de que una clase social no se define únicamente por el lugar que ocupa en un sistema de producción históricamente determinado. Además de los factores económicos, debe muchas de sus propiedades al hecho de que los individuos que la componen entran deliberada u objetivamente en relaciones simbólicas que, al expresar las diferencias de situación y de posición, tienden a transformarlas en distinciones significantes. Las distinciones propiamente económicas aparecen reduplicadas por las distinciones simbólicas: "En los seminarios se trataba la situación social del pueblo indígena, la situación cultural, la situación económica, la situación política, de donde salían caminos diversos, varios, porque una de sus características era que no tenían una homogeneidad de pensamiento totalmente desarrollado, sino eran el hervor de la conciencia indígena traducido en esfuerzos, en iniciativas, en búsqueda sobre todo".¹³

A partir de 1973, sin embargo, se agudizó la crisis económica truncando muchos de los programas desarrollistas. Consecuencia de todo lo ante-

rior fue una inesperada y repentina miseria en el seno de las masas campesinas indígenas. La misma contribuyó a acentuar diferencias de corte clasista en el seno de las comunidades. Los semiproletarios se vieron obligados, en muchos casos, a vender sus tierras y pasaron a ser mano de obra asalariada en la tierra que había sido de su propiedad, o bien tenían que arrendarla o trabajarla en aparcería. Los nuevos dueños de la tierra eran bugueses indígenas que buscaban concentrar el mayor número de tierra en sus manos y controlar el mercado de insumos.

En consecuencia, las elaboraciones simbólicas que redefinían las relaciones con el Estado y con la economía nacional se atrasaban más y más frente a la marcha de los acontecimientos, y perdían coherencia y homogeneidad al acentuarse las diferencias clasistas en el seno de la misma comunidad. La crisis de valores se profundizaba y acentuaba. La estructura de autoridad tradicional se minaba aun más. Se daba el caso crítico de que el capitalismo se hacía presente a nivel de lo económico pero estaba todavía ausente a nivel de la producción ideológica, crisis que llegaba al seno mismo de los grupos más tradicionales —los costumbristas se veían igualmente incapaces de contribuir a generar nuevas formas de visión del mundo, cayendo en algunos casos en actitudes erráticas que minaban aun más su autoridad, tales como el rechazo a los jóvenes líderes de las comunidades con mayor formación educativa "occidental" que ellos (pero quienes poseían un alto grado de autoridad política), el rechazo de todo tipo de organización socio-política que no fuera la tradicional controlada por ellos, etc.

E. 1976-1979: La búsqueda de caminos de cambio

El 4 de febrero de 1976 todo el altiplano guatemalteco fue sacudido por un fuertísimo terremoto que, en menos de 45 segundos, dejó sin residencia a más de un millón de personas y destruyó un tercio del país. Entre los más afectados estuvieron todos los pueblos indígenas del altiplano occidental que comprenden los departamentos Chimaltenango, norte de Sololá, sur del Quiché, Sacatepequez y departamento de Guatemala.

De la noche a la mañana, las comunidades del interior se vieron obligadas a ejercer la mayoría de las responsabilidades políticas y sociales, así como solucionar las inmensas necesidades generadas a raíz del terremoto, constituyéndose prácticamente en poderes populares locales que negociaron directamente con las agencias internacionales la ayuda que recibían del exterior.

A partir de ese momento, el trabajo de alfabetización, el de las comunidades cristianas, el de discusión política, comenzó a transformarse en un verdadero trabajo de organización con ciertas perspectivas. El conocimiento de la realidad en la cual vivían era ya un hecho para amplios sectores de la población indígena. La crisis de valores, la falta de coherencia de una nueva cosmovisión persistía. Pero en respuesta a ambos fenómenos comenzaba a darse un interés explícito de sumarse a un esfuerzo que pudiera desembocar

en "algo", que sirviera para cambiar esa situación existente.

El campesinado indígena empezó así a radicalizarse y a crear organizaciones de masas que poco a poco rebasaban la legalidad. La burguesía indígena, por su parte, empezó a pensar en un partido político indígena. Para esto convocó a una reunión en San Francisco el Alto, Totonicapán, el 25 de septiembre de 1976, bajo la excusa de rendirle homenaje al profesor don Adrián Chávez.

Como ya lo ha señalado Ricardo Falla,¹⁴ el homenaje a don Adrián Chávez evidenciaba raíces simbólicas profundas del significado que la cultura tenía para el movimiento vinculado a la burguesía indígena; no en el sentido formal de "respeto", sino en el de necesidad de reelaborar los códigos simbólicos a partir de la tradición, con el fin de poder conformar una nueva cosmovisión que posibilitara el ingreso a "la modernidad" con un mínimo de contradicciones y disgregaciones internas en el seno de la comunidad indígena. Don Adrián Chávez cumplía dicha función cabalmente. Maestro y profesor, fundador de la academia de la Lengua Quiché en Quezaltenango, traductor del *Popol Vuh*, autor de un alfabeto de la lengua quiché y personalidad conocida internacionalmente, era un hombre idóneo para encarnar dicha necesidad. Encarnaba en su persona, igualmente, el rescate de las ciencias sociales para los indígenas y, en particular, reconstitución de la identidad indígena "cuya crisis ha sido especialmente sentida por los indígenas que han alcanzado diverso grado de escolaridad y se han separado ya de las labores campesinas".¹⁵

Asimismo, al exaltar a don Adrián Chávez la burguesía indígena estaba "exaltando y valorizando su propia vida, pues ellos han sufrido la crisis de identidad y han roto mediante el estudio y otros cargos desempeñados fuera de su comunidad de origen el bloqueo que los condenaba a ser campesinos o dejar de ser indígenas".¹⁶

Se puede observar entonces que si diez años antes —hacia mediados de los sesenta— la lucha en el interior de las comunidades indígenas había sido entre los "costumbristas" y el sector comercial ligado a la Acción Católica, ya para mediados de los setenta la comunidad se encontraba dividida en tres grupos: "costumbristas", sector comercial ya claramente delineado como burguesía indígena y campesinado indígena. Asimismo, en este último período las diferencias clasistas comenzaban a privar por encima de la "comunidad étnica".

Los tres sectores convergían tan sólo en que todos, incluyendo los "costumbristas", se habían apartado de "la tradición", tal como ésta se practicaba de manera genérica hasta fines de los años cincuenta. La identidad étnica se había transformado en búsqueda de fuerza política, pero se desarticulaban a pasos acelerados los elementos que tradicionalmente la habían conformado y cohesionado. De constituir un conjunto de prácticas simbólicas que estructuraban el sentido y conformaban una cosmovisión particular, pero cuyo concepto no se explicaba ni articulaba de manera lógica o "racional" en el sentido occidental del término —muchos de sus códigos se daban a nivel de lo no-consciente y de lo no-verbalizado inclusive—, la situación hacia fines de los setenta parecía invertirse. Ahora, la identidad era un fenó-

meno "sentido", verbalizado, en torno del cual se buscaban articular prácticas políticas. Pero las prácticas simbólicas, la cosmovisión, los códigos "no-conscientes", habían sido relegados sin que se constituyeran nuevos que los sustituyeran. Así, en los hechos, al mismo tiempo que más se hablaba de identidad, era cuando más en crisis se encontraba la misma.

Dicha crisis envolvía a los tres sectores en pugna en una carencia de valores normativos tradicionales. Cuando este fenómeno se vivió por primera vez a fines de los sesenta y principios de los setenta, el sustituto de los mecanismos tradicionales de organización vino a ser Acción Católica. Pero con la agudización de la lucha de clases en el interior de las mismas comunidades indígenas, incluso este modelo se vio relegado. La burguesía indígena se inclinó más hacia la estructura partidaria tradicional. El campesinado indígena más hacia organizaciones revolucionarias de masas. Pero ambos modelos se rearticulaban con muchísima tensión. En parte, por la rapidez misma de los cambios. En parte, por la profundidad de la "crisis de transición"¹⁷ de la sociedad guatemalteca, crisis estructural a la cual vino a sumarse la crisis coyuntural que estalló en pleno a fines de esa misma década.

La crisis va a llevar a las masas indígenas hacia el campo de la revolución. De las organizaciones guerrilleras existentes en el país, la que va a capitalizar principalmente el anterior giro es el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), organización que surge en aquella coyuntura y que en el plano ideológico-cultural funde elementos de teología de la liberación con la mitología maya.

Aunque existen en Guatemala tres organizaciones guerrilleras, la que de hecho va a jugar el rol hegemónico en ese período y hasta 1982, que va a aglutinar a la gran mayoría de las masas —y, principalmente a las masas indígenas— es el Ejército Guerrillero de los Pobres.

Sus fundadores son veteranos de la guerrilla de los años sesenta, ladinos, con una visión marxista-guevarista. Pero no solo en lo ideológico. La mística guevarista también ha jugado un papel muy importante. Incluso el Che Guevara había sido padrino de uno de los hijos del comandante en jefe del EGP. Su importancia radica en la visión que ellos tuvieron en ese período, al darse cuenta del valor del movimiento indígena y de que estaba vinculado a lo cristiano.

Nunca quedó claro quién infiltró a quién. Pero ambos movimientos se unieron y se incorporó a la dirección cristiana hasta los más altos niveles. Ya para 1980 en la dirección nacional del EGP había cristianos, y la responsable de formación ideológica del frente guerrillero localizado en el altiplano central era una monja.

Además, la incorporación es masiva. El Ejército en sus cifras públicas piensa que los combatientes regulares no pasaron de 10 mil, pero que las fuerzas irregulares llegaron a ser cien mil y la base de apoyo 260 mil personas (de los cuales 90% eran indígenas), en un país de 8 millones, 4 millones de ellos indígenas.

Las organizaciones revolucionarias duplican esas cifras y llegan hasta el medio millón. La verdad debe oscilar entre un cuarto y medio

millón de personas. Aunque hay que tomar en cuenta que es población controlada, base de apoyo, pero *no* son combatientes ni están armados.

De cualquier manera, fue un movimiento de proporciones significativas que tuvo como mérito principal el de ubicar absolutamente en el centro de la problemática nacional hasta hoy —y por los años venideros—, la cuestión indígena.¹⁸

Esa movilización del indígena asustó al sector dominante ladino porque en Guatemala siempre se vivió una mentalidad colonialista interna. El ladino se creía un hombre blanco asediado por la masa oscura que eran los indígenas, con el mito, manejado desde la conquista, de que algún día los indígenas iban a bajar de las montañas y matarlos a todos. Y ese día parecía estar llegando en los alrededores de 1980.

Fusionados entonces el EGP y el movimiento revolucionario de masas de origen cristiano, se comienza a releer el *Popol Vuh*, el libro sagrado del pueblo quiché, con ojos revolucionarios. Pero ojos revolucionarios que ven la revolución por la vía de la teología de la liberación. Y entonces comienza toda una reinterpretación de los mitos y de los símbolos del mencionado texto. El padre Ricardo Falla, por ejemplo, hizo un trabajo que reinterpretaba el significado del anti-héroe Vucub Caquix en el *Popol Vuh*. Pero además de ser un trabajo académico publicado en una revista especializada, ese ensayo se reinterpretaba y se rediscutía a nivel de las comunidades de base, de donde surgían manifestaciones de cultura popular —canciones o sociodramas— que encarnaban esas nuevas interpretaciones.

Como resultado de la relectura del *Popol Vuh*, y su impacto entre las masas indígenas, en aquel período las organizaciones revolucionarias adoptan como slogan una de las frases del *Popol Vuh* que dice: "Que todos se levanten, que se llame a todos. Que no haya ni uno ni dos grupos entre nosotros que se quede atrás de los demás".

Igualmente, el documento que escribe uno de los comandantes del EGP para explicar la necesidad de movilizar a los sectores populares para hacer la guerra revolucionaria se llama *Los caminos de Paxil*. En este documento la argumentación gira en torno de la parte del *Popol Vuh* en el que las hormigas entran en Paxil a los agujeros a recoger los granos de maíz para que los abuelos fundadores puedan mezclar el maíz blanco y el maíz amarillo con los que crean a los primeros seres humanos.

II. La reestructuración de la escena cultural en los años ochenta

A. Los cambios vertiginosos en la cosmovisión indígena

Lo iniciado hacia el final de la sección anterior nos explica en buena medida la violencia represiva tan desproporcionada en relación a la fuerza militar real que llegaron a tener las organizaciones revolucionarias. Explica también por qué se aceptó la magnitud tan gigantesca de esta violencia por sectores significativos de la sociedad guatemalteca como un "mal necesario".

Para el ejército guatemalteco, el peligro no era la capacidad militar de la guerrilla sino la enorme movilización de masas en el altiplano. Fue por eso que, a partir de noviembre de 1981, se inició la campaña genocida en contra de la población indígena insurrecta.

Como ya lo ha señalado Gustavo Porras, hay que hacer notar que esta crisis revolucionaria se da en el marco de un intento de modernización iniciado por el mismo Estado, el cual cumple simultáneamente el papel de gestor de desarrollo y represor de la población para evitar que los mismos rasgos modernizantes introducidos por ellos cuestionen el modelo de acumulación y lleven a cambios estructurales.¹⁹

Se señala igualmente cómo los intentos de modernización, sin embargo, generan expectativas de cambio en las masas y desquician el orden tradicional por generar rápidos cambios en la composición clasista de la sociedad; especialmente, entre el campesinado indígena y las capas medias rurales.

A esta concepción hay que sumarle el impacto que esos vertiginosos cambios —hablando en términos de temporalidad histórica— pueden tener en una cosmovisión cuyo sedimento se encuentra en una tradición de siglos cuya tendencia ha sido más bien a impedir cambios de toda índole en vez de dinamizarlos.

Este fenómeno se ilustra perfectamente con la lengua. El manejo del tiempo y el espacio en las lenguas mayas es totalmente opuesto a las concepciones occidentales. Por ejemplo, para cualquier hablante de lengua occidental, el pasado está hacia atrás y el futuro hacia adelante, hacia donde nos dirigimos. Sin embargo, en las lenguas indígenas es todo lo contrario. El pasado es lo que está enfrente. Esto se debe a que es lo que se maneja, lo que se conoce, lo que se domina de alguna manera. En cambio, el futuro es lo que está atrás, porque es lo que se desconoce, lo que no se maneja. Esto nos plantea una lógica totalmente diferente.

Lo anterior se articula con lo señalado por Maurice Godelier en el sentido de que en las sociedades precapitalistas la distinción entre base y superestructura es tan sólo una distinción de funciones y no de instituciones. Entre las fuerzas productivas figuran los elementos "intelectuales" que actúan sobre la naturaleza. Y estas realidades se aprehenden en el discurso de la comunidad; y existen como realidades lingüísticas, como hechos indisolubles de lengua y pensamiento; es así que se comunican en el cuerpo social y se transmiten de generación en generación.²⁰

Pero entonces, toda esa cosmovisión que legitima el orden precapitalista existente, se ve desfasada en un abrir y cerrar de ojos, históricamente hablando. El pensamiento —entendido aquí en el sentido de cosmovisión— organiza todas las prácticas sociales y por lo tanto contribuye a la producción de nuevas realidades sociales. Esa misma cosmovisión legitimaba —de manera paradójica— las relaciones de dominación y explotación impuestas desde la Conquista. Pero al romperse toda congruencia entre el plano de pensamiento y el de las nuevas relaciones de producción más explícitamente capitalistas, además de las expectativas de cambio en el orden estrictamente material (mejoramiento del nivel de vida, acceso a un

mundo antes vedado, etc.), este fenómeno tan íntima y sensiblemente ligado al fenómeno de la identidad, incidió también en la ruptura que llevó a la crisis revolucionaria.

Relativamente consciente del fenómeno, el Estado se vio en la necesidad, para sobrevivir, de imponer un nivel de violencia nunca antes visto, para poder volver a ganar un grado de consentimiento que le permitiera tratar de reintroducir nuevos elementos ideológico-integrativos. Ello le posibilitaría volver a retomar su control sobre la sociedad civil sin implementar mecanismos fundamentados exclusivamente en la pura violencia y el terror, y generar un juego que permitiría un consentimiento parcial de los dominados a su dominación.

B. La política contrainsurgente como política cultural

El movimiento revolucionario mantiene la iniciativa política hasta principios de 1982, cuando el ejército lanza su gran ofensiva que ellos lo llaman "Plan Victoria 82". Los objetivos del ejército eran desarticular los frentes guerrilleros y bloquear su desarrollo.²¹ Para eso, era necesario desplazar a la población, destruir la economía local y separar a los productores de sus medios de producción.

Pero hacer eso implicaba, precisamente, modificar de fondo no sólo las características socio-económicas sino también —y por extensión— las étnico-culturales. En otras palabras, romper de una vez y para siempre la cosmovisión de esa población, acabando con la base de la estructura comunal y de la unidad étnica.

Se destruían, en efecto, tanto los medios materiales como los mecanismos pensantes anclados en éstos, que posibilitaban la continua reproducción de la cultura indígena. Como se entendía que dicha cosmovisión estaba articulada con formas precapitalistas de agricultura de subsistencia, se buscaba subsanar por esta vía violenta y genocida el problema de la relación entre la distorsión de la base productiva, es decir, del desarrollo de un capitalismo dependiente asociado a formas precapitalistas de producción.

Todo ese fenómeno anterior, visto en conjunto, no es sino la voluntad del Estado (y del Ejército que, controlando en su totalidad al estado, planificó todo ese proceso como parte de su estrategia contrainsurgente) por reconfigurar las reglas del juego de la sociedad civil y, muy en particular, los aspectos ideológico-integrativos en el interior mismo de la sociedad guatemalteca.

Con los cambios implementados por medio de mecanismos contrainsurgentes, se busca desestructurar un sistema existente para imponerle por la vía violenta una nueva lógica a la población que se identificaba con y en el anterior sistema existente. Así, la estrategia contrainsurgente que incluye entre sus manifestaciones las patrullas civiles, las aldeas modelo y las coordinadoras interinstitucionales, es una elaboración del Estado/ejército para imponerle a la población indígena una nueva forma de ver la rea-

lidad, una nueva forma de engendrar un sistema simbólico en función de una lógica diferente, concomitante con necesidades específicamente capitalistas.

Ya hemos mencionado que uno de los ejes centrales del lenguaje y de la cultura es la relación con el tiempo y con el espacio que muchas veces vienen unidos en uno sólo. Por ejemplo, la tierra es simultáneamente espacio y tiempo, porque es el ecosistema particular donde se ubica materialmente frente a la naturaleza, pero es también el vínculo temporal con los ancestros que se ubicaron en ese mismo espacio por incontables generaciones. Al darse, pues, un desplazamiento de sus sitios de origen, no podemos pensar exclusivamente en términos de necesidades militares de control poblacional para aislar las columnas guerrilleras. Indudablemente entraba allí, de manera consciente, el trauma cultural que implicaba desraizar de su tierra ancestral al campesino indígena autoconsumidor como parte del proceso de sustitución de un sistema simbólico por otro. Lo mismo puede decirse de la desarticulación de los lazos de parentesco al eliminar físicamente a niños, mujeres, ancianos. No es sólo sadismo patológico por parte del ejército. Es también, y principalmente, la necesidad de romper las relaciones sociales establecidas en función de un espacio para desarticular el poder local existente e imponer uno nuevo. Uno nuevo que, como sistema de autoridad, se encarga consciente o inconscientemente de empezar a vehicular, en el seno de la nueva comunidad reconstituida en torno de una aldea modelo, el nuevo sistema simbólico.

Ahora, los códigos simbólicos se conforman en relación directa a la actividad productiva de un grupo. La identidad, a su vez, está intrínsecamente ligada a esos códigos simbólicos resultantes de la actividad productiva del grupo. Entonces, para poder generar nuevos códigos simbólicos, es necesario a su vez reformular, modificar o transformar la actividad productiva del grupo.

En otras palabras, el ejército comprende que lo que necesita para lograr una victoria estratégica es —más que la aniquilación de la guerrilla— la desarticulación de la identidad indígena.

Para conceptualizar este último fin, llega incluso a recrear algunos de los elementos de la llamada "ladinización" que se manejaron en el período de iniciación de la antropología en el país en los años cuarenta. En mayo y junio de 1981, el capitán de navío Juan Fernando Cifuentes presentó a los oficiales del Estado Mayor una serie de propuestas que, posteriormente, con el título de "Operación Ixil", fueron publicadas en la revista del Centro de Estudios Militares (CEM). Entre las muchas cosas que afirmaba dicho documento, se llegaba a sugerir que el Ejército debía dedicar "(...) el entero esfuerzo para lograr la misión encomendada a la unidad de asuntos aciviles, intensificando la ladinización de los ixiles, de manera que desaparezcan como subgrupo cultural ajeno a nuestra manera nacional de ser" (subrayado nuestro).

Pero ahora lo hace ya desde un punto de vista contrainsurgente más desarrollado. Ellos se dan cuenta de que el indígena ha logrado mantener su identidad porque ha logrado una gran autonomía en la esfera cultural. Y

es esa autonomía lo que les ha permitido defender su ser étnico en medio del marco de explotación, opresión y discriminación al cual están constantemente sometidos. Dicho espacio no fue mayormente afectado a lo largo de los últimos 500 años.²² Entonces, el fenómeno de la identidad es el centro, el núcleo, de la esfera cultural.

Por lo tanto, el proyecto contrainsurgente del ejército —que en buena medida continúa vigente hasta el presente—, es la destrucción de la identidad étnica como mecanismo para obviar la contradicción de fondo de la sociedad guatemalteca. Y con esos fines se inicia desde 1982 un programa de guerra ideológica y operaciones psicológicas que tienen como pilar el lavado de cerebro, con el objetivo explícito de erosionar por dichos métodos la identidad étnica.²³

La aplicación de dicho programa afecta diversos aspectos. El mismo va desde la castellanización hasta la integración de los símbolos patrios en las prácticas cotidianas de los indígenas, prácticas que son obligatorias y que incluso, en un primer momento, no asistir a ellas puede costarle a uno hasta la vida.

Se da, además, una destrucción sistemática de todos los ámbitos espaciales que permiten la identidad, que contribuyen a forjar la identidad indígena. Concretamente se destruyen los cerros principales de culto de la tradición costumbrista, se arrasan las aldeas independientemente de que hayan tenido participación con la revolución o que hayan sido sólo base de apoyo, pero que tienen algún valor simbólico en el forjamiento de la identidad por ser sitio de culto ancestral.

Se destruyen, a su vez, los cementerios para borrar el culto a los muertos que es fundamental en la defensa de la identidad. De igual manera, se obliga a la población a cambiar su ámbito ecológico natural. Guatemala está compuesta de muchos microclimas por lo abigarrado de la geografía del país. Por extensión, la identidad de los diferentes grupos étnicos está asociada a espacios muy particulares y perfectamente bien localizados. Esos espacios tienen cada uno un microclima distinto, que incluyen ciertos productos agrícolas que no se encuentran en otros espacios. Esto obliga a la población no sólo a cambiar de ámbito geográfico sino a relacionarse de manera diferente con los productos particulares a los cuales asocia su identidad y que los diferencian de otros grupos étnicos.

Se obliga, además, a la población a mezclarse étnicamente entre sí. Entonces ya no pueden hablarse entre ellos en quiché o en cakchiquel, por ejemplo (en Guatemala existen 23 idiomas), sino tienen que hablarse entre ellos en español. Esto tiene grandes implicaciones, pues da lugar a la pérdida de la lengua nativa en momentos de enorme dislocación y tensión social. Además, aunque todos los grupos étnicos son de la familia maya, las diferencias grupales han generado prácticas que se diferencian culturalmente. Al mezclarse todos los grupos se rompen muchos de esos patrones.

Pero no es sólo eso. Estos tenían como característica principal el ser una práctica colectiva, práctica de la comunidad entera. Entonces no sólo se rompe la posibilidad de mantener las prácticas comunales, sino que ade-

más se cuestiona el ejercicio del catolicismo. El ejército entra a esta zona acompañado de las sectas fundamentalistas.

Como ya se indicó anteriormente, la religión es uno de los aspectos fundamentales de la identidad cultural indígena, y cambiar estos rasgos implica para ellos el correr el riesgo de incurrir en la cólera de los ancestros. En anteriores giros religiosos —la aceptación de Acción Católica en los sesenta, por ejemplo— esto se logró cuando los misioneros evidenciaron en su práctica un gran respeto por la cultura indígena, y se integraron en la misma. Asimismo, Acción Católica aprendió a no presentarse como una ruptura con la tradición, sino como una modificación de la misma, corrigiendo los excesos de ciertas prácticas tales como el tener que comprar galones de aguaiente para la celebración de los ritos.²⁴

Sin embargo, la manipulación protestante que han hecho los fundamentalistas en concertación con el ejército, no ha sido así, sino todo lo contrario: "If Catholic Action was a reaffirmation of ethnic pride, Evangelicalism was usually a denial of it. Show me an Evangelical Indian who isn't in the process of Ladinoizing", one worker challenged.²⁵

"The Protestants' heavy emphasis on spiritual rather than material needs and their concentration on individual salvation subjugated community identity. 'Improving oneself' economically often meant becoming an exploiter indistinguishable from the *patrones* the Indians had suffered under previously".²⁶

Asimismo, en un trabajo previo, el antropólogo guatemalteco Jesús García-Ruiz había señalado que la penetración protestante destruye las relaciones de parentesco y estructura nuevas relaciones sociales y una reorganización interna de los "hermanos conversos":

"Le discours de 'l'indétermination' grâce à l'usage et à l'interprétation individualiste de la bible permet de manipuler les consciences à travers des mécanismes oraux. Ceux-ci ont pour objet de déraciner les représentations liées aux croyances antérieures (catholiques ou traditionnelles) des individus et ainsi de déplacer, grâce aux nouvelles structures, les anciens saints et autres représentations de ces populations dépendantes de la parole, de son interprétation et de son action manipulatrice. On assiste à la création d'un phénomène nouveau dans les sociétés latinoaméricaines. On crée la conscience du 'salut individuel' en coupant les convertis de leurs liens solitaires avec les communautés naturelles et en les isolant pour mieux les manipuler.

"L'abstraction de la croyance crée 'l'effet' de la communication directe entre le converti et la divinité; c'est une relation qui le met en situation de dépendance avec l'idéologie de celui qui se présente comme le spécialiste du contenu de la parole: le pasteur".²⁷

Otro ejemplo de destrucción cultural es la prohibición del cultivo del maíz. El cultivo del maíz va más allá del hecho que uno se alimenta con él. El maíz es lo más sagrado que hay en Guatemala porque según el *Popol Vuh* los seres humanos somos hechos de la mezcla del maíz blanco y el maíz amarillo.

Prohibir el cultivo del maíz y sacar de sus lugares de origen a la pobla-

ción indígena, entonces (hechos que se han dado conjuntamente) tiene como resultado que se rompa el vínculo entre la cultura y su espacio físico y temporal: el ecosistema que le da vida y en el cual se ubica la cultura. Al fin y al cabo, la actitud hacia la tierra y hacia el maíz es una de las esencias definitorias de la cultura indígena.²⁸ La tierra que produce la milpa, su milpa, es el símbolo indígena del derecho a vivir. Para muchos, incluso, ser *milpero* es el símbolo esencial de la indianidad, hasta el punto de que tanto individuos como familias que se ganaban la vida prioritariamente o casi integralmente del comercio u otros oficios y profesiones seguían manteniendo un terrenito, por pequeño que fuera, donde producían su milpa, y se seguían identificando ante los empadronadores de los censos como "campesinos" aunque éste último no fuera su oficio dominante, por la importancia que tenía para ellos mantener esa identidad ligada a la milpa. Dejar de tener tierra y dejar de sembrar milpa tradicionalmente ha significado el abandono de la aldea y la voluntad de cortar los vínculos con la propia identidad. Heredarse la tierra de padres a hijos reafirma los lazos ancestrales y, por lo tanto, la identidad personal y cultural. La tierra define quién es él, además de qué es él como individuo.

Asimismo, y no menos importante, la tierra es el hogar del Dios Mundo. Un indígena tradicional consulta a un shamán para comenzar el ciclo agrícola y luego lo inicia con ritos religiosos celebrados en la propia milpa, donde se le pide perdón a la tierra por romperla, con el objetivo de aplacar al Dios Mundo. Cultivar la tierra es el más profundo acto de comunión con dios al cual puede aspirar un indígena.

Aunque el foco de atención y energía del aspecto cultural de la política contrainsurgente se ha centrado —como tenía que ser— sobre la población indígena, no ha recaído exclusivamente sobre este sector. La misma política tiene también por lo menos otros dos ángulos que revierten algún interés. Por un lado, hacia ellos mismos: la política cultural interna del ejército. Y, por el otro, hacia los trabajadores culturales ladinos urbanos, es decir, los intelectuales y artistas tradicionales.

Uno de los problemas principales que tuvo que confrontar el ejército en el marco contrainsurgente fue el hecho de que la mayoría de sus soldados eran también indígenas. Esto requería, a su vez, una diferenciación que hiciera evidente las ventajas contenidas en el proceso de ladinización que implicaba formar parte de la institución armada.

Con tales fines comenzaron toda una serie de programas que tenían como objetivo el soldado. Según Arturo Isaacs Rodríguez de Relaciones Públicas, Departamento de Información y Divulgación del Ejército,²⁹ el soldado típico llega al ejército como un "hombre rústico". En la institución armada, entonces, el campesino indígena es "castellanizado", se le enseña a leer y escribir, se le enseñan "las buenas maneras" y la higiene personal. "Es transformado en un caballero, desde su estilo de vestir, hasta su comportamiento y su educación". Cuando está listo para "graduarse", el ejército le encuentra una vocación técnica, que generalmente son carpintería, albañilería o agricultura. Este aprendizaje es utilizado durante sus años de servicio en el ejército así como después de su retiro. Los que evidencian

talento, pasan a la academia de mecanografía e inician su aprendizaje como oficinistas.

Otro aspecto de este desarrollo cultural son las publicaciones que ha iniciado la fuerza armada "para promover las artes y la música en un nivel nacional así como individual".

Desde la presente década, existen tres publicaciones: 1) la *Revista Militar* que es del Centro de Estudios Militares. La revista más vieja, con 17 años de existencia, circula internacionalmente y presenta una discusión teórica de alto nivel sobre asuntos de naturaleza militar y contrainsurgente. Ocasionalmente aparecen artículos literarios con temas militares. A manera de ejemplo, en el número 39, IV época, de septiembre 1986-abril 1987, aparecen en su Índice "Concepto y clasificación de los sistemas financiero-actuariales", del Tnte. Cnel. y Lic. y Actuario Carlos Abel Cabrera Padilla, "Naturaleza y personalidad del líder", del Cnel. de Inf. Luis Francisco Ríos Mejía, "Seguridad social", del Tnte. Cnel. Lic y Actuario Carlos Abel Cabrera Padilla, "Liderazgo militar profesional", de Marco Antonio Pascual Luna, "Contrainsurgencia en Guatemala", del General de Brigada Héctor Gramajo Morales, actual ministro de la Defensa, y que resume en dicho artículo muchos de los aspectos de la política contrainsurgente delineados anteriormente, e "Insurrección: una amenaza latente", del Teniente de Infantería Pablo Nuila Hub.

Es interesante señalar que este último artículo comienza con una cita de Lenin, evidencia de la capacidad que ha tenido el ejército para profundizar su teoría a partir de una reflexión sobre el marxismo mismo.

2) La revista *Soldado* está dirigida a las bases. Únicamente es de circulación interna, sale mensualmente, y tiene como objetivo "despertar inspiraciones nacionalistas en el soldado". Esta revista favorece los dibujos y la presencia de elementos gráficos por encima de los artículos propiamente dichos. Esto es de por sí natural, ya que la revista va dirigida al soldado recién alfabetizado.

Finalmente, 3) la que va dirigida al público de Guatemala, la *Revista Cultural del Ejército*. Esta revista, con 6 años de existencia y dos números anuales, es muy interesante no sólo porque se publican cuentos, análisis literarios, y artículos de naturaleza similar como en cualquier otra revista cultural del continente, sino porque publican en ella escritores e intelectuales de izquierda, muchos de ellos públicamente contrarios a las posiciones del ejército. Es, de hecho, uno de los instrumentos creados para cooptar, o neutralizar, a los intelectuales con vocación democrática, en el espíritu de recuperación de los ismos por parte de la institución armada; ello representa un giro de 180 grados con respecto a su política anterior a los años ochenta.

De hecho, parte de la nueva estrategia del ejército dentro de esta dimensión cultural incluye la necesidad de cooptar a los intelectuales y artistas. A manera de ejemplo, los escritores surgidos en los años setenta habían fundado en 1978 una cooperativa que se llamaba RIN. Era una cooperativa de escritores jóvenes en la que todos contribuían para financiar las publicaciones. Era una cooperativa autónoma, democrática, progresista. A partir de principios de los ochenta es intervenida por el ejército. Este man-

tiene la cooperativa, pone dinero y la convierte en la principal fuente editorial de Guatemala. Asimismo, mantiene el nombre de todos los miembros originales aunque ya habían salido del país por razones explícitamente políticas. Esto le da todo un barniz, y credibilidad a la "editorial RIN".

El capitán de marina Juan Fernando Cifuentes —uno de los teóricos de la constrainsurgenciay autor del llamado "Plan Ixil"— es el cuadro cultural del estado mayor y, como licenciado en letras que también es, se encarga personalmente de esta tarea. Visita a los escritores más significativos que se quedaron en el país, a los más progresistas, para invitarlos a publicar en la editorial RIN. Y, en medio del pánico que se vive en aquellos días, la llegada del capitán a decir que hay que publicar en RIN, se entiende como una orden militar en la cual le va la vida a uno, por muy correcto que el capitán se comportara. El capitán, de hecho, garantizaba que no se censuraría la obra incluso si tocaba temas políticos. Pero el hecho significativo era el intento, por primera vez, de cooptar a este sector.

El capitán Cifuentes también abre el primer suplemento cultural que tiene Guatemala desde 1954. Se trata de "Tzolkín" en el *Diario de Centroamérica*, el periódico oficial. En este suplemento comienzan a publicar los escritores del exilio. Publican Luis Cardoza y Aragón, Carlos Illescas, Otto Raúl González, escritores que no habían publicado en Guatemala desde que abandonaron el país. Representa, incuestionablemente, un nuevo giro en el ambiente literario guatemalteco.

Asimismo, en estos mismos años comienzan a hacer actividades de promoción cultural: financiar conciertos, galerías de arte y exhibiciones. Sobresale su patrocinio de artistas nacionales en su programa de radio y televisión "La hora cultural" transmitido por el Canal 5, canal controlado por el ejército y que ellos han bautizado "el canal cultural y educativo". Según Isaacs Rodríguez, el ejército se da cuenta de que: "todos los que participan en el ejército tienen la oportunidad de estar expuestos a la cultura y, a través de esta exposición, ayudarán con el desarrollo cultural del país".³⁰

En estas actividades, el ejército se preocupa siempre por garantizar que aparezca gente progresista o democrática. No quieren que su política se vea como la formación de una cultura reaccionaria; pero están interesados en neutralizar y cooptar a elementos progresistas y democráticos. Contaba, por ejemplo, Manuel José Arce —principal dramaturgo guatemalteco de este último período— que él estaba en París exiliado y lo llamó por teléfono el agregado militar en Suiza, quien lo visitó y le propuso que colaborara. Manuel José Arce, todavía con cierta inocencia, le dijo, "ay, pero coronel, usted no se ha dado cuenta de que yo no pienso igual que usted". Y el coronel le respondió "es precisamente por eso que queremos establecer relación con usted". Manuel José Arce no colaboró con ellos, pero sí le hicieron un gran homenaje previo, y otro poco después de su muerte. También se le hizo un homenaje a Manuel Galich, el otro gran dramaturgo guatemalteco muerto a mediados de la presente década.

Esto último es también significativo porque en el pasado la muerte de las figuras culturales —sobre todo si eran miembros de la oposición y mo-

rían fuera del país como sucedió en estos dos casos, y principalmente en Cuba como ocurrió con Galich— pasaba enteramente desapercibida. Es, pues, una prueba más del dramático cambio en su política cultural, cambio que se mantiene vigente hasta el presente.

C. Una nueva política de Estado

Uno de los principales elementos en el ámbito de lo cultural que aparece con la entrega del poder del ejército al gobierno civil a principios de 1986 es la creación del Ministerio de Cultura y Deportes.

A lo largo de las dos décadas anteriores, toda la actividad de promoción, formación y divulgación cultural y artística del Estado la realizaba la Dirección General de Cultura y Bellas Artes, instancia dependiente del Ministerio de Educación. Ellos controlaban también al Instituto de Antropología e Historia y cinco departamentos: Artes Plásticas, Letras, Música, Danza y Folklore.

Sobre el período inmediatamente anterior al terremoto de 1976, la revista *Crónica* nos dice: "Ante la ausencia de investigación sociocultural, el manejo de las actividades de promoción y difusión cultural y artística se centró en lo espectacular. Hubo algunos intentos de promover el arte popular, por medio de muestras de teatro de los barrios y de los departamentos, pero lo cultural siempre implicó únicamente seis cosas: conciertos de la sinfónica, representaciones de ballet, obras teatrales con grupos semiprofesionales, exposiciones de pintura o escultura en galerías muy exclusivas, conferencias y ediciones de libros que nadie lee. El grueso de la investigación cultural se mantuvo en manos de científicos extranjeros. Ellos definieron al guatemalteco, mostraron sus características, analizaron sus posibilidades y sus deseos, y por si esto no fuera poco, restauraron la mayoría de sus monumentos arqueológicos e históricos".³¹

Después del terremoto, se creó un viceministerio de Cultura, adscrito todavía al ministerio de Educación. Asimismo, Antropología e Historia se separaron de Bellas Artes, adquiriendo una autonomía propia. Pero, por lo demás, nada de lo anteriormente descripto cambió en lo fundamental.

Sin embargo, la guerra interna se atravesó en el medio de aquello hacia principios de los ochenta, con las características descritas en la sección anterior. Entonces, cuando el país vuelve a un gobierno constitucional en 1986, existe casi un acuerdo político en el sentido de que ganara quien ganara las elecciones se crearía el Ministerio de Cultura y Deportes. Y de hecho uno de los primeros decretos del gobierno Demócrata Cristiano fue para crear dicho ministerio.

Según *Crónica*, en el artículo anteriormente citado, "Guatemala, en los inicios de una nueva oportunidad para acceder a la democracia, llegó sin parques, sin libros, sin promoción cultural ni artística y muy fragmentada, con etnias que se miraban con recelo y con un gran porcentaje de la población aculturándose en el país y otro, pequeño pero significativo, perdiendo sus tradiciones y transformando sus hábitos de vida en los campos de refu-

giados. Pero ya teníamos un Ministerio de Cultura y Deportes".

Julio Roberto Gil, funcionario del Ministerio de Cultura y Deportes, nos dice lo siguiente: "Hasta hace poco no existía ni un sector cultural en Guatemala (...) (este sector) ha estado vinculado al sector educación fundamentalmente; aquí era el Ministerio de Educación el que atendía todo lo que era cultura en su acepción más restringida, cultura, lo que son las Bellas Artes, fundamentalmente, lo que es el conocimiento académico (...) pero no específicamente lo que era una política cultural".³²

En diferentes sectores sociales del país, la creación del ministerio generó muchas expectativas, como lo hizo la vuelta a la democracia después de 31 años de gobiernos militares. Pero a los dos años y medio de dicha experiencia, el desencanto con el ministerio —al igual que con la globalidad del gobierno democrático— es palpable en el medio ambiente.

"El principal problema del Ministerio de Cultura fue haber comenzado a trabajar sin ningún basamento teórico y sin haber realizado un diagnóstico sobre las necesidades culturales. Y ésta es la causa de que sus políticas sean erráticas", dice el investigador Celso Lara.³³

Según él, el problema con el ministerio es doble: por un lado, el espontaneísmo generado por la inexperiencia y, por el otro, la asesoría de los venezolanos Guillermo Yepes y Maritza Reyes, quienes diseñaron gran parte de las políticas culturales del gobierno en base a los modelos de aquel país.

Varias de las críticas recientemente vertidas en contra del ministerio señalan que debería tratar de cerrar la distancia existente entre la cultura de élites y las culturas populares; pero no lo hace; en realidad se ha convertido en un monstruo burocrático con personas que no son idóneas para administrarlo.

Julio Roberto Gil, funcionario del ministerio, reconoce algunos de los problemas mencionados. A la pregunta de qué sería lo más importante a realizarse en materia de políticas culturales, responde que "es difícil decirle, tendría que hacerse un orden prioritario; ahorita no hay un análisis".³⁴ Agrega, de manera muy ilustrativa, lo siguiente: "Se tienen que estar dando respuestas a solicitudes concretas, y no contamos con tiempo ni con suficiente personal. Eso es lo que pasa. No hemos tenido tiempo para sentarnos y meditar qué es lo más conveniente. Esto no lo podemos hacer debido a que aquí tenemos que sacar un montón de expedientes y solicitudes que vienen al ministerio, ya que aquí se reciben solicitudes increíbles.

"Aquí puede venir una solicitud de instrumentos para una banda de un pueblo, o bien de un saxofón, una trompeta, otra solicitud donde piden dinero para comprar el manto de la virgen, otra donde piden la ayuda para construir un teatro. Es una gran variedad de cosas las que piden. La gente piensa, y con razón, de que uno tiene la obligación de dar respuesta a las solicitudes. Entonces atendiendo las solicitudes y con tan poca gente, ya queda muy poco tiempo para pensar en lo que debe hacerse".

Sin embargo, el ministerio se defiende de las acusaciones públicas. La ministra Anaisabel Prera arguye que "encontramos una estructura que era inoperante para poner a funcionar nuestro proyecto" (en el sector cul-

tural).³⁵ En base a eso, se hizo un estudio y se reorganizó administrativamente el ministerio. Asimismo, enfatiza que "uno de los principales trabajos" que tiene el ministerio es el de las culturas populares y que dentro de sus proyectos "está un estudio de la realidad sociocultural de nuestro país".

Asimismo, subraya cómo el énfasis del ministerio ha estado puesto, precisamente, en las culturas indígenas. El 15 de abril de 1988 las cofradías indígenas fueron recibidas por primera vez en la historia en el Palacio Nacional por el presidente Cerezo. Además, cada cofradía recibirá mil quetzales al año (un dólar equivale a 2,70 quetzales) para sus actividades mínimas. Y, fuera de esto, el ministerio ha promovido la unificación del alfabeto maya y el proyecto de educación bilingüe que se impulsa en las zonas indígenas menos conflictivas, así como la creación de la Academia Maya de las Lenguas (aunque hay que reconocer que este proyecto surge autónomamente del Ministerio, por iniciativa de intelectuales indígenas no vinculados al movimiento popular recién concluido).

El Ministerio de Cultura es, sin embargo, un ministerio de segunda clase. Tiene apenas un presupuesto de ocho millones de quetzales, es decir, menos del 0,27% del presupuesto de la nación. Y carecen de infraestructura para trabajar en todo el país.

Julio Roberto Gil dice: "Podría decirse entonces que (...) la política cultural que hace el Ministerio se encuentra a un nivel de planificar. Pero aún no está preparado para ser implementado y aplicado al país (...) Esta es una etapa de transición; ahorita, estamos buscando soluciones a los problemas que se plantean".³⁶

Ellos tienen toda una serie de planes que, al menos en teoría, aparecen bastante bien definidos. Tanto en su documentación pública como en la privada de políticas, programas y proyectos, todo lo que toca lo étnico, lo indígena, aparece con interés prioritario. Todo lo que toca a cualquier otra cosa aparece en segundo nivel. Y las fotos son todas de indígenas.

Entonces, es evidente que ése es el punto nodal para ellos: centrarse en la problemática de lo indígena dentro de un nuevo esquema, y no sin contradicciones entre el ejército y el nuevo gobierno acerca de cómo manejar esa cuestión en el ámbito de lo cultural pero con la misma visión, que es la de la integración del indígena en un proceso que implica pérdida de identidad. Y frente a eso obviamente los sectores indígenas han reaccionado.

A este respecto, Julio Roberto Gil agrega: "A eso hay que darle una respuesta, darle un tratamiento a todas estas culturas, sin cercenarlas, sino más bien encarrillarlas sin mutilarlas, que encuentren su cauce y se desarrollen, y que al mismo tiempo no se le esté cortando algo de su originalidad. Son problemas que tienen que ir concretando".³⁷

D. La respuesta a la política étnica

Han surgido —después de las masacres y su catastrófica dimensión

genocida— tres tendencias principales dentro del movimiento indígena. La primera de ellas es la que se da cuenta de que de por la vía armada no pueden lograr sus objetivos y buscan otras alternativas, quieren aprovechar al máximo los espacios democráticos recientemente abiertos y el espacio ganado por los indígenas en el ámbito nacional. Este es el sector que se encuentra colaborando hasta cierto punto con el gobierno actual, aunque también defiende celosamente su autonomía. Son ellos quienes dirigen la academia maya de la lengua, el círculo de escritores mayenses, etc. Algunos han entrado incluso al aparato de gobierno. En la secretaría de la mujer hay una indígena cakchiquel, a manera de ejemplo.

El segundo sector es el que dice que el problema no es que haya fracasado el camino revolucionario o la vía armada. El problema, según ellos, es que los comandantes eran ladinos, y ya está probado que los ladinos siempre van a "aprovecharse" del indígena, aun en el campo de la izquierda. Es, pues, una posición de racismo a la inversa que coloca a indígenas y ladinos como dos grandes grupos irreconciliables luchando por el control de un solo territorio.

Según ellos, la vía revolucionaria y la vía armada es la correcta, sólo que hay que hacer la revolución para los indios, sin incorporar a los ladinos al proceso. Este sector es, obviamente, menos visible, menos palpable. Sin embargo, tiene una raigambre bastante fuerte entre ex-colaboradores del movimiento revolucionario.

Finalmente, el tercer sector es el que hace un nuevo replanteamiento que incluye un cuestionamiento de la estrategia guerrillera seguida por las organizaciones político-militares, pero no cuestiona la necesidad de transformar estructuralmente al país, ni la alianza con los ladinos que forman parte de las clases dominadas. Tampoco se plantea colaborar con el gobierno actual, el cual es visto como una prolongación de la estrategia contrainsurgente.

Este sector es minoritario, pero no sólo es el que manifiesta los planteamientos más lúcidos y coherentes,³⁸ y se evidencia como el menos sectorio y menos confrontador de los ladinos que forman parte de las clases dominadas, sino que es el de mayor ascendencia entre importantes dirigentes del movimiento indígena. Por extensión, el peso político que ellos representan le da mucha credibilidad a su posición.

Sin embargo, incluso el primero de los sectores mencionados —el que se acerca de alguna manera al gobierno— verbaliza quejas significativas.

Por ejemplo, la lingüista Margarita López Raquéc, cakchiquel, y una de las coordinadoras del proyecto de la Academia Maya de las Lenguas, dice que "para los indígenas, si hay política cultural, hace muy poca diferencia. Porque los que están en el gobierno no entienden nuestra cultura, y entonces no pueden ayudar al indígena. Deben reconocer que no hay una sola identidad cultural en Guatemala".³⁹

Aunque Margarita López Raquéc reconoce que las cosas eran aun peores antes de que se creara el Ministerio de Cultura y Deportes porque "el gobierno actuaba como si solo existiera una sola cultura", es decir, la cultura ladina, aún ve con escepticismo la situación actual: "ahora por lo

menos reconocen que Guatemala tiene otro grupo con quien lidiar (...) y ésos somos nosotros. Sin embargo el nuevo ministerio no ha cambiado mucho las cosas para nosotros, en parte porque no ha pasado mucho tiempo, pero también porque no saben qué hacer con tantas culturas. Para mí, enriquece nuestra identidad nacional. Pero para ellos es problemático. Tal vez porque le tienen miedo a este hecho, tienen muy pocos recursos o algo así".⁴⁰

Una de las quejas de este sector es que no hay presencia indígena en el ministerio ("presencia maya"). Piensan que de haber indígenas, los ladinos del ministerio comprenderían mejor las necesidades de la mayoría del pueblo.

Sin embargo, se les agradece los esfuerzos por oficializar el estudio de las lenguas mayas y se espera que el siguiente paso sea el de legalizarlas por la vía del Congreso. Para ellos, éste sería un acto positivo que se diferenciaría con los del pasado. Asimismo, esperan participar más activamente en las actividades propias del ministerio.

Para el grupo Ja C'Amabal l'b, representante de la tercera tendencia antes indicada, no debe existir ningún tipo de colaboración con el gobierno ni con los planes que el Ministerio de Cultura y Deportes han echado a andar. Hay que constituir un nuevo movimiento de masas que, aprovechando los espacios democráticos, confronte "la esencia del capitalismo opresor guatemalteco" como "solución de fondo de la cuestión étnico-nacional" pero librando una doble lucha en su seno:

"En el seno del movimiento anticapitalista luchar contra las concepciones reduccionistas económicas y contra las pretensiones de centralismo heredadas de la burguesía, pretensiones que prevalecen en la conciencia social desde la ruptura del Pacto Federal de 1839, cuando se constituyó el Estado nacional moderno guatemalteco; en el seno del movimiento nacional-liberador interno luchar contra el etnicismo y contra el segregacionismo federalista".⁴¹

Esta misma posición defiende, a su vez, la autonomía local y regional de los grupos étnicos. Aclara, sin embargo, que ésta "debe entenderse como una autonomía territorial, abarcante del área histórica de los grupos étnico-culturales indígenas, la cual habrá de fijarse teniendo en cuenta también factores económicos y no únicamente las fronteras étnicas y lingüísticas": "La autonomía local y regional, por lo tanto, consiste en el derecho de los Pueblos Indígenas, en el marco de la unidad del Estado revolucionario, a organizarse libre y voluntariamente en su ámbito particular, dotándose de los instrumentos organizativos necesarios para decidir lo que les compete en los terrenos económico, cultural, social y político; para conseguir, a través de formas organizadas, los consensos colectivos y democráticos que reclaman las decisiones comunitarias locales y regionales; para participar, a partir de este nivel de organización, en los órganos nacionales de decisión del Estado, conjuntamente con las representaciones de los otros grupos sociales que formarán parte de la nueva nación guatemalteca".⁴²

Es interesante observar que la anterior argumentación se hace con el

fin explícito, entre otros, de "establecer derechos que le permitan a los Pueblos Indígenas proseguir libremente su propia vida y reproducir su cultura" (subrayado nuestro). Más adelante, el documento habla del derecho a "desarrollar sus elementos culturales específicos" y del "derecho de los Pueblos Indígenas a preservar y cultivar sus propios idiomas, su cultura en general y su identidad en particular; se trata del derecho a preservar las lenguas indígenas en tanto instrumentos intelectuales creados por la especie humana para apropiarse de manera peculiar de la realidad",⁴³ y termina argumentando el derecho a "mantener y cultivar su identidad, a compartir su cultura, a aportarle de ella a las otras expresiones culturales existentes en la nación".

E. El sector privado

El sector privado controla principalmente las radios y algunos pocos programas noticiosos en la televisión. Del resto de la televisión sólo son accionistas minoritarios porque la televisión guatemalteca ha estado en manos —desde que se fundó en 1956— por las corporaciones estadounidenses y sus programas enlatados traducidos al español.

En la década de los 80 aparece también el consorcio Televisa de México como accionista principal de uno de los canales más vistos en el país. De hecho, existe un solo canal de televisión eminentemente nacional, y éste es controlado por el ejército: el canal 5, canal cultural del ejército nacional. El gobierno constitucional no dispone de un canal propio de televisión.

Fuera de eso, el sector privado ha iniciado toda una serie de proyectos que son nuevos, que no existían antes. Por ejemplo, ha creado parques de recreo para los trabajadores controlados por la iniciativa privada que están muy bien mantenidos además de ser muy bonitos. Ha iniciado también proyectos tales como llevar a los trabajadores indígenas, principalmente los que son del altiplano, a la playa, para que conozcan el mar. Han creado casas de la cultura en algunas fincas y haciendas, donde se llevan a cabo proyectos de alfabetización y algunas manifestaciones culturales.

Asimismo, algunas de las mayores empresas privadas, como la Cervecería Nacional, han fundado colonias residenciales para sus trabajadores, que incluyen escuelas de buena calidad.

Según Miguel Flores, actual director de Promoción Cultural del Instituto Guatemalteco Americano (IGA) —institución autónoma pero financiada por la embajada norteamericana en el país— gran parte de la experiencia que ha acumulado actualmente la iniciativa privada en el ámbito de lo cultural se: "(...) inició en la Universidad Rafael Landívar (católica, n. del a.) en donde tuvimos actividad cultural en la misma forma que lo hace una universidad norteamericana: galerías de arte, grupos juveniles y otras actividades dentro del mismo campo".⁴⁴

El IGA es actualmente una de las instituciones que más impulsa las

actividades culturales dentro del país, a pesar del resquemor que produce entre sectores democráticos su filiación binacional con los Estados Unidos.

Aunque existe desde 1945, el IGA empezó a impulsar actividades culturales en gran escala en esta década, como parte de su política de "formar un entendimiento entre los dos países":⁴⁵ "Trato de mantener una programación intramuros 50% americana y 50% guatemalteca (...) En los programas internacionales hay 2 vías: las de los americanos que vienen a Guatemala y las de los guatemaltecos que van a los Estados Unidos. Los programas extramuros (fuera del centro cultural, n. del a.) son de ayuda, todo lo que es la promoción y difusión cultural".

Los organizadores del IGA han viajado extensamente por los Estados Unidos y han recibido entrenamiento en el Walks Center, Minnesota, el Kennedy Center de Washington, la Galería Nacional de Arte de la misma ciudad, American Council for the Arts, etc. Según ellos, esta experiencia les "ha dado una base muy grande de cómo manejar los asuntos culturales en Guatemala".

Factor influyente en el desarrollo del trabajo del IGA es, desde luego, el capital del cual dispone. De allí que lleguen a afirmar que "nos encontramos ya en un momento en que estamos haciendo cosas como si fuéramos un ministerio de cultura privado".⁴⁶

El IGA posibilita exposiciones de artes plásticas itinerantes, que recorren las Casas de la Cultura en el interior del país. Entre las exposiciones que han circulado por las 22 casas culturales que comprenden los dos circuitos —noroccidental y nororiental— que maneja el IGA, se encuentra una dedicada a la estatua de la libertad: antecedentes históricos y significado que tiene para los inmigrantes a los EE.UU.

Actualmente, varios de los proyectos que patrocina el IGA en el interior del país busca hacerlos juntamente con el Ministerio de Cultura y Deportes. Igualmente, quieren co-patrocinar con ellos un proyecto para rescatar el patrimonio cultural del país. La lógica para trabajar juntamente con el Ministerio la explica Miguel Flores de la siguiente manera: "Yo siento que nuestra sociedad está dividida entre sector público y privado. Ellos están bien divididos y cada vez se trata de hacer más grande la división. El sector que se ha mantenido aparentemente unido ha sido el cultural (...) Hay muchos sectores dentro de la cultura privada (sic) que promueven por un distanciamiento: 'hagámoslo solos'. Pero yo favorezco una posición intermedia (...)".⁴⁷

Otro de los proyectos que se persigue realizar entre ambas instituciones es el llamado "rescate de la memoria cultural de un barrio". La idea es que cada casa de la cultura rescate la memoria cultural de un barrio de su región, de su campo de acción, y al finalizar presente las memorias culturales del conjunto de barrios.

El IGA defiende las autonomías de las casas culturales del interior con las cuales trabaja, y planea que no quiere uniformizarlas bajo su hegemonía. Su influencia busca limitarse, según ellos, a "un modelo de presentación de proyectos (para financiamiento, n. del a.) que les hemos

dado, les damos estrategia de publicidad, les transportamos (sic) nuestras experiencias".

Sin embargo, existen resquemores para trabajar con el IGA, que ellos mismos admiten. "(...) queremos compartir esto con todo el mundo pero no todo el mundo quiere compartir con nosotros porque piensan que nosotros somos parte de la embajada, que somos pronorteamericanos; existen sus dudas, y prefieren hacer una cosa con la Alianza Francesa porque los franceses son la esencia de la cultura supuestamente. Pero tenemos la credibilidad del público de que hacemos una actividad profesionalmente. Nuestro país no está acostumbrado a una actividad profesional".⁴⁸

De hecho, el público que asiste a ambos centros —IGA y Alianza Francesa— es diferente. El IGA atrae más a sectores medios altos (aunque también a algunos sectores populares) que, ideológicamente, se identifican con la libre empresa y con el modelo norteamericano de desarrollo. En cambio, la Alianza Francesa atrae más a sectores medios bajos (y algunos sectores populares) más politizados, que rechazan "el intervencionismo norteamericano" y que encuentran en la idealización de la cultura francesa y de su rol histórico, un bastión de defensa contra el acoso de la primera y una afirmación del espíritu humanista democrático.

La Alianza Francesa se estableció en Guatemala en 1920, y es el centro bi-nacional más fuerte del país. Fuera de su función tradicional de difundir la cultura francesa, ha implementado una serie de actividades culturales, tales como seminarios, mesas redondas, presentaciones literarias, debates, películas, etc., que han tenido gran acogida y que la han convertido en un centro de referencia para la cultura de resistencia y oposición a los regímenes militares.

Esto ha sido así durante los últimos 20 años también por la singular influencia de Tasso Hadjidoudu, animador y alma de dicho centro en ese período. Su influencia ha servido para que la Alianza se convirtiera en esos años difíciles en un punto de reunión para las diversas expresiones democráticas de la cultura del país, sin límites ni trabas de ninguna especie. Esto la ha vuelto más aceptada en el país, precisamente en estos "tiempos de gobiernos difíciles" como reconoce el propio Hadjidoudu.⁴⁹ Por ejemplo, fue en la Alianza Francesa donde se realizó un homenaje al gran poeta Luis Cardoza y Aragón, el más grande poeta guatemalteco de este siglo, pero quien estaba acusado por los gobiernos militares de ser "cabecilla de la subversión". Igualmente, en la Alianza Francesa se celebró el homenaje a la "Huelga de Dolores", especie de carnaval anual que realizan los estudiantes de la Universidad de San Carlos donde satirizan a las figuras políticas del país y tienden a criticar fenómenos tales como el militarismo, la corrupción o el servilismo. Ambas actividades de este tipo serían impensables en el IGA, como sería impensable que los patrocinadores de ambas hubieran aceptado realizarlas en esta última institución por las connotaciones ideológicas de su patrocinio.

Fuera de los centros bi-nacionales (el Instituto Italiano de Cultura jugaría un rol menor frente a los ya mencionados) se ha iniciado, en años recientes, el patrocinio de las artes por sectores de la iniciativa privada guatemalteca.

Esta tradición no existía en el país, quizás por la debilidad de una verdadera "burguesía nacional" combinada a la tradicional hostilidad con la cual el sector agroexportador ha contemplado esta actividad, especialmente a partir del período 1944-1954.

La única excepción a dicha regla habían sido los almacenes Paiz, la cadena más grande de supermercados en el país, que desde los setenta había organizado la Bienal Paiz de Arte. En los ochenta, los Almacenes Paiz inauguraron toda una división de cultura dentro de su organización, presidida por el conocido pintor Zipacná de León. Al igual que el ya mencionado IGA, la división cultural de Paiz se encarga de patrocinar actividades culturales de toda índole, colaborando con el Ministerio de Cultura y Deportes y con el IGA o Alianza Francesa en algunas de las mismas.

Con la excepción de estos últimos centros, carece de un local propio para dichas actividades, pero es la única empresa con una política cultural propiamente dicha. Su trabajo consiste a veces en el patrocinio o financiamiento de actividades culturales organizadas por otros sectores, operando así como una especie de mini-fundación, caso también único en el país, fuera de los mecenazgos individuales.

En cuanto a estos mecenazgos individuales, varios de ellos se han conjugado en la presente década para conformar lo que se denomina el Patronato de Bellas Artes. Como su nombre lo indica, dicho Patronato se dedica exclusivamente a promocionar las "artes cultas". Su función principal es la de atraer expresiones artísticas internacionales al país; incluso se armó una polémica en mayo de 1988 porque habían invitado a la Orquesta Sinfónica de Moscú, y la extrema derecha los amenazó hasta el punto de que hubo que cancelar el evento. El Patronato de Bellas Artes rara vez se aventura más allá de las artes escénicas; el Estado sigue teniendo el compromiso, que había adquirido cuando fundó el Teatro Nacional, de "atraer por este medio las mejores expresiones artísticas internacionales a nuestro país".

Sin embargo, la naturaleza misma de tales eventos —y el costo de los billetes— mantiene la segregación en la asistencia a los mismos. Casi nunca asisten personas del sector popular, jamás los indígenas. Es una actividad prácticamente reservada para una pequeña élite culta dentro de la burguesía.

En lo que sí se ha destacado el sector privado desde los años setenta —y es un fenómeno que continúa de manera muy animada— es en estimular las artes plásticas por medio de la compra de pinturas. En este período el país ha visto un auge de las galerías de arte. Incluso en la presente década subió bastante el precio de las pinturas en Guatemala a pesar de la crisis económica, y ya se ha generado alguna atención internacional a la plástica nacional.

La producción que hegemoniza el mercado de arte es la pintura naïf indígena. La atracción de los mercados internacionales por dicha pintura —y el gran éxito conseguido en Europa por algunos de sus más altos exponentes tales como Rolando Ixquiác Xicaray— es, desde luego, un factor importante en el desarrollo de tal fenómeno. Pero no deja de ser irónico que

en la década más cruel desde la de la Conquista en la historia de los pueblos indígenas, su producción cultural sea más valorada y aceptada que nunca por la burguesía guatemalteca. ¿O será precisamente por eso? Hasta hoy, no existe todavía una respuesta satisfactoria a este hecho.

También existe, por parte del sector privado, un intento nuevo por captar población ideológicamente. La empresa privada lo ve como una necesidad de renovación ideológica del poder empresarial. Se trata, en síntesis, de introducir la ideología neo-liberal dentro de la población. En ese esquema, buscan crear una mentalidad de pequeños empresarios para multiplicar dicho grupo entre los sectores medios del país.

Varias organizaciones no-gubernamentales, entre ellas la AID, han contribuido en este esfuerzo, impulsando programas culturales y educativos en el país que apuntan en esa dirección.

La idea es constituir un programa de "alfabetización normal". Este programa busca crear líderes o bien informar a líderes orgánicos para implementar a través de ellos programas entre el sector poblacional que ellos controlan, que proyecten los rasgos ideológicos neo-liberales como solución a los problemas que aquejan al país. Colaboran con este proyecto las universidades Rafael Landívar, la Universidad del Valle y la Francisco Marroquín, es decir, las tres universidades privadas más importantes del país.

Uno de los objetivos concretos de este proyecto es la creación del periódico *Raíces*. Hasta mediados de 1988 han publicado seis o siete volúmenes. Es un periódico que distribuyen los patrones en las fincas, sobre todo en el altiplano y en la Costa Sur, y van explícitamente dirigidos a los campesinos.

Existen también, dentro del país, una serie de funciones —atención a la población desnutrida, población joven, huérfanos, población marginal, etc.— que, en teoría, el Estado debería atender. Pero dada la incapacidad de éste para hacerlo, se le ha cedido dicho espacio al sector privado.

Generalmente esto se realiza a través de agencias de índole privada. Sin embargo, en los últimos años de la presente década ha empezado a surgir un nuevo fenómeno: el sector privado —y principalmente las sectas fundamentalistas— están penetrando y financiando sus programas a través de las agencias gubernamentales que al menos teóricamente deberían ejercer tal función.

De hecho, en el ámbito de lo privado quizás uno de los factores más característicos —y más peligrosos para el país en el futuro— sea la penetración brutal del fundamentalismo. Un alto exponente de la iniciativa privada comentó en un intercambio informal que esto era "positivo para el país" porque el fundamentalismo "había logrado combatir el alcoholismo, mientras que la iglesia católica había fracasado en este intento". Sin embargo, el impacto real que el fundamentalismo pueda tener no solo en la transformación de los patrones ideológico-culturales de la población indígena bajo ocupación militar (ya comentadas en una sección anterior), sino en el conjunto del país, y principalmente entre sus sectores medios urbanos, está aún por estudiarse.

F. Los sectores populares

Uno de los problemas principales acaecidos en el país como resultado de la guerra fue el deterioro de las ciencias sociales como instrumento de aprendizaje y búsqueda de datos a partir de 1980. Los escasos centros de investigación en ciencias sociales fueron desarticulados. Muchos de los investigadores tuvieron que salir del país o fueron asesinados. Los centros se cerraron. Y las pocas personas que lograron mantenerse físicamente dentro de las fronteras nacionales lo hicieron a costa de un enorme desgaste de todo tipo. Como consecuencia, la calidad académica de la investigación en ciencias sociales se relajó de manera significativa, y entre 1980 y 1985 estuvo prácticamente ausente. Fueron cinco años perdidos desde este punto de vista.

A partir de mediados de los ochenta se han iniciado una serie de esfuerzos para rearticular la investigación en ciencias sociales, introduciéndose una nueva perspectiva en este campo. El objeto de estudio no ha cambiado. Más bien lo que ha surgido es un nuevo rigor metodológico, una manera de encarar el objeto de estudio como tal, y una perspectiva más netamente regional (centroamericana).

Muchas de las investigaciones emprendidas por los nuevos centros de investigación, aunque elaboran enfoques multidisciplinarios, se centran en el Estado. Esto responde al hecho de que dichos centros comparten el criterio de que el Estado guatemalteco está sufriendo transformaciones importantes en este nuevo período, que son importantes de captar para poder reelaborar estrategias que beneficien a los sectores populares en el futuro. Las instituciones que globalmente están dándole un nuevo impulso a las ciencias sociales en el país piensan que contribuyen a rescatar y a reconstruir la capacidad de estudiar al país científicamente, capacidad que se encontraba seriamente dañada en los años inmediatamente anteriores a los que comprende este esfuerzo.⁵⁰

De hecho, la Universidad de San Carlos —universidad nacional— es el principal espacio desde donde se busca articular la cultura popular. Dicho proceso se ha acentuado con la creación de la "Huelga de Dolores".

La "Huelga de Dolores" tiene dicho nombre por las siguientes razones: "Comenzó esta manifestación estudiantil cuando durante su período más jacobino, el régimen liberal trató de que las labores oficiales continuaran a pesar de las fiestas religiosas de observancia tradicional. El estudiantado de entonces —en su mayoría de sectores católicos de las clases alta y media acomodada— se declaraba en huelga el viernes de Dolores hasta el lunes de Pascua".⁵¹

Sin embargo, la huelga fue ganada por los estudiantes antidictatoriales y, con su salida a las calles en los años veinte, inicia la actual tradición.

La "Huelga de Dolores" llegó, a partir de los cuarenta, a convertirse en el acontecimiento político y social más importante del año. Según Mario Monteforte Toledo, en los años cincuenta no menos de 80.000 personas llegaban de los departamentos a unirse a los capitalinos para presenciar el desfile y oír los manifiestos.⁵² En su período de apogeo, Monteforte Toledo

describió el ritual de la siguiente manera: "El martes de la semana de Dolores hay una velada en un gran teatro de la capital, con manifiestos, sainetes, óperas y otros números escritos y representados por los muchachos. El jueves por la noche se adornan las fachadas de las Facultades con carteles y se difunde el *No nos tientes*, tabloide que alcanza una circulación de más de 60.000 ejemplares y se vende a Q 0,50 el número.

"El viernes por la mañana parte la mascarada de la Facultad de Medicina y después de recorrer unos 2 K. por las principales calles —pasa frente al palacio de gobierno y el palacio arzobispal—, entra en la Facultad de Leyes (...)

"Por la tarde, grupos de estudiantes, aún con disfraces, recorren la ciudad cantando y gritando, y los servicios de emergencia de los hospitales atienden a los que se pasan demasiado de copas".⁵³

En la primera parte de la década de los ochenta dicha actividad se vio considerablemente disminuida por la violencia represiva. Sin embargo, a partir de 1986, con la vuelta a la democracia, se ha revigorizado la "Huelga de Dolores" a pesar de la muerte de varios de los más ingeniosos satiristas y colaboradores. Asimismo, se han patrocinado retrospectivas, se han descrito libros en torno de ella, y se está haciendo un esfuerzo consciente por mantenerla viva y dinámica con la calidad satírica que siempre la ha caracterizado.

La Universidad de San Carlos posee también un Centro Cultural Universitario a partir de donde patrocina actividades destinadas a la comunidad. En ella se encuentra la Cineteça Universitaria Enrique Torres —única en el país— así como grupos de teatro, música, artes plásticas, etc., que —aunque no pertenezcan formalmente a la universidad— tienen entre sus fines generar un arte popular, destinado para las masas y necesitan un local y apoyo mínimo.

Dentro de este marco se formó, a partir de 1986, una agrupación autónoma de la Universidad de San Carlos pero cobijada en su Centro Cultural Universitario. Este grupo, llamado Escuela de Música de Proyección Folklórica Latinoamericana (EMPROFOLA), está organizando escuelas de música de diferentes tipos, tales como marimba, guitarra, etc., con el objetivo de desarrollar y promover la música popular y la música de protesta. Además, tiene una escuela de teatro y busca en cierta medida reconstituir lo que fue el festival de teatro de los barrios, que en los años setenta llegó a tener gran desarrollo: cada barrio de los sectores populares tenía un grupo teatral y hacían encuentros nacionales donde aparecían 200, 300 grupos de teatro.

El teatro de los setenta era más sociodrama que teatro formal. Era un teatro eminentemente popular pero que iba deslizándose y canalizando una serie de esfuerzos y de necesidades organizativas y políticas de los sectores populares. Es eso lo que se busca reconstituir ahora, principalmente en Ciudad Guatemala. Su proyección real está aún por verse, aunque entre sus objetivos sí aparece la necesidad de crear una presencia en el campo. Recientemente, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 1988, realizaron en diversos puntos de Ciudad Guatemala, un Festival de la Juventud que esta-

ba dedicado a "la unidad del movimiento popular de Guatemala y su constante lucha por la vida".

Fuera del marco propiamente universitario, existen en el país de manera dispersa y difusa, diferentes tipos de manifestaciones de cultura contrahegemónica fuera del esfuerzo propiamente indígena, que ya ha sido mencionado en otra sección. Este otro tipo de manifestaciones se da exclusivamente en el sector ladino, y generalmente suelen aparecer principalmente —aunque no exclusivamente— en la ciudad capital.

Entre éstos se encuentran actualmente en auge grupos de música. En este movimiento sobresalen los grupos de salsa. Aunque Guatemala tiene costa caribe, es un país más marcado por la cultura indígena, es más altiplano. Sin embargo, la popularidad que recientemente han desarrollado los grupos de salsa en la capital y en el altiplano es enorme.

El fenómeno es mayormente interesante porque, fuera de la música indígena típica que es tocada pero *no* cantada, en Guatemala no ha existido nunca mayor desarrollo en la música popular. Incluso, en su *Monografía Sociológica*, Mario Monteforte Toledo llegó a afirmar que este país era uno de los que menos cantaba en el mundo. Sin embargo, por primera vez en la historia moderna, este fenómeno da indicaciones de empezar a revertirse. Sería interesante estudiar si dicho cambio obedece a las transformaciones tan rápidas de las telecomunicaciones a nivel mundial que han tenido también un impacto sobre el país entero por medio de la radio de onda corta, televisión en cable, antenas parabólicas, etc. —todas ellas muy difundidas en el país—, o bien si obedece a cambios de otra naturaleza.

La salsa también ha entrado por medio de la radio mexicana, radios de onda corta provenientes del Caribe —incluyendo Radio Habana—, y por la moda traída de los Estados Unidos por sectores medios urbanos que constantemente viajan hasta aquella nación.

De hecho, uno de los logros de la "iglesia popular" en los años setenta fue la introducción de grupos musicales que cantaban sobre los problemas propios de la población, y ésta podría ser una posible influencia también. En esta nueva música, el ritmo es el de la salsa en sus diferentes variantes pero las letras de las canciones son sobre problemas específicos que se viven en el país.

También lo que las distingue es su calidad. Mientras que en el pasado la calidad puramente musical de los grupos guatemaltecos era bastante mediocre, los actuales grupos son de muy buena calidad, tanto así que están produciendo discos y exportando a toda Centroamérica, incluso a Panamá que es una de las catedrales de la salsa.

Estos grupos van en giras por los pueblos del interior, cosa que también es totalmente nueva en el país, y son recibidos por los adolescentes como sus ídolos: corriendo tras el bus en que llegan, pidiéndoles autógrafos y tratando de tocarlos. Una vez más, ¿es este nuevo comportamiento una influencia del exterior aprendida por los medios de comunicación de masas o un indicador de otro tipo de cambios? Son preguntas que merecen futuras investigaciones. Lo que sí puede aseverarse sin temor a equivocarse es que el fenómeno de estos grupos surge de manera autónoma dentro de los

sectores populares. No es articulado por ninguna fuerza o agencia, ni del Estado, ni de la iglesia, ni de ninguna otra institución.

Y el fenómeno como tal todavía no lo capitaliza nadie. Algún intento muy tímido ha hecho el Estado por la vía del Ministerio de Cultura y Deportes pero, por un lado, no está articulado con una política más amplia y de mayor alcance; es un intento muy tímido. Y, por el otro, ha sido muy cortoplacista en el sentido de querer ganárselos para la causa Demócrata Cristiana. Como resultado, no ha pasado a más.

Es interesante comparar dicho fenómeno con algo similar que se vive en otras capitales latinoamericanas. Mientras que fenómenos del mismo estilo han surgido en México o en Lima, generalmente se han dado más en torno del rock que alrededor de la salsa. En Guatemala definitivamente es más un movimiento en torno de la salsa, aunque también existen grupos de rock con similares características. Además, como ritmo no es particularmente innovador, como lo es la música chicha en Lima. Es una salsa que en buena medida retoma elementos de la salsa internacional pero que introduce elementos y palabras nuevos y algunos elementos musicales indígenas. En este último sentido es interesante por representar una nueva amalgama en el medio musical popular; por ejemplo, la "salsa marimba", mezcla de la salsa con la marimba. La introducción y transformación de los ritmos: son quiché, el son maya, casi como formando diálogos musicales —contrapuntos— entre salsa y los ritmos tradicionales. Sí hay búsquedas formales en ese sentido, pero no hasta el punto de llegar a crear un ritmo nuevo como resultado de ese mestizaje.

Por parte de los sectores populares existe actualmente también una gran demanda por los servicios de educación, que el gobierno se niega o es incapaz de satisfacer. Existe un proceso de degradación de los servicios educativos públicos desde los años sesenta, que llega a niveles críticos hacia fines de los ochenta. Esta degradación no es totalmente accidental. Parte de la política del coronel Clementino Castillo —ministro de Educación durante el gobierno del general Romeo Lucas García, 1978-1982— consistió deliberadamente en acentuar la degradación de la educación pública para transferirla al sector privado. La lógica de dicho proceso no era exclusivamente de naturaleza neo-liberal. Respondía también a la creencia de que la educación pública era criadero de subversivos y semillero de futuras generaciones de estudiantes universitarios de izquierda, y que había que tratar de eliminar dicho proceso. A esto se agrega la crisis económica de los años ochenta que también envuelve a la educación nacional. Esta crisis es de gran envergadura y no tiene parangón con la de los primeros años de la década del treinta. Esto ha generado el actual clamor por mayores servicios educativos, pero el Estado se ha visto incapacitado para —o no ha querido— responder.

Actualmente, sólo el 5% de la población del país accede a la escuela secundaria. La crisis educativa genera, a su vez, una reacción en cadena. La capacitación promedio del guatemalteco decae sensiblemente, mientras se masifican los escasos resabios de cultura formal que aún se rescatan del sistema. El estudiante guatemalteco no solo ya no termina sus estudios en

mayores números que antes, sino que el nivel cultural que se tiene en el momento del abandono es marcadamente inferior al de anteriores generaciones de estudiantes no graduados. La consecuencia es una mayor dificultad para poder enfrentarse al medio en el cual hay que vivir, más hostil y difícil por el aumento de la población y la gravedad de la crisis económica. Y esta situación termina desbordándose en el bandolerismo y el dramático incremento de la criminalidad en el país. Así es como han entrado las "maras" a ejercer una función central en la imaginación de la población urbana contemporánea.

Las "maras" son las bandas de adolescentes que oficialmente son consideradas como constituidas por delinquentes juveniles, y que se han multiplicado enormemente a lo largo de la década de los ochenta. En general las integran jóvenes entre los 12 y los 20 años de edad.⁵⁴

Parte de las explicaciones por su crecimiento tan acelerado se encuentra en la descomposición social tan aguda que vive el país como resultado de la guerra, el desempleo tan alto, la magnitud de la crisis económica, etc. Los sectores adolescentes se ven particularmente afectados, además, por la descomposición acelerada de la familia como institución, por la cantidad de gente que murió, que se desmembró por la guerra, etc. Son adolescentes con vínculos afectivos muy tenues con sus familiares, que buscan substituir la ausencia de dicho organismo conformando grupos.

Muchos de los miembros de las "maras" son estudiantes de escuelas públicas. Algunos son trabajadores, muchachos y muchachas que han tenido que abandonar los estudios y buscar empleo. Muchos de los que provienen de este último renglón tienen, a su vez, conflictos en sus barrios.

Estos grupos circulan principalmente en Ciudad Guatemala y realizan actos delictivos, roban, asaltan. Sin embargo, observan ciertos códigos sociales. Por ejemplo, les roban solamente a los ricos. No le roban a cualquiera.

De hecho, en su comportamiento entra en juego una serie de parámetros; por ejemplo, ellos buscan organizaciones que no vengan de lo hegemónico, sino que se opongan a él, pero que tampoco sean organizaciones populares tradicionales. No tienen ningún vínculo ni con sindicatos, ni con madres de desaparecidos, ni con nadie. Incluso, muchos de éstos los consideran simplemente bandas de jóvenes *lumpen*. Sin embargo, de una manera quizás errática e inconsistente, las "maras" buscan actuar políticamente de manera consciente.

Esto en sí no es sorprendente ya que durante la década de los setenta se organizó políticamente a este sector bajo la denominación de "pobladores", es decir, residentes de los barrios marginales. En las organizaciones de pobladores ellos aprendieron a actuar ordenada y políticamente. Generalmente, las organizaciones de pobladores fueron orientadas por cuadros cristianos (a su vez vinculados, aunque fuera tenuemente, al Ejército Guerrillero de los Pobres) o por cuadros comunistas, miembros de dicho partido. Sin embargo, a partir del inicio de la represión urbana en 1979,

esos cuadros desaparecieron, quedando las "maras" libradas a su propia iniciativa.

Por eso las "maras" poseen una conciencia social y son capaces de hacer análisis y comentarios políticos. Ven con simpatía los movimientos políticos y tienen mucha mayor conciencia de clase que las bandas de delinquentes juveniles tradicionales.

Entre sus nuevos patrones de comportamiento se halla, por ejemplo, una casi igualdad entre hombres y mujeres. Comparten, asimismo, todo lo que roban de manera equitativa. Dentro de las "maras" se reconoce también el homosexualismo como un derecho. En fin, aparece toda una serie de elementos nuevos que están siendo recién entendidos.

El marcado homosexualismo de las "maras" es, aparentemente, indicador de la crisis de la familia guatemalteca y de los roles tradicionales de los géneros. Debido a la crisis, los hombres son incapaces de llenar el rol de proveedores de la familia, y las mujeres son a su vez incapaces de jugar su función como guardianas del hogar. En el esquema ideológico latinoamericano tan rígido del "machismo", esta incapacidad de poder jugar los roles tradicionales genera una ruptura en ellos que comienzan a verse como fracasados, obsoletos, fatigantes, surgiendo como su expresión opuesta el homosexualismo.

La creación artística es muy valorada por las "maras". Incluso, han iniciado el fenómeno —nuevo en Guatemala— del grafiti bien hecho que va mas allá del slogan político. En un país tan politizado nunca ha faltado el grafiti político, pero no había grafiti con una búsqueda que fuera más allá del slogan. Ahora, por primera vez, ellos comienzan a hacer búsqueda a ese nivel. Desde luego, todavía se encuentran en una etapa de exploración, no es un grafiti tan desarrollado como el de São Paulo, por ejemplo, pero hay una búsqueda muy interesante desde el punto de vista estético. Ellos valoran este tipo de experimentación, y también las búsquedas musicales. De hecho algunos de los grupos musicales antes mencionados, así como varios de los que existen de rock, han surgido entre las "maras".

Las "maras" representan una bomba de tiempo ya que son manifestación de una crisis muy aguda en el sector de la juventud, que es ya el sector mayoritario de la población urbana. A su vez, es el sector con el mayor número de desempleados. Y ya tienen la mayor organización de masas en la capital.

El gobierno ha realizado un pequeño esfuerzo por organizar a las "maras" dentro del llamado "Plan Nacional de la Juventud". Sin embargo, esto no ha pasado de darles espacio en una oficina a cinco "maras", sin ninguna estrategia ni explicación del por qué.

Era obvio que buscaban un apoyo político cortoplacista, pero precisamente no pasó a más porque no construyeron ninguna estructura ideológica para retener su lealtad en el tiempo.

III. Perspectivas socio-culturales para fin de siglo

Dijimos a lo largo de este trabajo cómo fuera del período 1944-1954 no existió en Guatemala una efectiva política cultural a nivel del Estado. A la vez, se está hablando de una nación con un 40% de analfabetismo, pero con significativas regiones en el área rural, principalmente indígena, donde esta cifra asciende hasta un 80%.

Es, a la vez, un país culturalmente muy complejo. Existen por lo menos 23 grupos étnicos con sus propios idiomas. Sin embargo, nunca ha existido una política cultural efectiva que busque integrar culturalmente a estos sectores dentro de un marco nacional.

Pero, por el contrario, la tarea que se plantea el Estado a principios de la década de los ochenta consiste en un esfuerzo sistemático por destruir dicha identidad. ¿Por qué se responde de esta manera?

Parecería que dentro del marco del actual modelo de acumulación existente en el país, el Estado es incapaz de contemplar una nación efectivamente multi-étnica y/o multi-nacional. El Estado busca entonces desarticular los elementos contradictorios a una integración unívoca de la nación para generar una uniformidad y retomar el control del Estado como tal. El Estado busca, pues, integrar por la fuerza a una sociedad puesto que no lo puede hacer por la vía del mercado, no lo puede hacer por la vía de la participación política, no lo puede hacer —aunque lo está intentando ahora— por la vía de la rearticulación de la esfera cultural. Se crea, entonces, una situación contradictoria. El agotamiento del actual modelo de acumulación no permite la integración del Estado-nación, y esta falta de integración crea a su vez una situación de excesiva inestabilidad.

Esto fue lo que sucedió en la primera mitad de los años ochenta. El ejército, en el centro del aparato estatal, trató de integrar esta población por la vía de la fuerza, en aras de limitar el factor de inestabilidad que amenazaba la existencia misma del Estado.

Hacia fines de esta década comienza a verse, sin embargo, los límites de tal empresa. Los mecanismos de naturaleza represiva creados para rearticular a esta población entran a su vez en crisis y generan una nueva inestabilidad.

La ausencia de trabajo de campo en estos últimos años impide afirmar aún en qué dirección podría inclinarse este nuevo período. Puede especularse libremente, sin embargo, que la cultura de la población rural ha cambiado en estos años de una forma drástica. Muchos observadores piensan que los cambios de los patrones culturales de la población rural son los más importantes en el país desde la conquista.⁵⁵

Algunos de los cambios que ya se perciben tienen que ver con los efectos concretos de la contrainsurgencia. Por ejemplo, los indígenas de Alta Verapaz dicen que ahora prefieren vivir agrupados en pueblos en vez de dispersos como antes. Pero eso tiene que ver con el sentimiento de seguridad que se genera al vivir en colectividad, y con el hecho —que ellos mismos verbalizan— de que en caso de que lleguen a tratar de "desaparecerlo" a uno, es más fácil resistirlo o constatarlo en el marco de

una colectividad que se controla mutuamente por motivos de seguridad.

No es posible sacar conclusiones sobre el fenómeno en toda su integridad. Apenas estamos en una etapa de verificar la profundidad de los cambios vividos. Pero, de hecho, la población indígena guatemalteca ha vivido estos años como una nueva conquista. Y cuando se está en una situación de naturaleza tan violenta, tan fuerte, que viene a cambiar todo el país, el proceso de asimilación cultural de dichos cambios es muy lento. Pasa por todo un proceso de asimilación psicológica, de asimilación del terror y de búsqueda de nuevas formas de apropiación de la realidad.

Entonces, en este renglón se están dando transformaciones fundamentales frente a las cuales ni el actual gobierno, ni cualquier otro que surja dentro de los parámetros actualmente existentes, tiene una respuesta y una política propia.

Se verifica, sin embargo, el hecho de que Guatemala sigue siendo un país que no está integrado. Un país abigarrado, un país lleno de contradicciones y de matices. Y frente a esta complejidad, sólo se presentan soluciones de corto plazo y de índole proselitista.

El Estado guatemalteco es débil económicamente —el grado de tributación es el más bajo de América Latina después de Haití— y, en consecuencia, pequeño en su aparato. Solo emplea al 6,6% de la población económicamente activa. Es, entonces, un Estado que no tiene capacidad real de implementar políticas culturales de la envergadura que el país necesitaría para enfrentar los gigantescos problemas que lo desafían.

En consecuencia, el Estado se ha abierto a la "penetración" de los sectores privados en estos últimos años. Es decir, no solo el sector privado está actuando y desarrollando sus propias políticas culturales, sino que está utilizando las mismas instancias estatales para influirlas, manejarlas y manipular a los diferentes sectores poblacionales a través de él.

Uno de los sectores más importantes que está haciendo esto es el fundamentalista evangélico. Hacia fines de 1988, por lo menos ocho de cada diez escuelas públicas permiten que una vez por semana lleguen las sectas fundamentalistas a dar cursillos y pláticas a los estudiantes. Técnicamente, esto contradice los principios del Estado liberal laico creado a partir de 1871 que separa las funciones de iglesia y Estado.

Existe, entonces, hacia el futuro, una tendencia ya bastante marcada que apunta a una desnacionalización de las políticas culturales. Es decir, a que éstas queden en manos de grupos privados, o de grupos extranjeros. Y existe también la tendencia a implantar una forma de pensamiento muy congruente con el sistema de libre empresa imperante en el país.

¿Qué consecuencia puede tener todo esto? No está del todo claro todavía. Pero por lo menos puede predecirse que estas políticas tienen dos filios fundamentales. Uno de ellos es tratar de mediatizar a la población, creando el espejismo de que en el país todos pueden llegar a ser prósperos empresarios. Se está creando una mentalidad consumista muy fuerte, y el país mismo no va a ser capaz de responder a ella incluso si se logran acuerdos para una paz regional que mejore relativamente la situación económica en el corto plazo. El segundo es la acumulación de las

contradicciones en el largo plazo, ya que se responde únicamente a intereses inmediatos.

En el fondo, los problemas clave de la cultura del país son el de la integración y el de la identidad. Hasta este momento, dichos problemas siguen siendo tergiversados. Se crea así una situación en la cual el país puede volver a dar —por la vía cultural— un giro impredecible, como sucedió ya en los años setenta con la población indígena. Esto porque se está manipulando la cultura, se la está vaciando de contenido en las poblaciones rurales —en cuyo centro radica la identidad étnica— y se está sustituyendo la integración y la identidad por una mentalidad de competencia, por una mentalidad consumista muy fuerte.

Los planteamientos existentes en la actualidad —fuera de representar una peligrosa bomba de tiempo en el marco político-social— no toman para nada en cuenta la necesidad de constituir un verdadero Estado nacional que defina progresivamente una cultura nacional. Asimismo, se excluye de dicho proceso a las culturas étnicas, permitiéndose su ingreso sólo como producto fetichizado.

Sin embargo, en las culturas indígenas es donde se encuentra el elemento definidor de la identidad, donde se asegura la continuidad histórica de lo que podríamos llamar una "identidad nacional". Y sabemos que un pueblo no puede ser verdaderamente libre si no retoma los caminos ascendentes de su propia cultura.

Por lo tanto, en vez de seguir las líneas actuales, el Estado guatemalteco debería plantearse como metas culturales: 1) el desarrollo de las culturas populares y de todos los valores culturales autóctonos, y la revaloración y difusión amplia de los mismos; 2) una reflexión a fondo, no partidaria, no coyuntural a un período presidencial, sobre la constitución de una futura cultura nacional; 3) una elevación constante de la conciencia cultural y educativa de las masas, incluyéndose los diversos sectores sociales; 4) el estudio de la producción cultural guatemalteca en el sentido más amplio del término como conciencia teórica de los fines inmediatos y finales, articulándolo con la acción y práctica de las políticas culturales y 5) la formación de cuadros capaces de impulsar programas y proyectos de índole cultural en su acepción más amplia.

Notas

1 Delli-Sante-Arrocha Angela, *Arévalo, pensador contemporáneo*, Costa-Amic Editores, México, 1962, pág. 21.

2 *Idem.*, pág. 24.

3 Galich, Manuel, "Las causas interiores de una derrota", en *Tricontinental*, núm. 2, septiembre-octubre 1967, págs. 66-80.

4 Entrevista inédita con el autor.

5 Cardoza y Aragón, Luis, *El Río*, Fondo de Cultura Económica, México, 1986, págs. 628-629.

⁶ Pero, aun así, han sido un factor muy importante en los procesos sociales que ha vivido posteriormente el país. Aunque formalmente en manos del sector privado, no siempre han respondido a dichos intereses en su programación, y varias de las radiodifusoras de provincia tales como Radio Utatlán de Santa Cruz del Quiché o Radio Palmeras de Escuintla han jugado un papel muy importante en el desarrollo del movimiento popular en los años setenta y principios de los ochenta. Por eso mismo, algunas de ellas, tales como Radio Palmeras, han pagado el precio de su compromiso siendo bombardeadas. A la vez, sus perifoneadores han sido amenazados y/o asesinados durante los diferentes periodos de represión que ha vivido el país después de 1954.

⁷ El general Lucas García intentó en 1980 controlar a la universidad reteniéndole su partida presupuestaria. Asimismo, durante toda la presente década se la ha mantenido en una situación de estrangulamiento económico parcial debido a que dicha partida ya es matemáticamente incapaz de llenar las mínimas necesidades de la institución. Esto se hace con el fin de dividir a la administración, profesorado, estudiantado y sindicato de trabajadores de la misma, quebrando su tradicional unidad política frente al Estado.

⁸ Pocas fueron las personas que dirigían casas de la cultura a lo largo de la franja ladina de la costa del Pacífico que no fueran fusiladas. se argumentó que se hacía por una supuesta filiación comunista o sindical, no por ser promotores culturales.

⁹ García Ruiz, Jesús, "Lenguaje y cultura: elementos de reflexión". Trabajo mimeografiado.

¹⁰ Comunicación verbal a partir de la discusión recogida en "Sobre polos de desarrollo: marco teórico", transmitida a cuatro investigadores guatemaltecos el 18 de marzo de 1986.

¹¹ Entrevista con Pablo Ceto, uno de los fundadores del Comité de Unidad Campesina (CUC), inédita.

¹² Idem.

¹³ Idem.

¹⁴ Falla, Ricardo, "El movimiento indígena", en *ECA*, núm. 353, Año XXXIII, marzo 1978, págs. 438-461.

¹⁵ Idem., pág. 445.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ Frase acuñada por Gustavo Porras y afirmada en sus diversos artículos sobre el agotamiento del modelo de acumulación en el país.

¹⁸ Incluso la derecha guatemalteca reconoce este hecho. Dice Mario Sandoval Alarcón —el gran ideólogo de la extrema derecha— en un discurso de 1983 que "independientemente que logramos derrotar a las organizaciones revolucionarias, ya nos trastornaron el patrón cultural con el cual nos hablamos movido tradicionalmente para siempre".

¹⁹ Porras, Gustavo, "Guatemala: crisis social y actualidad de la revolución". Trabajo mimeografiado.

²⁰ Véase Godelier, Maurice, "Infraestructuras, sociedades, historia", en *Cuicuilco* núm. 1, México, julio de 1980, págs. 48-53.

²¹ Para todo lo concerniente a la estrategia de contrainsurgencia ver *Opinión política* núm. 2, México, 1985.

²² Lo fue por la Iglesia Católica en los primeros 30 a 50 años de la conquista. Pero de allí en adelante, cumplida la función ideologizadora del catolicismo, se dejó a la población indígena en un abandono benigno —culturalmente hablando— y se toleraron sus prácticas culturales.

²³ Black George, "Under the Gun" en *NACLA Report on the Americas*, vol. XIX, núm. 6, págs. 10-23.

²⁴ Wearne Philip, "Central America's Indians", en *MRG Report* núm. 62, Londres, 1986, pág. 16.

²⁵ Ibidem.

²⁶ Ibidem.

²⁷ García-Ruiz Jesús, "Nouvelle stratégie de pénétration et contrôle de la population développée par l'impérialisme en Amérique Latine: l'action des sectes évangélistes", ponencia presentada en el coloquio *Vers quel nouvel ordre mondial*, París, 28 de septiembre - 1º de octubre de 1983, pág. 2.

²⁸ Warne, ob. cit., pág. 9.

²⁹ Entrevista realizada por Mary Alice Hayward el 13 de julio de 1988.

³⁰ Ibidem.

³¹ *Crónica*, Año 1, núm. 46, Guatemala, del 6 al 12 de octubre de 1988, págs. 11-12.

³² Entrevista a Julio Roberto Gil, 21 de junio de 1988, realizada por Mary Alice Hayward.

³³ *Crónica*, ob. cit. Además se comentó el tema en una entrevista del 15 de junio de 1988.

³⁴ Idem.

³⁵ Entrevista a Anaisabel Prera, *Crónica*, Año 1, núm. 46, 6-12 de octubre de 1988, págs. 17-21. Todas las citas de la ministra proceden de dicha entrevista.

³⁶ Entrevista a R. Gil.

³⁷ Idem.

³⁸ Véase, al respecto, "Ja C'Amabal l'b, la primera gran confrontación: el movimiento campesino indígena del altiplano guatemalteco", ponencia presentada ante la subcomisión de minorías étnicas de Naciones Unidas, Ginebra, agosto de 1984.

Igualmente, como resultado de los planteamientos de este grupo, las "Tesis sobre la cuestión étnico-nacional" en *Opinión Política* núm. 11, Guatemala, septiembre de 1987.

³⁹ Entrevista a Margarita López Raquec, 5 de julio de 1988, realizada por Mary Alice Hayward.

⁴⁰ Idem.

⁴¹ *Opinión política*, ob. cit., pág. 6.

⁴² Idem.

⁴³ Idem., pág. 7.

⁴⁴ Entrevista a Miguel Flores, realizada por Mary Alice Hayward el 23 de junio de 1988.

⁴⁵ Idem.

⁴⁶ Idem.

⁴⁷ Idem.

⁴⁸ Idem.

⁴⁹ Entrevista a Tasso Hadjidoudou de Mary Alice Hayward, 22 de junio de 1988.

⁵⁰ Entrevista inédita a Edgar Gutiérrez, investigador de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO), realizada el 20 de junio de 1988 por Mary Alice Hayward.

⁵¹ Monteforte Toledo, Mario, *Guatemala: monografía sociológica*, UNAM, México,

1965, pág. 351.

52 Monteforte, ob. cit., pág. 353.

53 Idem.

54 Según datos proporcionados por Deborah Levinson el 20 de julio de 1988 en su entrevista a Mary Alice Hayward. La mayoría de la información sobre las "maras" proviene de esta fuente.

55 Entrevista a Edgar Gutiérrez.

Índice

Volumen 7

Presentación Fernando Calderón	7
Agradecimientos	9
Ciencias sociales, crisis y requerimientos de nuevos paradigmas en la relación Estado/Sociedad/Economía Fernando Calderón, Mario R. dos Santos	11
Chile: transformaciones culturales y conflictos de la modernidad (1973-1988) José Joaquín Brunner, Carlos Catalán, Alicia Barrios	33
Políticas culturales y sociedad civil en México Néstor García Canclini, Patricia Saba	163
Innovaciones en políticas culturales en Brasil Gabriel Cohn	213
Innovaciones en políticas culturales y transformaciones en el campo cultural: El caso de Perú Alberto Miró Quesada	241
Cultura cotidiana, autoritarismo y campos culturales. Formación y transformaciones recientes en el Paraguay Tomás Palau, Luis Galeano, Miguel Chase Sardi, Ramón Fogel	291
Políticas culturales y cultura política: Bolivia 1980-1987 Luis H. Antezana J.	359
Las políticas culturales en Guatemala Arturo Arias	413